CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

PROCESO LEGISLATIVO

DECRETO por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017

PROCESO LEGISLATIVO	
01	**01)** 08-11-2016 Cámara de Diputados. **INICIATIVA** con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior. Presentada por el Dip. César Octavio Camacho Quiroz (PRI). Se turnó a la Comisión de Gobernación, con opinión de las comisiones de Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública. Diario de los Debates, 8 de noviembre de 2016.
	02) 14-02-2017 Cámara de Diputados. **INICIATIVA** con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior. Presentada por la Dip. Sofía González Torres (PVEM). Se turnó a la Comisión de Gobernación, con opinión de las comisiones de Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública. Diario de los Debates, 14 de febrero de 2017.
02	30-11-2017 Cámara de Diputados. **DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. **Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 248 votos en pro, 115 en contra y 48 abstenciones. Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, 30 de noviembre de 2017. Discusión y votación, 30 de noviembre de 2017.
03	05-12-2017 Cámara de Senadores. **MINUTA** con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad Interior. Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y Estudios Legislativos Segunda. Gaceta Parlamentaria, 5 de diciembre de 2017.
04	14-12-2017 Cámara de Senadores. **DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad Interior. **Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 75 votos en pro, 44 en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional. Gaceta Parlamentaria 13 de diciembre de 2017. Discusión y votación 14 de diciembre de 2017.
05	14-12-2017 Cámara de Diputados. **MINUTA** con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad Interior. **(Documento Minuta publicado en Gaceta el 15-12-2017)** **NOTA:** En votación nominal se autorizó se le dispensaran todos los trámites y se sometió a discusión y votación de inmediato. **Aprobado** en lo general y en lo particular, por 262 votos en pro, 26 en contra y 0 abstenciones. Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria 15 de diciembre de 2017. Discusión y votación 14 de diciembre de 2017.
06	21-12-2017 Ejecutivo Federal. **DECRETO** por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

01) 08-11-2016
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior.
Presentada por el Dip. César Octavio Camacho Quiroz (PRI).
Se turnó a la Comisión de Gobernación, con opinión de las comisiones de Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Diario de los Debates, 8 de noviembre de 2016.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Diario de los Debates

México, DF, martes 8 de noviembre de 2016

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra a continuación la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa suscrita por el diputado César Octavio Camacho Quiroz, y la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por ambos diputados.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a nombre del doctor César Camacho Quiroz y en el mío propio, a plantear a este pleno el tema de la seguridad interior de nuestro país. En conferencia especial de seguridad de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebrada en la ciudad de México los días 27 y 28 de octubre del 2003, los Estados participantes pactaron establecer una nueva concepción de la seguridad de alcance multidimensional que incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y diversos desafíos.

Derivado de lo anterior en 2004 se realiza una reforma constitucional conforme a la cual se crea una nueva materia de derecho, esto es, el derecho de la seguridad nacional. Dicha reforma incorporó como facultad del Congreso de la Unión, emitir leyes de seguridad nacional y como facultad exclusiva del presidente de la república, preservarla en los términos de dichas leyes.

En cumplimiento de tal mandato, el 31 de enero 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional, la cual establece las bases de integración y acción coordinada de instituciones y autoridades encargadas de preservarla.

Ahora bien, resulta de la mayor trascendencia mencionar que la seguridad nacional instituye una garantía de bienestar social y plenitud humana, cuya preservación constituye un función política de carácter superior del Estado mexicano a cargo del presidente de la República, que se caracteriza por ser estratégica, multidimensional y dinámica, y se materializa a través de actos de gobierno, de conducción, orientación y regulación global en el marco de la política interior y exterior, cuyos fines tienden a proteger, defender, mantener, fortalecer y promover los intereses y objetivos nacionales.

Las Fuerzas Armadas en México, por su disciplina, organización y disponibilidad han sido, durante muchos años, el principal recurso que tiene la nación para enfrentar y contener los distintos desafíos de la seguridad que en cada momento se van presentando a la nación, tanto en el apoyo prestado en el plan de auxilio a la población civil en casos de desastre, como en el combate al crimen organizado.

Sin embargo, su eficacia se ha visto limitada por la falta de un marco normativo adecuado para tal efecto, particularmente en cuanto a las acciones que pueden realizar en tiempos de paz. Por tanto, es necesario que esta soberanía considere discutir y aprobar la presente iniciativa a fin de que se fortalezca su actuación en materia de seguridad interior.

Esta iniciativa se compone de seis capítulos: el primero de ellos se denomina: Disposiciones generales, y establece el objeto de la misma, define la seguridad interior como condición que proporciona el Estado mexicano

para salvaguardar la continuidad de sus instituciones y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional en beneficio de la población.

El capítulo segundo: Procedimiento para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior. Regula la intervención del gobierno federal en materia de seguridad interior bajo dos modalidades: la primera cuando el presidente de la República así lo determina de conformidad con su responsabilidad de proteger y el fundamento del artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que le consagra tal facultad.

Y la segunda, a petición de las legislaturas de las entidades federativas o de sus ejecutivos cuando aquella no se encuentre reunida, de conformidad con el principio de garantía de protección federal, prevista por el numeral 119 de la propia Constitución.

En el Capítulo Tercero, De la intervención de las autoridades federales, se establece la intervención progresiva y gradual del gobierno federal primero en la participación de las autoridades y fuerzas de seguridad pública, y se dará la intervención a la Fuerzas Armadas como último recurso del poder nacional.

En el Capítulo Cuarto, De la inteligencia para la seguridad interior, se establece que las acciones de orden interno y de seguridad interior se apoyarán en las unidades y procesos de inteligencia del sistema de seguridad nacional.

En el Capítulo Quinto, Del control de las acciones en materia de seguridad interior, se puntualiza que la autoridad coordinadora de las acciones de seguridad interior deberá mantener permanentemente informado al titular del Ejecutivo acerca de la ejecución de la declaratoria.

Asimismo, se señala que al término de las acciones esta autoridad coordinadora remitirá al titular de la Secretaría de Gobernación un informe con los resultados obtenidos y, en su caso, la recomendación de las acciones a desarrollar.

Finalmente, en el Capítulo Sexto, denominado De los recursos para atender una afectación de seguridad interior, se contemplan las previsiones anuales presupuestales para el caso.

Concluyo, compañeros diputados, con esta breve descripción realizada damos cuenta de que el fin último de toda estrategia y acción en materia de seguridad no es otro que el de proteger a las personas y a las instituciones. Con esta iniciativa de ley del Estado mexicano se garantizará a sus habitantes contar con un marco jurídico que responda de manera eficaz ante las amenazas de la seguridad interior, desde una perspectiva actualizada e integral que permita hacerle frente a los nuevos desafíos.

No hay que olvidar, compañeras y compañeros, que al individuo la seguridad le brinda confianza, a la sociedad armonía y a ambos les aporta paz. Por su atención, mil gracias.

«Iniciativa que expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los suscritos, César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, diputados en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Contexto.

Durante los siglos XIX y XX, los Estados integrantes de la comunidad internacional tuvieron una concepción tradicional sobre las amenazas a su propia existencia, las cuales se limitaban a guerras provenientes de otro

Estado, o bien, conflictos internos en los que se luchaba por el control del gobierno; sin embargo, la evolución tecnológica de las comunicaciones y de la economía dio paso al fenómeno de la globalización y, con ello, a nuevos desafíos para los Estados, como se concluyó en la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en la Ciudad de México, los días 27 y 28 de octubre de 2003, de la que derivó la Declaración sobre Seguridad en las Américas, en la cual los Estados participantes pactaron establecer una nueva concepción de la seguridad de alcance multidimensional, que incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos.

En ese mismo foro, se acordaron valores compartidos a los que se sujetarían los Estados parte, a saber:

a) Cada Estado tiene el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de Seguridad Nacional y definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas a su seguridad, conforme a su ordenamiento jurídico, y con el pleno respeto del derecho internacional y las normas y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta de las Naciones Unidas.

b) La democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo.

c) El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la buena gestión gubernamental son esenciales para la estabilidad, la paz y el desarrollo político, económico y social.

d) La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto del Estado Constitucional de Derecho por todas las entidades y sectores de la sociedad son valores fundamentales y contribuyen a la estabilidad y la paz.

e) El fundamento y razón de ser de la Seguridad Nacional es la protección de la persona humana. Las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre.

f) Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la Seguridad Nacional son de naturaleza diversa y alcance multidimensional, y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales.

g) Las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad son problemas intersectoriales que requieren respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales y, en algunos casos, asociaciones entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, todas actuando de forma apropiada conforme a las normas y principios democráticos y las normas constitucionales de cada Estado. Muchas de las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la Seguridad Nacional son de naturaleza transnacional y pueden requerir una cooperación internacional adecuada.

h) La seguridad se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa, tales como:

* El terrorismo, la delincuencia organizada, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos;

* La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la Seguridad Nacional;

* Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente;

* La trata de personas;

* Los ataques a la seguridad cibernética;

* La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos, y

* La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas.

En virtud de lo anterior, en el ámbito nacional se dio un impacto que generó la reforma constitucional de 2004, con la cual se crea una nueva materia de derecho, esto es, el Derecho de la Seguridad Nacional. Dicha reforma incorporó como una facultad del Congreso de la Unión emitir leyes en materia de Seguridad Nacional, y como una facultad y obligación del Presidente de la República preservarla en términos de dichas leyes.

En cumplimiento de dicho mandato, el 31 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional, la cual establece las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea.

Al respecto, la Seguridad Nacional instituye una garantía de bienestar social y plenitud humana, cuya preservación constituye una función política de carácter superior del Estado mexicano, a cargo del Presidente de la República, que se caracteriza por ser estratégica, multidimensional y dinámica, y se materializa a través de actos de gobierno de conducción, orientación y regulación global, en el marco de la política interior y exterior, cuyos fines tienden a proteger, defender, mantener, fortalecer y promover los intereses y objetivos nacionales, para el desarrollo político, económico y social, con miras a lograr el proyecto nacional.

Al efecto, y en términos de la Ley de la materia, contamos con un concepto jurídico de Seguridad Nacional de la siguiente forma: acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.

Acciones que en su conjunto engloban, en lo general, las funciones de seguridad, defensa y desarrollo; en específico las vertientes de Seguridad Interior y Defensa Exterior, en plena concordancia con lo previsto en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, fracción VI y, a su vez, deja el margen necesario para regular con precisión los aspectos particulares de la actuación del Estado en cada una de esas vertientes.

Respecto de la vertiente de Seguridad Interior, su objeto de protección o bien jurídico tutelado es el orden interno, entendido como la justa aplicación de las leyes, así como de la correspondiente observancia de las mismas; luego entonces, el orden interno implica tanto al orden constitucional como a las instituciones democráticas de gobierno.

Por tanto, resulta necesario un ordenamiento legal específico que defina y regule las actividades que pueden realizar las dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento de la Seguridad Interior, con el propósito de responder a los cuestionamientos sobre el alcance de la Seguridad Interior e incluso evitar confusiones con las tareas de Seguridad Pública.

Hoy en día, los asuntos en materia de Seguridad Pública son atendidos por las instituciones policiales especializadas de los tres órdenes de gobierno; por su parte, la complejidad de los fenómenos de Seguridad Interior requiere de la actuación coordinada de diversas dependencias e instituciones del Ejecutivo Federal, así como de la participación corresponsable de las autoridades de las entidades federativas y los municipios.

Aunque la Seguridad Interior y la Seguridad Pública se encuentran ampliamente interrelacionadas, exigen un uso diferenciado del poder del Estado para su atención, en función de los fenómenos que afecten o pretendan afectar los bienes jurídicos que tutelan. En el caso de la Seguridad Interior, fundamentalmente se busca hacer frente a situaciones y fenómenos que vulneran el orden constitucional y la continuidad de las instituciones del Estado, esto es, el orden interno; en el caso de la Seguridad Pública, se busca velar por la observancia del orden y paz públicos, así como por la seguridad de los ciudadanos y sus bienes.

La Seguridad Interior deriva de una de las funciones primarias e irrenunciables del Estado, tanto para su propia subsistencia, como para garantizar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las potencialidades

de sus habitantes, mediante la adopción de todo tipo de medidas políticas, económicas y sociales, incluyendo el ejercicio del monopolio del uso legítimo de la fuerza, así como de la puesta en práctica de acciones de protección civil, cuando por la magnitud de los fenómenos que atiendan, deban ser instrumentadas con el mayor número y capacidad posible por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Dada la estrecha relación entre los asuntos de Seguridad Interior, Seguridad Pública y Protección Civil, es preciso determinar a través de instrumentos jurídicos la atención específica por parte del Estado para articular las acciones de las instituciones públicas, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, lo que además trae consigo seguridad jurídica para la población.

Lo anterior cobra especial relevancia, toda vez que la Seguridad Interior, como vertiente de la Seguridad Nacional, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), en términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, puede utilizarlas para hacer frente a fenómenos que impacten a la Seguridad Interior. Para ello, en primer término, debe hacer uso de todos los medios y recursos legítimos que se encuentren a su disposición y, en caso de que la situación concreta así lo amerite, bajo el principio de gradualidad en el uso de la fuerza, disponer de las Fuerzas Armadas como la ultima ratio del Poder Nacional.

Cabe precisar que, en armonía con la referida disposición constitucional, el legislador ha asignado como una de las misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos garantizar la Seguridad Interior, así como a la Armada de México de coadyuvar en la seguridad interior del país, tal y como se prevé en los artículos 1º de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 1º de la Ley Orgánica de la Armada de México, respectivamente.

Ahora bien, en atención a que la Seguridad Interior se enmarca en el ámbito de la Seguridad Nacional, es pertinente hacer uso de los esquemas institucionales que la legislación en la materia ha diseñado, tanto para la toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo, así como para la ejecución de las acciones que se requieran. De ahí que, como se prevé en la presente iniciativa debe apoyarse en el Consejo de Seguridad Nacional para determinar la intervención de la Federación en temas de Seguridad Interior, así como en el Secretario de Gobernación, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo, para coordinar el análisis estratégico de los fenómenos que se presenten, sustentado en el sistema de investigación e información que se prevé en el artículo 27, fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En este mismo sentido, sobre la base de las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorga a la Secretaría de Gobernación para la conducción de la política interior; la formulación y ejecución de las políticas y programas de seguridad pública; la realización de acciones que favorezcan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática y de coordinar a los Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Ejecutivo Federal, corresponde a esa Secretaría conjuntar los esfuerzos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con aquellas autoridades de las entidades federativas o de los municipios, a efecto de llevar a cabo acciones orientadas a la normalización del orden interno en un área o zona geográfica del país.

Bajo este contexto, y conforme a las disposiciones constitucional y legales antes citadas, es necesario que se emita una Ley que defina con claridad el objetivo que se busca alcanzar con la Seguridad Interior, que en esencia es garantizar la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población, concibiéndola expresamente como una vertiente de la Seguridad Nacional y diferenciándola de la Seguridad Pública, así como regular de manera integral los esquemas de atención y coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Lo anterior mantiene congruencia con la política pública de la presente administración, en la que se advierte de los retos en materia de Seguridad Interior, mismos que demandan que el Estado actúe con fortaleza y determinación, pero siempre con absoluto apego al marco jurídico. Al efecto, y para hacer frente a dichos retos, en el Objetivo 1.2., Estrategia 1.2.1., cuarta Línea de Acción, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se plasmó el compromiso con la sociedad mexicana de impulsar un régimen jurídico en materia de Seguridad Nacional, que fortalezca las capacidades de las instituciones del Estado relacionadas con la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en un marco democrático y de derecho, así como en la Estrategia 1.2.2. Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación, la Línea de Acción relativa

a impulsar la creación de instrumentos jurídicos que fortalezcan el sustento legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades de Defensa Exterior y Seguridad Interior.

Por su parte, el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 establece un enfoque multidimensional de la Seguridad Nacional y resalta el desafío que representa garantizar la Seguridad Interior y reducir la violencia donde más afecta a la población, considerando el papel destacado que las Fuerzas Armadas han desempeñado en la preservación del orden público y la contención del crimen organizado para fortalecer la gobernabilidad democrática y la Seguridad Interior en todo el territorio nacional, a la vez que advierte de la necesidad de dotarlas de un marco legal que fortalezca su actuación y otorgue seguridad jurídica a los gobernados.

Al efecto, el referido Programa incluye como uno de sus grandes objetivos estratégicos, la consolidación del Sistema de Seguridad Nacional que permita al titular del Ejecutivo Federal disponer de las instituciones, procesos e instrumentos para atender de modo integral la agenda de Seguridad Nacional e identifica como una de sus prioridades fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales –concepto que se refiere a las instituciones de seguridad pública federal– y a las Fuerzas Armadas, para contribuir al mantenimiento de la Seguridad Interior, a través de diversas acciones, entre otras, mediante el impulso del desarrollo del marco jurídico en materia de Seguridad Interior (Objetivo Estratégico 2, Objetivo Específico 2.2., Estrategia 2.2.1).

De igual forma, los Programas Sectoriales de Defensa Nacional 2013-2018 y de Marina 2013-2018, establecen como parte de las prioridades del Gobierno Federal, impulsar el anteproyecto de decreto de Ley de Seguridad Interior, así como fortalecer las atribuciones institucionales y la actuación de las Fuerzas Armadas en operaciones de Seguridad Interior mediante la creación y actualización del marco jurídico en la materia.

II. Contenido de la Iniciativa.

A. Expedición de la Ley de Seguridad Interior.

Por todo lo antes señalado, resulta necesario que México cuente con un marco legal que atienda los aspectos de Seguridad Interior en su concepto más amplio.

En tal sentido, la presente Iniciativa de Ley consta de seis Capítulos. El primero de ellos denominado **"Disposiciones Generales",** establece el objeto de la misma y define a la Seguridad Interior como la condición que proporciona el Estado Mexicano que permite salvaguardar la continuidad de sus instituciones y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional en beneficio de su población.

En virtud del alcance del concepto y de los bienes jurídicos que tutela la Seguridad Interior, se prevé expresamente que las disposiciones de la Ley son materia de Seguridad Nacional. En este mismo sentido, se señala que en la conducción de las acciones que prevé se observarán los principios previstos en el artículo 4º de la Ley de Seguridad Nacional, esto es, los de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y sus garantías, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. Adicionalmente, se incorporan los principios que aplican de manera directa y especial en la atención de los temas de Seguridad Interior, a saber:

* Racionalidad: característica de una actuación de autoridad precedida de previsiones derivadas del análisis y evaluación integral y objetiva de los factores con potencial para afectar los bienes jurídicos que tutela dicha función, a fin de justificar la idoneidad de las medidas y acciones que se implementarán para su atención.

* Oportunidad: característica de la actuación de las autoridades que permite prevenir o evitar un daño o peligro inminente o actual a los bienes jurídicos tutelados por ésta, al implementarse en el momento preciso.

* Proporcionalidad: característica que limita la actuación de las autoridades en función de la ponderación que se hace, respecto de los posibles efectos adversos que generaría la materialización de alguna amenaza o riesgo y los beneficios o ventajas que se prevén obtener con las medidas y acciones implementadas para su atención.

* Temporalidad: característica que limita las acciones a cargo de la autoridad en el tiempo, hasta en tanto se restablecen las condiciones cuya alteración dan origen a las mismas o se logra el objetivo inicialmente planteado.

* Subsidiariedad: característica de la actuación de una autoridad que interviene en apoyo de otra, sin que ello implique una sustitución de jurisdicción.

* Gradualidad: característica de la actuación de una autoridad que se realiza en etapas y niveles de atención sucesivos e integrados –en función del proceso de planeación y programación–, que permite establecer prioridades, objetivos, metas, liderazgos y niveles de coordinación y responsabilidad para asegurar una actuación integral, dinámica, transparente y efectiva.

Asimismo, se atribuye al Ejecutivo Federal la aplicación de la ley, por conducto de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las Fuerzas Armadas, en coordinación con los demás órdenes de gobierno.

Adicionalmente, se definen los conceptos de Acciones de Seguridad Interior, Acciones de Orden Interno, Fuerzas Armadas, Fuerzas Federales, Inteligencia para la Seguridad Interior y Seguridad Nacional.

A efecto de otorgar seguridad jurídica respecto de los fenómenos que justificarán la procedencia de los esquemas de Seguridad Interior, se prevén de manera clara como amenazas a la Seguridad Interior, siempre que superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, los actos violentos que atenten contra los bienes jurídicos que ésta tutela, la presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico que ponga en peligro a la sociedad, sus bienes y a la infraestructura de carácter estratégico en áreas geográficas del país, y cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país.

Es conveniente precisar que las Acciones de Seguridad Interior que plantea la Iniciativa serán aquellas que realizarán las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con las entidades federativas o municipales, orientadas a la normalización del orden interno en un área o zona geográfica del país, previa emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, entre otras, las operaciones de restauración del orden y operaciones para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas y desastres, esto es, se trata de acciones reactivas frente a amenazas inminentes a la Seguridad Interior.

Por otro lado, las Acciones de Orden Interno serán aquellas que realizan de manera permanente las citadas autoridades federales, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, para prevenir amenazas a la Seguridad Interior en un área o zona geográfica del país, lo cual constituye el aspecto preventivo de la Seguridad Interior, fundamental para anticipar la acción del Estado frente a fenómenos que pretendan vulnerar el orden interno.

Adicionalmente, en el ámbito preventivo de la Seguridad Interior, la Iniciativa prevé la atención de los factores desestabilizadores de ésta, entendidos como aquellas circunstancias previstas en la Agenda Nacional de Riesgos, que podrían desencadenar o agravar una amenaza a la Seguridad Interior, tales como: cambio climático, corrupción, deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de Seguridad Pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros, que deberán ser identificados y atendidos, en el ámbito de su competencia, por las autoridades federales, mediante proyectos estratégicos y Acciones de Orden Interno, según su naturaleza, por sí o mediante esquemas de coordinación, que les permitan atender las causas que favorecerían o agravarían una amenaza a la Seguridad Interior en perjuicio de un área geográfica, sector o institución específicos.

En atención a que los efectos de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, son distintos a los de la suspensión de derechos prevista en el artículo 29 Constitucional, la propia Iniciativa prevé que dicha declaratoria no tendrá esas implicaciones restrictivas y remite a las diversas disposiciones constitucional y legales aplicables.

El **Capítulo Segundo, "Procedimiento para emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior"**, regula la intervención del Gobierno Federal en materia de Seguridad Interior bajo dos modalidades: la primera, cuando el Presidente de la República así lo determine de conformidad con su responsabilidad de proteger y con fundamento en el artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la segunda, a petición de las Legislaturas de las entidades federativas o de su Ejecutivo, cuando aquella no se encuentre reunida, de conformidad con el principio de garantía de protección federal prevista en el artículo 119, primer párrafo, de la citada Constitución Política.

Tratándose de las peticiones de apoyo por parte de las entidades federativas, se prevén los requisitos que deben contener, los cuales serán fundamentales para el análisis de la procedencia de la declaratoria.

De igual forma, se otorga al Ejecutivo Federal un plazo para la emisión de la declaratoria, señalando los elementos que deberá contener, y se prevé el deber de publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

Se prevé la posibilidad de modificar la declaratoria y prolongar la intervención federal, en tanto subsistan las causas que le dieron origen, lo cual deberá publicarse, de igual forma, en el Diario Oficial de la Federación.

Para efectos de garantizar la atención urgente de situaciones que coloquen en grave peligro la integridad colectiva de las personas y/o el funcionamiento de las instituciones, se faculta al Presidente de la República para ordenar acciones inmediatas, sin perjuicio de emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible, facultad que se fundamenta en la responsabilidad de proteger que debe asumir subsidiariamente el Gobierno Federal en materia de Seguridad Nacional para prevenir o, en su caso, contrarrestar eventos que pongan en peligro a la población o debiliten a las instituciones democráticas de gobierno, haciendo uso de todos los medios legítimos del Poder Nacional.

El Capítulo Tercero, "De la intervención de las Autoridades Federales", establece la intervención progresiva y gradual del Gobierno Federal, primero con la participación de las autoridades y fuerzas de seguridad pública federales y, cuando éstas sean insuficientes para contrarrestar la amenaza, se dará la intervención a las Fuerzas Armadas, como último recurso del Poder Nacional.

A efecto de mantener armonía con el orden jurídico nacional, se precisa que las acciones que realicen las autoridades del Gobierno Federal en términos de la Ley de Seguridad Interior, en ningún caso sustituirán las respectivas competencias y responsabilidades de las autoridades de los demás órdenes de gobierno, ni tampoco las que ejecuten las Fuerzas Armadas se considerarán de Seguridad Pública. De igual forma, tratándose de fenómenos naturales perturbadores, se señala que la intervención de las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, se sujetará a lo previsto en la Ley General de Protección Civil y demás disposiciones aplicables.

Sobre la base de la función de la Secretaría de Gobernación para la conducción de la política interior y para promover la coordinación de acciones en temas de Seguridad Nacional, se prevé la posibilidad de que esa dependencia implemente los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones o medidas estipuladas en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, así como, en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, destine Fuerzas Federales para que realicen Acciones de Orden Interno, en aquellas áreas o zonas del territorio nacional que así lo requieran.

En el **Capítulo Cuarto, "De la inteligencia para la Seguridad Interior",** se establece que las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior se apoyarán en las unidades y procesos de inteligencia del Sistema de Seguridad Nacional, a efecto de utilizar y explotar los esquemas que ya se han desarrollado o que se encuentren en proceso de desarrollo, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, sus disposiciones reglamentarias y los demás ordenamientos que en la materia se emitan, en congruencia con la vinculación de la Seguridad Interior y la materia de Seguridad Nacional.

Asimismo, se prevé que las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán actividades de inteligencia para la Seguridad Interior, con el objeto de brindar apoyo en la toma de decisiones en la materia.

El **Capítulo Quinto, "Del control de las acciones en materia de Seguridad Interior",** puntualiza que la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior deberá mantener permanentemente informado al titular del Ejecutivo Federal sobre la ejecución de la declaratoria. Asimismo, se señala que al término de las acciones, dicha autoridad remitirá al titular de la Secretaría de Gobernación un informe con los resultados obtenidos y, en su caso, la recomendación de las acciones subsecuentes a desarrollar.

En congruencia con los esquemas de control democrático previstos en la Ley de Seguridad Nacional, se prevé que el titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la Comisión Bicamaral prevista en el artículo 56 de dicha Ley, mediante el cual se hará de su conocimiento la conclusión y el resultado de las acciones que se llevaron a cabo por el Gobierno Federal conforme a la Ley de Seguridad Interior.

El Capítulo Sexto, denominado "De los recursos para atender una afectación de seguridad interior", contempla las previsiones anuales en el presupuesto de egresos de la federación, para la atención de las acciones que realicen las Dependencias Federales en materia de seguridad interior.

Las Fuerzas Armadas en México, por su disciplina, organización y disponibilidad, han sido durante muchos años el principal recurso que tienen la nación para enfrentar y contener los distintos desafíos a la seguridad de las nación que en cada momento se han presentado; sin embargo, su eficacia se ha visto limitada por la falta de un marco normativo adecuado para tal efecto, particularmente en cuanto a las acciones que pueden realizar en tiempo de paz, por lo que es necesario que esa Soberanía considere discutir y aprobar la presente iniciativa, a fin de que se fortalezca su actuación en materia de seguridad interior.

Por las razones expuestas y en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esa Soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior

Ley de Seguridad Interior Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia.

Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional.

Artículo 2.- En la conducción de las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las disposiciones del uso legítimo de la fuerza.

Artículo 3.-Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acciones de Seguridad Interior: Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con otras autoridades, orientadas a la normalización del orden interno institucional en un área o zona geográfica del país, con la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, siendo, entre otras, las siguientes:

a. Operaciones de restauración del orden, y

b. Operaciones para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas y desastres que constituyan una afectación a la Seguridad Interior en términos de esta Ley.

II. Acciones de Orden Interno: Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a prevenir amenazas a la Seguridad Interior en un área o zona geográfica del país, siendo, entre otras, las siguientes:

a. Destacamentos de seguridad;

b. Escoltas de seguridad;

c. Establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas;

d. Establecimiento de puestos de seguridad;

e. Intercepción terrestre, aérea y marítima;

f. Patrullajes;

g. Puestos de vigilancia;

h. Reconocimientos;

i. Seguridad en instalaciones estratégicas, y

j. Las demás que se consideren necesarias.

III. Fuerzas Armadas: El Ejército, Armada y Fuerza Aérea;

IV. Fuerzas Federales: Las instituciones de seguridad pública federal;

V. Inteligencia para la Seguridad Interior: El conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior;

VI. Seguridad Interior: La condición que proporciona el Estado Mexicano que permite salvaguardar la continuidad de sus instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional en beneficio de su población;

VII. Seguridad Nacional: Lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional.

VIII. Uso legítimo de la fuerza: utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas armadas y federales, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave.

Artículo 4.- La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación con la participación de las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia.

Artículo 5.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Seguridad Interior está excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo 6.- La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

Artículo 7.-Son amenazas a la Seguridad Interior, siempre que superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, las siguientes:

I. Actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus partes integrantes;

II. Presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico, tales como una emergencia ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad, sus bienes y a la infraestructura de carácter estratégico en áreas geográficas del país, y

III. Cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país.

Artículo 8.- Las autoridades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán proyectos estratégicos y, en su caso, Acciones de Orden Interno para identificar y atender oportunamente, según su naturaleza, los factores desestabilizadores de la Seguridad Interior, contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

Artículo 9.- Las acciones o medidas adoptadas con motivo de la aplicación de la presente Ley no implican la restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías.

En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas.

Capítulo Segundo Procedimiento para emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior

Artículo 10.- El Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o por su Ejecutivo cuando éstas no se encuentren reunidas, ordenará por conducto de la Secretaría de Gobernación, la implementación gradual de Acciones de Seguridad Interior, cuando se presente alguno de los supuestos señalados en el artículo 7 del presente ordenamiento.

Artículo 11.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención del Gobierno Federal, y dentro de las setenta y dos horas siguientes expedirá el Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 12.-Las peticiones que eleven las Legislaturas de las entidades federativas o su Ejecutivo, deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que representen una amenaza a la Seguridad Interior, especificando entre otros, los aspectos siguientes:

I. Amenaza identificada y el impacto de la misma;

II. Área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas;

III. Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza identificada en la entidad federativa o área geográfica afectada;

IV. Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza identificada;

V. El compromiso de contribuir a la atención de la amenaza en los términos en que se establezcan en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y

VI. La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y para la toma de decisiones correspondientes.

Artículo 13.- El Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener lo siguiente:

I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán;

II. La amenaza a la Seguridad Interior que se atenderá;

III. Las entidades federativas o regiones en las que se efectuarán las Acciones de Seguridad Interior;

IV. Las acciones a cargo de las entidades federativas para contribuir a la atención de la amenaza a la Seguridad Interior;

V. Fuerzas Federales participantes;

VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para que atiendan la amenaza, observándose lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley;

VII. Las Acciones de Seguridad Interior que se llevarán a cabo, y

VIII. La temporalidad de la Declaratoria.

Artículo 14.-La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, previo análisis, podrá estar sujeta a modificaciones y prórrogas las veces que sean necesarias mientras subsistan las causas que le dieron origen. Las modificaciones y prórrogas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 15.- En aquellos casos en que se encuentre en grave peligro la integridad colectiva de las personas y/o el funcionamiento de las instituciones, el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Lo anterior, sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible.

Capítulo Tercero
De la intervención de las autoridades federales

Artículo 16.-A partir de la expedición del Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención, se considerarán como de Seguridad Interior.

Artículo 17.- En ningún caso las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior que lleve a cabo el Gobierno Federal conforme a lo previsto en la presente Ley, tendrán por objeto sustituir en el cumplimiento de sus respectivas competencias y responsabilidades a las autoridades de los otros órdenes de gobierno.

Las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas, en ningún caso se considerarán de seguridad pública.

Artículo 18.- La Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones o medidas estipuladas en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 19.-Las Fuerzas Armadas sólo intervendrán cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para contrarrestar la amenaza de que se trate, conforme al procedimiento siguiente:

I. El Presidente de la República a propuesta de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que para el efecto se integren;

II. El comandante elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes;

III. El protocolo contemplará la integración de grupos interinstitucionales, a fin de que cada una lleve a cabo la misión que se les asigne con base en las atribuciones y responsabilidades que les correspondan, coordinadas por el comandante, y

Las Fuerzas Armadas actuarán realizando las acciones descritas en el artículo 3, fracción I de la presente Ley.

Artículo 20.- La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, que actuará en coadyuvancia a los esfuerzos coordinados para llevar a cabo las Acciones de Seguridad Interior.

Artículo 21.-Las autoridades atenderán la amenaza a la Seguridad Interior, cooperando en el ámbito de sus atribuciones, bajo la coordinación de la autoridad designada.

Artículo 22.-La Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, destinará Fuerzas Federales para que realicen Acciones de Orden Interno, en aquellas áreas o zonas del territorio nacional que así lo requieran.

Artículo 23.-Tratándose de fenómenos naturales perturbadores, la intervención de las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, se sujetará a lo previsto en la Ley General de Protección Civil y, en su caso, a los términos de la presente Ley.

Artículo 24.-Las autoridades federales llevarán a cabo Acciones de Orden Interno para evitar el surgimiento de amenazas a la Seguridad Interior en aquellas zonas o áreas geográficas del país que lo requieran.

Artículo 25.-Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.

Artículo 26.-Las Fuerzas Armadas realizarán Acciones de Seguridad Interior con su organización, medios y adiestramiento, sin descuidar el fortalecimiento de sus capacidades.

Capítulo Cuarto
De la inteligencia para la Seguridad Interior

Artículo 27.-Las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior se apoyarán en las unidades y procesos de inteligencia del Sistema de Seguridad Nacional.

Artículo 28.-Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior.

Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información.

Artículo 29.- En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley.

En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, la colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto de establezcan.

Capítulo Quinto
Del control de las acciones en materia de Seguridad Interior

Artículo 30.- El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 31.-El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la Comisión Bicamaral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional.

Capítulo Sexto
De los recursos para atender una afectación de Seguridad Interior

Artículo 32.-Anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se harán las previsiones necesarias para la atención de las acciones que realicen las dependencias federales, en materia de Seguridad Interior.

Transitorios

Artículo Primero.- La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Nota:
1 Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018.
Objetivo 1. Contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano.
Estrategia 1.6. Fortalecer el marco legal de las Fuerzas Armadas y la jurisdicción militar.
Líneas de Acción:
1.6.2. Impulsar los anteproyectos de decreto de la Ley de Defensa Exterior y la Ley de Seguridad Interior.
Programa Sectorial de Marina 2013-2018
Objetivo 1. Emplear el Poder Naval de la Federación contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano, la paz, independencia y Soberanía Nacional.
Estrategia 1.3. Fortalecer las atribuciones institucionales y actuación del personal naval mediante la creación y actualización del marco jurídico.
Líneas de Acción
1.3.1. Elaborar nuevos ordenamientos jurídicos que fortalezcan las atribuciones de la SEMAR e incluir nuevas atribuciones en diversas materias.
1.3.2. Reformar, adicionar y/o modificar el marco jurídico existente que de sustento a la actuación del personal de la Institución.
Objetivo 2. Fortalecer las capacidades de respuesta operativa institucional, contribuyendo a garantizar la Seguridad Nacional y la protección al medio ambiente marino.
Estrategia 2.6. Fortalecer los instrumentos del marco jurídico que den sustento legal a las Operaciones Navales de defensa exterior y seguridad interior.
Objetivo 3. Consolidar la Inteligencia Naval para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas que afecten a la Seguridad Nacional.
Estrategia 3.1. Ampliar la profesionalización y capacidades del Sistema de Inteligencia de la Armada de México (SIAM).
3.1.2. Adecuar la normatividad que sustente las acciones y operaciones del SIAM.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de octubre de 2016.— Diputadas y diputados: **Martha Sofía Tamayo Morales,**César Octavio Camacho Quiroz, Marco Polo Aguirre Chávez, Monserrat Alicia Arcos Velázquez, Timoteo Villa Ramírez, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputada Tamayo Morales. **Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a las comisiones de Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.**

02) 14-02-2017
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior.
Presentada por la Dip. Sofía González Torres (PVEM).
Se turnó a la Comisión de Gobernación, con opinión de las comisiones de Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Diario de los Debates, 14 de febrero de 2017.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Diario de los Debates

México, DF, martes 14 de febrero de 2017

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continuamos en el desahogo de nuestra orden del día. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Sofía González Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sofía González Torres: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tema de seguridad en México constituye un asunto sumamente complejo. Este es el elemento esencial para que el Estado mexicano garantice el orden social y la gobernabilidad, así como el Estado de derecho.

Desde hace 10 años, en este país se emprendió una estrategia integral para combatir al crimen organizado, esto por su alarmante crecimiento y alta peligrosidad que tienen dentro de la seguridad de los mexicanos.

Es por eso que el gobierno tuvo la difícil decisión de utilizar todo el aparato del Estado para contrarrestar y frenar a estos criminales, que dañan seriamente nuestro tejido social.

Como todos lo sabemos, la lucha contra el crimen organizado es una tarea constante. En esta tarea tenemos que destacar el desempeño eficaz de nuestras Fuerzas Armadas, que siempre han sido leales con la nación y responsables en su misión de proteger y salvaguardar la seguridad interior de las zonas en donde se ha pedido su ayuda, para así poder preservar el orden interno.

Por medio de la seguridad interior, el Estado mexicano salvaguarda la continuidad de sus instituciones, el desarrollo nacional y así salvaguarda el Estado de derecho y la gobernabilidad en absolutamente todo el territorio nacional.

La iniciativa que presenta hoy mi grupo parlamentario busca que la seguridad interior esté regulada con normas claras y situaciones específicas que pongan en orden el actuar de cada una de las diversas instituciones de seguridad con las que cuenta nuestro país, tomando en cuenta los distintos tipos de amenazas que afronta México.

Uno de estos ejemplos sería la tecnología, como parte integral del sistema de seguridad de nuestro país. De ahí que es necesario tomar en cuenta la protección de nuestras redes en contra de cualquier tipo de ataque cibernético por parte del crimen organizado. Es por esto que esta iniciativa incluye la seguridad cibernética como parte esencial de nuestra seguridad interior.

También debemos dejar claro que las amenazas a las que hace frente la seguridad interior son completamente distintas a las que enfrenta la seguridad pública. Si bien es cierto que ambas están ligadas y dirigidas a un mismo fin, su ámbito de acción es completamente distinto. La seguridad interior intenta proteger el Estado de derecho y la estabilidad de sus instituciones; y la seguridad pública vela por el orden público.

Nuestra iniciativa propone la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, se realice previo a un estudio y a un análisis de situación específica, con ello se va a poder determinar el tiempo, el grado y, sobre todo, el territorio específico en donde intervengan las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad Pública, con situaciones de extrema emergencia.

Debemos dejar claro que en ningún momento se pretende sustituir la obligación de los estados y municipios en materia de seguridad pública.

Contar con una legislación innovadora en materia de seguridad interior nos permite estar en condiciones para encarar las amenazas que enfrenta nuestro país y que vulneran la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Les pido su apoyo en esta iniciativa, para que esta sea una aportación más al proceso de dictaminación que sigue la Comisión de Gobernación respecto a las iniciativas del doctor César Camacho, la diputada Martha Tamayo y el diputado Jorge Ramos, a quienes expreso mi más alta admiración y mi más alto respeto.

Hagamos de estas propuestas una base sólida para garantizar a los mexicanos la paz y la tranquilidad que todos merecemos. Muchas gracias, presidente.

«Iniciativa que expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente **iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior**, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

No podemos ser ajenos ante la compleja realidad que vive nuestro país en materia de seguridad, la debilidad que enfrentan las instituciones estatales y municipales encargadas de velar y garantizar la estabilidad, gobernabilidad y seguridad de la ciudadanía es evidente; nuestro entramado organizacional se encuentra inmerso en una crisis de credibilidad, corrupción y falta de capacitación de los elementos que la integran. Frente a tal inestabilidad en algunas regiones del país ha sido necesaria la presencia e intervención de las Fuerzas Armadas para trabajar conjuntamente con los diferentes órdenes de gobierno y dependencias del Estado con la finalidad de enfrentar las amenazas que afectan la seguridad interior del país.

Ante los crecientes índices de violencia de tipo criminal que se han desatado en los últimos años, en el sexenio pasado se realizó un diagnóstico de la problemática e implementó una estrategia diseñada con el objetivo de reconstruir el tejido social, mismo que se vio seriamente afectado por grupos de la delincuencia organizada; lograr la transformación institucional del Estado; frenar el crecimiento de grupos criminales y reducir los índices delictivos, buscando con ello garantizar el Estado de Derecho.

Lo anterior se realizó a través de diversas líneas de acción, entre las que destacan, la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en regiones específicas con alto grado de conflicto, en dónde era necesario el uso de la fuerza pública para contener a los criminales y con ello garantizar la tranquilidad y seguridad de los mexicanos.

En este orden de ideas, es imperante la necesidad de crear una normativa que regule el accionar de las Fuerzas Armadas, llegó el momento de fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad del Estado mexicano, dotándolas de un marco normativo democrático, de rendición de cuentas y transparencia.

Para ello, es necesario diferenciar algunos conceptos a fin de entender el alcance y margen de acción de la nueva legislación en materia de Seguridad Interior; en primer lugar, se busca identificar que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de los ciudadanos ante cualquier amenaza, ya sea externa o interna, o bien, que vulnere la estabilidad de las instituciones. En este contexto, es el Estado el aparato coercitivo que cuenta con el poder de imponer su autoridad ante cualquier grupo que transgreda la estabilidad, bienestar general y seguridad integral de la ciudadanía, aún mediante el uso legítimo de la fuerza.

El Estado, a través de su entramado institucional, debe implementar un conjunto de acciones e interacciones con el fin de alcanzar objetivos de interés nacional, mismos que se materializan en fines específicos de desarrollo económico, bienestar social y seguridad integral. Ahora bien, las políticas públicas dirigidas a alcanzar el bienestar social deben centrarse en las satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía, el grado de satisfacción de las mismas determinará los niveles de vida para los integrantes de una nación, dentro de ellas se encuentran las políticas de desarrollo económico, que serán aquellas acciones encaminadas a la explotación racional de los recursos para convertirlos en bienes y servicios y con ello detonar en la población un crecimiento y alcanzar así mejores condiciones de vida.

Sin embargo lo antes expuesto no puede ser materializado sin una adecuada política de seguridad integral que garantice y proteja las condiciones para el ejercicio de las actividades derivadas de dichos objetivos, la cual consta de dos elementos: seguridad nacional y seguridad pública.

En términos generales, el concepto de seguridad se encuentra estrechamente relacionado a las nociones de garantía, protección, defensa, libertad, salvedad y tranquilidad frente a las amenazas; la seguridad implica una exigencia natural y fundamental del hombre, la cual tiene por objeto controlar su destino y desarrollarse en un ambiente que garantice el pleno goce de sus libertades fundamentales, en este sentido, la seguridad es una necesidad de las personas y de los grupos humanos, así como un derecho inalienable del hombre y las naciones.

En cuanto al concepto de seguridad nacional, es un término que no tiene un significado preciso y generalmente se refiere a aquellos programas, medidas e instrumentos que un Estado adopta con el fin de defender a sus órganos supremos de un posible derrocamiento violento, ya sea por una agresión externa o por un movimiento subversivo interno.

De acuerdo a lo señalado por el Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, la seguridad nacional es una condición en que los Estados consideran que no existe peligro de ataque militar, presión política o coerción económica, de tal manera que pueden seguir libremente su propio desarrollo y progreso.

La seguridad nacional no se concreta a la capacidad militar para evitar el derrocamiento, sino también implica la habilidad del gobierno para funcionar eficientemente, conservar el orden institucional y satisfacer los intereses públicos, para con ello conseguir el bien común.

En este orden de ideas, el concepto de seguridad nacional tiene que ser visto como un todo, en el que se integran las concepciones de seguridad individual y colectiva para proporcionar en determinada región un clima de tranquilidad y orden necesarios para el desarrollo cotidiano de las actividades en beneficio de la nación.

En nuestro país el primer referente oficial al termino de seguridad nacional se presentó en el Plan Global de Desarrollo de 1980-1982; años más tarde, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, se definió el concepto como una herramienta para mantener las condiciones de libertad, paz y justicia social dentro del marco constitucional; en el año 1989 se creó el Gabinete de Seguridad Nacional integrado por las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y la Procuraduría General de la República.

Durante la gestión del ex presidente Ernesto Zedillo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente a su sexenio no se define concretamente el concepto de seguridad nacional, sin embargo, se hace referencia a ella al abordar el tema de la soberanía nacional, asociando ideas como integridad territorial, política exterior, autodeterminación, democracia, desarrollo social, crecimiento económico y Estado de derecho, haciendo alusión al hecho de que fortalecer la soberanía nacional sería el eje rector de la política de seguridad nacional y de política exterior.

Derivado del crecimiento en los índices de violencia en México y de una mayor presencia de cárteles del crimen organizado, durante el mandato del ex presidente Vicente Fox se puso en marcha el operativo México Seguro, con el que se buscaba combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad de las poblaciones que hubieran sido víctimas de hechos violentos, resultado de las disputas entre las bandas de delincuentes. Fue durante dicho sexenio que se establecieron líneas de acción más concretas en materia de seguridad nacional, y se concibió a la misma desde una visión más amplia que involucraba situaciones que amenazaban la paz, el orden jurídico, el bienestar y la integridad física de la población, así como factores que pusieran en riesgo la permanencia de las instituciones o vulneraran el territorio nacional.

En este tenor, y ante el elevado índice de violencia que se ha generado en nuestro país en los últimos años debemos comprender que las acciones de seguridad nacional tienen que ver con todo lo que pone en peligro la gobernabilidad y estabilidad del Estado y lo que pudiera atentar contra la paz entre las naciones, derivado de ello, es necesario concebir que el concepto de seguridad nacional está compuesto por dos elementos: seguridad exterior y seguridad interior.

El concepto de seguridad exterior es entendido como aquellas amenazas a los intereses nacionales que provienen de acciones políticas de otros estados que buscan imponer sus propios intereses; por su parte la seguridad interior es todo aquello que pone en peligro al Estado nacional, no sólo militarmente, sino también lo que pudiera atentar contra la paz y estabilidad social como lo es el terrorismo, el narcotráfico, las catástrofes naturales o incluso la contaminación ambiental.

Por su parte, en un sentido más amplio la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la continuidad de sus instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional en beneficio de la población. Las líneas de acción que se implementen deberán estar dirigidas específicamente a salvaguardar a las instituciones, mantener el Estado de derecho, y en caso de identificar alguna amenaza ejercer la facultad de hacer uso legítimo de la fuerza.

En este sentido, es necesario puntualizar cuál es su ámbito de competencia, así como sus alcances, con el fin de delimitar su margen de acción; la seguridad interior se acota a la actividad del Estado que le asegura a la nación una garantía contra las amenazas, presiones y antagonismos que se manifiesten dentro del territorio nacional.

Para estar en condiciones de legislar en una nueva normativa de seguridad interior, es menester definirla, así como entender que es parte de la seguridad nacional, tal y como lo establece nuestra Ley Fundamental. Al mismo tiempo es necesario diferenciarla del concepto y alcances de la seguridad pública; en este contexto, la seguridad interior se define como “la garantía, en grado variable, proporcionada principalmente por el Estado a la nación a través de acciones políticas, económicas, psicosociales y militares para que, una vez superados los antagonismos y presiones en el ambiente interno del país, se pueda conquistar y mantener los considerados objetivos nacionales permanentes”.

La seguridad interior, tendrá como objetivo fundamental neutralizar, superar y reducir las presiones que se producen al interior del país, es por ello que sus acciones deben ser dirigidas para contrarrestar todas las formas que puedan perturbar el orden interno y reestablecer la paz y tranquilidad de esas regiones.

Ahora bien ¿cuáles son esas subversiones que ponen en riesgo el orden interno y afectan el desarrollo de la nación, mismas que el Estado debe eliminar con la finalidad de regresar la paz y el bienestar a la ciudadanía? Factores como el narcotráfico, asaltos, secuestros, terrorismo, fenómenos naturales, son acciones que se manifiestan en el ámbito interno del país y que quebrantan o destruyen los objetivos nacionales, ya sea atacando al entramado institucional o controlando y violentando a la ciudadanía; es aquí donde la función del Estado debe centrarse en neutralizar y eliminar las amenazas.

Ahora bien, habiendo definido ampliamente tanto el concepto como los alcances de la seguridad interior, es necesario señalar el ámbito de acción de la seguridad pública, con el objetivo fundamental de no confundir ambos conceptos así como sus ámbitos de responsabilidad. En estricto sentido la seguridad pública es aquella que se encarga de proteger la integridad y los derechos de las personas, así como el orden público.

Las acciones para proteger la integridad y los derechos de los ciudadanos se refieren a la capacidad de las autoridades encargadas de la seguridad pública para preservar y resguardar la vida de las personas, el pleno ejercicio de sus derechos, así como las estrategias para combatir las acciones delictivas emanadas de la delincuencia.

De acuerdo a un informe especial realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de seguridad, se define a la seguridad pública como el servicio que se le brinda a la ciudadanía, a través de las medidas preventivas o de seguridad, que deben ser oportuna y eficazmente aplicadas por diversas corporaciones policiacas, a fin de salvaguardar la integridad física, los bienes y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos; y que cuando por alguna circunstancia se rompa ese principio, esto es, que se atente contra alguno de esos derechos, sean los órganos encargados de procurar y

administrar la justicia los responsables de lograr pronta y expeditamente que se le resarza a dichas personas el pleno goce de los derechos que les fueron afectados, en plena armonía y aplicación de la ley.

Así, la seguridad pública se encuentra ligada con la seguridad individual en la que cada persona cuenta con las garantías de libertad, propiedad y protección contra actos delictivos, y con la seguridad comunitaria, la cual genera las condiciones adecuadas para que los grupos sociales puedan relacionarse política, económica y socialmente en una marco de estabilidad del interés social.

La seguridad pública se orienta a "disciplinar el comportamiento de la sociedad mediante acciones normativas del orden público, por lo que podemos definir a la seguridad púbica como la garantía que el Estado proporciona a la nación con el propósito de asegurar el orden público".

En este sentido, y definiendo a detalle el concepto de seguridad pública debemos percibirla como un factor determinante de la gobernabilidad de un país, cuyo objetivo es garantizar que la ciudadanía esté en condiciones de alcanzar su bienestar respetando el orden jurídico establecido, su implementación estará a cargo de las instituciones de administración y procuración de justicia, así como de las estructuras de las policías preventivas que la conforman.

Para dichos efectos, la seguridad pública se concibe como el conjunto de normas, acciones y políticas articuladas que tienen como finalidad garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos, así como de aquellas faltas contra el orden público, a través de un sistema de control penal y policial.

Derivado de lo antes expuesto, y habiendo definido ampliamente cada uno de los conceptos que integran la seguridad de la nación, así como sus ámbitos de competencia, reafirmamos la necesidad de trabajar conjuntamente para emitir una nueva normativa en materia de seguridad interior, la cual debe vigilar, definir y proteger la intervención de las fuerzas armadas en coordinación con las diferentes dependencias locales y federales en tareas de seguridad interior, con irrestricto apego a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y los elementos policiales y militares que intervienen en dichas tareas.

Asimismo, se debe recalcar que las amenazas a las que hace frente la seguridad interior no son las mismas que enfrenta la seguridad pública, que aunque se encuentren estrechamente ligadas y dirigidas a un mismo fin, que es el bienestar de la población, su ámbito de acción es completamente diferente, ya que una protege el Estado de derecho y la estabilidad de las instituciones y la otra se encarga de velar por el orden público.

Contar con una legislación en materia de seguridad interior es necesario para poder estar en condiciones de encarar las amenazas que enfrenta el país y vulneran la calidad de vida de los ciudadanos; ahora bien, al definir claramente los conceptos y alcances de la seguridad pública y seguridad nacional reafirmamos que es facultad y obligación tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo Federal realizar todas las acciones necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad del país, de acuerdo a lo señalado en el artículo 89 constitucional, fracción VI, que a la letra dice:

Articulo 89

I...

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 constitucional, fracción XXIX-M, es facultad del Congreso de la Unión expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites de las investigaciones correspondientes.

La iniciativa que se plantea se basa en una enfoque de función social, es decir, en el que se tiene claramente identificado que en ningún momento se pretende sustituir la obligación de los estados y municipios en materia de seguridad pública, sino trabajar conjuntamente en casos en que los conflictos internos hayan rebasado a las autoridades municipales o locales, se plantea un trabajo de coordinación en el que no existe sustitución de funciones.

La Ley de Seguridad Interior no solucionará el problema que se tiene actualmente, lo que debe realizarse es una reforma profunda a las policías civiles, integrando un sistema de seguridad pública policial, mediante un mecanismo de instrucción y formación militar, basándose en la disciplina y la obediencia.

Por otra parte, es importante señalar que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad se dará previó estudio y análisis de la situación para con ello, estar en condiciones de determinar el tiempo, grado y territorio en el que intervendrán las Fuerzas Armadas, los casos en los que se determine la intervención de las mismas serán situaciones de extrema emergencia en los que la población y las instituciones se encuentren superadas, vulneradas y violentadas.

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta, a través de la cual se pretende establecer una ley en la que se establezcan los protocolos para la coordinación entre las diversas fuerzas de seguridad que garanticen el Estado de Derecho, pero sobretodo, la paz y tranquilidad de todas y todos los mexicanos.

Una realidad que no podemos ignorar es que nuestras Fuerzas Armadas se encuentran en las calles realizando tareas de seguridad interior con el más alto grado de compromiso y lealtad al estado mexicano, tarea que en el Partido Verde reconocemos con cabal respeto y admiración. Resultará necesario trabajar el Estado Mexicano en su conjunto, con el fin de dotarlas de un marco normativo que las proteja, determine el grado y temporalidad de su actuación, al tiempo que establezca los lineamientos para trabajar conjuntamente con los distintos órdenes de gobierno con objeto de fortalecer y profesionalizar a sus policías para que cuando existan las condiciones requeridas, los elementos de las Fuerzas Armadas puedan regresar a sus cuarteles.

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior

Artículo Único. Se expide la Ley de Seguridad Interior, para quedar como a continuación se presenta:

Ley de Seguridad Interior

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de interés general y de observancia en todo el territorio nacional, tiene como objetivo sentar las bases jurídicas, orgánicas, funcionales, de responsabilidades y de coordinación existentes entre las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad y las Fuerzas Armadas, para la planificación, intervención y preservación de la Seguridad Interior.

Artículo 2. Las acciones que se realicen para preservar el orden interno y la seguridad interior deberán regirse bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y garantías individuales, transparencia, coordinación y cooperación.

Artículo 3. Para la aplicación de las medidas preventivas y correctivas previstas en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, se deberá establecer lo siguiente:

I. Temporalidad;

II. Ámbito geográfico de actuación;

III. Gradualidad;

IV. Autoridades responsables.

Artículo 4. La Seguridad Interior será concebida como parte de la seguridad nacional y serán todas aquellas acciones destinadas a salvaguardar las instituciones, mantener el Estado de derecho, garantizar la estabilidad y pleno de desarrollo de la población; y en caso de ser necesario utilizar la fuerza legítima del Estado.

Tendrá como objetivo fundamental superar, neutralizar y reducir presiones y antagonismos que tengan origen al interior del país.

Artículo 5. Para efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Fuerzas Federales: El entramado institucional encargado de la seguridad pública federal;

II. Fuerzas Armadas: El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea;

Orden Interno: Situación de paz en el territorio nacional y de equilibrio en las estructuras políticas, jurídicas y sociales del Estado, regulado por el poder político orientado a mantener el Estado de derecho;

IV. Seguridad Interior: La actividad del Estado que le asegura a la nación una garantía contra las amenazas y presiones que se manifiestan dentro del territorio nacional;

V. Seguridad Nacional: Acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.

Artículo 6. La aplicación y conducción de la presente ley será responsabilidad del Ejecutivo Federal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 89 constitucional, fracción VI. La Secretaría de Gobernación fungirá como enlace e institución coordinadora entre las dependencias de la Administración Pública Federal, autoridades locales y municipales, Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales.

Artículo 7. A falta de disposición expresa de la presente ley, se aplicarán supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimiento Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 8. Serán consideradas amenazas de Seguridad Interior aquellas acciones que superen las capacidades de las autoridades competentes de forma continua:

I. Actos emanados de grupos delincuenciales que rebasan la capacidad de control o manejo del Estado que ponen en riesgo la vida y bienestar de la población en general;

II. Acciones que ponen en peligro la estabilidad y continuidad de las instituciones, menoscabando el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática;

III. Fenómenos de origen natural, biológico o antropogénico que afecten y pongan en peligro la integridad y desarrollo de la sociedad;

IV. Todas aquellas acciones que pretendan vulnerar la paz social, el patrimonio nacional, la seguridad nacional y el orden interno.

Artículo 9. Las autoridades locales, municipales y federales, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán e implementarán acciones y estrategias para identificar y en su caso atender las amenazas desestabilizadoras de la seguridad interior y el orden interno.

Artículo 10. La información obtenida por las áreas de inteligencia de las Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas será considerada de Seguridad Nacional y se apegará a lo establecido a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Capítulo Segundo Del procedimiento de Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior

Artículo 11. El Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus facultades será la autoridad encargada de emitir una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior cuando se presente alguna de las situaciones previstas en el artículo 8 de la presente ley.

Artículo 12. El procedimiento para la emisión de una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior podrá iniciarse a petición de:

I. El Presidente de la República;

II. Los gobernadores de los Estados y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

III. La mayoría de los miembros integrantes del Senado de la República.

Artículo 13. Las peticiones realizadas por los gobiernos de los Estados o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, deberán especificar los siguientes aspectos:

I. Análisis y evaluación de la situación que se trate;

II. Definir el alcance geográfico en donde se presenta la amenaza;

III. Áreas y autoridades que presentan insuficiencia operativa y técnica para hacer frente a la situación;

IV. Información que aporte elementos para la identificación de los grupos y personas generadores de la amenaza;

V. La demás información que solicite el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario de Gobernación que permitan aportar elementos que justifiquen la emisión de la Declaratoria.

Artículo 14. La Declaratoria de Afectación a la Seguridad deberá contener los siguientes elementos:

I. La amenaza a la que se tiene que hacer frente;

II. El ámbito geográfico de actuación;

III. El tiempo en el que las Fuerzas Armadas brindarán acciones de apoyo;

IV. La autoridad encargada de la coordinación e implementación de las acciones;

V. Las acciones y estrategias que se implementarán durante el tiempo que dure la Declaratoria;

VI. El grado de participación de las Fuerzas Armadas.

Artículo 15. En los momentos en que la situación lo amerite con previo análisis, la Declaratoria podrá estar sujeta a modificaciones y prórrogas las veces que sean necesarias, siempre y cuando no se hayan abatido las amenazas que le dieron origen.

Artículo 16. Al momento de la expedición de la Declaratoria, ésta deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y por lo menos en tres medios impresos locales del área geográfica afectada.

Capítulo Tercero
De las acciones coordinadas entre autoridades civiles y de las Fuerzas Armadas

Artículo 17. Las atribuciones y obligaciones para la federación, estados, Ciudad de México y municipios, referentes a salvaguardar el Orden Interno y aquellas contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no serán sustituidas por las establecidas en la presente Ley.

Las autoridades federales únicamente podrán intervenir cuando medie una declaratoria de afectación a la seguridad interior, procedimiento que dará inicio a solicitud de los gobernadores de los Estados, del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México o de la mayoría de los miembros integrantes del Senado de la República.

Artículo 18. Las acciones tendientes a restaurar la Seguridad Interior serán sancionadas por el titular de la Secretaría de Gobernación, previa verificación del trámite aprobatorio correspondiente de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 19. La participación de efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas únicamente tendrá lugar cuando las capacidades de las instituciones de seguridad pública federales y locales sean rebasadas, y se sustente ampliamente la necesidad de su participación bajo los siguientes señalamientos:

I. Que la participación de las Fuerzas Armadas se derive de la petición de los funcionarios señalados en el artículo 17 de esta Ley;

II. Se describan los fundamentos y motivaciones que sustenten la afectación a la seguridad interior;

III. Se establezca claramente la delimitación geográfica y temporalidad de la participación de los elementos castrenses;

IV. Se describan los sujetos, grupos o agentes que influyen en la declaratoria de afectación a la seguridad interior;

V. La designación de un Comandante de las Fuerzas Armadas, encargado de dirigir y coordinar las acciones que se describan en un protocolo de actuación, mismo que deberá establecer las responsabilidades y los canales de actuación que permitan la colaboración entre autoridades militares y civiles, y que deberá ser presentado ante el Secretario de Gobernación;

VI. El protocolo deberá considerar siempre la salvaguarda de los derechos humanos tanto de civiles como de los efectivos de las Fuerzas Armadas.

Artículo 20. Las acciones de Seguridad Interior no serán responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino que en el protocolo elaborado por el Comandante asignado se buscará establecer canales de cooperación institucional, al mismo tiempo que las autoridades locales deberán elaborar una propuesta para continuar con estas labores una vez que los efectivos de las Fuerzas Armadas concluyan el tiempo establecido para su participación.

Dicha propuesta deberá entregarse al menos quince días antes del retiro de las Fuerzas Armadas del área geográfica descrita en la Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior.

Artículo 21. La declaratoria de afectación terminará su vigencia cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

I. Por haberse cumplido el plazo previsto en el protocolo elaborado por autoridades civiles y militares;

II. Por haber cumplido los objetivos fijados en el protocolo;

III. Mediante la proyección y ejecución de acciones efectivas tendientes al restablecimiento de la seguridad interior por parte de las autoridades civiles locales.

Artículo 22. La Secretaría de Gobernación será la instancia encargada de definir los indicadores que darán pauta a una probable declaratoria de afectación a la seguridad interior.

Para la elaboración de dichos indicadores, la Secretaría de Gobernación podrá apoyarse en las dependencias federales y locales que considere pertinentes, así como de especialistas y representantes de la sociedad civil.

Artículo 23. Para el caso de fenómenos naturales, esta ley no reemplazará lo previsto en la Ley General de Protección Civil en materia de participación de autoridades federales y locales.

Artículo 24. La actuación de efectivos de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Seguridad interior estará sujeta a la jurisdicción ordinaria cuando se cometan delitos del orden común o federal por parte del personal implicado, siempre cuidando el respeto al debido proceso y a la salvaguarda de los derechos humanos.

Artículo 25. Los efectivos de las Fuerzas Armadas deberán dar a conocer al Ministerio Público las acciones que se hayan realizado en función de la seguridad interior, al tiempo que será responsabilidad de las Fuerzas Armadas el preservar el lugar de los hechos.

Las Fuerzas Armadas podrán auxiliar al Ministerio Público en las tareas que éste les asigne, en tareas de investigación y persecución de los delitos, detención de personas o el aseguramiento de bienes relacionados con las diligencias de investigación, siguiendo los lineamientos previstos en el marco jurídico federal aplicable.

Las policías estatales y locales podrán solicitar el apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas por medio de los canales de comunicación previamente establecidos cundo se trate de situaciones de extrema urgencia, sin que la participación de las Fuerzas Armadas fuera de los límites geográficos establecidos en el protocolo resulte en una violación a las atribuciones que esta ley les confiere.

Artículo 26. Los efectivos de las Fuerzas Armadas que participen en acciones de Seguridad Interior tienen derecho a contar con la capacitación necesaria para participar en actividades inusuales para los correspondientes cuerpos a los que pertenezcan, sin que ello signifique la distracción de las actividades propias del servicio armado.

Capítulo Cuarto
De la Inteligencia para la Seguridad Interior

Artículo 27. El Sistema de Seguridad Nacional podrá proveer de la información necesaria para que las Fuerzas Armadas, en coordinación con autoridades civiles, puedan cumplir los objetivos establecidos en el correspondiente protocolo diseñado para un caso específico de Afectación a la Seguridad Interior.

Artículo 28. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas podrán disponer de la información que generen sus propias áreas de inteligencia en materia de Seguridad Interior, sin transgredir las disposiciones aplicables en la materia, considerando siempre la salvaguarda del derecho a la protección de datos personales y demás elementos que pudieran señalarse como acciones de invasión a la intimidad.

Artículo 29. Las autoridades federales, estatales y municipales otorgarán la información necesaria para complementar el diseño de los protocolos en materia de colaboración con las Fuerzas Armadas en caso de una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior.

Dicha colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto de establezcan.

Capítulo Quinto
De las acciones y coordinación en materia de Seguridad Interior

Artículo 30. El Comandante designado para coordinar las acciones de Seguridad Interior con autoridades federales y locales, deberá informar al titular del Ejecutivo Federal de los avances y problemáticas que se presenten en la aplicación de protocolo de intervención en la ubicación geográfica correspondiente, por medio del Secretario de Gobernación, a quien deberá entregar un informe al menos cada quince días a partir del inicio de las actividades derivadas de una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior.

Artículo 31. El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe respecto a los resultados de la participación de las Fuerzas Armadas en las regiones en donde se haya emitido la Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior a la Comisión Bicamaral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional.

Capítulo Sexto
De los recursos para atender una afectación de Seguridad Interior

Artículo 32. Los recursos necesarios para atender contingencias derivadas de afectaciones a la seguridad interior, deberán ser resueltas con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos anuales tanto para entidades federativas y municipios, como para las dependencias federales que participen en actividades de seguridad interior.

Transitorios

Artículo Primero. La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Gobernación deberá emitir un protocolo general en donde se indiquen las condiciones en las cuales se podrá emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo Tercero. En las ubicaciones geográficas en donde se encuentren desplegados efectivos de las Fuerzas Armadas hasta el momento de la entrada en vigor de la presente ley, se mantendrá el despliegue por un periodo no mayor a seis meses, lapso en el cual las autoridades respectivas deberán elaborar un protocolo de Declaratoria de Afectación de Seguridad Interior en caso de que sea necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en actividades de colaboración en dicha materia.

Notas:

1 Seguridad Nacional, Poder Nacional y Desarrollo, Thiago Cintra José.

2 Seguridad Nacional, Poder Nacional y Desarrollo, Thiago Cintra José.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: **Sofía González Torres,**Felipe Cervera Hernández, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada González Torres. **Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a las Comisiones de Seguridad Pública, de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Gaceta Parlamentaria

Año XXI | Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 30 de noviembre de 2017 | Número 4917-VI

CONTENIDO

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

2 De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior

Votos particulares

127 Respecto al dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, que presentan diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Anexo VI

Jueves 30 de noviembre

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y toda vez que le fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, de los Diputados Cesar Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, de la Diputada Sofía González Torres del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado **"ANTECEDENTES",** se da constancia de la fecha de presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno.

II. En el apartado **"OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS"**, se estudian los términos y los alcances de las mismas.

III. En el apartado de **"CONSIDERACIONES"**, la Comisión expresa los argumentos, razonamientos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan su determinación final.

IV. En el apartado **"ADICIONES A LAS INICIATIVAS"**, se expresan los cambios propuestos por esta Dictaminadora a las Iniciativas en comento, así como los razonamientos que los motivan.

V. En el apartado relativo al **"TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO"** se plantea el Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, así como los artículos transitorios del mismo.

I. ANTECEDENTES

Para la realización de este documento se toman en consideración todas las iniciativas que en materia de seguridad interior han sido presentadas y turnadas a esta Comisión durante esta LXIII Legislatura, siendo necesario señalar, que únicamente se dictaminan las dos señaladas al inicio de este dictamen consistentes en:

- Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por los Diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 08 de noviembre de 2016;

- Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por la Diputada Sofía González Torres del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentada el 14 de febrero de 2017;

Siendo consideradas además, las siguientes iniciativas que precluyeron o fueron retiradas por sus proponentes o no le corresponde dictaminar a esta Cámara, pero que por la trascendencia del tema fueron incluidas y analizadas, las cuales se enuncian por orden cronológico:

- Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, del Diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 26 de noviembre de 2015, que precluyó el 29 de abril de 2016;

- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, del Senador Roberto Gil Zuarth del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentada en el Pleno del Senado el 27 de septiembre de 2016;

- Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Nacional, de los Diputados Manuel de Jesús Espino Barrientos y Candelaria Ochoa

Ávalos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentada el 11 de enero de 2017 que precluyó el 14 de agosto de 2017;

- Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, del Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, presentada ante la Comisión Permanente el 11 de enero de 2017.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS EN ESTUDIO

Iniciativa de los Dips. Martha Sofía Tamayo Morales y César Camacho Quiroz:

La iniciativa en comento señala que la concepción tradicional sobre las amenazas a un Estado ha quedado rebasada, y que es necesario establecer una nueva concepción de la seguridad de alcance multidimensional, que incluya las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos.

Dicha concepción debe basarse en el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la buena gestión gubernamental, como

elementos esenciales para la estabilidad, la paz y el desarrollo político, económico y social, pues no debe perderse de vista que el fundamento y razón de ser de la Seguridad Nacional es la protección de la persona humana. Que, derivado de todos estos cambios, en el ámbito nacional se dio un impacto que generó la reforma constitucional de 2004, con la cual se crea una nueva materia de derecho, esto es, el Derecho de la Seguridad Nacional, cuya reforma incorporó como una facultad del Congreso de la Unión emitir leyes en materia de Seguridad Nacional, y como una facultad y obligación del Presidente de la República preservarla en términos de dichas leyes.

Señalan los promoventes que dentro de dicho tema se encuentra la vertiente de Seguridad Interior, cuyo objeto de protección es el orden interno, por lo que resulta necesario un ordenamiento legal específico que defina y regule las actividades que pueden realizar las dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento de la Seguridad Interior.

Que la complejidad de estos fenómenos requiere de la actuación coordinada de diversas dependencias e instituciones del Ejecutivo Federal, así como de la Participación corresponsable de las autoridades de las entidades federativas y los municipios.

Iniciativa de la Dip. Sofía González Torres:

La iniciativa señala que debido a los crecientes índices de violencia de tipo criminal que se han desatado en los últimos años se pretendió implementar una estrategia con el objetivo de reconstruir el tejido social, lograr la transformación institucional del Estado para frenar el crecimiento de grupos criminales y reducir los índices delictivos, buscando con ello garantizar el Estado de Derecho.

En este sentido, es imperante la necesidad de crear una normativa que regule el accionar de las Fuerzas Armadas, para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad del Estado mexicano, dotándolas de un marco normativo democrático, de rendición de cuentas y transparencia.

Por el ello, el concepto de seguridad nacional tiene que ser visto como un todo, en el que se integran las concepciones de seguridad individual y colectiva para proporcionar el orden necesario para el desarrollo cotidiano de las actividades en beneficio de la nación.

Iniciativa del Dip. Jorge Ramos Hernández:

La iniciativa busca regular los procedimientos para declarar las afectaciones y preservar la seguridad nacional interior. Definir los conceptos de "Seguridad Nacional", "Obstáculos", "Instancias", "Intervención de comunicaciones privadas".

Propone un procedimiento para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior y a la intervención de las autoridades, ya que indica el promovente, la seguridad nacional es una de las prioridades más relevantes del poder público, al constituir el estado de convivencia en el que las personas pueden vivir en libertad y ejercer sus derechos en plenitud gracias a la protección que despliegan en su favor el orden jurídico y las instituciones, tanto en términos preventivos como reactivos.

Para el iniciador, la diferencia entre la seguridad pública, es entendida como las políticas orientadas a proteger a las personas y su patrimonio, y la seguridad nacional radica en que esta va orientada a garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones, particularmente a la existencia, estabilidad y permanencia del Estado, a su integridad territorial y a la soberanía e independencia nacionales.

Señala que la Ley de Seguridad Nacional expedida en 2005 cubrió una parte importante pero dicha ley no contempló los distintos ámbitos de la seguridad nacional ni reguló el tipo de vulnerabilidades que podrían significar peligros potenciales o inminentes. Tampoco determinó cómo el Estado en su conjunto podría hacer frente a los mismos y que ese marco jurídico ha sido rebasado por la complejidad de los obstáculos que enfrenta el Estado mexicano y por la fragilidad de las acciones que el poder público ha puesto en marcha para enfrentarlos.

El proponente dice que, las Fuerzas Armadas sirven a los mexicanos realizando una serie de tareas que pudieran ser satisfechas por las autoridades civiles si éstas tuvieran las capacidades constitucionales y ordinarias para ello; sin embargo, dado que las cosas no siempre son así, el Presidente en ejercicio de sus atribuciones constitucionales para que instancias federales, en particular las Fuerzas Armadas, sustituyan a esas instancias civiles disminuidas.

Su iniciativa propone entre otras: Distinguir con claridad los supuestos bajo los cuales se estime que la seguridad nacional se ve comprometida, desde el

punto de vista de los valores en riesgo, lo que justifica la intervención de distintas instancias federales, incluyendo la Fuerza Armada.

Establecer el procedimiento mediante el cual una autoridad local o una instancia federal puedan solicitar el inicio del procedimiento para la emisión de una declaratoria de afectación a la seguridad nacional y lo que esta debe contener, así como la delimitación de actuar de competencias.

Iniciativa del Sen. Roberto Gil Zuarth:

La iniciativa en comento busca expedir una Ley de Seguridad Interior, al considerar que México se encuentra en una disyuntiva similar a otras experiencias internacionales en el que las democracias constitucionales han enfrentado el reto de balancear el carácter civil de la seguridad pública y el respeto irrestricto a los derechos humanos frente a la complejidad y gravedad de fenómenos sociales como el crimen organizado, el terrorismo o la cibercriminalidad.

Señala que, desde la década de los noventas, la legalidad y constitucionalidad del despliegue de fuerzas militares en nuestro país para el combate a grupos

criminales o la atención de amenazas y riesgos a la seguridad nacional de naturaleza no convencional ha estado en tela de juicio.

Que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a que la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles de seguridad pública es constitucional; esto es, que un sin número de situaciones que puede enfrentar la autoridad civil pueden ameritar la solicitud de intervención del estado de fuerza del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Sin que por ello se justifique la declaración de un estado de emergencia o excepción que de jure afecte la plena vigencia de los derechos humanos de toda la población de una localidad o región determinada.

Manifiesta el promovente que el Presidente de la República está facultado para enfrentar dicho tipo de amenazas a través del despliegue de las Fuerzas Armadas de manera subsidiaria, temporal y con pleno respeto de los derechos humanos, con la finalidad de evitar situaciones límites que pudieran derivar en una suspensión de derechos humanos y sus garantías.

La iniciativa se reconoce a la seguridad interior que una de las dos vertientes de la seguridad nacional, siendo la segunda la defensa exterior.

Que, ante tal panorama, es una necesidad impostergable del Estado Mexicano que se regule de forma clara un espacio de las funciones en materia de seguridad nacional.

Iniciativa del Dip. Manuel de Jesús Espino Barrientos:

La iniciativa en comento busca modificar la Ley de Seguridad Nacional, modernizándola para hacer frente a desastres naturales y de origen humano como la corrupción, la impunidad, la simulación democrática, la selectividad en la aplicación de la ley y la acción incontrolada de grupos desestabilizadores o del crimen organizado.

Algunos de los cuales han superado las capacidades actuales de las autoridades encargadas de la seguridad pública y amenazan la seguridad interior; situaciones que ponen en riesgo la Seguridad Nacional, y han llevado al Presidente de la República, a hacer uso de las facultades que le otorga el Artículo 89 de nuestra Carta Magna, para disponer de las Fuerzas Armadas permanentes para restablecer la seguridad de los mexicanos.

Considera que se requiere un mejor soporte legal a la facultad constitucional del Poder Ejecutivo en orden a la Seguridad nacional, además de darle una dimensión social y humana a la Agenda Nacional de Riesgos, haciendo necesarias precisiones conceptuales y organizativas del Sistema de Seguridad Nacional para evitar la ambigüedad de funciones y responsabilidades en aras de una mayor eficacia y coordinación a fin de disminuir el riesgo de que la Seguridad Nacional se reduzca a la sola protección de intereses políticos o coyunturales.

Iniciativa del Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

Considera que el combate a la criminalidad de los últimos años ha sido ineficaz y contraproducente, ya que con ello ha provocado una fragmentación de varios grupos de la delincuencia organizada, propiciando el surgimiento de nuevos, los cuales en muchos casos abandonan o reducen su actividad en el narcotráfico y en cambio intensifican la comisión de delitos predatorios como el secuestro, la extorsión o la trata de personas, lo que aunado a la corrupción e impunidad que padecen todos los eslabones de la cadena de justicia penal y a la prolongación en el tiempo de las amenazas,

ha provocado que la sociedad mexicana siga padeciendo los peores efectos de la ausencia de una política integral, legitima y sustentable en materia de seguridad.

Por tanto, estima que el Estado debe contar con el andamiaje institucional y normativo que le permita enfrentar y solucionar las amenazas que afectan a la sociedad, así como la funcionalidad de las instituciones democráticas.

Mismo que debe enfocarse en la implementación de medidas focalizadas en las que concurran diversas autoridades de manera coordinada o incluso, ante las limitaciones que alguna de ellas pueda padecer, que opere la sustitución de una autoridad por otra que cuente con las capacidades necesarias para enfrentar el evento que afecte la seguridad interior, sea del mismo nivel de gobierno o de uno diverso.

Situación que ocurre para la atención a la población en caso de desastres naturales, epidemias y pandemias, así como para la amenaza que representan las actividades de grupos de la delincuencia organizada cuando los mismos han infiltrado o cooptado total o parcialmente alguna corporación policiaca

o cuando se influye en el proceso de toma de decisiones de algún ente público.

Estimando que debe determinarse mediante un diagnóstico cuando las corporaciones policiacas no cuenten con las capacidades institucionales para enfrentar la amenaza, para que en estas situaciones el Ejecutivo Federal, de manera subsidiaria, determine la actuación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las labores de seguridad pública, mismas que deberán respetar en todo momento los derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia de los que el Estado mexicano forma parte.

Y propone establecer paulatinamente el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, que se estudiará a partir de una evaluación de las capacidades de los cuerpos policiacos en aquellos lugares donde la función de seguridad pública es realizada por las Fuerzas Armadas y fijar si la autoridad civil cuenta con la fortaleza institucional para encargarse de la seguridad publica en el ámbito territorial respectivo.

Que como condición previa para su presencia se constate la insuficiencia de las fuerzas civiles de seguridad para enfrentar y atender la amenaza a la seguridad interior y solo hasta entonces, se inicie el procedimiento para emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior y las medidas que se aplicarán para atender dicha afectación y determinar las responsabilidades penales, administrativas y políticas necesarias.

Coincidencias de las iniciativas consideradas en este dictamen. Esta Comisión una vez analizadas las iniciativas ha determinado que las mismas tienen grandes coincidencias, todas ellas consideran a la seguridad interior como una función del Estado que debe desarrollarse de manera coordinada entre todos los niveles de gobierno, incluyendo a las autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas, para que en el ámbito de la colaboración den la seguridad a los habitantes de este país.

Se encuentran coincidencias también en que rechazan tajantemente la asignación de tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, rechazando así la usurpación de atribuciones y por consiguiente la violación a lo establecido en el artículo 21 Constitucional. Es decir, existe consenso en que en ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que en su caso lleven a

cabo las Fuerzas Armadas, se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.

Concuerdan en el establecimiento de principios que deberán regir la actuación de las Fuerzas Armadas cuando intervengan en acciones de seguridad interior, de entre las que destacan los principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad, gradualidad, legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y sus garantías.

De igual manera parece haber un consenso respecto a que el procedimiento que dé paso a las acciones de seguridad interior, debe ser expedito, pues en todos los casos coinciden en que la agilidad permitirá hacer frente de mejor manera a las amenazas que pongan en riesgo a los pilares fundamentales del Estado; actuación que sobra decir, debe justificarse en todas las iniciativas mediante una valoración de las condiciones que llevan a solicitar la colaboración de fuerzas federales y en su caso, Fuerzas Armadas, misma que puede ser solicitada a nivel estatal o federal, y que en ningún caso puede realizarse para protesta social o política.

Otro de los elementos importantes que destacan en las iniciativas tiene que ver el establecimiento de compromisos y obligaciones para todas las autoridades que se involucren en actividades de seguridad interior, lo que genera un mayor compromiso para devolver las cosas al estado anterior de la afectación, así como para provocar el fortalecimiento en la capacidad de las instituciones que deban encargarse posteriormente de mantener la paz y el orden público en las zonas que se hubieren visto afectadas.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. De la competencia del Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su parte orgánica, señala cuales son los poderes que integran nuestro sistema federal, de entre los que se desprende el Poder Legislativo, depositado en el Congreso de la Unión, como órgano constitucional encargado de la elaboración de las leyes en el ámbito federal en todas aquellas materias que se consideran trascendentales para el desarrollo nacional.

La calificación de qué materias se consideran trascendentales para el país y por lo tanto tienen carácter de reservadas como facultades del Congreso de la Unión, se encuentra contenida en el artículo 73 Constitucional, dentro de esas materias se encuentran diversas facultades destinadas a la protección de la soberanía nacional como la declaración de guerra, el sostenimiento de las instituciones armadas de la Unión y la seguridad nacional, por tratarse de temas fundamentales para la salvaguarda del Estado Mexicano.

Este último tema, fue incluido en la Constitución hasta hace relativamente poco tiempo como respuesta a los nuevos retos que el Estado debía enfrentar en materia de seguridad, siendo en el año de 2004, cuando el Constituyente permanente aprobó la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional, quedando de la siguiente manera:

> "Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
> (...)
> XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.
> (...)

Es importante señalar que, durante la discusión de esta modificación constitucional, los legisladores consideraron que no debía definirse qué se entendía como seguridad nacional, ya que, al tratarse de un tema de interés supremo, tenía un carácter dinámico, por lo que no debía ser definido en el ordenamiento constitucional, sino que debía trasladarse a la legislación secundaria, a fin de generar un concepto que atendiera a necesidades y realidades concretas de México.

Por ello, en el año 2005 se legisló en la materia y se expidió la Ley de Seguridad Nacional, que contenía supuestos y procedimientos claros que en aquel momento daban certeza y seguridad a la ciudadanía, al describir cuáles son las amenazas a la Seguridad Nacional, y de esa manera, establecer un control para que el Estado respetara los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos.

De lo anterior, deben destacarse los siguientes elementos:

- Que la seguridad nacional es un tema de interés supremo,

- Que como interés supremo de la nación, el Constituyente permanente otorgó al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de seguridad nacional,
- Que el concepto de seguridad nacional es un concepto de carácter dinámico,
- Que es obligación del Estado actualizar los conceptos de seguridad nacional para atender a las necesidades y realidades concretas de México.

Tales elementos son de vital importancia para comprender que cuando se trata de la materia de seguridad nacional, ésta no debe entenderse como un tema estático e inamovible, sino todo lo contrario, puesto que los constantes cambios globales obligan a los Estados a mejorar y actualizar sus instrumentos legales para hacerle frente a los nuevos retos que se le presentan, ya que de no atenderse con oportunidad, puede ponerse en riesgo la soberanía del Estado Mexicano.

El Estado está obligado a renovar, conforme a las necesidades y realidades de su sociedad, los marcos normativos existentes para garantizarle a la población las condiciones mínimas que les permitan desarrollarse a plenitud.

Bajo esa óptica se analizan las iniciativas objeto de este dictamen, toda vez que se observa que, a pesar de que la seguridad interior no es lo mismo que la seguridad nacional o que la seguridad pública, sí guarda ciertas similitudes con la primera, pues comparten un origen que tiene que ver con la preservación de la soberanía nacional mediante la defensa exterior e interior de la población, el territorio y el gobierno que componen al Estado Mexicano.

De tal forma que, aunque no se habla de las mismas ramas, si se habla de una materia común que es la seguridad nacional, lo cual se comprueba con la clasificación que se realiza de amenazas a la seguridad interior, que son, todos aquellos supuestos contenidos en los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, y cuyo elemento diferenciador es el origen de las mismas, pues en el caso a estudio, ocurre al interior del territorio nacional.

Por lo tanto se considera que el Congreso de la Unión sí puede legislar en torno a la seguridad interior, pues la misma es una rama de la seguridad nacional, que por sus características propias, debe ser legislada en un instrumento distinto a la Ley de Seguridad Nacional, pero que se nutre de los conceptos y procedimientos ya descritos en dicha Ley, pues su origen es el mismo.

Asimismo, debe considerarse que, el Congreso de la Unión está facultado para legislar, pues el mismo artículo 73, en su fracción XXXI establece lo siguiente:

> "Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
>
> XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión."

De donde se colige que la fracción XXXI establece con meridiana claridad que el Congreso tiene lo que se conoce en la doctrina como la "facultad implícita" que el Constituyente le otorga al Congreso para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades que la propia Constitución concede a los Poderes de la Unión.

Dicha disposición es el instrumento constitucional que provee los mecanismos que como legisladores, nos permiten hacer cumplir lo consagrado en ella.

En ese sentido, se considera que si el artículo 89, fracción VI Constitucional establece como facultad del Presidente de la República el disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior de la Federación, el Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXXI del artículo 73, puede expedir las leyes necesarias que hagan efectiva la atribución que la Constitución le otorga al Presidente de la República.

Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, las siguientes tesis jurisprudenciales:

> "Época: Novena Época, Registro: 170675, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 48/2007, Página: 1080
>
> **ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES PARA CREARLOS.** Conforme al artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expedida por el Congreso de la Unión, es el ordenamiento mediante el cual se distribuyen los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, y en ella se definen las bases generales de creación

de las entidades paraestatales, dividiendo la Administración Pública Federal en centralizada y paraestatal. Ahora bien, de la interpretación relacionada de dicho precepto constitucional con el diverso artículo 73, fracción XXX, de la Ley Fundamental, que otorga al Congreso de la Unión la atribución de expedir las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades que la Constitución concede a los Poderes de la Unión, se concluye que en el ejercicio de esas facultades, conferidas de manera amplia al Congreso de la Unión, éste puede crear aquellas dependencias u órganos de la Administración Pública Federal que estime necesarios, pues su facultad no se agota o limita a la expedición de la Ley Orgánica relativa.

Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 48/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete."

"Época: Décima Época, Registro: 2000202, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. XXII/2012 (10a.), Página: 649

CLÁUSULAS HABILITANTES. SU FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL RESIDE EN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXX, Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXI/2003, esgrimió las razones por las cuales se justifica que el Poder Legislativo dote a funcionarios ajenos a él, principalmente insertos en la Administración Pública, de atribuciones de naturaleza normativa (cláusulas habilitantes) para hacer frente a situaciones dinámicas y altamente especializadas. Asimismo, precisó que tales cláusulas tienen la naturaleza jurídica de actos formalmente legislativos por medio de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado para regular una materia concreta y específica precisando un cuadro o marco de acción definido en donde aquél se deberá desenvolver. En ese sentido, la atribución de dichas facultades normativas a través de un acto formalmente legislativo tiene su fundamento en los artículos 73, fracción XXX, y 90 de la Ley Fundamental que prevén, por una parte, la facultad (residual e implícita) del Congreso de la Unión para expedir toda clase de leyes que estime necesarias con el objeto de hacer efectivas las facultades que se le atribuyen y que le son propias, e incluso, para hacer efectivas todas las demás facultades concedidas por el mismo texto constitucional a los Poderes de la Unión y, por otra, que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el mismo Congreso, que regulará la distribución de los negocios del orden administrativo y definirá las bases generales de creación de los órganos administrativos.

Amparo en revisión 753/2011. Operadora Cantabria, S.A. de C.V. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.
Nota: La tesis P. XXI/2003 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 9."

Así, la atribución del artículo 73, fracción XXXI y lo dispuesto en los artículos 89, fracción VI y 129 Constitucionales, deben analizarse de manera conjunta, pues en ellos se encuentra la facultad exclusiva del Presidente de la República, de comandar las fuerzas armadas en la defensa de la seguridad interior.

Uno de los pocos juristas en entrar al estudio de la figura de la seguridad interior a la luz de lo dispuesto en los artículos citados fue Felipe Tena Ramírez, quien analizó el artículo 89, fracción VI Constitucional y lo establecido en el diverso 129, mismo que dicho sea de paso, se mantiene inalterado desde la Constitución de 1857, pero que durante su proceso de aprobación, fue objeto de amplia discusión que nos permite entender a qué clase de actividades se referían los constituyentes cuando referían a las que pueden realizar los militares en tiempo de paz, así como cuál es el alcance de la facultad establecida en el artículo 89, fracción VI.

Es en la figura del Ejecutivo donde concurre constitucionalmente un doble carácter, el de Jefe de Gobierno, en términos de lo dispuesto en los artículos 80 y 81, que establecen que el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en una persona que debe ser electa de manera directa por los ciudadanos mexicanos, lo que le otorga el máximo grado de autoridad civil.

Y por otra parte, es también Jefe de Estado, en términos de lo dispuesto en el artículo 89 fracción VI Constitucional, al depositarse en él, el mando supremo de las fuerzas armadas para preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Por lo que, si las circunstancias del país lo exigen, el Presidente de la República como máxima autoridad civil y como Comandante Supremo, puede invocar el auxilio de las fuerzas armadas en términos de lo dispuesto en el referido artículo 89, fracción VI, sin que ello se contraponga a lo dispuesto en el artículo 129 Constitucional.

Entonces basta con refrendar que es el Presidente de la República, quien como máxima autoridad civil y por disposición del artículo 89, fracción VI Constitucional, está facultado para preservar la seguridad interior mediante el despliegue de las fuerzas armadas, en protección al orden público y la paz social, entendidos como derechos fundamentales de nuestra sociedad; por todas estas consideraciones podemos afirmar que es facultad del Congreso de la Unión, legislar en materia de Seguridad Interior.

SEGUNDA. De la seguridad como valor básico del bienestar humano. La seguridad, como "meta imperiosa de toda comunidad, Estado-Nación o comunidad internacional"[1], es un concepto en constante redefinición, de acuerdo al contexto histórico, social, económico, político y cultural en el que se desarrolle.

Desde esta perspectiva, el contexto actual por el que atraviesa la seguridad en México, es cada vez más complejo; ante la emergencia de amenazas críticas dominantes como el crimen organizado y el narcotráfico que ponen

[1] Oswald Spring. Úrsula *Historia de la seguridad humana y reconceptualización de la seguridad* disponible en: http://investigacion.politicas.unam.mx/semprospectiva/docs/lseguridadhumanacdhdf/seguridadhumanacdhdf.pdf p.49, última fecha de consulta 23 de noviembre de 2017.

en riesgo la seguridad tanto de las personas como de las instituciones que conforman el Estado-Nación mexicanos.

A lo anterior, se suman fenómenos de carácter internacional como la globalización, la intensificación de los flujos migratorios trasnacionales, el terrorismo, armas nucleares, bacteriológicas, el cambio climático entre otros, elementos que tornan más complejo aún el tema de la seguridad en el mundo.

La emergencia de estas nuevas amenazas pone en riesgo la seguridad, estabilidad, paz, desarrollo y bienestar del Estado en sus tres dimensiones básicas: población, territorio y gobierno, generando igualmente una vulneración en los tres niveles de seguridad del Estado Mexicano, tales como la seguridad nacional, la interior y pública.

Por ello, y ante estos nuevos escenarios adversos, es imprescindible innovar las estrategias de seguridad del Estado Mexicano, a fin de hacer frente a las amenazas y peligros que están afectando la vida y el desarrollo armónico tanto de la población como de las instituciones que componen la nación mexicana.

No obstante, si bien es cierto que en los últimos años se han implementado cambios trascendentales en los modelos de seguridad nacional, interior y pública del Estado Mexicano, éstos continúan presentando deficiencias propias de la complejidad y la velocidad con que las amenazas se están trasformando y adecuando a los nuevos modelos de seguridad a fin de vulnerarlos.

Lo anterior se evidencia en la percepción de inseguridad que la población tiene de su entorno, que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, impacta en el 61.1% de la población de 18 años y más, que considera a la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa. Asimismo, el 74.3% de la población considera a su entidad federativa insegura y en el caso de los municipios y delegaciones, como el ámbito más próximo a las personas, se registra un aumento en la percepción de inseguridad que incrementó de 63% en 2013 a 66.3% durante 2017.

Por ello, esta Comisión considera que los actuales sistemas de seguridad nacional y pública resultan insuficientes para salvaguardar el ámbito de acción en el que interactúan población e instituciones, lo que se agrava ante la ausencia de un marco regulatorio específico en materia de seguridad interior.

Consecuentemente, valoramos como indispensable e impostergable la discusión sobre la expedición de una Ley de Seguridad Interior como complementaria de la Ley de Seguridad Nacional, a fin de generar un marco regulatorio acorde a las nuevas realidades y retos que enfrenta la población y las instituciones del Estado Mexicano.

En el mismo sentido, reiteramos que la seguridad como un concepto en constante redefinición, que se construye con base en procesos sociales, políticos, económicos e incluso culturales, no puede permanecer estático dentro del marco jurídico que sustenta la seguridad en México, motivo por lo cual una Ley de Seguridad Interior responderá a las trasformaciones sociales y a la evolución de las amenazas, que obligan a replantear el concepto mismo de seguridad nacional.

Cuando hablamos de seguridad interior, no nos referimos a un concepto de reciente creación, desde hace 196 años forma parte de la legislación nacional y encuentra su origen en la época inmediata posterior a la independencia mexicana, siendo uno de los resultados de un periodo marcado por una crisis económica y política entre España y la Nueva España, que culminaría con la consumación de nuestra independencia el 27 de septiembre de 1821.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 se convertiría en el primer instrumento legal del México independiente en incluir el término "seguridad interior", señalando en su artículo 110 lo siguiente:

> "Artículo 110. Las atribuciones del presidente son las que siguen:
>
> X. Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra, y de la milicia activa, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación."

Posteriormente, dicho término siguió incluyéndose como una de las atribuciones del Presidente de la República, apareciendo en las Leyes Constitucionales de 1836 y en el Proyecto de reforma 30 de junio de 1840; siendo modificado en el Primer proyecto de Constitución (Constitución

Política de la República Mexicana) de 25 de agosto de 1842[2], pero reapareciendo en la Constitución Política de la República Mexicana de 16 de junio de 1856, replicándose en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1857; y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige actualmente, en el artículo 89, fracción VI.

La doctrina, hasta antes de las recientes intervenciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, había sido vaga al referirse a dicha fracción, limitándose a señalar que esta atribución era congruente con la defensa del Estado mexicano, pues "la seguridad de México requiere que existan Fuerzas Armadas bajo un solo mando, y éste la constitución lo otorga al jefe del Estado mexicano, porque él tiene la obligación de velar por la paz y el orden dentro del territorio nacional y de organizar su defensa frente a cualquier agresión extranjera."[3]

En ese sentido, el Titular del Ejecutivo Federal ha hecho uso de las facultades que le confiere el artículo 89 fracción VI de la Constitución Política de los

[2] Artículo 95. Corresponde al Presidente de la República: (...) XVII. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra, conforme a los objetos de su institución.
[3] Rabasa, Emilio O., comentario al artículo 89 constitucional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada. 11a. ed., México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, t. II, p 904.

Estados Unidos Mexicanos, consistentes en preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Atribución que ha sido utilizada desde los noventas por el Ejecutivo Federal para proteger a la población y a las instituciones democráticas basado en una serie de tesis jurisprudenciales publicadas en sesión de 27 de marzo de 1996, de entre las que destaca la siguiente:

> Época: Novena Época Registro: 192080 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, abril de 2000 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 38/2000 Página: 549
>
> **EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).** La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación

en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número

XXIX/96), se publique como jurisprudencial, con el número 38/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.

Dicha jurisprudencia resuelve el 5 de marzo de 1996, la acción de inconstitucionalidad presentada por diversos legisladores respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en el apoyo a las autoridades locales; resolución que se realiza contextualizando el problema en razón de la complejidad jurídica, política y social que prevalecía y prevalece en nuestro país, al realizar una interpretación histórica y teleológica del artículo 129 Constitucional.

Así, concluyó que el ejército podía actuar en auxilio de las autoridades civiles, argumentando que la intención del legislador se dirigió a establecer que cuando fuera necesario contar con el auxilio de las Fuerzas Armadas, éstas podían actuar en apoyo a las autoridades civiles, pero solo a petición expresa de ellas y sin usurpar su esfera de competencia, en congruencia con lo establecido en el primer párrafo del artículo 16 constitucional.

De la misma forma señaló que debía realizarse una interpretación armónica de los artículos 89, fracción VI y 129, puesto que este último artículo no podía interpretarse en forma restringida, ya que la actuación de las Fuerzas

Armadas no estaba condicionada únicamente al estallido de una guerra o a una suspensión o restricción de derechos y sus garantías, ya que al ser fuerza pública, estaba constitucionalmente facultada para salvaguardar la seguridad interior.

Reiterando que las Fuerzas Armadas no podían actuar automáticamente, sino en estricto auxilio a las autoridades civiles y siempre y cuando se solicitara expresamente su apoyo, para que posteriormente y una vez cumplido ese requisito, las operaciones en las que intervinieran, se subordinaran a las autoridades civiles, ajustándose en todo momento al marco jurídico nacional.

Con la finalidad de evitar llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que pusiera a la sociedad en grave peligro o conflicto, por lo que al no caer en los supuestos del artículo 29 Constitucional, se hacía imperativo respetar las garantías individuales en todo momento, ya que cualquier interpretación contraria a lo anterior, atentaría contra la finalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas, que es el mantenimiento de la paz y el orden público.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado y ha enfatizado la necesidad de garantizar el derecho de seguridad de las personas en estricto apego a los derechos humanos y las garantías individuales como se señala en el Caso Montero Aranguren y otros vs Venezuela, en el que se señala la obligación de los Estados de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones al derecho a la vida, lo que implica por una parte que ninguna persona sea privada de la misma arbitrariamente (obligación negativa), y por otra, la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción mediante la garantía a los individuos del pleno y libre ejercicio de sus derechos humanos.

> "En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a

quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción."[4]

Por otra parte, en el contexto internacional hasta la primera mitad del siglo XX, la seguridad nacional era comprendida por la mayoría de los Estados como la defensa de la Nación frente a las amenazas externas; sin embargo, eventos globales como la Guerra Fría, las amenazas nucleares, el terrorismo, la cibercriminalidad y las amenazas epidemiológicas, obligaron a las Naciones a examinar la concepción tradicional de la seguridad nacional.

Dado que tales amenazas han crecido, se han diversificado y han alcanzado mayor infiltración en la sociedad debido a la globalización y al desarrollo tecnológico, haciendo patente la necesidad de que los Estados Soberanos colaboren unos con otros en la erradicación de los males que ahora nos aquejan como sociedad global, en ese sentido, en las organizaciones internacionales se han adoptado medidas y compromisos para hacer un frente común ante dichas amenazas.

[4] Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=331 Punto 66. Última fecha de consulta: 23 de noviembre de 2017.

Como instrumentos recientes y relevantes que engloban dichos compromisos, podemos mencionar la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, así como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, entre otros, los cuales son una muestra del compromiso adoptado por las naciones frente a los peligros multidimensionales e internacionales, particularmente en lo que respecta a la defensa de la Seguridad Nacional.

Es así que se tenía que actualizar el concepto de seguridad nacional, entendido como la suma de la totalidad de recursos y medios de los cuales puede disponer un Estado para alcanzar sus objetivos nacionales, así como el establecimiento de las bases y estrategias con las que debe contar para su efectiva materialización.

Tomando acciones de manera inmediata y directa para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado que garantizara la preservación de la soberanía e independencia nacionales, la defensa del

territorio, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.

Como premisa para que la seguridad nacional fuera una realidad, era fundamental mantener vigentes la soberanía e independencia, garantizar la unidad nacional, preservar el orden constitucional, construir instituciones democráticas y preservar la democracia fundada en el desarrollo político, social y económico del país y de sus habitantes y finalmente actuar con oportunidad para anular amenazas y riesgos.

Para lograr sus objetivos era necesaria la planeación en materia de seguridad, estableciendo prioridades, ajustes de las estrategias y el enfoque de esfuerzos, para lograr resultados óptimos en el ámbito de la prevención, neutralizando peligros y reducción de impactos.

Por ello, en México el Congreso de la Unión, desde el año 2002 inició los trabajos para establecer el marco base de una política encaminada a la defensa de la seguridad nacional. En esa fecha, desde esta Cámara se aprobó una reforma constitucional que le otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de seguridad nacional.

No obstante, la Seguridad Nacional no podía garantizarse sin competencias claras para las instituciones que debían preservarla, lo que llevó a la implementación de las figuras necesarias para robustecer las instituciones y las acciones del Estado mexicano en materia de Seguridad Nacional; por ejemplo, requisitos y evaluaciones previas para garantizar la integridad, rectitud y honradez del personal que integra las instancias de Seguridad Nacional.

Se establecían las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea.

Tales acciones estaban sujetas a una temporalidad, determinada y relativa a una época y lugar, en el ámbito de su acción -que es el Estado Nación- protegiendo los compromisos e intereses nacionales e internacionales considerando a México como un actor global, por ello la necesidad de adecuar el concepto y su implementación acorde a las demandas actuales.

Todo lo anterior llevó a la materialización de la Ley de Seguridad Nacional en 2005, que fue aprobada por amplísimo consenso y a la fecha es el instrumento legal que sirve de base para la integración y coordinación entre las autoridades encargadas de la defensa nacional. Así, por primera vez en México se definió en un instrumento especializado qué se entendía por seguridad nacional.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en su artículo 3º, se entiende por seguridad nacional a todas aquellas acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

- La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
- La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
- El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

- El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y
- La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Este avance representó sin lugar a dudas un parteaguas en la manera en que el Estado mexicano le hacía frente a sus amenazas, particularmente respecto de aquellas que tenían que ver con la desestabilización de sus pilares fundamentales.

Por vez primera se incluían términos novedosos como los de riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. En lo que respecta a los primeros, la Ley en la materia no ofrece una definición, debido a que, por su naturaleza y su carácter temporal, requieren de una actualización constante conforme a la realidad social, económica e inclusive política, entre muchas otras variantes, las cuales influyen directamente en la determinación y vigencia de un riesgo.

En consecuencia, los riesgos son incluidos anualmente en la Agenda Nacional de Riesgos, que de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, debe tomar en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa para la Seguridad Nacional que de él deriva.

La Agenda es presentada por el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y es aprobada por este Consejo, quien además realiza el seguimiento de la misma.

Por otra parte, las amenazas se definen como los "fenómenos intencionales generados por el poder de otro Estado, o por agentes no estatales, cuya voluntad hostil y deliberada pone en peligro los intereses permanentes tutelados por la Seguridad Nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado"[5], de acuerdo al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Al respecto, la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 5, señala cuales son estas amenazas, mismas que clasifica de la siguiente manera:

[5] Disponible en: http://www.cisen.gob.mx/snAmenazasRiesgos.html última fecha de consulta: 02 de abril de 2017.

I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;

VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;

VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

Del análisis que se realiza a su contenido se advierte que los conceptos señalados permiten hacerle frente a una amplia gama de actividades ilícitas en aras de garantizar la seguridad nacional, así como para preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano y de sus instituciones.

En este sentido, por su redacción, las hipótesis señaladas pueden aplicarse al ámbito interior o exterior, además de que se enfocan en prevenir y atender todo acto cuya finalidad implique la desestabilización de los pilares fundamentales del Estado Mexicano, en lugar de enfocarse en listar un sinnúmero de conductas, lo que le da una vigencia atemporal a la legislación, de acuerdo a las exigencias de un mundo globalizado.

Lo anterior sin dejar de acotarse a los límites constitucionales, particularmente en el pleno respeto a los derechos humanos, ya que permite a la población tener certeza de los actos que puede realizar la autoridad,

mismos que además deberán sujetarse a las leyes en la materia, constituyendo así una garantía de legalidad. De esta forma, al haberse incluido dicho catálogo en el artículo 5, se suprimió cualquier ápice de discrecionalidad.

Tal situación constituye un avance en materia de Seguridad Nacional, pues se ve materializado el respeto irrestricto a los derechos humanos y sus garantías.

Ahora bien, no obstante que el artículo 5 regula efectivamente las amenazas a la Seguridad Nacional, surge la necesidad de establecer un procedimiento idóneo que permita que las autoridades encargadas de la defensa nacional cuenten con los elementos y herramientas necesarias para atender dichas amenazas cuando estas tienen su origen en territorio nacional, pues no debe dejarse de lado que ellas también son consideradas de Seguridad Nacional a pesar de que son causadas por un agente interno.

De la idea anterior surge la concepción moderna de seguridad interior, como la parte de la Seguridad Nacional referente al conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados a garantizar la vigencia del orden

constitucional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la Seguridad Nacional.

Al considerarse a la seguridad interior como parte de la Seguridad Nacional, se hace imperativo regular qué procedimientos y protocolos de acción habrán de tomarse cuando las conductas establecidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional sean de orden interno, a través de mecanismos ágiles y claros que distribuyan correctamente las atribuciones y facultades de las autoridades que habrán de intervenir, atendiendo a la excepcionalidad del evento para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.

En ese sentido, no debe de perderse de vista que la seguridad interior obedece al mantenimiento de la condición de estabilidad interna, paz y orden público, cuya garantía es una función que está a cargo de los tres órdenes de gobierno.

Es una función del Estado Mexicano que abona a la Seguridad Nacional, tendiente a garantizar el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.

Por tanto, la Seguridad Interior tiene como objetivo tutelar la protección del orden constitucional, el Estado de Derecho, así como de la correspondiente observancia de las mismas; luego entonces, el orden interno implica tanto al orden constitucional como a las instituciones democráticas de gobierno, garantizar la protección de los derechos humanos y las garantías individuales.

Quienes integramos esta Comisión consideramos que las iniciativas de Ley de Seguridad Interior, motivo de este dictamen no son omisas a las reformas antes referidas en materia de seguridad; fortalecen la coparticipación de todos los actores e instituciones gubernamentales que por su naturaleza deben participar en las labores de seguridad, tal es el caso de las Fuerzas Armadas, cuya formación y adiestramiento tiene dentro de sus misiones principales defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior.

De esta manera, estimamos que la participación del ejército en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del Estado, es necesaria ante los nuevos escenarios complejos de inseguridad por los que atraviesa la nación.

Los razonamientos hasta aquí vertidos nos permiten arribar a que la génesis del Derecho como regulador social conlleva a su dinamismo, los ordenamientos jurídicos deben ser actualizados, sin dar cabida a ninguna laguna jurídica. La sociedad ha cambiado, factores exógenos y endógenos han hecho que el contexto social actual sea distinto al que imperaba antes de que las amenazas a la seguridad interior crecieran y se multiplicaran.

Ante tal panorama, es imperativo que exista certeza jurídica, ninguna persona debe estar expuesta frente a la ley, toda posible acción u omisión debe tener un supuesto jurídico, esa es una finalidad de nuestro estado de Derecho.

Cuando la coyuntura social rebasa la ley, es obligación de los legisladores su actualización, y si no existe ordenamiento jurídico que regule las conductas que afectan la convivencia social, éste debe ser creado.

Tenemos que reconocer que los constantes crecimientos de las amenazas internas han puesto en vulnerabilidad a algunas instituciones del Estado, situación que no puede enfrentarse en algunos casos con las fuerzas civiles con que se cuenta y, aceptar ese hecho es tener la responsabilidad de emprender acciones que sean lo suficientemente aptas para controlar la situación.

Para decirlo claro, el problema de la seguridad interior en áreas geográficas determinadas, ha rebasado a la autoridad civil, lo que justifica la necesidad de establecer medidas extraordinarias en tanto haya condiciones para retornar a la normalidad. No obstante, es preciso advertir que las acciones de seguridad interior no implicarán en todos los casos la intervención de las Fuerzas Armadas.

Aun cuando la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades locales ha coadyuvado al restablecimiento de la Seguridad, queda pendiente en la agenda nacional dar certeza a la autoridad y la población del marco procedimental en el que las Fuerzas Armadas prestan su apoyo a las autoridades locales, lo que hace indispensable e impostergable la discusión

de una Ley de Seguridad Interior, como complementaria de la Ley de Seguridad Nacional.

Es deber de los tres Poderes de la Unión, buscar crear los instrumentos legales que den pie a mecanismos institucionales que permitan preservar la tranquilidad y armonía social con pleno respeto a nuestra Constitución, así como a los derechos humanos y sus garantías consagrados en ella.

A nadie escapa que la estrategia de erradicación del crimen organizado hace necesaria la efectiva articulación de todas las fuerzas de seguridad con las que cuenta el Estado mexicano en sus tres niveles.

Resulta necesario dar el marco legal adecuado y definir claramente qué se entiende por seguridad interior para que todas las autoridades encargadas de nuestra seguridad cuenten con mecanismos claros, ágiles y eficaces en su mantenimiento, ante el tamaño de las amenazas que como sociedad enfrentamos y que hace necesario que sean todas las fuerzas quienes las enfrenten.

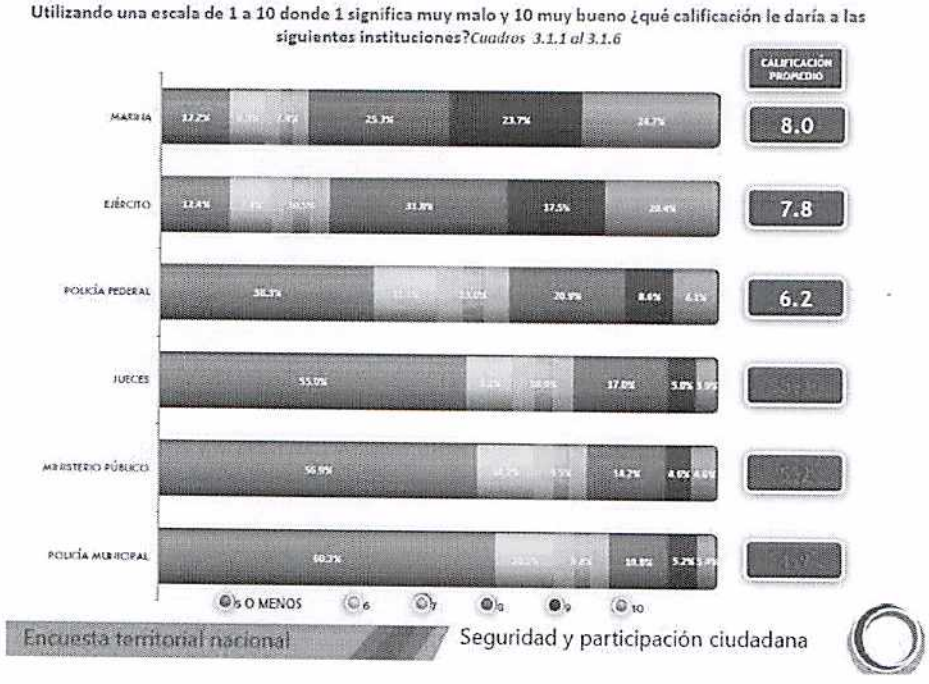
Es precisamente en el marco de la definición de seguridad interior y del fortalecimiento y existencia de las instituciones desde donde debe ser normada la actuación de las Fuerzas Armadas, para que se les mantenga como *ultima ratio* o último recurso de la Federación, ya que resulta innegable que su participación no debe prolongarse en el tiempo sino hasta que la amenaza haya sido controlada.

Abordar ahora el problema y erradicarlo con toda la fuerza de nuestras instituciones, permitirá que como sociedad atendamos otras tareas aún pendientes en materia de seguridad, para que las Fuerzas Armadas no constituyan el único recurso que sea capaz de hacerle frente a dichas amenazas.

Actualmente, la amenaza rebasa las capacidades individuales de las autoridades, haciendo indispensable que actúen de manera coordinada hasta en tanto la misma sea neutralizada.

Aseveración que se corrobora con datos de la encuesta "Seguridad y Participación Ciudadana, encuesta territorial nacional" de diciembre de 2016, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de

Cámara de Diputados, a través de la cual se califica a las instituciones que participan en labores de seguridad, de donde se desprende que aquellas con mejores calificaciones respecto a su actuación así como a la confianza que generan, son la Marina y el Ejército, mientras que las que reprueban son la policía municipal, el ministerio público y los jueces[6]:



[6] Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-territorial-nacional-Seguridad-y-Participacion-Ciudadana_última fecha de consulta: 05 de febrero de 2017.

Así como con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto a la percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia[7], de donde se desprende que la Marina y el Ejército, son las instituciones mejor calificadas por la población respecto a la efectividad de su trabajo y al nivel de confianza que le inspiran a la población en general.

Los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) sobre percepción del desempeño de la policía Preventiva Municipal, Estatal, Federal, Gendarmería Nacional, Ejército y Marina, para prevenir y combatir la delincuencia, correspondiente a diciembre de 2016, de la que se desprende que la población percibió el desempeño de las diversas instituciones policiales en el rango "muy o algo efectivo" en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia, con los siguientes porcentajes: Marina 84.2%, Ejército 81.7%, Gendarmería Nacional 69.4%, Policía Federal 63.5%, Policía Estatal 49.3% y Policía Preventiva Municipal 39.8%.[8]

[7] Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/percepciondes última fecha de consulta: 05 de enero de 2017.
[8] Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_01.pdf última fecha de consulta: 05 de enero de 2017.

En tales circunstancias es necesario hacer consciencia de que la manera más efectiva de hacer frente a los riesgos de seguridad interior es abordar el problema reconociendo las carencias actuales y corrigiéndolas mediante la creación de un marco legal que establezca límites y competencias bien definidas para todas las autoridades involucradas, que permita que la colaboración entre las Fuerzas Federales, Estatales y Municipales se realice mediante un procedimiento claro y respetuoso de los derechos humanos hasta en tanto se erradique la amenaza a nuestras instituciones.

TERCERA. De los resultados de los trabajos realizados por la Comisión en torno a la expedición de una Ley de Seguridad Interior. Como parte de los trabajos en la elaboración de este dictamen, la Comisión de Gobernación, en colaboración con otras comisiones de Cámara de Diputados y del Senado de la República, así como con distintos órganos del Congreso de la Unión, realizó distintos foros y reuniones de trabajo convocando a los sectores interesados en dar su punto de vista en el tema.

Derivado de la relevancia que el tema de seguridad interior guarda para la vida nacional y dadas las coincidencias de las iniciativas que fueron presentadas en Cámara de Diputados, Senado de la República y Comisión

Permanente, las Mesas Directivas de ambas Cámaras acordaron realizar reuniones de trabajo, invitando a legisladores, especialistas y servidores públicos relacionados al tema en aras de que con su contribución se abonara al proyecto de expedición de una Ley de Seguridad Interior, mismas que se realizaron durante las siguientes fechas:

1. Reunión de trabajo, Senado de la República, Salón de la Comisión Permanente, 10 de enero de 2017.

Ponentes:

- Senador Pablo Escudero Morales.
- Diputado César Camacho Quiroz.
- Senador Roberto Gil Zuarth.
- Senador Miguel Barboza Huerta.
- Diputado Jorge Ramos Hernández.
- Especialista Dr. Jorge Islas López.

2. Reunión de trabajo y coordinación en torno a la expedición de la Ley de Seguridad Interior, Cámara de Diputados, Auditorio Norte, 17 de enero de 2017.

Ponentes:

- Dr. José Elías Romero Apis, especialista.
- Dr. Elías Huerta Psihas, especialista.
- Dra. María Leoba Castañeda Rivas, especialista.
- Dr. Javier Oliva Posada, especialista.
- Dr. Jorge Luis Chabat Madrid, especialista.
- Juan Ibarrola, especialista.
- Dr. Juan Velásquez, especialista.

Representantes del Senado:

- Senadora Cristina Díaz Salazar.
- Senador Ernesto Gándara Camou.
- Senador Ricardo Barroso Agramont.

3. Reunión de acercamiento y reflexiones: la seguridad interior desde la perspectiva de los Derechos Humanos, Senado de la República, Sala de Protocolo de Mesa Directiva, 26 de enero de 2017:

Ponentes:

- Lic. Guillermo Valdés Castellanos, especialista.
- Dr. Alejandro Madrazo Lajous, especialista.
- Mtro. Santiago Aguirre Espinoza, especialista.
- Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca, especialista.
- Mtra. Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Republica, en su representación asistió el Dr. Juan Pablo Pampillo Baliño, Titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos.
- Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- Lic. Rubén Pérez Sánchez, Director General Jurídico en representación del Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
- Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Representantes de Cámara de Diputados:

- Diputada Martha Tamayo Morales.
- Diputada Sofía González Torres.

4. Reunión de acercamiento entre Legisladores del Congreso de la Unión, particularmente de los integrantes de la Comisión de Gobernación y los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, 07 de febrero de 2017.

5. Reunión con miembros de la Sociedad Civil en torno a la expedición de una Ley de Seguridad Interior, 08 de febrero de 2017.

Asistentes:

- Mtra. Elena Morera Mitre, Presidenta de la Organización de la Sociedad Civil, Ciudadanos por una Causa en Común A.C.
- Orlando Camacho Naceta, Director de México SOS, OSC.
- Francisco Rivas Rodríguez, Director del Observatorio Nacional Ciudadano.
- Alejandro Hope, especialista en Seguridad Pública.

6. Reunión con miembros de la Sociedad Civil en torno a la expedición de una Ley de Seguridad Interior, 21 de febrero de 2017:

Asistentes:

- Mtra. Maite Azuela, Organización Politóloga Analista, ONG Dejemos de Hacernos Pendejos.
- Lic. Juan Francisco Torres Landa, Fundación México Unido contra la Delincuencia A.C.
- Lic. Edgar Ortiz, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
- Lic. Luis F. Fernández, Participando por México.

7. Reunión de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, la presidencia de la Comisión dictaminadora y la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, con el Secretario de Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, 1° de marzo de 2017.

8. Reunión con la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 16 de marzo de 2017.

9. Reunión de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados y la presidencia de la Comisión dictaminadora, con Gobernadores y Alcaldes, 22 de marzo de 2017.

Asimismo, se recibió diversa documentación para ser considerada en el proceso de dictamen y análisis.

10. Carta del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, dirigida a las distintas fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara, por medio de la cual solicita se de curso al análisis y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, por considerar que el Ejército y la Marina Armada contribuyen de manera muy importante a mejorar los niveles de seguridad en su estado, en pleno respeto a la Constitución.

11. Acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Coahuila, mediante el cual solicita al Congreso de la Unión que apruebe la Ley

de Seguridad Interior, con la finalidad de que se establezcan las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las Entidades Federativas y los Municipios.

12. Oficio suscrito por el Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, por el que adjunta "Algunas consideraciones ante las propuestas legislativas que han formulado para la eventual emisión de una Ley de Seguridad Interior".

13. Memorándum sobre la Legislación en Seguridad Nacional y Seguridad Interior, elaborado por el Diputado Manuel Espino Barrientos.

14. Escrito suscrito por el Lic. Gustavo A. de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en el que anexa un decálogo con los principales temas que a su consideración deben incluirse en la dictaminación y análisis de una Ley de Seguridad Interior.

Se recibieron opiniones de las siguientes Comisiones de esta Cámara de Diputados:

- De la Comisión de Seguridad Pública, con opinión en sentido positivo, de las iniciativas de los Diputados Martha Sofía Tamayo Morales y Cesar Octavio Camacho Quiroz, por la que se expide la Ley de Seguridad Interior, así como del Diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos que reforma, adiciona y deroga disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Nacional, para que esta Comisión las analizara en conjunto con el resto de las propuestas en la materia, para la elaboración del dictamen correspondiente.

- De la Comisión de Defensa Nacional de esta Cámara de Diputados, en la que remite opinión sobre la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional del Diputado Manuel Espino.

- De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, con opinión de impacto presupuestario relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, de los Diputados Martha Sofía Tamayo Morales y Cesar Octavio Camacho Quiroz.

A lo largo de dichas reuniones de trabajo, así como de los diversos foros y documentos en la materia, se hicieron evidentes las preocupaciones de los distintos actores sociales respecto a la expedición de una legislación relativa a la seguridad interior, mismas que conviene mencionar a continuación:

a) **Del respeto irrestricto a los derechos humanos.** La principal preocupación que se externó tiene que ver con que las iniciativas en la materia no generaban una correcta protección y garantía de los derechos humanos.

Al respecto debe señalarse que, con la inscripción en el texto constitucional de los derechos humanos en 2011, el Congreso de la Unión dio un gran paso en la protección más amplia a las personas, por encima de cuestiones de procedimiento, pues, a partir de ese momento, toda autoridad se encuentra obligada a otorgar a las personas la mayor protección respecto de sus derechos humanos.

La modificación del artículo primero Constitucional no solo incluye la protección más amplia en términos de lo establecido en el propio texto

constitucional, sino que incluye todos los tratados internacionales de los que México es parte.

Cambiando el paradigma sobre cómo debe entenderse la protección a los derechos humanos en México, por lo que, a partir de esa fecha, nada puede restringirlos o suspenderlos si no se acude al mecanismo que la propia Constitución establece para tal efecto, en ese sentido, se recalca que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que favorezca más a las personas.

Cualquier legislación debe entenderse y aplicarse siempre en el sentido más amplio de protección a los derechos humanos, por lo que lejos de entender a la expedición de una Ley de Seguridad Interior como restrictiva en los derechos de las personas, la misma debe entenderse como un mecanismo adicional que permite que los derechos y sus garantías sean salvaguardados plenamente.

Complementario a esto, el jurista Peter Haberle, señala al orden público, la seguridad pública, como bienes jurídicos que constituyen el "presupuesto de los derechos fundamentales."[9]

Al aceptar tal condición se hace evidente que para que el Estado pueda garantizar a su población el libre ejercicio de sus derechos humanos, es necesario que previamente les brinde un ambiente seguro en el que imperen la paz y orden público.

De tal forma que, si la paz y el orden público son indispensables para la vida en sociedad, dichos conceptos constituyen en sí mismos derechos humanos, lo que hace necesario utilizar todas las capacidades del Estado con la finalidad de preservarlos en aras de mantener el Estado de Derecho que debe imperar en todo sistema democrático.

Ahora bien, dado que el proceder del Estado en situaciones de perturbación social siempre debe tener como fin el resguardo de los derechos humanos de la población, resulta inadmisible entender que la expedición de una ley

[9] Núñez Torres, Michael Gustavo, *Derechos Humanos, Seguridad Pública y Constitución,* México, INACIPE, 2007, p. 19.

que busca dotar a la población de seguridad, pueda interpretarse en sentido alguno que tolere o promueva la violación a los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte.

Tal idea encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en lo dispuesto en los artículos 1º y 16, así como en lo establecido en los diversos 3, 22, 28, 29 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 1, 2 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Consideramos que, mediante la expedición de una Ley de Seguridad Interior, no se atenta contra los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, ya que las medidas que en virtud de tal ordenamiento debieran tomarse, tienen como única finalidad garantizar el interés de la colectividad, para poder brindarle el nivel mínimo de bienestar social que haga posible el pleno ejercicio de sus derechos y libertades.

Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, las siguientes tesis jurisprudenciales:

"Época: Novena Época, Registro: 192083, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 35/2000, Página: 557

SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. Del análisis sistemático de los artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, así como 2o., 3o., 5o., 9o., 10, 13 y 15, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1o., 2o., 3o., 10 y 11, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 1o., 2o., 9o. y 10, de la Ley Orgánica de la Armada de México, se deduce que el Estado mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan atribuciones relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad pública, deben coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos citados, con los demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva a concluir que, jurídicamente, los conceptos de garantías individuales y seguridad pública no sólo no se oponen sino se condicionan recíprocamente. No tendría razón de ser la seguridad pública si no se buscara con ella crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus garantías; de ahí que el Constituyente Originario y el Poder Reformador de la Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente y siempre en el

estricto marco del derecho se puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos disminuir, significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios se ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y derechos. Por ello, sería inadmisible en el contexto jurídico constitucional interpretar la seguridad pública como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, lo que daría lugar a acudir a los medios de defensa que la propia Constitución prevé para corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a la que se debe otorgar la seguridad pública, debe concluirse que resulta inadmisible constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales consagradas en el Código Supremo. Por tanto, debe establecerse el equilibrio entre ambos objetivos: defensa plena de las garantías individuales y seguridad pública al servicio de aquéllas. Ello implica el rechazo a interpretaciones ajenas al estudio integral del texto constitucional que se traduzca en mayor inseguridad para los gobernados o en multiplicación de las arbitrariedades de los gobernantes, en detrimento de la esfera de derecho de los gobernados.

Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de

agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XXVI/96), se publique como jurisprudencial, con el número 35/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil."

"Época: Novena Época, Registro: 192084, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 34/2000, Página: 550

EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. LA DETERMINACIÓN DE CUÁLES SON SUS FUNCIONES, EXIGE EL ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA CONSTITUCIÓN Y, POR LO MISMO, LA COMPRENSIÓN DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, CONFORME AL RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE. Para determinar cuáles son las funciones que puede desempeñar el instituto armado, integrado por esos cuerpos, es preciso atender al estudio sistemático de la Constitución en la que destacan las garantías individuales consagradas en el título primero y, en especial, la garantía de legalidad prevista en el artículo 16, en cuanto a que no puede molestarse a las personas sino por autoridad competente; de lo que se sigue que toda autoridad, especialmente tratándose de seguridad pública, tiene dos claras limitaciones, a saber: no vulnerar dichas garantías y no rebasar las atribuciones que las leyes le confieren. Dentro de este marco es preciso que la solución de ese problema se

haga conforme a la aplicación del derecho y su estricto acatamiento, que deben respaldar todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, encontrando una fórmula equilibrada que suponga necesariamente la existencia y eficacia de mecanismos de defensa en favor de los gobernados, para así prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en éste, en particular, cuando ello sucede en el delicado campo de la seguridad pública interior.

Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XXV/96), se publique como jurisprudencial, con el número 34/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil."

De las tesis antes transcritas se colige que los conceptos de derechos humanos, sus garantías y la seguridad pública, no sólo no se oponen sino se

condicionan recíprocamente, pues no tendría razón de ser la seguridad pública si no se buscara con ella crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus derechos y garantías.

Tal discusión fue también abordada en los trabajos de seguridad interior por el maestro Cabeza de Vaca, quien señaló que el objetivo principal de la seguridad interior es la protección de los derechos humanos de las personas y en específico el derecho a la seguridad así como el derecho a la libertad, señalando además que de acuerdo a los criterios sustentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se debe garantizar el derecho a la seguridad de las personas, asimismo no se prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas con motivo de la seguridad pública haciendo énfasis en que los elementos que participan deben de respetar los derechos humanos y para ello deben estar capacitados para el manejo de éstas situaciones, por lo que su actuación es extraordinaria y limitada.

La Ley garantizará los derechos humanos, entendidos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, las cuales son indispensables para el desarrollo integral de la persona.

b) **De la militarización del país**. Otra de las preocupaciones que se hicieron patentes durante la realización de dichos trabajos tiene que ver con la militarización del país.

Al respecto, se estima que del contenido de las iniciativas analizadas puede desprenderse que las Fuerzas Armadas constituyen el último recurso del Estado para proteger el legítimo derecho del pueblo mexicano a la paz, de acuerdo a lo establecido en la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz.

En ese sentido, su participación se realiza en auxilio a las autoridades encargadas de la seguridad pública cuando estas se ven rebasadas en sus capacidades institucionales por una amenaza que sobrepasa los alcances de la seguridad pública y afecta directamente a los pilares fundamentales del Estado.

Un claro ejemplo de lo anterior se manifiesta en las labores que ejecutan las Fuerzas Armadas en conjunto con las instituciones civiles en situaciones de desastre, que no excluyen ni restringen el actuar de las segundas, por el

contrario, se basan en la estrecha colaboración de ambas para beneficio de la sociedad.

Comprender e identificar que una amenaza a la seguridad interior es distinta a una de seguridad pública, es vital para entender que la participación de las Fuerzas Armadas se realiza conforme a la Constitución y los tratados internacionales.

La idea de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior militariza nuestro país y es contraria a las obligaciones internacionales que México ha suscrito, es insostenible, puesto que el tema ya ha sido analizado por organismos internacionales, mismos que han señalado que es válido hacer uso de las Fuerzas Armadas para salvaguarda de la seguridad interior, tomando como ejemplo lo sostenido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quien ha esgrimido que:

> "El mantenimiento de la ley y el orden es una responsabilidad de las autoridades civiles. Se trata de una tarea que compete a la policía y/o a las fuerzas armadas paramilitares especialmente equipadas, organizadas y capacitadas para esas misiones, como los cuerpos de gendarmería. La función normal de las fuerzas armadas de un Estado es defender el territorio nacional

contra las amenazas externas (conflictos armados internacionales) y afrontar situaciones de conflicto armado interno (no internacional). Sin embargo, en algunas ocasiones, se requiere que las fuerzas armadas presten asistencia a las autoridades civiles para hacer frente a niveles de violencia más bajos, que pueden caracterizarse como disturbios internos y otras situaciones de violencia interna."[10]

Sin que su participación implique una absoluta libertad para sus actividades, puesto que tanto la Constitución como los propios tratados y los organismos internacionales han coincidido en que los derechos humanos son una máxima y deben protegerse en toda circunstancia.

Así, cobra relevancia el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos plasmado en la resolución del caso Cantoral Benavides Vs. Perú, en donde resolvió que "si bien determinados estados de emergencia en situaciones de alteración del orden público los Estados utilizan las Fuerzas para controlar la situación (...) resulta absolutamente necesario enfatizar en el extremo cuidado que los Estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas." Criterio que demuestra la necesidad de establecer controles y en

[10] Moloeznik, Marcos Pablo y Suárez María E., *El proceso de militarización de la seguridad pública en México,* México, Frontera Norte, 2012, Vol. 24, pp.12-144.

este caso, normas legales que delimiten el actuar de Fuerzas Armadas en este tipo de tareas.

Al respecto, en los foros realizados se hizo patente la necesidad de la intervención de Fuerzas Armadas en conflictos internos, al señalar que la misma debe entenderse dentro de su contexto, debiendo calificar los fenómenos delictivos como afectaciones a la seguridad interior en términos del artículo 89 fracción VI de la Constitución, pues el fenómeno delictivo debe entenderse en sentido gradual.

De esta manera, no podemos aplicar las mismas reglas de un primer momento en el que el daño "se orienta a la afectación de personas y bienes en lo individual", pues en ese caso "nos encontramos en el ámbito de la seguridad pública", mientras que en el incremento del fenómeno delictivo se produce una afectación "a las instituciones, poniendo en riesgo la estabilidad y soberanía nacional", por lo que "nos encontramos en el ámbito de la seguridad interior."

La participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior no implica establecer de modo alguno un estado militar, o que pudiera traer

consigo la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, al no existir un estado de excepción, y encontrarse sujetas las Fuerzas Armadas a la máxima autoridad civil que es el Presidente de la República, debiendo ajustar su actuar al irrestricto respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales suscritos por México, de entre los que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, entre otros.

Dichos instrumentos obligan a toda autoridad a respetar derechos básicos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad de su persona; a la libertad de opinión y de expresión; a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; a participar en el gobierno de su país; y particularmente, en el establecimiento de un orden social en el que sus derechos y libertades se hagan plenamente efectivos, mismos que no pueden entenderse como exhaustivamente ejercidos sin un ambiente de paz y orden público.

c) **De la sustitución de autoridades.** Algunas voces señalaron que mediante la seguridad interior se violaba lo establecido en el artículo 21 Constitucional, al dejar en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad pública, que constitucionalmente debe ser responsabilidad civil.

Al respecto debe señalarse que, con motivo de tal preocupación, se decidió incluir expresamente en el texto de Ley la prohibición de considerar dichas tareas como de seguridad pública, al instituir que las acciones en materia de seguridad interior que realice el Gobierno Federal conforme a la Ley, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades de los otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus respectivas competencias y responsabilidades, pues esta Ley únicamente regula el procedimiento para hacerle frente a las amenazas del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional cuando se trate de amenazas de origen interno.

Además de que debe hacerse énfasis en que cualquier interpretación que se aleje de lo anterior atenta contra lo establecido en el artículo 21 Constitucional, que en sus párrafos noveno y décimo señala que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y

profesional, y que el desempeño de la seguridad pública le corresponde a la Federación, las entidades federativas y los Municipios en términos de lo que la propia Constitución y las leyes en la materia establecen.

No debe olvidarse que la interpretación armónica de los artículos 89, fracción VI y 129 Constitucionales, únicamente permite que el Presidente de la República disponga de las Fuerzas Armadas para la defensa exterior y para la salvaguarda de la seguridad interior.

De ninguna manera permite que tal facultad se extienda a las tareas de seguridad pública, pues se reitera que la participación de las Fuerzas Armadas es únicamente de auxilio a las autoridades civiles, nunca en su sustitución, además de que su actuación constituye el último recurso del Estado cuando la amenaza ha sobrepasado las capacidades de respuesta de las autoridades locales.

La seguridad interior es distinta a la seguridad pública, pues, aunque ambas busquen el mantenimiento de la paz, la seguridad interior se enfoca en la salvaguarda de nuestras instituciones y de las personas, mientras que la seguridad pública únicamente se enfoca en la salvaguarda de las personas.

Finalmente debe señalarse que dicha prohibición protege el derecho al debido proceso y la garantía de seguridad jurídica, inmersa en el sistema de justicia penal y consagrada en los artículos 14, 16, 19 y 20 Constitucionales.

d) **Del establecimiento de un estado de excepción.** Otra de las preocupaciones externadas tiene que ver con el establecimiento de un estado de excepción de facto; situación que igualmente se prohíbe expresamente dentro de la Ley, ya que la preservación de la seguridad interior no lleva aparejada de forma alguna la restricción o suspensión de derechos y garantías.

Aun cuando constitucionalmente se otorgue al Presidente de la República la facultad de preservar la seguridad interior mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas, ello no implica que con el ejercicio de dicha atribución se le faculte para el establecimiento de facto de un estado de excepción propio de un Estado militarizado, ya que la preservación de la seguridad interior no lleva aparejada de forma alguna la restricción o suspensión de derechos y garantías.

En un Estado democrático existen límites formales y materiales para determinar un estado de excepción. Los formales son los requisitos, el procedimiento, el establecimiento de la temporalidad y el ámbito espacial en que se impone la suspensión de derechos y la definición previa de un núcleo esencial de derechos humanos que no pueden ser afectados. Los limites materiales tienen como finalidad asegurar las garantías fundamentales de la población.

Al respecto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece en el artículo 27 la suspensión de garantías y en el 29 las normas de interceptación, estableciendo que "ninguna norma puede ser interpretada en el sentido de suprimir y limitar injustificadamente el ejercicio de derechos, desnaturalizándolos o vaciándolos de contenido efectivo", lo que refuerza la idea de que no es necesario declarar un estado de excepción si se considera que existen recursos suficientes para hacer frente a la amenaza.

El despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior debe estar sujeto en todo momento al irrestricto respeto a los Derechos Humanos que la Constitución y los tratados internacionales establecen.

De considerarse que tales derechos representan un obstáculo para hacer frente de *ipso facto* a una situación de emergencia, es ineludible e indispensable que se acuda al mecanismo establecido en el artículo 29 Constitucional para hacer posible restricción o suspensión alguna.

e) **Represión a la protesta social y política.** También hubo coincidencia con la preocupación relativa a que mediante la expedición de una Ley de Seguridad Interior se reprimía la protesta social y política, por lo que se decidió incluir de manera expresa la prohibición a que la Ley de Seguridad Interior fuera utilizada en manifestaciones sociales o políticas no violentas, ahondando además en que, de permitirse una represión de ese tipo, la misma sería contraria a lo establecido en los artículos 1°, 7 y 9 de la Constitución, pues la preservación de la seguridad interior no lleva aparejada de forma alguna la restricción o suspensión de derechos y garantías.

f) **Facultad del Congreso para expedir una Ley de Seguridad Interior.** Finalmente se externó la observación relacionada a que el Congreso no está facultado para legislar sobre seguridad interior.

Contrario a dicho argumento, el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad del Congreso para expedir leyes en materia de Seguridad Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIX-M, en relación a lo dispuesto en el artículo 89, fracción VI, que faculta al Presidente de la República para preservarla en los términos de la Ley de Seguridad Nacional, y toda vez que la seguridad interior forma parte de la Seguridad Nacional y además atiende las mismas amenazas señaladas en la Ley de la materia, se considera que el Congreso puede legislar respecto a la seguridad interior como parte procedimental de la Ley de Seguridad Nacional, tal y como se señala en la primera consideración de este dictamen.

IV. ADICIONES A LAS INICIATIVAS

Esta Comisión considera necesario realizar algunas adiciones al contenido de las propuestas para armonizarlas e incluir las opiniones expresadas en las reuniones de trabajo de seguridad interior, además de alinear su contenido con el objeto de la norma, por lo que, quienes suscribimos, concluimos fundada y razonadamente que resulta necesario efectuar las siguientes adiciones a su contenido:

1) Sujetar los procedimientos y acciones destinados a la salvaguarda de la seguridad interior, al respeto de los derechos humanos en todo el territorio nacional, pues tal y como se señaló a lo largo de este documento, la seguridad constituye uno de los presupuestos básicos para que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales.

En concordancia, libertades como las movilizaciones de protesta social o aquellas con un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior, lo cual es congruente con el contenido del artículo 9º constitucional.

Asimismo, y con la finalidad de guiar el actuar de las instituciones encargadas de la aplicación de esta Ley, en el ejercicio que estas realicen de las atribuciones de seguridad interior, observarán los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia,

eficiencia, coordinación y cooperación, previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, además de los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

En este último supuesto, consideramos que se deben delimitar las definiciones propuestas por los iniciantes y armonizarlas con los principios que rigen la aplicación de esta ley, definiendo al uso legítimo de la fuerza como la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

De igual manera y en congruencia con la protección de los derechos humanos, se clarifica que la recolección de información de inteligencia por parte de Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas, únicamente puede realizarse mediante métodos lícitos y con pleno respeto a los derechos

humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2) Con el objeto de diferenciar entre qué se entiende por seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior, se incluye una definición de esta última, consistente en la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la Ley.

3) Se señala que las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior son materia de Seguridad Nacional, recalcando que en ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas

se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública; siendo acorde con la división de conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior, lo que permite que cada una de ellas se despliegue de manera independiente y conforme a los ordenamientos específicos que el Congreso expide para ello.

En sintonía con esa división y con el concepto añadido, se incluye un catálogo de aquello que se considera como Amenaza a la Seguridad Interior, entendiendo como tal a los actos contenidos en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en el territorio nacional; u otras circunstancias que atenten contra la infraestructura o el funcionamiento de las instituciones, o dañen gravemente a la población, incluyendo desde un enfoque multidimensional de seguridad a las emergencias, los desastres naturales, las epidemias y las contingencias de salubridad general, por las consecuencias devastadoras que este tipo de eventos tienen en el territorio nacional, el cual es propenso a sufrir estas catástrofes debido a su ubicación geográfica.

Características propias de nuestro país que constituyen un eminente peligro en el mantenimiento de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, al generar efectos que impactan directamente el desarrollo económico, social y político de la nación.

Señalando además que la Comisión ya ha sostenido este criterio previamente en la dictaminación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada el pasado 31 de octubre, durante la decimosegunda reunión ordinaria.

4) De manera complementaria al catálogo de amenazas, se adiciona el concepto de Riesgo a la Seguridad Interior como una situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior; ello para fortalecer el carácter preventivo en la aplicación de esta ley y poder atender oportunamente para contener y reducir aquellas situaciones que pueden convertirse en amenazas a la seguridad interior.

En este mismo sentido, también se incluye la obligación de las fuerzas federales para implementar políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional, sin que para ello se requiera de la expedición de una Declaratoria de protección a la seguridad interior, por tratarse de acciones preventivas.

También se incluye la obligación del Consejo de Seguridad Nacional -como una de las instancias encargadas de la seguridad nacional en términos de la Ley de la materia- de emitir lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional, ya que existe consenso respecto a que el mantenimiento de la seguridad interior requiere del compromiso y la participación de los tres órdenes de gobierno.

5) Respecto a la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, estará sujeta a una temporalidad específica así como a las Amenazas que comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades a quien corresponde atenderlas, o a aquellas que se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo se adiciona un catálogo de responsabilidades que los estados y municipios deberán asumir durante la vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior el cual obliga a los estados a comprometerse a contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de reestablecer la colaboración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que se establezcan en la propia Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, señalando que se sancionará su incumplimiento en los términos del sistema de responsabilidades contemplado en el artículo 109 constitucional, así como en lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción.

6) Otro de los elementos importantes relativos a la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, tiene que ver con la posibilidad de habilitar en ella la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica.

De igual manera se considera oportuno fusionar lo relativo a la emisión de la Declaratoria de las iniciativas a estudio, para que quede de la siguiente manera: la Declaratoria deberá fijar la vigencia de la intervención, la cual no podrá exceder de un año, pudiendo ser modificada o prorrogada mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones, por considerarse requisitos indispensables para su correcto funcionamiento.

Por otra parte, estimamos necesario que tanto la Declaratoria, como su modificación y prórroga, deban notificarse por conducto de la

Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.

7) Finalmente se adiciona la obligación del titular de la Secretaría de Gobernación de remitir un informe a la Comisión Bicamaral, sujetando el ejercicio de las facultades de control de esta última a lo ya previsto en la Ley de Seguridad Nacional.

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

V. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley de Seguridad Interior, para quedar como sigue:

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia.

Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional.

Artículo 2. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así

como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.

Artículo 3. En el ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acciones de seguridad interior: aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior;

II. Amenazas a la Seguridad Interior: Las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las

emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional;

III. Riesgo a la Seguridad Interior: situación que potencialmente puede convertirse en una Amenaza a la Seguridad Interior;

IV. Declaratoria de protección a la seguridad interior: el mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior;

V. Fuerzas Armadas: El Ejército, Armada y Fuerza Área;

VI. Fuerzas Federales: Las instituciones policiales federales;

VII. Inteligencia para la Seguridad Interior: el conjunto de conocimientos obtenidos a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y

explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad interior;

VIII. Seguridad Interior: lo previsto en el artículo 2 de la presente Ley;

IX. Seguridad Nacional: lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional, y

X. Uso legítimo de la fuerza: la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

Artículo 5. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia.

Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional.

Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la

suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas.

Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior.

Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE PROTECCIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas:

I. Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables.

Artículo 12. En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.

Artículo 13. Las peticiones de las Legislaturas de las entidades federativas o de su respectivo Ejecutivo deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior, especificando entre otros, los aspectos siguientes:

I. Amenaza identificada y el impacto de la misma;

II. Área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas;

III. Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza identificada en la entidad federativa o área geográfica afectada;

IV. Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza identificada;

V. El compromiso de contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de reestablecer la colaboración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que establezca la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y

VI. La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y para la toma de decisiones correspondientes.

Artículo 14. El Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener lo siguiente:

I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán;

II. La amenaza a la Seguridad Interior que se atenderá;

III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las Acciones de Seguridad Interior;

IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la Amenaza a la Seguridad Interior;

V. Las Fuerzas Federales participantes;

VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley;

VII. Las Acciones de Seguridad Interior que se llevarán a cabo, y

VIII. La temporalidad de la Declaratoria.

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá determinar la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica.

Artículo 15. La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo.

Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones de Seguridad Interior. Las modificaciones y prórrogas deberán notificarse y publicarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la presente Ley.

Artículo 16. En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Lo anterior, sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES

Artículo 17. A partir de la expedición de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento, se considerarán como Acciones de Seguridad Interior.

Artículo 18. En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las autoridades federales conforme a lo previsto en la presente Ley, tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.

Artículo 19. La Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 20. Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate, conforme al procedimiento siguiente:

I. El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en términos del artículo 21;

II. El Comandante designado en términos de la fracción anterior elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes;

III. El protocolo contemplará la integración de grupos interinstitucionales, a fin de que cada uno lleve a cabo la misión que se les asigne con base en las atribuciones y responsabilidades que les correspondan, coordinadas por el comandante, y

IV. Las Fuerzas Armadas actuarán realizando las Acciones de Seguridad Interior previstas en la declaratoria respectiva.

Artículo 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las Entidades Federativas respectivas.

Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada.

Artículo 23. Durante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en el marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, asumirán las siguientes responsabilidades:

I. Atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que sean convocadas;

II. Aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea solicitada o con que cuenten, que permita cumplir los fines de la Declaratoria;

III. Prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora para atender la Amenaza a la Seguridad Interior;

IV. Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior y superarla;

V. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la Ley de la materia;

VI. Presentar los informes periódicos ante la autoridad federal coordinadora sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe en el marco de la Declaratoria;

VII. Las que se establezcan conforme a la fracción IV del artículo 14 de esta Ley; y

VIII. En el caso de las entidades federativas, las que haya comprometido en los términos de la fracción V del artículo 13 de esta Ley.

Artículo 24. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, destinará Fuerzas Federales para que realicen Acciones de Seguridad Interior, en aquellas áreas o zonas del territorio nacional que así lo requieran.

Artículo 25. Tratándose de fenómenos naturales perturbadores, la intervención de las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, se sujetará a lo previsto en la Ley General de Protección Civil y, en su caso, a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías Generales de Comunicación e Instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.

Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.

Artículo 27. Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato

conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.

Artículo 28. Las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior con su organización, medios y adiestramiento, sin descuidar el fortalecimiento de sus capacidades.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 29. Las Acciones de Seguridad Interior se apoyarán en los órganos, unidades y procesos de inteligencia previstos en las leyes respectivas.

Artículo 30. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos

de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley.

En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, la colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto se establezcan.

CAPÍTULO QUINTO
DEL CONTROL DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 32. El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 33. El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la Comisión Bicamaral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de control previstas en dicha ley.

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 34. El incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y en la Declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; y en su caso con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados.

Asimismo, las Entidades Federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Cuarto. Si a la entrada en vigor de la presente Ley existen situaciones en las que se surten las hipótesis contenidas en el artículo 11, se aplicará el procedimiento ahí previsto, sin perjuicio de que en tanto se materializa el mismo, las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas, continúen realizando las acciones que estén llevando a cabo para

atenderlas. Las que no requieran declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen.

Palacio Legislativo, 30 de noviembre de 2017

H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN **COMISIÓN DE GOBERNACIÓN**

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA **FECHA: 30/NOV/2017**

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.

DIPUTADO		SENTIDO DEL VOTO		
		FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Presidencia				
Mercedes del Carmen Guillén Vicente	08 Tamaulipas PRI			
Secretaria				
Juan Manuel Cavazos Balderas	02 Nuevo León PRI			
Cesar Alejandro Domínguez Domínguez	08 Chihuahua PRI			
Erick Alejandro Lagos Hernández	20 Veracruz PRI			
David Sánchez Isidoro	06 México PRI			

H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN **COMISIÓN DE GOBERNACIÓN**

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA **FECHA: 30/NOV/2017**

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.

DIPUTADO		SENTIDO DEL VOTO		
		FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Álvaro Ibarra Hinojosa	2ª Nuevo León PRI	IBARRA		
David Jiménez Rumbo	5ª Guerrero PRD			
Monroy Del Mazo Carolina	27ª México PRI			
Méndez Hernández Sandra	8ª México PRI			
Norma Rocío Nahle García	11 Veracruz MORENA	Rocío Nahle G.		

H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN **COMISIÓN DE GOBERNACIÓN**

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA **FECHA: 30/NOV/2017**

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.

DIPUTADO	SENTIDO DEL VOTO		
	FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Arzaluz Alonso Alma Lucía  2 Querétaro PVEM			
Bejos Nicolás Alfredo  6 Hidalgo PRI			
Eukid Castañón Herrera  4 Puebla PAN			
Sandra Luz Falcón Venegas  5 México MORENA			
Sofía Gonzáles Torres  3 Chiapas PVEM			

H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN **COMISIÓN DE GOBERNACIÓN**

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA FECHA: 30/NOV/2017

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.

DIPUTADO	SENTIDO DEL VOTO		
	FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Rodríguez Torres Samuel  4 Ciudad de México PVEM			
José Clemente Castañeda Hoeflich  1 Jalisco MC			
Macedonio Salomón Tamez Guajardo  10 Jalisco MC PRD			
Norma Edith Martínez Guzmán  1ª Jalisco PES			
Integrantes			
Hortensia Aragón Castillo  1 Chihuahua PRD			

H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN **COMISIÓN DE GOBERNACIÓN**

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA **FECHA: 30/NOV/2017**

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.

DIPUTADO		SENTIDO DEL VOTO		
		FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Juan Pablo Piña Kurczyn	3 Puebla PAN			
Carlos Sarabia Camacho	11 Oaxaca PRI			
Miguel Ángel Sulub Caamal	01 Campeche PRI			
Claudia Sánchez Juárez	5 México PAN			
Jorge Triana Tena	10 Ciudad de México PAN			

H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN **COMISIÓN DE GOBERNACIÓN**

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA **FECHA: 30/NOV/2017**

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.

DIPUTADO		SENTIDO DEL VOTO		
		FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Angélica Moya Marín	22 México PAN			
Ulises Ramírez Núñez	5 México PAN			
Marisol Vargas Bárcena	5 Hidalgo PAN			
David Gerson García Calderón	30 México PRD			
Rafael Hernández Soriano	11 Ciudad de México PRD			

H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA

LISTA DE VOTACIÓN **COMISIÓN DE GOBERNACIÓN**

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA **FECHA: 30/NOV/2017**

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.

DIPUTADO	SENTIDO DEL VOTO		
	FAVOR	CONTRA	ABSTENCIÓN
Mirna Isabel Saldívar Paz  2 Nuevo León NA			
Viggiano Austria Alma Carolina  1 Hidalgo PRI			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

VOTO PARTICULAR AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, A CARGO DE DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.

I. Fundamentos

Con fundamento en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados y como integrantes de la Comisión de Gobernación, que se constituye en dictaminadora de la presente iniciativa, atentamente, exponemos:

II. Antecedentes

La Comisión indica que, en la elaboración del presente, únicamente se dictaminan las siguientes:

a. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por los Diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 08 de noviembre de 2016;

b. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por la Diputada Sofía González Torres del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentada el 14 de febrero de 2017;

Recibí
Erik Alvarado
30/nov/17

Señala la dictaminadora que, no obstante, se tomaron en consideración las siguientes iniciativas que precluyeron o fueron retiradas por sus proponentes o no le corresponde dictaminar a esta Cámara, pero que por la trascendencia del tema fueron incluidas y analizadas, las cuales se enuncian por orden cronológico:

- Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, del Diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 26 de noviembre de 2015, que precluyó el 29 de abril de 2016;
- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, del Senador Roberto Gil Zuarth del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentada en el Pleno del Senado el 27 de septiembre de 2016;
- Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Nacional, de los Diputados Manuel de Jesús Espino Barrientos y Candelaria Ochoa Ávalos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentada el 11 de enero de 2017 que precluyó el 14 de agosto de 2017;

- Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, del Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, presentada ante la Comisión Permanente el 11 de enero de 2017.

III. Consideraciones

El dictamen en comento se emite en sentido positivo basado, según la propia dictaminadora, en que

> "...en la Constitución, hasta hace relativamente poco tiempo [y] como respuesta a los nuevos retos que el Estado debía enfrentar en materia de seguridad, ... en el año de 2004, ...el Constituyente permanente aprobó la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional..."

Como consecuencia,

> "...en el año 2005 se legisló en la materia y se expidió la Ley de Seguridad Nacional, que contenía supuestos y procedimientos claros que en aquel momento daban certeza y seguridad a la ciudadanía, al describir cuáles son las amenazas a la Seguridad Nacional, y de esa manera, establecer un control para que el Estado respetara los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos."

No obstante, el propio dictamen señala que

> "...se observa que, a pesar de que la seguridad interior no es lo mismo que la seguridad nacional o que la seguridad pública, sí guarda ciertas similitudes con la primera, pues comparten un origen que tiene que ver con la preservación de la soberanía nacional mediante la defensa exterior e interior de la población, el territorio y el gobierno que componen al Estado Mexicano... Por lo tanto se considera que el Congreso de la Unión sí puede legislar en torno a la seguridad interior, pues la misma es una rama de la seguridad nacional, que por sus características propias, debe ser legislada en un instrumento distinto a la Ley de Seguridad Nacional, pero que se nutre de los conceptos y procedimientos ya descritos en dicha Ley, pues su origen es el mismo."

Lo anterior, en un régimen federalista como el nuestro, en que la división de Poderes cumple un papel de equilibrio político fundamental, la

concesión de facultades específicas para legislar en materias que competen a diversos órdenes de gobierno deben encontrarse explícitamente contenidas en el texto constitucional, debido a que constituyen potestades que los propios poderes de las entidades federativas conceden, de manera especial, al Congreso de la Unión, cuyo mandato no puede ser genérico.

Es por ello que consideramos que el Congreso de la Unión, si bien posee facultades para legislar en materia de seguridad nacional, no las posee en materia de seguridad interior, por lo cual la aprobación del dictamen que contiene este Decreto por el que se expide una ley especial en materia de seguridad interior, resultaría contrario al espíritu constitucional. Lo anterior se confirma cuando el propio texto del dictamen indica, en diversos artículos, que la aplicación de la Ley es atribución de la Secretaría de Gobernación en coordinación con las Fuerzas Armadas "y otros órdenes de gobierno", estableciendo de esta manera obligaciones y responsabilidades específicas que superan con mucho el ámbito de las facultades legislativas concedidas en materia de seguridad nacional, violentando la autonomía y la independencia del Municipio Libre y la soberanía de los estados de la Unión.

Debemos señalar, de manera específica, que la materia que se pretende legislar, es decir, la seguridad interior, se encuentra presente en nuestro texto constitucional desde antes que la seguridad nacional. Esto es, no compartimos las afirmaciones de la dictaminadora en el sentido de que

> "...basta con refrendar que es el Presidente de la República, quien como máxima autoridad civil y por disposición del artículo 89, fracción VI Constitucional, está facultado para preservar la seguridad interior mediante el despliegue de las fuerzas armadas, en protección al orden público y la paz social, entendidos como derechos fundamentales de nuestra sociedad; por todas estas

consideraciones podemos afirmar que es facultad del Congreso de la Unión, legislar en materia de Seguridad Interior",

debido a que, históricamente, la Constitución Política de 1857 señaló, en su artículo 85, que entre las facultades y obligaciones del Presidente de la República, se encontraban:

VI. Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la federación.

En concordancia, el Congreso de la Unión, a través de lo establecido en el artículo 72, indicaba que éste tenía facultades para:

XVIII. Para levantar y sostener el ejército y la armada de la Unión, y para reglamentar su organización y servicio;

Debemos señalar que, desde tiempos muy tempranos, la Teoría Penalista en México indicaba la existencia de delitos en contra de la Seguridad Interior. Martínez de Castro, quien participó activamente en la elaboración del primer Código Penal Federal, en 1871, llegó a la siguiente clasificación de los delitos [1], dependiendo del bien jurídico tutelado que resulta vulnerado:

*A. **Delitos contra la propiedad**: robo y otros delitos; fraude; abuso de confianza; quiebra; amenazas.*

[1] Antonio Martínez de Castro nace en Sonora, en 1825 y muere en la ciudad de México en 1880. En 1850 se graduó como abogado y participó en el Congreso Constituyente de 1856 por el estado de Sinaloa. El presidente Juárez lo nombró como parte de la comisión para redactar el Código Penal para el Distrito y los territorios, labor que fue interrumpida por la guerra con los franceses, reanudándola en 1868 y culminando sus labores en 1871. Su participación política no se limitó a esto; fue miembro de la delegación municipal que gobernó la ciudad de México después de la victoria de los republicanos. Fue Ministro de Justicia e Instrucción Pública y, en colaboración con Gabino Barreda, elaboró la Ley de Instrucción Pública de 1867 que dio origen a la Escuela Nacional Preparatoria.

B. ***Delitos contra las personas****:*

C. ***Delitos contra la seguridad interior****: rebelión, sedición; delitos contra el derecho de gentes; faltas.*

Es patente que, en general, se trata de delitos de naturaleza militar, determinados tanto por la situación de inestabilidad política (rebeliones, asonadas, intervenciones, etc.) como por la presencia de un Ejército Mexicano que se encontraba en consolidación. A partir del Porfiriato, esta institución inicia un proceso acelerado de modernización y profesionalización que deriva en la conformación del Ejército Mexicano, a partir del Ejército Constitucionalista pero que, en el marco jurídico, hereda la normatividad legal heredada por el período porfirista.

La Constitución de 1917, en su texto original indicaba, en su artículo 89 que:

Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

VI.- Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Y, en consecuencia, las facultades del Congreso de la Unión se establecían en el mismo sentido. Es por lo anterior que la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, de 1935 contemplaba la creación de la Secretaría de Guerra y Marina que, en 1937 cambia su denominación a Secretaría de la Defensa Nacional. En 1939, se creó el Departamento Autónomo de Marina. No obstante, desde 1933, el Código de Justicia Militar **que se encuentra vigente** contiene, desde entonces, los tipos penales tendientes a conservar la seguridad interior, conteniendo tipos penales como la rebelión y la sedición.

Cuando en 1971, en plena Guerra Fría, se inicia la construcción del concepto de *seguridad nacional* a lo largo de América Latina que, en muchos de los países fue el pretexto utilizado para los golpes militares que instauraron las dictaduras, el concepto de *seguridad interior,* se incorpora a la Legislación mexicana. Cabe señalar que este texto legal fue emitido el 18 de marzo de 1971, pocos meses antes de la matanza del 10 de junio del mismo año. No obstante, este instrumento legal fue derogado por la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, promulgada el 16 de diciembre de 1986, durante la presidencia de Miguel de la Madrid que, en su artículo 1 indica:

> *ARTICULO 1/o. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:*
>
> *I. ...*
>
> ***II. Garantizar la seguridad interior;***
>
> *III. a V. ...*

Más adelante, el artículo 13 determina que:

> *ARTICULO 13. El Presidente de la República dispondrá del Ejército y Fuerza Aérea, de acuerdo con lo establecido en el* ***Artículo 89 Fracción VI de la Constitución*** *Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

Lo anterior se replica en la Ley Orgánica de la Armada de México, promulgada el 31 de diciembre de 2002 y que abrogó la promulgada el 27 de diciembre de 1993:

> *Artículo 1.- La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente,* ***cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Constitución Política*** *de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.*

Cabe hacer notar que ambos ordenamientos, sin embargo, datan de una fecha anterior a la reforma constitucional que añadió el término de *seguridad nacional,* a la multicitada fracción VI del artículo 89. Esta reforma constitucional impulsada por Vicente Fox, fue promulgada el 5 de abril de 2004, quedando en los siguientes términos:

> *VI.* ***Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y*** *disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.*

Es decir, *montó* el concepto de seguridad nacional sobre lo que disponía la fracción original, dando como resultado tres cuestiones fundamentales:

1. La "ley respectiva" de la que se habla es la Ley de Seguridad Nacional que, más que atender a lo estipulado en el texto subsiguiente, se configuró como una ley orgánica del CISEN y que ha ido perfeccionándose a través del tiempo.
2. Estableció que, de manera inmanente, la seguridad nacional tiene dos componentes: la seguridad interior y la defensa exterior y que el presidente de la República puede disponer de la fuerza armada permanente para preservarla.
3. En términos de las facultades del Congreso, se introdujo la *XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los* ***requisitos y límites*** *a las* ***investigaciones*** *correspondientes.*

Es con estos antecedentes que afirmamos que el concepto de *seguridad interior* tiene fundamentalmente una connotación militar, que las transgresiones que la ley penal en la materia, es decir, el Código de Justicia Militar, tipifica las acciones que constituyen los delitos que comprende.

Sacar de este contexto el concepto de *Seguridad Interior,* resulta de la desnaturalización de su propia identidad jurídica e histórica.

Adicionalmente, debemos señalar que, según la dictaminadora,

> "la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado y ha enfatizado la necesidad de garantizar el derecho de seguridad de las personas en estricto apego a los derechos humanos y las garantías individuales..., en el que se señala la obligación de los Estados de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones al derecho a la vida, lo que implica por una parte que ninguna persona sea privada de la misma arbitrariamente (obligación negativa), y por otra, la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción mediante la garantía a los individuos del pleno y libre ejercicio de sus derechos humanos."

En este sentido, afirmamos que el dictamen en comento resulta contrario al marco convencional debido a que establece un estadio intermedio entre la normalidad democrática y la suspensión de garantías que supone la actuación supletoria o subsidiaria de las Fuerzas Armadas en detrimento de las atribuciones constitucional y legalmente concedidas a las entidades federativas y municipios, que no se encuentran contempladas en el texto constitucional, lo cual constituye requisito fundamental para garantizar la

vigencia de los derechos humanos, según lo establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

De manera particular, debemos señalar que el dictamen en comento, al definir en el artículo 2 a la Seguridad Interior, no hace ninguna especificidad respecto al concepto de Seguridad Nacional contenido en la Ley de la materia, generando confusión entre ambos conceptos, lo cual repercute en el contenido del artículo 3 que define las acciones en materia de seguridad interior como aquellas que, desarrolladas por las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, para identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior, señalando que éstas son las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Afirmamos, en consecuencia, que dada la importancia de la materia que nos encontramos legislando, la imprecisión y confusión entre los conceptos que se contienen en el dictamen que hoy discutimos, resulta imprescindible su reformulación para evitar que nuestras instituciones puedan cometer violaciones a los derechos humanos debido a la falta de coherencia legal.

En el mismo sentido, la definición sobre el uso de la fuerza indica que ésta constituye

> "la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución",

sin tomar en consideración las recomendaciones de los organismos internacionales de defensa y protección de los derechos humanos para que se emita una Ley especial en la materia que regule su aplicación.

Resulta por demás riesgoso para el libre ejercicio de los derechos humanos la facultad atribuida a las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, para implementar, sin necesidad de declaratoria alguna, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, sin establecer cuáles son éstas o cuál es el límite del actuar del gobierno.

Por otro lado, el artículo 7 de la Ley contenida en el dictamen en comento, estipula que, en casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión del ejercicio de algún derecho, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 Constitucional, sin establecer ninguna taxatividad relativa a lo establecido en esta Ley. Más grave aún resulta la facultad atribuida al Presidente para implementar acciones inmediatas "para amenazas que representen un grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones fundamentales del gobierno", sin necesidad de declaratoria alguna y contraviniendo, fehacientemente, lo estipulado en el propio texto que hoy discutimos.

Resulta de particular preocupación que, no obstante que la propia declaratoria de protección a la seguridad interior es un acto administrativo que afecta la esfera de competencia privada del individuo, toda la información producida y obtenida con base en los procedimientos establecidos en esta Ley, se considera reservada por motivos de seguridad nacional, estableciendo un hálito de opacidad que no permitirá el ejercicio democrático de la rendición de cuentas.

Es indispensable señalar que, el artículo 18 de la Ley en comento, señala que las acciones desarrolladas por la aplicación de esta Ley no "tendrán por objeto **sustituir** a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el

cumplimiento de sus competencias y responsabilidades", sin embargo, sí se establece el carácter subsidiario de las acciones, lo cual resulta una contradicción en sí misma. Lo anterior, evidentemente, constituye una ruptura del Estado de Derecho, cuya gravedad no puede ser mesurada en este momento.

En el mismo sentido, si la normalidad democrática de la que habla el dictamen en discusión fuera la que rige la realidad histórica de nuestro país, resultaría absolutamente innecesario que el propio texto legal que se pretende aprobar, establezca un procedimiento para la intervención de las autoridades federales, en general y uno específico destinado a regular la participación de las Fuerzas Armadas, poniendo en duda la actuación institucional de las Fuerzas Armadas, la subordinación debida al poder civil y, en el último de los casos, la lealtad a México, que han demostrado en múltiples ocasiones.

Por último, queremos señalar que, en un sistema democrático, el establecimiento de pesos y contrapesos entre los Poderes, de mecanismos de control que regulen la actuación de quienes ejercen el mando de nuestras instituciones, resulta imprescindible para evitar excesos y discrecionalidades. Sin embargo, la Ley que hoy discutimos carece de cualquier elemento de este tipo, generando no sólo opacidad, discrecionalidad y posibles abusos, los cuales quedarán en la impunidad gracias a que también se cubren las espaldas, reservando toda la información por motivos de seguridad nacional.

En conclusión:

1. La Ley contenida en el dictamen en comento, es inconstitucional e inconvencional.

2. No se contemplan mecanismos efectivos de control de las acciones, ni jurisdiccional ni parlamentario.
3. Los contenidos de esta Ley se traslapan y confunden con lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional.
4. No existe una diferenciación contundente entre los supuestos de aplicación de esta Ley y aquellos que requieran la aplicación del mecanismo de restricción de garantías.
5. El procedimiento de declaratoria de protección a la seguridad interior es unilateral, implementado, valorado y calificado por el Ejecutivo, sin ningún contrapeso, lo cual se aplica también para su prórroga o modificación.
6. Existe una confusión conceptual relativa a la actuación subsidiaria de las autoridades que implica, en sí misma, una sustitución en relación con sus obligaciones.
7. El procedimiento especial para la participación de las Fuerzas Armadas resulta "insólito", poco eficiente y sin fundamento constitucional.

IV. Resolutivos

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente, solicitamos

ÚNICO. Se desecha el dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

V. Firmas

DIP. RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO

DIP. DAVID GERSON GARCÍA CALDERÓN

DIP. HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 30 días del mes de noviembre de 2017.

30-11-2017
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 248 votos en pro, 115 en contra y 48 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, 30 de noviembre de 2017.
Discusión y votación, 30 de noviembre de 2017.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 30 de noviembre de 2017

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la asamblea que se recibió de la Comisión de Gobernación, dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, mismo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Gobernación, consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que se ponga a votación y discusión de inmediato.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Gobernación se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se autoriza en consecuencia, y tiene la palabra para cumplir con el siguiente punto del orden del día, que es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, por cinco minutos, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento dela Cámara de Diputados.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Ciudadano diputado presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, como resultado de un profundo debate al que han acudido amplios sectores de la sociedad mexicana, en torno a la trascendencia de la seguridad interior en la situación actual del país, esta Comisión de Gobernación somete a consideración del honorable pleno, el proyecto de decreto mediante el cual se expide la ley en la materia, como instrumento legal que regula la participación de fuerzas federales y fuerzas armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional.

Respuesta idónea a los nuevos y complejos escenarios de inseguridad por los que atraviesa la nación, que ponen en riesgo a las personas y a las instituciones que conforman el Estado mexicano, destacando que esta ley complementaria a la Ley de Seguridad Nacional, ya que regula los supuestos en los que las amenazas a la seguridad nacional tienen su origen al interior de la República, mediante el establecimiento de protocolos claros y expeditos que obligan a las fuerzas estatales, federales y armadas a enfrentarlas de manera conjunta.

Por ello, la definición que la ley realiza de amenazas a la seguridad interior, se remite al contenido de los artículo 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, respetando el origen común que la seguridad interior y la seguridad tienen, diferenciando en su aplicación por los protocolos que autoridades encargadas de aplicarla deben

cumplir, cuando estos riesgos y amenazas comprometen el bienestar colectivo al poner en peligro la integridad de las personas y de las instituciones.

Ese es el motivo de fondo para legislar la seguridad interior en un instrumento distinto a la Ley de Seguridad Nacional, ya que no solo se trata de erradicar las amenazas sino de hacerlo respetando los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución.

En consecuencia, la aplicación de esta ley corresponde a las fuerzas estatales, las fuerzas federales y cuando la gravedad de la situación lo amerite, y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas.

Señalando además, que toda intervención de fuerzas federales y Fuerzas Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República, y solo cuando subsistan las amenazas a la seguridad interior que la motivaron y que justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior.

Situación que deberá notificarse a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de este Congreso y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas en las que se realicen estas acciones.

Elegir un mecanismo distinto en las circunstancias actuales sería negar la realidad de México y la urgencia de dotar a la población de seguridad. Sería suspender los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte para entrar en un Estado de excepción.

Sería militarizar al país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional, lo que esta ley no hace de manera alguna. Repito, esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías.

Por el contrario, las autoridades que colaboren en el mantenimiento de la paz y el orden público al interior deberán, en todo momento y sin excepción, respetar de manera irrestricta los derechos humanos.

Ahora bien, toda vez que es obligación del Estado mexicano en su conjunto proporcionar seguridad a la población y salvaguardar la permanencia de sus instituciones, esta ley señala...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Un momentito, diputada. Les recuerdo a todos los grupos parlamentarios que cada grupo tiene un espacio definido para hacer sus expresiones a lo largo del debate. Ruego a todos los grupos ser tolerantes con la expresión de cada quien. Esta Presidencia procurará guardar el orden en todo momento.

Muchas gracias, diputada Laura Dora, con toda atención suplico al público que la escucha guarde la debida tolerancia a cualquiera de sus expresiones.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Gracias, presidente. Toda vez que es obligación del Estado mexicano en su conjunto proporcionar seguridad a la población y salvaguardar la permanencia de sus instituciones, esta ley señala que la actuación de las autoridades se realizará en un marco de corresponsabilidad.

Para concluir, debe recalcarse que el incumplimiento a las obligaciones de esta ley será sancionado conforme a los sistemas de responsabilidades y anticorrupción, contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el equilibrio entre Poderes y la rendición de cuentas.

Diputados, no confundamos a la ciudadanía. El objetivo de la ciudad, de esta ley es dar certidumbre a través de pasos contundentes hacia la protección del orden interior. Se trata de entregar a los mexicanos y a sus instituciones un marco normativo democrático de rendición de cuentas. Es un tema trascedente y de interés supremo para la nación.

Por todo esto, está a su consideración este dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. Gracias por su atención. Gracias, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se han presentado tres mociones suspensivas a este dictamen. Escucharemos en orden las tres mociones suspensivas y pasaremos a la votación. Tiene la palabra, la diputada Cristina Gaytán Hernández, del PRD, hasta por tres minutos.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Y vean, compañeros, el espíritu de Díaz Ordaz presente con los compañeros del PRI.

Esta moción suspensiva que se presenta ante este pleno de la Cámara de Diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, tiene que ver con que este dictamen *fast track* como acostumbran a hacer el trabajo sucio los diputados del PRI, aprobado hace unos minutos. Tiene que ver con la militarización del país, esa militarización que vimos en 1968 y que el PRI quiere plantear junto con sus aliados nuevamente para el país.

Que quede perfectamente claro, no estamos nosotros contra las Fuerzas Armadas. Estamos en contra de la irresponsabilidad de diputados, que aprovechando una mayoría construida con los fraudes de los Duarte o los Moreira, como lo hicieron, están planteando aquí violar la Constitución.

El grupo de trabajo en contra de las desapariciones forzadas de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han sido claras en plantear que esa iniciativa de César Camacho y su grupo parlamentario es totalmente violatorio a los derechos humanos. Es una iniciativa que no tiene que pasar, porque lo que buscan es militarizar al país utilizando a las Fuerzas Armadas para hacer ese trabajo sucio que han querido hacer permanentemente en México.

En primer lugar el artículo 21 constitucional señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, es decir, la propia Constitución señala que son las autoridades civiles y no militares las que tienen que llevar a cabo esas investigaciones, cosa que ni sus doctorados les sirvieron para tenerlo claro.

La minuta pretende que el Ejército y la Marina realicen labores que le competen al Ministerio Público, es decir, le van a dar herramientas a los militares para las tareas de seguridad pública y de investigación, incluso en la propia iniciativa se señala: para obtener información bajo cualquier medio.

Acabamos de aprobar la Ley contra la Tortura, la Ley contra la Desaparición Forzada, pero ahora quieren aprobar una ley que les dé autorización para desaparecer, violar los derechos humanos y seguir torturando como ha sido su práctica.

En este sentido, quiero señalar también que el propio artículo 129 constitucional señala que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Es decir, que las autoridades, los responsables militares no pueden ejercer estas labores al estar en tiempo de paz.

Sabemos que la situación de la seguridad pública, que sus propios gobiernos han provocado, nos han llevado a tener un país en una guerra permanente, pero guerra entre las propias autoridades que ustedes solapan y los grupos del crimen organizado.

Finalmente, compañeras diputadas y diputados que juraron en este pleno hacer cumplir la legislación, les recuerdo que el artículo 76 constitucional establece las facultades del Congreso de la Unión, y en ninguna de esas facultades se contempla legislar las materias de seguridad interior.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Tenemos la capacidad de legislar en materia de seguridad nacional y seguridad pública, pero no seguridad interior. Claro que les urge y el tiempo ahora sí les apremia, pero queremos decirles...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: ... llamar a su responsabilidad. Están llevando al país a la militarización, a la represión, a que los derechos humanos sean violentados y sobre todo, todos aquellos que quieren votar a favor están claros de que esa violación...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: ... a los derechos humanos se quiere llevar desde el pleno de la Cámara de Diputados. Eso es absolutamente ilegal, peligroso, irresponsable, y sobre todo una muestra más de que el priismo del 68 quiere manifestarse...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, concluya su intervención.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: ... nuevamente en esta Cámara de Diputados. No vamos a dar un paso atrás. No queremos una Ley de Seguridad Interior que viole los derechos humanos.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suplico a los oradores respeto al Reglamento.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Y aquí vamos a estar, diputadas y diputados, dando la batalla a su irresponsabilidad.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Ismene Gaytán. Suplico a los señores oradores respetar el tiempo previsto –aquí en la Secretaria, si es tan amable–. Está solicitando la moción suspensiva la diputada Gaytán. Como son tres solicitudes, escucharemos las tres solicitudes. Tiene la palabra el diputado Álvarez Maynez hasta por tres minutos para solicitar moción suspensiva.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Hoy esta legislatura escribirá, si no cambiamos lo que está a punto de suceder, la página más vergonzosa y más bochornosa por la que vamos a trascender en la vida pública de México.

Las mociones suspensivas tienen la intención de aplazar una discusión, y en el caso que nos ocupa, en la Ley de Seguridad Interior, hay un planteamiento no de personas que no tengan conocimiento del tema, del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, y del director del CIDE, Sergio López Ayllón, de hacer una moratoria legislativa en las iniciativas que tienen que ver con seguridad y con procuración de justicia. Lo que está haciendo el PRI, lo que está haciendo el presidente de la República de meter el tema del Ejército y la seguridad interior a la agenda político-electoral, porque estamos ya en el proceso electoral, es un acto de profunda irresponsabilidad.

Este es un tema que no se puede legislar sobre las rodillas, la mayoría de las diputadas y de los diputados que están hoy aquí para votar no conocemos el dictamen, se acaba de aprobar hace unas horas. No estuvimos en la discusión, no hemos tenido el tiempo para estudiar y para recibir la opinión de expertos, de académicos, de víctimas de violaciones a los derechos humanos en este país, de familiares de desaparecidos para emitir una opinión centrada sobre el tema. Lo que está haciendo hoy el PRI es un acto de cobardía.

Mi playera dice: “Apoyo al Ejército y no al gobierno que le ordena violar la Constitución”. Porque es un acto de cobardía cada que un gobernador le ordena al Ejército violar la Constitución, el artículo 21 constitucional que dice: que las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública deberán de ser de carácter civil.

Es un acto de cobardía que un diputado diga que no se puede hacer otra cosa en el país más que sostener una fallida guerra, que por supuesto, que inició en el sexenio de Felipe Calderón, que inició en el sexenio de Calderón, y que en campaña Peña Nieto prometió cambiar, que en campaña Peña Nieto prometió pacificar el país, y no ha sido capaz de hacerlo, no le dio a este país instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia que permitan ganar esta guerra.

Y yo tengo un mensaje para las fuerzas armadas, y lo tenemos en el frente por México, les pedimos una disculpa pública a nombre de los Poderes de la Unión, de este Poder Legislativo de haberles fallado. Esta guerra no la van a ganar ellos, esta guerra se gana con fiscalías autónomas y que hagan su trabajo, con policías confiables en los municipios y en los estados que todos los partidos políticos gobiernan en el país.

Esta guerra jamás la podrán ganar los militares que están haciendo funciones que no les corresponden constitucionalmente, no se van a regresar a los cuarteles cuando vayan y ganen una guerra que nos es de ellos, la guerra contra la impunidad, contra la violencia, por la preservación de los derechos humanos es una guerra civil y nos correspondería a nosotros ganarla, tener vergüenza, tener dignidad, pedirle una disculpa a los militares por haberlos tenido en las calles diez años sin controles, sin claridad, sin delimitación de funciones y sin acompañamiento.

Por eso le pedimos a todas y a todos los legisladores que acompañen esta moción suspensiva y establezcamos una moratoria legislativa que le dé certidumbre al pueblo de México de qué es lo que se debe de hacer en materia de seguridad y procuración de justicia. Gracias, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias diputado Álvarez Maynez. Tiene la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, hasta por tres minutos.

La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada Maricela Contreras Julián: Compañeras y compañeros legisladores. Por supuesto que estamos en contra de aprobar la Ley de Seguridad Interior en los términos en los que se ha presentado.

Lo estamos, porque se pretende denostar el papel de las Fuerzas Armadas imponiéndoles obligaciones que no les corresponden, se les quieren endilgar la responsabilidad ante la incapacidad, corrupción, falta de profesionalismo, incluso la propia complicidad de los cuerpos policiacos con la delincuencia.

Pretenden condenar a una de las pocas instituciones con credibilidad en el país, a ser partícipe del rotundo fracaso que han llevado los gobiernos de Calderón y Peña Nieto a la estrategia de seguridad del país.

Que quede claro, reconocemos el trabajo que el Ejército realiza en esta noble labor en la sociedad mexicana, auxiliándola en los desastres nacionales y atento a la defensa de la soberanía nacional.

Estamos en contra de la manera en que quieren perpetuar un error histórico que ha dejado muerte y terror en la sociedad. La guerra contra el narcotráfico ha salpicado de sangre a las Fuerzas Armadas y eso no tiene ninguna justificación. Y no es responsabilidad del Ejército, es claramente un señalamiento a los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas en estos 10 años que tienen nombre y apellido: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Morena propone moción suspensiva de este dictamen, pues hay severas dudas sobre la eficacia, pertinencia de esta ley y de su constitucionalidad. Dudas expresadas por organismos nacionales e internacionales con la calidad moral para cuestionar la Ley de Seguridad Interior.

Por citar algunos ejemplos: Una definición amplia y ambigua de seguridad interior, que permitiría configurar prácticamente cualquier conducta como un riesgo en sí misma. La posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención del delito. La transgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades entregar cualquier información por seguridad interior.

En resumen, la ley no contiene los mínimos estándares de respeto de los derechos humanos ni las bases para atacar el problema estructural de la inseguridad en nuestro país. No hay base constitucional para legislar en la materia de seguridad interior. Se contravienen las obligaciones convencionales respecto a la promoción de los derechos y las tareas del Estado materia de seguridad pública.

No nos confundamos, las autoridades civiles, no las militares, deben encargarse de velar por garantizar a la sociedad vivir sin violencia. Debemos trabajar para que tengamos un modelo policial que realmente responda a las exigencias de la sociedad y no regatear como lo hicieron ayer sepultando el Mando Mixto en este país.

La solución no es esta ley, se requiere de una intervención integral que no está contenida en el proyecto de dictamen. Ya se han puesto sobre la mesa un sinfín de propuestas para mejorar las condiciones de seguridad en México, y todas han sido ignoradas.

Para combatir la violencia no se requieren más militares en las calles, se requiere un Estado de bienestar social y de derecho que han sido desmantelados, donde se generen empleos bien remunerados y opciones de educación...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Maricela Contreras Julián: Y que se recomponga el tejido social, donde se cambie el enfoque sobre el comercio ilícito de drogas. Necesitamos cuidar a nuestras instituciones. Necesitamos resguardar a las Fuerzas Armadas y no exponerlas a una fallida, a esta estrategia fallida que ya lleva 10 años. La ley no las fortalece, las expone.

Compañeras y compañeros, no somos irracionales, hay una crisis de seguridad y de violación de derechos humanos en México y se necesita que las Fuerzas Armadas estén presentes. Para concluir, pero no es militarizando el país como se va a resolver. Hemos pugnado porque el Ejército regrese de manera paulatina a los cuarteles, también por fortalecer el modelo policial de un mando mixto y reformar el sistema de procuración de justicia.

Es inadmisible dar facultades al jefe supremo de las Fuerzas Armadas...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada, por favor.

La diputada Maricela Contreras Julián: ... de las Fuerzas Armadas, es decir al presidente de la República, facultades para que utilice al Ejército como un instrumento represor por culpa de su tufo autoritario como gobierno civil, ante su incapacidad de atender los reclamos sociales.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada, por favor.

La diputada Maricela Contreras Julián: Urgimos a detener esta calamidad que pretenden aprobar. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Contreras Julián. Nuevamente hago un llamado a los señores oradores a guardar el tiempo establecido en el Reglamento, deseándole a la diputada Contreras Julián pronto restablecimiento. Pregunte la Secretaría el sentido del voto de la asamblea, de si se aceptan o no las mociones suspensivas.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se toman en consideración de inmediato para su discusión las mociones suspensivas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La expresión de la asamblea ha quedado suficientemente clara.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto pasamos, dentro del procedimiento establecido, a la fijación de posturas. Tiene la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, para expresar el posicionamiento del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, diputado presidente. Compañeros legisladores, indudablemente este es un tema de trascendencia que tiene hoy la atención de todo México, debido a los problemas de inseguridad que nos aquejan y que se encuentran en el número uno de las preocupaciones de los ciudadanos.

Desde el norte hasta el sur de México, a cada lugar que visitamos las personas nos reclaman cuándo terminará este clima de incertidumbre, de inseguridad y cómo podremos detener esta situación.

Lo cierto es que no es evitando la legislación, sino trabajando arduamente por generar una legislación que responda a la inquietud que los mexicanos nos han planteado.

Recientemente, es un poco incongruente este tema de felicitar a los militares, agradecer el trabajo extraordinario que hacen y el fortalecimiento que representan para la nación por su entrega y, al mismo tiempo, no querer darles la certeza jurídica para una actuación que hoy mismo se está llevando a cabo, que no tiene ninguna intención de militarización y esto es algo muy fuerte, en tribuna se dicen muchas mentiras, abusando de la disposición del pueblo a escucharnos.

Pero esa es una profunda responsabilidad, tenemos que hablar con la verdad y la verdad implica no mentir, la verdad implica, en primer término no decir cosas que no contiene esta propuesta de legislación.

La seguridad interior es una especie de la seguridad nacional, es un asunto que exige de quienes lo integramos una visión de Estado y por supuesto que altura de miras. Es verdad que es importante escuchar a la ciudadanía y se ha trabajado fuertemente en esta cuestión de escuchar a las organizaciones. No escuchar tampoco una imposición desde el extranjero, que vulnera la soberanía, al querer definir por nosotros qué tipo de legislación tenemos que tener.

Ojo, esa es una insistencia que hemos visto desde diferentes organizaciones, que vulnera profundamente, insisto, nuestra soberanía.

Si el objetivo de la ley es dar certidumbre habría que analizar conceptos y criterios, como por ejemplo –y en eso estoy de acuerdo, habría que revisar y modificar de ser necesario– el tema de las manifestaciones sociales y políticas, que bajo el tema de pacíficamente podrían ser vulneradas. Creo que ese es un punto en el que tenemos que trabajar hoy en este lugar, para generar una legislación acorde a lo que los ciudadanos nos exigen.

Es importante no continuar con este discurso que erosiona y desprecia y socava, por supuesto, el orden constitucional. Por un lado, estos mismos legisladores que no quieren que se apruebe esta iniciativa nos dicen que no nos corresponde legislar, y luego se molestan porque el Ejecutivo tiene mucho poder.

¿Quién los entiende? Si vamos a legislar tomemos la responsabilidad y hagamos este contrapeso que tanto necesita México. No digamos no nos corresponde, porque sabemos perfectamente que eso es una mentira y la Suprema Corte de Justicia así lo ha manifestado también.

Tenemos que legislar, tomemos nuestra responsabilidad en el asunto, modifiquemos sí, bajo una argumentación sólida, lógica, legislativa y entonces lograremos que esto llegue a buen término.

En México es necesario por supuesto asegurar, por ejemplo, que haya un contrapeso, efectivamente, en las cuestiones de los poderes y esto también hay que revisarlo aquí mismo, en este momento, durante la aprobación.

Es necesario que se invite a esta representación a participar activamente en la reglamentación de esta legislación, que seguramente hoy aprobaremos. Un México en que la seguridad interior sea cuestión de bienestar para todos, es una propuesta posible, se trata de construir, se trata de que la institución que es más respetada en nuestro país tenga la certeza jurídica que también necesita para actuar con responsabilidad. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, compañeros legisladores.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Norma Edith Martínez Guzmán. Aprovecho este espacio para saludar a los alumnos del Centro Universitario Los Ángeles, del municipio de Huehuetoca, estado de México, ellos son invitados del diputado Aarón González Rojas. Les tocó una buena sesión, bienvenidos.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Mirna Saldívar Paz, para expresar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la discusión de la Ley de Seguridad Interior no puede postergarse más.

En Nueva Alianza somos conscientes de que México atraviesa por una crisis de seguridad sumamente compleja, que pone en entredicho tanto la vida de las personas como la viabilidad de nuestras instituciones.

La sociedad nos exige, y nos exige con razón, tomar medidas drásticas para detener el flagelo de quienes han secuestrado la paz y puesto en jaque el desarrollo del país y sus habitantes.

En este orden de ideas se impone la necesidad de plantear estrategias de seguridad que contribuyan a hacer frente a las amenazas que ponen en peligro la vida de nuestra nación, ello nos conduce a crear un marco jurídico que responda a las nuevas realidades y desafíos que enfrenta la población y las instituciones del Estado mexicano.

Resulta evidente que el problema de la seguridad interior en áreas geográficas determinadas ha rebasado a la autoridad civil, lo que justifica la necesidad de establecer medidas extraordinarias en tanto haya condiciones para retornar a la normalidad.

Y si bien, las Fuerzas Armadas han tenido que coadyuvar para lograr este objetivo, es urgente crear un marco legal adecuado y definir claramente las atribuciones, deberes y funciones de todas las autoridades encargadas de nuestra seguridad.

La ley que estamos discutiendo establece claramente que la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.

Comprende también a los órganos, procedimientos y acciones destinadas para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios frente a riesgo y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente ley.

Con esta redacción garantiza que existen condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de un marco legal definido y limitado, sin que ello implique realizar tareas de seguridad pública.

Lo anterior no significa renunciar a la responsabilidad de fortalecer a las policías estatales y municipales, es preciso otorgarles una mayor capacitación y prepararlas para que en efecto, contribuyan a abatir la delincuencia a nivel local. Las medidas que hoy se proponen deben motivar a preparar y profesionalizar a la policía.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que resulta imperativo contar con las condiciones normativas idóneas para que las Fuerzas Armadas realicen su encomienda a favor de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Mirna Isabel Saldívar Paz. Esta Presidencia saluda a los alumnos y maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, a estudiantes de la UNEA Querétaro, así como a los ganadores del premio Francisco J. Mújica, del CEDRSSA, invitados todos por el diputado Hugo Cabrera Ruíz. Sean ustedes bienvenidos.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Compañeras y compañeros diputados, la guerra no hace la paz. Lo hemos dicho de manera insistente y en todos los foros en los que hemos tenido oportunidad de participar.

Los mexicanos quieren seguridad sin guerra, quieren vivir en paz. Por eso es que lamento mucho que la responsabilidad que tenía esta legislatura, de cara a la crisis histórica de violencia e inseguridad que vive México, la responsabilidad más importante no era otra más que aportar soluciones para lograr esta aspiración de las y los mexicanos.

Lamentablemente, con esta Ley de Seguridad Interior no se cumple este propósito. No es cierto y no les mientan a los mexicanos. Esta ley no sirve para regular la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, va mucho más allá de ello. Esta ley deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los protocolos de seguridad interior.

Los artículos 16 y 26 señalan, respectivamente que el presidente podrá ordenar acciones de seguridad interior sin que exista ninguna declaratoria y que las Fuerzas Armadas podrán identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior de manera permanente y sin declaratoria.

Esta ley genera una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso del poder. En esta ley hay un esquema de opacidad absoluta y de falta de rendición de cuentas.

Esta ley se presenta con una yuxtaposición entre la proclamada seguridad interior y las dimensiones de seguridad nacional y seguridad pública. En esta ley se generan incentivos para que las entidades federativas caigan en la pasividad y no mejoren sus instituciones de seguridad y sus capacidades institucionales para atender el problema.

Esta ley no contempla una calendarización con metas plausibles y objetivas, claras para el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, como ellos mismos lo han pedido, y tampoco se hace lo propio para el fortalecimiento de las policías en los tres órdenes de gobierno.

Pero más allá del grave contenido de esta ley, lo que hoy tenemos que decirle a los mexicanos, es que en menos de 48 horas esta Cámara de Diputados dilapidó la oportunidad y la responsabilidad histórica de atender la crisis de inseguridad que vive el país y lo hizo con dos decisiones que representan, no solo un retroceso, sino un riesgo para la vida institucional de México.

Lo que esta legislatura hizo, en menos de 48 horas, fue decidir, por un lado, prolongar una estrategia fallida en materia de seguridad mediante la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior, y por otro lado, cancelar la posibilidad de fortalecer a las policías e instituciones civiles de seguridad en los tres órdenes de gobierno con el rechazo a la minuta de mando mixto el día de ayer.

Con esta doble decisión el PRI y sus aliados convertirán en ley una política pública fracasada, que ya demostró sus limitaciones y sus equívocos durante más de una década, convertirán un problema coyuntural en un círculo vicioso por decreto. La prolongación de esta política pública fallida en materia de seguridad es la apuesta equivocada, porque no ha brindado mayor seguridad y tranquilidad, porque ha intensificado un patrón de violaciones de los derechos humanos y porque expone a las Fuerzas Armadas mexicanas a situaciones que no deberían de parecer.

La prolongación de esta política fallida no ayuda a México, no ayuda a nuestras Fuerzas Armadas y no aportará mayor seguridad a los mexicanos. Pero además, detrás de esta doble decisión del PRI y de sus aliados, hay una tragedia y un problema de fondo, que el Estado mexicano está renunciando por decreto a la aspiración de tener policías más fuertes, coordinadas y eficaces. Está renunciando a construir una política de seguridad democrática duradera y confiable.

Y la pregunta que nos hacemos es si esta es la apuesta y la aspiración del PRI para los próximos años, si esto es lo que quiere su virtual candidato a la Presidencia de la República o si lo que quieren más bien es descarrilar el país, sabedores de su inminente salida del poder.

Por todo esto es que Movimiento Ciudadano respalda las voces de quienes le han exigido a este Congreso implementar una moratoria legislativa en la agenda de seguridad y discutir de manera integral todas las aristas que envuelven este fenómeno y hacerlo de manera abierta.

Finalmente, con esta Ley de Seguridad Interior simplemente se legisla y se prolonga una situación que de facto ha sucedido en el país durante los últimos años, pero esta Legislatura nada está haciendo para fortalecer a las policías de los tres órdenes de gobierno, nada está haciendo para garantizar la plena autonomía del sistema de procuración de justicia y nada está haciendo para acabar con el ciclo de violaciones a los derechos humanos. Nada está haciendo para implementar soluciones duraderas que enfrenten la crisis de inseguridad y de violencia.

Por eso, compañeras y compañeros diputados, Movimiento Ciudadano votará en contra, porque la guerra no hace la paz. Votaremos en contra porque no vamos a dejar que unos cuantos nos roben el futuro a millones de mexicanos. Muchas gracias.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Clemente Castañeda.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias, presidente; con su permiso.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.

La diputada Sofía González Torres: No vamos a hablar de aliados en esta tribuna feliz de la vida. Vamos a hablar de dos aliados que tiene el partido que me antecedió de la palabra, que fueron los dos partidos que iniciaron con todo esto. Fueron los dos partidos que decidieron sacar al Ejército a las calles sin ningún tipo de reglamentación, sin ningún tipo de certeza jurídica. Eso es, y es por esa decisión de esos aliados que ustedes decidieron tener en este momento que estamos aquí discutiendo esta ley.

Lo primero que quiero hacer, señor presidente, compañeros diputados, es dar un reconocimiento a las Fuerzas Armadas que en todo momento han cuidado a los mexicanos, a sus instituciones. Han sido leales, tienen patriotismo. Recordemos que ellos también son mexicanos que entregan su trabajo todos los días por cada uno de nosotros.

Este es el momento indicado para atender la demanda de la ciudadanía, de los gobernadores, incluso de las mismas Fuerzas Armadas de legislar sobre su actuación en el cumplimiento de su deber. Presidente, por favor.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Pedimos orden a la asamblea por favor. Continúe, diputada.

La diputada Sofía González Torres: Es solamente con unidad nacional que podremos vencer las amenazas que ponen en riesgo a los mexicanos y a nuestras instituciones. Así le vamos a poder dar mejor resultados a la ciudadanía, y además establecer un marco jurídico que sea eficaz para que cada una de las autoridades empiece a cumplir con lo que de verdad tiene que hacer.

La facultad de legislar en materia de, perdón, la facultad que tenemos en materia de seguridad interior está dentro de la Constitución en el artículo 73 en la fracción XXXI.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Permítame, diputada Sofía. Solicitamos orden a la Asamblea, por favor, la tolerancia que se les está dando a todos los oradores. Adelante, diputada.

La diputada Sofía González Torres: La seguridad interior como parte de la seguridad nacional representa un área estratégica en la atención de los riesgos y de las amenazas por agentes internos que pone en riesgo el orden constitucional del estado de derecho, la gobernabilidad democrática de las instituciones de nuestro país.

Es importante dejar muy claro que la seguridad pública es muy distinta a la seguridad interior, ya que estos dos conceptos en uno estamos hablando de instituciones y en el otro estamos hablando de la seguridad de las personas. ¿Pero qué pasa cuando la seguridad pública se ve rebasada por el cumplimiento de brindar paz a los mexicanos? Ahí es donde encontramos la utilidad de la seguridad interior como una solución al combate de estas amenazas, cuando las capacidades de las autoridades municipales y también de las autoridades estatales se ven rebasadas y requieren apoyo de las fuerzas federales. Así debemos dejar claro que las Fuerzas Armadas van a atender al principio de gradualidad.

Basta también recordar que han sido los gobiernos de fuerzas políticas que hoy se oponen a esta ley, los que solicitan con urgencia y apremio el apoyo de las fuerzas armadas al verse rebasados por las amenazas del crimen organizado en sus territorios. Debemos ser congruentes con el discurso y las acciones que se realizan, basta de ser hipócritas, basta de decir mentiras al pueblo en esta tribuna.

Es importante hacer referencia a las diversas voces que se escucharon a través de la discusión de estas leyes. Se hicieron nueve foros con autoridades de todos los niveles de gobierno, con organismos internacionales, con expertos académicos, con organizaciones sociales; así también como que se fijaron diferentes propuestas legislativas que ni siquiera se presentaron en esta Cámara, como fue la del senador Barbosa y la del senador Gil Zuarth.

El espíritu de esta ley se conducirá bajo principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, subsidiariedad, gradualidad y temporalidad. Este último, el de temporalidad, es un principio que resulta de especial relevancia, debido a que fija la duración que deberá de tener la participación de las fuerzas federales en el auxilio de las autoridades estatales o municipales como lo hayan solicitado. Cada una de las amenazas que vamos a ver o en lo que van a ver estas autoridades, van a ser diferentes, cada una diferente a la otra, es por eso que se tienen que seguir estos principios, no todas son iguales y tenemos que saber atenderlas poco a poco y cada una con su debida protección.

Es importante también señalar que las tareas de seguridad interior serán tomadas como última ratio para la atención de las amenazas de las instituciones del Estado y de la ciudadanía. Esta ley establece mecanismos muy estrictos para la intervención de las Fuerzas Armadas, además de fijar una coordinación estrecha entre las autoridades involucradas.

Compañeras y compañeros diputados, debemos dejar a un lado el miedo de asumir las responsabilidades que cada una de las autoridades corresponde asumir las tareas de seguridad.

El origen de esta ley proviene de la insuficiencia y la falta de actuación de las autoridades municipales y estatales sin importar colores partidistas. Se necesita brindar protección a los ciudadanos.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor el presente dictamen, que sin duda, apoyará a recuperar el orden constitucional y la estabilidad democrática de nuestro país, fijará las responsabilidades de cada una de las autoridades del Estado mexicano, y lo más importante, brindará certeza jurídica a las Fuerzas Armadas y a cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias, presidente.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Sofía González Torres.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros. Morena votará en contra del dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior porque legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden civil, carece de sustento constitucional, militariza el país y otorga autonomía de los poderes civiles a las Fuerzas Armadas en sus funciones en materia de seguridad pública.

No podemos ignorar que el artículo 21 constitucional establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que también la Constitución establece en el artículo 129 que el ejercicio, disposición expresa sobre el ejercicio de la autoridad militar en tiempos de paz, y que a la letra dice: ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones de las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Tampoco podemos soslayar las observaciones presentadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la propia Comisión Nacional, que han expuesto que esta ley también es contraria a instrumentos y observaciones de organismos internacionales.

Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de seguridad interior son cuestiones del ámbito de la seguridad pública, cuya función se encuentra a cargo de la federación, de las entidades federativas y los municipios.

La ley que se propone no conceptualiza la intervención de las Fuerzas Armadas como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, por el contrario, estamos legislando para permitir su permanencia. Esta ley perpetuaría el Estado de excepción, en el que nos encontramos desde hace más de 10 años.

También la Ley de Seguridad Interior es inconvencional, contraria a instrumentos y observaciones de organismos, como: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en diciembre de 2009 así lo establece.

Tan es así que el artículo 16 de esta ley, que establece que en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el presidente de la República, bajo su estricta responsabilidad podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la administración pública, incluidas las Fuerzas Armadas.

Una legislación que dote de atribuciones a las Fuerzas Armadas para realizar funciones de investigación y persecución de delitos son contrarias a la Constitución. Aprobar esta ley va a derivar en el debilitamiento del sistema de justicia penal, tanto por las garantías del debido proceso como en el supuesto de la presunción de inocencia.

Es decir, obviando cualquier trámite, se otorgan facultades discrecionales al presidente para ordenar acciones que impliquen el uso de las Fuerzas Armadas sin que haya existido declaratoria de protección. Recordemos que Peña Nieto es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, es responsable directo de las acciones que realiza el Ejército.

Pero sobre todo votaremos en contra porque significa la repetición de los mismos errores de una guerra iniciada por Calderón y el PAN. Se normaliza la excepción, se mantiene al Ejército en las calles realizando funciones distintas a su naturaleza y se muestra la incapacidad para fortalecer y profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal y federal.

A 11 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico, ni ha disminuido la criminalidad ni el tráfico de drogas, por el contrario, la delincuencia se ha diversificado, ha ganado control territorial, ha hecho base social, ha infiltrado corporaciones civiles y militares. El saldo es el terror. Hay que decirlo claro, la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales no ha logrado su propósito de acabar con la delincuencia organizada ni ha generado mayor seguridad.

Lo que tenemos que cambiar es que, pese al esfuerzo que se ha hecho, seguimos teniendo muy pocas averiguaciones previas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la producción y el comercio de drogas. El saldo de muertes y violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas ordenadas directamente por Peña Nieto nos obliga a revisar su papel y a buscar su regreso a los cuarteles. La mejor forma de cuidar a nuestras Fuerzas Armadas es retirándolas paulatinamente de las funciones de seguridad pública, ello evitará su infiltración por parte de las bandas criminales.

Para abatir el clima de inseguridad se requiere un viraje en las políticas públicas que pongan acento en la seguridad humana a cargo de autoridades civiles. Para Morena es necesario dejar en claro que México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia.

El Estado mexicano debe priorizar eminentemente el carácter civil, un trabajo profundo y sistemático para robustecer las fuerzas de seguridad pública en los estados y municipios el reto es inmenso.

Para acabar con la hidra de Lerna, Hércules requirió de la ayuda y del ingenio de Iolaus. No fue la fuerza sino la inteligencia la que logró derogar a este monstruo de mil cabezas. Eso hará Morena a partir de julio de 2018, vamos a serenar al país. Pueblo de México, ya falta poco.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Ernestina Godoy.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Rafael Hernández Soriano: Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.

El diputado Rafael Hernández Soriano: El dictamen que hoy pone a nuestra consideración la Comisión de Gobernación, no solo es cuestionable en su contenido, constituye un verdadero atentado a la Constitución General de la República y a todo el marco convencional que nos rige. No solo cuenta con la oposición de más de 250 organizaciones nacionales e internacionales, sino que ha logrado que tanto la representación del alto comisionado de las Naciones Unidas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncien en contra de su aprobación, señalando que puede dar origen a graves violaciones a los derechos humanos, abusos por parte de las fuerzas del orden y a la desestabilización de nuestra incipiente democracia.

Lo decimos con claridad, el Grupo Parlamentario del PRD reconoce el heroísmo de las Fuerzas Armadas, lo hemos dicho en muchas ocasiones y, especialmente, el día de hoy. Sin embargo, lamentamos que el grupo parlamentario del presidente, como ellos mismos se califican, los haya engañado diciéndoles que con esta ley se resolverán los problemas a los que enfrentan.

El propio general secretario de la Defensa ha señalado en muchas oportunidades que las Fuerzas Armadas se encuentran hoy en las calles y que ello deriva en un problema mayor de la seguridad pública, la oportunidad de redefinir la relación entre los diversos órdenes de gobierno en materia policial quedó clausurada el día de ayer, cuando el priismo votó en contra a la minuta de reforma constitucional en materia de mando mixto, cancelando con ello la posibilidad de que se reinstaure la normalidad democrática de nuestro país y de que las Fuerzas Armadas regresen paulatinamente a los cuarteles.

Ténganlo presente, si aprueban esta ley no solo no van a resolver el gravísimo problema de seguridad pública que tenemos, sino que van a perpetuar la presencia militar en estas labores policiales, ya que este ordenamiento no contiene ningún incentivo, para que tanto los gobiernos de los estados como los municipios atiendan lo que les corresponde y cumplan con las obligaciones que les confiere la Constitución.

La ley que hoy se propone aprobar no es constitucional, porque el Congreso no tiene facultades para ello, aunque vengan a aquí a sostener que las tiene no nos da facultades la Constitución para este fin, porque compromete también el Estado de derecho y violenta el régimen federalista y a su cédula fundamental, el municipio libre.

Atribuye su propuesta obligaciones y responsabilidades a estos niveles de gobierno sin que medie la autorización constitucional respectiva, contraria resulta al marco convencional debido a que establece un estadio intermedio entre la normalidad democrática y la suspensión de garantías que supone la actuación supletoria subsidiaria de las Fuerzas Armadas, esto en detrimento de las atribuciones constitucionales y legalmente concedidas a las entidades federativas y a los municipios, que no existe legalmente, lo cual constituye requisito fundamental para garantizar la vigencia de los derechos humanos, según lo establece el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

La propuesta que nos hace llegar el presidente y su partido confunde conceptos, no existe claridad teórica ni tampoco abona nuevas definiciones, no aporta nada nuevo y al contrario revuelve conceptos contenidos en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley de Seguridad Interior que nos proponen.

Es discrecional y opaca, posibilita al Ejecutivo actuar sin ninguna autorización, saltándose incluso a las que hoy pretenden que se apruebe, y resguardándose las espaldas clasifica toda información que se genere a partir de la aplicación de esta ley, como reservada por motivos de seguridad nacional.

Adicionalmente, el proyecto en comento no contempla ningún sistema de pesos y contrapesos que debe existir en un sistema democrático y en consecuencia no establece mecanismos de control que regulen la actuación de quienes ejercen el mando de nuestras instituciones, lo cual resulta imprescindible para evitar recesos y discrecionalidades.

La ley que hoy discutimos carece de cualquier elemento de este tipo, generando no solo opacidad, discrecionalidad y abusos, los cuales quedarán en la impunidad.

Es por lo anterior que nosotros, el Grupo Parlamentario del PRD, expresamos nuestro contundente rechazo al dictamen que se nos pone hoy a consideración. Reiteramos, sí, nuestro compromiso con la ciudadanía...

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Concluya, diputado.

El diputado Rafael Hernández Soriano: ... para seguir buscando los mecanismos que nos permitan solucionar desde su raíz el problema de la seguridad en México, y generando condiciones para que las Fuerzas Armadas regresen a las labores que constitucionalmente les corresponden.

Nos sumamos a las voces que exigen seguridad sin guerra. Nos sumamos a las voces que exigen equilibrio entre los poderes, aquellos que exigen la seguridad de todas y todos los mexicanos sin exceso de poder autoritario del Ejecutivo federal. Es cuanto.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano.

El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso, diputado presidente. El Partido Acción Nacional hace unos momentos ha votado en contra del dictamen que se pone hoy a consideración del pleno, por la mayoría de sus integrantes en la comisión, porque creemos que este dictamen plantea convertir lo permanente en lo habitual, contempla convertir lo extralegal en legal.

Las Fuerzas Armadas no están preparadas para llevar a cabo labores policiales. Cuentan con todo nuestro respeto, cuentan con todo nuestro agradecimiento y lo valoramos de manera constante cada vez que reconocemos este trabajo.

Este dictamen, además de que ha sido desaseado en su procedimiento, ha habido poco tiempo de socialización, ha habido poco tiempo para su análisis, y además, ha sido cambiado en repetidas ocasiones, hace oídos sordos a las recomendaciones que han hecho la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de los Derechos Humanos, cerca de 250 organizaciones no gubernamentales y 11 organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que propone que no haya labores policiacas elaboradas por las fuerzas militares, por las Fuerzas Armadas, por el Ejército y por la Marina.

El día de ayer el PRI y sus aliados, incluyendo a Morena, que se abstuvo, rechazaron la minuta de la Cámara de Senadores, del Senado de la República sobre el mando mixto, anulando de facto cualquier posibilidad de diseñar un modelo en materia policial y de mandos. Lo hicieron acompañando una consulta popular aprobada también en la Comisión de Gobernación con preguntas sesgadas. Una pregunta y una consulta, que de facto también la ubican al Estado mexicano en su obligación de diseñar este modelo de seguridad pública.

Sin este modelo adecuado, sin esta reforma policial, no podemos aceptar la aprobación de este dictamen. Sin mando mixto no podemos acompañar la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior. Sin la reglamentación del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de garantías no puede ser acompañado.

Aquí ha venido a hablarse, en esta tribuna, del sexenio anterior. Que si el sexenio anterior fue el origen de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, y la verdad es que esto es cierto. Me permito recordarles al partido de la mayoría y a sus aliados que durante el sexenio anterior, cuando esto sucedió, se propuso también una Ley de Seguridad Interior y fue el PRI el principal opositor de la misma.

No solo se proponía esta Ley de Seguridad Interior, sino que estaba bien hecha, iba acompañada de una reforma policial y a nuestros mandos de seguridad. Y aun así fue rechazada en una actitud por demás mezquina.

Hoy el PRI añora esos momentos. Sí, señores, hoy el PRI desea que regresemos al pasado. El PRI, señoras y señores, se ha vuelto más calderonista que Felipe Calderón en materia de seguridad pública. Acéptenlo, desean regresar al pasado con todas sus fuerzas.

Lo que buscamos es respeto pleno a los derechos humanos. Lo que buscamos es transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los operativos. No queremos más ejecuciones extrajudiciales, no queremos más abusos. Queremos policías más capacitadas. Queremos que nuestras Fuerzas Armadas lleven a cabo las funciones para las cuales fueron diseñadas y ni una más y ni una menos. Por eso, no podemos hacer oídos sordos a estas solicitudes de la sociedad civil. No podemos darles la espalda a miles de ciudadanos.

Hoy se dispensaron trámites para poder acelerar el proceso de discusión y votación de este dictamen. Hoy, hubo un albazo legislativo, hubo un fast track para poderlo apoyar. Hoy, hubo mucha prisa para poderlo llevar a cabo. Nos hubiera encantado ver la misma prisa cuando se propuso, sin voto no hay dinero, y cuando se propuso también esta iniciativa ciudadana de la Ley Tres de Tres, que fue cercenada aquí mismo en la Cámara de Diputados. Nos gustaría que hubiera la misma celeridad para las iniciativas de retiro del fuero constitucional a los diputados o las prerrogativas públicas y el financiamiento público a las mismas, pero no.

Sabemos que el PRI y sus aliados son partidos de coyuntura y la coyuntura ahora les dicen que quieren al Ejército en las calles perpetuado y nosotros por eso no acompañaremos esta propuesta. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias al diputado Triana Tena. Informo a la asamblea que al concluir la intervención termina el plazo para la presentación de reservas, lo que significa que cumpliéndose el tiempo establecido no se admitirán más reservas.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, por el Partido Revolucionario Institucional.

Voy a suplicar, muy atentamente a los diputados, guardar la debida tolerancia y referirse a sus compañeros con el debido respeto. Gracias, diputada. Adelante.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, la seguridad nacional instituye una garantía de bienestar social y plenitud humana, cuya preservación constituye una función política de carácter superior del Estado mexicano, a cargo del presidente de la República.

Esta seguridad interior tiene por objeto de protección o bien jurídico tutelado, el orden interno, entendido como la justa aplicación de las leyes y la observancia de las mismas. Con la expedición de esta ley se definen y regulan los supuestos de intervención de dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento del orden y la seguridad interior, con el propósito de responder a su alcance y evitar confusiones en las tareas con seguridad pública.

Existe plena justificación constitucional en el artículo 73, fracciones XXIX, apartado N; y XXXI para la competencia de esta Cámara, a fin de legislar en el tema. Igual en la facultad que tiene varias Constituciones vigente, que le concede al presidente en la fracción VI del artículo 89 la disposición de las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas. El problema es que no hay ley que regule esa facultad, que la desarrolle.

Por eso, ante la ausencia de una ley que defina con claridad el objetivo que busca alcanzarse con la seguridad interior, hay que garantizar la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones, el

desarrollo nacional y el mantenimiento del estado de derecho y gobernabilidad democrática en beneficio de la población.

Se ha venido faltando a la verdad en esta tribuna por algunos compañeros, y los invito a que por favor lean completa la ley. Ahí se reglamenta la facultad del presidente de la República para cumplir, como lo manda la propia Constitución, con la declaración fundamentada y motivada, y eso los abogados lo saben muy bien, con circunstancias de tiempo, modo y lugar para la intervención de autoridades federales incluyendo Fuerzas Armadas. Ofrece mayor certidumbre jurídica a la actuación de las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas en beneficio de la población civil.

La declaratoria de protección de seguridad interior que emitirá el presidente será el último recurso. Las acciones de auxilio que se realicen en el marco de ella no serán permanentes, su naturaleza es transitoria. Las Fuerzas Armadas no sustituirán las responsabilidades primarias de las instancias del gobierno federal, estatal o municipal.

Que no confundan a la ciudadanía. A lo único que el Estado mexicano está renunciando es a la discrecionalidad y a la opacidad, dándole seguridad y certidumbre jurídica a la ciudadanía. Se establecen mecanismos de revisión y evaluación internos, por favor léanlos.

Se señala participación del Consejo de Seguridad Nacional, y externos, la Comisión Bicamaral de este mismo Poder Legislativo. Y desde luego, desde la emisión de la declaratoria queda expedita la vía legal para acudir al Poder Judicial, lo cual hoy no se puede realizar por ninguno de nosotros.

Bajo ninguna circunstancia se concederá como afectación a la seguridad interior las movilizaciones de protesta social que tengan motivos políticos electorales, se dice expresamente, se distingue entre seguridad interior y seguridad pública. Y el presidente podrá realizar la declaratoria bajo dos modalidades: de manera directa por su facultad constitucional y a petición de las legislaturas de los estados y del Ejecutivo.

Hay un principio de autoridad compañeros en este país, nadie puede hacer siendo autoridad lo que no le competa a la ley. Y el acuerdo de la declaratoria se va a notificar por conducto del secretario de Gobernación a la Comisión Bicamaral de este Poder Legislativo, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aquí hago un paréntesis. Nosotros respetamos mucho al organismo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero le pedimos a su titular que lea con detenimiento los artículos 2, 7 y 30, que expresamente proscriben la alteración a los derechos humanos.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya diputada.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aquí se ha mentido mucho, a menos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos a lo que le tema es que hoy que ya se les va a vincular con la declaratoria al notificarles es a tener mayor trabajo y necesidad de intervención. O a menos de que le acomode que las actuaciones que se estén realizando sean, se sigan realizando al margen de la ley.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya diputada.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Concluyo, presidente. Los priistas por supuesto que votaremos a favor de esta iniciativa, porque a despecho de algunos compañeros que han venido aquí que tiran la piedra y esconden la mano, nosotros si respetamos y reconocemos el trabajo de las fuerzas federales y del Ejército, porque ellos han dado muestras de sobra de su entrega a favor de México y el PRI está de su lado.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias diputada Martha Tamayo. En este momento se ha cerrado ya la recepción de reservas y la mesa de Servicios Parlamentarios procederá a enlistarlas.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Mientras tanto, pasaremos a la discusión en lo general, que por acuerdo de la Mesa Directiva y los grupos parlamentarios concede dos turnos a los grupos parlamentarios que están en contra, un turno a los grupos parlamentarios que están a favor, y preguntaré a los señores coordinadores si estarían de acuerdo en concederle un turno al diputado independiente.

Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Movimiento Ciudadano, para hablar en contra, hasta por tres minutos, diputado.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la discusión que hoy se está dando no es cualquier discusión, se trata de lo que está ocurriendo hoy en el país y de lo que va a seguir ocurriendo en el futuro.

Esta ley que hoy se discute, de entrada, es un parche en la Constitución, porque el 129 constitucional es muy claro, en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no podrían estar en las calles.

El 73 constitucional no nos da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior, eso implica que esta ley nace de origen inconstitucional, y el 29 constitucional que habla de la suspensión de garantías debiera darse en este momento esa discusión, porque esta ley va a violentar los derechos humanos y las garantías individuales.

El debate que tendríamos que dar hoy, es el debate de la seguridad pública que necesita el país. Ese mismo debate, esa discusión de la ley de un nuevo modelo de seguridad que ayer el PRI y sus aliados sepultó en la comisión de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

Ese es el interés del PRI por realmente cambiar las condiciones en las que vive México Le dio la espalda a los ciudadanos como siempre lo ha hecho. Hoy cumplimos más de 10 años con estrategias fallidas en seguridad, desde que a Felipe Calderón se le ocurrió declarar la guerra, y eso trajo como consecuencia que hoy más de 120 mil mexicanos fueran masacrados.

Pero, contrario a lo que prometió Peña Nieto, continúo con la guerra, pero ahora una guerra silenciosa. Hoy México padece esta situación con más de 234 mil mexicanos muertos por esa estrategia fallida. Ese es el presidente que prometió la paz, pero condujo a la guerra. Esa es la herencia maldita del PRI y sus aliados, un Estado fallido y sin rumbo.

A ustedes, a ustedes priistas, el país se les está cayendo a pedazos. Esta es una ley que no dará respuesta ni mejorará la inseguridad. Esta es la herencia que ha roto todos los record de impunidad. Ustedes son quienes debilitan con esta ley a las instituciones. Las Fuerzas Armadas son el último recurso de cualquier país para resolver la delincuencia.

Los mexicanos no merecen seguir viviendo con miedo y terror. Los mexicanos queremos la paz, no la guerra. La mal llamada Ley de Seguridad Interior no resuelve ni resolverá los problemas de inseguridad en el país, por el contrario, los agravará.

Las fuerzas civiles seguirán debilitadas e infiltradas por el crimen. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo hoy, discutiendo el modelo de seguridad, viendo cómo fortalecemos nuestras fuerzas de seguridad en los municipios y en los estados, y en el país, no buscando el último recurso que tiene cualquier país, que son las Fuerzas Armadas, y con esto minando su credibilidad.

La violación a los derechos humanos con esta ley se agravará y estaremos seguramente peor que hace 10 años, cuando se inició la llamada o la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Con esta ley el PRI y sus aliados vuelven a mostrar su verdadero rostro, ese rostro autoritario, a quienes no les importa la seguridad de los mexicanos ni el respeto a los derechos humanos.

El país está sin rumbo, como un barco a la deriva y sin capitán, está sin gobierno. Señores legisladores del PRI y, también legisladores, sus aliados, no le hagan más daño al país. La paz no se construye con la guerra.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Víctor Manuel Sánchez. Tiene la palabra el diputado Virgilio Caballero Pedroza, hasta por tres minutos para hablar en contra. Don Virgilio Dante Caballero Pedraza tiene el uso de la palabra. La Mesa hace la corrección respectiva. Adelante, diputado.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Compañera y compañeros diputados, la mayoría parlamentaria impuso la discusión de la Ley de Seguridad Interior atendiendo a una intencionalidad de los jefes de la Fuerza Armada permanente, que es dotarla de un marco jurídico que le permita realizar las actividades relativas a la seguridad pública, que tiene indebidamente encomendadas por el presidente de la República desde hace 11 años.

Al mismo tiempo, esa mayoría parlamentaria desatiende la opinión, la visión, las recomendaciones, las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, tanto de instituciones de educación superior públicas como privadas, que se han manifestado en contra, de los representantes de organismos internacionales como la ONU y la OEA, y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes coinciden en un no rotundo a la militarización de la seguridad pública en nuestro país.

Todo ello refuerza la idea de que esta ley está dedicada a las Fuerzas Armadas para encubrir sus acciones contra el narcotráfico sin la necesidad de observar las disposiciones relativas a la protección de los derechos humanos, las obligaciones administrativas que generan su actuación, la rendición de cuentas y menos aún la transparencia. Es decir, las acciones de las Fuerzas Armadas serán cobijadas por una impunidad impenetrable.

Esa es su condición para continuar en la lucha contra el narcotráfico y la mayoría parlamentaria está cediendo a esa presión sin considerar las consecuencias y es que la aprobación de esta ley traerá consecuencias graves, entre ellas la violación inaceptable a un principio básico de constitucionalidad en que se sustenta la república; el principio de la supeditación de las instituciones militares a la autoridad civil.

Históricamente, la estabilidad de la nación se ha sustentado en la observancia continua de este principio, pero ahora ocurre que la autoridad civil está dispuesta a abdicar de las obligaciones y facultades que le confiere en exclusiva el artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública, y transfiere mediante esta ley esas facultades y obligaciones a las instituciones militares, con lo que rompe peligrosamente ese equilibrio que había dado viabilidad a la nación mexicana.

El dictamen muestra riesgos inmediatos derivados de su ambigüedad. Por ejemplo, ¿de qué habla cuando dice que las acciones de seguridad interior son aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior? ¿Cuáles son esas amenazas y esos riesgos de que habla? Y responde los contenidos en la agenda nacional de riesgos, pero resulta que la agenda nacional de riesgos es un documento secreto que solamente conocen el presidente de la República...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputado.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:... y el secretario de Gobernación, de lo que se colige que las acciones de seguridad interior se decidirán discrecionalmente solo por estos dos funcionarios, y para cerrar el círculo, todas esas acciones se considerarán información de seguridad nacional, a la que la sociedad no tendrá acceso, pues la transparencia, el derecho a la información y la rendición de cuentas son por completo ajenas a las disposiciones de esta ley.

–Termino–. Los diputados de la mayoría, al ceder a la presión de las Fuerzas Armadas y votar la Ley de Seguridad Interior, están empeñando el futuro de nuestra nación y, al parecer, no se dan cuenta.

Por ello quiero alertar sobre el hecho de que estamos discutiendo y votando una ley caracterizada por la ambigüedad, el secretismo, la opacidad y el sigilo, una ley que genera impunidad y violaciones a los derechos humanos, sin contrapeso alguno.

Hagámonos cargo de que hoy por hoy la seguridad pública es el lema más sensible de nuestra sociedad y no le estamos haciendo un favor al dejarlo en manos de los militares. Por todo ello, en Morena votaremos en contra de este dictamen. Gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Omar Ortega Álvarez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, por supuesto que el voto del Partido de la Revolución Democrática será en contra de esta ley, dado que tendríamos que ser muy claros, compañeros legisladores.

Hace 11 años que las Fuerzas Armadas se encuentran en el territorio mexicano y hasta el día de hoy encontramos un Estado mexicano fallido, donde cada día hay más inseguridad, donde cada día hay más temor, hartazgo e inseguridad de todos los mexicanos.

Y hoy se quiere aprobar una ley, ¿con qué finalidad? ¿Para garantizar los intereses de las empresas privadas con la reforma energética, que hoy tendrá que ser el Estado mexicano el que garantice sus inversiones, tal y como se señala en el artículo 6o., fracción VI de esa propuesta de ley? O, ¿será que vamos a reconocer que el Estado mexicano está en guerra y que requerimos que las Fuerzas Armadas tomen la seguridad y la soberanía y la autonomía del país? O, ¿vamos a reconocer que la delincuencia organizada ya alcanzó tales escenarios que es imposible que no tengamos un Estado de excepción institucional donde solamente se vulneren todos los derechos humanos de sus gobernados? Es la pregunta que tendríamos que hacernos todos y cada uno de nosotros legisladores.

Hoy se viene a defender históricamente la importancia de darle armas o elementos suficientes a las Fuerzas Armadas, para que puedan combatir este flagelo de la inseguridad, pero la pregunta sería, ¿y por qué el día de ayer en las comisiones unidas, donde se vio el mando mixto coordinado, que iba a dar coordinación, supervisión y elementos para fortalecer todas las corporaciones municipales, estales y federales, votaron en contra?

Hoy pareciera que es un tema nada más de capricho o es un tema electoral, quedará en ustedes, legisladores, pero hoy es el momento de demostrar que hay congruencia, que hay interés y que se quiere a México, por ello el PRD votará en contra de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Omar Ortega Álvarez.

A favor del dictamen se le concede el uso de la palabra, por tres minutos, al diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Y mientras llega a esta tribuna, quiero saludar a los alumnos de las licenciaturas en Derecho y Ciencias Políticas de las universidades, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus Libres, y la UNI, también universidades. Invitados por nuestro compañero, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues. Sean ustedes muy bienvenidos. Adelante, diputado.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, diputada presidenta. Bla, bla, bla, bla, bla escuchamos a los partidos de izquierda, y siempre subir a presumir que van a votar en contra, porque en verdad, en verdad ellos sí se preocupan por el país. Pero son incapaces de reconocer jamás una acción en el sentido correcto. Son incapaces de reconocer que la realidad de nuestro país requiere de que hagamos lo que se puede con lo que se tiene. Y lo que hoy tenemos es un ejército y por supuesto una institución...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Permítame, diputado, por favor. Permítame, le suplico. Les pido nuevamente y les reitero tolerancia al orador en turno.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Bla, bla, bla, bla.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, diputado.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla bla. Denle. Denle, no pasa nada. La realidad es que siempre votan en contra absolutamente todas las iniciativas. Los hechos son que necesitamos aun tener a las Fuerzas Armadas en las calles porque ciertamente, ciertamente las autoridades municipales, estatales emanadas de todos los institutos políticos, sin diferencia alguna, no han sido capaces de capacitar y de preparar a las fuerzas policiales. Es una realidad...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado, permítame. Una moción de orden a las diputadas y diputados.

El diputado Arturo Álvarez Angli: ... que hoy el Ejército, siendo una institución honorable requiere de un marco legal que regule y dé certeza a sus actos, aunque los partidos de izquierda sigan...

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputado Álvarez Angli. Señores diputados, si son tan amables, regresemos al orden para que la sesión se siga desahogando en los términos que iba.

Suplico a los oradores, recuerdo a los oradores que no hay diálogo, ningún tipo de diálogo. Referirse específicamente al público implica diálogo.

Suplico a los respetables diputados mantener el orden que establece el Reglamento.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias. Gracias, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si son tan amables, diputados, hemos escuchado distintas expresiones, las seguiremos escuchando. Es un debate donde debe quedar manifiesta no solamente la postura de los diputados, también la calidad de sus expresiones. Suplico al orador y al público guardar el nivel que esta Cámara requiere. Adelante, diputado.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, presidente. Lo cierto es lo que la historia en los últimos 11 años...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Señores diputados, nuevamente hago un atento llamado a que se respete el recinto, esta Cámara, el Reglamento y el debate. Si son tan amables, señores diputados. Todos han tenido el espacio para manifestar la postura de su partido o la propia. Sean tan amables dejar que se expresen todas. Adelante, diputado Álvarez Angli.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, presidente. Es muy lamentable seguir escuchando las opiniones de la izquierda, que prefieren la inmovilidad en el país que intentar un nuevo cambio. Que intentar regular las acciones de una institución como lo es el Ejército, que requiere de certeza para poder seguir fortaleciendo, combatiendo y permitir que exista, entonces sí, un periodo de transición en la capacitación y obviamente fortalecimiento de las policías municipales y estatales bajo un esquema que debiera ser de un mando único.

Y por mientras, les damos todas las garantías a los delincuentes para que puedan reclamar y ampararse ante todos los actos del Ejército, por no estar regulados, no estar autorizados, en consecuencia, ganan absolutamente todos los juicios y terminan quedando libres.

La realidad es que solamente se oponen a que esté en la calle el Ejército o a la presencia del Ejército aquellos que tienen algo de qué esconderse y que le tienen algo que temer al Ejército. Esa es una realidad también irrefutable. No lo van a reconocer las izquierdas, pero bueno, como no reconocen absolutamente nada de lo que se hace.

Lo cierto es que a 11 años, que a mí me parece que de manera muy valiente pero muy atropellada también y de manera desordenada, Acción Nacional mandó a las fuerzas militares a la calle. Necesitamos darles certeza, necesitamos darles orden. Necesitamos que esto se inserte en una estrategia de seguridad nacional en donde puedan colaborar obviamente las fuerzas policiales y las fuerzas militares. El tiempo, perdón, pero me tomé más de un minuto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado. Le estoy reponiendo el tiempo que fue interrumpido. Adelante.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, presidente. A mí me parece de absoluta congruencia que reconozcamos que en este país necesitamos un marco legal que dé certeza a las acciones de las Fuerzas Armadas y de todas las instituciones que pueden ayudar y colaborar a mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país, sin importar de qué perfil se traten, necesitamos que todas sean capaces de coordinarse.

De esa manera, por supuesto que reiteramos nuestro voto a favor por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, porque estamos seguros que esta es una medida que va a avanzar, a hacer avanzar al país, en el sentido adecuado en el combate a la delincuencia organizada. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Álvarez Angli. Tiene la palabra el diputado Manuel Espino, también en pro. El diputado Espino interviene en su calidad de independiente. Me corrigen, efectivamente, de diputado sin partido. Adelante, diputado.

El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos: Gracias, presidente. Estimadas amigas y amigos, compañeros todos, de esta Cámara de Diputados. Me parece que si vamos a deliberar, a discutir, a debatir este tema, debemos intentar también a hacerlo con serenidad, con seriedad, porque lo único que estamos haciendo es calentar innecesariamente la discusión con argumentos que nada tienen que ver con el propósito de este proyecto de dictamen.

Quiero agradecer de manera especial a las bancadas del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, que durante algún tiempo recientemente me permitieron compartir con ellos puntos de vista sobre algo que coincidimos era necesario, darle a México una legislación en materia de seguridad interior.

Agradezco recientemente la misma apertura de la bancada del PRI. Agradezco especialmente a las Fuerzas Armadas. Tuve la oportunidad de platicar con mandos de la Marina, de la Sedena, para reflexionar, deliberar sobre las preocupaciones de la sociedad y de los partidos políticos en materia de seguridad interior. Agradezco que en el proyecto de dictamen se hayan subsanado las muchas deficiencias de la iniciativa original.

Reconozco en la bancada, que inicialmente promovió esta iniciativa de ley, de haber recogido muchas de las propuestas de quienes no estábamos de acuerdo con ese contenido original. Ahí en este dictamen hay propuestas que sugirieron legisladores de diferentes bancadas, eso hay que reconocerlo. No es perfecta. No es lo que queríamos para la legislación de seguridad interior que merece y necesita el país. No es perfecta, pero sería irresponsable dejar a México sin una legislación de seguridad interior.

No es válido venir con argumentos de que la guerra no justifica la paz. No estamos hablando de una guerra, estamos hablando de la intención de darles tranquilidad a los mexicanos.

Lamento que muchos legisladores de Acción Nacional, donde inicialmente se le declaró la guerra al crimen organizado y propició sacar a los militares a las calles, hoy estén en la indefinición respecto de darle a México certeza para cuando se requiera la participación de la federación en materia de seguridad interior en sus estados, en sus municipios, hoy no tengan la suficiente entereza para reconocer que este proyecto, aun cuando deficiente, es mejor que dejar al país como en este momento se encuentra.

No es verdad. Permítanme contradecir a quienes han venido a decir que esta iniciativa es violatoria a los derechos humanos, falso. No es verdad que pretende la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Al contrario, pretende regularlas mientras permanezcan ahí y sí se prevé que las autoridades locales recuperen sus capacidades por obligación legal para poder retirar a las Fuerzas Armadas de las calles.

No es verdad que es discrecional y opaca. Hay expresiones que descalifican el proyecto porque me parece que se ha partidizado el debate y se le está dando la espalda a la sociedad que reclama certeza jurídica en materia de seguridad interior.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Manuel de Jesús Espino: Ojalá recapacitemos y que el voto mayoritario sea a favor de esta Ley de Seguridad Interior. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Espino. Tiene la palabra el diputado Alejandro Ojeda Anguiano. Les recuerdo a los señores diputados que los días de debates largos las fotos son a mitad de precio. Si están más cerca el fotógrafo les toma más fotos. Adelante, diputado Ojeda.

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados. Saludo a los ciudadanos que nos siguen por el Canal del Congreso. Acudo a esta tribuna a expresar que el Grupo Parlamentario de Morena votará en contra del dictamen a la Ley de Seguridad Interior.

Ello por ser una ley que no respeta las formalidades constitucionales ni las legislativas, además de ignorar la regulación de la guardia nacional ya contemplada en la Constitución –ello lo expreso–, porque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe la figura de seguridad interior, no entiendo cómo es que se presenta una propuesta para crear una ley que no tiene respaldo constitucional. Este Congreso no puede legislar en materias que no existen constitucionalmente.

La figura que existe y que se omite a legislar es la Guardia Nacional, institución que dada su naturaleza en cuanto a capacitación y preparación, garantiza mayor eficiencia en materia de seguridad.

Este dictamen, como siempre de madrugada, trastocando las formalidades parlamentarias y aprobado en comisiones hace unos minutos dispensándose todos los trámites, se trae al pleno para su aprobación exprés; urgencia que solo refleja su temor y su desesperación por crear leyes que generen ambientes extraños en lo político y en lo electoral. De aprobarse esta ley se están preparando escenarios electorales poco confiables. Es cuanto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado don Alejandro Ojeda. Tiene la palabra el diputado David Gerson García Calderón.

El diputado David Gerson García Calderón: Está comprobado a nivel internacional que con la participación militar en tareas policiacas incrementan las violaciones a los derechos humanos. David Kaye, relator de derechos humanos de la ONU.

Con el permiso de la presidencia, con el permiso de las diputadas y de los diputados, a la gente que nos sigue por el Canal del Congreso y que nos sigue también por las redes sociales.

El día de hoy en este Congreso estamos en la antesala de ser la vergüenza nacional e internacional. El dictamen que se discute en este pleno va en contra de nuestra Constitución. La máxima ley de nuestro país, ya que no estamos facultados para legislar en materia de seguridad interior, y estamos en una crisis de inconstitucionalidad, aunque algunos diputados y diputadas quieran decir lo contrario, no estamos facultados constitucionalmente para legislar en esta materia.

Al aprobar el presente dictamen, estamos claudicando, sepultando a mejorar, a capacitar, a especializar a la policía de nuestro país, la policía civil desde el ámbito federal hasta el ámbito municipal, llevar las Fuerzas Armadas a la calle es característico de un Estado represor, autoritario y totalitario.

Hoy el Estado atraviesa una profunda crisis, ya que ha sido rebasado por la delincuencia y el crimen organizado en todas sus modalidades, por el descontento social a través de marchas y manifestaciones, la falta de empleo, la falta de políticas públicas incluyentes, entre otras.

Esto ha generado una crisis de acumulación a la falta de una visión de Estado. ¿Y cómo pretende el gobierno federal resolver esta crisis? Enviando al Ejército a las calles para poner en su lugar a todos, como el caso tan lamentable de Tlatlaya, de Ayotzinapa, y otros más. Que no se nos engañe a la sociedad civil, al Ejército Mexicano.

Con la aprobación de este dictamen no se está normando la regulación del Ejército en las calles. Existe la alta probabilidad de un cambio de régimen el siguiente año. Ante este escenario el gobierno federal pretende militarizar las calles del territorio nacional a fin de garantizar la permanencia en el poder. Y tiempo nos faltaría para seguir enunciando el por qué no deberíamos de votar esto de manera irresponsable.

Por eso el Grupo Parlamentario del PRD no acompañará este dictamen, porque llevamos y traemos a esta máxima tribuna el sentimiento de mucha gente, de millones y millones de mexicanos, de asociaciones civiles organizadas que dicen que aprobar esta ley es ir en contra de la Constitución, un tema de inconvencionalidad. No se contemplan mecanismos...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado David Gerson García Calderón: ...efectivos del control de las acciones ni jurisdiccionales ni parlamentario, el contenido de esta ley se traspala y confunde con lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, no existe una diferencia contundente entre los supuestos de aplicación de esta ley y aquellos que requieran la aplicación del mecanismo de restricción de garantías, y por muchas otras cosas más. Por eso no apoyaremos ni respaldaremos ese dictamen. Por su atención, muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Alejandro Domínguez Domínguez. Con el cerramos la lista de oradores.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con su permiso, señor presidente. Primero que nada quiero decir que mienten aquellos que señalan que no tenemos facultades para legislar en la materia.

La seguridad interior y la seguridad pública son temas que están dentro de la seguridad nacional, y tenemos facultades para legislar en materia de seguridad nacional. Por lo tanto, el que puede lo más, puede lo menos en un principio de derecho. De tal suerte que tenemos facultades amplias para poder legislar en la materia.

Mienten quienes dicen que no hubo diálogo con la sociedad. Desde enero de este año hemos estado llevando a cabo reuniones, foros, pláticas con organizaciones de la sociedad civil y con organismos internacionales.

Quienes no acudieron la convocatoria que la comisión nos hizo es responsabilidad de los legisladores, integrantes de la Comisión de Gobernación, que no atendieron la convocatoria que se hizo de manera oportuna.

Nosotros tenemos claro que en el centro de la discusión están los ciudadanos y el respeto de sus derechos humanos. No podemos hablar del libre ejercicio de los derechos humanos y de las garantías individuales si no tenemos la capacidad de garantizar seguridad. Los derechos humanos y la seguridad pública son principios elementales en este proyecto de Ley de Seguridad Interior.

Pregunto: ¿Cuántos elementos del Ejército andan ahorita en Tamaulipas? ¿Cuántos están en Chihuahua? ¿Cuántos están en Veracruz, en Guerrero? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque no tenemos un marco normativo que nos diga con claridad cuántos son, dónde están, qué están haciendo, qué están investigando y durante qué tiempo estarán atendiendo este problema de seguridad interior.

Por eso este marco normativo busca darle certeza al Ejército y darle certeza a los ciudadanos, respetando los derechos humanos pero también respetando el ejercicio de la facultad de ir garantizando seguridad a los mexicanos. Es un ejercicio desde luego que no viene a suplantar a ninguna autoridad.

Las Fuerzas Armadas vienen y van a entrar cuando la autoridad no tenga la capacidad de atender un problema en su municipio, en su entidad federativa o en una región del país, pero para esto tiene que haber una declaratoria planteada por el presidente de la República al Consejo Nacional de Seguridad, planteada por las legislaturas locales o por el Ejecutivo de una entidad federativa.

El marco normativo es claro, el marco normativo es preciso. Yo pregunto, de los partidos políticos que tiene gobernador de sus siglas, ¿cuántos gobernadores no quieren ya para ayer o para antier la presencia del Ejército en sus entidades federativas? Todos la quieren, demos pues el instrumento legislativo para que puedan hacer bien su trabajo. Demos pues el instrumento legislativo para que el Ejército tenga esa fortaleza, pero también para que el ciudadano tenga la certeza de cuántos son, dónde están y qué están realizando.

A esto nos convoca este debate, nos convoca a cumplirle a los mexicanos que nos eligieron y nos convoca a darle fortaleza a una institución de gran prestigio en este país, como lo son las Fuerzas Armadas. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Ha sido agotada la lista de oradores. Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra lo suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos.

Del 1, del numeral 1 al numeral 34, y los transitorios primero, segundo, tercero y cuarto. En otras palabras, toda la ley. La división, la numeralia de las reserva es la siguiente: El Grupo Parlamentario del PAN reserva cuatro artículos, el Grupo Parlamentario del PRD reserva 52 artículos, el Grupo Parlamentario de Morena 34, el de Movimiento Ciudadano 10, el Partido Encuentro Social 1, para hacer un total de 101 reservas, que serán presentadas por 44 oradores, cuatro del PAN, 22 del PRD, 11 de Morena, seis del Movimiento Ciudadano y uno del Partido de Encuentro Social.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: La diputada Maricela Contreras, su voto de viva voz.

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): En contra.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Siempre hemos concedido tiempo, señores diputados. Vamos a conceder un minuto adicional y cerramos el sistema. Adelante. Adelante, secretario, tome el tiempo. Digo, tome la votación.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 248 votos en pro, 115 en contra, con 48 abstenciones, de 411 diputados presentes.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor secretario. Entonces, quedan aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 248 votos a favor.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante. De conformidad con el artículo 110 de la Cámara de Diputados, vamos a concederle la palabra por cinco minutos al diputado David Gerson García Calderón, del PRD, que propone la eliminación de todos los artículos del proyecto de ley y sus cuatro artículos transitorios. David Gerson, tiene la palabra. Cinco minutos, diputado.

El diputado David Gerson García Calderón: Con el permiso de la Presidencia, con el permiso de las diputadas, los diputados y la gente que nos sigue por el Canal del Congreso y a través de las redes sociales. Le solicito respetuosamente a la Presidencia que mis reservas, tal y como las he registrado, en que he solicitado suprimir todos los artículos, sean insertadas íntegras en el Diario de los Debates.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Como usted lo solicita, sus reservas se insertan con el texto íntegro en el Diario de los Debates.

El diputado David Gerson García Calderón: Y que por economía procesal, o más bien por la limitación del tiempo, no podré abarcar todas las reservas que he presentado.

Hace algunos años un secretario de Hacienda, ante una recesión económica, decía que solo era un catarrito. Y para muchos mexicanos fue la pobreza. ¿Qué quiero decir con ello? Que existe la interpretación, depende del lado de donde estemos.

Esta ley que hoy se presenta en su artículo 4o., en la fracción III, dice a la letra: "...riesgo a la seguridad interior". Es decir, ¿qué se entiende por riesgo a la seguridad interior? Y dice la ley: "situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior". Yo pregunto, ¿quién va a interpretar esto? ¿Cómo se va a interpretar? ¿Qué vamos a entender por amenaza? Estamos dejando estas lagunas en la ley.

Es cierto que se está normando el tema de las movilizaciones de protesta social o que tengan un motivo político-electoral que se realicen prácticamente, pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo refiere el artículo 8, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.

Y lo señalé en la comisión, este articulado dice que se realicen pacíficamente. ¿Y qué pasa cuando el gobierno manda a desestabilizar ese movimiento pacífico? ¿Qué pasa cuando el gobierno manda a un grupo de infiltrados a meter desorden en ese movimiento civil pacífico? Se convierte automáticamente ya no en un movimiento pacífico. Y ante eso el Estado mexicano está en la posibilidad de meter al Ejército en ese movimiento, ¿por qué? Porque ya no es pacífico. Ante la aprobación de esta ley es lo que estamos provocando, que se militarice cualquier situación que no le convenga al gobierno federal.

Quiero comentarle a la opinión pública, a los ciudadanos, a los miles y miles de mexicanas y mexicanos, que esta ley se hizo al vapor en este Congreso y se hizo al vapor porque yo pertenezco a la Comisión de Gobernación, soy secretario de la misma, propuesto por mi grupo parlamentario.

Y les quiero informar que el texto íntegro, que el texto con las correcciones me llegó hoy en la madrugada. Muchos se paran y se jactan diciendo que se tuvo un año, que se convocó a foros. Yo le digo a la opinión pública que esto es mentira, porque el dictamen que hoy se votó en lo general, nos llegó a los diputados, a las diputadas, que pertenecemos a esta comisión, hoy en la madrugada. Así se hizo esta ley, de manera improvisada.

Por eso es necesario, y convocamos a que los diputados y las diputadas, reflexionen en el México que queremos. ¿En verdad amamos a nuestro país o seguimos una línea de gobierno? A eso los convoco para que a través de las reservas que hoy presento, reservas que llevan los sentimientos de mucha gente, de muchos luchadores sociales, de gente que ha luchado por la defensa de los derechos humanos, ha manifestado.

Yo los convoco a que seamos diputados, diputadas responsables con nuestro país, responsables al momento histórico que vive nuestro México. Desde aquí queremos decirles que no se confundan, que nosotros respetamos al Ejército, a la Armada a la Marina. Los respetamos y reconocemos su gran labor, su gran trabajo.

Lo que no vamos a permitir que el gobierno militarice las calles, que el gobierno tenga ese poder fáctico de represión. Por su atención, muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Gerson, doblemente gracias. Primero por su exposición y segundo porque se apegó usted al tiempo establecido por la mesa. Tiene la palabra la secretaria para consultar si se admite a discusión.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha –diputada, muchas gracias–. Tiene la palabra el diputado Ángel Alanís Pedraza por tres minutos.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza: Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza: Primeramente quiero dejar constancia de mi reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas mexicanas porque sencillamente sin ellas actualmente viviríamos en la barbarie.

Ahora bien, en la Ley de Seguridad Interior que se discute se omite un aspecto procedimental de gran importancia, como lo es el establecimiento claro y preciso de los días y horas hábiles en los que se podrán promover los procedimientos a los que la misma se refiere y la forma en la que habrán de incoarse.

Por esa razón es que propongo que en el texto de su artículo 4 se incorpore lo relacionado con los días y horas hábiles en los que podrán instaurarse los procedimientos previstos en la citada ley, para que de esa manera sean días hábiles para la instauración, promoción, sustanciación y resolución de los procedimientos a los que la misma se refiere todos los del año. Pudiéndose promover por escrito comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora. En cuyo caso cualquier hora será hábil para promoverlos y también para que se dicten las providencias urgentes, a fin de que se cumplan las determinaciones judiciales en los que se hayan autorizado.

Lo anterior, desde luego, con la finalidad de que la claridad y precisión de esos términos se refleje en la pronta y expedita aplicación de la ley que actualmente nos ocupa. Y, en obtención, desde luego, de los elevados objetivos que persigue.

Por otra parte, aun y cuando por un lado no entiendo bien, bien bien, a qué se refiere la disposición normativa básica contenida en el párrafo segundo del artículo primero... del artículo 1 del dictamen en cuestión, y por la otra, no encuentro el motivo de que exista esa prevención legal, considero que sería bueno que su esencia quede comprendida en un solo párrafo único del ordinal de referencia, porque no tiene sentido que se dedique un párrafo completo a esa disposición complementaria.

Luego entonces, en términos de mi propuesta, este apartado debe quedar de la siguiente manera:

La presente ley es de orden público, de interés general. Sus disposiciones son materia de seguridad nacional y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Y tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Alanís Pedraza. Consulte la Secretaría si es de aceptarse.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada secretaria. Tiene la palabra la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, hasta por cinco minutos. Ella propone que se supriman los artículos 1, 14, 17, 18, 20, 21 y 22.

La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera: Ay, ya se me fue medio pleno. Yo no le hago ningún reconocimiento al Ejército. No se lo merecen. Y, en voz de los mexicanos, les digo que se queden en los cuarteles. Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera: Saludo a los presentes y, sobre todo, a quienes nos visitan para que vean y escuchen lo que les espera, y que pasen la voz con todos sus conocidos.

En lo que llevo de esta legislatura, nunca había sentido tanto miedo como hoy. Precisamente nos regalan de navidad este dictamen. Propongo eliminar los artículos 1, 14, 17, 18, 20, 21 y 22 del dictamen.

Hace rato una diputada mencionaba, aquí en tribuna, que escucharon a la ciudadanía. Y yo le digo: ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A quiénes? Porque de haberlos escuchado, los hubieran cacheteado. ¿Cómo creen que la gente va a estar a favor de semejante barbarie?

Nadie quiere el Ejército en las calles de manera permanente. Nadie quiere al Ejército en funciones de los policías. A ver, pensemos, sé que es mucho pedir, porque aquí no se está acostumbrado a pensar, pero vamos a intentarlo.

¿Qué les hace pensar que el militar será amigable? Ellos tienen una formación diferente a la de un policía, ellos no saben diferenciar un rico de un pobre. En persecuciones han confundido criminales con familias enteras, han violado mujeres, se han coludido con el crimen organizado, han violado derechos humanos, han logrado que la gente les tenga miedo y no denuncien y, sobre todo, han matado a sangre fría solo por instinto a miles de personas, como los dos estudiantes del Tec de Monterrey, estudiantes, maldición. José Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quienes siguen esperando justicia, y ustedes los felicitan. Qué vergüenza.

Entiendan que ni ustedes están a salvo. Espero que con esta decisión, que la hayan hecho de manera consciente y una vez aprobada la gente se los va a recordar.

Esta es una rueda de la fortuna, ahorita están en la toma de decisiones, con fuero, pero en el 2018 van a estar abajo sin decisión y por fin una cucharada de su propia medicina. Es cuanto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Arguijo Herrera. Tiene la palabra la diputada... Ah, bueno, pregunte usted, por favor, secretaria, si es de aceptarse.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada secretaria. Tiene la palabra la diputada Araceli Damián González por cinco minutos. Presenta reservas a los artículos 1, 2, 11, 12, 16, 22, 26 y 32.

La diputada Araceli Damián González: Gracias, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada Araceli Damián González: Tienen terror. Tienen terror de perder el 2018. Van a perder. Van a perder. Eso es lo que está en el fondo de este madruguete. Ustedes, que ni tienen candidato, quieren limpiarle el camino.

El dictamen asegura que el Estado está obligado a renovar los marcos normativos existentes para garantizar la paz. ¿Por qué no mejor exigen un respeto real a los derechos humanos? ¿Por qué no combaten las finanzas del crimen organizado? ¿Por qué no aceptan la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU?

Esta ley, y lo digo enfáticamente, va contra la paz. El dictamen sostiene con datos que la Marina y el Ejército es una de las instituciones que la ciudadanía más tiene confianza, pero lo que no dicen es que nuestras Fuerzas Armadas han tenido uno de los índices más letales en el mundo. Y no está en guerra, está luchando contra el crimen organizado.

Por cada herido –El Ejército mató a 10 civiles y la Marina a 16.8. En guerra, por cada muerto hay cuatro heridos. Estamos en riego de que esto continúe de manera indefinida y bajo la arbitrariedad de un presidente como el de ustedes.

Se asegura también que la seguridad interior no es un concepto de reciente adopción, porque desde hace 196 años se ubicó en la normatividad postindependentista. Están utilizando categorías de hace dos siglos, cuando todavía ni siquiera se pensaba en los derechos humanos. No saben ustedes de derechos humanos, no han aprendido. Ni siquiera están luchando en favor de todos esos desaparecidos, de todas esas mujeres que han sido violentadas en esta lucha contra el narcotráfico y del cual allá el PAN es cómplice.

Ustedes, el gobierno federal, violenta la ley y los derechos humanos. Sin esta ley están espiando, pero, ¿a quién espían?, a personas defensoras de los derechos humano, de los bosques, de nuestra naturaleza, a periodistas, integrantes de la oposición, y hasta a menores de edad. ¿Qué podríamos esperar tras la aprobación de esta monstruosidad?

Le están quitando todo el sentido a la idea de paz, al concepto de derechos humanos, le están quitando todo el sentido a un principio fundamental que es la paz social, y además son intolerantes. Sostienen que resulta inadmisible señalar las profundas deficiencias de su proyecto de dictamen, pero este va a derivar en violación a los derechos humanos.

Lo inadmisible es que pretendan aprobar esto, que se nota su incongruencia. Niegan que se militarice al país. No se burlen, es algo muy serio, están militarizando al país y lo están argumentando con un trabajo académico que precisamente critica lo que ustedes están tratando de hacer.

Estamos presentando reservas, porque nos parece absurdo que no se considere la seguridad humana como esencial, sino únicamente una seguridad interior que ustedes están inventando.

También queremos que el Poder Ejecutivo tenga contrapesos y por eso propongo en las reservas que el Congreso de la Unión avale o rechace sus acciones y declaratorias, y también que no se permita que se clasifique y que no se dé transparencia...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Araceli Damián González:... en los casos de violación grave a los derechos humanos. Es cuanto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Pregunte la Secretaría si son de admitirse las reservas de la diputada Araceli Damián González.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha.

Tiene la palabra la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, por cinco minutos. Ella va a presentar reservas a los artículos 1, 2, 6, 10, 23, 27, 28, 30, 34, Cuarto transitorio.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Con la declaratoria de guerra de Felipe Calderón, se dio un intenso y excesivo uso de las Fuerzas Armadas, por lo que se descuidó el saneamiento y la profesionalización de los cuerpos policiales. Ahora, tras los deplorables resultados de la estrategia, en lugar de ratificar el camino se pretende legalizar la desnaturalización de las tareas constitucionales y sociales de los militares, mediante la redacción de la ley propia de un Estado totalmente autoritario.

En la propuesta no se establece un control de autoridades civiles ni mecanismos reales de rendición de cuentas o medidas de supervisión y control por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tampoco hay

medidas para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, mucho menos medios para que la población pueda denunciar violaciones sin poner en peligro su vida.

Por ello, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro mencionó que existen muchos pronunciamientos internacionales en contra de la extensión de la participación castrense en las tareas ajenas a su mando, debido principalmente a esta desnaturalización de su función y a las repercusiones sociales que conlleva, y basta recordar que en la última década se han presentado más de 10 mil quejas por violaciones a los derechos humanos y solo se han emitido 146 recomendaciones.

Asimismo, la ley presenta una afrenta a las recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales que niegan la experiencia de estos 10 años que han demostrado que el despliegue militar ha sido riesgoso para la población y poco efectivo.

Como si lo anterior fuera poco, no existe evidencia científica de que el despliegue militar haya reducido la violencia. Todo lo contrario, se han gastado a las Fuerzas Armadas en tareas, insisto, que no les corresponden constitucionalmente y para la que no fueron preparadas ni diseñadas, generando un círculo vicioso en el que, ante la necesidades de reformar policías estatales, los gobiernos locales prefieren mantener a las Fuerzas Armadas en lugar de asumir sus responsabilidades.

La ley parece un producto de reasignación de facto, que implica que las autoridades civiles no puedan aplicar una reforma política integral, que nunca contaremos con policías confiables y profesionales, que los militares ejercerán su labor de manera indefinida y que las violaciones a derechos humanos no disminuirán.

La ley no toma en cuenta que las Fuerzas Armadas tienen un régimen jurídico especial al otorgarle facultades de investigación, prevención, sanción y persecución del delito, forzosamente tendrían que incluirse en un régimen de responsabilidad civil.

Se pretende otorgar a las Fuerzas Armadas un marco legal que perpetua su labor en tareas de seguridad pública y mayores márgenes para actuar sin vigilancia y con mayores riesgos.

Para variar, quedaron también sin cumplir las promesas de campaña de Peña Nieto, con respecto a Apostar por la Prevención cuyos programas sociales tampoco cuentan con los recursos necesarios.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que en el régimen autoritario el concepto de seguridad está asociado a conceptos de seguridad interior, con referencia a la seguridad del Estado y no a las personas. Una ley así tendría por ello serios problemas de incovencionalidad, por ser contraria a los compromisos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos.

Para el Grupo Parlamentario de Morena la debida formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el destierro de la corrupción, la efectiva y real autonomía de los ministerios públicos, el combate al tráfico de armas, el replanteamiento del sistema penitenciario, la modernización y el replanteamiento de los sistemas de inteligencia y el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en materia debe de ser el camino para ofrecer la seguridad, no solo al Estado sino a la población en general.

Por ello nos oponemos a esta ley que implica el uso discrecional del Ejército por parte del Poder Ejecutivo. Es cuanto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Norma Xochitl Hernández Colín. Adelante, secretaria.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD, tiene la palabra por tres minutos y propone que se suprima el artículo 1 de la ley aprobada en lo general.

El diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias, presidente. Precisamente el artículo 1 se refiere a las generalidades, alcances y naturaleza de la ley. Voy a aprovechar para despejar algunas verdades a medias que han señalado en esta tribuna diputadas y diputados del PRI. Y algunas mentiras completas.

Primero. El artículo de referencia se refiere a funciones del Estado en materia de seguridad interior, según lo que propone el PRI. Sin embargo, no involucra a los órganos del Estado, solamente involucra a su jefe, el presidente de la República. Omite, incluso, involucrar en una decisión soberna a este Congreso, para iniciar.

Por otro lado, el diputado Domínguez, que también vino al PRI, que se refiere con una frase muy dominguera, que dice él que puede lo más puede lo menos, tratar de obviar una definición de alcances jurídicos y de seguridad, que es la seguridad interior.

No estamos facultados, eso lo dice el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no está facultado este Congreso para legislar en materia de seguridad interior. Lo reto a que venga y nos diga exactamente en dónde señala la palabra, porque el principio que sí rige la vida pública y constitucional en nuestro país solamente faculta a las autoridades –que no es este Congreso– a lo que explícitamente señala la ley. Una mentira más.

Vienen también a señalar que no se está proponiendo la permanencia en la situación actual de las Fuerzas Armadas, garantizando seguridad pública en las calles. Sin embargo, el artículo cuarto transitorio, que por arte de magia se modificó durante la madrugada de este día, señala, contrario a la versión anterior, que la situación actual en el territorio nacional seguirá. Es decir, las situaciones de excepción las están prolongando en el tiempo sin algún requisito adicional. Otra mentira más.

Y lo otro, que no están facultando a las Fuerzas Armadas para intervenir en materia de seguridad pública. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, señala que tiene que ser el mando civil el que lo garantice. Sin embargo, ustedes en la propuesta, en su propuesta, en el artículo 20, le están dando facultades a las Fuerzas Armadas para actuar, contrario a lo que dice la Constitución.

Es decir, están, en síntesis, desnaturalizando su propia propuesta. Deberían aceptar mejor que implícitamente en la propuesta de Ley de Seguridad Interior va su aceptación de que el presidente de la República implementó una estrategia fallida de seguridad pública y que ustedes, el PRI, su partido, se tardaron cinco años, como hoy vienen a decirnos, en darse cuenta de que han fallado.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Rafael Hernández Soriano: Eso es lo que deberían explicarle a la nación y no mentiras completas o verdades a medias. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Pregunte la Secretaría si es de aceptarse.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha. Tiene la palabra, Alberto Martínez Urincho, diputado por el Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Don Alberto propone, modificar los artículos 1, 2 y 3.

El diputado Alberto Martínez Urincho: Con el permiso de la Mesa Directiva.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Alberto Martínez Urincho: Buenas tardes, compañeras diputadas, diputados. Estamos aquí para proponer estas reservas, sin antes dejar de mencionar precisamente y dirigirme con mucho respeto a todas las diputadas y diputados que nos antecedieron que argumentaron en pro, que no somos ignorantes de las leyes

de nuestra Constitución y hablo no solamente de las diputadas y diputados que estamos en este pleno, porque aquí representamos, no solamente una soberanía, representamos verdaderamente al pueblo.

Y les quiero decir, precisamente, que no somos ignorantes, que respetemos también la visión que tenga el pueblo sobre de estos temas. Y lo digo de manera muy fraternal, porque se ha arengado, se ha discutido, hemos escuchado las argumentaciones y lamentablemente –lo quiero decir– que lo hemos hecho de una manera desordenada, desaseada, con falta de técnica jurídica y esto lleva a una situación que hoy el grupo parlamentario mayoritariamente en esta soberanía, en este Congreso, no puede ocultar la política fallida que ha tenido el presidente de la República, que ha tenido el señor Enrique Peña Nieto, y le ha fallado al pueblo de México y lo estamos diciendo precisamente en ese sentido.

Nosotros, el Grupo Parlamentario de Morena, respetamos, reconocemos a las Fuerzas Armadas, tan es así que la semana pasada, compañeras diputadas y diputados, se hizo el reconocimiento a la Marina, en ese hecho histórico.

Precisamente lo que tenemos que estar haciendo es cuidar esas instituciones, que no sean permeadas en un régimen de corrupción e impunidad que hoy ha representado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cuidemos a nuestras instituciones.

Voy a referirme brevemente precisamente a este tema de las funciones que tengan nuestras Fuerzas Armadas y que respetamos, porque precisamente su función originaria es como lo que sucedió con la Marina cuando en ese hecho histórico combatió el último reducto de las fuerzas realistas y las expulsó de nuestro territorio nacional.

Precisamente estas reservas tienen que ver en el sentido de reconocer, sí, que la función originaria de las Fuerzas Armadas solamente tiene que ser de manera excepcional y transitoria. Un criterio que precisamente también la Corte ha establecido. Aquí se complementa.

Concluyo, diputado presidente. Estas reservas debería, precisamente hoy este grupo parlamentario aquí en la Cámara de Diputados, esta mayoría de grupo parlamentario aprobarlas, porque debemos de cuidar de a de veras, compañeras y diputados, lo que son las instituciones de las Fuerzas Armadas.

No a la corrupción, no a la impunidad de Peña Nieto. Muchas gracias, compañeros.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Alberto Martínez Urincho. Pregunte la Secretaria si se admiten sus reservas.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desechan. Tiene la palabra el diputado Tómas Octaviano Félix por cinco minutos, para proponer que se supriman los artículos 1, 3, 4, 6, 7 y 8.

El diputado Tómas Octaviano Félix: Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Tómas Octaviano Félix: Compañeras y compañeros diputados. Desde esta máxima tribuna del país saludo con mucho afecto al pueblo de México. Desde el día de ayer y desde la comodidad de su casa blanca, el presidente de la República les pidió a sus diputados del PRI y sus paleros del verde para marcarles línea y aprobar esta ley de seguridad que sin duda afectará la tranquilidad de las mexicanas y de los mexicanos.

No puedo comenzar esta intervención entonces sin hacerles saber la molestia, el enojo y la gran decepción por cómo esta Cámara de Diputados se ha convertido en una verdadera Oficialía de Partes del Ejecutivo federal,

una sastrería en la que se hacen trajes a la medida, en un trámite más de la expedición de leyes que nada abona a un país próspero y de paz.

La Ley de Seguridad Interior, que hoy ya aprobaron en lo general, no es otra cosa más que un síntoma de miedo, dada la proximidad del proceso electoral del 2018, y de una actitud beligerante de este gobierno hacia la sociedad y sus derechos. No es extraño que esta ley se pretenda aprobar bajo el esquema de las mayorías que aplastan, que aprovechan su condición para socavar los grandes avances de los derechos humanos en las últimas décadas, de menospreciar a este poder y de ejercer el gobierno de una manera muy autoritaria.

Lo que no ha medido esta administración es que dicha ley podría revertir sus intenciones claras de represión, de vulnerar los derechos humanos, de violar las garantías de las mexicanas y de los mexicanos. Seamos claros, el Ejército Mexicano tiene un propósito fundamental, que es defender la soberanía del país, así como ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes. Señoras y señores, el Ejército no es una policía. Es más, me atrevo a separar dichos conceptos por mérito.

Pero vayamos al origen. Es por demás atrevido pretender que las Fuerzas Armadas de este país, a través de sus tácticas, métodos, armamento y protocolos de actuación sirvan a partir de la aprobación de esta ley para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva. Me pregunto entonces dónde quedará la libre manifestación y el libre tránsito consagrados en nuestra Carta Magna.

Por ello esta ley es considerada como parte de la militarización del país. Qué necesidad existe en la actualidad para que se considere que haya acciones de orden interno a través de despliegues permanentes de las Fuerzas Armadas y así vulnerar los derechos de los ciudadanos.

Lo digo con absoluto respeto: qué falta de imaginación. Pero sobre todo qué falta de responsabilidad, y menosprecio a nuestras fuerzas armadas. Existen recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que han expresado su preocupación por la intervención del Ejército en tareas que no les corresponde, es más, se han emitido observaciones claras sobre violaciones a los derechos humanos, ya que el personal castrense no se encuentra preparado en acciones policiales.

En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos que esta no es la vía para combatir la delincuencia ni el crimen organizado, compañeras y compañeros. Creemos que la profesionalización, la coordinación entre los gobiernos, la delimitación de las responsabilidades y estricta aplicación de la ley será la que realmente nos lleve por el camino del orden y en respeto en nuestra sociedad.

Por tanto, al ser una ley que faculta al Ejército como policía, que no genera controles de verificación de respeto a los derechos humanos, al ser una ley que permite la intervención en protestas sociales por su poca transparencia, nula regulación e imprecisiones conceptuales, es necesario entonces revisar la pertinencia de crear una ley para tal objeto.

En este contexto, compañeras y compañeros diputados, someto a consideración de esta soberanía la eliminación de los artículos 1, 3, 4, 6, 7 y 8 de esta mal llamada seguridad interior, porque –insisto– viola los derechos humanos porque reprimirá las protestas sociales y porque es anticonstitucional. Viva el PRD, compañeros y qué viva el pueblo de México. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante diputado Octaviano, gracias por su intervención. Diputada, pregunte si es de admitirse las reservas.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Se desechan. Tiene la palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, para proponer que se supriman los artículos 2 y 15, por tres minutos.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Hace un momento decía una compañera de mi grupo parlamentario que a lo largo de esta legislatura no había sentido más miedo. Les diría que también a mí me dio miedo oír a una diputada, del grupo parlamentario afín al residente de la República, amedrentar en esta tribuna al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Subirse a esta tribuna a gritar y a retar, y a descalificar el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esto, compañeras diputadas, y diputados, nos habla del grado de miedo que tiene el gobierno federal y sus diputados. Que no nos mientan, los que estamos votando en contra de esta ley y estamos haciendo nuestras reservas no es que tengamos miedo de salir a la calle y encontrarnos con los militares, claro que no.

Le reconocemos el trabajo que han hecho. Como integrante de la Comisión de la Defensa, he señalado permanentemente el gran trabajo que desarrollan con el Plan DN-III y algunos otros más. Pero esto parece a todas luces la preparación de un nuevo fraude electoral, en el que piensan esconderse tras de las botas del Ejército Mexicano. Eso es lo que parece esta iniciativa.

A partir del 2006, cuando inició la participación del Ejército Mexicano en las labores de seguridad pública, se incrementaron las graves violaciones a derechos humanos. Antes de 2006 teníamos cerca de 190 denuncias presentadas por violación a los derechos humanos cometidas por los organismos militares. Después del 2006 tenemos más de mil por año.

¿Y nos están diciendo que esto está funcionando? ¿En qué diagnóstico queda claro que la política de militarización, en qué lugar del mundo, ha sido eficiente? Eso es una absoluta mentira.

Recordemos el halconazo del 71, Aguas Blancas en el 95, Acteal en el 97, San Fernando en en 2010, Tlatlaya en 2014. ¿Quiénes son los que están señalados como responsables, compañeras diputadas y diputados?

Mientras las recomendaciones internacionales piden al Estado mexicano el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las calles, esta Cámara de Diputados está buscando regularizarlo. Dicen que momentáneamente, dicen que parcialmente. Llevamos 10 años con el Ejército y las Fuerzas Armadas en las calles y nada ha cambiado para bien, al contrario.

Quiero decirles que en 2007 también teníamos cerca de 10 mil homicidios y ahora, en 2016 se reportan 23 mil, es decir se duplican y todavía un poco más. La presencia del Ejército en las calles no ha funcionado y también algo que se ha omitido señalar aquí, que después se corrigió, es que el propio secretario de la Defensa señaló en un discurso, que ellos no habían sido reclutados y no era su obligación detener a los criminales.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Es una irresponsabilidad también que estemos exponiendo al Ejército cuando tiene otras tareas, pero también que estemos permitiendo que los gobernadores, presidentes municipales al no aceptar el mando mixto sean omisos ante esta responsabilidad que tienen.

Por una seguridad con paz digamos no a esta Ley de Seguridad Interior, violatoria absolutamente de los derechos humanos.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Gaytán. Por favor consulte la secretaria si es de admitirse la reserva.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha. El diputado Omar Ortega Álvarez ha solicitado que sus reservas se inserten íntegras en su texto, en el Diario de los Debates y declina su participación en tribuna.

Tiene la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, hasta por tres minutos. ¿Quiere usted intervenir desde su lugar, diputada? Gracias, diputada.

La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso. Miren, quiero leer dos párrafos de un artículo que escribió Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se llama Seguridad Interior. Esto me preocupa mucho, porque puede traernos controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad

Dice –cito–: Por lo que hace al desequilibrio entre Poderes, la propuesta inclina la balanza a favor del Poder Ejecutivo federal, no solo señala que su titular podrá ordenar por sí solo la intervención de la federación para realizar acciones de seguridad interior, sino que también lo faculta, previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional para emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior. Con ello se lesiona el federalismo y se evaden los controles legislativos que, por ejemplo, establece el artículo 29 constitucional, para los casos de restricción o suspensión al ejercicio de los derechos y sus garantías.

La cuestión es de la máxima relevancia, porque el proyecto de ley no especifica cuáles son las acciones concretas que podrían realizarse al amparo de esa declaratoria, lo cual generaría un nuevo tipo de inseguridades e incertidumbre. Les recomiendo el artículo.

Compañeras y compañeros legisladores, con esta ley hay una tentación autoritaria de los gobiernos civiles para reprimir. No lo olvidemos, quien manda, da instrucciones y ordena las acciones del Ejército es el presidente de la República, él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él es el responsable de las violaciones de los derechos humanos que se han incrementado en más de 10 años, desde que ha participado el Ejército en las labores de seguridad.

Esta ley es inconstitucional, no solamente porque es un peligro que normaliza la presencia del Ejército en las calles y le deja una responsabilidad de labores policiacas, para las cuales no está preparado. Es decir, hay el abandono de la responsabilidad de los poderes civiles que a este país le han costado vidas en el pasado en procesos históricos.

Hay una omisión muy grande del gobierno para garantizar la seguridad de la sociedad, piensa en las instituciones y no en las personas, ignoran el concepto de seguridad humana, donde lo fundamental es generar las condiciones para una sociedad con paz y armonía, se olvida la integralidad de la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad humana.

Esa paz se genera con una política social que respeta los derechos y la dignidad humana, no se logra con represión o la utilización del uso de la fuerza. Se ha demostrado que la guerra que se emprendió desde Felipe Calderón y que continúo Enrique Peña Nieto sólo ha dejado dolor y miedo a nuestra sociedad. Está legalizando su rotundo fracaso en materia de seguridad.

Cada día hay más violencia, más asesinatos y más inseguridad. La Ley de Seguridad Interior prácticamente es una declaración de guerra y quiere utilizar al Ejército para poder ganarla, nada más absurdo. Encima, no hay una convicción o voluntad de respetar los derechos.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Maricela Contreras Julián: Por eso, lo que proponemos es adicionar en el artículo 4o. la obligación de las autoridades señaladas en la ley, de respetar los derechos humanos de conformidad a los principios constitucionales de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, esto representaría un freno a esta tentación autoritaria que quieren imponer con esta ley. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Maricela Contreras Julián. Pregunte la Secretaría si es de admitirse la reserva propuesta al artículo 4o. del dictamen.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha. Tiene la palabra la diputada Ariadna Montiel Reyes, ella, una de dos, reserva cuatro veces el artículo 4o. o tiene cuatro reservas sobre el artículo 4o., ahorita se lo voy a preguntar a Servicios Parlamentarios, pero son el 4o. y el 14.

La diputada Ariadna Montiel Reyes: Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada Ariadna Montiel Reyes: A los ciudadanos que nos siguen en la transmisión del Canal del Congreso, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena y con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de esta Cámara, me permito someter a consideración de esta asamblea propuestas de modificación a los artículos 4 y 14 del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, al tenor de lo siguiente:

Las propuestas de modificación planteadas sugieren adiciones en el contenido del dictamen que coadyuvarán a la garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y las garantías individuales de los ciudadanos en contra de posibles arbitrariedades que se puedan suscitar en la aplicación de la ley que hoy se presenta.

Tenemos que decir que la estrategia de llegar a la paz a través de la guerra deviene desde el gobierno de Felipe Calderón y continúo con el gobierno de Peña Nieto.

Es el Ejecutivo quien ha pasado por encima del Ejército y ha llevado a estas instituciones, a las Fuerzas Armadas a realizar acciones fuera del marco constitucional.

En Morena consideramos que la paz y la tranquilidad son producto de la justicia. México vive este clima de violencia e inseguridad porque no se han atacado las causas verdaderas de esta catástrofe nacional. La pobreza, la desigualdad, la falta de educación y oportunidades para los jóvenes.

Han pasado diez años y con ley y sin ley esta estrategia no ha funcionado. La violencia sigue y sigue creciendo. Hemos visto cómo ha evolucionado el número de delitos de un gobierno a otro porque no se ha atacado la causa de fondo. Hay que cambiar la política económica para atender primero a los pobres.

En esta reserva se propone que dentro del artículo 4 de la ley, al momento de definir el uso legítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, se establezca que dicho uso sea en todo momento garantizando los derechos humanos de las personas, implementando los protocolos de actuación de las fuerzas federales con el irrestricto respeto a la normatividad en materia de derechos humanos, así como los tratados internacionales suscritos por nuestro país, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los mismos.

También se propone que dentro de la definición de inteligencia de la seguridad interior se establezca de manera clara en el cuerpo de la ley que la información obtenida en materia de seguridad interior sea obtenida de manera lícita.

No queremos conocer más temas como Cepegas, con lo cual se blinda de abusos por parte del Estado, como los casos de espionaje de los que ya hemos sido testigos. En materia de transparencia, resulta sorprendente que dentro de la ley se proponga clasificar como tema de la seguridad nacional la información que se genere con motivo de la aplicación de la misma, aun cuando en la aprobación en el año 2016 de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se dio un gran avance en esta materia.

Parece que a nuestros gobernantes aún les tiembla la mano para transparentar las actuaciones en materia del uso de la fuerza pública. Por lo cual proponemos que la información que se genere por motivo de la ley del carácter público y accesible a todos los ciudadanos sea totalmente transparente.

De igual manera, se propone que se elimine la facultad discrecional por parte del presidente y el secretario de Gobernación para el indebido uso de la ley, conferida en el artículo 24, artículo en el que de manera enunciativa se considera la posibilidad de que aun sin la declaratoria de protección a la seguridad interior, se puede enviar a las Fuerzas Armadas a alguna zona geográfica del país, a criterio del presidente.

Ya hemos conocido a lo largo de este sexenio el criterio del presidente. Ya vimos que esta estrategia no ha pacificado al país. Ya vimos que esta estrategia que deviene desde los gobiernos de derecha, desde Felipe Calderón, no les ha dado una solución a las comunidades que viven en extrema violencia.

Pedimos que voten a favor estas reservas porque consideramos que el Ejército es, como nosotros, un pueblo. Es parte del pueblo, es el pueblo uniformado y se les ha obligado a actuar fuera del marco constitucional. Nosotros queremos vivir en paz, por eso proponemos que la inseguridad se abata combatiendo la pobreza. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Ariadna Montiel Reyes, que reservó 3 veces el artículo 4o. y el 14. Pregunte la Secretaría si es de admitirse esta reserva.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se desecha. Tiene la tribuna, don Juan Romero Tenorio, que hará uso de ella, hasta por tres minutos, para presentar reservas a los artículos 4, 6 y 11.

El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Presidencia. Dentro de mi intervención le solicito que se inserte en el Diario de Debates, el documento que entregué, donde presento algunas consideraciones sobre la ilegalidad y la inconstitucionalidad de esta reforma.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tal y como usted lo solicita, diputado, se inserta íntegro el texto entregado a esta Mesa Directiva, por el diputado Juan Romero Tenorio, al Diario de los Debates.

El diputado Juan Romero Tenorio: Le agradezco, presidente. No es una cuestión de posición partidista, es sentido común. Esta legislatura le ha fallado a los mexicanos y le fallará en lo que queda de periodo legislativo, antes de que concluya el tercer año de este pleno y de Congreso de la Unión.

Estoy trayendo una imagen que en 1998 dio la vuelta al mundo, es una fotografía de Pedro Valtierra, sobre una situación que implicó al Ejército y comunidades indígenas: Chenalhó, Chiapas, 1998. El asunto no es si el Ejército está o no en las calles. El asunto es la responsabilidad.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada y del Ejército y Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas en nuestro país tienen un comandante supremo, un jefe máximo que es el presidente de la República. Este presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no ha cumplido bien su tarea, seguridad interior vinculada a seguridad pública. Los mexicanos estamos preocupados por el alto grado de inseguridad.

En esta fotografía de Ejército y comunidades indígenas, encontramos a mexicanos enfrentados. Mexicanos enfrentados por una mala política de seguridad pública, por una irresponsabilidad, por una omisión de combate a la delincuencia organizada, una omisión para determinar la corrupción de policías estatales y federales implicadas con el crimen organizado. El presidente ha echado a perder todo, incluso a seguridad pública.

Cuando empezó su sexenio hablaban de la gendarmería, ¿dónde está la gendarmería? Se borró. Ahora, usando la legitimidad, credibilidad de las Fuerzas Armadas, quieren usarlas como instrumento de combate a la delincuencia. Craso error.

No son las Fuerzas Armadas, es el presidente quien se quiere lavar la cara con esta ley y al final del sexenio señalar quiénes fueron los responsables, las Fuerzas Armadas. Pero él es el comandante supremo y no está cumpliendo con el mandato constitucional de garantizar a los ciudadanos un marco de seguridad pública. No

está cumpliendo con las Fuerzas Armadas al fallarles como comandante supremo y mandarlos a enfrentarse a la ciudadanía.

Las Fuerzas Armadas tienen una mala ley que los va a hacer al final responsables. Va a haber diversos amparos que los ciudadanos van a estar presentando contra sus actuaciones que no están dentro del marco legal de las Fuerzas Armadas vigentes en nuestro país.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Juan Romero Tenorio: Es un parque que se está haciendo. Las razones legales y constituciones están en el documento entregado y rectifico: La Suprema Corte no ha avalado esta ley. Avaló a las Fuerzas Armadas como auxiliares en la seguridad pública, más no a esta ley que ahora se está presentando.

Hay que saber leer, señores diputados, y no engañar a la ciudadanía. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Hortensia Aragón Castillo, quien me informan ha solicitado su reserva se inserte íntegra en su texto en el Diario de los Debates. Tiene la palabra la diputada Mirza Flores Gómez hasta por tres minutos. Reserva los artículos 6, 7... 5, 7 y 8.

La diputada Mirza Flores Gómez: Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con su venia, señor presidente.

De esta ley hemos escuchado muchos de los argumentos que aquí se han vertido y que le han restado mucha importancia. Y la prueba está en que el pleno está casi vacío. Quienes van a votar a favor no están aquí escuchando los argumentos, que deberíamos tener tan conscientes para poder saber por lo menos qué estamos votando. Y van a gritar. Qué pena, qué pena, de verdad.

Para comenzar, el artículo 73 constitucional nos dice que el Congreso no puede legislar en materia de seguridad interior. Es por eso que los diputados ciudadanos hemos fijado nuestra postura en contra respecto del dictamen por el que se expide esta Ley de Seguridad Interior. Pues a esta se le quiere hacer responsable de un tema de seguridad pública, que debe estar en manos de autoridades civiles y no de las Fuerzas Armadas.

Hacer esto representa bajar los brazos y rendirnos, y decir y exponer tácitamente que nuestras autoridades civiles fueron incompetentes y no fueron capaces de dar resultados de seguridad a la población. Los ciudadanos no quieren a los soldados en las calles. Los ciudadanos exigen seguridad para ellos y para sus familias. No acostumbremos a los ciudadanos a que crean que están seguros por el sonar de las botas en nuestras calles, de las botas militares en nuestras calles.

La aprobación de esta ley implica una postura irresponsable por parte de cada uno de los diputados que lo harán a favor. Estamos sobrelegislando. Ya en esta soberanía se legisló en materia de la Ley de Seguridad Nacional. Esta ley, entre otras cosas, bifurca los dos temas, de defensa exterior y defensa interior. Ahí deberíamos estar trabajando en el tema, ahí deberíamos estar legislando, y no sobrerregulando.

Aquí también escuché a una compañera del Revolucionario Institucional decir que esto nos daba gobernabilidad. Yo difiero de mi compañera, porque la gobernabilidad depende de las acciones de las autoridades civiles. Y cuando entran las Fuerzas Armadas estamos en condiciones de tener que asumir la ingobernabilidad. La seguridad interior está mal entendida, como una alternativa para combatir a una exacerbada delincuencia, misma que se ha derivado por la exacerbada incapacidad y corrupción de los mandos civiles.

Una ley que da salida o da confort para que autoridades omisas, corruptas e incompetentes, pues no hagan su trabajo, y por la falta de aplicación de la seguridad pública, no debe de ser traducida esta, a lo mismo que seguridad interior.

Estamos también dejando de ver la importancia –y con esto concluyo presidente– ¿cómo nos están viendo en el exterior? La percepción que están teniendo nuestros socios comerciales en la comunidad internacional.

¿Cómo nos ven? Como un pueblo que militariza su seguridad, nos volvemos pocos atractivos siendo socios comerciales...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Mirza Flores Gómez: ...y siendo un país que recibe amigablemente, también, a su turismo. Estamos disparándonos en una rodilla y en un pie, seamos responsables, compañeros, buenas tardes y muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada Mirza Flores. Tiene la palabra la secretaria que consultará a la asamblea si se admite.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Se desechan. Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Esta reserva que hacemos al artículo 5o., es una preocupación que tiene varios vicios de inconstitucionalidad, no obstante que toda la ley ya la aprobaron quienes paulatinamente se encargan de ser emisarios y actuar bajo las órdenes del presidente Peña Nieto y de ser unos agachones.

El artículo 129, para que les quede claro, ¿cuál es la parte que tiene que ver con el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, es que: en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de la población, estableciere para la estación de las tropas.

El dictamen también es inconvencional, es decir, contraviene convenios y tratados internacionales de los que el Estado mexicano ha firmado y por consiguiente es parte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que una de sus preocupaciones centrales, en relación con las acciones implementadas por los Estados miembros en el marco de su política sobre seguridad ciudadana, es la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas profesionales que por su naturaleza son exclusivamente de las fuerzas policiales.

En reiteradas ocasiones la comisión ha señalado que, dado que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos para combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. Cosa que ni con Calderón ni con Peña Nieto se han logrado, ha sido una política fallida.

Para Morena lo que debe existir es una política pública sobre seguridad ciudadana, que se constituya en una herramienta eficiente para que los Estados miembros cumplan adecuadamente sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio.

La distinción entre las funciones que le competen a las Fuerzas Armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales como responsabilidades exclusivas de la seguridad ciudadana resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esta política pública.

La Corte Interamericana ha señalado en relación con este punto que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, a velar por la paz, la protección y control de nuestra soberanía, entrenamiento que no es propio del Ejército.

La comisión se ha referido también a lo expresado, que este tipo de planteos corresponden a la confusión entre los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, lo cual muchos de ustedes aquí con pura verborrea han intentado engañar a la ciudadanía para aprobar esta lesiva ley, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria por muy grave que sea no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado.

La comisión señala que en ciertos casos las Fuerzas Armadas continúan participando en la investigación de los delitos, en particular en los casos relacionados con el narcotráfico, crimen organizado, funciones de control migratorio y en tareas de inteligencia civil.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: El responsable de que las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército, hagan tal o cual acción para combatir esto que acabo de mencionar, es el presidente de la República, que es el comandante supremo, solamente que él no sabe cómo conducir a un país, mucho menos va a saber sobre cómo mandar a una Marina, a parte de las Fuerzas Armadas y al Ejército porque lo único que hace es desgastar a estas instituciones de mucho respeto. Por eso en Morena exigimos y pedimos, no es un asunto con el Ejército ni la Marina ni las Fuerzas Armadas de nuestro país.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Por eso hay que cuidarlos. El principal responsable de la sangre que ha derramado este país con gente inocente no es del Ejército ni la Marina, se llama Felipe Calderón Hinojosa y se llama Enrique Peña Nieto, quienes son los responsables de la masacre, que sin estar en guerra pareciera que sí lo estuviéramos.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado. Ha consumido usted un minuto, 46 segundos. Permitan concluir al orador.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Tan solo en Colombia, para tener... –concluyo, presidente– para tener un marco, más de 60 mil afectados civiles en Colombia durante cerca de 45 años, y nosotros en México, en solo 4 años llevamos casi la mitad. Para que vean la dimensión de lo que hoy en día es el fallido presidente que tienen ustedes en este México tan lastimado por él y por muchos de ustedes.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte, señor secretario.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Verónica Delgadillo García. Pide que se modifique el artículo 6o del dictamen, hasta por tres minutos. Como ustedes saben, es además secretaria de esta Mesa Directiva.

La diputada Verónica Delgadillo García: Muchísimas gracias, presidente. Señoras y señores, compañeros y compañeras, el día de hoy estamos discutiendo sin duda la ley más importante de los últimos años, una ley que tendrá graves consecuencias en todos los mexicanos y las mexicanas. Lo peor de esto es que lo estamos haciendo de muy mala manera, a la forma del PRI, con un albazo legislativo, sin ni siquiera haber permitido una verdadera discusión o la inclusión de la opinión de la sociedad civil organizada.

Por más de una década los mexicanos hemos padecido los estragos de una estrategia de seguridad fallida y esto queda demostrado en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que él le prometió a todos los mexicanos que junto con su partido iba a transformar la seguridad en nuestro país, y como

en otros tantos temas ha demostrado que no es capaz y que, al contrario, han empeorado los temas de seguridad.

No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los más de dos mil asesinados, los dos mil homicidios que se cometieron en el mes de octubre, el mes más violento en los últimos 20 años de nuestro país. También lo dicen los 166 mil homicidios que se han cometido, los 166 mil mexicanos que han perdido la vida a raíz de esta estrategia de seguridad.

Tenemos que dejarlo en claro, la Ley de Seguridad Interior, que hoy pretenden aprobar, no resuelve el tema de fondo, no resuelve la grave crisis de seguridad ni de derechos humanos que experimenta México. No lo resuelve, porque el PRI en el gobierno ha renunciado a su responsabilidad de formar policías, instituciones de seguridad civil, capaces, fuertes, eficientes.

No lo resuelve porque esta ley no le va a regresar ni la seguridad ni la tranquilidad a los mexicanos. No lo resuelve porque siguen sin entender que la inseguridad se combate mejorando el acceso a la educación, por ejemplo, reduciendo la desigualdad, elevando los sueldos, combatiendo la corrupción, la impunidad y capacitando y formando a nuestros policías.

Es increíble que a pesar de todo esto, el PRI tenga el cinismo de venir a la máxima tribuna de nuestro país a mentirle a los mexicanos. Es increíble que mientras que por un lado rechazan la Ley de Mando Mixto, por el otro quieren aprobar esta Ley de Seguridad Interior en fast track.

Es indignante que mientras que dicen que quieren resolver el problema hayan abandonado a los policías, que los hayan dejado a merced del mejor postor y que estén en manos de la peor generación de gobernantes que ha tenido nuestro país, 22 gobernantes del PRI y a su red de corrupción y de impunidad.

Señoras y señores, como ya hemos dicho aquí, en menos de 24 horas se va a escribir uno de los pasajes más vergonzosos de este Congreso y de nuestro país, y ante esta realidad quiero hacerle un reto al candidato presidencial del PRI, quiero decirle a José Antonio Meade, quiero retarlo a que se pronuncie sobre esta ley, que nos diga qué país se imagina él, que nos diga si él realmente cree que la guerra hace la paz.

Nosotros y millones y millones de mexicanos, aunque les moleste a mis compañeros priistas...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Verónica Delgadillo García: Voy a terminar, presidente. Nosotros y millones de mexicanos lo tenemos muy claro, la guerra no hace la paz. Queremos una seguridad sin guerra. Es cuanto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, se desecha. El diputado Jonadab Martínez García ha solicitado que se inserte el texto íntegro de su reserva en el Diario de los Debates, lo cual se cumplirá. Y tiene la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, hasta por tres minutos, para hablar sobre el artículo 7o.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, presidente. Ya se dijo aquí, pero lo vuelvo a reiterar o lo volvemos a reiterar los diputados de Morena. Las leyes orgánicas, tanto del Ejército y las Fuerzas Armadas establecen que el mando supremo lo ejerce el presidente de la República, por lo tanto, es Enrique Peña Nieto el culpable de las calamidades que estamos sufriendo por tener los soldados en la calle.

Es falso que el problema de inseguridad que estamos viviendo se vaya a resolver con los soldados en la calle, puesto que esto ya están ahí con o sin ley, pero se trata de disfrazar el fondo de un problema que viene por

años sucediendo en este país y es la extrema pobreza que han causado todas las políticas neoliberales realizadas por estos últimos gobiernos.

Se pretende engañar a la población, a la sociedad, diciendo que la solución es enviar una Ley de Seguridad Interior que permita a los soldados estar en la calle y hacer labores de seguridad pública.

Yo creo que no aprenden la historia. Ningún gobierno militarizado en Sudamérica ni en ningún otro país ha tenido los efectos que se dicen hoy, aquí en esta tribuna, de quienes defienden esta ley.

Todos los gobiernos militares en Sudamérica han fracasado. Y por eso quiero advertir al jefe supremo, al mando supremo de las Fuerzas Armadas en nuestro país que no se atreva a utilizar al Ejército para reprimir a la población.

Pronto, muy pronto vendrá un gobierno democrático y fácilmente iremos a juzgar a aquellos que causen más daño a nuestra población utilizando a las Fuerzas Armadas.

Y es que si se lee con cuidado esta ley, podemos ver claramente que está escondida una intención. No solamente en el artículo que pretendo modificar con esta reserva, el artículo 7, en su segundo párrafo permite una excepción, como lo hace también el artículo 8, que es el que pretende esconder la represión.

Dice el artículo 8 que no se pueden considerar amenazas a la seguridad interior las que sean manifestaciones, las que tengan una motivación político-electoral o social. Pero hablan de amenazas y lo pone con mayúsculas, porque se refiere a las que están enlistadas en la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, no solamente se puede actuar contra ella, también contra los riesgos de seguridad interior. ¿Y dónde están enlistados los riesgos de seguridad interior? En la Agenda Nacional de Riesgos que elabora el Cisen y esta es secreta. ¿Qué esconden ahí? Esa es la pregunta que queda en el aire en esta tribuna. Muchas gracias.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra, por tres minutos... Perdón, discúlpenme. Consulte la Secretaría, por favor, en votación económica si se acepta.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. A continuación tiene el uso de la palabra por tres minutos la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano, quien se reserva el artículo 7o.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Hoy se nos convoca para discutir... Bueno, más bien para darnos a conocer esta Ley de Seguridad Interior.

Tapamos el ojo al macho en temas de seguridad. Soy mexiquense, de la región de los volcanes y debo comentar que desde que se nos informó que en el estado de México patrullarían más de 3 mil elementos federales no ha pasado nada.

Esto lo digo en nombre de miles de mujeres, de mexiquenses que han desaparecido. Lo digo en nombre de una amecamequense amiga mía que a la fecha no ha llegado a su casa. A nombre de Jaqueline Galicia, que al otro día de su desaparición en el municipio de Amecameca llegaron cientos de elementos de la milicia que, insisto, no ha servido absolutamente de nada.

En cambio, sí han sucedido muchas violaciones a los derechos humanos y la inseguridad ha sido compañera, medio compañera de la ciudadanía. Y lo digo con claridad porque soy mujer y esto pareciera un delito grave, porque nada más nos matan.

Las cifras así lo indican, somos primer lugar en feminicidios en todo el país. A los ciudadanos de todo el país... Debo decirles que en mi estado no se propuso otra ruta que militarizar para pacificar.

Compañeros, es claro que esta ley que se propone hoy no busca atender estrategias de seguridad pública, solo pretende justificar el uso de las Fuerzas Armadas, mismas que han expresado que no están preparadas para atender acciones de seguridad y que están en espera de seguir preparándose para sus funciones primordiales, como es la seguridad de nuestras fronteras.

Lo que al gobierno del PRI se le ha olvidado es mejorar las condiciones de los policías, sus condiciones salariales. Que se mejoren sus horarios y no se les pida laborar jornadas de 24 horas. Que se les asignen para su tranquilidad seguros de vida, un mejor equipo para que puedan realizar eficazmente su labor, como son chalecos antibalas o la tan anhelada capacitación.

De otro modo, sin recursos para nuestros elementos, será como cuando discutimos la llamada Ley Anticorrupción. En mi estado está en el olvido garantizar el acceso a la educación a los jóvenes, ofrecer más y mejores becas, incentivar la creación de empleos y a la par la inversión para que florezca la industria, el comercio y el turismo.

Concluyo, compañeros, diciendo que esta ley no sirve para nada. Las labores que pretende regular están descritas en la Constitución Política, no esperemos que con esta ley se solucionen los pendientes ante la ineficacia continua de sus formas anacrónicas de pacificación y reducción de los índices delictivos en el estado de México y en todo el país. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Angie Dennisse Hauffen Torres. A continuación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación le damos el uso de la palabra al diputado Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos, quien se reserva el artículo 7.

El diputado Julio Saldaña Morán: Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.

El diputado Julio Saldaña Morán: Con diputadas y diputados, y un fuerte saludo a todos los televidentes que nos ven por el Canal del Congreso. El presente dictamen no es la solución a los conflictos que hoy nos aquejan. Investigadores y organizaciones civiles coinciden en que esta nueva ley no cuenta con una estrategia real para combatir la inseguridad. No se le apuesta a la prevención y, sobre todo, no existe una definición de lo que el Ejército hará en permanecer en las calles.

Los tiempos que enfrentamos los mexicanos son difíciles, claro que sí, son muy difíciles porque no se han creado las condiciones de oportunidades para los mexicanos. Todo parece que es para reprimir manifestaciones sociales. Si en verdad quisiéramos fortalecer una mejor seguridad haríamos lo más importante, hacer cumplir un protocolo de seguridad desde el inicio que se hace la aprehensión de un ciudadano que violenta la justicia. Desde la hora de la aprehensión hay que hacer los trabajos adecuados, formular y armar los expedientes para que el Ministerio Público tenga los argumentos reales, y ese delincuente pueda ir a ser sancionado y compurgar su condena.

Se abandonaron por muchos años a los policías. No les dieron la capacitación adecuada y necesaria. Malos salarios a los policías que a diario arriesgan su vida. A veces pienso que desde la Presidencia o desde este gobierno, o desde este Congreso le apostamos que por decreto o por iniciativa vayamos a resolver los problemas que nos aquejan en materia de inseguridad.

Vámonos al fondo que son las causas. Hoy muchos de ustedes solo están viendo las consecuencias; las causas. No ha habido inversión en estos momentos del Estado mexicano que genere empleos bien remunerados. Presume el Seguro Social de que hay generación de empleo. Sí, pero mal pagados.

No ha habido una implementación para un mejor sistema de educación. Las becas no se han implementado para que lleguen a los sectores más vulnerables. Creció la macroeconomía pero creció la desigualdad social.

Se dice que hay inversiones, pero seguimos teniendo 60 millones de pobres que hoy con lo que se anunció en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues no creamos las condiciones para un bienestar social.

No lo vamos a resolver los problemas con tiros ni con más soldados. Lo vamos a resolver creando las condiciones, que el empresario tenga las mejores oportunidades para invertir y generar empleos que generen desde luego bienestar social.

No podemos –voy a concluir– seguir creyendo que por una ley que no coincido que sea la solución y que en entorno a lo que sucede en el país quisieran distraernos.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluyó su tiempo, diputado.

El diputado Julio Saldaña Moran: No, no coincidimos que esta ley que hoy se aprobó sea la solución si no volteamos a ver la realidad que el gobierno federal no ha tenido capacidad para llevar una política económica que genere bienestar social. Es cuanto y gracias por su atención.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Julio Saldaña. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos, quien se reserva el artículo séptimo.

El diputado José Santiago López: Con su permiso, señora presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.

El diputado José Santiago López: La reserva que hoy someto a su consideración tiene por objeto reformar el primer párrafo del artículo séptimo del dictamen, para establecer que en lugar de protocolos emitidos por las autoridades correspondientes, los actos realizados con motivo de la aplicación de esta ley, deberán preservar en todo momento y sin acepción los derechos humanos y sus garantías en términos constitucionales y convencionales en la materia.

En el Grupo Parlamentario del PRD, reconocemos la labor de las Fuerzas Armadas en su labor de garantizar la paz, la soberanía y la independencia de la nación, pero creemos que es un error seguirlas manteniendo en labores de policía y de seguridad pública, porque no son tareas propias de su naturaleza.

Es lamentable que se confunda seguridad pública con seguridad interior. La seguridad pública se refiere a la preservación de las libertades, derechos, propiedades e integridad de las personas, así como preservar el orden y la paz pública.

La seguridad interior tiene por objeto superar, neutralizar y reducir antagonismos o presiones que se producen inter-fronteras; sus acciones tienen a contrarrestar todas las formas que puedan perturbar el orden interno o que tienen a destruir los valores y principios nacionales, como las acciones que conforman los llamados procesos subversivos concatenados usualmente con cargas ideológicas de cualquier origen, forma o naturaleza que se manifiestan en el ámbito interno del país y que quebrantan o tienen por meta minar o destruir los objetivos nacionales, ya sea atacando a las instituciones, controlando opresivamente a la población o destruyendo los valores de la nacionalidad.

Aquí la función del Estado es impedir o eliminar dichas acciones. El combate al crimen organizado en su vertiente de narcotráfico no es lo que el gobierno federal, es lo que el gobierno federal ha usado a las Fuerzas Armadas, es una materia propia de la seguridad pública. Por tanto, constitucionalmente compete a las policías civiles atenderlas.

Para expedir esta Ley de Seguridad Interior, el Congreso carece de facultades constitucionales. Esta Cámara no contempla los lineamientos que la ONU, a través de los principios de Siracusa ha emitido para hacer frente a situaciones extremas o estados de excepción y que pudieran comprometer los derechos civiles y políticos.

El día de ayer el PRI y sus aliados en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública sepultaron la posibilidad de avanzar en la profesionalización de los cuerpos civiles de seguridad pública al rechazar la minuta de mando mixto policiaco. Se perdió la oportunidad de tener cuerpos civiles profesionales y honestos, capaces de cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 21 de la Carta Magna.

En cambio, hoy optan por perpetuar la militarización de la seguridad pública por tiempo indefinido. Se abre margen para la discrecionalidad y la violación de los derechos humanos, asimismo existe el riesgo latente de que se pudiera reprimir la protesta social.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluyó su tiempo diputado.

El diputado José Santiago López: Hoy imponen una visión errada, que estoy seguro que el día de mañana millones de mexicanos le pasarán factura en las urnas. Violencia, genera más violencia, pese a los más de 100 mil muertos que contabiliza este gobierno federal, parece no entenderse este mensaje. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias diputado José Santiago López. Consulte la Secretaría la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

A continuación le damos el uso de la palabra a la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos, quien reserva el artículo 8o., 16 y primero transitorio.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Gracias. Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Gracias. Una vez más ha quedado demostrado el día de hoy quiénes le están dando la espalda a nuestro país, quienes pretenden militarizar nuestra nación generando más violencia y que la seguridad interior está siendo utilizada como un mecanismo en control y represión, que acabamos de vivir el mes más violento en años. ¿Es esta la respuesta a la inseguridad? Les pregunto, compañeros diputados.

La incapacidad de las autoridades no se resuelve con acciones legislativas emergentes, sin ningún análisis de fondo y aprobadas en procesos sintetizados, sin consultar, sin escuchar todo, como lo acostumbra hacer el partido que hoy nos gobierna.

Esta propuesta no es la respuesta a las necesidades de seguridad de la sociedad. Allá afuera la gente está cansada de ir al trabajo y regresar sin pertenencias o, peor aún, el no regresar. La gente está cansada de salir a la calle con miedo. Y en medio d esta crisis de seguridad y violencia se pretende presentar una propuesta, y cito textualmente, la cual salvaguardará la permanencia y continuidad de los órdenes de gobierno e instituciones.

A quienes representamos les interesa preservar y cuidar su patrimonio. Si lo logramos, esta estabilidad, entonces encontraron respeto a las instituciones sin necesidad de enfrentar a la sociedad y a las Fuerzas Armadas.

Como manifestamos nuestra postura, es en contra, pretendemos y confiamos en la consciencia de cada uno de nosotros como legisladores. Y por ello encontramos en las reservas una manera de detener este dictamen autoritario e incluso regresivo.

Mi propuesta en concreto son al artículo 8, donde debemos reiterar los calificativos sujetos a interpretación y únicamente que perduren las manifestaciones de protesta social que se apegue a la Constitución, es decir se eliminan las palabras motivo político electoral y pacíficamente. De esta manera se pretende bloquear que las protestas o manifestaciones sociales no sean consideradas por ningún motivo amenaza a la seguridad interior, sin margen de interpretación.

Por otro lado, al artículo 16, para que no se tome una decisión arbitraria que dependa únicamente del criterio o capricho del presidente de la República a la hora de determinar acciones para establecer el orden. Por ello, mi propuesta es adicionar, previa autorización del Congreso de la Unión, que en caso de no estar reunidos se procederá a lo establecido en el artículo 67 de nuestra Carta Magna.

Quiero concluir manifestando una vez más nuestro enérgico rechazo a esta propuesta por las razones que ya se han comentado. Es lamentable que obedece a titulares de dependencias que no son lo que enfrentan de manera frontal a la inseguridad y la violencia. Le están quedando mal a las Fuerzas Armadas, le están quedando mal a los ciudadanos de este país. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Erika Irazema Briones Pérez. A continuación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, por tres minutos, quien se reserva el artículo 8o.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”. Gandhi.

Con su venia, diputada presidenta. La violencia se originó fundamentalmente por la falta de desarrollo y de empleos, por la corrupción imperante y la desatención a los jóvenes, y aquí están los responsables, tienen nombre y apellido, José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.

La aprobación de esta ley es una clara manifestación al miedo que tienen de perder el poder en las próximas elecciones de 2018, frente a Morena.

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Sin embargo, vemos que en el dictamen

que estamos por votar se agregan y violan los derechos humanos referentes a la libre manifestación de las ideas, no solo de las personas en lo particular, sino de los gremios que existen en nuestro país.

El artículo 8 del proyecto de decreto que estamos discutiendo es un grave atentado a la libertad de la libre asociación, a la libre expresión y al derecho de manifestación que impera en nuestro país.

En ese sentido, vengo a presentar reserva para que se incluya que no solo las movilizaciones de protesta social, sino las gremiales y personales no sean consideradas por ningún motivo amenazas a la seguridad interior, así como suprimir la palabra pacíficamente, toda vez que este gobierno pretende meter esquiroles en las movilizaciones para desestabilizarlas y tener pretextos para coartar el derecho a la libre manifestación.

No lo permitamos, votemos a favor esta reserva. Les muestro a los responsables de nuestra crisis. Gracias.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. A continuación, tiene el uso de la palabra, por tres minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, quien se reserva el artículo 8.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: De nuevo, muy buenas tardes, compañeros legisladores. La certidumbre es uno de los fines del derecho, uno de los fines últimos, particularmente la certeza jurídica como un derecho humano fundamental.

Todo ciudadano necesita tener la claridad de los márgenes de actuación de la autoridad, la que solamente puede hacer aquello para lo que está expresamente facultado, por esa razón es que subo a ésta máxima tribuna, para reservar el artículo 8o. de esta Ley de Seguridad Interior que dice: las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente, de conformidad con la Constitución. Y lo dejo hasta aquí la lectura.

Este tema de pacíficamente genera ciertamente una incertidumbre más aún cuando volteamos a ver algunos episodios en la historia de México, particularmente hay un episodio muy doloroso que todos tenemos en la mente muy presente, que es justamente lo acontecido en octubre de 1968 cuando se sembraron, en la participación adecuada, justa reclamando cuestiones sociales los estudiantes, se sembraron participaciones de agresores, que de alguna manera desestabilizaron una marcha que debió de haber sido así, pacífica.

Y esto no es tan poco común como pareciera, es un riesgo latente que debemos de prevenir como legisladores, para que todo ciudadano que tiene algo que comunicar a las autoridades tenga la tranquilidad de saber que no se utilizarán las Fuerzas Armadas para este tipo de situaciones.

De tal manera que tenemos que legislar con mucha claridad, con mucha nitidez que garantice la certeza a los ciudadanos. Las definiciones que se hacen en el contenido no pueden quedar a la discrecionalidad ni tampoco a esta experiencia.

Por tal motivo es que presento ante esta soberanía la reserva, Encuentro Social pone a su consideración, la que tiene como objetivo retirar esa calificación ambigua, para que solamente diga y cito ahora sí textualmente todo el artículo: Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior.

Nos debemos a los ciudadanos y los ciudadanos tienen diferentes maneras de comunicar sus necesidades, su malestar, justo su inconformidad. De tal manera que nosotros, como legisladores, es importante que nos

unamos para asegurar que ellos puedan expresarse libremente, sin ningún temor a ser agredidos. Es todo y es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Norma Edith Martínez. A continuación consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha, se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Luis Fernando Mesta, del Partido Acción Nacional, por tres minutos, quien se reserva el artículo 8.

El diputado Luis Fernando Mesta Soule: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Presidenta. Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y para mí, el Ejército mexicano es una institución a la que le reconocemos su labor en el auxilio y apoyo a la población en desastres naturales. Esta ha sido invaluable, como lo ha sido su entrega en el combate de los grupos delincuenciales. Es motivo de orgullo y gratitud.

México es una nación que ha adoptado el modelo democrático, representativo y republicano. Adoptamos como medio de convivencia que los estados sean libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, por lo que la Ley de Seguridad Interior vulnera gravemente el pacto federal al conceder al presidente de la República la potestad de intervenir en los gobiernos locales.

Estamos votando una ley que no se ha querido discutir a fondo, un dictamen que se aprobó en comisión tan solo hace unas cuantas horas. Es primordial entender y atender ya el tema de seguridad, pero al hacerlo apresuradamente vamos a sacrificar derechos humanos fundamentales de las y los mexicanos, seamos responsables.

Es un gran error para la estabilidad democrática conceder a la Secretaría de Gobernación la facultad de aplicar una legislación que atente contra el Estado de Derecho, ya que será ese órgano el que determinará en qué estado o municipio se emite la declaratoria de protección a la seguridad interior, quebrantando así la libre determinación de las autoridades locales electas democráticamente.

Esta ley es electorera, se está aprovechando la coyuntura para engañar a la ciudadanía y hacerle creer que el problema de la inseguridad se está atacando. Eso es totalmente falso. Lo que quieren son votos para el proceso electoral de 2018. Hagan su esfuerzo, pero hablando con la verdad a las y los mexicanos.

¿Qué pasó con el tema del mando mixto? Fue Enrique Peña Nieto quien propuso este modelo de seguridad. ¿Por qué el PRI en comisión votó en contra de este dictamen de minuta que lo regulaba? Ahora van por el mando único. Nuevamente el PRI mostró su rostro autoritario. Son muchos ejemplos que encontramos en la ley que hoy se impone para demostrar el espíritu vivo de Díaz Ordaz.

Pero me concentraré en el artículo 8o. del dictamen. Se pretende coartar la libertad de expresión y libre manifestación pública. Ustedes sí olvidaron el 2 de octubre, ¿verdad? La intolerancia es tal que se busca legitimar con esta ley la acción violenta para inhibir protestas en contra de la acción gubernamental.

La modificación que vengo a proponer consiste en garantizar el derecho y ejercicio a la manifestación pública de ideas, la protesta social y las expresiones político-electorales.

El artículo 8o. del dictamen establece que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral no podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior, salvo que no sean pacíficas. El error del dictamen y la trampa consiste en dejar al presidente de la República la determinación de cuáles son pacíficas.

Deja un vacío conceptual que ofrece plena libertad a la autoridad para hacer uso de esta ley en contra de la ciudadanía. No privemos a las y a los mexicanos...

La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputado.

El diputado Luis Fernando Mesta Soule: ...de su derecho a manifestarse libremente. Es cuanto.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Luis Fernando Mesta. A continuación consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, por tres minutos, del Partido de la Revolución Democrática, quien se reserva el artículo 90.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Compañeras y compañeros, esta ley pretende regularizar lo irregular, normalizar lo anormal, perpetuar lo que debería ser temporal. Y para lograrlo, el poder civil encarnado en el PRI gobierno está usando a las autoridades militares, a los militares en general, de una manera ignominiosa.

No conformes con haberlos echado a la calle a ejercer funciones policiacas que no les competen, que les son ajenas, ahora pretenden engañar a la opinión pública diciendo que quienes estamos en contra de esta ley estamos en contra de la protección que las Fuerzas Armadas le dan a la población civil en muchas partes del país. Nada más falso.

Yo expreso aquí y ahora mi respeto por las Fuerzas Armadas mexicanas. Quienes tenemos amigos en el Ejército y en la Marina, sabemos que ellos no quieren hacer estas funciones, están a disgusto ejerciendo el papel del policías, que no quieren seguir ahí. Y lo que se está haciendo con esta propuesta es quitar los incentivos para que se capaciten a las policías, para que se agilice la preparación de las fuerzas policiacas y se permita el retiro pronto de las Fuerzas Armadas, se están generando los incentivos opuestos, incentivos perversos para que se mantengan como están las cosas, eso es muy grave.

Y por si fuera poco, se están introduciendo instrumentos de opacidad que no existían antes, y con eso tiene que ver la reserva que ahora presento.

Lo dijo, y lo dijo bien el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en la Comisión de Gobernación, cuando una política pública fracasa se le desecha o al menos se le modifica, pero nunca se le legaliza, y eso es lo que se está haciendo ahora. Esta minuta es la legalización del desastre, es la legalización de un error que ya lleva 11 años, 11 años en que se ha bañado a México de sangre y se le ha convertido a nuestro país en un inmenso cementerio.

Esta iniciativa, este dictamen que hoy discutimos es, insisto, la legalización del desastre, la perpetuación del error. No exagero, compañeras y compañeros, cuando les digo que hoy se está incubando el huevo de la serpiente. Muchas gracias.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputado Agustín Basave. Pregunte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por tres minutos, quien se reserva el artículo 9o, 21 y 27.

La diputada Claudia Sofía Corichi García: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.

La diputada Claudia Sofía Corichi García: El dictamen que estamos discutiendo hoy –ya lo hemos dicho de manera reiterada– intenta expandir las facultades de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, y estamos convencidos de ello porque no podemos decir que no a algo tan claro.

El artículo 21 de nuestra Constitución Política establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil, por tanto es innecesario intentar legalizar desde un enfoque militarizado ya que es contrario a las obligaciones constitucionales e internacionales contraídas por México y que hasta el día de hoy se ha demostrado, son ineficaces y fomentan aún más la impunidad. Es decir, tampoco hemos visto un cambio cuando entran las Fuerzas Armadas.

Tenemos sin embargo, por otra parte, señalamientos reiterados de violaciones a los derechos humanos, lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Tortura sexual a mujeres en los momentos de detención, también la ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón Tlatlaya en el estado de México la madrugada del 30 de junio de 2014, o los atroces actos de tortura que sufrieron cuatro personas a manos –también hay que decirlo– de algunos militares en Baja California Norte en junio de 2009.

Pero hay más. Las víctimas de las 99 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2006 hasta la fecha sobre temas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas; más de 200 organizaciones y una gran cantidad de sentencias, diagnósticos, recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. Tenemos una crisis de derechos humanos.

Es por esto que sin duda en todas las corporaciones nadie es de una manera o de otra. Toda es la corporación completa. Pero sí tenemos que cuidar el tema de los derechos humanos.

Hemos sido señalados de manera internacional, a nivel internacional por las violaciones permanentes a los derechos humanos. Y es un tema que nos preocupa porque se ha ido agravando cuando entran a funciones que no les han correspondido las Fuerzas Armadas. Es por ello, que presentó el día de hoy dos reservas que tienen que ver con este tema de la defensa de derechos humanos.

Por una parte, creo es necesario que en el artículo 21 donde se establece constituir un grupo interinstitucional a efecto de coordinar la realización de las acciones de seguridad interior, así como para el seguimiento a las acciones de preparación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas, es necesario adicionar un párrafo para que estas mismas definan las estrategias especiales necesarias de supervisión por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, que esté presente.

Y también propongo un segundo párrafo al artículo 27, para que cuando las Fuerzas Armadas realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito, en ningún momento participen en tareas relacionadas con la investigación de dicho delito, tiene que quedar establecido y tiene que llamarse a las autoridades competentes. Es necesario blindarnos ante las constantes y graves violaciones a los derechos humanos.

Si hoy permitimos que esta ley pase así; si además no pasó el mando mixto, se trabó en comisiones, en la madrugada pasó algo, de verdad que ¿cuál va a ser el pretexto después? Si esta Ley de Seguridad entre en vigor ¿cuál va a ser el pretexto? ¿Cuál va a ser el pretexto de los gobernadores? ¿cuál va a ser el pretexto del

gobierno federal si las cosas siguen más mal? Pero encima, con una violación permanente a los derechos humanos.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya diputada.

La diputada Claudia Sofía Corichí García: Es por eso que finalizo pidiéndoles que podamos al menos aprobar en estas dos reservas estas adiciones para garantizar los derechos humanos y que no hagan de investigadores quienes están ahora entrando, o irán a entrar a las calles también a hacer seguridad pública. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias diputada Claudia Sofía Corichí. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación se le concede el uso de la palabra, por tres minutos, al diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, quien se reserva el artículo noveno.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Gracias. El día de hoy están aprobando la Ley de Seguridad Interior, y que las consecuencias que de ella emanen recaiga sobre sus conciencias.

El Grupo Parlamentario de Morena se opuso rotundamente. Hay que manifestarlo, somos respetuosos. El Ejército no es responsable de la violencia que se vive en el país, que eso quede muy claro. Las Fuerzas Armadas son pueblo, y al igual que nosotros, padecen de los malos gobiernos. El verdadero responsable actualmente es el gobierno actual comandado por Enrique Peña Nieto. El Peña Nieto, de Atenco, que dejará el cargo el próximo año, dejando atrás una estela de sangre sobre el país.

Ha sido, es y seguirá siendo un error reducir la estrategia de seguridad a la capacidad de fuego entre el crimen organizado y las autoridades encargadas de la seguridad pública. Esta política de violencia lleva más de 10 años aplicándose en nuestro país, sin resultados fructíferos hasta ahora.

Les pregunto, ¿quién se siente más seguro en el México de hoy que hace tres, cinco o diez años? Están errando el camino. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos coloca a México entre los diez países más violentos del mundo. La política de seguridad pública debe priorizar la inteligencia sobre la fuerza.

La presente ley no fomenta la profesionalización de las policías locales, por el contrario, les resta autoridad y atenta contra la autonomía en los estados de la Federación. En la política de Seguridad Pública no existe una ruta que conduzca al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los cuerpos de seguridad para que realicen su labor con dignidad y en buenas condiciones.

La violencia no se resuelve con más violencia, no. No se resuelve intimidado a la sociedad, al contrario, les quita la tranquilidad a los ciudadanos y lo único que produce es la fragmentación de los grupos criminales de donde emergen nuevos liderazgos aún más violentos.

En Morena estamos convencidos que México necesita desarrollo económico, democrático, necesita igualdad de oportunidades para todos, necesita acabar con la pobreza, necesita justicia, no más armas en las calles. Lo que queremos es paz social.

Además de sumergir al país en una ola de violencia, el artículo 9 del dictamen atenta contra el derecho de acceso a la información. Indica que la información que se genere con motivo de la ley será considerada de seguridad nacional, es decir, podrá clasificarse como reservada y confidencial.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputado.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con el ocultamiento de esta información se da un margen de acción sumamente discrecional al Ejecutivo sobre el manejo de recursos financieros, humanos y materiales. Con esta ley no solo estaremos intervenidos bajo el comandante supremo, que bajo criterios nada claros podrá reprimir la protesta social...

La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputado.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: O resistencia civil –estoy por concluir, presidenta– bajo el argumento de la seguridad interior, sino que además no tendremos derecho a saber cuáles serán los efectos de las dichosas declaratorias de protección.

El pueblo de México no quiere más violencia e intimidación en las calles. Quiere desarrollo y justicia social, que se conseguirá solo con austeridad gubernamental y la mesura, valores como pilares de cualquier política pública que podrá lograr que México viva en paz.

Pongo a consideración de esta asamblea la reserva al artículo 9 del dictamen...

La presidenta diputada María Ávila Serna: Concluya, diputado.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Para que la información que se genere con la aplicación de esta ley no pueda ser considerada como reservada o confidencial, y así garantizar el derecho de acceso a la información a todos los mexicanos. Es cuanto.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Se desecha. A continuación tiene uso de la palabra la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La diputada Hurtado Arana ha reservado los artículos 10, 12, 13, su propuesta es suprimiéndolos. Se le conceden tres minutos. Adelante, diputada.

La diputada Karen Hurtado Arana: Con su permiso, señora presidenta. Compañeros diputados, me sumo rotundamente a las expresiones de respeto por las Fuerzas Armadas y la noble labor que realizan en nuestro país en situaciones de desastre, mismas que fueron expresadas en esta tribuna el pasado mes de septiembre. Y es precisamente por ese respeto que les tenemos, que no podemos sacarlos a las calles de manera permanente, cuando nosotros como mexicanos con nuestros impuestos pagamos su adiestramiento y en ocasiones altos mandos han expresado que ellos no han sido formados para ser policías.

Recordemos que el Ejército no es quien debe pagar los platos rotos de la estrategia de seguridad fallida del actual gobierno, lamentablemente en la otra cara de la moneda se han documentado abusos y excesos de parte del personal militar, que las más de las veces quedan en la impunidad.

Para nadie es desconocido que a un militar le es más fácil abusar y violentar de los derechos humanos y mientras este país no disminuya sus índices de corrupción y no fortaleza sus instituciones en materia de procuración de justicia, no podemos permitir que la moneda siga al aire. No podemos permitir que la seguridad esté a cargo de la institución que está diseñada para salvaguardar al país de fuerzas extranjeras, no de los mismos connacionales.

No podemos olvidar el papel que jugó el Ejército durante la Guerra Sucia, no podemos ser omisos ante el dolor de ejecuciones, de las desapariciones forzadas y de todas las atrocidades que padecieron quienes buscaban un mundo mejor.

Diputadas y diputados cómplices del gobierno han aprobado de manera general una ley que ha sido creada en circunstancias sospechosas, y casualmente esto ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto urgiera al Congreso a votarla pese a muchas críticas de la sociedad civil.

Como ya lo dijo mi compañero diputado integrante de la Comisión de Gobernación, es un dictamen que fue entregado apenas hace unas horas, carece de definiciones precisas para dejar en ambigüedad conceptos, protocolos y situaciones fundamentales que quedan sujetos a la mera interpretación, y eso no resuelve el problema de capacidades locales y estatales para la seguridad, ya que son los municipios y los estados quienes deben de completar sus capacidades para cumplir con su función constitucional.

Definir el concepto de seguridad interior nos podría llevar bastantes horas y hablar de los casos en los que pueda aplicarse la presente ley genera inmensas lagunas jurídicas. Así que no podemos entregar un cheque en blanco al Ejecutivo para militarizar el país, y es por ello que propongo que se deroguen los artículos 10, 12 y 13 de la presente ley, ya que no podemos dejar que se criminalice cualquier situación o coyuntura que convenga al partido en el poder.

No podemos permitir que se criminalice la protesta social, cuando es a través de la acción social que la ciudadanía se ha manifestado libremente y contribuido a la transformación social y el fortalecimiento institucional de este país.

Invito a los compañeros diputados a que puedan votar a favor esta propuesta de derogar estos artículos, ya que no ayudan a nada para el crecimiento de este país. Muchas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Karen Hurtado Arana. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. Quiero informar a esta soberanía que el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien hubiera presentado una reserva, ha declinado. Se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates.

De igual manera, el diputado Juan Pablo Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ha declinado. Se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Angélica Moya Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien presentó la reserva al artículo 14. Se le conceden tres minutos para su participación.

La diputada Angélica Moya Marín: Con su venia, presidenta. Debemos aceptar que no ganamos la votación, pero sí quiero intentar por lo menos insertar una fracción en el artículo 14, para que nos permita medir la actividad, en términos de una evaluación objetiva de la actuación del Ejército, en términos de derechos humanos. Ojalá y lo logre.

La redacción sería la siguiente. Insertar en el artículo 14, en donde se habla precisamente acerca de las condiciones que tendría que tener o los requisitos que tendría que tener el acuerdo de declaratoria de protección a la seguridad interior, para insertar una fracción que estaría redactada en estos términos: Como un requisito más, la evaluación sobre el empleo de la fuerza, en términos de su justificación, aplicación y valoración de las consecuencias, en materia de respeto a los derechos humanos.

Ojalá que ya que se aprobó esta ley pueda perfeccionarse con medidas de este tipo, en el sentido de que los militares puedan ser evaluados, en términos de su actuación con relación a los derechos humanos, de una forma objetiva y como un requisito indispensable para la declaratoria de seguridad interior. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Angélica Moya Marín. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. Quiero informarles, antes de conceder el uso de la palabra a nuestro siguiente orador, que la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha declinado, la diputada había presentado dos reservas, se inserta, como en todos los casos, el texto íntegro en el Diario de Debates.

Lo mismo, el diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ha declinado también su reserva, la misma será integrada al Diario de Debates.

También la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ha declinado su reserva, también se estará integrando, junto con la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien también ha declinado, y junto con la reserva sometida también de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, quien ha declinado, estas tres reservas también se insertan íntegras en el texto en el Diario de los Debates.

Diputadas y diputados, con este último balance nos quedan seis oradores. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Valencia Guzmán ha presentado reservas al artículo 15 del dictamen, adelante, diputado, tiene usted tres minutos.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su venia, presidenta. La idea es que se modifique el artículo 15, a fin de que la facultad de la declaratoria no recaiga en el presidente de la República sino en la Cámara de Diputados o en la ausencia del pleno de esta en la Comisión Permanente y entregaré la reserva correspondiente.

Quiero citar una frase del 1 de diciembre de 2012, que dice así: “México exige vivir en paz. Estoy convencido que el delito no solo se combate con la fuerza. Es imprescindible que el Estado emprenda un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social”. Eso no lo dijo algún opositor a la Ley de Seguridad Interior, lo dijo Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012.

¿En qué momento el gobierno federal abandonó su principal bandera en materia de seguridad, lo que tenía que ver con prevención? Porque así se anunció, así lo dijo en sus promesas de campaña, en los primeros eventos, incluso se creó en el gobierno federal una subsecretaría de prevención del delito que dependía de la Secretaría de Gobernación.

Y digo dependía, aunque existe, porque tenía un presupuesto por encima de los 3 mil millones de pesos. Hoy, esa Secretaría no tiene un solo peso, esa Subsecretaría de Prevención del delito.

¿En qué momento el presidente, el gobierno federal abandonó la política de prevención para llevarnos a una política de uso de la fuerza, a una política de militarización del país, como aquí ya se ha dicho? Decía alguna de las diputadas del PRI que no nos engañemos, que no se va a militarizar el país. No, no se va a militarizar, ya está militarizado.

En 24 entidades de la República existen los centros de operaciones mixtas comandadas por el Ejército o la Marina, 24 entidades de la República tendría ya que hacerse la declaratoria de la cual habla la ley. Es decir, estamos ante un grave problema, porque además, cuando llegó Peña a la Presidencia había 75 comandos de operaciones mixtas en el país, ahora hay 170. Es decir, 95 más que cuando inició este gobierno y es un claro ejemplo de militarización del país por parte del actual gobierno.

Cada día, ante la falta de capacidad para darle seguridad a los habitantes del país, con políticas de precisión adecuadas, con programas de apoyo a las y los jóvenes, con apoyo a las comunidades con cierto nivel de vulnerabilidad.

Lejos de eso, se plantea confirmar su fracaso en materia de seguridad y se recurre a una institución prestigiada, como el Ejército mexicano, una institución prestigiada para el Estado mexicano, para exponerla a los embates de la delincuencia organizada. Y hay que decirlo, ha habido...

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputado.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: ...esta guerra absurda que inició Felipe Calderón y que ha continuado Enrique Peña Nieto, que ha dejado miles y miles de muertos. También es cierto, ha dejado decenas, cientos de integrantes de las Fuerzas Armadas muertos por su absurda guerra contra el narcotráfico. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Valencia Guzmán. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La diputada ha reservado el artículo 16 proponiendo su supresión. Se le conceden tres minutos.

La diputada Olga Catalán Padilla: Gracias, diputada presidenta. Apreciados compañeros, la propuesta de Ley de Seguridad Interior que hoy se nos presenta es una propuesta que está llena de secciones, las cuales abren la posibilidad de que la actuación de las fuerzas federales y armadas se lleve a cabo con total discrecionalidad e impunidad.

Mayo de 2006, Atenco; junio de 2014, Tlatlaya; septiembre de 2014, Ayotzinapa; junio de 2016, Nochixtlán. Y desde luego que no olvidamos la matanza del 2 de octubre de 1968. Todos estos lugares y fechas significativos por representar dolor, frustración e impotencia para el pueblo mexicano.

Pero, sobre todo, son clara muestra de las consecuencias derivadas de depositar en manos inexpertas facultades de decisión tan importantes como el uso de esas fuerzas en la resolución de conflictos políticos, económicos o sociales, que a voluntad pueden ser exhibidos públicamente y de manera perversa como actos que representan un riesgo a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones.

El artículo 16 de la ley que hoy se discute, emplea el término grave peligro, sin embargo en ningún momento lo define con claridad. Considerando que la Agenda Nacional de Riesgos es un documento confidencial que puede incluir cualquier cosa que le moleste al régimen dentro del listado de riesgos, como podría ser un movimiento social e incluso la migración, por ello cuestionamos ¿cuáles serían los parámetros a considerar por el titular del Ejecutivo, para que en cualquier momento una expresión que vaya en contra sus intereses o evidencie alguna falta u omisión de su parte, se considere un grave peligro y por ende se haga uso de las fuerzas federales y armadas en su resolución?

No olvidemos que las y los diputados somos responsables de dotar a la población de leyes que den orden y seguridad a su vida cotidiana, pero también estamos obligados a garantizar que en esas mismas leyes se incluyan los controles que den certeza al respeto de sus derechos y siendo congruentes con ese encargo debemos velar porque una responsabilidad tan grande no quede en una sola persona, facultándola para ejercer ese poder de manera enteramente discrecional.

Es por esto, que propongo la eliminación de este artículo, buscando con ello dar plena garantía al ejercicio de los derechos humanos. Es cuanto.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. A continuación, se concede el uso de la palabra, al diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El diputado presenta dos reservas, a los artículos 23 y 25. Tiene usted tres minutos, diputado.

El diputado Erik Juárez Blanquet: Gracias. Con su permiso, presidenta. Compañeros diputados. Hasta el término de seguridad interior es un término propio de los regímenes autoritarios, y eso no lo digo yo, lo expresó el alto comisionado en México de la Organización de las Naciones Unidas.

Esta Ley de Seguridad Interior que se pretende aprobar e imponer con mucha urgencia, yo también creo que obedece a un gran miedo que tiene que ver con la antesala de las elecciones en el 2018. Se le tiene un gran terror y temor a la derrota, por eso en unas cuantas horas se planeó y se orquestó el dictamen y la aprobación y la discusión de esta ley en la Cámara de Diputados el día de hoy.

Este dictamen que se pretende aprobar el día de hoy no es más que un golpe de facto. Imagino que es el plan B del PRI gobierno ante la eminente derrota y fracaso en las elecciones del 2018.

Pero los diputados del PRD no permitiremos que se mancille a una institución tan prestigiada como lo es el Ejército mexicano. No estamos de acuerdo en que lo hagan cómplice de su incompetencia.

Esta ley que pretenden aprobar el día de hoy no es más que el resultado o, dicho de otra forma, es el reflejo de la estrategia fallida que utilizaron en materia de seguridad que pretenden oficializar, legalizar, normalizar y justificar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, propias de la esfera civil.

Los mandos civiles han quedado rebasados ante el problema de la delincuencia organizada quizá porque muchos personajes del Estado sean tapaderas de las organizaciones criminales y pretendan justificar esta oleada creciente, colocando a nuestra última línea de defensa que es el Ejército al frente, y que este sea susceptible de ser contaminado por los enemigos de la sociedad.

La guerra iniciada por Felipe Calderón y relevada con Enrique Peña Nieto, no ha terminado con el problema de la delincuencia y sí ha teñido a este país de sangre, y hay una constante y flagrante violación a los derechos humanos de la sociedad civil. Le llaman daños colaterales.

Esta ley, compañeros y compañeras, deja muchos cabos sueltos que permiten la opacidad en el uso de la fuerza y dejan a los civiles al libre albedrio de la justicia militar. Si, ya voy a terminar compañeros.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya diputado.

El diputado Erik Juárez Blanquet: Este proyecto excluye la materia de lo contencioso administrativo, dejando a un lado al ciudadano en la mayor indefensión respecto a las acciones del Estado. Esto es muy grave señores y señoras.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya diputado.

El diputado Erik Juárez Blanquet: Eso tiene un nombre, y sencillamente se le llama dictadura. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tres minutos.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Cinco.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le conceden cinco minutos al diputado, dado que ha presentado cinco reservas.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Yo no he comido como varios de ustedes o varios de ustedes sí. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Bla, bla, bla decía un diputado que hace como un par de horas se subió aquí a tratar de ironizar la posición de quienes nos hemos manifestado en contra de este dictamen para sacar adelante una Ley de Seguridad Interior.

Yo les digo, miren, es falso que se haya escuchado a las organizaciones de la sociedad civil, ahí están las manifestaciones de los últimos días de más de 250 organizaciones de aquí de nuestro país que se manifiestan en contra. Ahí están también las opiniones de más de 10 organizaciones internacionales al respecto. Si se les hubiera tomado en cuenta no estaríamos, por lo menos en esta ocasión, discutiendo sobre el particular.

Y es falso también que el dictamen esté apegado a la Constitución y a los tratados y convenciones de las que ha participado México firmando sus resolutivos. Y también es falso por todo lo que aquí se ha dicho por muchas compañeras y compañeros, que es una ley la que se pretende sacar adelante para proteger y darle un marco jurídico adecuado a las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Hay que decirlo claro y tajantemente, aunque se oiga y suene machacón. La ley que se pretende aprobar es inconstitucional e inconvencional, legaliza la violación de los derechos humanos como un aspecto potencial, como un riesgo, no establece controles claros de los órganos del Estado para entrar a hacerle un contrapeso a las acciones de las Fuerzas Armadas y, desde luego, las desgasta y las pone en serio riesgo en su propio prestigio a nuestras Fuerzas Armadas.

Miren, el artículo 26, uno de los que reservé, dice en su segundo párrafo: las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente, y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior sin controles.

El artículo 32 dice: el titular de la autoridad coordinadora de las acciones de seguridad interior mantendrán informado al presidente de la República de las acciones realizadas por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación. Es decir, ni siquiera al Congreso.

Y luego el artículo 34, como remate de muchas cosas, dice que el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta ley, en la declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando ni siquiera Fiscal Anticorrupción tenemos como para acabarla de rematar.

Entonces yo digo, cuando la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos de nuestro país ha dicho, ha prevenido sobre los contenidos violatorios potenciales de los derechos humanos, aquí como lo escuchamos en voz de una diputada del PRI lastimosamente, que me merece todo su respeto en lo personal, pero qué lástima de intervención, prácticamente como aquí se dijo también por la diputada Gaytán, vino a prácticamente –a prácticamente– a amenazar al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya está visto por dónde se quiere caminar.

Pero eso mismo, y ustedes lo deben asumir, amigas, compañeras y compañeros, está cantada la acción de inconstitucionalidad por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos por adelantado. Y están cantadas también las acciones de inconvencionalidad que se declararán por organismos internacionales,

cuando el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU también pidió al Estado mexicano, a nosotros, como legisladores, que detuviéramos esta acción que hoy se pretende aquí consumar.

¿Para qué legalizar pues lo que está funcionando mal? Ojalá y el Senado corrija esta aberración constitucional inconvencional que aquí se quiere sacar adelante. Dijo el diputado Basave que aquí se estaba incubando el huevo de la serpiente. Diría que aquí está iniciándose, aquí se está gestando la génesis –válgase la expresión– de un golpe de Estado silencioso. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado secretario. Se desecha. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien presentó una reserva al artículo 27. Se le conceden tres minutos. Adelante, diputado.

El diputado Leonardo Amador Rodríguez: Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras, legisladores, a todos los que nos ven por el Canal del Congreso. La reserva que presento al artículo 27 del dictamen se debe a la fragilidad con que esta está redactada, ya que señala que cuando las Fuerzas Armadas realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del conocimiento del Ministerio Público.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, percatar significa advertir, notar o percibir algo. Nuestra Constitución señala puntualmente en el artículo 16, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En su párrafo cuarto, se establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y está, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

Es decir, aprobar este artículo como se encuentra redactado garantiza el uso de la fuerza con los protocolos en que fueron formados los militares. En suma, como afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos o contravenir la Constitución.

Nosotros en el PRD estamos a favor de la defensa irrestricta de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna y estamos en contra de otorgar a las Fuerzas Armadas acciones a su criterio. Por eso exigimos la eliminación de este artículo. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Leonardo Amador Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se desecha. Damos paso a nuestro último orador de acuerdo al registro de artículos reservados. Se le concede el uso de la palabra hasta por tres minutos, al diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El diputado reservó el artículo 30 del dictamen. Adelante, diputado.

El diputado Felipe Reyes Álvarez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y diputados, lo que sostiene el artículo 30 de esta ley en discusión, no es congruente con la realidad mexicana, ya que facultaría a las Fuerzas Armadas y a cualquier fuerza de seguridad pública federal a hacer uso de cualquier método lícito –entre comillas– para investigar y recolectar información.

Por lo tanto, el artículo en cuestión, más que atender un asunto de inteligencia de Estado, pone a toda la población civil en una situación de alta vulnerabilidad, ya que estas disposiciones trasgreden las funciones constitucionales del Ministerio Público y de los jueces federales, de acuerdo a los artículos 21, 100 y 102, ya que son las autoridades que tienen la facultad de investigar y de expedir las órdenes de cateo, más aun tratándose de civiles.

En México la violación a los derechos humanos cometidos por las autoridades federales no es un tema nuevo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido un total de 12 mil 400 quejas durante los pasados nueve años en contra de las Fuerzas Armadas, por los diversos actos violatorios a las garantías individuales, con lo que podemos ver claramente una falta de cultura y respeto al Estado de derecho.

A más de 10 años, los resultados negativos de una fallida guerra contra la violencia y el crimen organizado, nuestro país sigue pagando un enorme costo humano, que dejará secuelas por décadas por la falta de políticas públicas de prevención, atención y regeneración de nuestro tejido social.

Se puede entender que el combate al crimen organizado por parte de las fuerzas civiles no ha sido el esperado. Pero no por ello debemos aceptar una Ley de Seguridad Interior que faculte a las Fuerzas Armadas a contener este flagelo, lo cual sería un grave retroceso, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento, que es propio de los entes policiales.

Es por ello que hemos manifestado nuestra preocupación de que los militares realicen tareas de inteligencia, como se señala en el artículo 30 de la citada ley, lo que pone en riesgo los derechos humanos de las y los ciudadanos.

Esta disposición resulta constitucionalmente cuestionable, porque significa dar sustento legal a acciones que de facto ya suceden todos los días en el territorio nacional por parte de las Fuerzas Armadas.

Por lo anteriormente señalado, nuestra propuesta es que el artículo 30 del proyecto de decreto en comento es que se suprima. Gracias por su atención.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, estimado diputado Felipe Reyes Álvarez. Pregunte, por favor, señor secretario.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha y se reserva para su votación en conjunto con el resto del dictamen.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dado que es la última reserva inscrita, todas las declinadas han sido inscritas, como lo solicitaron sus proponentes, en el Diario de los Debates y después de cinco horas con dos minutos de discusión proceda la Secretaría abrir el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados, que son los artículos del 1 al 34 más los transitorios primero, segundo, tercero y cuarto.

Han intervenido 64 oradores en total en esta discusión que ha durado cinco horas y dos minutos. Por favor, señor secretario, abra el sistema electrónico.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para

proceder a la votación nominal de los artículos reservados mencionados por la Presidencia, en términos del dictamen.

(Votación)

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda, secretario.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Ciérrese el sistema...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a dar un minuto más para la votación

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, secretario.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 215 votos a favor, 101 en contra con 4 abstenciones de 320 diputados presentes, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 214 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. **Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.**

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
Of. No. DGPL 63–II-5-3179
Exp. No. 4504

CC. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e s.

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad Interior, con número CD-LXIII-III-1P-298, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes
Secretario

RECIBIDO
30 NOV 2017
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
01360 H

JJV/jg*

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A
P R O Y E C T O
D E
D E C R E T O

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Artículo Único.- Se expide la Ley de Seguridad Interior

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia.

Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional.

Artículo 2. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 3. En el ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acciones de Seguridad Interior: Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior;

II. Amenazas a la Seguridad Interior: Las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional;

III. Riesgo a la Seguridad Interior: Situación que potencialmente puede convertirse en una Amenaza a la Seguridad Interior;

IV. Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: El mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior;

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

V. Fuerzas Armadas: El Ejército, Armada y Fuerza Área;

VI. Fuerzas Federales: Las instituciones policiales federales;

VII. Inteligencia para la Seguridad Interior: El conjunto de conocimientos obtenidos a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad interior;

VIII. Seguridad Interior: Lo previsto en el artículo 2 de la presente Ley;

IX. Seguridad Nacional: Lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional, y

X. Uso legítimo de la fuerza: La utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

Artículo 5. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia.

Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional.

Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas.

Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE PROTECCIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas:

I. Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran Declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 12. En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.

Artículo 13. Las peticiones de las Legislaturas de las entidades federativas o de su respectivo Ejecutivo deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior, especificando entre otros, los aspectos siguientes:

I. Amenaza identificada y el impacto de la misma;

II. Área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas;

III. Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza identificada en la entidad federativa o área geográfica afectada;

IV. Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza identificada;

V. El compromiso de contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de reestablecer la colaboración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que establezca la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VI. La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y para la toma de decisiones correspondientes.

Artículo 14. El Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener lo siguiente:

I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán;

II. La amenaza a la Seguridad Interior que se atenderá;

III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las Acciones de Seguridad Interior;

IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la Amenaza a la Seguridad Interior;

V. Las Fuerzas Federales participantes;

VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley;

VII. Las Acciones de Seguridad Interior que se llevarán a cabo, y

VIII. La temporalidad de la Declaratoria.

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá determinar la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 15. La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo.

Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones de Seguridad Interior. Las modificaciones y prórrogas deberán notificarse y publicarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la presente Ley.

Artículo 16. En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Lo anterior, sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES

Artículo 17. A partir de la expedición de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento, se considerarán como Acciones de Seguridad Interior.

Artículo 18. En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las autoridades federales conforme a lo previsto en la presente Ley, tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.

Artículo 19. La Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 20. Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate, conforme al procedimiento siguiente:

I. El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en términos del artículo 21;

II. El Comandante designado en términos de la fracción anterior elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes;

III. El protocolo contemplará la integración de grupos interinstitucionales, a fin de que cada uno lleve a cabo la misión que se les asigne con base en las atribuciones y responsabilidades que les correspondan, coordinadas por el Comandante, y

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

IV. Las Fuerzas Armadas actuarán realizando las Acciones de Seguridad Interior previstas en la Declaratoria respectiva.

Artículo 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas.

Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada.

Artículo 23. Durante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en el marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, asumirán las siguientes responsabilidades:

I. Atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que sean convocadas;

II. Aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea solicitada o con que cuenten, que permita cumplir los fines de la Declaratoria;

III. Prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora para atender la Amenaza a la Seguridad Interior;

IV. Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior y superarla;

V. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la Ley de la materia;

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VI. Presentar los informes periódicos ante la autoridad federal coordinadora sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe en el marco de la Declaratoria;

VII. Las que se establezcan conforme a la fracción IV del artículo 14 de esta Ley, y

VIII. En el caso de las entidades federativas, las que haya comprometido en los términos de la fracción V del artículo 13 de esta Ley.

Artículo 24. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, destinará Fuerzas Federales para

que realicen Acciones de Seguridad Interior, en aquellas áreas o zonas del territorio nacional que así lo requieran.

Artículo 25. Tratándose de fenómenos naturales perturbadores, la intervención de las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, se sujetará a lo previsto en la Ley General de Protección Civil y, en su caso, a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.

Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 27. Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.

Artículo 28. Las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior con su organización, medios y adiestramiento, sin descuidar el fortalecimiento de sus capacidades.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 29. Las Acciones de Seguridad Interior se apoyarán en los órganos, unidades y procesos de inteligencia previstos en las leyes respectivas.

Artículo 30. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, la colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto se establezcan.

CAPÍTULO QUINTO
DEL CONTROL DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 32. El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 33. El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la Comisión Bicamaral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de control previstas en dicha ley.

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 34. El incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y en la Declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorios

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; y en su caso con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados.

Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Cuarto. Si a la entrada en vigor de la presente Ley existen situaciones en las que se surten las hipótesis contenidas en el artículo 11, se aplicará el procedimiento ahí previsto, sin perjuicio de que en tanto se materializa el mismo, las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas, continúen realizando las acciones que estén llevando a cabo para atenderlas. Las que no requieran Declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.

Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente

Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes
Secretario

Se remite a la H. Cámara de Senadores,
para sus efectos constitucionales
la Minuta CD-LXIII-II-1P-298
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario de Servicios Parlamentarios
de la Cámara de Diputados.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2017
LXIII/CG/873/2017

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
P R E S E N T E.

Distinguido Senador Presidente:

Por instrucciones de la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, y en atención a lo dispuesto en los artículos 188 numeral 1, 190, 191 numeral 1, 192 y 193 del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitarle a Usted respetuosamente su colaboración, para que gire sus apreciables instrucciones al personal que se encuentra a su digno cargo, con la finalidad de que sea enlistado en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria que la Mesa Directiva determine, el dictamen siguiente:

- Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, respecto de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Se adjuntan los siguientes documentos:

I. Dictamen debidamente firmado;
II. Archivo electrónico
III. Copia de las listas de asistencia de la reunión donde fue aprobado el dictamen referido.
IV. Votos Particulares:
   a. Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya;
   b. De la Senadora Dolores Padierna Luna;
   c. De los Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

d. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Alejandro Encinas Rodríguez

V. Propuestas de modificaciones al Texto del Decreto de los Presidentes de las Comisiones Unidas, Senadora Cristina Díaz Salazar, Senador Fernando Torres Graciano, Senador Ricardo Barroso Agramont y Senador Ángel Benjamín Robles Montoya.

Sin otro particular, le reitero mi alta consideración distinguida.

ATENTAMENTE

PUBLIO RIVERA RIVAS
SECRETARIO TÉCNICO

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda de la LXIII Legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Quienes integramos estas Comisiones procedimos al estudio de la citada Minuta y analizamos las consideraciones y los fundamentos que sirven de base al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 135, 166, 174, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la Minuta referida, nos permitimos someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO"** se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno del Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA MINUTA"**, se sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Colegisladora.

III. En el capítulo de **"CONSIDERACIONES"** se da cuenta de aquellas que los integrantes de las Comisiones Unidas exponen para motivar el Acuerdo del presente Dictamen.

IV. Finalmente, en el capítulo **"PROYECTO DE DECRETO Y REGIMEN TRANSITORIO"**, se presentan las propuestas específicas de reformas, adiciones y derogaciones y de efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO

1. En sesión del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el día 30 de noviembre del presente año, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, con 248 votos a favor, 115 votos en contra y 48 abstenciones. El mismo fue remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
2. En fecha 30 de noviembre de 2017 mediante oficio No. DGPL 63-II-5-3179, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que expide la Ley de Seguridad Interior.
3. En fecha 01 de diciembre de 2017 mediante oficio No. DGPL-1P3A.-5156, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyó turnar el proyecto referido a la Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente.
4. En reunión celebrada el día 13 de diciembre del año 2017 los integrantes de las Comisiones Unidas, aprobaron por mayoría el presente Dictamen, como lo refiere el registro de votación que se adjunta al mismo.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Cámara de Diputados, como Cámara de Origen del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, expresa en su Dictamen, que realizó

un análisis y estudio de todas las iniciativas presentadas tanto en Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, las cuales se enuncian a continuación:

- Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, del Diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 26 de noviembre de 2015, que concluyo el 29 de abril de 2016;
- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, del Senador Roberto Gil Zuarth del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentada en el Pleno del Senado el 27 de septiembre de 2016.
- Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones contenidas en la Ley de Segundad Nacional, de los Diputados Manuel de Jesús Espino Barrientos y Candelaria Ochoa Ávalos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentada el 11 de enero de 2017 que concluyo el 14 de agosto de 2017;
- En fecha 30 de mayo de 2017 los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Enrique Burgos García e Ismael Hernández Deras y de los Diputados María del Carmen Pinete Vargs, José Hugo Cabrera Ruíz y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, Reglamentaria de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, lo anterior, es importante señalar que la colegisladora elaboró su proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, analizando dos iniciativas, las cuales se mencionan a continuación:

- Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por los Diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 08 de noviembre de 2016.
- Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por la Diputada Sofía González Torres del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentada el 14 de febrero de 2017.

Bajo esta óptica se analiza el contenido de la minuta objeto de este dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. Inicialmente, los Diputados César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, del grupo parlamentario del "Partido Revolucionario Institucional" (PRI), proponen crear un ordenamiento jurídico con el objeto de regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y lo municipios, en la materia. Los legisladores autores del proyecto señalan que, al no contar con un marco jurídico claro, las acciones que ejecuten las Fuerzas Armadas que apoyan en los tres órdenes de gobierno podrían ser las inadecuadas e insuficientes. Así mismo contribuirá a que la sociedad tenga plena y total confianza en el ejército, así los ciudadanos podrán convencerse de que las Fuerzas Armadas velan por la seguridad de todos los ciudadanos, siempre apegados al respeto absoluto de los derechos humanos.

Asimismo, mencionan que uno de los temas inherentes más importantes de la Seguridad Nacional es la "Seguridad Interior", cuyo objeto de tutela es el orden interno, entendido como la justa aplicación de las leyes. Por tanto, resulta imperante crear un ordenamiento legal que defina y regule específicamente las actividades realizadas por las dependencias e instituciones competentes en el

sostenimiento de la Seguridad Interior, con el propósito de delimitar el campo de acción legal de las autoridades y otorgar certeza jurídica a los ciudadanos.

Por ello, la colegisladora centra sus consideraciones en la idea que la Seguridad Interior, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), en términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Destacando que el legislador ha asignado como una de las misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos garantizar la Seguridad Interior, así como a la Armada de México de coadyuvar en la seguridad interior del país, tal y como se prevé en los artículos 1° de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 1° de la Ley Orgánica de la Armada de México, respectivamente.

Derivado de lo anterior, la Colegisladora expone que es necesario que se emita una Ley que defina con claridad el objetivo que se busca alcanzar en materia Seguridad Interior, para garantizar las condiciones adecuadas que permitan salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio del pueblo mexicano, así como regular de manera integral los esquemas de atención y coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Por otro lado, y aunado a lo anterior, se analiza la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por la Diputada Sofía González Torres del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Señala en sus consideraciones, que debido a los crecientes índices de violencia de tipo criminal que se han desatado en los últimos años se pretendió implementar una estrategia con el objetivo de reconstruir el tejido social, lograr la transformación institucional del Estado para frenar el crecimiento de grupos

criminales y reducir los índices delictivos, buscando con ello garantizar el Estado de Derecho.

Además, señala que es imperante la necesidad de crear una normativa que regule el accionar de las Fuerzas Armadas, para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad del Estado mexicano, concediéndoles un marco normativo democrático, de rendición de cuentas y transparencia. Por ello, el concepto de seguridad nacional tiene que ser visto como un todo, en el que se integran las concepciones de seguridad individual y colectiva para proporcionar el orden necesario para el desarrollo normal habitual de las actividades en beneficio de la nación.

Por otra parte, la colegisladora una vez analizadas las iniciativas ha determinado que las mismas tienen grandes coincidencias, todas ellas consideran a la seguridad interior como una función del Estado para garantizar el estado de Derecho en beneficio de la población mexicana, que debe desarrollarse de manera coordinada entre todos los niveles de gobierno, incluyendo a las autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas.

En el mismo tenor existe consenso en que por ningún motivo, las Acciones de Seguridad Interior que en su caso lleven a cabo las Fuerzas Armadas, se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública. Rechazando tajantemente así la usurpación de atribuciones y por consiguiente la violación a lo establecido en el artículo 21 Constitucional.

De igual manera la comisión dictaminadora coincide en el establecimiento de principios que deberán regir la actuación de las Fuerzas Armadas cuando intervengan en acciones de seguridad interior, destacando los principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad,

temporalidad, subsidiariedad, gradualidad, legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y sus garantías.

Asimismo, concuerdan respecto a que el procedimiento de las acciones ejecutadas en materia seguridad interior, debe ser expedito, pues en todos los casos coinciden en que la prontitud permitirá hacer frente de mejor manera a las amenazas que pongan en riesgo a los pilares fundamentales del Estado; actuación que, debe justificarse en todas las iniciativas tendientes a solicitar la colaboración de fuerzas federales y en su caso, Fuerzas Armadas, misma que puede ser solicitada a nivel estatal o federal, y que en ningún caso puede realizarse para protesta social o política.

Otro de los elementos importantes en el que une sus consideraciones la colegisladora, es el establecimiento de compromisos y obligaciones para todas las autoridades que se involucren en actividades de seguridad interior.

Por otro lado, una de las principales estimaciones de los dictaminadores versa sobre la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de Seguridad Interior, puntualizando que es el órgano constitucional encargado de la elaboración de las leyes en el ámbito federal en todas aquellas materias que se consideran trascendentales para el desarrollo nacional.

Los integrantes de la comisión dictaminadora mencionan que este último tema, fue incluido en la Constitución hasta el año de 2004, cuando el Constituyente permanente aprobó la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional, quedando de la siguiente manera:

> "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: (...) XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. (...)

De igual manera se analizan las iniciativas objeto de este dictamen, toda vez que, a pesar de que la seguridad interior no es lo mismo que la seguridad nacional o que la seguridad pública, sí guarda ciertas semejanzas con la primera, pues comparten un origen que tiene que ver con la preservación de la soberanía nacional mediante la defensa exterior e interior de la población, el territorio y el gobierno que componen al Estado Mexicano, supuestos contenidos en los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, y cuyo elemento diferenciador es el origen de las mismas, pues en el caso a estudio, ocurre al interior del territorio nacional. Por lo tanto, se considera que el Congreso de la Unión sí puede legislar en torno a la seguridad interior, pues la misma es una rama de la seguridad nacional.

Posteriormente los proponentes exponen que, la atribución del artículo 73, fracción XXXI y lo dispuesto en los artículos 89, fracción VI y 129 Constitucionales, deben analizarse de manera conjunta, pues en ellos se encuentra la facultad exclusiva del Presidente de la República, de comandar las fuerzas armadas en la defensa de la seguridad interior.

Enseguida los autores del proyecto señalan que, a su vez, es también Jefe de Estado, en términos de lo dispuesto en el artículo 89 fracción VI Constitucional, al depositarse en él, el mando supremo de las fuerzas armadas para preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Por lo que, si las circunstancias del país lo exigen, el Presidente de la República como máxima autoridad civil y como Comandante Supremo, puede invocar el auxilio de las fuerzas armadas en términos de lo dispuesto en el referido artículo 89, fracción VI, sin que ello se contraponga a lo dispuesto en el artículo 129 Constitucional.

Adicionalmente la colegisladora explica que el contexto actual por el que atraviesa la seguridad en México, es cada vez más complejo; ante la emergencia de amenazas críticas dominantes como el crimen organizado y el narcotráfico que ponen en riesgo la seguridad tanto de las personas como de las instituciones que conforman el Estado-Nación mexicanos.

A su vez la comisión estima que lo anterior se evidencia en la percepción de inseguridad que la población tiene de su entorno, que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, impacta en el 61.1% de la población de 18 años y más, que considera a la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa. Asimismo, el 74.3% de la población considera a su entidad federativa insegura y en el caso de los municipios y delegaciones, como el ámbito más próximo a las personas, se registra un aumento en la percepción de inseguridad que incrementó de 63% en 2013 a 66.3% durante 2017.

Respecto a lo antes enunciado, la comisión dictaminadora considera que los actuales sistemas de seguridad nacional y pública resultan insuficientes para salvaguardar el ámbito de acción en el que interactúan población e instituciones, lo que se agrava ante la ausencia de un marco regulatorio específico en materia de seguridad interior.

En consecuencia, valoran como indispensable e impostergable la discusión sobre la expedición de una Ley de Seguridad Interior como complementaria de la Ley de Seguridad Nacional, a fin de generar un marco regulatorio acorde a las nuevas realidades y retos que enfrenta la población y las instituciones del Estado Mexicano.

En virtud de lo anterior la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados estima imperante expedir una Ley de Seguridad Interior que responderá a las

trasformaciones sociales y a la evolución de las amenazas, que obligan a replantear el concepto mismo de seguridad nacional.

Ahora bien, el proyecto de dictamen aprobado enfatiza en el surgimiento de la necesidad de establecer un procedimiento idóneo que permita que las autoridades encargadas de la defensa nacional cuenten con los elementos y herramientas necesarias para atender amenazas que tengan su origen en territorio nacional, pues no debe dejarse de lado que ellas también son consideradas de Segundad Nacional a pesar de que son causadas por un agente interno.

Lo anterior sin dejar de acotarse a los límites constitucionales, particularmente en el pleno respeto a los derechos humanos, ya que permite a la población tener certeza de los actos que puede realizar la autoridad.

Ante tal panorama, el dictamen menciona que no debe de perderse de vista que la seguridad interior obedece al mantenimiento de la condición de estabilidad interna, paz y orden público, cuya garantía es una función que está a cargo de los tres órdenes de gobierno.

Por tanto, quienes integran la comisión definen que el objetivo de la Seguridad Interior es tutelar la protección del orden constitucional, el Estado de Derecho, así como de la correspondiente observancia de las mismas; luego entonces, el orden interno implica tanto al orden constitucional como a las instituciones democráticas de gobierno, garantizar la protección de los derechos humanos y las garantías individuales.

Adicionalmente consideran que las iniciativas de Ley de Seguridad Interior fortalecen la coparticipación de todos los actores e instituciones gubernamentales que por su naturaleza deben participar en las labores de seguridad, tal es el caso de las Fuerzas Armadas, cuya formación y adiestramiento tiene dentro de sus misiones principales defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior.

A partir de las consideraciones mencionadas los dictaminadores estiman que la participación del ejército en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del Estado, es necesaria ante los nuevos escenarios complejos de inseguridad por los que atraviesa la nación.

Por lo que cuando la dinámica social rebasa la ley, es obligación de los legisladores su actualización, y si no existe norma jurídica que regule las conductas que afectan la convivencia social, ésta debe ser creada.

De la misma manera los integrantes de la comisión reconocen que los constantes crecimientos de las amenazas internas han puesto en vulnerabilidad a algunas instituciones del Estado, situación que no puede enfrentarse en algunos casos con las fuerzas civiles con que se cuenta y, aceptar ese hecho es tener la responsabilidad de emprender acciones que sean lo suficientemente aptas para controlar la situación. Para decirlo claro, el problema de la seguridad interior en áreas geográficas determinadas, ha rebasado a la autoridad civil, lo que justifica la necesidad de establecer medidas extraordinarias en tanto haya condiciones para retornar a la normalidad. No obstante, es preciso advertir que las acciones de seguridad interior no implicarán en todos los casos la intervención de las Fuerzas Armadas.

En este sentido la Comisión dictaminadora estima que resulta necesario dar el marco legal adecuado y definir claramente qué se entiende por seguridad interior para que todas las autoridades encargadas de nuestra seguridad cuenten con mecanismos claros, ágiles y eficaces en su mantenimiento, ante el tamaño de las amenazas que como sociedad enfrentamos y que hace necesario que sean todas las fuerzas quienes las enfrenten.

Abordar ahora el problema y erradicarlo con toda la fuerza de nuestras instituciones, permitirá que como sociedad atendamos otras tareas aún pendientes en materia de seguridad, para que las Fuerzas Armadas no constituyan el único recurso que sea capaz de hacerle frente a dichas amenazas.

En tales circunstancias la comisión de Gobernación destaca que es necesario hacer consciencia de que el modo más eficaz de enfrentar las complicaciones de seguridad interior es abordar el problema reconociendo las carencias actuales y corrigiéndolas mediante la creación de un marco legal que establezca límites y competencias bien definidas para todas las autoridades involucradas, que permita que la colaboración entre las Fuerzas Federales, Estatales y Municipales se realice mediante un procedimiento claro y respetuoso de los derechos humanos hasta en tanto se erradique la amenaza a nuestras instituciones.

Para sustentar de mejor manera el presente dictamen la comisión, incluyó una serie de foros y jurisprudencias que respaldan el actuar y el fundamento del motivo de la creación de la Ley que se pretende.

Por otro lado, la presente minuta incluye un apartado en donde consideran necesario incluir las opiniones expresadas en las reuniones de trabajo sobre seguridad interior, además de alinear su contenido con el objeto de la norma, al que llamaron "Adiciones a las Iniciativas", siendo estas las siguientes:

1) Sujetar los procedimientos y acciones destinados a la salvaguarda de la seguridad interior, al respeto de los derechos humanos en todo el territorio nacional, pues tal y como se señaló a lo largo de este documento, la seguridad constituye uno de los presupuestos básicos para que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales.

En concordancia, libertades como las movilizaciones de protesta social o aquellas con un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior, lo cual es congruente con el contenido del artículo 9° constitucional.

Asimismo, y con la finalidad de guiar el actuar de las instituciones encargadas de la aplicación de esta Ley, en el ejercicio que estas realicen de las atribuciones de seguridad interior, observarán los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia. eficiencia, coordinación y cooperación, previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, además de los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

En este último supuesto, consideramos que se deben delimitar las definiciones propuestas por los iniciantes y armonizarlas con los principios que rigen la aplicación de esta ley, definiendo al uso legítimo de la fuerza como la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución. De igual manera y en congruencia con la protección de los derechos humanos, se clarifica que la recolección de información de inteligencia por parte de Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas, únicamente puede realizarse mediante métodos lícitos y con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2) Con el objeto de diferenciar entre qué se entiende por seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior, se incluye una definición de esta última, consistente en la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el

conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la Ley.

3) Se señala que las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior son materia de Seguridad Nacional, recalcando que en ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública; siendo acorde con la división de conceptos de seguridad pública, segundad nacional y seguridad interior, lo que permite que cada una de ellas se despliegue de manera independiente y conforme a los ordenamientos específicos que el Congreso expide para ello. En sintonía con esa división y con el concepto añadido, se incluye un catálogo de aquello que se considera como Amenaza a la Seguridad Interior, entendiendo como tal a los actos contenidos en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en el territorio nacional; u otras circunstancias que atenten contra la infraestructura o el funcionamiento de las instituciones, o dañen gravemente a la población, incluyendo desde un enfoque multidimensional de seguridad a las emergencias, los desastres naturales, las epidemias y las contingencias de salubridad general, por las consecuencias devastadoras que este tipo de eventos tienen en el territorio nacional, el cual es propenso a sufrir estas catástrofes debido a su ubicación geográfica.

Características propias de nuestro país que constituyen un eminente peligro en el mantenimiento de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, al generar efectos que impactan directamente el desarrollo económico, social y político de la nación.

Señalando además que la Comisión ya ha sostenido este criterio previamente en la dictaminación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada el pasado 31 de octubre, durante la decimosegunda reunión ordinaria.

4) De manera complementaria al catálogo de amenazas, se adiciona el concepto de Riesgo a la Seguridad Interior como una situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior; ello para fortalecer el carácter preventivo en la aplicación de esta ley y poder atender oportunamente para contener y reducir aquellas situaciones que pueden convertirse en amenazas a la seguridad interior.

En este mismo sentido, también se incluye la obligación de las fuerzas federales para implementar políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional, sin que para ello se requiera de la expedición de una Declaratoria de protección a la seguridad interior, por tratarse de acciones preventivas.

También se incluye la obligación del Consejo de Seguridad Nacional - como una de las instancias encargadas de la seguridad nacional en términos de la Ley de la materia- de emitir lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional, ya que existe consenso respecto a que el mantenimiento de la seguridad interior requiere del compromiso y la participación de los tres órdenes de gobierno.

5) Respecto a la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, estará sujeta a una temporalidad específica así como a las Amenazas que comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades a quien corresponde atenderlas, o a aquellas que se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo se adiciona un catálogo de responsabilidades que los estados y municipios deberán asumir durante la vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior el cual obliga a los estados a comprometerse a contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de reestablecer la colaboración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que se establezcan en la propia Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, señalando que se sancionará su incumplimiento en los términos del sistema de responsabilidades contemplado en el artículo 109 constitucional, así como en lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción.

6) Otro de los elementos importantes relativos a la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, tiene que ver con la posibilidad de habilitar en ella la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica.

De igual manera se considera oportuno fusionar lo relativo a la emisión de la Declaratoria de las iniciativas a estudio, para que quede de la siguiente manera: la Declaratoria deberá fijar la vigencia de la intervención, la cual no

podrá exceder de un año, pudiendo ser modificada o prorrogada mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones, por considerarse requisitos indispensables para su correcto funcionamiento. Por otra parte, estimamos necesario que tanto la Declaratoria, como su modificación y prórroga, deban notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.

7) Finalmente se adiciona la obligación del titular de la Secretaría de Gobernación de remitir un informe a la Comisión Bicameral de sujetando el ejercicio de las facultades de control de esta última a lo ya previsto en la Ley de Seguridad Nacional. Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación.

Las anteriores se encuentran vertidas en el texto normativo final, así como el régimen transitorio.

III. CONSIDERACIONES

Después de un amplio análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se se expide la Ley de Seguridad Interior, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, llegamos a la conclusión de emitir el presente Dictamen en el mismo sentido que ha sido propuesto por la Colegisladora, en razón de las siguientes consideraciones:

DE LA COMPETENCIA. Que las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la

República, resultan competentes para dictaminar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

DE LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR. Que derivado de la *Declaración sobre seguridad de Las Américas en la Conferencia Especial sobre Seguridad de la Organización de los Estados Americanos*, celebrada el 28 de octubre de 2003 en la Ciudad de México, los estados miembros, pactaron establecer una nueva concepción de la Seguridad de alcance multidimensional, con ello se buscaba una visión en materia de seguridad, con miras a la búsqueda de la paz y la seguridad de las personas.

Lo anterior se hizo partiendo de principios, para la defensa de la democracia, la protección de los derechos humanos, y la defensa del Estado de Derecho, logrando un enfoque común en aras de conseguir la paz social, donde cada estado debía sujetarse a lo siguiente:

- Al derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de Seguridad Nacional y definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas a su seguridad, conforme a su ordenamiento jurídico.
- Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la Seguridad Nacional son de naturaleza diversa y alcance multidimensional, y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales.
- Las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad son problemas intersectoriales que requieren respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones y asociaciones entre los gobiernos, el

sector privado y la sociedad civil, todas actuando de forma apropiada conforme a las normas y principios democráticos y las normas constitucionales de cada Estado.

- El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la buena gestión gubernamental son esenciales para la estabilidad, la paz y el desarrollo político, económico y social.

La afinidad en torno a estos principios es uno de los mayores logros de la declaración, punto de partida que permitió a los Estados miembros coincidir en una visión compartida para reformular el concepto de seguridad y su alcance, que sin lugar a dudas permitió mejorar el abordaje de la problemática de la inseguridad y ajustar a las nuevas amenazas, como: la corrupción, el terrorismo y la delincuencia, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, la venta ilegal de armas.

Lo anterior generó un impacto nacional que forjo la reforma constitucional de 2004 en la que se estableció la facultad y obligación del Presidente de la República a preservar la Seguridad Nacional del país, en la fracción VI del artículo 89 de nuestra Constitución Mexicana, que a la letra dice:

> ***Articulo 89.-*** *Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:*
>
> ***VI.*** *Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.*

Así como la facultad del Congreso para emitir leyes en materia de Seguridad Nacional, fracción XXIX-M del artículo 73 de nuestra Constitución Mexicana, que a la letra dice:

Artículo 73.- *El Congreso tiene facultad:*

XXIX-M. *Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.*

Derivado de lo anterior, surgió la necesidad de crear una legislación secundaria y con ello generar un concepto que, garantizara el bienestar social y la plenitud humana, por ello, el día 31 de enero de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Seguridad Nacional, misma que de acuerdo al artículo 1 de la misma, tiene por objeto:

Articulo 1.- ...

"Establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia".

Con la presente Ley, se creaba un concepto en torno a la Seguridad Nacional, que dotaría de integridad, estabilidad y permanencia al Estado Mexicano, plasmado en el artículo 3 de dicha Ley, que establece lo siguiente:

Artículo 3.- *Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:*

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

En este sentido, corresponde al Estado Mexicano garantizar la Seguridad Nacional entedida ésta como las acciones que permitan salvaguardar la Soberanía, Independencia y la unidad del Estado Mexicano.

La Seguridad Nacional es una condición esencial para preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado Mexicano, cuyas vertientes esenciales son: la Seguridad Interior y la Defensa Exterior de la Federación, que son responsabilidad ineludible de los tres órdenes de gobierno.

La Seguridad Interior vertiente de la Seguridad Nacional es la condición necesaria que proporciona el Estado, para el desarrollo de la Nación mediante el mantenimiento del estado de Derecho, la misma tutela a las instituciones democráticas y al orden constitucional. [1]

Es importante mencionar que la conservación del orden interno y la defensa externa son responsabilidades que comprenden un conjunto de misiones, que conllevan a la ayuda a la población en casos de desastres naturales o humanos, alfabetización, servicio social, reforestación, control de armas y de disturbios civiles y armados, protección a instalaciones estratégicas y resguardo de

[1] PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2013-2018.

paquetería electoral, estas pretenden mantener y legitimar el orden interior y preparar dispositivos de defensa exterior frente a riesgos o amenazas.[2]

Por tanto, corresponde al Estado Mexicano garantizar la Seguridad Nacional entendida ésta como las acciones que permitan salvaguardar la Soberanía, Independencia y la unidad del Estado Mexicano; así como regular las funciones de la Seguridad Interior.

Por ello, es importante insistir en la necesidad de conceptualizar jurídicamente a la Seguridad Interior, ya que disponer de un marco jurídico legitimará y dará certidumbre a las funciones de las fuerzas Armadas, en el cumplimiento de sus funciones relativas a la coadyuvancia con las autoridades civiles en materia de Seguridad Interior.

Durante la última década México ha atravesado por una crisis de seguridad, que rebasa el umbral de la seguridad pública y que pone en riesgo la seguridad interior, diversos problemas tales, como el narcotráfico y los delitos que de él se desprenden, tal es el caso del tráfico de armas, personas y homicidios, han acabado con la tranquilidad de la población, mexicana, además de venir en detrimento del crecimiento económico del país.

Pretendiendo atender dicha crisis, fue que se implementó una estrategia de "Combate contra el narcotráfico" de tipo militar, es decir, se veía a los integrantes de las fuerzas armadas como aquellos elementos que debían hacerse cargo de la protección de la sociedad civil. Dicha táctica dejaba en evidencia la precaria capacitación con la que contaban las policías estatales, puesto que éstas eran incapaces de atender, procurar y garantizar la paz en las diferentes entidades federativas.

---

[2] Arturo Alvarado y Mónica Sierra (2010) Seguridad Nacional y Seguridad Interior, Los Grandes Problemas de México, COLMEX Pg. 155.

Ante esta amenaza constante especialmente del Crimen Organizado, el ejército y las fuerzas armadas, han sido expuestas para combatir dicho flajelo de manera que ante la debilidad de diversas autoridades municipales y gobernadores se ha venido reflejando en la pérdida de espacios públicos y en vacíos o tierra de nadie, que, paulatinamente han sido ocupados por mafias o grupos, al margen del aparato estatal. En otros términos, se trata de situaciones que van más allá de la seguridad pública, puesto que son una amenaza real a la Seguridad Nacional (si se entiende como tal, aquellas acciones dirigidas a preservar la integridad, la permanencia y la estabilidad del Estado Mexicano, tal como lo establece la Ley de Seguridad Nacional) y que han rebasado tanto la capacidad como el instrumento coercitivo de los gobiernos locales y municipales.[3]

Por otro lado, esta tarea se ha llevado a cabo, a pesar de que no se cuenta con un marco jurídico adecuado que precisara las formas y los momentos en que los militares podrían intervenir para auxiliar en dichas funciones, por lo que desgraciadamente se llevó a cabo una militarización parcial de territorio mexicano. Es así como se han generado dos problemas, por un lado, el ejército es solicitado por las autoridades locales a llevar a cabo más tareas para combatir los problemas y amenazas de seguridad mismas que no le corresponden legítimamente y mientras que carecen de facultades legales para ello, lo cual da cabida a un segundo problema, no sólo de falta de legitimidad para su intevención en dichas funciones, sino que compromete su propia legitimación frente a la sociedad civil, ya que en múltiples ocasiones son acusados elementos de las fuerzas armadas por violaciones a derechos humanos, dentro del sistema de justicia penal, por carecer de facultades para llevar a cabo detenciones o funciones de contención de amenazas a la seguridad -que como lo expresamos en líneas anteriores superan el umbral de la seguridad pública, no obstante es inminente (por ahora) su participación para contenerlas- y ello radica en elementos para determinar la liberación de presuntos criminales que han sido sujetos a proceso penal.

[3] Moloeznik, Marcos P. (2007) Breves reflexiones sobre la participación del ejército mexicano en funciones de apoyo a la seguridad pública. ITESO.

Ahora bien, para estas Comisiones Unidas, es imperante determinar que el Congreso de la Unión tiene plenamente determinada la facultar de expedir una ley que regule las acciones que habrán de llevarse a cabo en materia de seguridad interior toda vez que en una lectura e interpretación armónica del texto constitucional, especialmente de los artículos 89 fracción VI en correlación con el artículo 73 fracción XXXI, corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes que sean necesarias para hacer efectivas todas las facultades concedidas por la Constitucióna los Poderes de la Unión; en ese sentido corresponde así que el artículo 89 fracción VI Constitucional faculta al Presidente de la República a disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército, de la armada y de la fuerza aérea para la seguridad interior de la federación.[4]

Lo anterior describe también relevancia, y se enmarca dentro del contexto de protección de derechos humanos que ha sido reconocido en el ámbito internacional a través del Informe del Comité Jurídico Interamericano, que expone la "Guía para la regulación del uso de la fuerza y la protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto armado",[5] documento que expresa detemina las consideraciones que habrán de tomar los estados para la atención de supuestos de violencia que sobrepasan el umbral de la atención ordinaria de la fuerza pública y no son por el contrario un conflicto armado, en ese sentido las Comisiones Unidas consideramos importante presentar el texto relativo al uso de la fuerza en situaciones de violencia interna, a manera de mostrar los elementos de concordancia que subyacen y motivan el presente dictamen:

---

[4] Cfrt. **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 73 Fracción XXXI:** *Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.*
Artículo 89 Fracción VI: *Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.*

[5] Disponible para su consulta en http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-doc_401_12_rev4.pdf

EL USO DE LA FUERZA EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTERNA.

De conformidad con la Carta Democrática Interamericana (2001), la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. La protección del derecho inderogable a la vida es el principal objetivo de la regulación del uso de la fuerza. En un Estado democrático, el único detentador legítimo del uso de la fuerza es el Estado, ya que es éste el que, a través de sus instituciones, utiliza este monopolio legítimo para mantener el orden, el Estado de Derecho, la libertad y la paz pública necesarios para la convivencia social. Este concepto es retomado por Weber, quien define el Estado como "aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia legítima".[6]

El Estado tiene el derecho y la obligación de brindar protección cuando la vida, integridad y seguridad de personas que habitan en su territorio se encuentra amenazada por situaciones de violencia. Ello puede incluir, en situaciones concretas, el uso de medios letales. Así lo han reconocido tanto la CIDH[7] como la Corte[8]. Siguiendo a ésta última, "el derecho del Estado a usar la fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del orden [...] no está en discusión."[9]

El uso de la fuerza física ha sido definido como "la función de la que aparecen investidos ciertos miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad, prevenir y reprimir la violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si es necesario mediante intervenciones coercitivas que aluden al uso de la fuerza"[10].

---

[6] WEBER, Max. El político y el científico. Francisco Rubio Llorente (trad). Madrid: Alianza Editorial, 1986, p. 82.

[7] 34 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 113; Informe sobre terrorismo y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.116, doc. 5, 22 de octubre de 2002, párr. 87.

[8] 35 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia de 19 de enero de 1995 (fondo), párr. 74 y 75; Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párrafo 154; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 162.

[9] 36 ————————. Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia de 19 de enero de 1995 (fondo), párr. 74.

[10] 37 LOUBET DEL BAYLE, Jean Louis. La Police. Approche socio-politique. Paris: Montchrestien, 1992, p. 19. Citado por GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo. Sobre el Concepto de represión. Revista de Historia Contemporánea. Hispania Nova, 2006, n. 6, p. 17, y por MARTÍNEZ MERCADO, Fernando. Documento de Trabajo No. 4. Uso de la Fuerza: Notas y experiencias para la reforma policial en México. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, disponible en: <http://www.cesc.uchile.cl/serie_documentos_06.htm>.

En un Estado democrático, esta función es atribuida de manera exclusiva a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dichos funcionarios son, según el Código de Conducta, todos los agentes de la ley, ya sea nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente facultades de arresto y detención, incluyendo a autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado en los países en que éstos ejercen las funciones de policía[11]. Lo anterior, encuentra su excepción en aquellos casos en los que por razón de la imposibilidad generada por circunstancias concretas para que el Estado pueda proteger a los particulares, se les faculte a estos a usar la fuerza en su legítima defensa.

La práctica de recurrir a las autoridades militares con el fin de apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado en el restablecimiento del orden ha ocurrido en diversas ocasiones en la historia de las situaciones de violencia en nuestro continente. Se trata de una medida legítima a la que pueden recurrir los Estados cuando sus fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar una cierta situación. En opinión de este Relator, no obstante su legitimidad esta medida debe ser siempre de carácter excepcional, aplicándose únicamente cuando las fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar la situación. Debe ser también de carácter subsidiaria y temporal, hasta en tanto las fuerzas policiales y de seguridad fortalecen sus capacidades, o bien, la capacidad letal de las organizaciones criminales se ve reducida; y en todo caso las fuerzas armadas deberán actuar en apoyo y bajo las órdenes de las autoridades civiles electas. La Corte ha enfatizado *"el extremo cuidado que los Estados deben observar al utilizar a las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común"*[12], *señalando que "los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales."*[13]

Debe subrayarse, sin embargo, que esta facultad legítima y exclusiva del Estado de hacer uso de la fuerza por medio de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no se trata de un poder ilimitado. Como lo ha reconocido la Corte:

---

[11] 38 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, artículo 1.

[12] 39 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Velez y Otros v. Ecuador. Sentencia del 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 51.

[13] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia). Sentencia del 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 78.

Por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana[14].

En este sentido, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte reconocen que, para que sea legítimo, el uso de la fuerza por parte del Estado - incluyendo el empleo de armas de fuego - debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

(i) ***Legalidad***

Existencia de un marco normativo que regule el uso de la fuerza los Estados deben reflejar los principios y directrices conforme a los cuales los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden hacer uso de la fuerza en legislación adecuada, con pautas suficientemente claras, a efecto de asegurar que éstos respeten el derecho a la vida de las personas bajo su jurisdicción así como para asegurar un control independiente de la legalidad de la misma[15].

En este sentido, los Principios Básicos[16] disponen que las normas y reglamentaciones respectivas deben contener directrices que:

a) Especifiquen las circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados;

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;

c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;

---

[14] _____. Caso Neira Alegría y otros. Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párrafo 75; Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párrafo 154; Caso Godínez Cruz. Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 162.

[15] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006, párrs. 66 y 75; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Velez y Otros v. Ecuador. Sentencia del 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 86.

[16] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el Octavo Congreso de las sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, párr. 11.

d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego; y

f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones.

En este tenor, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo pueden hacer uso de la fuerza cuando esté dirigido al cumplimiento de un objetivo legítimo, establecido en la ley respectiva. Así, ninguna operación puede tener el fin de matar a una persona, lo cual constituiría un objetivo ilegítimo, sino que su objetivo debe ser el arresto o detención de los infractores de la ley. En este tipo de operaciones, el arresto oportuno evita la escalada en el uso de la fuerza.

(ii) *Necesidad*

De conformidad con el principio de necesidad, puede usarse la fuerza "sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas"[17].

En este sentido, solamente deben adoptarse las medidas de seguridad defensivas u ofensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo el derecho a la vida o a la integridad personal de cualquier habitante[18]. La aplicación del principio de necesidad implica reconocer en todo momento el carácter excepcional del uso de la fuerza. Al respecto, la Corte ha reconocido que *"sólo podrán hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control".* [19]

---

[17] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, artículo 3.

[18] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 116; Véase también Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Velez y Otros v. Ecuador. Sentencia del 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 85.

[19] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 83; Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 67.

En particular tratándose del uso de la fuerza letal, y dado que constituye una medida extrema, la Corte ha agregado que: *[e]n un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional debe estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el "absolutamente necesario" en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler.*[20]

(iii) **Proporcionalidad**

De conformidad con el principio de proporcionalidad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga[21].

Para ello, los Principios Básicos disponen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Entre las armas y municiones *"deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes."*[22]

Sólo podrán utilizar la fuerza y armas de fuego cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de manera alguna el logro del resultado previsto. Deben, por ende, hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego[23].

El Código de Conducta reconoce que el uso de armas de fuego constituye una medida extrema.[24] Según los Principios Básicos[25], que han sido retomados

---

[20] _____. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 83; Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 67.

[21] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, párr. 5 a).

[22] Ibid., párrs. 2 y 4.

[23] Ibid., párr. 4.

[24] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, inciso c del comentario al artículo 3.

[25] _____. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, párr. 9.

por la CIDH[26], sólo podrán emplearse armas de fuego: (i) en defensa propia o de otras personas; (ii) en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves; (iii) con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida; o (iv) con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. Aclaran que *"[e]n cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida."*

En estas circunstancias, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben identificarse como tales y dar una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.

Para el cumplimiento de los principios antes citados, los Estados tienen el deber de llevar a cabo una debida planificación del uso de la fuerza.

Ello incluye el deber que tienen los Estados de brindar capacitación adecuada a los funcionarios encargados de cumplir la ley en materia de uso de la fuerza, consistente con los principios anteriormente descritos. Siguiendo a la Corte:

[u]na adecuada legislación no cumpliría su cometido si, entre otras cosas, los Estados no forman y capacitan a los miembros de sus cuerpos armados y organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.[27]

Según los Principios Básicos, debe procurarse que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Agrega que éstos deben recibir capacitación en el empleo de la fuerza y ser examinados conforme a normas de evaluación adecuadas. Ello, a fin de que los funcionarios que deban portar armas de

[26] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 113; Informe sobre terrorismo y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.116, doc. 5, 22 de octubre de 2002, párr. 87.

[27] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuel., Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 77.

fuego estén autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo. En la capacitación, debe prestarse "especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, *[...] a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, [...] el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego*"[28].

A su vez, los Estados tienen el deber de establecer una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego, buscando siempre la preservación de la vida e integridad física de todas las personas. Para ello, entre éstas deben figurar las armas incapacitantes no letales ya referidas. Los Principios también requieren que se haga una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y controlar con todo cuidado el uso de tales armas.[29]

También debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo[30].

Aunado a lo anterior, el Estado tiene también el deber de llevar un adecuado control y una verificación de la legitimidad del uso de la fuerza, especialmente cuando esta es empleada por aquellos que actúan por mandato del Estado. Como se mencionó, en todo caso en que dispare un arma de fuego, el funcionario encargado de hacer cumplir la ley deberá informarlo inmediatamente a las autoridades competentes.

Una vez que tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, *"el Estado está obligado a iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva"*[31]. Ello constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se ve anulado en estas situaciones. En

---

[28] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, párrafos 18 a 21.

[29] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, Principios 2 y 3.

[30] Ibid, párr.2.

[31] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 88.

efecto, y según lo ha reconocido la Corte, *"[l]a prohibición general a los agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería ineficaz si no existieran procedimientos para verificar la legalidad del uso letal de la fuerza ejercida por agentes estatales"*[32].

En este sentido, la legislación debe: (i) castigar como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; (ii) reflejar la responsabilidad de los funcionarios superiores cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso; (iii) reflejar la responsabilidad de los superiores que den órdenes ilícitas de usar la fuerza o armas de fuego; y (iv) reflejar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla[33].

Según los Principios Básicos, las personas afectadas por el empleo de la fuerza y armas de fuego o sus representantes legales o herederos, tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial.[34] El uso de la fuerza letal por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que no cumpla con los principios y criterios aplicables puede incluso constituir una privación arbitraria de la vida, en violación al derecho a la vida previsto en el artículo I de la Declaración Americana y en el artículo 4 de la Convención Americana[35]. Según lo ha determinado la Corte, *"cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria."*[36]

Los criterios antes descritos resultan aplicables a cualquier situación de violencia interna. A continuación se describen algunas particularidades que, además de los criterios mencionados, caracterizan el uso de la fuerza ante

---

[32] _____. Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006, párrs. 79-83.

[33] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, Principios 7, 24 y 26.

[34] Ibid, principios 1, 2,7, 19, 23 y 26.

[35] Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre terrorismo y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.116, doc. 5, 22 de octubre de 2002, párrs. 89 y 90; Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 114; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Neira Alegría y otros. Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párrafo 76.

[36] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 84; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), parr. 68.

dos formas específicas de violencia interna que han sido recurrentes en nuestro continente: la violencia generada por reuniones ilícitas o violentas y la violencia generada por la delincuencia organizada.

El uso de la fuerza ante la violencia generada por la delincuencia organizada.

Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo, resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Así lo reconoce la CIDH, la cual señala que por primera vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población, y que en estos países *"el Poder Judicial, el ministerio público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia"*[37] Agrega que en algunos casos la empresa privada, las organizaciones sociales y otros actores han intentado dar respuesta, en sustitución del Estado, con altos niveles de precariedad, y que en varios países de la región, la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas[38].

De conformidad con la definición provista en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante, "Convención de Palermo")[39], *se entiende por "grupo delictivo organizado" un "grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material."*

Como ya se ha mencionado, el Estado tiene la obligación de garantizar el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana. Ésta última ha sido definida por la CIDH como la situación donde *"las personas pueden convivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a los mismos", es decir, donde "las*

---

[37] 77 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 3.
[38] Ibid, párr. 33.
[39] 79 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolución A/Res/55/25, artículo 2 a).

personas viven libres de la violencia practicada por los actores estatales o no estatales"[40].

La delincuencia organizada, cuyos grupos hacen uso ilícito de la fuerza, es una manifestación de violencia que desafía la convivencia democrática y pone en riesgo la seguridad ciudadana. Ante esta situación, el Estado tiene la obligación de responder con leyes, instituciones y políticas firmes que prevengan y sancionen el accionar de los grupos delictivos organizados, con el fin de proteger los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. Como lo señala la CIDH, *en un Estado de Derecho, el uso de la fuerza y otros medios de coacción legítimos son monopolio de las autoridades públicas, quienes deben utilizarlos de acuerdo a los estándares ya identificados [...]. [L]os Estados incumplen sus deberes de protección y garantía de los derechos humanos cuando permiten, favorecen o toleran el funcionamiento de grupos de particulares que usurpan funciones esenciales de las instituciones del sistema de administración de justicia o las fuerzas de policía. La historia del continente registra situaciones recientes donde este tipo de prácticas han generado violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, por lo que es deber del Estado democrático ejercer un fuerte control sobre las mismas para evitar su funcionamiento y, en su caso, aplicar las sanciones penales que correspondan según el derecho interno.* [41]

De conformidad con la Convención de Palermo, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas y de otra índole para tipificar penalmente la participación en un grupo delictivo organizado, los delitos graves que entrañen la participación de éstos, el blanqueo del producto de dichos delitos y la corrupción. Asimismo, deben adoptar medidas para autorizar el decomiso del producto de los delitos o de los bienes utilizados en su comisión, entre otros[42]. Conforme al Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, los Estados deben, además, adoptar medidas legislativas y estrategias nacionales integrales para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, perseguir, enjuiciar y sancionar adecuadamente a las personas involucradas en este tipo de delincuencia, y adoptar y emplear técnicas especiales de investigación para su combate.[43]

---

[40] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 221.

[41] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 209.

[42] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención de Palermo. adoptada por la Asamblea General el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolución A/Res/55/25, artículos 5, 6, 8 y 12.

[43] ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Consejo Permanente. Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. CP/RES. 908 (1567/06), 25 octubre 2006.

Aunado a lo anterior, el Relator coincide con la CIDH en la importancia de que el Estado diseñe e implemente políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana, que desarrollen simultáneamente acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo, que sean sustentables y sean sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación ciudadana[44].

El Estado debe también fortalecer sus capacidades institucionales para hacer frente a tales situaciones. En estas circunstancias, cobran particular relevancia las instituciones policiales y de procuración de justicia, reconocidas por la CIDH como "un engranaje insustituible para las garantías de los derechos humanos comprometidos ante la violencia y el delito" en los regímenes democráticos. Las instituciones policiales y las de procuración de justicia tienen un papel relevante, no sólo en la prevención, disuasión y control de la delincuencia y la violencia, sino también en el adecuado funcionamiento de la administración de justicia: tienen responsabilidad en la investigación criminal, la identificación de los agresores, las víctimas, los testigos, la recolección y el análisis de las pruebas materiales, y la elaboración de los informes para fiscales y jueces. En virtud de lo anterior, el Estado debe procurar el fortalecimiento de la legitimidad y eficacia de estas instituciones para hacer frente a la delincuencia organizada, brindando a los agentes de las mismas, la formación, infraestructura y equipamiento necesarios para cumplir de manera adecuada con sus tareas. Asimismo, debe asegurar que las fuerzas policiales tengan apoyo y cooperación de los actores en el sistema de justicia penal, organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y de la empresa privada[45]. Para ello es necesario dotarlos de mejores autorizaciones constitucionales para investigar y perseguir a los miembros de éstas organizaciones criminales, para lo que es fundamental reconocer la proclividad de estas organizaciones para actuar permanentemente en la clandestinidad, y la complejidad de las dinámicas y relaciones que existen entre sus miembros. Asimismo se recomienda la necesidad de dotar de herramientas tecnológicas adecuadas para la investigación y persecución de este fenómeno delincuencial.

Al igual que en otras circunstancias, el uso de la fuerza por el Estado para preservar el Estado de Derecho ante la violencia de la delincuencia organizada debe desarrollarse en el marco del pleno respeto a los derechos humanos. En este sentido, la Corte ha aclarado que si bien la amenaza delincuencial "puede ciertamente constituir una razón legítima para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos, *[...] la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y*

[44] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 232(A), inciso 1.
[45] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párrs. 222 a 224.

conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallan sometidos a su jurisdicción."[46]

A pesar de esta obligación, las políticas de seguridad ciudadana que históricamente se han implementado en numerosos Estados de las Américas se han caracterizado, según la CIDH, en términos generales por su desvinculación de los estándares internacionales de derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria[47]. Al respecto, la CIDH ha reiterado que *"el uso de la fuerza por fuera de los marcos legales y los estándares internacionales, sumado a la inhabilidad de las instituciones para enfrentar el crimen y la violencia en forma eficaz, contribuyen a incrementar la inseguridad de la población."*[48]

Ante esta situación, la Corte ha reiterado en su jurisprudencia que las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones bajo dicho tratado, las cuales subsisten particularmente en esas situaciones difíciles. Ha insistido, a este respecto, *"que, sin importar las condiciones de cada Estado, existe una prohibición absoluta de la tortura, de las desapariciones forzadas de personas y de las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, prohibición que constituye una norma inderogable de Derecho Internacional"*[49].

Conclusiones y Recomendaciones

1. Las situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, a saber, las tenciones internas y los disturbios interiores, se rigen por el derecho internacional de los derechos humanos y por el derecho interno.

2. La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. La protección del derecho inderogable a la vida es el principal objetivo de la regulación del uso de la fuerza. En un estado democrático el único detentador legitimo del uso de la fuerza es el Estado, el cual utiliza este monopolio legitimo para mantener el orden, el Estado de Derecho, la libertad y la paz pública necesarios para la convivencia social.

---

[46] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 96; Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia del 30 de mayo de 1999. Serie C. No. 52, párr. 207.
[47] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 32.
[48] Ibid, párr. 34.
[49] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 96.

3. El Estado tiene el Derecho y la obligación de brindar protección cuando la vida, integridad y seguridad de las personas que habitan en su territorio se encuentra amenazada por situaciones de violencia. Ello puede incluir, en situaciones concretas, el uso de medios letales.

4. En un estado democrático, la función del uso de la fuerza es atribuida de manera exclusiva a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, concepto que incluye a todos los agentes de la Ley que ejercen funciones de policía, incluyendo autoridades militares o fuerzas de seguridad del Estado en los países en que éstos ejercen las funciones de policía. Lo anterior sin perjuicio de reconocer que en casos extraordinarios el uso de la fuerza le está autorizado a los particulares en su legítima defensa. No obstante, la legitimidad con que los Estados pueden recurrir a las autoridades militares para ejercer estas funciones, esa medida debe ser siempre de carácter excepcional, aplicándose únicamente cuando las fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar la situación, temporal, hasta en tanto las fuerzas policiales y de seguridad fortalecen sus capacidades, y subsidiaria en el sentido de que las fuerzas armadas deben actuar en apoyo y bajo las ordenes de autoridades civiles electas.

5. La facultad legitima y exclusiva del Estado de hacer uso de la fuerza no se trata de un poder ilimitado. Los Estados deben reflejar en su legislación directrices y pautas claras que aseguren que el uso de la fuerza por parte de funcionario encargados de hacer cumplir la Ley se realice en pleno respeto a los Derechos Humanos y en cumplimiento a los instrumentos internacionales pertinentes. Los Estados deben garantizar la compatibilidad entre las normas y de reglamentos internos con los respectivos principios y normas del Derecho internacional de los Derechos humanos que regulen el uso de la fuerza en situaciones de violencia interna y, a estos efectos, deben promover la revisión y reforma de la normativa existente y/o la adopción de leyes y reglamentos específicos en la materia.

6. El uso de la fuerza por parte del funcionario encargados de hacer cumplir la Ley debe respetar en todo momento los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El uso de armas de fuego debe considerarse como una medida extrema.

7. Los Estados tienen la obligación de ejercer un fuerte control sobre las situaciones de violencia generadas por la delincuencia organizada y prevenir y sancionar los delitos cometidos por grupos delictivos organizados, como parte de la obligación del Estado Mexicano de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción.

8. Los Estados deben diseñar, implementar y evaluar permanentemente políticas públicas sobre seguridad ciudadana, integrales, sustentables y con

perspectiva de derechos humanos. Éstas deben incluir medidas legislativas y estrategias nacionales integrales para prevenir y combatir la delincuencia organizada. Los Estados deben contar con la capacidad para garantizar los derechos humanos en situaciones de violencia generadas por la delincuencia organizada. Deben prestar especial atención en estas situaciones al fortalecimiento de la legitimidad y eficacia de la policía, a través de actividades de formación y la provisión de infraestructura y equipamiento, entre otros puntos.

DE LA COMPATIBILIDAD CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales en la materia. Consecuentemente, es menester de las comisiones dictaminadoras analizar la minuta enviada por la colegisladora desde una perspectiva de convencionalidad.

Las comisiones dictaminadoras somos conscientes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce la existencia de la facultad –e incluso, la obligación— del Estado de garantizar su seguridad y mantener el orden público[50], siempre que se apliquen procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales de todos los individuos bajo la jurisdicción estatal[51]. El tribunal interamericano ha determinado, en este sentido, que el poder estatal en materia de mantenimiento de la seguridad y el orden público no es ilimitado, pues está condicionado por el respeto a los derechos humanos.

[50] Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, Párrafo 124)
[51] Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, Párrafo 174)

Si bien la Corte Interamericana ha determinado que en algunas circunstancias, la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos[52] y que los Estados deben ser cuidadosos al utilizar a las fuerzas armadas como elemento de control de la protesta social, los disturbios internos, la violencia interna, situaciones excepcionales y la criminalidad común[53], es difícil concluir que el empleo de las fuerzas armadas para la realización de tareas de seguridad pública constituya en sí mismo una violación de los derechos humanos.

Por ejemplo, en el *Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador*, al analizar el Decreto N°86 por el que el Presidente de Ecuador dispuso la intervención de las fuerzas armadas ecuatorianas como medio de precautelar la seguridad de las personas y los bienes públicos y privados en respuesta a hechos de vandalismo que causaron "un grave estado de conmoción interna[54], la Corte Interamericana analizó la existencia de un límite espacial definido y el límite temporal de la intervención militar[55]. De manera similar, en su sentencia del caso *Cabrera García y Montiel Flores vs. México* la Corte Interamericana determinó que los Estados deben limitar el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad

---

[52] Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, Párrafo 122

[53] Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, Párrafo 166

[54] *Considerando*
Que en todo el territorio nacional y, especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, continúan suscitándose hechos de vandalismo, atentados contra la integridad física de las personas y considerables perjuicios a la propiedad pública y privada, que han determinado un grave estado de conmoción interna;
Que es indispensable mantener y defender el sistema jurídico y democrático de la República, así como precautelar el orden y la seguridad de los habitantes del ECUADOR, arbitrando las medidas adecuadas; y
En ejercicio de las atribuciones legales,
ARTICULO PRIMERO. - Dispónese la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, como medio de precautelar la seguridad de las personas y de los bienes públicos y privados.
ARTICULO SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigencia desde la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su cumplimiento encárguese el señor Ministro de Defensa Nacional.

[55] Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, Párrafo 48

común o violencia interna, en razón de que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales[56]. Por otro lado, el tribunal interamericano ha considerado que la naturaleza jurídica de la policía y las fuerzas militares son diferentes en razón de sus funciones[57], por lo que el de las fuerzas militares no se concilia con las funciones que le son propias a las autoridades civiles[58].

De lo anterior se desprende que el tribunal interamericano ha reconocido la posibilidad de emplear a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, siempre que este empleo sea temporal y cumpla con criterios estrictos guiados por el absoluto respeto a los derechos humanos. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha expresado preocupación sobre el empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, puesto que éstas deben corresponder a una fuerza civil que esté sometida a los correspondientes controles por parte del parlamento y, en su caso, del sistema judicial[59].

Las comisiones dictaminadoras hemos tomado nota de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación[60] sobre el impacto de la Ley en la normalización y la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, el posible incremento en las violaciones a derechos humanos que representaría, la diferencia entre la policía y las fuerzas armadas en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación, la necesidad de diseñar un plan de retiro gradual de las fuerzas

---

[56] Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, Párrafo 88

[57] Corte IDH. Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Serie C No. 327., Párrafo 89

[58] Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, Párrafo 122

[59] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/seguridad%20ciudadana%202009%20esp.pdf, párr.100

[60] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/200.asp

armadas en tareas de seguridad pública, y el fortalecimiento de la capacidades de la policía para realizar tareas de seguridad pública. Por otro lado, reconocemos los argumentos vertidos en el comunicado de prensa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[61] sobre el dictamen aprobado por la colegisladora, en el sentido de que el nuevo marco legar podría debilitar los alicientes de las autoridades civiles para asumir sus funciones de seguridad pública, la necesidad de acompañar las tareas de las fuerzas armadas de controles y supervisión apropiados, y la urgencia de contar con garantías contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.

De lo anterior, se identifican los siguientes criterios relevantes para analizar la compatibilidad de la Ley de Seguridad Interior con los estándares internacionales de derechos humanos (i) el establecimiento de límites geográficos y temporales para la presencia de las fuerzas armadas; (ii) la delimitación de las funciones de los elementos militares en tareas de seguridad pública; (iii) la adecuada capacitación de los cuerpos castrenses en materia de derechos humanos y uso de la fuerza; (iv) la necesidad de contar con mecanismos de supervisión y control de la actuación de las fuerzas armadas; y (v) el fortalecimiento simultáneo de los cuerpos policiales con la finalidad última de que retomen sus funciones de seguridad.

En relación con el **establecimiento de límites geográficos y temporales**, las comisiones dictaminadoras consideramos que el procedimiento de emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior previsto los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley se apega a estándares internacionales de derechos humanos. Particularmente, notamos que el artículo 13 establece los requisitos mínimos con los que deben contar las peticiones de las Legislaturas de las entidades federativas –o su Ejecutivo cuando éstas estén en receso—, los cuales incluyen el área geográfica específica. El artículo 14 de la Ley refuerza este punto, pues estipula que el Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad

[61] http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22492&LangID=S

Interior debe incluir las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las acciones de seguridad interior (fracción III), así como la temporalidad de la declaratoria (fracción VIII).

El artículo 15, a su vez, menciona expresamente que la vigencia de la intervención de la federación no podrá exceder de un año y únicamente será prorrogable mientras subsista la amenaza a la seguridad interior y siempre que medie una justificación que cumpla con los mismos requisitos establecidos en el artículo 12. El artículo 16, por su parte, faculta al Presidente de la República a ordenar acciones inmediatas en los casos en los que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro, sin embargo, las sujeta a la emisión posterior de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, en el menor plazo posible. Cabe destacar que, de conformidad con lo previsto en la fracción V del artículo 13, la solicitud de intervención de las autoridades federales debe ir acompañada del compromiso de las entidades federativas de atender la amenaza y reestablecer la colaboración con la Federación de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional. A su vez, se destaca que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior únicamente procede en dos supuestos específicos: (i) cuando se superen las capacidades de las autoridades competentes; o (ii) exista falta o insuficiencia de la participación de entidades federativas y municipios. Lo anterior permite concluir que el propósito de la Ley de Seguridad Interior no es convertir la intervención de las autoridades federales en las acciones de seguridad interior en algo permanente, sino como se expresó anteriormente, su propósito es sentar las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la preservación de la seguridad interior.

Con respecto a la **delimitación de las funciones de los elementos militares en tareas de seguridad pública** las comisiones dictaminadoras llamamos la atención al artículo 20 de la Ley, que establece el procedimiento para la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Adicionalmente, el artículo 5º de

la Ley establece claramente la delimitación respecto de su aplicación por parte del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, estrictamente **en el ámbito de sus atribuciones y competencia, todo ello** de acuerdo con la constitución y las leyes de la materia. Lo anterior delimita que las actividades de las autoridades federales se realicen con estricto apego al orden constitucional mexicano. En consecuencia, la Ley delimita adecuadamente las funciones tanto de las fuerzas armadas como de las fuerzas federales en las acciones de seguridad interior, no sólo en esta Ley, sino que además dichas funciones, deberán de observarse armónicamente con aquellas descritas en las determinadas por la Ley de Seguridad Nacional (art. 5º), la Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos (art. 1º), la Ley Orgánica de la Armada de México (Art. 1º) que las faculta para actuar en acciones relativas a la seguridad interior.

Por otro lado, sobre **la adecuada capacitación de los cuerpos castrenses en materia de derechos humanos y uso de la fuerza**, las comisiones dictaminadoras hacemos notar en primer lugar que el lenguaje del artículo 7, expresamente sujeta los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley al régimen de derechos humanos, ello no debe verse de manera aislada, ya que adicionalmente el artículo 2, establece que todas las acciones destinadas para los fines de la Seguridad interior deberán respetar los Derechos Humanos en todo el territorio nacional. Lo anterior fortalece la condición de la Ley con estándares internacionales, al reconocer la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos tal como lo dispone el texto del artículo 1º Constitucional, y que en todo caso, los protocolos establecidos por las autoridades, para ello, deben cumplir con dicho estándar de Derechos Humanos. Adicionalmente, en materia de uso de la fuerza, reafirmamos la definición contenida en la fracción X del artículo 4 de la ley, que

estipula que el uso legítimo de la fuerza se entiende como la utilización racional y proporcional de la fuerza. De manera simultánea, se debe considerar que tanto las fuerzas armadas como las fuerzas federales cuentan con normas para el uso de la fuerza que se han fortalecido de conformidad con estándares internacionales en la materia.

En referencia a la necesidad de contar con **mecanismos de supervisión y control de la actuación de las fuerzas armadas;** cabe destacar que el artículo 12 de la ley, prevé que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá notificarse tanto a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que permite una supervisión tanto del poder legislativo como de un organismo constitucional autónomo. Por otro lado, los capítulos quinto y sexto de la Ley prevén las acciones de control y las responsabilidades que surgen en caso de incumplimiento a las obligaciones de la Ley. Las comisiones dictaminadoras destacamos, de manera adicional que los mecanismos de control previstos en el texto de la Ley no deben considerarse excluyentes de los demás mecanismos que existen en el marco jurídico mexicano. A manera de ejemplo, estas comisiones consideramos relevante reafirmar que de conformidad con las reformas al Código de Justicia Militar aprobadas en 2014, las eventuales violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas se investigan y sancionan en el fuero civil, de conformidad con estándares internacionales.

Por último, con respecto a la necesidad de **fortalecer a los cuerpos policiales** con la finalidad última de que retomen sus funciones de seguridad, se destaca nuevamente que el sentido de la Ley es que las acciones que realicen las Autoridades Federales, a partir de la expedición de la Declaratoria de Protección, serán consideradas como acciones de Seguridad Interior; *sin menoscabar* las tareas de Seguridad Pública. Estas comisiones dictaminadoras reiteramos que el propósito de la Ley de Seguridad es sentar las bases, procedimientos y

modalidades de *coordinación* entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la preservación de la seguridad interior.

Las anteriores consideraciones permiten concluir que la Ley de Seguridad Interior se adecua a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

VALORACIÓN DE LA MINUTA. Que los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos con los argumentos de la Colegisladora, y que justifican la necesidad de expedir la ley en materia de Seguridad Interior, en virtud de los argumentos expuestos anteriormente y citados en el dictamen de la Minuta de referencia.

El Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2013-2018 define a la Seguridad Interior como *la condición necesaria que proporciona el Estado para el desarrollo de la nación, mediante el mantenimiento del estado de Derecho que tutela a las instituciones democráticas y el orden constitucional.*[62]

Hoy en día la situación de Seguridad en nuestro país es compleja, la presencia de grupos delictivos en diversas regiones de nuestro país ha incrementado, los índices de violencia e inseguridad han afectado a nuestra sociedad, por ello se ha tenido que recurrir a las Fuerzas Armadas para reducir los índices delincuenciales y garantizar la paz social.

En este sentido, es de vital importancia un ordenamiento legal que defina y regule las actividades que pueden realizar las dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento de la Seguridad Interior, con el objetivo de brindar certeza a la ciudadanía.

Hoy en día, los asuntos en materia de Seguridad Pública son atendidos por las instituciones policiales especializadas de los tres órdenes de gobierno; por su

[62] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326566&fecha=13/12/2013

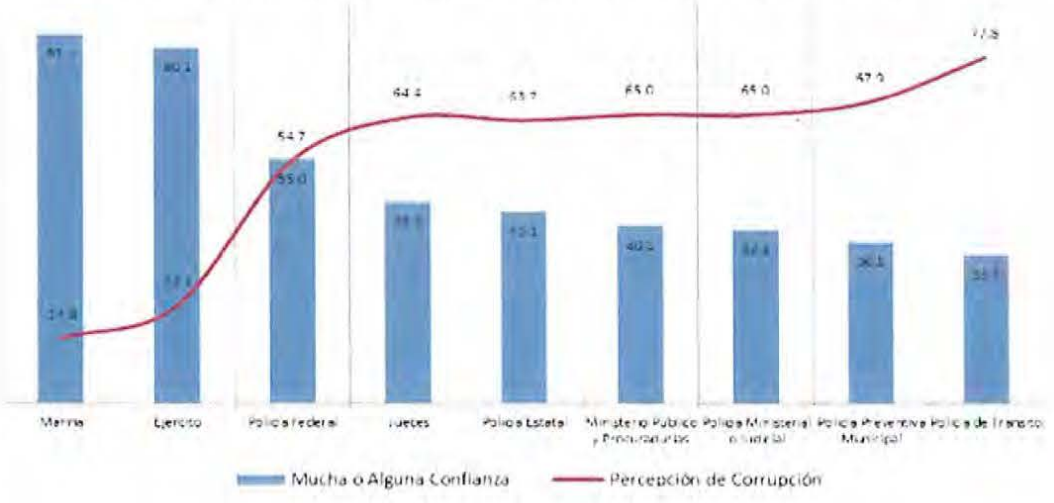
parte, la complejidad de los fenómenos de Seguridad Interior requiere de la actuación coordinada de diversas dependencias e instituciones del Ejecutivo Federal, así como de la participación corresponsable de las autoridades de las entidades federativas y los municipios.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece objetivos respecto compromisos del instituto armado, para contribuir al logro de las metas nacionales establecidas en el Plan.

Entre los logros más relevantes de la SEDENA en este sexenio en materia de seguridad se encuentra la creación de 125 organismos, destacando 5 brigadas de policía militar, reactivación del cuartel general del cuerpo y reacomodo del despliegue estratégico de 64 organismos militares, que coadyuvan en actividades para apoyar a reducir la violencia.[63]

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), señala que la ciudadanía confía menos en las policías preventivas y de tránsito municipal, las policías estatales, las policías ministeriales o judiciales y el ministerio público; en este sentido, el grafico demuestra lo contrario con el Ejército y la Marina.

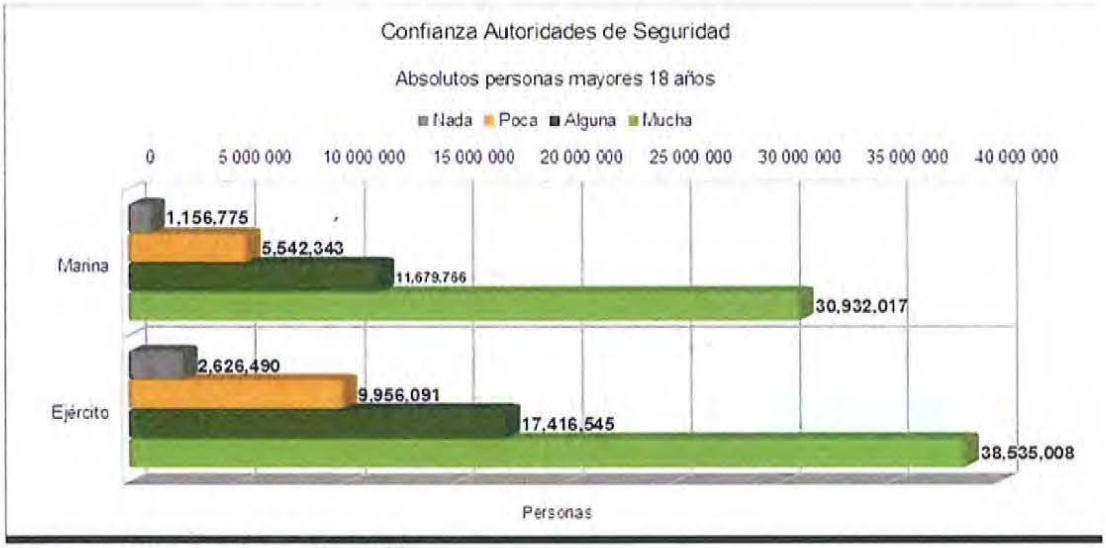
Percepción de confianza y corrupción en instituciones de seguridad pública



63 (
N

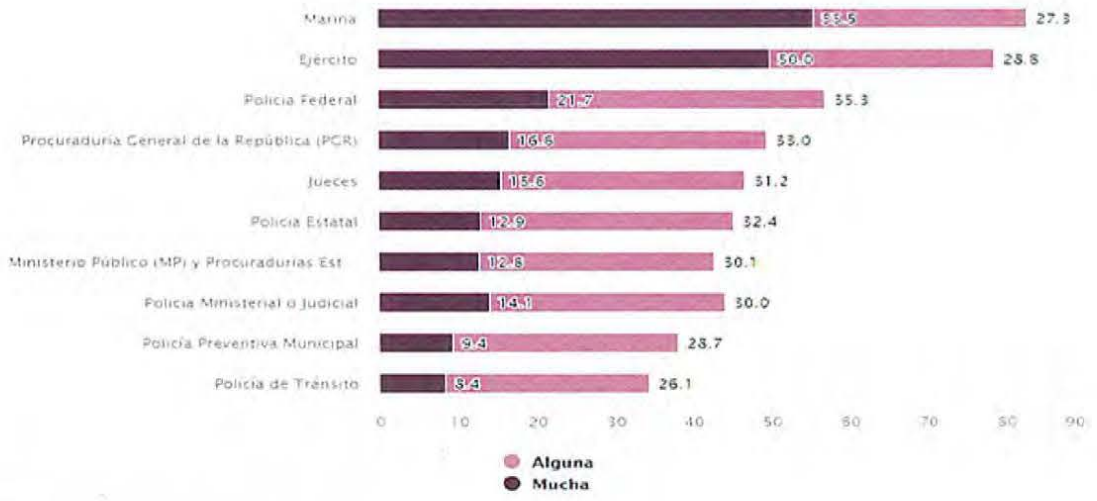
/A

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (*INEGI*), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013.[64]

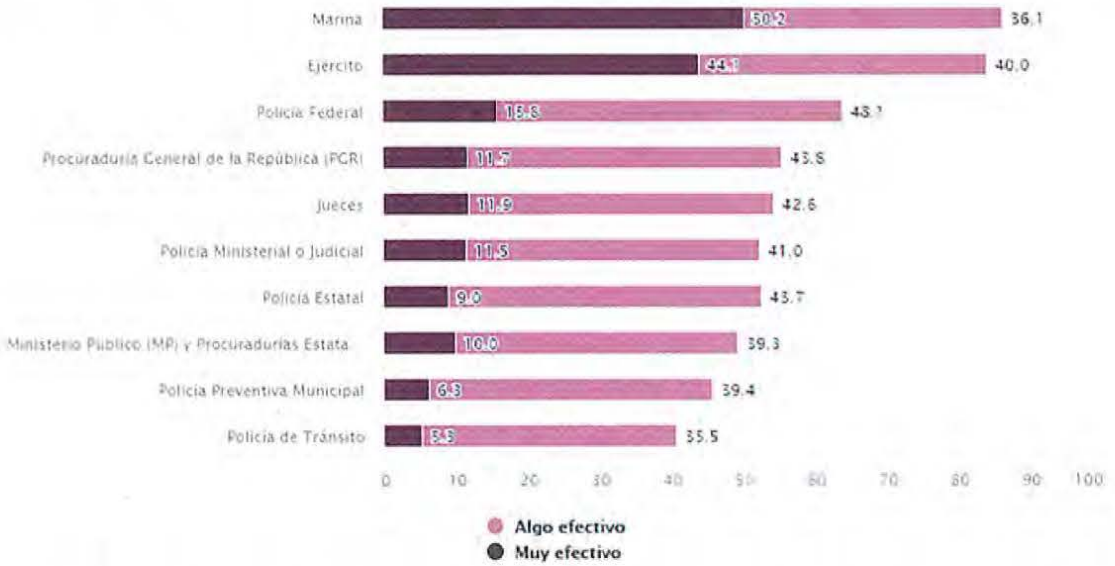


Fuente: ENVIPE 2014 INEGI[65]

El presente gráfico, representa la percepción de personas de 18 años y más por el tipo de autoridad que identifica, según la confianza que ésta le inspira.



Fuente
INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017



Población de 18 años y más, por tipo de autoridad que identifica según nivel de efectividad que considera sobre su trabajo. [66]

REUNIONES INFORMATIVAS.

Estas Comisiones Unidas, queremos dejar constancia de la Reunión de acercamiento y reflexiones: "la Seguridad interior desde la perspectiva de los Derechos Humanos", celebrada en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República el día 26 de enero de 2017, misma que encabezaron: el Lic. Guillermo Valdés Castellanos, Dr. Alejandro Madrazo Lajous, Mtro. Santiago Aguirre Espinoza y el Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca, todos ellos como especialistas; la Mtra. Sara Irene Herrerías Guerra, Dr. Juan Pablo Pampillo Baliño, Titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos, en representación de la Subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para asuntos Multilaterales y

[66] NEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017.

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores., Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Lic. Rubén Pérez Sánchez, Director General Jurídico en representación del Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; y como representantes de la Cámara de Diputados, los legisladores: Martha Tamayo Morales y Sofía Gonzáles Torres.

Inicio de la versión estenográfica:

Ciudad de México, a 26 de enero de 2017.

Versión estenográfica de la tercera reunión de trabajo Acercamiento y Reflexiones "La Seguridad Interior desde la Perspectiva de los Derechos Humanos", Presidida por el Senador Ernesto Gándara Camou; de la Comisión de Seguridad Pública, celebrada en el salón de protocolo de la Mesa Directiva del Senado, hoy a medio día. (12:00 horas).

El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muy buenas tardes y bienvenidos todas y todos ustedes.

En nombre de mis compañeras y compañeros Senadores de la República, y desde luego con la grata participación de nuestros compañeros Diputados Federales, les damos la más cordial bienvenida a los expositores de esta Tercera Reunión de Análisis, de Reflexión, de Acercamiento, en un tema que hemos venido trabajando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como es la expedición de una Ley de Seguridad Interior.

Ésta es, como les decía, la tercera reunión, después de una que tuvimos aquí en el Senado el pasado 10 de enero. Otra la semana pasada, con distinguidos académicos, encabezada por la Presidenta de la Comisión de Gobernación, junto con las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, en donde fuimos invitados los Senadores a estar presentes.

Y ésta tercera reunión, en donde tendremos la exposición de organismos muy importantes, organismos autónomos, el Gobierno Federal, y desde luego expositores de reconocida talla en el tema.

Quiero, a nombre de mis compañeros Presidentes de Comisiones, María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; de los Presidentes de las Comisiones de Defensa y de Marina, que no pudieron estar en esta reunión, pero han estado dándole seguimiento a las diversas reuniones que hemos tenido y que seguiremos sosteniendo, y desde luego al señor Senador Luis Humberto Fernández, que viene en su calidad de Senador, y con el interés con el que ha trabajado en el tema de seguridad, y además con la representación del Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la

Revolución Democrática, del Senador Miguel Barbosa, les manda un saludo, desde luego también me lo pidió el Senador Emilio Gamboa, Coordinador de la fracción parlamentaria del PRI.

Tuvimos una disculpa también de los Coordinadores de las fracciones del Partido Acción Nacional, Partido Verde y Partido del Trabajo, pero obviamente están ellos inmersos en esta dinámica.

Y desde luego de la Cámara de Diputados recibimos y contamos con la presencia de la Diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Presidenta de la Comisión de Gobernación.

En unos momentos más de incorporará, tengo entendido, el Diputado Jorge Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Está también aquí la Diputada Martha Tamayo, quien ha sido una promotora muy importante de una de las iniciativas que estamos recibiendo.

Se encuentra el Senador Salvador Vega Gallo. La Senadora Rocío Pineda Gochi, les agradecemos, y desde luego el Senador Enrique Burgos, y algunos Senadores y Diputados que más tarde se integrarán en esta reunión.

Como todos ustedes saben, éste es un tema fundamental, sustancial, en el marco de la política de seguridad de nuestro país. El Poder Legislativo está trabajando en conferencia desde principios de este año, se encuentran hasta el momento en el seno del Poder Legislativo, cuatro iniciativas sobre el tema, muy importantes. Una del Senador Miguel Barbosa; otra del Senador Roberto Gil, quien también nos comentó que estaría por aquí un poco más tarde; otra de la Senadora Martha Tamayo y del Senador César Camacho.

Les demos la bienvenida a los expositores, les agradecemos mucho su presencia. Creo que ésta, así como las reuniones anteriores y las posteriores, serán un marco fundamental en el análisis para que en Comisiones Unidas en la Cámara de Origen, que será la Cámara de Diputados, y después la Cámara Revisora, que seremos nosotros, la Cámara de Senadores, tendremos reflexiones, herramientas, comentarios, aportaciones que podemos inclusive en algunas disidencias, convertirlas en coincidencias y llegar a concebir una ley tan importante como sería ésta, que equilibre desde luego la participación de todas nuestras fuerzas de seguridad pública, incluyendo nuestras fuerzas armadas, los derechos humanos y desde luego una efectividad en el combate a la delincuencia, en el combate a cualquier tipo de ilegalidad en materia de seguridad pública.

Siendo así, les agradezco mucho, y daríamos inicio al primer expositor, que es el Maestro Rubén Pérez Sánchez, Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Comisión nacional de Derechos Humanos.

Adelante y bienvenido Maestro.

El Maestro Rubén Pérez Sánchez: Muchas gracias.

Buenas tardes a todas y todos

A nombre del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, agradezco la invitación para participar en esta Tercera Reunión de Acercamiento y reflexiones, denominado "La Seguridad Interior, desde la Perspectiva de los Derechos Humanos.

Al propio tiempo que presento sus disculpas por no poder asistir a la misma.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, celebra la realización de estas reuniones de acercamiento y de reflexión sobre temas de gran importancia y sensibilidad, como lo es el de la seguridad interior de la nación, en la que muy diversos actores sociales y políticos vinculados con el tema, tenemos la oportunidad de expresar las opiniones encaminadas a lograr una ley que atienda a los requerimientos y necesidades del país, con pleno respeto a los derechos humanos.

El respeto a los derechos humanos, vale la pena insistir en ello, es el eje que debe sustentar las políticas públicas y las acciones que se emprendan en todos los ámbitos del poder público, incluido por supuesto el relativo a la seguridad en todas sus dimensiones.

En este sentido, el instrumento jurídico que se formule, necesariamente debe tomar alguna de las siguientes premisas:

Lo que hizo la Comisión en este caso, fue que tuvo a la vista las diversas iniciativas que se han presentado, identificó los puntos de coincidencia, identificó los puntos donde los temas no convergen, y elaboró una serie de temas específicos que creemos que deben estar presentes y que deben ser parte del análisis que se lleva a cabo en las Comisiones Unidas.

En primer lugar, el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas.

Se debe tener presente la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que en materia de seguridad pública contempla el Artículo 21 Constitucional, así como lo previsto en el Artículo 89, Fracción VI de la Constitución Federal, en lo concerniente a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Punto adicional, el respeto al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y manifestación, en término de lo dispuesto en las normas convencionales y constitucionales.

Es importante que la seguridad nacional no rebase los límites de la seguridad pública, y que las autoridades que de manera ordinaria se encargan de cada una de ellas, ejerzan en colaboración y conforme a nuestra Constitución, respetándose plenamente las atribuciones competenciales que a cada autoridad le asigna nuestra Ley Suprema.

La norma debe establecer la diferencia entre los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior, entendiendo a esta última como vertiente de la anterior.

La seguridad pública tiene por finalidad proteger a las personas y está a cargo de instituciones civiles.

Mientras que la seguridad nacional, tanto en su defensa exterior como en su seguridad interior, está orientada a la protección de las instituciones y es la que protege al Estado de una amenaza por riesgo.

En tal sentido, ha sido coincidente a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Desde el año 2003, en el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, señalo que la separación entre las tareas de seguridad y justicia y la de naturaleza militar, han sido una preocupación constante en organismos internacionales e intergubernamentales, por lo que se ha recomendado a México.

Cito: "La separación de los militares de las tareas policiacas y se logre la desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito".

No se debe perder de vista el pleno respeto al principio de legalidad que todo acto de autoridad debe revestir.

En particular, por lo que hace a los actos de molestia, o incluso, privativos que pudieran sufrir las personas.

Asimismo, se deben precisar de forma clara los supuestos en los cuales serán aplicables las acciones en materia de seguridad interior.

Veíamos que las iniciativas traen diversos supuestos de procedencia, decíamos algunos coincidentes, algunos no. Entonces, la fijación estricta de ellos es un tema fundamental.

En caso contrario pueden presentarse vacios legales que incidan en la actuación de las autoridades correspondientes y que deriven en la transversión de derechos humanos.

Lo que por otro parte, está regulación a la que nos referimos, implica también un mayor grado de certeza en la actuación de las autoridades.

Es muy importante este punto, porque en la medida en que la norma vaya estableciendo con precisión los alcances de la misma, la autoridad que interviene en su cumplimiento, en su interpretación o en su ejecución. Tiene una mayor seguridad en su actuación.

La ley debe contemplar mecanismos de control institucional, claros y de colaboración entre autoridades para la implementación, seguimiento y control de las acciones a desarrollar.

Es también muy importante que se limiten los casos en los que se realizaran las acciones en materia de seguridad interior, a fin de que exista una clara distinción.

Entre este tipo de acciones, la naturaleza de las mismas, los alcances con los que se van a presentar, y aquellas que deriven de la aplicación de supuestos de suspensión o restricción de derechos en termino de lo señalado por el artículo 29 constitucional.

La formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera y la investigación patrimonial, el fortalecimiento de la prevención, así como una revisión en el planteamiento en nuestro sistema penitenciario. Son algunos de los temas que se considera deberían también considerarse en la discusión sobre una ley sobre seguridad nacional o seguridad interior.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera la importancia y conveniencia de que se esté llevando a cabo un análisis integral de las iniciativas que a la fecha se dictaminan en comisiones, pues ello favorecerá, sin duda, que el resultado final de estos trabajos sea en beneficio de una ley que responda a las necesidades que en la materia presenta nuestro país.

Si las criminalidades hay una de los fenómenos más corrosivos de los derechos humanos, las fallas en la seguridad publica potencializan este deterioro hacia niveles más profundo de descomposición social.

Por ello es preciso actuar para atender los puntos críticos que más vulneran nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y que inciden en la percepción que la sociedad tiene de las autoridades e instituciones.

En este contexto, la discusión sobre el marco normativo aplicable a las tareas de seguridad, especialmente aquellas que con carácter extraordinario, desde hace una década, llevan a cabo las fuerzas armadas, resulta relevante, pero no implica por sí misma la solución a la inseguridad y violencia que nuestro país enfrenta.

La seguridad pública es y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil.

Nuestra Fuerzas Armadas debe volver cuando las condiciones del país así lo permitan a las funciones que les son propias.

El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública, no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.

Es preciso recuperar la justicia, el respeto, el cumplimiento de la ley, la solidaridad, la educación y el trabajo, la inclusión y el desarrollo.

Tenemos derecho a vivir en un entorno de paz en el que contemos con condiciones razonables de seguridad que posibiliten el ejercicio y vigencia de nuestros derechos. Y en ello la ley resulta un factor fundamental.

Gracias.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, maestro.

Antes de continuar, quisiéramos resaltar la presencia, que son expositores también, pero que nos da mucho gusto su presencia y su participación del señor Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Bienvenido a este recinto, señor Jarab.

El licenciado Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Sea usted bienvenido, señor Subsecretario.

Del Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Y más tarde como expositor además, se incorporará la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.

Se ha incorporado a los trabajos la Senadora Hilaria Domínguez.

Bienvenida, Senadora a esta reunión.

Continuando con el orden del día, le pediremos la palabra al maestro Santiago Aguirre Espinoza, Especialista del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro.

Tiene la palabra y muchas gracias.

El maestro Santiago Aguirre Espinoza: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.

En representación del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, agradezco al Senado la invitación que hoy me permite estar en este foro.

Como integrante de un Organismo de la Sociedad Civil que hacer parte de un conjunto amplio de organizaciones y especialistas preocupados por el debate en la Ley de Seguridad Interior, presentaré las razones por las que, desde la perspectiva de derechos humanos, es en extremo riesgoso que se apruebe una Ley de Seguridad Interior.

Nuestra preocupación se sustenta en razones y no como lamentablemente se entiende a veces en una supuesta pretensión de calumniar indebidamente a las Fuerzas Armadas. Nada más ajeno al sentido de nuestra labor y al respeto que estas instituciones nos merecen.

A nadie escapa que los últimos 10 años el Ejército y la Marina han tenido que suplir las deficiencias de las policías civiles en múltiples regiones del país, haciendo frente a la adversidad y al peligro.

A nadie escapa tampoco que de mandar el retiro inmediato del Ejército y de la Marina de dichas tareas es hoy poco realista.

Sin embargo, no por reconocer esta realidad se debe adoptar legislativamente un modelo de seguridad que profundizará e institucionalizará la participación castrense en tareas que, como ha reconocido el General Secretario de la Defensa, son ajenas a su vocación.

Las razones que sustentan nuestra preocupación son de diversa índole.

Enseguida me referiré brevemente sólo a algunas de ellas.

En primer lugar, sostenemos que una Ley de Seguridad Interior tendría serios problemas de inconstitucionalidad.

El artículo 73 de nuestra Carta Magna, no faculta expresamente al Congreso de la Unión a legislar sobre sobre seguridad interior.

Se afirma que el Congreso podría aprobar esta ley considerando que la seguridad interior sólo mencionaba, como sabemos en el artículo 89, fracción VI, es una vertiente de la seguridad nacional materia a esa sobre la que el Congreso sí está facultado para legislar.

Pero de aceptar esta interpretación se tendría que seguir en rigor que la facultad presidencial del artículo 89 debe ser regulada a partir de una reforma de la propia Ley de Seguridad Nacional, ojalá en el marco de un debate amplio y de una revisión integral de la situación de inseguridad y violencia que vive el país, y no en una legislación específica.

Más allá de esta discusión sobre las facultades del Congreso, la inconstitucionalidad de una ley de seguridad interior, como la que se pretende, surge también de las limitaciones que imponen los artículos 21 y 129 respecto de las funciones que las Fuerzas Armadas pueden desempeñar en tiempos de paz y específicamente respecto del carácter civil de las instituciones de seguridad pública.

Se dice que este tema quedó zanjado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 196 sobre la participación del Ejército y la Marina en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero esta lectura es discutible, la resolución de la Corte fue emitida en un contexto constitucional muy diferente al actual, entre otras cosas, porque el artículo 21 no había adquirido su actual revisión, que como sabemos enfatiza el carácter civil de la seguridad pública.

Además, en aquel entonces la Constitución no había sido reformada para incorporar los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México es parte.

Esto nos lleva a un segundo conjunto de argumentos por los que no es deseable la aprobación de tuna Ley de Seguridad Interior, sus problemas de inconvencionalidad, es decir, de incompatibilidad con el régimen de derechos humanos que México se ha obligado a respetar.

Son múltiples los pronunciamientos de instancias internacionales que han expresado preocupación por la extensión de la participación castrense en tareas ajenas a su mandato, y aún más específicamente sobre la falta de idoneidad del concepto mismo de seguridad interior.

Sobre este, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre seguridad ciudadana del año 2009, señaló que en los regímenes autoritarios el concepto de seguridad está asociado a conceptos como el de seguridad interior, que se utilizan, dijo la CIF, en referencia específica a la seguridad del Estado y no a la seguridad de las personas.

Igualmente la Comisión Interamericana, aludiendo a la situación de Venezuela, que bajo el régimen chavista adoptó una ley de seguridad interior, señaló que en un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación.

Estas citas muestran que si hoy se aprueba una ley de seguridad interior con certeza podemos pronosticar que el día de mañana el Estado mexicano será señalado en instancias internacionales por haber adoptado una legislación que contraviene el régimen de derechos humanos.

Las expresiones críticas que apenas ayer dedicó a este tema el relator de las Naciones Unidas sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, el señor Michel Forst, tras su visita oficial del país, de alguna manera anticipan estos señalamientos.

Esto nos lleva al tercer conjunto de argumentos, los riesgos de que una Ley de Seguridad Interior incremente las violaciones a derechos humanos en el terreno.

Desde los estudios sobre el alto índice de letalidad y las Fuerzas Armadas que han realizado reconocidas académica del CIDE, por ejemplo, hasta los informes anuales de la CNDH, los datos son contundentes, los diez años de despliegue del Ejército y la Marina en tareas ajenas a su mandato han aumentado las violaciones graves a derechos humanos cometidas por sus elementos.

Decirlo no es consigna ni descalificación a priori de las Fuerzas Armadas, es simplemente atender a la evidencia empírica y reconocer que este aumento es una consecuencia natural y obvia cuando fuerzas son empleadas en tareas para las que no han sido formadas.

Tomemos las cifras de la CNDH, si entre el año 2000 y el 2006 se presentaron 1,635 quejas contras las Fuerzas Armadas y se emitieron 11 recomendaciones en esos seis años, en los últimos diez años se han presentado más de 10 mil 751 quejas y se han emitido 146 recomendaciones, es decir, antes de estos diez años de despliegue intensivo el promedio anual de quejas era de alrededor de 190, y de recomendaciones menos de 2 al año.

Hoy, tras el despliegue iniciado en el 2006, el promedio anual de quejas ha sido de alrededor de 1075 por año y las recomendaciones más de 14.

Tan sólo del 1° de enero al 31 de diciembre del año pasado se registraron casi 700 quejas contra las Fuerzas Armadas y se emitieron dos recomendaciones, son las cifras oficiales de la CNDH.

Si cuantitativamente estos números son preocupantes, lo que muestran cualitativamente estos casos es aún más alarmante, hablamos de casos de violaciones graves a derechos humanos.

Casos donde unidades enteras se han visto involucradas en graves abusos, como ocurrió con la tercera compañía de infantería no encuadrada en Ojinaga, Chihuahua, casos que han dejado víctimas concretas que no han accedido a la verdad, como en Tlatlaya, Estado de México.

Casos que han quedado impunes como las de las mujeres torturadas sexualmente por la Marina, en Veracruz.

Casos donde los elementos castrenses, sin ser responsables directos, no han colaborado de forma expedita con los órganos civiles de investigación y menos con instancias internacionales de derechos humanos, como el caso de Ayotzinapa.

No es casual que este 2017 nuevamente la Corte Interamericana vaya a resolver un caso de desaparición forzada atribuida al Ejército, el caso Alvarado de Chihuahua, por eso objetivamente puede afirmarse que una ley de seguridad interior incrementa los riesgos de que estos casos de abuso continúen y se esparzan.

Hay un último grupo de argumentos, la insistencia en adoptar una ley de seguridad interior asume como premisa que el despliegue militar ha sido efectivo para revertir la violencia, pero la evidencia empírica no parece confirmar esta hipótesis, tras diez años de despliegue castrense los índices de homicidio, por ejemplo, no están regresando a los niveles deseables, estados donde la presencia militar en tareas que trascienden los límites constitucionales data de más de una década, como el triste caso de Guerrero, dan cuenta de ello.

El despliegue militar por sí mismo reduzca la violencia no es por tanto, hoy por hoy, un resultado que pueda asumirse como punto de partida para el diseño de una política pública.

En suma, hay razones de peso constitucionales, convencionales, de derechos humanos, de efectividad, para afirmar que desde la perspectiva de derechos humanos la aprobación de una Ley de Seguridad Interior no es el camino adecuado.
Sin dejar de lado este posicionamiento general, para referirnos a las iniciativas en los específico, vale la pena decir que en estas las labores de seguridad interior para las que se faculta las Fuerzas Armadas no generan verdaderos contrapesos robustos y progresivos, temas como la sujeción plena al mando civil que ordenó la Corte desde la acción de inconstitucionalidad 1.96, como la intensificación de la rendición de cuentas ante el sistema Ombudsman, como el aumento de las restricciones ante posibles prórrogas de las declaraciones de afectación a la seguridad interior, por nombrar sólo algunos aspectos son todos temas preocupantes.

Lo mismo podemos decir de las iniciativas que abiertamente proponen asignar a las Fuerzas Armadas funciones de investigación del delito ahí donde se declare una afectación a la seguridad interior, o bien, de las iniciativas que restringen en este supuesto la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental.

Las iniciativas en discusión, además, no generan desde nuestra perspectiva incentivos eficaces para el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan ni para el simultáneo fortalecimiento progresivo de las policías civiles, esta ruta es la que, por cierto, ha sido recomendada por instancias internacionales de derechos humanos, como el propio Alto Comisionado, y entorno a ella es que la sociedad civil y la academia han construido alternativas siempre con ánimo propositivo y dialogante.

Hay que decirlo claramente, una ley de seguridad interior no es la legislación que México necesita, y su aprobación es peligrosa para los derechos humanos, sobre todo cuando nuestro marco jurídico en este ámbito no ha sido fortalecido, al no haberse aprobado la legislación en materia de tortura, desaparición forzada y uso de la fuerza que aún está pendiente.

Los organismos civiles como el Centro Pro de hace al que represento, respetamos profundamente la valiente labor que día a día realizan los hombres y mujeres que integran las fuerzas armadas.

En esa misma medida rechazamos tajantemente la violencia inhumana que desatan las organizaciones delictivas; pero con la misma convicción estimados que las consecuencias de legislar, esencialmente para dotar a las fuerzas armadas de la certeza jurídica que sus mandos reclaman sin atender otras preocupaciones, y sin ponderar lo que ha significado su despliegue en los últimos años inevitablemente repercutirá de forma negativo en los derechos humanos.

Concluyo, cuando el constituyente de 1857 discutió el artículo 129, que hasta el presente regula las tareas de las fuerzas armadas en tiempos de paz, Ponciano Arriaga reflexionó:

"...Será imposible de todo punto imposible que la autoridad política se moralice y recobre sus legítimos derechos, si ha de estar teniendo frecuentes ocasiones de entrar en comercio de condescendencias, debilidades y funestas consideraciones con el poder militar...".

Visionario, Ponciano Arriaga coincidía con señalamientos como los que en la actualidad formulan la Comisión Interamericana o la ONU; las corporaciones civiles no mejorarán si en la vía de los hechos sólo son fortalecidas las fuerzas armadas.

Saludamos este debate y hacemos votos para que no sólo una voz se atendida en esta discusión sobre la ley de seguridad interior.

De suerte que no se pasen por alto las obligaciones que el estado mexicano ha contraído en materia de derechos humanos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias maestro Santiago Aguirre Espinoza por su participación.

Le damos la bienvenida a la Diputada Angélica Moya Marín a esta reunión, y al Diputado Alejandro Guevara, bienvenidos.

Tiene la palabra el doctor Alejandro Madrazo Lajous, especialista y director del Programa de Política Antidrogas del CIDE.

El doctor Alejandro Madrazo Lajous: Muchísimas gracias Senador Gándara, Senadores, Subsecretarios, público en general.

Les agradezco la oportunidad de venir a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la coyuntura que está ante este órgano legislativo.

Lo que les voy a presentar aquí, es una síntesis de los hallazgos más relevantes de cuatro investigaciones distintas que utilizan cinco fuentes de datos diferentes, y que involucraron a nueve investigadores, al menos, además de un equipo importante de distintas investigaciones.

Algunas de estas investigaciones no han sido publicadas aún, les está tocando la primicia, se ven a presentar mañana, apenas en el escenario política de drogas, entonces, hay mucho más información, pero aquí estamos seleccionando sólo lo que consideramos más relevante para esta discusión.

Consideramos que hay tres preguntas que debe de atender el legislativo a la hora de discutir las iniciativas de seguridad interior que están hoy ante nuestro congreso.

La primera es:

Si es buena política pública utilizar a las fuerzas armadas para labores de seguridad pública, llámese bajo la etiqueta que quieran, lo pueden etiquetar como seguridad interior o como seguridad nacional, lo cierto es que hay una definición relativamente clara, seguridad pública que implica labores de prevención, de recepción de denuncias, de investigación y esas labores las están haciendo las fuerzas federales, incluyendo las fuerzas armadas, y lo que se está discutiendo es, darle marco legal a lo que ya viene ocurriendo desde hace diez años, y es precisamente utilizar a las federales, y específicamente también a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

¿Es buena política pública, para tener mejor seguridad?, debe ser la primera pregunta a plantearse.

Sólo si la respuesta esa correcta, entonces viene la segunda pregunta.

¿Es constitucional que el legislativo emita una ley de seguridad interior?

Y, sólo si esa, también se responde en afirmativo, entonces habrá que pasar al análisis puntual de las iniciativas sobre la mesa que es, son adecuadas las iniciativas que están hoy ante el Senado.

Voy a abordar estas tres preguntas.

La primera la voy a abordar con base en evidencia, con la evidencia que hemos recolectado a lo largo de los últimos seis años.

Y, quiero aquí empezar por el hallazgo más reciente, que se va a presentar el día de mañana, es una investigación de la doctora Laura Tuesta, y que es realmente, es la información de punta que tenemos.

Desde el año 2010, más o menos, se han hecho estudios que establecen una co-relación entre la presencia de operativos federales en contexto a la guerra contra las drogas, y el incremento de homicidios a nivel municipal.

No hemos podido hablar de causalidad porque a pesar de que los indicios son muy fuertes, de que hay una relación de causalidad, pues no es lo mismo hablar de co-relación que de causalidad, y hasta la fecha no hemos podido hablar de causalidad.

La investigación de la doctora Tuesta con base en una base de datos que se hizo pública hace ocho meses, ya permite hablar de causalidad, vienen los datos desagregados de 2006 a 2011, el microdato y con esto ya podemos hablar de una relación de causalidad, entre la presencia de los operativos federales, y los incrementos en la tasa de homicidio en los municipios en los que se despliega a las fuerzas federales.

Y los resultados principales son los siguientes:

Por cada combate que realizan las fuerzas federales en los operativos conjuntos, se incrementan en corto plazo 6% de la tasa de homicidios en ese municipio.

Cuando en esos enfrentamientos participan las fuerzas armadas, el incremento no es de 6%, sino de 8%, y específicamente cuando participa la SEDENA el incremento es de 9%.

La Policía Federal, las intervenciones de la Policía Federal se mantienen en el 8%, que es el promedio agregado de todos.

Entonces, esto es muy importante señalarlo, y que quede muy claro, no es ya una situación de la que podamos hablar o en la que debamos hablar de que no ha dado resultados en mejorar la seguridad el despliegue de las fuerzas federales, sino estadísticamente se puede demostrar que el despliegue de las fuerzas federales aumenta la violencia en los municipios, en los que se despliega en promedio.

Repito, el uso de operativos federales aumenta la tasa de homicidios en los municipios en los que se despliega, el día de mañana se va a presentar este estudio por completo, si quieren más información va a estar accesible para todos.

Ahora, uno de los argumentos que se dio para justificar el uso de fuerzas federales cuando se empezó a establecer la co-relación entre el incremento de homicidios y el uso de las fuerzas federales, es que en realidad, primero subían los homicidios, y después llegaban las fuerzas federales.
Eso, como les expliqué en la lámina pasada, ya queda demostrado que no es así, primero, se despliega el ejército, y a la policía federal y después suben las tasas de homicidios de entre 6, 8 y hasta 9%.

Ahora, lo otro, que hemos escuchado una y otra vez, como explicación del incremento en la violencia es que las fuerzas federales y la frase canónica es, simplemente repelen la agresión, responden a una agresión.

En el CIDE tomamos la base de datos, de lo que les estoy hablando, y leímos los reportes de cada uno de los eventos en los que participan fuerzas públicas, y a partir de la lectura del contexto, de la descripción de los eventos hicimos una clasificación, cuando había algún elemento de actividad delictiva previa, se adjudicó a una actividad de los delincuentes el detonante de un combate o sea la batalla la empezaron los delincuentes.

Cuando había indicios de que había sido quien primero había tomado acción, las fuerzas federales, se clasificó como actividad oficial, como detonante. Cuando no había elementos lo establecimos como indeterminado.

Como ustedes pueden ver ahí, los combates que se dan en la guerra contra las drogas, y estoy hablando de una revisión de 3,327 eventos entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011, en el 84% de los casos, el detonante de la balacera es un actuar del estado.

En el 9% no tuvimos información para determinarlo; y en el 7% se trata de una posición pasiva por parte de las fuerzas.

En los mapas que tienen ustedes a su izquierda, tiene el contraste agregado del número de batallas, de eventos, de combates registrados en esta base de datos que fueron iniciados o que se detonaron por una actividad oficial en el de arriba o que detonaron por una actividad de los presuntos delincuentes, si se refiere a ellos, nosotros hemos optado por utilizar civiles opositores.

Pero como ustedes pueden ver, el país está pintado de rojo en el mapa que refleja aquellos combates que fueron utilizados por las autoridades.

Siguiente lámina, por favor.

Eso quizás es lo que más preocupa.

Se ha documentado desde hace tiempo la alarmante, la alarmante elevada tasa de letalidad, del uso de la fuerza pública, el índice de letalidad de lo que refleja es no qué tan frecuentemente se usa la fuerza, sino cuando se usa la fuerza qué tan letal es, y se toma midiendo dos números muy sencillos, cuántos muertos hubieron y cuántos heridos hubieron, son muertos sobre heridos, lo normal es que haya más heridos que muertos.

Por ejemplo, en la matanza de Orlando, en la que en un centro nocturno alguien abrió fuego con una arma automática, hubieron 53 heridos y 50 muertos, y ese era un contexto en el cual era de noche, en un lugar cerrado, con todas las víctimas desarmadas, la persona armada con una arma automática, probablemente intoxicada, muchas de las víctimas y aun así el índice de letalidad se mantuvo debajo de uno.

México tiene la terrible situación de tener índices de letalidad del 2.3 por parte, creo que lo están sacando mal, ahí están los números, 2.6 el índice de letalidad de la policía federal es de 2.6 muertos por cada herido, de La Marina llega a 17.3 muertos por cada herido y del ejército es de 9.1 muertos por cada herido.

Pues bien, esos son eventos con alta letalidad, es un promedio de letalidad muy alto.

Con la base de datos que me estoy refiriendo hicimos un ejercicio e identificamos una cantidad importante de eventos que no pudimos establecer la letalidad porque no había heridos, entonces los denominamos eventos de letalidad perfecta, eventos de letalidad perfecta son aquellos en los cuales sólo hay muertos entre los civiles opositores y no hay un solo herido, no se puede medir el índice con letalidad normal, porque sería infinito, entonces le llamamos de forma distinta, letalidad perfecta.

Si ven ustedes ahí, el 37% de los eventos, son eventos de letalidad perfecta, esto es eventos en los que hubieron presuntos delincuentes, opositores civiles, muertos, pero no hubieron heridos. De esos 37 puntos porcentuales, 25 puntos porcentuales son elementos en los que sólo participaron las Fuerzas Armadas, 10% son eventos en los que participaron sólo policías y el resto son eventos conjuntos.

Eso nos dice o nos indica que hay una enorme cantidad de las muertes que se dan en el contexto del despliegue militar masivo en todo el país por eventos en los cuales no hay heridos, eventos de letalidad perfecta.

Si lo vemos a lo largo de los años, vemos cómo crece enormemente el número de eventos de letalidad perfecta, estamos hablando por ejemplo y está ahí clasificado por corporaciones, en la barra verde son las Fuerzas Armadas, la azul es la policía y la amarilla es la mixta.

Si ustedes ven, en el 2007 hubieron 15 eventos de letalidad perfecta que corrieron por cuenta de las fuerzas armadas.

Para el 2011, estamos viendo de 451 eventos de letalidad perfecta en las cuales las Fuerzas Armadas enfrentaron a ciudadanos mexicanos y no dejaron a uno herido. Es muy preocupante ver este crecimiento, no sólo ese volumen, sino también el comportamiento de los números lo que debe preocuparnos.

Siguiente lámina, por favor.

Ahora, qué tan importante son los elementos de letalidad perfecta en números de muertos, vimos que representan el 37% de los eventos, pero qué tantos de los muertos, de los civiles muertos en esta guerra que hoy se pretende dar forma legal corresponden a eventos de letalidad perfecta.

Y aquí quiero ser muy claro, los eventos de letalidad perfecta, los centros de letalidad alta arriba de uno y, con mayor razón, los eventos de letalidad perfecta, son un indicio fuerte, muy fuerte de que estamos ante ejecuciones extrajudiciales o ante el uso desmedido de la fuerza pública, y para que entendamos todos a qué me refiero con uno y con otro, si recuerdan ustedes las fotos de Tlatlaya, en las que veíamos la mancha de sangre con un perímetro relativamente pequeño a la altura de la cabeza sobre la pared, esa es una ejecución extrajudicial. Eso es un balazo a corta distancia que tiene, vamos, la mancha de sangre corresponde a un balazo a corta distancia contra la pared.

Si vemos las fotos de los civiles muertos en Tanhuato, en el cual los balazos están en el techo, porque se utilizó un helicóptero Black Hot para abrir fuego contra civiles que estaban dormidos adentro de un edificio, eso es uso desmedido de la fuerza pública.

Entonces estos eventos de letalidad perfecta son el extremo, ya sea de las ejecuciones extrajudiciales o del uso desmedido de la fuerza pública, 37% de los eventos que si lo contamos por muertos, no por eventos, representan el 86.1% de los muertos, el 86.1% de los muertos civiles en las batallas en las que el Ejército, la policía, la Marina y demás fuerzas se enfrentaron con ciudadanos mexicanos que califican de delincuentes organizados, pero que no hay investigación que respalde que son delincuentes, porque no hace a la averiguación previa para investigar esas muertes, el 86.1% corresponden a eventos de letalidad perfecta.

Ahí pueden ver ustedes año con año, cómo van creciendo en la barra anaranjada, son los muertos totales, en la barra azul son de esos muertos totales los que corresponden a eventos de letalidad perfecta.

Es sumamente alarmante ver cómo a partir de 2008 crece consistentemente el número de muertos que aportan los eventos de letalidad perfecta a la mortandad total de civiles que tienen enfrentamientos con las fuerzas federales, pasa de un 60% en 2008 a un 90% de los muertos para 2011.

Siguiente lámina, por favor.

Y una desagregación un poco mayor sobre los muertos de letalidad perfecta para que se den ustedes una idea.

A las Fuerzas Armadas se les pueden documentar 2 mil 133 muertos en eventos de letalidad perfecta y un total de 2 mil 366 muertos, lo que corresponde un 90% de sus Fuerzas Armadas. Las policías son 656 muertos, elementos de letalidad perfecta y un total de 846 muertos, lo que nos da un 77% y las fuerzas combinadas son 149 muertos en eventos de letalidad perfecta frente a 199 muertos en total, o sea, un 74%. Realmente preocupante que la mayor parte de los muertos se estén muriendo en eventos en los cuales no hay heridos.

La gráfica que tienen ustedes ahorita enfrente, registra el maltrato de detenidos que después fueron sentenciados en prisiones federales.

Y aquí disculpen que haya una clasificación que sea antes de Calderón y después de Calderón y que refiera, vamos a una figura política específica, pero la investigación original que no fue hecha en este contexto, precisamente toma ese hito y es la administración de Calderón.

Ahora, coincide con el despliegue masivo de las fuerzas federales y, en consecuencia, nos ilustra lo que ha pasado con las prácticas de nuestras fuerzas federales después de su despliegue masivo en toda la República.

Y como pueden ver, todos los maltratos que van desde golpes, patadas, puñetazos, pero pasan también por sofocación, asfixia, inmersión en agua, toques eléctricos y hasta violencia sexual. Todos, invariablemente estaban abajo del 40%, antes de la administración del Presidente Calderón y todos, invariablemente están arriba del 60%, algunos de ellos rascando el 70% como las quemaduras y la violencia sexual.

Siguiente lámina.

Aquí está desagregado por corporación, ustedes pueden ver el mismo tipo de maltrato por corporación y por los porcentajes específicos, no voy a detenerme en todos, porque los tienen ustedes ahí presentes, pero sí déjenme enfatizar que el mayor crecimiento en tortura reportada es precisamente por parte de las Fuerzas Armadas. Déjenme tomar sólo como ejemplo los toques eléctricos, que es el maltrato que más implica algún tipo de colaboración o solapación institucional, una patada, una amenaza, una persona puede realizarla estando enojada en el momento de la detención, dar toques eléctricos requiere de planeación, requiere de instalaciones.

Entonces, aquí, si me permiten la siguiente lámina, aquí está, los toques eléctricos, si uno fue detenido por un militar, el 2.42% de la gente detenida por militares, antes de la administración de Calderón, reportaba haber recibido toques eléctricos.

Durante la Administración de Calderón fue el 30%, y estoy hablando sólo de la administración de Calderón porque no tenemos datos, desafortunadamente para el sexenio de Enrique Peña Nieto.

También creció en el caso de la Policía Federal y en el caso de las policías estatales, es importante decirlo, no sólo las Fuerzas Armadas crecieron, pero el crecimiento de 9% a 11% para la Policía Federal palidece cuando se le contrasta con el crecimiento de 2.42% al 30%, casi la tercera parte de las gentes detenidas por los militares durante la administración Calderonista reportan haber recibido toques eléctricos.

Siguiente lámina, por favor.

El siguiente punto, y este es más mi tema, ese sí es constitucional, el Congreso legisla en materia de seguridad interior.

Y aquí la constitucionalidad es dudosa, y la constitucionalidad es dudosa por varias razones: en primer lugar, porque en ninguna parte de la Constitución se le atribuye al Congreso la facultad de legislar en materia de seguridad interior, se le dan facultades expresas para regular la materia de seguridad nacional, pero no para regular la materia de seguridad interior; sí la materia de seguridad pública, pero no seguridad interior.

Y, en consecuencia, habría que preguntar si es una categoría autónoma la seguridad interior entonces el Congreso no tiene facultades para legislarla, el Congreso sólo puede legislar aquello para lo que tiene facultades expresas en la Constitución.

Si consideramos a la seguridad interior como parte de la seguridad pública entonces tenemos que reconocer que es inconstitucional el uso del Ejército y las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior porque la seguridad pública, lo dice nuestro artículo 21, sólo puede ser llevada a cabo por corporaciones de naturaleza civil.

Ahora, otra posibilidad sería considerarlo como parte de la seguridad nacional, esa interpretación es difícil de sostener constitucionalmente.

¿Por qué? Porque la Constitución cuando hace la única mención que hace a la seguridad interior lo hace precisamente en la misma fracción del artículo 89 en la que habla de seguridad nacional; o sea, cuando estás hablando de facultades del Presidente distingue entre seguridad nacional y seguridad interior; pero cuando habla de las facultades del Congreso sólo menciona la seguridad nacional.

¿Por qué habría de mencionar la seguridad nacional como algo distinto a la seguridad interior en las facultades del Ejecutivo, en las obligaciones del Ejecutivo, pero después sólo mencionar la seguridad nacional en las facultades del Congreso?

Ahora, suponiendo que fuese parte de la seguridad nacional sería una materia que sí podría legislar el Congreso, pero que, de nuevo, tendría la misma limitante establecida por el artículo 21 constitucional.

Ahora, se ha hablado aquí y se ha citado en todas partes la acción de inconstitucionalidad "196" para justificar el uso del Ejército en labores de seguridad pública.

Quiero hacer varias puntualizaciones sobre esa acción de inconstitucionalidad: la primera de ellas es que en esa acción de inconstitucionalidad lo que se discutió y lo que se sometió a discusión por parte de la Corte fue la integración del Consejo de Seguridad Nacional, y las dos Cámaras del Congreso y el Ejecutivo, cuando defendieron esa ley, distinguieron con claridad las funciones administrativas de los secretarios de la Defensa y de la Marina, de las funciones operativas, y defendieron sólo la posibilidad de participar en funciones administrativas.

La Corte habló de que podía hablar en ese fallo, en obiter dicta, o sea, no es el núcleo del fallo, sino menciona la posibilidad de que las Fuerzas Armadas auxilien en materia de seguridad pública.

Bueno, como vimos, la mayor parte de los eventos están siendo llevados a cabo por las Fuerzas Armadas exclusivamente sin policía y sin Ministerio Público, eso no es auxiliar, eso es sustituir; pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante es que el fallo data del año de 96, "196" es la acción de inconstitucionalidad.

12 años después de eso, en el año 2008, precisamente en la reforma constitucional que pretendía dar le facultades al Presidente para combatir la guerra contra las drogas, se

estableció en el artículo 21 la prohibición expresa de que órganos de que fueran de naturaleza distinta a la civil participaran en labores de seguridad pública. En consecuencia, el margen que en 96 la Corte reconocía para que las Fuerzas Armadas auxiliaran en tareas de seguridad pública es incompatible con la Constitución que tenemos hoy.

En otras palabras, la Constitución que interpretó la Corte en el 96 es una Constitución distinta a la que tenemos hoy, y la Constitución que tenemos hoy prohíbe expresamente que sean Fuerzas Armadas las que realicen labores de seguridad pública, y esa reforma se adoptó precisamente en el contexto a la guerra contra las drogas, y precisamente en el año 2008 que era cuando ya venía un crecimiento muy fuerte en la inseguridad en este país a raíz del despliegue masivo de los militares.

Entonces, yo diría, es, en el mejor de los casos, de dudosa constitucionalidad; pero francamente mi opinión como constitucionalista es que no hay facultades para regular seguridad interior, y si lo que se quiere es utilizar la etiqueta para tratar de justificar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, la limitante del artículo 21 es igual de poderosa bajo cualquiera de las dos categorías a la que se le suma seguridad nacional o seguridad interior.

Entonces, en mi opinión como constitucionalista, este Congreso no tiene facultades para legislar una materia autónoma que se llame seguridad interior, tiene que entrar o por seguridad nacional o por seguridad pública, y en ambas está limitado por el artículo 21 constitucional.

Siguiente lámina, por favor.

Ahora, ¿son estas iniciativas adecuadas?

Rebasa con mucho el tiempo que tengo aquí y, sobre todo, el tiempo que tuve para preparar esta ponencia un análisis puntual del articulado, yo fui invitado a hacer esta presentación el día de ayer por la tarde. Por suerte tenía yo más o menos bien estudiadas las iniciativas presentadas por el Diputado Camacho y el Senador Gil, confieso que tenía menos estudiada la del Senador Barbosa, pero la estudié en el Aeropuerto.

Entonces la siguiente lámina va a tener citas de las iniciativas de los Senadores Camacho y los Senadores Gil, no del Senador Barbosa, debo decir que la iniciativa del Senador Barbosa, a pesar de que adolece de los mismos problemas de constitucionalidad que adolece cualquier Ley de Seguridad Interior, sí es distinta tanto en la laxitud de las definiciones legales como en los controles institucionales para la operación de las Fuerzas Ramadas, aun así creo que tiene enormes deficiencias y creo que no es constitucional.

Pero déjenme señalarles algunas citas que me alarman, nada más las que más me alarman de las iniciativas del Diputado Camacho y del Senador Gil.

¿Para qué se va a desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior?

La respuesta, que aquí es la cita de la iniciativa del Senador Camacho, dice que es, ¿en qué consiste? Pues en realizar patrullajes, puestos de seguridad, escoltas, viene una larga lista y al final dice "y todas las demás acciones que se consideren necesarias", "todas las demás acciones que se consideren necesarias".

¿Dónde está ahí un acotamiento de la fuerza pública?, ¿dónde está ahí una regulación de la operación de las Fuerzas Armadas?

Se está dando un cheque en blanco para que quien sea que sea que va a considerar necesaria una acción la realice.

¿Quién va a tener esa facultad para decidir?, ¿el soldado armado con una arma automática en medio de un combate?, ¿el Presidente? La ley no lo precisa y, en consecuencia, deja un enorme espacio para que cualquier acción quepa dentro de las acciones de seguridad interior.

Ahora, ¿para qué se va a utilizar esa fuerza pública que es un cheque en blanco?

Y nos lo dicen, y esta es una cita que es textual de las iniciativas Camacho y la iniciativa Gil, dice: "es para controlar repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva", ¿agresiva o agresiva grave?
O sea, incluso para contener protesta pacífica esta ley permite y autoriza el uso de la fuerza.

¿Qué fuerza? La iniciativa Gil habla incluso de la fuerza letal y autoriza llegar hasta la fuerza letal para una protesta pacífica.

Les ruego que lean la ley, no las iniciativas y no los discursos, interpreten la ley y van a ver que esa ley está autorizando el uso de fuerza letal, incluso en protestas pacíficas.

Ahora, ¿cuáles son las acciones contra las cuales contra las cuales se va a pretender repeler? Y aquí estoy citando la iniciativa gil.

Prácticamente todas las fracciones que trata de precisar habla de actos tendientes a, actos tendientes, ¿qué quiere decir actos tendientes a? No se habla de actos que obstaculicen, actos tendientes a obstaculizar.

O sea, ¿quién va a interpretar a qué tiende un acto? Y una tendencia no implica que tenga la capacidad real de ser disruptiva.

Ahora, cuando decimos "tendientes a qué" es tan laxa la definición que nos habla incluso de actos tendientes a obstaculizar la ejecución de programas de apoyo federal. Bajo esta legislación, por absurdo que suene, la entrega de libros de texto gratuito con contenido de educación sexual podría justificar el uso de la fuerza bajo la Ley de Seguridad Interior, incluso la fuerza letal, así de laxa es la ley.

No estoy diciendo que para eso está hecho, estoy diciendo que está tan mal hecha la ley que sus definiciones son tan laxas que autorizan inclusive eso, y es muy preocupante.

Ahora, ¿cuáles son los controles que se establece al Ejecutivo para utilizar la seguridad interior para desplegar las fuerzas federales? Prácticamente nulos.

Yo no veo por ningún lado el que esta sea una ley de salida del Ejército o que esta sea una ley que regule y acote el funcionamiento de las fuerzas federales, al contrario, si vemos, por ejemplo, la posibilidad de declaración de afectación de la seguridad interior puede ser unilateral por el Ejecutivo.

El control principal, que es la información, queda en la iniciativa Camacho, por ejemplo, "la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional", cualquier información que se genere, no importa si es operativa, no importa si es presupuestaria, cualquier información que se genere queda reservada; o sea, es lo más opaco posible.

Quiero decirles, en este contexto, que el ejército que había entregado datos sobre letalidad en sus operaciones, anunció que a partir de abril de 2014 ya no recaba esa información.

Entonces, la opacidad bajo la que hoy opera en ejército en esos operativos, que ni siquiera entrega vía derecho a la información a cuánta gente ha matado en una batalla, a partir de abril de 2014, ahora va a tener sustento legal para negar esa información, cualquier información, no sólo los muertos, cualquier información.

Hay un comité que establece la Iniciativa Gil.

¡Perdón, la anterior, la anterior!

Hago notar que ese comité, y esta es una deficiencia, tanto de la Iniciativa Gil, como de la Iniciativa Barbosa.
Hay un miembro del Legislativo, que es el Presidente de la Comisión Bicameral, y todos los demás son empleados del Ejecutivo, todos son sus subordinados directos. O sea, el Ejecutivo se va a información así mismo sobre qué tal está haciendo cuando despliega las fuerzas de seguridad interior.

Se va a enterar el Legislativo, pero hay un voto en el comité, que es el único órgano que mediamente controla.

Ahora. ¿Qué tanto controla? Y aquí sí se distingue, son las cosas que distingue la Iniciativa Barbosa.

En la Iniciativa Camacho, por ejemplo, se habla de que es el encargado de operar las fuerzas de seguridad, de las fuerzas desplegadas en una situación de afectación a la seguridad interior, mantendrá informado al Ejecutivo.

El Secretario de Gobernación enviará un informe a la Comisión Bicameral. Perdón, pero esas son supervisiones sumamente pasivas.

No se faculta al Legislativo para realizar visitas incitu para requerir informes, para exigir comparecencias, y ahí sí es una de las fortalezas que valdría la pena señalar de la Iniciativa de Barbosa; ahí sí se permite y se faculta a la Comisión Bicameral para requerir, para citar a funcionarios a declarar, no, desafortunadamente para visitas incitu que tendría que estar ahí.

Última lámina.

En conclusión, creo que es la última lámina. Las leyes que pretenden dictaminar son de dudosa constitucionalidad.

Las iniciativas específicas son --en su enorme mayoría-- peligrosamente laxas en sus definiciones. No acotan, no regulan, autorizan y dan un cheque en blanco.

Tres.- La experiencia, y la experiencia documentada basada en evidencia, nos enseña que las fuerzas armadas maximizan la violencia, no nos dan mayor seguridad, nos dan mayor inseguridad en el país, y tenemos 10 años de experiencia.

A diferencia de otros debates en los cuales he sido invitado a dar mi opinión, como el de la regulación de la marihuana, ahí tenemos que especular sobre cuál va a ser el efecto de la política.

Aquí tenemos 10 años de experimento sobre esta política pública. Yo les ruego a los legisladores que atiendan los 10 años de evidencia.
Que se legisle, ahora sí, porque la tenemos con base en la evidencia, no con base en la conveniencia política. Y con base en la evidencia, es una responsabilidad de todos.

Quiero cerrar con esto, bueno, y la última conclusión es: hay un aumento considerable en las violaciones a derechos humanos desde que se implementó la política pública, hace 10 años, que precisamente se pretende regular aquí.

Pero quiero cerrar con esto. En el año de 2010, cuando salieron las primera publicaciones que ya establecían con bastante claridad que la estrategia de seguridad desplegada por el Presidente Calderón había sido, no sólo ineficaz, sino además contra producente en materia de seguridad, y me refiero, para empezar, al artículo: "La muerte tiene permiso", de Fernando Escalante, pero murieron muchos otros: Eduardo Guerrero, o sea, hay una batería, Calderón, hay una batería de estudios que establecían correlación.

Empezamos nosotros a estudiar la política de drogas, y nos dimos cuenta que no había política de drogas, que no había objetivos, que no había mecanismos de evaluación. Que por cierto, las leyes de seguridad interior tampoco plantean objetivos, salvo la de Barbosa, hay que decirlo, nos exige que sería cuál van a ser los objetivos del despliegue en ninguna de esas leyes, digo, a ese grado de falta de control están diseñadas esas leyes.

Pero cuando en 2010 empezamos a estudiar este tema, y vimos que no existía realmente una política de drogas, no existía una política pública en materia de seguridad con objetivos, con intervenciones específicas, con mecanismos de medición de las del impacto de las intervenciones.

Yo personalmente dije: "De esto somos culpables", por supuesto, los gobernantes, empezando por el mando civil, y esto es importante. Yo quiero reiterar que aquí, creo que el mando civil es el principal responsable y no las fuerzas militares.

Pero también somos responsables los académicos y la sociedad civil.

Son responsables los funcionarios que tomaron estas decisiones porque tomaron una decisión improvisada, sin objetivos claros y sin un plan concreto.

Pero somos también responsables los académicos y la sociedad civil porque no había nadie que conocía la materia. Había uno o dos investigadores que conocían la materia política de drogas, pero no había un esfuerzo institucional por sistemáticamente dar seguimiento a esto, que pudiera en un momento dado decir: "Señores, esta es mala idea".

Los resultados de algo semejante en otros países ha sido mala idea, no había, y nos dimos a la tarea de hacerlo.

En los últimos 7 años…

El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Con todo respeto, doctor, por respeto a los demás expositores. Había dicho que iba a concluir, muy interesante su exposición, pero si pudiera concluir.

El Dr. Alejandro Madrazo Lajous, Director del Programa de Política Antidrogas del CIDE: La última oración, Senador.

Hoy en día nosotros hemos hecho nuestra tarea y estamos ofreciendo evidencia. Llevamos 7 años recolectando información, sistematizándola y analizándola.

La responsabilidad, hoy en día, y en esta legislación, ya recae sobre ustedes. Nosotros hemos hecho nuestra tarea.

Les ruego que tomen en cuenta la evidencia que se ha generado, y la evidencia nos dice que es una mala política pública que ha generado mayor inseguridad, no menor inseguridad.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias por su intervención, doctor Madrazo.

Damos la bienvenida, se incorpora a estos trabajos la Diputada Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México.

Tiene la palabra el siguiente expositor, el licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Ex procurador General de la República y especialista en el tema.

¡Adelante, maestro Cabeza de Vaca!

El Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Especialista: Muchas gracias, señor Senador.

Muy buenas tardes a todos.

Es un tema realmente importante, y quiero antes de entrar, mencionar que el problema principal, a mi juicio, en el que estamos metidos, es que hay una confusión de conceptos, y una imprecisión de situaciones.

Yo creo que una cosa es Seguridad Pública, otra cosa es Seguridad Interior, otra cosa es Orden Público, son acciones para preservar el orden público.

Una cosa es política antidrogas, y otra cosa es una política en contra del crimen organizado, que no todo es droga, y eso nos ha llevado, esa falta de definición es lo que nos ha llevado a esta problemática.

A mi juicio, estas iniciativas, no se trata de dotar de facultades extraordinarias a las fuerzas armadas, ni suplir la responsabilidad que de origen tienen las políticas. Por el contrario, lo que se pretende es clarificar las competencias y potenciar las capacidades a través de la coordinación interinstitucional, partiendo del reconocimiento del fenómeno delictivo como un problema de seguridad interior.

El fenómeno delictivo, precisamente en el caso de la delincuencia organizada trasnacional, esa es la amenaza a la seguridad interior del país. Es un fenómeno distinto a los problemas de seguridad pública que hemos venido hablando.

Es por eso que comenzaré mi exposición con los conceptos básicos de seguridad, por ser el eje central de la propuesta legislativa que hoy nos ocupa, y posteriormente me ocuparé de algunos aspectos de la iniciativa vinculados a la protección de derechos humanos.

En este contexto, la fuerza armada permanente, requiere de un nuevo andamiaje que le permita desplegar su capacidad y experiencia en forma óptima y coordinada, con las instancias responsables de la seguridad pública federal y local.

La discusión no es nueva. Ya en años pasados se había abordado, pero en algunos cuestionamientos impidieron su aprobación definitiva. Los que estimo están hoy superados, particularmente lo relativo a la protección de los derechos humanos.

No se trata de dotar de facultades extraordinarias a las fuerzas armadas, ni de suplir la responsabilidad que de origen tienen las policías. Por el contrario, hay que reconocer como subsidiaria la participación de las fuerzas armadas, ese es precisamente el fondo que no debemos de perder de vista.

Es regular una participación subsidiaria de las fuerzas armadas, principalmente en materia de seguridad pública y de combate al crimen organizado transnacional.

Lo que se pretende es clarificar las competencias y potenciar las capacidades a través de la coordinación interinstitucional partiendo del reconocimiento del fenómeno delictivo como un problema de seguridad interior.

Brevemente. La presentación que me permití traer es mucho más extensa, me tomaría mucho más tiempo hoy tratar de ir, en atención al tiempo de todos ustedes, voy a tratar de irme a los puntos principales.

¿Cuál es el concepto de seguridad interior?

Bueno, encontramos una mención en el 89, de seguridad interior, facultando al Presidente de la República.

Pero yo preguntaría. ¿Cómo podemos hablar de inconstitucionalidad o no inconstitucionalidad de la seguridad interior, si ni siquiera tenemos definido qué es?

El estudio que me permito proponer ante ustedes, fue precisamente ver ante, en el mundo, cómo se había legislado el tema, y hay sorpresas, porque en realidad no es un problema de nosotros, es un concepto nuevo el que nos ocupa, y es un concepto que en realidad se ha desarrollado a últimas fechas.

Quisiera complementar aquí las frases de Don Ponciano Arriaga, porque creo que sí es importante mencionarlo.

Don Ponciano Arriaga, además de lo que había mencionado quien me precedió en la voz, no, perdón, dijo textualmente: "Cuidar de la paz y de la seguridad pública, administrar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y delitos, en fin, gobernar la sociedad, son atribuciones de la sociedad que obra a nombre de la ley.
"La ley es la expresión de la voluntad popular y los funcionarios, militares, nada tienen que hacer por sí y ante sí, si no son requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles. En todos los negocios que no tengan íntima y directa conexión con la disciplina, obedece a que es su primitiva ley".

En ese sentido, lo que se trata precisamente es, si estamos llamando a las fuerzas armadas a participar tiene que haber un marco normativo que regule esa participación en beneficio de las propias personas.

En primer lugar tenemos que reconocer la situación que estamos viviendo y porqué estamos en este momento.

Los soldados no fueron sacados de los cuarteles para suplir las deficiencias de la policía del Estado de Tamaulipas, fueron sacados de los cuarteles para combatir la delincuencia organizada trasnacional, que estaba superando las instituciones locales. Ése es el fondo por el cual intervienen las Fuerzas Armadas, y eso es lo que en la concepción digamos de muchos estudiosos, incluso internacionales, y acorde como me permitiré mostrarlo en unos momentos, acorde a resoluciones, tanto del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, como de la propia Corte Europea, son los casos en los que la autoridad está autorizada a utilizar las Fuerzas Armadas, cuando las instituciones l ocales han sido rebasadas.

¿De dónde viene el concepto de seguridad interior? Bueno, tenemos seguridad nacional con la Defensa Nacional, la seguridad nacional se refiere a todos aquellos programas, medidas e instrumentos que adopta el estado para defender sus órganos supremos de un eventual derrocamiento violento, por un movimiento subversivo interno o por una agresión externa.

Esa definición, digamos de seguridad nacional, engloba todos los conceptos de seguridad. Engloba el concepto de seguridad pública que viene de preservar el orden público.

El orden público es la forma de regular la convivencia social mínima, desde el pacto de Rousseau, que implica cierto compromiso de convivencia que tiene que ver con el ejercicio de mis libertades. Ahí es donde empieza el final del ejercicio de mis libertades en ese derecho de convivencia.

La seguridad pública tiende a mantener ese orden público que evidentemente implica cierta disminución de las libertades absolutas de las personas, por eso no podemos estacionarnos donde queremos, no podemos circular a la velocidad que queremos, porque nuestra libertad termina donde empieza el derecho de los demás, o sea, eso es muy obvio, eso lo preserva el orden público, y la autoridad está facultada para mantenerlo. Ésas son las personas y las instituciones.

¿Qué pasa cuando esas instituciones son rebasadas? Y cuando no hay incluso ni siquiera la posibilidad de hablar de un territorio. ¿Por qué no hablar de un territorio?

El concepto de seguridad interior se empieza a desarrollar, por un lado en Estados Unidos de América, después de la unión de las 13 Colonias, por eso ellos en su literatura constitucional sí hablan de la seguridad interior, porque son los problemas que afectan a una colonia, o los problemas entre las colonias, no la amenaza exterior.

En el caso de la Unión Europea, y de ahí nos viene, y por eso viene el antecedente que pueden ustedes encontrar, que en todas nuestras constituciones se habla de la seguridad interior.

En la Unión Europea hay un antecedente bien interesante, ahí el concepto se desarrolla porque ellos encuentran, en primer lugar no hay un territorio nacional. No hay una seguridad nacional que va a afectar, y sí hay estados que son afectados y que pueden ser rebasados y que necesitan del apoyo del resto de la comunidad o de algunos otros estados en un evento que los ha superado, que si bien no afecta a toda la Unión, sí afecta a un espacio, y ahí desarrollan el primer, y es bien interesante. Y vemos ahí que han regulado todo lo que es seguridad interior, y no han afectado derechos humanos, ni han facultado al Ejército a realizar violaciones, ni nada, todo lo contrario, han regulado la participación de las entidades de los distintos estados, de común acuerdo, en un marco bien definido.

La seguridad interior aquí ha sido definida como la situación de orden nacional que los poderes públicos son respetados como instituciones, y las personas que los encaran, con la adecuada defensa del régimen de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la paz social y la tranquilidad pública.

Las estrategias de seguridad interior tienden a proteger esas instituciones, pero para garantizar el derecho de las personas a la seguridad, esto es lo importante.

Si nosotros nos quedamos en la mera observación de que la seguridad interior va a ir a proteger a las instituciones del estado como tal, bueno pues probablemente si va a ser inconstitucional, probablemente va a ser en contra de los convenios que tenemos suscritos internacionales. Pero tenemos que ver que el proteger a esas instituciones deviene de problemas de orden público, del orden público que no se está pudiendo preservar en algunos lados y que se está violando el derecho humano a la seguridad de las personas, que viene de nuestro Artículo 25. Ése es el punto importante.

Aquí me voy a brincar para no alargar mucho la exposición. Tenemos la definición, dentro de lo que encontramos, encontramos que en prácticamente la mayoría de los países civilizados del mundo, sobre todo los que no tienen un sistema totalmente centralista, porque ahí. ¿Para qué vemos si es interior o no, el problema es de adentro o es de afuera?

El problema es cuando hay ciertas instituciones del Estado que no son la instancia federal que está siendo rebasada, eso es lo que tenemos que ver, que ésa es la reglamentación de la seguridad interior no es para reglamentar la autoridad, la participación del Ejército, no es un cheque en blanco el Ejército, es regular cómo subsidiariamente se va a participar apoyando a las autoridades estatales que han sido
Desbordadas, pueden ser incluso cuestiones de protección civil, puede ser el terremoto, pueden ser mil cosas que pueden ser, cómo se va a regular esa participación de las federales.

Hay una definición de seguridad interior de Argentina que es muy importante, dice:

"Es la situación de hecho, basada en el derecho, en la cual encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, a la plena vigencia institucional del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

Éste es el tema, no son las instituciones, en el fondo son las personas a quienes no puede garantizar ese derecho fundamental las instituciones locales.

Ahí en ese caso entonces podemos encontrar ya el fundamento en el Artículo 25 Constitucional. Podemos encontrar ahí ya la legitimación de ustedes como el Poder Legislativo Federal, la competencia para regular esa materia, porque ¿Por qué vamos a decir que es inconstitucional que regule la seguridad interior? ¿Y qué es la seguridad interior?, ¿Y qué es? Para hablar de la incompetencia.

Me dicen, es que no están facultados para regular, bueno y qué es, dime qué es la seguridad interior, si ni siquiera tenemos una definición que centre la materia, pero lo que sí pueden hacerse, es prever, legislar lo necesario para que se respeten los derechos de las personas, desde el punto 25, y vía el apoyo subsidiario a las entidades federativas, se pueda hacer efectivo el derecho a la seguridad que tienen las personas.

La seguridad interior tiende a propiciar y que las personas puedan desarrollar su correcto funcionamiento, que al final del día es el orden público.

Ahora, necesariamente eso, la participación del Estado, necesariamente implica cuestiones de una mayor letalidad, evidentemente, pues sí, digo que son conceptos difíciles porque, digamos, en el caso de Orlando es un loco que mata a mansalva.

En el caso de los enfrentamientos que tienen las Fuerzas Armadas, es en contra de personas que van dispuestas a matar o morir. Esas personas que van dispuestas a un combate, no podemos ahí hacer una competencia, no podemos hacer una comparación, perdón.

Tenemos que ver ahí el tipo, por ejemplo, de armamento que se utiliza. Es de donde debe de venir la necesidad de tener una proporcionalidad y donde debe garantizarse la supremacía del Estado.

Ahora, vuelvo a mi punto original.

Esta situación de amenaza a la seguridad interior se da por el rebase precisamente que se da de las instituciones locales, o sea, esas policías locales, evidentemente no pueden contra esos grupos delictivos.

Estamos contra un problema transnacional en donde hay recursos, donde hay droga, donde hay corrupción, donde apoyo logístico, incluso, internacional. Ese sistema.

Brevemente para ir concretando mi participación, se encuentra la legislación, aunque son estados que no se manejan Sistema Federal, en Bolivia, en Chile, en Perú, se encuentra definido lo que es la participación de lo que es la seguridad interior.

En este caso valdría la pena ver también. Es un tema que no hemos querido tocar el caso, por ejemplo de España y de Francia que tiene mucho que ver con el Tratado de Lisboa.

El caso reciente de Francia y de Turquía, ahí sí implica una afectación mayor, una afectación real a las garantías de las personas a los derechos humanos fundamentales de las personas y; sin embargo, hay sido constitucionales. He entendido que es necesaria esa suspensión.

Precisamente el regular las acciones para combatir la seguridad interior, debe tener por objeto, evitar llegar a esa suspensión, es fijar afectaciones mínimas permitidas, estrictamente necesarias, fijar la participación dentro de un marco jurídico que no obligue a una participación masiva en un estado de emergencia, en el cual tenga que ver una suspensión grave de derechos fundamentales.

Como ha sido la tierra de las libertades de Francia que lo estamos viendo todos los días, que ha sido ratificado por el Poder Legislativo, por la Asamblea Nacional de Francia, incluso por la Corte.

Y el caso también reciente de Turquía, que es un caso parecido al de nosotros en el cual el problema de seguridad interior los rebasó, llegó un problema de seguridad nacional y se justificó la suspensión de garantías.

Yo creo, yo los invito a que hagamos una ley que reglamente esta situación, está participación de hecho, que no se va a acabar porque no se haga la ley. Todo lo contrario, se va a seguir complicando y se va a seguir, porque sí.

Hay que, en primer lugar, distinguir, ¿Qué es el combate al crimen organizado transnacional?

¿Cuáles son los problemas de seguridad pública que tienen necesariamente que atender las autoridades locales?

¿Cuál fue el fenómeno?

El fenómeno fue en el momento en que entran las autoridades federales a combatir el crimen organizado transnacional, evidentemente por eso el índice de homicidio sube, es perfectamente explicable y normal, ¿por qué? porque las autoridades locales encargadas de mantener la seguridad pública, se hacen a un lado.

Eso no es un fenómeno correcto, ¿por qué? porque no ha regulado una participación, porque no hay una ley que hable de qué compromiso adquiere cada quien, no hay una ley que hable de cómo se van a converger las responsabilidades.

Eso es lo que yo celebro desde mi punto de vista que estén trabajando, en ese sentido, y ojalá y sea pronto con buenos resultados.

Por supuesto que hay más muertos y por supuesto que aumenta, ¿por qué? porque los policías locales, o se fueron de la plaza, o se fueron del lado de los malos, totalmente y va a aumentar los homicidios. Eso es completamente.

Nada más para concluir ya, señor Senador, en dos minutos.

El Tratado de Lisboa, contempla una definición muy importante.

Como sabemos no tienen ellos una Constitución; entonces, tuvieron que reglamentarse por este tratado, porque, incluso, participan fuerzas policiales y fuerzas militares en apoyo entre los estados. Más ahora con el problema de los refugiados.

Y esta la Cooperación Interior y un convenio, pero es, desgraciadamente el tiempo no nos alcanza, pero es un estudio muy importante que, además, ha sido avalado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y que está funcionando.

Pero que tiene su antecedente, además, en las misiones policiales, en las misiones policiales que hubo para el caso de los Balcanes. Tiene su antecedente.

En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Moiwana Vs. Suriname, se reconoció el derecho de las personas a la seguridad.

La principal obligacion del Estado y que legítima sus acciones es el derecho a garantizar la seguridad de las personas, tanto física como en su patrimonio y en su correcto desenvolvimiento.

También la Corte Interamericana en el caso Montero Aranguren y otros Vs Venezuela. También dijo que los estados están autorizados a usar las fuerzas públicas, incluso para el control de disturbios internos para combatir el crimen, pero siempre en una forma cuidadosa, en una forma muy clara, bueno, pues yo en lugar de concluir de estas resoluciones que no está permitido el uso. Y y yo concluyo, que tenemos la obligacion de regular esa participación.

Y ese es lo que los tiene a ustedes aquí, con todo respeto. Esa resolución de la Corte nos obliga a que emitamos esta Ley de Seguridad Interior, a que se regule eso.

Para que no sea inconstitucional podemos llamarle de seguridad interestatal, si gustan, pero tenemos aquí el problema de regular esa participación de las Fuerzas Armadas que, de acuerdo al 89, sí están en al mando del Presidente para garantizar ese tipo de problemas.

Nada más en las conclusiones. Se considera que la Ley de Seguridad Interior se debe expedir para garantizar el derecho humano a la seguridad de las personas.

El desarrollo nacional en base a la defensa de sus instituciones y régimen democrático que fortalezca a la soberanía nacional.

Ello es acorde con la Convención Europea de Derechos Humanos, con el Pacto de San José y con los artículos 1° y 25 de nuestra Constitución.

La concepción de orden público se ha ido ampliando para dar respuesta a las nuevas necesidades en el combate al crimen organizado transnacional, lo cual obliga a crear un espacio nacional constitucional y legal, o sea, no podemos combatir esa nueva amenaza que es muy diferente en defensa de la libertad de las personas y la seguridad nacional.

Es necesario elaborar un plan estratégico de seguridad interior que tenga su basamento en la ley, que se expida al respecto en donde participen todos los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.

En un documento de esa naturaleza quedaría especificado el rol que jugarían las Fuerzas Armadas del país y su intervención en defensa de la Constitución e instituciones mexicanas.

No deben perderse de vista que la fracción VII del 89 contempla que el Presidente podrá disponer de la Guardia Nacional.

Este tema nos faltó ver el caso de Estados Unidos y la disposición de la guardia nacional, que es de donde nos viene el antecedente de la seguridad interior, por obvio de tiempo no lo tratamos, para preservar la seguridad nacional, lo cual se lleva a cabo con la autorización del Senado de la República.

Debe observarse los precedentes en esta materia, como es el caso de las misiones de policía de la Unión Europea en acciones combinadas, civiles y militares con resultados favorables, atender también a los precedentes de Colombia y Argentina.

Es conveniente que el proceso de ajuste se acompañe de legitimación de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Los derechos humanos son los valores superiores de todo ordenamiento jurídico, sustento de legitimidad de la autoridad y del régimen político.

Precisamente para defender esos derechos, es que creemos que debe de regularse esta situación que de hecho estamos viviendo.

Muchas gracias por su atención.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias licenciado Cabeza de Vaca.

Como bien saben ustedes, nos encontramos en la sala de protocolo, perteneciente a la presidencia de la Mesa Directiva.

Me ha pedido el Senador Pablo Escudero, Presidente de la Mesa Directiva, que les reitere la bienvenida a todos ustedes, la disposición de todo el equipo para estar atentos al desarrollo de esta reunión.

Una disculpa también de parte del señor Presidente de la Mesa directiva, él se encuentra en otra reunión, él quería estar aquí con nosotros, pero les envía un saludo afectuoso.

Asimismo, se ha disculpado de esta reunión el Diputado Jorge Ramos, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, con quien hemos estado todo el tiempo y seguiremos estando en coordinación, pero quisiera reiterar y resaltar la presencia de la Diputada Angélica Moya Marín, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y quien representa en este momento a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, a quien le agradecemos su presencia y su participación.

Muchas gracias, Diputada.

Le vamos a ceder el uso de la palabra al Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Adelante, señor Embajador.

El Embajador Miguel Ruiz Cabañas: Muchas gracias, señor Senador. A nombre del Secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Videgaray Caso, agradezco muy sinceramente la invitación que nos han hecho usted y la Senadora Cristina Díaz, a participar en esta sesión tan importante.

Me referiré en mi presentación a algunos de los temas que ya fueron tocados obviamente por los oradores que me precedieron y trataré de dar por lo menos un marco comparativo de lo que está ocurriendo en otros países.

Primer punto, yo creo que no se ha entendido, y coincidiría ahí con el doctor Cabeza de Vaca, la dimensión del problema que México enfrenta de crimen trasnacional organizado.

Déjenme darles algunos indicadores de esa dimensión extraordinaria.

A fines de los años 90's el gobierno de los Estados Unidos, respondiendo a sus intereses, tenía todo el derecho de hacerlo, desviaron todo el flujo de cocaína que salía de Colombia y llegaba directamente a Florida, tomaron una decisión deliberada de desviarlo hacia México, y lo lograron, logrando con esto también multiplicar el poderío de las organizaciones criminales en nuestro país.

Hasta principios de los años 90's la mayoría de las organizaciones del crimen organizado se dedicaban a producir, exportar cannabis a Estados Unidos, y algo de heroína, ese era el mercado al que se dedicaban.

Cuando viene el desvío de toda la cocaína hacia territorio nacional esas organizaciones crecieron enormemente en capacidad de recursos, recursos financieros casi infinitos que

les permitieron desde luego esparcir dos cosas: violencia y corrupción. Eso yo creo que hay que tenerlo muy claro.

Si no me creen a mí, por favor créanme a la persona que tomó la decisión, que fue el Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien no hace mucho tiempo, hace dos años aquí en México, reconoció esa decisión y el efecto tan pernicioso que tuvo sobre nuestro país.

Voy a traducir rápidamente del inglés lo que dijo el Presidente Clinton:

"Yo desearía que ustedes los mexicanos no tuvieran este problema de narcotráfico, pero no es realmente culpa de ustedes, básicamente los Estados Unidos hicimos un gran trabajo en desviar el transporte de la cocaína, del aire y el mar, y lo mandamos a través de la tierra, les pido disculpas por eso".

Entonces, esto es una declaración del Presidente Clinton hace dos años aquí en México, yo no sé por qué pasó tan desapercibida.

Segunda decisión que afectó realmente la dimensión del crimen organizado en México.

En el año 2005 el Congreso de los Estados Unidos levantó la prohibición de la producción, distribución y venta de armas de asalto.

Después de haber mantenido un embargo de diez años, en el 2005 el Congreso decidió levantar el embargo. Eso le dio a las organizaciones criminales en México, que operan en México, y en otros países, una enorme capacidad de fuego, una enorme capacidad de violencia, como dice el doctor Cabeza de Vaca, rebasando total y absolutamente la capacidad de las policías locales, estatales de nuestro país.

Esto hizo y creó una situación extraordinaria en donde el Estado, las autoridades civiles, recurrieron a las Fuerzas Armadas para situaciones extraordinarias que se crearon principalmente por esos dos factores.

Uno puede, y yo creo que cada quien tendrá sus propios juicios, decir si la respuesta del Estado fue o no la adecuada, lo que no puede negarse es que estos factores sí están en el origen de la ola de violencia que desde entonces empezó a afectar a nuestro país.

Segundo punto que quisiera mencionar, señor Presidente, el tema de los derechos humanos en México no es, no puede ser, ya no es desde hace mucho tiempo un tema de preferencia o de manera política, o partidista, es la obligación constitucional número uno que tenemos todos los servidores públicos.

El artículo 1 de la Constitución mandata a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de las tres ramas Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a promover y proteger los derechos humanos, y no sólo eso, sino en el artículo 89 se nos pide a los que estamos dedicados a la ejecución de la política exterior que manda el Presidente de la República, se nos dice: "también se observará el principio normativo del respeto a la protección y promoción de los derechos humanos". Es una política de Estado la que se deriva de este mandato constitucional, todos los gobiernos y el gobierno del Presidente Enriqueña Peña Nieto ha hecho todos los esfuerzos posibles para ajustarse a este mandato constitucional.

Tercer comentario que quiero hacer.

En el año 2003, aquí en la Ciudad de México, en Tlatelolco, se aprobó la declaración sobre seguridad de Las Américas en la Conferencia Especial sobre Seguridad de la Organización de los Estados Americanos.

Yo sugeriría, muy respetuosamente a todos los presentes, leer esta declaración porque da una serie de definiciones y conceptos sobre lo que es la seguridad nacional, seguridad pública y cómo los estados, el hemisferio, encontramos amenazas tradicionales, rivalidades con otros estados, problemas fronterizos o las así llamadas nuevas amenazas, preocupaciones o desafíos.

Entre esas amenazas cuáles son, y están en la declaración que por cierto fue aprobada por consenso en ese año, octubre de 2003, por todos los países del hemisferio, incluyendo Estados Unidos.

Les diría lo más importante.

Reconoce como amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa los siguientes fenómenos: el terrorismo, la delincuencia organizada trasnacional, el problema de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la pobreza extrema y la exclusión social, los desastres naturales y los de origen humano, el SIDA y otras enfermedades y riesgos a la salud, y el deterioro del medio ambiente, la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética y el acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa en manos de terroristas.

Dato de una gama de posibles amenazas a la seguridad de los estados, y deja en manos de cada estado la manera de responder a esas amenazas incluyendo la cooperación internacional.

Cuarto punto, señor Presidente.

Yo creo que el legislativo cuando considere los proyectos de ley que se han presentado debería de tomar en cuenta la experiencia de otros países, y cómo ha evolucionado el régimen normativo, jurídico de esos países.

Y, voy a mencionar cuatro, cinco ejemplos, porque son, pues países que tienen una estructura jurídica parecida a la de México, y además, han tenido a veces desafíos parecidos a los nuestros.
Chile, Chile cuenta con un cuerpo de seguridad denominado los carabinieros, que fue fundado en 1927, y es una institución, es una policía nacional militarizada, totalmente militarizada, con disciplina y estructura militar, y responden al ministerio de la defensa, eso es lo que hoy tiene Chile.

Veamos ahora a Italia, los carabinieros son una fuerza de seguridad pública de orden militar, con presencia en todo el territorio italiano y muy cercanos a la población, lo menciono porque además tuve el privilegio de servir a México cuatro años en ese país.

El 31 de marzo del laño 2000 el cuerpo de los carabinieros elevó a su rango a la cuarta fuerza armada del estado italiano, ejército, marina, fuerza aérea y carabinieros, es una fuerza policía militarizada que depende del ministerio de defensa de Italia, y además, y hasta les puedo decir el número, son alrededor de 106 mil elementos, eso es lo que es el cuerpo de carabinieros de Chile.

España, la guardia civil, es un cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar y ámbito nacional que forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Francia, la gendarmería francesa es una fuerza de policía con estatuto militar, subordinada al ministerio de defensa para las misiones militares y bajo la tutela del ministerio del interior para las misiones de policía.

Colombia, creo que es un ejemplo muy relevante para nosotros. La fuerza pública está integrada en forma exclusiva por fuerzas militares y la policía nacional.

El ejército nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia de la entidad territorial y proteger a la población civil y los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garantice el orden constitucional de la nación.

Los principios bajo los cuales se rige el ejército nacional de Colombia, son los siguientes: respeto a los derechos humanos, respeto a la constitución de la ley, honor militar, disciplina, etcétera.

La policía nacional, la línea de mando de la policía nacional es, presidente de la república, ministro de defensa o sea le responden al ministro de defensa la policía nacional de Colombia.

Menciono esos ejemplos simplemente para que se vea qué han hecho otros países con el régimen jurídico para atender la seguridad pública, la seguridad interior.

Desde el punto de vista de la cancillería, quinto punto, señor Presidente, el principio toral de cualquier ley de seguridad pública, seguridad interior, desde luego tiene que ser el artículo 1 Constitucional, el artículo 1 que dice que todas las autoridades del estado estamos obligadas a promover, proteger los derechos humanos de la población en el territorio.

Cualquier ley que eventualmente se llegue a aprobar sobre seguridad interior tiene que tener como principio toral la promoción y protección de los derechos humanos, porque eso es lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución.

Yo creo que es muy importante cuando nos referimos a la actuación de las fuerzas armadas de nuestro país en operaciones de seguridad pública, tomar en cuenta varios elementos.

En primer lugar, la Suprema Corte de Justicia sí declaró constitucional la participación de las fuerzas armadas en operaciones para la seguridad pública en auxilio a las autoridades civiles, locales, estatales. Eso es un fallo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.

En segundo lugar, hay que recordar que las fuerzas armadas nunca han ido por su propia decisión, siempre han sido solicitadas por los alcaldes o los gobernadores de diversas entidades de la república cuando ellos han determinado que sus policías, sus fuerzas de seguridad no pueden hacer frente al reto que están enfrentando en esa localidad.
Y, ha sido el presidente de la república quien ha determinado que sí se puede recurrir a las fuerzas armadas, pero siempre ha sido a solicitud expresa de los gobernadores y de los presidentes municipales.

Creo que también es muy importante destacar aquí un elemento, el INEGI que todos tenemos gran confianza en el INEGI, repetidamente en sus encuetas señala que el ejército y la marina son las dos fuerzas que mayor respeto siente la población mexicana.

Yo creo que es importante preguntarle a la población en los operativos que han realizado las fuerzas armadas, si se sienten más o menos protegidas por la presencia eventual de las fuerzas armadas.

Hay que preguntarle a las personas de las poblaciones locales qué es lo que piensan.

La Encuesta Nacional revela que son a los que mayor confianza le tienen.

Y yo con esto concluiría, señor Presidente, me parece que es muy importante darle un marco jurídico a la participación de las fuerzas armadas precisamente para saber en qué momento, cuándo bajo qué condiciones se puede recurrir a su operación, para que no sea casuístico, para que no sea simplemente una situación de emergencia en una determinada población, que haya un procedimiento que acote mandato, que acote duración y que acote objetivos claros de la presencia de las fuerzas armadas del país.

Siempre en auxilio de las fuerzas locales; siempre en auxilio de las autoridades civiles, y, nunca desde luego reemplazando a las autoridades civiles y manteniendo en todo momento el respeto a los derechos humanos.

Es importante lograr una mejor coordinación entre policías locales, policías estatales y las fuerzas federales.

Muchas gracias, Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias señor Embajador por su participación.

Le solicitamos el uso de la palabra el señor Jan Jarab, representante de México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El señor Jan Jarab: Distinguidas Senadoras y Senadores; Diputadas, Diputados, representantes del Poder Ejecutivo, especialistas, invitados, muy buenas tardes a todos y todas, es un honor para mí estar con ustedes en esta importante discusión en torno a la seguridad interior.

Agradezco al Senado la gentil invitación para participar en esta importante y trascendente audiencia.

Si me permiten haré una breve introducción sobre el rol de nuestra oficina.

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos ha estado estrechamente involucrada en varios de los procesos constitucionales y legislativos del congreso mexicano en favor de los derechos humanos.

Nuestra oficina ha jugado siempre un rol constructivo, contribuyendo a la mejora del marco normativo en México. Aunque sabemos que hay una brecha entre dicho marco normativo que sigue mejorando y su implementación, no hemos caído en el fatalismo; estamos convencidos que más temprano que tarde las mejoras legislativas tendrán un tangible impacto en la realidad.

Esta introducción y parece necesaria para contextualizar las preocupaciones que tenemos sobre la intención de establecer un marco normativo sobre seguridad interior, que incluya la participación de las Fuerzas Armadas.

México enfrenta un problema muy serio de inseguridad, violencia y criminalidad, un problema serio del crimen organizado, con 15 años de presencia en México, nuestra oficina está consciente de los desafíos y no subestima el daño y el dolor que ha provocado el crimen organizado.

Sabemos de su capacidad para provocar incrementar y agravar hasta límites insospechados la violencia, al igual que de su capacidad para infiltrar, capturar y someter a las instituciones del estado. Sí es un gran problema.

También estamos conscientes de los retos que implica que la nación... los Estados Unidos, siga representando un gran mercado para la ... al tiempo que se insiste en una política prohibicionista.

Además, conocemos que la fácil adquisición de armas en los Estados Unidos ayuda a aumentar la capacidad de fuego de las bandas delincuenciales en México, como lo mencionó el Subsecretario Ruiz Cabañas.

Finalmente, no ignoramos que la sociedad tiene el derecho a estar segura y la demanda, con toda legitimidad a las autoridades prevenir los delitos y disminuir los índices de criminalidad.

La inseguridad, la violencia y la criminalidad constituyen un triángulo que lesiona y compromete seriamente a la vigencia de los derechos humanos, los organismos internacionales de derechos humanos lo sabemos, y por ello hemos expresado reiteradamente que las publicaciones del espectro, protección y garantía de los derechos humanos, consagradas por el derecho internacional, imponen a los estados el deber de adoptar las medidas administrativas legislativas o de otra índole que resulten indispensables para hacer efectivos sus derechos y libertades de conocidos internacionalmente.

Hace poco más de 10 años, el Estado mexicano tomó la decisión de enfrentar los serios y muy graves problemas de inseguridad, criminalidad y violencia, recurriendo a sus Fuerzas Armadas, en razón que la credibilidad de las mismas mencionadas también por el Subsecretario y la debilidad estructural de las corporaciones civiles.

Dicha decisión no atendió una de las principales preocupaciones tras organismos internacionales de derechos humanos, que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad que incumben exclusivamente a las autoridades civiles, de manera constante se ha dicho que las Fuerzas Armadas carecen de la formación y especialización funcional adecuada para combatir la violencia de manera eficiente y con estricto apego a los derechos humanos.

A poco más de un año de adoptada la decisión de combatir la criminalidad mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas, en febrero del 2008, al término de su visita a México, la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Louise Arbour sostuvo:

Cito.

"Quiero enfatizar que la primera obligación del Estado es proteger y defender la vida de la seguridad física, en una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado, de parte de organizaciones fuertemente armadas y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, incluyendo la corrupción extendida, reconozco el dilema".

Dijo la alta Comisionada.

"Reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad para proteger. Sin embargo, utilizar a los militares, continúa siendo problemático, pues es fundamentalmente inapropiado en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas, la atención debe centrarse en dedicar urgentemente los

recursos necesarios para fortalecer las instituciones civiles para que trabajen con integridad y profesionalismo".

Dijo la Alta Comisionada en 2008.

Así se dijo al inicio.

¿Cuál es la experiencia empírica después de 10 años? Hoy podemos afirmar que la decisión entonces tomada ha estado lejos de alcanzar el objetivo que se planteó, de mejorar la seguridad de la población.

Las estadísticas son contundentes, los niveles de violencia expresados, por ejemplo en índices de homicidios hoy son mucho más elevados que los contabilizados antes de 2006, en 2016 incrementaron y no comparto la interpretación que sea algo positivo. Las desapariciones registradas han llegado a casi 30…

Es indudable que la invisibilidad de alcanzar este objetivo previsto no responde sólo a las limitaciones, información y especialización funcional de una fuerza castrense, sino también a la gran residencia del crimen organizado, la persistente debilidad de las corporaciones civiles y la falta de investigación y sanción de los delitos cometidos, resultando en un círculo vicioso de impunidad.

Pero también hay que reconocer que el paradigma militar que aboga en vencer y neutralizar al individuo no es el idóneo para la protección de las personas, adicionalmente, como mencionaron otros interlocutores, el despliegue de las fuerzas militares provocó una multiplicación de las violaciones graves a los derechos humanos, las 164 recomendaciones de la CNDH en las Fuerzas Armadas en la última década y
otra violaciones documentadas por organismos internacionales y por la sociedad civil son prueba de ello.

Nuestra oficina también es consciente del sufrimiento que la estrategia adoptada ha tenido por aquellos cientos de militares que han resultado muertos y heridos en el cumplimiento de las funciones encomendadas con la consecuente afectación que dio al presentarlo por sus familias.

Senadoras y Senadores, Diputas y Diputados: La decisión que se tomó hace diez años, tuvo efectos indeseables no previstos. Hoy se necesita una discusión y decisión responsable para evitar efectos indeseables.

En contraste con otras reformas que puede representar una mejora significativa para hacer efectivos los derechos humanos, libertades fundamentales de las personas, las iniciativas que estamos discutiendo son una fuente de preocupación para nuestra oficina, y quiero explicar nuestras razones:

Hay este argumento de principio, la ley estaría dando un marco legal para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que deben ser competencia exclusiva de las autoridades civiles, por lo demás, tenemos la preocupación que la ley otorgue estas competencias a las fuerzas militares y corren el riesgo de petrificar un rol impropio de las Fuerzas Armadas que reafirma un status quo en el ejercicio de las tareas que, incluso en palabras de funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, desnaturalizan a las Fuerzas Armadas, se puede entender que las Fuerzas Armadas desean el respaldo de un marco normativo en las tareas que hoy ejercen.

Sin embargo la ley podría tener un efecto impensado, indeseado, incluso para las propias Fuerzas Armadas, existe un riesgo de que la ley sea interpretada por la sociedad mexicana como una reafirmación del rol protagónico de las fuerzas Armadas en la Prevención y combate a la delincuencia organizada.

Hay también una dimensión muy práctica, cuál será el efecto de la ley ante las transformaciones necesarias.

De hecho existe un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer las corporaciones policiales.

Y nuestra preocupación es que la ley podría operar como un desincentivo para la profesionalización, fortalecimiento de las instituciones civiles, incluso por sus posibles efectos presupuestales.

Cuando el actual Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, visitó México en octubre de 2015, las autoridades le dijeron que la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad había sido inevitable porque las policías han sido, decimos, no suficientemente fuertes; sin embargo, las autoridades también expresaron su compromiso con el fortalecimiento de las policías, mismo que permitiría a las Fuerzas Armadas retirarse de las calles y de las tareas de seguridad.

La oficina reconoce los procesos de transformación en curso, tales como la reforma policial y la instauración de la Fiscalía General y de los Sistemas Naciones de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Al tiempo que alentamos a la pronta consolidación de estos procesos exhortamos a la emisión de una ley general sobre el uso de la fuerza; sin embargo, llama la atención que mientras estos procesos siguen en curso el que nos convoca el día de hoy parece que se ha privilegiado, lo que estaría mandando una señal al público sobre el orden de las prioridades.

Nuestra oficina subraya la necesidad de una transición, seguimos convencidos que en la lucha contra la criminalidad cualquier medida de despliegue militar y mismo policial que no vaya acompañada de una política integral de la lucha contra la impunidad, no va a tener el efecto deseado.
En un país con altísimas tasas de impunidad, no será el involucramiento de las fuerzas militares en tareas propias de las autoridades civiles lo que desincentivará al crimen, sino la certeza de su persecución y castigo penal.

Sabemos, somos realistas, sabemos que las Fuerzas Armadas no pueden regresar a sus cuarteles de un día para otro, pues dejarían un vacío que sería llenado por el crimen organizado; sin embargo, se necesita, por lo menos, una ruta de salida gradual y medible.

Hay también otra dimensión que nos preocupa, no es idóneo resolver un problema de más de una década sin un diagnóstico certero. Esta oficina considera que la ley partiría de la ausencia de un diagnóstico público que vaya más allá de la necesidad de proveer certeza a una institución.

Es muy positivo tener esta audiencia en el Senado con voces muy distintas, pero nuestra oficina considera que es necesaria una discusión aún más amplia, no sólo sobre el rol de las Fuerzas Armadas, sino el modelo de seguridad que el país desea y merece.

El Alto Comisionado, con ocasión de su visita a México en 2015 y después en sus recomendaciones publicadas en octubre de 2016, recomendó promover un enfoque de

seguridad ciudadana con un énfasis en la protección de la vida y de los derechos humanos, y la respuesta del gobierno fue bastante favorable.

De hecho, el Alto Comisionado no fue el primero quien insistió en un cambio de paradigma, ya en el pasado lo hizo, por ejemplo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. México tiene voces que pueden servir de consciencia pública, a quienes espero que el Congreso invite a sus audiencias.

Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, si a pesar de todo lo anterior el Estado de México decidiera adoptar una legislación sobre seguridad interior que reconozca la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas es indispensable que, a efecto de aminorar sus consecuencias negativas en materia de derechos humanos, se que la misma, primero, no implique una suspensión de derechos que evita los cheques en blanco.

Segundo, que sea compatible con todos los compromisos y obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
Tres, que parta de supuestos claros, precisos y taxativos de instrumentación.

Cuatro, que obliga a especificar las causas y objetivos.

Cinco, que defina medidas estrictamente necesarias, adecuadas y proporcionales a la situación que se pretende enfrentar.

Seis, que establezca que el llamado a las Fuerzas Militares sea el último recurso.

Siete, que defina de manera clara que las Fuerzas Armadas no pueden participar en tareas relacionadas con la investigación de los delitos, la regulación de las migraciones o actividades de inteligencia civil.

Ocho, que si establezca el retiro gradual, medible y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas.

Nueve, que prevea que cualquier involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deberá tener una vigencia temporal breve y precisa.

Diez, que tutele que los despliegues militares se desarrollen bajo la coordinación y control efectivo de las autoridades civiles.

Once, que contemple las obligaciones a cargo de los tres órdenes de gobierno.
Doce, que establezca mecanismo de rendición de cuentas, reforzados, tanto internos como externos, que aseguren una supervisión rápida, independiente, imparcial y exhaustiva de las violaciones a los derechos humanos.

Trece, que defina estrategias especiales de supervisión por parte de la CNDH.

Catorce, que precise la adopción de medidas específicas para garantizar el trabajo de las y los periodistas y de las y los defensores de derechos humanos.

Quince, que informe a la población de las medidas adoptadas y de las posibilidades... para denunciar de forma segura y sin temor a cualquier abuso.

Dieciséis, que instrumente jurídicas especiales para la atención y garantía de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en este contexto; y

Diecisiete, que transparente e informe de manera constante el resultado de las acciones desplegadas y de los operativos implementados.

Estoy consciente que en las diversas iniciativas hay algunos elementos de estas condiciones, pero a nuestra oficina le parece indispensable la inclusión de todas de forma muy robusta.

Amigas y amigos: Hace cien años México decidió poner fin al conflicto armado y aspiró a construir una sociedad más justa y equitativa.

Una de las herramientas para pacificar al país consistió en la definición de un nuevo pacto político que se le encomendó a un grupo de legisladores que tuvieron la audacia de dar al mundo la primera Constitución en la que se consagraron los derechos sociales. Un siglo después, el Congreso mexicano tiene en sus manos la posibilidad de conmemorar la efeméride definiendo el rumbo legislativo que tomará la respuesta del

Estado ante el reto que supone la violencia, la inseguridad y la criminalidad que enfrenta realizando una consulta participativa e inclusiva.

Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su deseo de prestar la asistencia y cooperación técnica que precise al Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, colocando a las y los titulares de derechos en el centro de sus actividades.

Muchas gracias.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, de nuevo, señor Jan Jarab, Representante de México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su participación.

Damos la bienvenida a la Senadora Laura Rojas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.

Bienvenida, Senadora.

Nos ha pedido la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, exprese una disculpa. Por situaciones de carácter logístico y además implícitos en su función no podrá estar aquí, pero nos ha pedido que su intervención sea expuesta por el doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, Titular de la Unidas de Ética y Derechos Humanos de la Procuración de Justicia, aquí presente.

Tiene usted la palabra, doctor.

El Doctor Juan Pablo Pampillo Baliño: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a nombre de la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad por el favor de esta gentil invitación, y saludo con agrado a todas las personas que nos acompañan en este foro con la seguridad de parte de la Procuraduría General de la República, de que su amplia experiencia enriquece enormemente este debate.

Para la Procuraduría General de la República es de gran importancia que el proceso de discusión, de una ley que tiene un impacto directo en el ámbito del respeto a los derechos humanos, permita conocer diversas pautas, criterios y posturas para la mejor manera de implementar normas necesarias para garantizar uno de los más importantes derechos

humanos, el de vivir en una sociedad libre de violencia con la garantía estatal de su implementación a través de los medios más idóneos.

La expedición de una ley, como que ahora nos convoca a su análisis, debe estar enmarcada en un amplio desarrollo normativo que México ha venido elaborando en los últimos años en materia de derechos humanos.

Las decisiones que tome el Congreso en materia de Seguridad Interior, debe y seguramente será un avance en la obligación del Estado de brindar certeza jurídica a los ciudadanos respecto de su participación y de la participación de cada una de las dependencias y entidades en las tareas de seguridad.

El Estado de derecho implica que todas las personas, incluyendo las autoridades, se encuentran sujetas a un régimen jurídico. Este régimen es el que debe contener en su conformación los principios reguladores de los derechos humanos.

Un Estado que respeta los derechos humanos es un Estado que cuenta con solidez en sus instituciones, con capacidad de respuesta ante cualquier situación que ponga en riesgo a sus ciudadanos y que las enfrenta con acciones enmarcadas en el campo del derecho, y este garantiza las libertades de los ciudadanos en un ámbito democrático.

Al respecto, uno de los problemas más serios que enfrenta México es la inseguridad pública. Los índices de delincuencia común y los delitos relacionados con la delincuencia organizada han crecido en las últimas décadas, lo cual ha llevado a la implementación de acciones de política pública orientadas a aumentar la efectividad del mantenimiento de la paz pública.

Sin embargo, organismos nacionales e internacionales han expresado su creciente preocupación en torno a las posibles violaciones a los derechos humanos vinculados a las estrategias de combate al crimen organizado.

Igualmente, diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organismos públicos han mostrado en numerosos foros de debate su gran inquietud por la situación que enfrenta el país.

Estas discusiones se centran en uno de los dos aspectos de esta problemática: en la necesidad de aumentar la efectividad de la autoridad frente al crimen, y en la consecuencia violación a los derechos humanos que pueden encontrarse asociadas al combate de la delincuencia.

En la Procuraduría General de la República estamos ciertos que el debate de esta ley debe centrarse en el respeto irrestricto a los derechos humanos.

La Ley de Seguridad Interior puede ser un medio idóneo para atender la realidad del país y coadyuvar a reducir la criminalidad y la violencia, respetando al mismo tiempo los derechos de todas las personas.

Al respecto, es posible destacar que la participación de diversas fuerzas de seguridad en las acciones de seguridad interior no es percé incompatible con el respeto a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.

Esto no significa que no existan retos, y casos en los que se han violentando derechos humanos. Por eso la continuidad en la capacitación en materia de derechos humanos para las y los servidores públicos, deben ser parte esencial a considerar en las discusiones.

Igualmente, y desde la perspectiva de la Procuraduría General de la República, como institución encargada de la investigación y persecución de los delitos, incluso aquellos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad federales de cualquier institución, debe continuar y redoblar esfuerzos para que aquellos casos de abuso por parte de autoridades no queden impunes.

Es así que combatir la impunidad es la mejor forma de evitar que se cometan abusos y violaciones a derechos humanos.

Concordamos en que la seguridad interior debe entenderse desde una perspectiva amplia, no sólo como un tema que permita garantizar la seguridad del país, de su población y de sus instituciones, sino que permita atender situaciones de crisis y apoyo a la sociedad civil en casos de emergencia.

En este sentido, desde la Procuraduría, celebramos que se emita un ordenamiento que involucre a todas las autoridades en atención de seguridad interior. Primero, deben intervenir las policías, y sólo en casos extraordinarios, las fuerzas armadas. Con ello se garantiza a la sociedad la existencia de normas claras y objetivas que permitan responder a las exigencias de la sociedad.

Es necesario destacar que México no es, o sería con esta ley el único Estado a nivel internacional que cuente con normas que permitan a las diversas fuerzas de seguridad realizar acciones para reaccionar a amenazas hacia su interior, o ante situaciones que ponen en riesgo la estabilidad institucional, la seguridad pública y la paz social.

El más alto tribunal de nuestro país ha emitido criterios y jurisprudencia en donde se interpreta el orden jurídico, y establecen que la participación de las fuerzas armadas es posible, legal y legítima ante situaciones que pueden poner en grave riesgo la estabilidad del país y en casos de desastres naturales sin llegar a la suspensión de derechos humanos.

Por otro lado, este esfuerzo de generar un ordenamiento legal que defina con mayor certeza la actividad de las fuerzas de seguridad, a partir de esclarecer técnicamente lo que se debe entender por seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, será de gran importancia.

A partir de que exista una ley se acota el margen de discrecionalidad, de ambigüedad y de potestades sin regulación.

Igualmente aportará a un ejercicio de transparencia en la actuación de las autoridades en materia de seguridad, dando a conocer a la ciudadanía la organización del Estado mexicano en su actividad de garantizar la integridad y la paz de sus gobernados.

En materia de coordinación, como un pilar fundamental para tener eficacia en las tareas de seguridad es un Estado Federal como el mexicano, con este ordenamiento cada autoridad política, municipios, estados o federación asumen la obligación de plantear la solicitud formal de declaratoria de afectación a la seguridad interior y se garantiza un acuerdo conjunto frente a una situación de riesgo.

Con esto, el Estado mexicano continúa asumiendo como responsable de atender los hechos de violencia y de riesgo que se suscitan en cada región del país.

En este sentido, la Ley de Seguridad Interior podrá ser un cuerpo normativo, que generado bajo el marco de un sistema democrático recoge el interés de la sociedad por ver regulada la actuación tan necesaria de las fuerzas de seguridad en el ámbito de la seguridad pública.
En conclusión, desde la Procuraduría General de la República, creemos que la existencia de una Ley de Seguridad Interior que establezca la coordinación y las facultades de las diversas instituciones y cuerpos de seguridad en el país, y garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos por parte de estas instituciones, no son nociones contra puestas, ni irreconciliables.

Nuestro país tiene grandes retos en materia de seguridad y de protección a los derechos humanos. Y ante estos retos, es que se deben asumir acciones concretas que permitan enfrentarlos de manera decidida.
Como servidores públicos conocemos este problema, conocemos a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos; conocemos a las organizaciones de la sociedad civil, dialogamos con todos ellos de manera abierta y directa todos los días, por lo que sabiendo que existen preocupaciones importantes que esta ley puede repercutir en el desarrollo progresivo de los derechos humanos de las personas, es que debemos revisar de manera minuciosa que esta ley cumpla su cometido, que es garantizar la seguridad de todas y todos los mexicanos, respetando siempre los derechos humanos.

En la Procuraduría General de la República estamos convencidos de que es posible compaginar estas dos grandes preocupaciones de la sociedad mexicana, y por eso la institución estará atenta a lograr este cometido en todo momento.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Reiterando nuestro agradecimiento por la presencia, la distinguida presencia del señor Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el señor licenciado Roberto Campan Cifrián, le pedimos, le solicitamos el uso de la palabra.

¡Bienvenido, doctor!

El Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación: Muchas gracias.

Agradezco, en nombre de la Secretaría de Gobernación, de su Titular, del Secretario, la invitación para participar en este evento tan importante, tan relevante.

A las señoras y señores Senadoras;

A las señoras y señores Diputados:

Ha sido un privilegio, además, compartir la mesa con personas que, aunque en algunos casos claramente exponen, exponemos visiones distintas, visiones diferentes, porque tenemos, además, posiciones distintas, tenemos miradas distintas, me parece que todo lo hemos hecho a partir de un compromiso, a partir de un esfuerzo de buena fe, conscientes de la importancia que tiene el tema que estamos discutiendo, porque siendo siempre relevantes los temas del Legislativo, estos que nos ocupan el día de hoy, tienen que ver con las personas, con su vida, con su tranquilidad, con su seguridad, con sus bienes, tiene que ver elementos que significan, en muchos casos, cuando el Estado falla, cuando el Gobierno falla, los momentos de mayor vulnerabilidad y de mayor dolor para las personas.

Y por ello destaco la importancia de estos distintos puntos de vista, y la expectativa de que a partir de estas distintas visiones seamos capaces de construir juntos un instrumento que realmente sirva para atender la problemática que tenemos en el país.

Ha sido una constante en todas las intervenciones, la referencia al papel de las Fuerzas Armadas, en lo relativo a seguridad nacional, a seguridad interior o a seguridad pública.

Tengo la impresión de que muchas veces cuando se analizan estos temas, se tiene un prejuicio, sobre todo lo digo con toda responsabilidad y con toda seriedad, cuando se analizan desde la perspectiva internacional.
Tengo la impresión de que el papel que jugaron las Fuerzas Armadas en el Continente durante el Siglo XX, muchas veces significan una reacción de rechazo.

En nuestro Continente en el Siglo XX las Fuerzas Armadas, prácticamente de todos los países del subcontinente estuvieron involucrados en cuartelazos, en golpes de estado, en persecuciones, en violaciones de derechos humanos, en violaciones graves de derechos humano, sistemáticas, generales. Y me parece que a partir de ello muchas veces se mide distinto lo que sucede en un país y lo que sucede en otros. Y resulta aceptable, por ejemplo, el despliegue, importante despliegue militar, nos parece normal llegar al Aeropuerto de Bruselas, sede de la Unión Europea, y encontrar el aeropuerto prácticamente sitiado por el Ejército, y presencia militar en las calles, enfrentando un peligro extraordinario, que es el del terrorismo, o encontrar también a elementos militares en las calles de distintas ciudades, en Francia, o eventualmente frente a algunas crisis también en los Estados Unidos.

Y creo que en alguna medida esto sucede por la visión que se tiene desde fuera del papel de las Fuerzas Armadas en el Continente, y me parece que es justo decir que el Ejército Mexicano no solamente fue refractario a estas tentaciones, sino me parece también que es justo decir que el Ejército Mexicano fue un elemento muy importante en la transición que vivimos en los últimos años en nuestro país, en la transición de un régimen de partido único, a un régimen de competencia y de alternancia, y el papel que las Fuerzas Armadas jugaron en este proceso, es un papel que lo hace distinto al de otros ejércitos del Continente.

Me parece que esta experiencia nos permite decir que lo que hemos tenido en nuestro país es un Ejército leal a las instituciones y leal a la ley, y no se trata de un asunto menor.

Quisiera también poner énfasis. Aquí se ha comentado, lo ha dicho el Subsecretario Ruiz Cabañas, el ex Procurador, el propio representante en México de la oficina del Alto Comisionado. Pero vale la pena reiterar cuáles son las condiciones, cuál es la situación que tiene México en lo relativo al combate al crimen organizado, la violencia y la inseguridad, porque yo coincido, muchas veces no dimensionamos la magnitud del reto de combatir a la delincuencia organizada en nuestro país.

Yo creo que difícilmente podemos encontrar en el mundo hoy, una situación más ventajosa para el crimen organizado, que la que encuentra en México. Un mercado infinito, cualquier grupo de la delincuencia organizada en este país, sabe que no tiene más que pasar, pueden ser dos kilos de heroína, o 20 de cocaína, o dos toneladas de marihuana, encontrará compradores y encontrará la manera de pasarlo, porque es lo que hemos visto en los últimos años, y entonces tiene un mercado infinito.

Encuentra también equipo a su disposición, sin ninguna limitación. Hacía referencia Miguel, al número de armerías en la frontera de México con los Estados Unidos, ayer el dato actualizado que nos daba es de prácticamente 8 mil armerías, solamente en la frontera de México con los Estados Unidos, cualquier grupo de delincuentes puede comprar lo que sea, lo que sea, y

tendrá manera de meter esas armas a esta guerra, a esta batalla que hemos vivido los últimos años.

Y luego un elemento fundamental es que encuentra mano de obra prácticamente sin límite, porque también estamos obligados a reconocer que en los últimos años, muchos años, hemos descuidado a nuestros niños, a nuestros jóvenes y prácticamente en cualquier lugar del país, por unos cuantos pesos, la delincuencia puede cooptar, puede convencer a niñas, a niños, a muchachos, para incorporarse a sus filas, y pierden 40 o 50 y los encuentran porque son una enorme cantidad de jóvenes que no tienen esperanza, que no tienen expectativa y que prácticamente por cualquier cantidad de dinero están dispuestos a cambiarlo todo por un tiempo, aunque sea corto, de condiciones distintas.

Entonces, esto significa una enorme ventaja, un mercado infinito, equipo a plena disposición, mano de obra sin límite.

Tenemos en nuestro país corporaciones pulverizadas, corporaciones pobres, corporaciones penetradas, sobre todo en las regiones ahora más violentas del país, que enfrentan a grupos criminales que tienen todo el dinero, todas las armas y todos los jóvenes a quien reclutar. Y como se ha dicho, ha habido decisiones que nos trascienden, también muy importantes, como ésta de privilegiar que las drogas entren al mercado de consumo norteamericano por el territorio nacional.

Cuando el gobierno americano decidió no más por aire o por agua, la decisión fue, van a entrar por el territorio de México, o también la decisión que los llevó a pulverizar, a debilitar a los grupos delictivos del sur del Continente, facilitando las tareas de los grupos delictivos en nuestro territorio.

Hay que preguntarse objetivamente si podemos esperar que estas condiciones cambien pronto, que cambien radicalmente, y a partir de lo que hemos visto, si podemos esperar que cambien para bien. O seguiremos hablando de regiones del país que requieren la presencia del Ejército Mexicano, que requieren la presencia de la institución armada que puede enfrentar con eficacia, con posibilidad de éxito a estos grupos.

Y quisiera solamente referir, porque tiene toda la razón Santiago, cuando habla de estas violaciones de derechos humanos que estamos obligados a enfrentar y a erradicar que, incluso en algunas de esas condiciones, y me refiero particularmente a Chihuahua, en donde defensores de derechos humanos activos que han llevado asuntos a las instancias internacionales, ponen también en la mesa su reclamo para que determinados casos y en determinadas regiones, quienes protejan a los defensores, sean las Fuerzas Armadas.

Me parece que es también, como se ha planteado aquí, un elemento significativo de cuáles son las condiciones que tenemos en algunos lugares en el país.

Es una buena política pública, es la única política pública, habrá oportunidad de revisar con Alejandro seguramente las cifras.
Creo que está evidencia que argumenta sobre la manera como puede comprobarse hoy si es buena o mala política pública, amerita una discusión y espero que la tengamos pronto.

No solamente por las diferencias marginales, en un caso o en otro, sino porque claramente la presencia de las distintas corporaciones está vinculada con los niveles de violencia que se viven en las regiones.

Porque difícilmente encontramos casos donde intervenga el Ejército que no sean condiciones de extrema violencia, pero habrá que sentarse y revisarlo. Me parece también que conviene actualizar las cifras de letalidad.

Hay otras fuentes, habrá que acceder a esas fuentes, pero me parece que hay referentes importantes.

Uno, quejas en el CNDH.

Y otro, detenciones de las cabezas del crimen organizado que arrojan una diferencia importante con respecto a lo que pasó en la pasada administración, en donde prácticamente, en todos los casos, los éxitos estaban en que eran pajas las cabezas del crimen organizado.

Y podemos decir claramente que hoy las principales cabezas han sido detenidas. Están puestos a consideración de los jueces, en muchos casos aquí, otros fuera de aquí, y eso es algo distinto a lo que pasó en el periodo de análisis, pero habrá tiempo seguramente de analizarlo con detalle.

Y refiero también esto que comentaba el Subsecretario Ruiz Cabañas, porque por alguna extraña razón resulta incorrecto, en algunos foros, atender la opinión de las personas.

Pareciera que la opinión de las personas es algo secundario. Y la realidad es que la opinión de las personas con respecto a las instituciones o a las corporaciones en las que más confía es un elemento que debemos también de poner en la mesa.

Cuenta también está opinión de quienes están enfrentando todos los días está problemática.

Voy a concluir rápidamente, porque además me tocó ser el último.

En la lucha contra la delincuencia organizada, las Fuerzas Armadas realizan diversas tareas para las que están especialmente preparadas.

Algunas las han desempeñado históricamente como a la recolección de información, la inteligencia, el monitoreo terrestre, aéreo y marítimo, la erradicación de cultivos de enervantes, el desmantelamiento de narcolaboratorios y las detenciones de algunos narcotraficantes.

La Corte, como se ha dicho aquí, ha establecido que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando estas soliciten el apoyo.

De acuerdo con la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia reiteradamente.

El gobierno a través de la Secretaría de Gobernación determina si se proporciona el apoyo cuando las entidades federativas lo solicitan y en caso de emergencia la ayuda se presta de forma inmediata a petición de autoridad competente en el lugar.

La Constitución de la República establece la facultad y la obligacion del Ejecutivo de preservar la seguridad nacional, disponer de la fuerza para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, de conformidad con el 89.

La Ley de Seguridad Nacional está encaminada a mantener la integridad, la estabilidad, la permanencia del Estado Mexicano, por ejemplo, para preservar la soberanía y la defensa en el territorio; sin embargo, no hay Ley Secundaria que define y regule la seguridad interior.

Por lo tanto, creemos que es necesaria una Ley Secundaria que defina y regule la seguridad interior.

En cuanto a las actividades que debe realizar las dependencias e instituciones para el mantenimiento del orden interno, el alcance a las medidas que pueden tomar las autoridades responsables de ellas para garantizar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional mediante el Estado de derecho.

Al Congreso de la Unión le corresponde definir el marco jurídico que involucre a los tres niveles de gobierno. Tiene razón, sin duda, Jan Jarab.

Atendiendo a las acciones de seguridad interior, así como la actuación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles con pleno respeto a los derechos humanos.

Un procedimiento que debe de prever y definir, ¿Cuáles son las amenazas a la seguridad interior?

¿Qué acciones deben llevarse a cabo, así como su extensión y temporalidad y que autoridades participan en su atención?

Me parece que claramente el Estado mexicano tiene dos opciones.

Y por el tema que nos convoca, la pregunta es, ¿Cuál de estas dos opciones garantiza mejor el respeto a los derechos humanos?

Uno, mantener la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, como hasta ahora, sustentada en la jurisprudencia emitida por la Corte.

Se ha dicho claramente que es un sustento precario, es un sustento insuficiente.

El segundo, emitir, discutir, aprobar un marco legal que le dé seguridad a los ciudadanos y certeza jurídica en la actuación de las Fuerzas Armadas en las actividades que realizan de seguridad previa solicitud de la autoridad civil.

El proyecto de iniciativa de Ley de Seguridad Interior debe establecer claramente las funciones que tendrán las Fuerzas Armadas precisa y puntualmente, como además se ha dicho aquí, en varias de las intervenciones, incluso en las intervenciones que han cuestionado la pertinencia, pero sobre todo, la pertinencia de una mala ley, de una ley que perpetúen las cosas y que signifique ir a favor de espacios y de márgenes que pueden resultar contraproducentes.

Es importante mencionar que las Fuerzas Armadas cuentan con leyes que regulan su funcionamiento integración, no se trata de regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se trata de establecer las normas para atender las amenazas a la seguridad interior en las que las Fuerzas Armadas podrán auxiliar a las autoridades civiles cuando estas se encuentren impedidas o limitadas en sus capacidades efectivas.

La intervención de las Fuerzas Armadas debe ser en auxilio cuando las instituciones civiles para hacer frente a una amenaza de seguridad interior, sean insuficientes y ser sólo desplegadas cuando las capacidades de las instituciones civiles se vean rebasadas.

No se trata de darles atribuciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, se trata de definir cuándo, cómo y para qué debe recurrirse a su empleo, de acuerdo a las misiones que

tienen establecidas, actuando conforme a la organización, adiestramiento, equipo y poder de fuerza con el que cuentan con pleno respeto a los derechos humanos.
Al Congreso de la Unión le corresponde establecer un marco legal que permita que el concepto de seguridad interior no se confunda con el de seguridad nacional o seguridad pública. Lo que dará certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en los casos que participen en acciones de orden interno para preservar la seguridad interior y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas.

Muchas gracias.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, señor Subsecretario Campa por su intervención.

Solicitaría si algún Legislador o Legisladora, Diputado, Senador o Senadora, desea hacer uso de la palabra, a la orden.

Diputada.

La Diputada Angélica Moya Marín: Muchas gracias, Senador Gándara.

Yo creo que si tenemos un problema de seguridad pública debemos de tratarlo como un problema de seguridad pública, porque corremos un grave riesgo, el riesgo de establecer la seguridad o de acotar la seguridad interior en un tema de seguridad pública.

Es decir, si queremos emitir una Ley de Seguridad Interior creo que está bien y creo que vale la pena, independientemente de, por supuesto, revisar su legalidad y muchas otras cosas, pero me parece que el problema que tenemos enfrente, en términos de lo que el general Cien Fuegos expresó en medios de comunicación, muy abiertamente, y lo han venido expresando otros personajes en el mismo sentido, me parece que nos lleva a la necesidad de repensar si es una ley de seguridad interior o es materia de seguridad pública, que sin darle facultades al Ejército, al final de cuentas permita a las Fuerzas de Seguridad, en este caso Fuerza Armada, Marina, que les permita intervenir coadyuvando a las fuerzas civiles.
Creo que es una cuestión que puede llegar a confundirse y que creo que valdría la pena ciertamente establecer estos parámetros muy claros de que seguridad pública es sólo una parte de seguridad interior, y que seguridad interior es una parte de la seguridad nacional para saber a dónde vamos a ubicar las reformas, qué leyes se tienen que reformar y qué es lo que estaríamos, el papel que se espera del Congreso en este entramado tan complejo que pudiera o no ser solamente una cuestión de seguridad pública, o pudiera ser una cuestión de seguridad interior.

Lo que creo que ciertamente vale la pena establecer que es necesario tener un programa claro, unas metas claras, precisas, de hasta dónde van a llegar las Fuerzas Armadas, es una realidad que están en las calles, eso ya no lo vamos a quitar, hasta dónde van a llegar.

Hasta dónde va a llegar la actuación de las autoridades civiles y en qué momento se les va a dotar de nuevas capacidades para que puedan cumplir con su labor.

Si este fuera el dilema a resolver y esta fuera la política pública a resolver, vale mucho la pena que replanteemos si es un asunto de seguridad interior o es un asunto de seguridad pública.

Y centremos nuestros esfuerzos específicamente en la política pública que requerimos para atender esta gran necesidad en el país.

Y por otra parte, agradecer en realidad muchísimo todas las participaciones, todas muy retomables en muchos aspectos, creo que de verdad yo me voy muy enriquecida con esto, pero en particular la participación del doctor Alejandro Madrazo yo retomo muchas de las cosas, los asumo con toda responsabilidad, pero falta la propuesta, ya tenemos el problema encima, los académicos están cumpliendo en términos de la investigación, en términos de pedirnos, me parece muy bien que lo hagamos sobre cifras, que lo hagamos bajo una metodología muy estricta con metas, en fin, me parece muy bien, pero también me parece que falta la propuesta, porque tenemos un problema que resolver y es importante.

Agradezco mucho la participación de todos y agradezco que me hayan dado el uso de la voz, Senador Gándara.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Gracias, Diputada Angélica Moya por sus comentarios.

¿Algún otro legislador?

Diputada Martha Tamayo.

La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Muchas gracias.

Creo que este ejercicio forma parte de una forma responsable de legislar, no estamos cerrados a escuchar todo tipo de opiniones y a recibir todo tipo de propuestas, hoy hemos escuchado algunas que se contradicen, pero lo que sí es cierto es que las Fuerzas Armadas están en la calle ahora, de que tiene razón de ser su presencia ahí, de que hay antecedentes ya expuestos en esta mesa que nos dan la reflexión histórica de por qué están las cosas como están en el país, y que lo que tenemos es enfrente una tarea complejísima.
Al margen de definiciones académicas ya tuvimos una reunión donde escuchamos a connotados especialistas en materia constitucional, agradeciendo la participación de organizaciones no gubernamentales o institutos tan serios como los aquí que ya se expresaron, creo que es muy positivo escuchar a todos, pero es una función que competiéndole al Legislativo deberá tomar en consideración todos los elementos.

En la próxima reunión que hemos planeado en estos trabajos en conferencia entre el Senado y los Diputados, vamos a escuchar también a un sector que ordinariamente no siempre se consultan, que son los involucrados directamente desde el sector público en este tipo de cuestiones: presidentes municipales, gobernadores, Secretaría de Gobernación, Fuerzas Armadas, porque las perspectivas aquí abordadas han sido desde la óptima del ejercicio de cada quien muy respetable y serán tomados en consideración en su momento a la hora de dictaminar.

Con posterior a toda esta ronda de escuchar a personas y personas del sector público involucrados desde distintos ángulos, vendrá la discusión abierta, libre, de que todas las posiciones políticas que existen en el Congreso de la Unión, primero en Cámara de Diputados, pero yo quiero agradecer en esta oportunidad a todos los participantes porque con sus aportes han enriquecido de manera espléndida el punto de vista de los márgenes que tenemos para actuar y para determinar el contenido de una próxima ley.

Muchísimas gracias, Senadores.

Muchísimas gracias a especialistas por su atención.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias Diputada Tamayo por su intervención.

¿Alguna otra legisladora, legislador, antes de concluir?

Si no es así, le vamos a pedir que concluya a nuestra amiga la Diputada Mercedes del Carmen Vicente, Presidenta de la Comisión de Gobernación, para que finalmente después de ella la Presidenta también de la Comisión de Gobernación.

Adelante, Diputada.

La Diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Gracias, buenas tardes a todos.

Agradeciendo por supuesto a todos los ponentes sobre los distintos puntos de vista acerca de este tema tan controvertido y que a fin de cuentas ha puesto sobre la mesa una actuación que viniendo de un estado como en el que yo vivo, que es el Estado de Tamaulipas, ciertamente viviéndolo en carne propia todo esto que se está poniendo sobre la mesa, si es necesario o consideramos necesario el escucharlos a todos ustedes, sobre todo con estos datos de sociedad civil, que ciertamente nos llevamos de tarea para el acotamiento puntual o para el tratamiento puntual de las diversas cuestiones que les preocupan.

Es intención del Poder Legislativo, al menos de la Cámara de Diputados, yo presido la Comisión que dictamina en Cámara de origen, que será la Cámara de Diputados, esta importante propuesta o esta serie de iniciativas que se van a revisar en su momento, pero sí es muy aleccionador ver o escuchar los diversos puntos de vista, sobre todo en el entendido de que tenemos enfrente de nosotros un punto tan real, tan sentido y tan importante para la vida de los mexicanos y de este país como tal que solamente juntos podemos hacer un gran intento para que esta nueva ley, que si así se considera, pueda tener ahora sí que el respaldo que ahorita, más en estos tiempos requerimos en estos temas tan puntuales.

Vamos, sin duda, la Diputada Tamayo que me antecedió es una de las proponentes, digamos, en una de las iniciativas que estarán en revisión, igual que el Diputado Ramos que hizo una importante iniciativa con respecto a ese mismo tema, pero dentro de la Ley de Seguridad Nacional, y estaremos, sin duda, si ustedes me lo permiten, muy cercanos a ustedes, a los que hablaron en esta ocasión, a fin de poder llegar en algún momento a algo que merezca que esto tenga un destino como el que se merece México y se va a merecer siempre.

De nuestra parte nuestro agradecimiento por sus intervenciones.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, Diputada Guillén.

Y para concluir con sus comentarios y los trabajos de esta muy grata e intensa y, desde luego, enriquecedora reunión, le cedemos el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación de este Senado de la República.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, amigo Senador, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y quien además está al frente de la dictaminación por parte del Senado.

Saludo a todos, y agradezco no solamente a nombre de la Comisión de Gobernación, sino de las Senadoras y los Senadores, de los Diputados y Diputadas que hoy estamos aquí reunidos en esta Tercera Reunión de Acercamiento y Reflexiones en torno a la expedición de una ley de seguridad interior.

En este contexto hemos decidido dado la relevancia que tiene este tema de la seguridad interior, abordarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, y el principio de convencionalidad y los tratados internacionales en la materia.

Por ello, agradecemos a nombre de los legisladores la presencia del maestro Rubén Pérez Sánchez, Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien asistió en representación del titular, del doctor Raúl González Pérez, a quien enviamos el saludo.

Al maestro Santiago Aguirre Espinoza, especialista del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Al doctor Alejandro Madrazo Lajous, especialista y director del Programa de Políticas Antidrogas del CIDE.

Al doctor Daniel Francisco Cabeza de Vaca, especialista en la materia y procurador, que lo fue en años anteriores, que tuvo a su cargo la Procuraduría General de la República.

A Jan Jarab, representante de México, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Y, sin duda, pues también al doctor Juan Pablo Pampillo, titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.

Al Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Y, al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al licenciado Roberto Campa Cifrián.

En ese contexto las opiniones que hoy hemos escuchado, sin duda pues son un importante referente, como lo han mencionado mis compañeras legisladoras para el análisis y discusión que llevaremos a cabo en el Congreso de la Unión respecto de la expedición de la Ley de Seguridad Interior.

Debo destacar que la ley habrá de establecer una definición clara, como muchos de ustedes lo han señalado de manera importante respecto a la seguridad interior dentro del marco constitucional y de convencionalidad como referente fundamental para la vigencia de los derechos humanos.

Llamados estamos todos los legisladores y todos los mexicanos a entender que la seguridad interior bajo la condición que faculta al estado mexicano para salvaguardar la continuidad de sus instituciones y el desarrollo nacional mediante el fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional para beneficio de la población.

En su aplicación consideramos que deberán observarse los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y sus garantías, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación, racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiaridad y credibilidad, y esta ley habrá de sentar las bases para una correcta coordinación en el futuro, entre las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal y de las entidades federativas en acciones de seguridad interior con las fuerzas armadas, las fuerzas federales, inteligencia para la seguridad interior y seguridad nacional, y, como lo señalamos al principio, esta reunión ha tenido como objeto que aquí se expusieran las diversas aristas que en ella se encuadra y lograr, en el futuro, tener un producto legislativo como lo han señalado las señoras legisladoras, que sea una herramienta eficaz para lograr la seguridad del país y la preservación de la democracia constitucional.

Por ello, reconocemos su participación, la presencia no solamente de los expositores, sino de cada uno de ustedes por la importancia que tiene en la agenda pública, en la agenda de gobierno en estos momentos para darle mayor seguridad y paz, y sin duda para lograr que los mexicanos nos podamos sentir seguros en nuestro territorio, que es nuestra casa de todos nosotros.

Agradecemos a nombre del Presidente, del Senador Ernesto Gándara Camou la presencia de cada uno de ustedes, de la Diputada Federal Mercedes Guillén, Paloma, yo siempre le digo Paloma, de cariño, por su presencia, Presidenta de la Comisión de Gobernación, de mi amiga la Senadora Laura Rojas, que preside también la Comisión de Organismos Internacionales y Multilaterales en el Senado, y a nombre de las Senadoras, Senadores, Diputados y Diputadas Federales, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan buenas tardes.

Fin de la Versión estenográfica.

Versión estenográfica de la reunión celebrada el día 06 de diciembre de 2017, en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que preside la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, con organizaciones de la sociedad civil y Funcionarios del Estado Mexicano, para hablar en relación a la propuesta de Ley de Seguridad Interior.

Inicia versión estenográfica

...Podría continuar enumerando más preocupaciones puntuales y referirme a los riesgos que le vemos a las definiciones amplias de los artículos 2 y 4; a la opacidad que provoca el artículo 9; a las excepciones al principio de legalidad en el artículo 14; al posible rompimiento material del principio de subordinación al mando civil en la redacción actual del artículo 20; o a la laxa regulación de labores de inteligencia en el numeral 16.

Pero quería darles estos ejemplos en los que me extendí más, para insistir en que no es una posición ideológica, no es ignorancia del dictamen, no es una denostación per sé de las Fuerzas Armadas; sino que nuestras preocupaciones están sustentadas en aspectos concretos del dictamen, aspectos en los que incluso las iniciativas presentadas por otros y otras legisladoras, incorporaban de mejor manera contrapesos y controles.

Por eso insistimos en que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, se basa en conceptos que son problemáticos desde la perspectiva de derechos humanos; que tiene un diseño que aún es deficiente y que no recoge las propuestas sustantivas contenidas en las iniciativas de otros legisladores. Sobre todo en el tema de contrapesos y controles deja mucho que desear.

Por eso estimamos que ha sido tan abrumador el consenso sobre la necesidad de mejorar este dictamen, de descartar la perspectiva de seguridad interior; y de avanzar hacia una solución más integral para los problemas que enfrenta el país.

Estamos convencidos, ya para concluir señores senadores y senadores, de que si ustedes prestan oídos a las preocupaciones, no de las ONGS, de órganos de Estado como la CNDH; de la UNAM a través del Director de Jurídicas; de la COPARMEX; de la Comisión Interamericana; en fin, de la multiplicidad de actores que han expresado razonablemente, preocupaciones, podrían ustedes prestar oídos a razones que tienen fundamento y que expresan preocupaciones válidas.

Pero además, señores senadores y senadoras, si prestan oídos a esas preocupaciones van a cuidar más a las Fuerzas Armadas. Lo que no cuidan nuestras Fuerzas Armadas es generar una legislación laxa que los siga enviando a cumplir misiones como las que han cumplido en estos diez años; con preceptos que no sean objetivos y que no les den la certeza jurídica que requieren.

México necesita un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las labores que hoy realizan, y un plan de fortalecimiento progresivo de las policías civiles.

Si han de regularse situaciones de facto que han existido en estos diez años, esto pensamos, no debería ocurrir en legislaciones como esta, que se avoquen exprofeso sólo a este tema en lo particular; sino modificaciones más integrales que de verdad atiendan los problemas centrales de esta agenda en México.

De nueva cuenta, muchas gracias por este diálogo y reiterarles que de nuestro lado van a tener siempre argumentos muy concretos sobre cómo poder enfrentar estos problemas que tiene el país.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: *Gracias.*

Démosle la bienvenida al senador Ernesto Gándara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Continuamos.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Gracias senadora.*

Ahora en el uso de la voz, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, le damos la bienvenida a Jan Jarab.

JAN JARAB: *Muy buenas tardes, estimadas senadoras, estimados senadores.*

Amigos y amigas aquí presentes.

Antes que nada, quiero agradecer la apertura de ustedes para reunirse con nosotros y escucharnos para dialogar sobre nuestras preocupaciones.

Aunque se trata de otro asunto, permítanme por favor empezar mencionando que nuestra Oficina y el Congreso, particularmente el Senado, tuvimos en 2017 un año muy productivo; que resultó en la adopción de dos leyes con potencia transformativa, las leyes generales de tortura y de desaparición de personas; mismas que hemos saludado públicamente.

Nos parece particularmente destacable el hecho, no tan común, de que en la recién adoptada Ley de Desaparición se desarrolló en los procesos legislativos de (inaudible) y quiero destacar en particular el rol de las senadoras Angélica de la Peña, Cristina Díaz.

Claro, encontramos que el asunto que hoy nos reúne es distinto. Sin embargo, el ejemplo de estas dos leyes me parece importante por dos razones:

Primero, para destacar el compromiso del Senado para impulsar avances en el ámbito de los derechos humanos. Y segundo, para señalar que sería una pena terminar un año de trabajo tan exitoso, desde la perspectiva de los derechos humanos, con la adopción de una ley tan controversial.

(Inaudible) de los problemas es que, por un lado, las leyes de tortura y desaparición eran claramente percibidas por todos y todas como leyes de derechos humanos; y la Ley de Seguridad Interior no lo es, y para algunos es una ley de otro ámbito y acabo de recibir información de que el dictamen ni siquiera se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

Sin embargo, en nuestra Oficina seguimos convencidos desde hace mucho tiempo, de que la protección de derechos humanos es y tiene que ser central en las deliberaciones sobre esta ley.

Permítanme por favor, y pido perdón por esta introducción tan larga, (inaudible).

La Oficina, como institución en las palabras de tres altos comisionados: (inaudible), han sostenido que desde que se adoptó la posición del Gobierno mexicano de (inaudible) las Fuerzas Armadas en la batalla contra el crimen organizado, que esta decisión es y ha sido equivocada. Entendible, pero sin duda equivocada.

Que es una tarea que no corresponde a las Fuerzas Armadas ni están capacitadas para este rol y (inaudible).

La Oficina siempre expresó y ha expresado su preocupación de que esto iba a ocasionar graves violaciones de derechos humanos por las propias Fuerzas Armadas; lo cual lamentablemente ha ocurrido. Además, la década pasada nos muestra que el uso del (inaudible) militar no fue exitoso ni desde la perspectiva de la seguridad como tal

El índice de homicidios, que estaba históricamente en el nivel más bajo antes de que se emplearan las Fuerzas Armadas en las calles, llegó en pocos años, 2010-2011, al nivel históricamente más alto. Y parece que en 2017 va a superar este doloroso récord.

La estadística de desapariciones se disparó mucho más, llegando en 2017 a la cifra escalofriante de más de 33. (Inaudible) ...nadie sabe qué porcentaje de estos homicidios y desapariciones se pueden atribuir a los servidores públicos, al crimen organizado, al crimen común.

Pero sí podemos constatar, sin duda alguna, que la estrategia actual incrementó también la violencia cometida por otros actores, y esto de manera dramática, ¿por qué? primero porque la estrategia de fragmentación de los cárteles, lejos de eliminar al narcotráfico, resultó en batallas por control de la plaza y violencia cada vez más caótica y salvaje, porque el

incremento dramático todavía rebasó la capacidad de la procuración de justicia en el país, generando impunidad.

¿Y por qué? Porque como se ha documentado en otros países, el uso de la fuerza extrema por la autoridad, con impunidad, es un mal ejemplo no sólo para las estructuras criminales, sino para la población en general, causando un círculo vicioso: la normalización de la violencia.

Mantenemos nuestra firme convicción de que la posición del Gobierno anterior de enviar a las Fuerzas Armadas a desarrollar estas tareas, y la decisión del Gobierno actual de mantenerlas en estas funciones, es una de las principales causas directas e indirectas de la actual crisis de derechos humanos en México.

Por todas estas razones, como lo destacó el Alto Comisionado en su visita al país en 2015, y en sus recomendaciones publicadas un año después, la Oficina junto con varios expertos, proponen el cambio de paradigma, la salida gradual de este modelo hacia un modelo de seguridad ciudadana, enfocado en el fortalecimiento de las corporaciones civiles, en la prevención, en la protección incondicional de la vida humana.

Entonces, ¿desde cuándo se anunció? Desde el año pasado la intención de (inaudible) el estatus quo, desmotivar el fortalecimiento de las corporaciones civiles y alimentar a un círculo vicioso.

Entendemos que hoy por hoy, la situación de seguridad es tan compleja, que no se puede retirar a las Fuerzas Armadas de inmediato, y que tampoco es ideal que sigan ejerciendo este rol sin un marco legal.

Pero no se puede aceptar la lógica poco racional, de que (inaudible) iniciando sin apoyo en la ley, necesita legalizarse precisamente por su falta de éxito.

Desde nuestra perspectiva, reitero, lo dije varias veces desde el inicio, lo que urge no es la adopción de una ley para respaldar este modelo sino lo contrario, una discusión pública, inclusive honesta, integral, holística, (inaudible) seguridad que el país necesita.

Una discusión donde la cuestión no será una competencia en confianza, con claridad; si las Fuerzas Armadas son más confiables que las corporaciones policiacas, aparentemente sí, pero esto es una visión de la falta de éxito de las reformas de los policías en toda una década.

La discusión debe a ser sobre si funcionó este modelo de seguridad; y si no funcionó, ¿por qué no funcionó? ¿Y cómo se puede salir de él? Alcanzar las alternativas reales.

Cualquier abordaje en la materia, según nuestra opinión, debe ser resultado de una discusión abierta y honesta, con la participación de los ciudadanos y expertos.

Y, sin presumir este resultado, nuestra posición es que sí se insiste a pesar de toda la evidencia (inaudible) para mantener el orden de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, podría ser primero estrictamente subsidiario, entonces sólo cuidando a las autoridades y corporaciones civiles.

Segundo. Estrictamente residual, temporal, con una clara ruta de salida total de las tareas de seguridad.

Y tercero. Se motiva a estrictos controles y a un régimen efectivo de rendición de cuentas.

Para resumir, estamos convencidos de que la (inaudible) no es la solución.

Además el producto que se recibió desde la Cámara de Diputados, tampoco atiende las promesas y compromisos que algunos de sus impulsores sostuvieron que se podían alcanzar con su emisión, porque se habló de todo esto que era solo subsidiario, temporal, estableciendo una ruta de salida, y de hecho lo es.

Finalmente, antes de pasar la palabra a Alan para su análisis del proyecto, les pido respetuosamente no interpretar la posición de los medios de comunicación, sino retomar el sentido de nuestra carta del pasado lunes, remitida al Senado y su respectivo anexo ya hemos hecho público por el interés (inaudible)…

Tal y como lo hemos venido haciendo, la oficina mantendrá de manera informada de manera directa a la opinión pública sobre nuestras posiciones.

Muchas gracias por la posibilidad de hablar con ustedes y muchas gracias por su atención.

***ALAN GARCÍA:** Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.*

Voy a exponer muy brevemente parte del contenido del documento técnico que se anexó como comunicación al Senado de la República el pasado lunes, y que hemos remitido la gran mayoría de ustedes, senadoras y senadores.

¿Qué nos preocupa de la minuta?

En principio, la ambigüedad de conceptos.

La ley utiliza de manera reiterada conceptos ambiguos, laxos, que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria.

Incluso hay conceptos que no se definen, como por ejemplo actos resistencia.

Una de las promesas que se refirieron cuando se presentaron las iniciativas, es que esta legislación iba a brindar certeza.

Lo cierto es que con la laxitud de los conceptos previstos en el proyecto, no se garantiza la certidumbre que se anunció.

Segundo. Se violenta el principio de necesidad.

La declaratoria de protección a la seguridad interior, por ejemplo, también podrá declararse no solamente cuando se superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, sino también cuando éstas, entre comillas, se comprometan; lo que reduce, de acuerdo al

artículo 11, fracción primera, el umbral indispensable para su emisión desde un criterio y un principio de necesidad.

Tercero. El dictamen contiene múltiples disposiciones que conceden u otorgarían un papel indebido a las Fuerzas Armadas.

Primero. La legislación permite que en determinadas circunstancias, las Fuerzas Armadas actúen de manera autónoma en esta materia, y no necesariamente van por la (inaudible) de las autoridades civiles o en coordinación con ellas. Artículo 4º, artículo 11, artículo 20.

Segundo. Las Fuerzas Armadas podrán realizar actividades relativas a la seguridad interior, sin la necesidad de que se emita una declaratoria de protección a la seguridad interior, por lo que el carácter habilitante de la declaratoria desaparece.

Tercero. La ley regula la actuación de las Fuerzas Armadas ante la comisión de delitos sin establecer reglas claras acerca de esta intervención, de acuerdo al nuevo marco jurídico en materia procesal penal.

Y finalmente, en este tema, el artículo 28 se establece que las Fuerzas Armadas realizarán estas actividades de seguridad interior con su organización, medios y adiestramiento, lo cual no permite hacer las adecuaciones pertinentes para enfrentar una situación distinta a la que habitualmente desarrollarían o tendrían que desarrollar.

El cuarto elemento que nos preocupa, es el sometimiento de la autoridad al mando militar.

Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, de acuerdo al dictamen, corresponderá exclusiva y monopólicamente a los Secretarios de la Defensa y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan a los así denominados grupos interinstitucionales.

Lo anterior, cancela por absoluto que la autoridad civil que encabeza las tareas previstas en esta ley, según el artículo 5º, el Secretario de Gobernación tenga al menos la capacidad de proponer a quien dirigirá estos grupos institucionales.

Segundo. Se establece un monopolio en la dirección y coordinación en favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas, quedando así la posibilidad de que sea un civil quien desarrolle dichas funciones. Artículo 20, artículo 21, artículo 22.

La línea de mando del comandante designado, sería invariablemente la Secretaría de la Defensa o de la Marina, lo cual nuevamente elude el liderazgo y responsabilidad de la autoridad civil en estas materias.

Pero más preocupante aún, el protocolo de actuación invariablemente será elaborado por un, se dice, comandante. Esto es, por un integrante de las Fuerzas Armadas.

Dichos protocolos, menciona el proyecto, establecerán las responsabilidades, canales de comunicación y comunicación entre las autoridades militares y civiles.

Esto es, no solamente se establece la coordinación y dirección monopólicamente de un militar, sino que también será un militar el que adopte los protocolos de actuación, esto de las reglas de operación en estas circunstancias.

El quinto elemento que nos preocupa es la ausencia de controles. Solamente dos artículos se albergan en el capítulo relativo al control de las acciones en materia de seguridad interior, y dichos controles se reducen a que el coordinador de las acciones de seguridad interior mantendrán informados al Presidente, por conducto de la Secretaría de Gobernación, y que éste a su vez remitirá un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

La intervención de la Federación y la declaración de protección, solamente se somete a consideración del Consejo de Seguridad Nacional, vedando así las posibilidades de que se realicen controles efectivos.

Incluso el Presidente de la República podría, en determinados supuestos, ordenar acciones bajo el amparo de la ley sin estar sujetas a temporalidad alguna o a un marco de actuación determinado, lo que favorecerá igualmente la acción unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles que per sé se prevén en la legislación.

Se podrían incluso llevar acciones de seguridad interior, como ya lo mencionaba, sin declaratoria de protección, para atender los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos que, dicho sea de paso, es un documento inaccesible de información reservada y que escapa también al escrutinio público.

Y paradójicamente, mientras que en las legislaturas de las entidades federativas o sus respectivos ejecutivos deben expresar las consideraciones que motivan las peticiones para que se haga una declaratoria de seguridad interior, la ley es omisa en su totalidad, respecto de aquellos elementos que el Presidente eventualmente cuando proceda de mutro propio, deberá acreditar para someterlo a consideración del Consejo de Seguridad Nacional.

En la misma línea de ausencia de controles, la declaratoria de protección a la seguridad interior únicamente se informa a la Comisión Bicameral, no así al Congreso, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; mientras que también podría involucrar la participación de autoridades estatales y municipales, sobre las cuales los organismos públicos de derechos humanos a nivel local deberían tener competencia y facultades de supervisión.

Más allá, la modificación o prorroga de las condiciones y la vigencia de la declaratoria de protección a la seguridad interior, se adoptarán de manera unilateral por el Presidente, incluso éstas sin ser cometidas a la consideración del Consejo de Seguridad Nacional, artículo 15.

La ley no establece cuántas prorrogas estarían permitidas, ni en plazo de duración de estas, o incluso como algunos senadores lo propusieron, un régimen agravado de controles conforme las prórrogas se fueran solicitando.

Tampoco se contempla la obligación de establecer objetivos claros e indicadores precisos de impacto, ni informes al término de la declaratoria respecto de cómo y qué se hizo y qué se alcanzó para prever un mecanismo mínimo de rendición de cuentas.

El sexto componente que nos preocupa es la ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones.

Solamente una fracción de un artículo, alude a un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Además de lo insuficiente, dicha disposición, una fracción de un artículo solamente alude a las autoridades de las entidades federativas, municipios y embarcaciones territoriales y únicamente se refiere a la obligación de dar reportes acerca de su avance, sin establecer cuáles son los contenidos mínimos que deben contener esos reportes.

La ley no contempla un régimen efectivo de rendición de cuentas y mecanismos que garanticen la implementación de las actividades de fortalecimiento de estas autoridades. Más allá, se posibilita la duración indefinida de las acciones de seguridad interior, lo cual claramente es un desincentivo para que las autoridades federales, municipales y territoriales fortalezcan a sus instituciones.

Y un elemento adicional que es particularmente preocupante: la ley contempla, sí, un mecanismo de intervención de las Fuerzas Armadas, sin precisar en dicho supuesto un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales de las autoridades civiles de carácter federal.

Tampoco se prevé, como ya lo mencionaba, un programa de adiestramiento para las fuerzas armadas, para desarrollar aquellas funciones que indebidamente le estaría concediendo la ley.

El séptimo aspecto que nos preocupa es la indebida regulación del uso de la fuerza, el concepto de uso se dice legítimo de la fuerza no se ajusta a los estándares internacionales en la materia.

Excluye principios y elementos centrales para que el uso de la fuerza pueda considerarse como legítimo, como incluso algunas de las iniciativas lo propusieron.

Incluso la ley utiliza conceptos ambiguos e indeterminados y no ofrece una definición, por ejemplo, para referirse a las circunstancias en las cuales podría darse el uso de la fuerza frente a un acto de resistencia que nunca se define.

Además, la definición de uso legítimo de la fuerza solamente se aplica, cito, "a las fuerzas federales y, en su caso, a las Fuerzas Armadas, lo cual deja de lado a las fuerzas estatales y municipales, quienes también podrían desarrollar funciones sobre las base de esto.

Dicho de otra forma, mientras que a las autoridades federales, civiles y militares se les sujetaría a un uso legítimo de la fuerza, a las estatales y municipales se les exime.

Otro componente es la indebida protección y garantía de los derechos humanos. Se nos dice en el artículo 7 que las autoridades tendrán que preservar los derechos humanos.

Sin embargo, la Constitución, en el artículo primero establece un catálogo más amplio de obligaciones: promover, respetar, proteger y garantizar y es igualmente cuestionable el que la obligación de preservar los derechos humanos se sujete a los protocolos que estarán por emitirse y no al conjunto de normas constitucionales e internacionales en la materia.

Se indica en la ley, en el artículo séptimo, segundo párrafo, que cuando se requiera la suspensión de derechos estará lo dispuesto en el artículo 29 y a las leyes respectivas. Todavía no existe una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, no obstante que desde el 2011 se mandató para la emisión de ese ordenamiento.

No se prevén recursos, acciones extraordinarias para los organismos públicos de derechos humanos, frente a una situación de esta naturaleza.

Hay como otro componente afectaciones o potenciales afectaciones al derecho a la protesta social. El artículo octavo regula de manera deficiente este tema, no obstante que la ley regula dos elementos, tanto las amenazas a la seguridad interior, como el riesgo a la seguridad interior, la norma prevista en el artículo 8 solamente incluye a la protesta dentro del ámbito material de la normal relativo a la amenaza, más no relativo a riesgos.

Otro factor ya mencionado aquí, es la ausencia de transparencia, el artículo 9 inhibe la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. La naturaleza de la información no se puede determinar a priori en razón de la ley que regula su generación sino en función de su contenido de conformidad con la prueba del daño. La norma, además, el artículo 9, trastoca el principio de máxima publicidad al establecer como premisa que la misma será objeto de clasificación.

Otro elemento es la lesión a la autonomía. El artículo 31 contempla que todos los órganos autónomos deberán proporcionar la información que le requieran las autoridades. Dicha disposición es particularmente riesgosa, pues incluiría, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual podría inhibir su misión de supervisión en materia de derechos humanos, pero también incluiría al INE.

Tenemos también algunas consideraciones sobre algunos riesgos a la defensa de la Constitución y control de la constitucional, y convencionalidad en la medida en que el artículo 73 no faculta de manera explícita al congreso para emitir una ley en esta materia.

También se establecen algunas obligaciones para las autoridades federales y municipales sin que se haya habilitado previamente al Congreso para legislar con alcances para imponerles obligaciones a estas autoridades.

En fin, estos son algunos de los elementos, mismos que, como repito, obran pues en el documento, en el anexo que hemos remitido al Senado de la República y que ahorita volveremos a repartir entre quienes están aquí sentados en la mesa.

En síntesis, la legislación en los términos en los que se están promoviendo no provee de certeza y certidumbre, implica un riesgo a los derechos humanos, no prevé soluciones reales frente a los serios problemas en materia de derechos humanos, fortalecería es status quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las corporaciones civiles y consolidaría el paradigma militar al que ya se ha referido.

Una legislación como esta tampoco ayudaría a las Fuerzas Armadas, porque dicho de nueva cuenta, no prevé los mecanismos de control y la certeza que ellas han estado solicitando de tiempo atrás.

Muchísimas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Gracias.*

Tiene la palabra el maestro Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador general de seguimiento de recomendaciones y de asuntos jurídicos y que viene en representación del presidente Luis Raúl González, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

MAESTRO RUBÉN FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ: *Muchas gracias senadora.*

En primer lugar agradecer la gentil invitación para participar en esta mesa y de plantear cuáles son los puntos de vista que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene sobre este dictamen que está sujeto a discusión.

Sí me lo permite, en primer lugar cedería la palabra al licenciado Guillermo Silva y después continuaría y con el planteamiento.

Gracias.

LICENCIADO GUILLERMO SILVA: *Muy buenas tardes, me llamo Guillermo Silva, soy asesor del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.*

Agradezco la invitación y a las señoras y señores senadores, (...) espacio del intercambio de opiniones, en un tema que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido y es de principal relevancia.

En primer término, quisiera señalar, al igual que lo han hecho mis compañeros de mesa, que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es lo importante y necesario el que exista un fortalecimiento institucional y que se emprendan acciones que verdaderamente fortalezcan la debida observancia de aplicación de la ley, porque sólo en ese marco los derechos humanos pueden ser vigentes.

(Inaudible)...no demostrar, no impresionar, no descalificar la labor de los (...) pero sí estamos convencidos que sin el marco legal y el respeto a la Constitución y el respeto a los derechos humanos, que se debe (...) toda la actuación de las autoridades.

(...) 7 de febrero de este año hicimos llegar a las mesas directivas de las cámaras de Diputados y senadores la opinión y postura sobre los proyectos que en ese momento se presentaban a la Ley de Seguridad Interior.

Esto lo referirá con mayor (...) panorama general. Nosotros reconocemos y valoramos la intervención y la actuación que han tenido nuestras Fuerzas Armadas en proporcionar una mayor seguridad a las personas en el país.

Sn embargo, como lo ha dicho el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones, no consideramos que eso sea lo más deseable.

Hemos planteado y (...) que se refuercen las capacidades y recursos de las policías civiles, con lo cual estaremos dando cumplimiento a la Constitución y que se plantee un plan de

retorno gradual, medido y conforme a las circunstancias lo vayan permitiendo, de las fuerzas armadas a las tareas que les son naturales.

(...) no es una oposición ni dogmática, no hay oposición insensata a que se regule esta actividad dentro del (...) para nosotros el que se haga una revisión real, integral, objetiva, de las políticas de seguridad en México, es una prioridad.

Pero consideramos que la Ley de Seguridad Interior y los términos en los que se plantea, sean la vía más pertinente y más adecuada. Para nosotros, como lo hemos señalado, el Presidente de la Comisión Nacional lo ha hecho público en varias ocasiones, los problemas de seguridad y justicia que nuestro país enfrenta se deben de ver bajo un esquema amplio, en el que se traten de manera conjunta e integral, la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura del esquema de procuración de justicia, así como determinar el tipo de policía que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, precisando los modelos bajo los cuales se daría su operación.

Nosotros entendemos que se pretende regular una realidad, que es la intervención que están teniendo nuestras Fuerzas Armadas y compartimos el hecho de que es necesario que haya certidumbre, que haya bases claras por la interacción entre la autoridad y los civiles.

Sin embargo, consideramos que la Ley, en los términos en los que está formulada, no contribuye a dar esa certidumbre jurídica que nuestras Fuerzas Armadas en su participación para contener la violencia y la inseguridad, debido a que en temas que se formulan existe una amplia discrecionalidad y (...) en la actuación, en tareas que deben ser excepción, no regla general, como la ley lo está estableciendo.

De igual forma y con esto concluiría esta parte, el proyecto trasciende por mucho el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas.

Un punto principal de preocupación para nosotros es el riesgo potencial de que los contenidos (...) puedan aplicarse de manera discrecional, en tanto que no existen bases claras, objetivas, para su determinación, a cualquier tipo de actividad.

En tanto que la (...) se ha calificado de riesgo a la seguridad interior sin que existan parámetros objetivos para ellos. Existen diversos (...) donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diversos defectos o diversos problemas de constitucionalidad y riesgos potenciales para los derechos humanos y son los que a continuación va a exponer el licenciado Rubén Pérez.

Muchas gracias.

MAESTRO RUBÉN FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ: *Muchas gracias.*

Me parece que una parte importante de los problemas que se aprecian en el contenido del proyecto de ley, han sido ya señalados en la mesa. Ha sido convicción en todo momento de la Comisión Nacional el que una ley de esta naturaleza debe ser ampliamente discutida por los sectores interesados, por la sociedad, la academia, los organismos, y que este proyecto debe ser tratado de la misma manera.

Y ya hubo oportunidad de analizar las iniciativas que se estuvieron trabajando, pero esta lectura, esta expresión que tiene ahora, no ha tenido esa suerte.

Consideramos que en esa nueva discusión que debe abrirse, en esa nueva oportunidad que debe de existir, de plantear, de analizar, de poder opinar y de poder establecer de manera consensuada el contenido de una ley de esta naturaleza, existen puntos que deben ser considerados y tomados en cuenta de manera fundamental.

Los puntos que a continuación vamos a enumerar ya han sido posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya han sido hechos del conocimiento de este órgano legislativo y ahora que volvemos a regresar encontramos que son plenamente aplicables al dictamen que nos ocupa ahora.
Vamos a referir básicamente en 10 puntos, que ustedes van a ver que están perfectamente vinculados con el tema.

En primer lugar, un proyecto de esta naturaleza debe tomar como premisa general el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas.

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todas las autoridades. Lo decíamos ya en términos de lo que establece el artículo 1° de la Constitución.

Debe ser respetuoso del ámbito de las competencias y las autoridades tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos consignados en favor de todo individuo.

Nuestro parámetro de respeto de los derechos humanos deber ser el marco constitucional y convencional, del que nuestro país forma parte. De tal manera que la legislación que regule la seguridad interior, debe tener como premisa este respeto de los derechos humanos.

2. Una Ley de Seguridad Interior debe preservar la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que en materia de seguridad pública, en el fondo subyace una cuestión de seguridad pública en el proyecto; haciendo una plena armonía entre lo que contempla el artículo 21 de la Constitución y lo que prevé el artículo 89 en su fracción VI.

La Constitución separa con total precisión estos tres términos, por lo que es necesario que hagamos una definición exacta, que sea una definición exacta, precisa y se dé contenido y alcance.

Un problema que vislumbramos es que mientras no se acoten con total claridad estos conceptos, la regulación de ley que va resultando de la misma, va adoleciendo de una serie de fallas, incluso estructurales, que afectan todo el esquema de la ley.

Entonces, la ley debe distinguir con precisión, con claridad, sin ambigüedades cuál es el objeto a regular y separarlo de los temas de seguridad interior, de los temas de seguridad pública; a fin de que la norma que se emita se ajuste al mandato constitucional.

No basta con que la ley haga la declaración de que algunas autoridades pueden llevar a cabo solamente funciones de una o de otra naturaleza; la calidad de la actuación está y debe estar calificada en función de la naturaleza de la misma de la que se lleva a cabo. Entonces, en ese sentido esta acotación de conceptos es fundamental.

Preservar el respeto al principio de legalidad, que todo acto de autoridad debe revestir, en particular por lo que hace a los actos de molestia e incluso privativos que pudieran sufrir las personas.

Es fundamental que la ley establezca que las autoridades sólo puedan realizar atribuciones y funciones que se determinan en la Constitución. El proyecto debe tener la suficiente claridad en este sentido, en tal forma debe ser fortalecido este aspecto.

Se debe prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como podría ser la libertad de expresión o de manifestación, en términos de lo dispuesto en las normas y en las convenciones de las que nuestro país forma parte.

Se deben contemplar mecanismos de control institucional. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado ha hecho ya un planteamiento muy claro de cuáles son los principales problemas que se aprecian desde esa perspectiva.

Deben ser mecanismos claros, de colaboración entre autoridades para implementar y para dar el seguimiento y control de las acciones que se desarrollan al amparo de esta ley.

Es importante que no perdamos de vista el ámbito de competencias que la propia Constitución establece, la forma en la que cada una de las autoridades puede actuar y el alcance que la ley puede tener.

¿Cuál es la naturaleza de la ley que se está regulando? ¿Cuáles son los alcances que cada autoridad que interviene, puede llevar a cabo? ¿Qué puede hacer la autoridad federal? ¿Qué pueden hacer las autoridades locales y municipales?

Porque ahí es importante que la ley termine de precisar dónde se encuentra el fundamento de actuación de cada una de las autoridades. Este es un principio fundamental del principio de legalidad, al que toda autoridad debe sujetarse.

Temas de fortalecimiento de especialización en materia de seguridad. La formación y capacitación de los policías, que es un tema que permanentemente se ha venido señalando en esta mesa, es fundamental. Pero si queremos enfrentar el fenómeno en el que nuestro país está inmerso y queremos atacarlo de una forma eficiente; debemos tener una visión integral.

Una ley por sí misma no va a resolver los problemas a los que nos enfrentamos; y un conjunto de leyes con un análisis integral y con autoridades actuando de manera mucho más apegada a sus atribuciones, daría un resultado mucho más eficiente.

Tenemos temas que están vinculados en el tema de seguridad pública, formación y capacitación de policías, inteligencia financiera, investigación patrimonial, de nuevo fortalecer las tareas de prevención, debemos revisar qué está pasando con nuestro sistema penitenciario. No son asuntos aislados unos de otros, todos forman parte de un gran fenómeno al que nuestro país se enfrenta.

Deben existir en la ley, además objetivos, metas claras verificables y determinando las consecuencias del incumplimiento que la propia ley puede establecer para las autoridades.

Debemos definir los ámbitos temporales, espacial y material de las acciones de seguridad interior; así como su difusión y publicidad.

Debe de establecerse con total precisión cuáles son los efectos que se buscan y cuáles son los objetivos con la publicidad de la declaratoria a la que la ley hace referencia. Pero no solamente de la declaratoria, sino de las acciones que se lleven a cabo en el combate de acciones que se lleven para atacar las posibilidades de riesgo a la seguridad nacional.

La amenaza está prevista y regulada. La parte de los riesgos en este aspecto de difusión y de publicidad, no lo están.

Se debe en la ley establecer con total precisión que las Fuerzas Armadas no participen en la prevención e investigación de los delitos. Y no se puede asumir bajo ningún supuesto que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas, puedan asumir funciones de carácter permanente. La ley, en su caso, debe establecer además, que es algo que se ha venido también señalando ya de manera reiterada, las bases para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que le son propias.

La Comisión Nacional reconoce que la labor que ha llevado a cabo durante este tiempo el instituto armado, las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, no puede dejarse de lado, no pueden dejar de reconocerse. Pero debe plantearse a partir de lo que la ley establezca, el retorno gradual, medido, con todo un proceso que vaya acompañado de la capacitación de las policías; con el fortalecimiento de los sistemas de seguridad, de prevención y de procuración de justicia.

En tal sentido, la CNDH hace un atento y respetuoso llamado a las señoras y señores legisladores para que con responsabilidad y plena conciencia sobre las repercusiones que tendrán la aprobación de esta ley; lleven a cabo un examen objetivo y detallado de la propuesta que está a discusión y análisis, para que en total apego a lo establecido por el artículo 1° de la Constitución, al régimen competencial que establece la propia norma suprema y a las atribuciones que concede nuestra Constitución, la ley cumpla con el mandato que debe de cumplir siempre, que es el respeto desde la perspectiva de la comisión de los derechos humanos que establece la propia Carta Magna.

Eso sería todo. Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias.*

Tiene la palabra el general Alejandro Ramos, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA.

GENERAL ALEJANDRO RAMOS: *Muchas gracias.*

Creo que yo tengo una hora para hablar, ¿no? Ya hablaron como cinco o diez antes que yo, en contra. No, gracias.

Primero que nada, agradecer la invitación que nos hicieron a la Secretaría de la Defensa Nacional, para participar en este foro. Sentimos que es una buena reunión para intercambiar puntos de vista.

El diálogo no sé qué tanto pueda darse, porque finalmente cada quien establece posturas y se las lleva a su casa, entonces no hay realmente un diálogo. Pero sí una oportunidad de transmitir nuestras visiones y preocupaciones sobre este tema, que es importante para todos.

Y cuando digo para todos, quisiera traer a colación las expresiones que ha hecho el General Secretario, quien por cierto les manda un cordial saludo y les desea que tengan la mejor de las determinaciones en su alta responsabilidad de resolver sobre esta iniciativa.

Y lo que nosotros queremos expresar en principio es que, la Ley de Seguridad Interior desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas no es una ley para las Fuerzas Armadas, como se ha establecido en algunas expresiones, en algunos foros, etcétera. Nosotros hemos tratado de esclarecer, de exponer que la seguridad interior no es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas; sino es una responsabilidad de todo el Estado mexicano, que incluye población, gobiernos de los tres órdenes, los tres Poderes de la Unión, etcétera.

Entonces, cuando hablamos de una ley de seguridad interior, no estamos pensando nosotros en una ley solamente para las Fuerzas Armadas. Desde mi punto de vista, la minuta que envió la Cámara de Diputados mantiene ese enfoque, no es una ley que regule expresamente y en forma única a las Fuerzas Armadas; sino la función del Estado mexicano para atender los riesgos y amenazas que el Estado mexicano como tal puede enfrentar, asumiendo que todos tenemos un interés en preservar la continuidad de nuestro Estado mexicano.

En ese sentido insistiría, la Ley de Seguridad Interior no es para las Fuerzas Armadas; sino para la seguridad interior.

El tema que nos ha convocado el día de hoy pareciera que está enfocado a la seguridad pública y ese es un punto de partida que me parece desviado. Las amenazas a la seguridad interior pueden ser muy variables, como lo señala la minuta que tienen ustedes ahora para su discusión, y una de ellas, la que estamos viviendo más de cerca, más actualmente, son los temas que tienen que ver con el combate a la delincuencia organizada y los estragos que ha hecho en algunas regiones de nuestro país, y que no escapa del conocimiento de nadie.

Pero eso no nos debe de llevar a sesgar el debate de una ley de seguridad interior para tratar de, con ella, resolver los problemas de seguridad pública, que tienen su propio marco jurídico y que se ha venido desarrollando desde mucho tiempo. Sabemos que la seguridad pública hasta 1994, era un problema que estaba en el artículo 115 constitucional referido a la función de los municipios, igual que los mercados y que el alcantarillado.

Bueno, es hasta el 94 cuando se incorpora en la Constitución un concepto integral de un sistema nacional de seguridad pública y que se ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años.

Pero ese es otro tema. Nadie pone en duda que es necesario fortalecer a las instituciones de seguridad pública, el punto de partida de que la seguridad pública no debería de ser, estar a cargo de las Fuerzas Armadas o de los militares es un punto de partida falso. Nadie ha dicho que deban de estarlo, ni nosotros; es más, nosotros expresamente hemos señalado que no deberíamos estar en esa tarea.

Pero ese no es el debate, no es el debate si los militares o no los militares deberían de hacer las funciones de seguridad pública; el debate de hoy es seguridad interior. Y eso es lo que nosotros quisiéramos que fuera el enfoque de la discusión.

La Ley de Seguridad Interior o la minuta de Ley de Seguridad Interior, como la han transitado en la Cámara de Diputados; contiene una serie de disposiciones generales, en una parte de definiciones por ejemplo, se hace alusión a lo que se entiende por uso legítimo de la fuerza, que por cierto lo que hace simplemente es referir que ese uso legítimo de la fuerza se entiende las reglas que operen para definir cuándo el Estado puede actuar bajo qué principios, etcétera. No es un asunto solamente del Estado mexicano.

Están los principios que los organismos internacionales han construido al respecto. Cuando hablamos de resistencia en esa ley, no estamos hablando de la definición de la resistencia, porque no es la materia de la ley; debe haber una ley que regule el uso de la fuerza y en la cual podrá desplegarse todo lo que quieran regular sobre el particular.

¿Cuáles son las reglas del uso de la fuerza?

Bueno, las que se establezcan en esa ley. Hoy por hoy las que tenemos son las que hemos dado a través de protocolos de carácter administrativo y que esperemos que algún día tengamos a nivel jurídico más sólido en una ley.

Ya hay otras leyes que se han experimentado a nivel estatal, a algunos les gusta a otros no. Bueno, revisémoslas y veamos cuál es la que corresponde.

Pero la Ley de Seguridad Interior no se enfoca a definir el uso legítimo de la fuerza, porque eso debe estar en otro marco y lo que hace es remitirlo.

Por eso, también la ley no se emite al detalle de cuándo y cómo debe hacerse el procedimiento de suspensión de garantías, lo remite a otra ley. Es más, expresamente dice, esta ley no pretende regular esas graves situaciones que contempla la Constitución y en las que tienen que afectarse las garantías.

Nosotros percibimos que la ley es clara en señalar o en distinguir entre los riesgos y las amenazas a la seguridad interior, como aquellas situaciones que sin estar afectando en este momento la seguridad interior, por la tendencia, por las características que rodean a la situación, si no se atienden, si no se toman medidas preventivas, escalarán a ser una amenaza vigente.

Y dentro de las amenazas también distinguen las amenazas, que si bien están afectando la seguridad interior, no han rebasado las capacidades de las instancias responsables de atenderlas y que, por lo tanto, se atienden con las acciones propias de cada una de estas instancias como corresponde, y simplemente se contienen y se reducen a través del ejercicio ordinario de la función del Estado, pero prende un foco rojo y permite que esa acción se lleve a cabo.

Y otras amenazas que, sin ser de las graves que requieren afectar los derechos de los habitantes del país, sí requieren un esfuerzo adicional de coordinación para que se atiendan con los diferentes enfoques que tienen.

Hoy en día, te decimos que tenemos diez años las Fuerzas Armadas participando en las labores de contención de la delincuencia organizada y los resultados no han sido lo suficientemente exitosos. Hay quienes cuestionan si han sido solamente exitosos, lo cierto es que no van a ser exitosos porque no es la parte reactiva la que va a resolver los problemas que generan el fenómeno.

Lo hemos platicado en muchos foros a los que me han hecho el favor de invitarme, el tema es que no ha sido integral la política del Estado para atender las causas y los efectos del problema.

Por más que estemos las Fuerzas Armadas, y si vienen los Cascos de Naciones Unidas, todo lo que ustedes quieran, no va a ser suficiente para resolver el problema porque el problema no es contener a la delincuencia organizada sino atender a las causas de desigualdad, de pobreza, de desempleo, etcétera.

Mientras no sea un enfoque integral, ese tema hoy de la seguridad pública a través de la (inaudible) del crimen organizado, no va a poderse resolver; pero lo mismo ocurre con cualquier otra amenaza a la seguridad, la misma desigualdad es un riesgo que va potenciando los conflictos sociales, el descontento, la incredulidad hacia las instituciones y demás.

Ese riesgo tiene que atenderse por las instancias responsables de reducir esas brechas que hay en la sociedad. No va a ser con el uso de la fuerza como las vamos a reducir, pero tendrá que haber una acción al respecto.

Lo que hace la Ley de Seguridad Interior es decir que cuando existan unas amenazas, las autoridades actúen en el ámbito de sus competencias.

Lo que sí dice la ley es que no hay una sola restricción a las garantías y a los derechos de los ciudadanos.

Cuando hay necesidad de afectar esos derechos, hay que irse a otra ley que es la que regula el artículo 29, haya o no haya, pero hay un artículo 29 constitucional, y en su momento habrá la ley, pero esto no es la materia de esta ley, eso lo dejamos a un lado.

Si la ley no afecta garantías individuales y la ley no le confiere a ninguna institución una facultad distinta de las que sus leyes ordinarias les confieren, ¿cuál es la necesidad de controles adicionales?

Si le estuviéramos dando una súper facultad a alguien, como a las Fuerzas Armadas o al Presidente, a lo mejor tendríamos que pensar en mayores controles de los que ordinariamente ya están previstos a través de la Auditoría de la Federación, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si es que hay violaciones a derechos humanos, a través del Sistema Anticorrupción, pues son los controles ordinarios que hay porque lo que la ley está tratando de hacer es coordinar atribuciones y responsabilidades que ordinariamente están en todas las leyes.

Esta falta de controles adicionales, habría que revisar si de veras son necesarios ante una ley que en nada vulnera los derechos de las personas y que en nada cambia las atribuciones que todas las autoridades tienen conforme a sus respectivas autoridades.

La declaratoria de seguridad es otra de las críticas que hay a la ley, porque al Presidente le estamos dando una facultad extraordinaria, omnipotente. Esa facultad, lo comentaba yo en la mañana con algunas personas, es una facultad que está en la Constitución, no está en la ley.

El artículo 89 no pone ninguna limitación, cortapisa ni lo somete a ningún aspecto para que disponga de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior de la nación, pasa asumir su responsabilidad de preservar la seguridad nacional conforme a las leyes que expida el Congreso.

¿De dónde resulta que el Presidente con esta ley va a tener más atribuciones que la propia Constitución ya le confiere?

Yo creo que es un enfoque distinto, creo que estamos exagerando, igual que estamos hablando del tema de la constitucionalidad.

Sabemos que la seguridad interior es una de las vertientes de la seguridad nacional, así está reconocido en la propia exposición de motivos de la reforma constitucional que incorporó al artículo 89, fracción VI, la atribución del Presidente de preservar la seguridad nacional.

Cuando se incorporó eso en esa disposición que viene desde la Constitución de Cádiz de las facultades del rey, en la exposición de motivos claramente dice que lo meten ahí porque esas dos cuestiones son parte de la seguridad nacional.

Entonces, ¿cómo es que ahora venimos a desconocer si la seguridad interior es o no parte de la seguridad nacional y, por lo tanto parte de la facultad que tiene el Congreso de expedir leyes en materia de seguridad nacional, como puede ser la de seguridad interior, la de defensa exterior, la genérica de seguridad nacional, etcétera?

Pero más aún, también la última fracción del 73, prevé que tienen facultades para expedir todas las demás leyes que se hagan necesarias para hacer efectivas las atribuciones que la propia Constitución les señala a los poderes de la unión, como es la que está en la fracción VI, del artículo 89.

Finalmente, tenemos una Suprema Corte que perfectamente podrá pronunciarse sobre ese aspecto, en su oportunidad.

Yo creo que todas las leyes que se expiden, todo mundo podría tildarlas de inconstitucional. Bueno, pues para eso tenemos los mecanismos que depuren esa situación y que vean si hay o no, pero no por eso vamos a paralizar el proceso legislativo, porque finalmente sí tenemos problemas de seguridad interior que tenemos que resolver y que debe haber un ente coordinador.

Se dice que la Ley de Seguridad Nacional es para perpetuar a los militares en las funciones de seguridad pública.

Primero, la ley no habla de las funciones de seguridad pública.

Segundo, la ley categóricamente dice que las Fuerzas Armadas podrán ser empleadas como el último recurso, después de que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han sido insuficientes para contener la amenaza que se está presentando.

¿De dónde resulta ahora la expresión de que estamos militarizando al país, y de dónde resulta la expresión de que la ley está previendo que se queden para siempre las Fuerzas Armadas? Máxime si las declaratorias de afectación o de protección a la seguridad interior, como maneja la minuta, tiene una vigencia que, si bien puede ser prorrogable, puede ser prorrogable con el costo que implica tener que explicar por qué en el tiempo ordinario de la vigencia de la declaratoria no fue posible resolver el problema de seguridad para que se emitió la declaratoria.

Y esa explicación tendrá que decir quiénes fueron los que fallaron, faltó dinero, faltó enfoque, faltó participación de alguna instancia que no se consideró en la coordinación original, etcétera. No sé, pero no es algo que sea un cheque en blanco para que se queden prorrogas, prorrogas y prorrogas, porque cada que se emite una prorroga tiene que expedirse un documento que se publica en el Diario Oficial de la Federación y que tiene que estar fundado y motivado.

Decía el maestro Pérez Sánchez, que habría que ponerle en la ley que tiene que cumplir con el principio de legalidad, oiga, pues si eso está en la Constitución. ¿Cuántas leyes han visto ustedes que agreguen ahí? Y tiene que cumplir con el principio de estar fundado y motivado.

Esto es por defecto, está en la Constitución, es obligación de todas las autoridades, las leyes no se abocan a poner expresamente ese principio, está en la ley, está en la Constitución.

Yo creo que incurrimos en el error de leer palabra por palabra, frase por frase y quererla leer y darle todo su alcance a partir de la lectura de esto.

También platicaba en la mañana, hay una cosa que se llama "interpretación hermenéutica de la ley" y que implica que las normas tienen que leerse en su conjunto, cómo están dentro del propio texto. No es lo mismo que estén en el capítulo de sanciones, que en el capítulo de disposiciones generales o en el de procedimiento, etcétera.

Y aquí nosotros vamos haciendo una reinserción, y sacamos una palabrita, la descontextualizamos y decimos: Ay, está diciendo que las Fuerzas Armadas van a aplicarse contra la protesta social.

Oigan, pero ¿qué no había un artículo acá que decía que había un principio de proporcionalidad y gradualidad en las acciones de seguridad interior?

Oigan, pero ¿qué no había otro artículo acá que decía que las Fuerzas Armadas solamente las iban a traer cuando no hubiera otras fuerzas que se hicieran cargo?

Entonces ¿cómo es que llegamos a la conclusión de que porque aquí dice que las Fuerzas Armadas también pueden participar, estamos hablando de que va a reprimir la protesta social?

Hay protesta social que si se sale del marco constitucional y si excede las capacidades de las instancias responsables de irlas conteniendo, con funciones políticas, con funciones económicas, con funciones incluso de la fuerza, a lo mejor en algún momento tendrá que llegar a ese punto que la propia ley está previendo de que puedan intervenir las Fuerzas

Armadas. Pero no es cierto que de suyo la ley esté diciendo que se puede utilizar a las Fuerzas Armadas en forma indiscriminada para todo lo que se nos ocurra.

Yo creo que también son interpretaciones muy sesgadas, muy individualizadas, a veces hasta a la palabra misma.

Yo también traía una revisión de las cosas que se han dicho por ahí, y quizás para darle un poco de orden me voy a permitir más o menos referirse.

Habla de que el proyecto incluye definiciones laxas que fomentan la arbitrariedad, como el de seguridad interior.

La verdad es que es un concepto muy difícil de concebir, de plantear, por eso me pareció a mí una cuestión bastante acertada por parte de la Cámara de Diputados, que transformar estos aspectos remitiéndolos a una ley que ya está aprobada, nos guste o no nos guste. Tiene defectos, le dicen que es de CISEN o que no es de CISEN, pero lo cierto es que tenemos una Ley de Seguridad Nacional, y lo que hace la minuta de diputados es remitir a los conceptos ya aprobados en el pasado y que no han desmoronado al país por nada, ni han metido a las Fuerzas Armadas a cosas diferentes, y entonces muchas de las definiciones nos remiten a una Ley de Seguridad Nacional donde se definen las amenazas a la seguridad nacional.

Unas de las cuales tienen origen externo, como podría ser una invasión de un tercer Estado, y otras tienen origen interno, como podría ser por ejemplo un desastre natural, como podría ser un conflicto social de los que refiere el artículo 29 constitucional, por ejemplo.

La afirmación a mí me parece que son subjetivas, tomando en cuenta que sólo se pronuncian por lo que señala el artículo 2 y 4, sin tomar en cuenta la amplia explicación que sobre el particular se hace en toda la exposición de motivos, en donde pormenorizadamente se explica respecto del origen y evolución del concepto de la seguridad interior, y el cual no es producto jurídico reciente sino que viene moldeándose en las diferentes leyes.

Se dice que regula inadecuadamente el uso de la fuerza, al remitir en el artículo 4º a protocolos deficientes que no pasaron por la revisión externa, como el que adoptaron las Fuerzas Armadas, en el que, por cierto, algunos de los presentes podrán constatar que fuimos a consultar a diferentes organizaciones, nacionales e internacionales para escuchar sus puntos de vista, sus orientaciones, sus estándares para construir ese protocolo que, insisto, no tiene la fuerza de ley, pero orienta a nuestro personal que le estamos exigiendo que vaya y haga, que participe en ayudar a mantener un poco el orden en el país, y ese personal requiere tener una orientación de cómo actuar cuando le están disparando, cuando no le están disparando, pero están a la vista las diferentes circunstancias que viven todos los días cuando están actuando en estas acciones.

Por lo tanto, yo creo que, insisto, el artículo 4º solamente era una definición remitiendo a la normatividad que, sobre el uso de la fuerza, establezcan las leyes o los protocolos, lo que haya, pero que determine cómo va a actuarse, cuáles son los principios que regulan el uso de la fuerza, cuáles son los tipos de resistencia.

Algunas de las iniciativas hablaban de tres resistencias, que los estándares internacionales contemplan como la resistencia no agresiva, la agresiva y la agresiva grave, y luego-luego hubo la crítica de que cómo la resistencia no agresiva la iban a atacar con las Fuerzas Armadas, bueno, es descontextualizar lo que decía la ley que es una mera definición de qué vamos a entender por el uso de la fuerza.

Que se le da a las Fuerzas Armadas facultades de policía al establecer que podrán realizar acciones preventivas a su arbitrio, en el artículo 6° que ya por aquí me hizo favor el maestro Alan de referir.

Yo sobre ese particular lo que diría es que esta afirmación tampoco es del todo cierta, ya que el artículo 6 señala que las autoridades federales, que incluye por supuesto a las Fuerzas Armadas, implementarán políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos, pero esto será en el ámbito de competencia de cada una de ellas; es decir, en ningún momento el artículo en comento señala que las Fuerzas Armadas tendrán facultades de policía, como se pretende establecer.

Yo, de la lectura del artículo 6 en ningún lado vi la palabra policía, ni vi la palabra que las Fuerzas Armadas hagan esas tareas; de hecho, sí vi la palabra que dice: cada quién en el ámbito de su competencia. De lo que se trata en ese artículo 6 es de prevenir, de prever que hay situaciones que de no atenderse con mayor cuidado se van a transformar en una amenaza presente.

Y que las autoridades que tienen competencia que pueden ser, insisto, las de salud, que pueden ser las de alimentación; que si se derrama un buque petrolero en el Golfo y acaba con las especies marinas del Golfo, seguramente habrá un desabasto y un problema de desempleo para los pescadores, y una serie de cuestiones que tienen que atenderse.

Esos son riesgos y hay autoridades que tienen que atender ese riesgo y podrían ser también las Fuerzas Armadas en alguna de las tareas que las propias leyes les encomiendan, como por ejemplo la de armas de fuego y explosivos, y para eso emprendemos campañas de despistolización las que muchas de ustedes nos han ayudado a emprender.

Esa acción es una acción legal que está dentro de nuestras atribuciones y que son acciones que ayudan a contener los riesgos que pueden después convertirse en amenazas.

Yo creo que el artículo 6 no tiene lo que dicen que tiene.

Luego, dicen que no genera controles excepcionales. Esto ya lo voy a obviar, porque yo ya les explicaba que por una parte, si expresamente dice que no se pueden afectar los derechos de las personas, que cuando haya necesidad de afectarlos tendrá que irse a la ley específica de suspensión de garantías, que las autoridades deben de actuar en el ámbito de sus respectivas competencias, no veo por qué tenga que haber controles adicionales a los que ya existen para controlar la función pública en general, en todos los ámbitos.

(Inaudible) ...las Fuerzas Armadas intervenir contra la protesta social cuando el arbitrio de dichas corporaciones puedan considerarse no pacíficas, conforme al artículo 7, que también ya se explicó aquí.

Lo que dice el artículo 7 que, por cierto, entiendo que fue algo que se incorporó por parte de la Cámara de Diputados precisamente para dejar en claro que no puede haber acción contra la protesta social; que se exija que la protesta social sea pacífica no lo dice tampoco la ley, está en la Constitución, no sé si en el artículo 9 de la ley, dice: ninguna manifestación armada tiene derecho a deliberar.

La Ley de Armas de Fuego dice: Los que tengan permiso no pueden ir armados a reuniones. Eso no lo está diciendo esta ley. Que sea pacífica, el que determine que es pacífica tendrá que asumir su responsabilidad, y si determinó el Presidente mandar al Ejército a una manifestación porque habían lanzado unos cohetones contra dos policías, tendrá que asumir su responsabilidad y rendir sus cuentas.

La ley no dice que no rinda cuentas o que no se le puedan fincar las responsabilidades conforme a las leyes y los procedimientos que en su caso correspondan. Pero lo que trató de hacer la Cámara de Diputados fue dejar en claro que la protesta social, en los términos constitucionales, no puede ser reprimida ni puede ser considerada como una amenaza a la seguridad interior.

Ahora, la criticamos porque decimos: es que no dice. Y puede haber alguien que se atreva a decir que una pacífica o que puedan mandar a un alborotador para que no sea pacífica. Bueno, esas ya son especulaciones que son extra legales y me parece que no van con el espíritu de esta norma que se está previendo.

Por el otro lado, para la atención de estas protestas, suponiendo que no fueran en los términos constitucionales, hay que aplicar toda la ley en su conjunto, los principios de gradualidad de los que habla el artículo creo que 1° o 2°, la gradualidad a la que se refiere la declaratoria de qué autoridades pueden intervenir; la restricción de que las fuerzas armadas no intervengan si no han sido superadas las demás autoridades. Me parece que hay suficiente protección.

Se fomenta la opacidad al determinar genéricamente que la información de seguridad interior será confidencial en el artículo 9.

El artículo 9 no dice que será confidencial. Es falso eso. Por eso me preocupa a mí que como los sofistas, pongamos verdades a medias, construyamos a partir de una gran mentira una serie de verdades, como la primera que les decía; las fuerzas armadas no van a hacer funciones de seguridad pública, nadie lo niega. Y a partir de ahí damos por sentado que la ley dice que las fuerzas armadas harán funciones de seguridad pública lo cual es falso.

Aquí también, esta también es igual de falsa. Lo que dice esta ley es que si ya en el artículo 1° se dijo que la materia de seguridad interior forma parte del género llamado seguridad nacional, la información que surja en esta materia de seguridad interior se regulará, igual que la de seguridad nacional, conforme a lo que dice la Ley de Transparencia, que fue aprobada también por el Congreso de la Unión.

No está dándole un trato distinto, no está diciendo que sea opaco. Está diciendo: trátenla como una función de seguridad nacional, que lo es en los términos que diga la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Eso es lo que dice ese artículo, no dice que no den información a nadie. La propia declaratoria se publica en el Diario Oficial de la Federación.

Sería absurdo que digamos que eso es confidencial. Lo que sí es confidencial, que también comentaba yo con alguien en la mañana, que la información de cómo se están concibiendo las operaciones para combatir una amenaza como por ejemplo la del crimen organizado, se le tenga que estar diciendo con cuánta gente vamos a ir a atender el problema, qué armas llevamos, cuándo vamos a actuar. Eso es lo que es confidencial y todo en los términos de la ley.

Los datos estadísticos, dice la propia Ley de Transparencia, que son públicos, los convenios son públicos. Será público lo que la Ley de Transparencia que ya está vigente diga que es público, y será confidencial lo que la Ley de Transparencia diga.

Pero eso no lo está cambiando la Ley de Seguridad Interior, por eso remite a una ley que regula el acceso a la información pública gubernamental.

Dicen también, por otra parte, que se extrae a la seguridad interior del régimen de legalidad porque dice que no se aplicará el procedimiento administrativo. Nuevamente, bueno, pues entonces también hay que quitárselo a la Ley de Seguridad Nacional, porque la Ley de Seguridad Nacional también lo dice.

Pero entonces también hay que reformar la Ley del Procedimiento Administrativo, porque en su artículo 1° tiene una enumeración de materias en las que no es aplicable la Ley del Procedimiento Administrativo, como la laboral, como la acción del ministerio público, como la fiscal.

Y la de seguridad nacional no estaba en esa lista, porque esa ley es anterior a la expedición de la Ley de Seguridad Nacional, pero tiene todo un sentido.

La Ley del Procedimiento Administrativo tiene una regulación para los actos administrativos ordinarios, para los actos administrativos de mero trámite y no pueden contenerse las normas de seguridad nacional e interior en esa ley, pero no es algo excepcional para esta ley.

Está en la propia Ley del Procedimiento Administrativo para las materias que en ese momento estaban reguladas, está en la Ley de Seguridad Nacional y si esta ley es de seguridad nacional, entonces tiene que compartir las mismas características de aquella, y eso es lo que está diciendo.

Pero en la crítica más bien se refiere a las causas por las cuales la Ley del Procedimiento Administrativo dejó fuera algunas materias. ¿Y por qué la Ley de Seguridad Nacional, que ya está aprobada, que ya es vigente, también quedó fuera de la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo?

Veamos las causas y después de eso digamos si hay justificación o no para que esta ley, que es de materia de seguridad nacional, también contenga la misma disposición.

Y eso no implico que lo ponga en un ámbito extra legal; para eso es esta ley. Si está en esta ley, es legal, me parece. Pero, bueno.

Permite la indeterminación geográfica de las medidas excepcionales de seguridad interior al disponer que no necesariamente tendrán que acotarse a un área geográfica específica en el artículo 14.

No es cierto tampoco que el artículo 14 diga que no tendrá que acotarse a un área geográfica. Lo que dice el artículo 14 es que en la declaratoria se definirá la entidad, el área geográfica particular en la que se llevarán a cabo esas acciones, pero se reconoce que hay fenómenos que no se presentan concentrados en un espacio territorial determinado.

Si por ejemplo queremos hablar de un fenómeno de una organización criminal determinada, vamos a reconocer que hay incluso ya publicados unos mosaicos del territorio nacional y a veces hasta internacional, que define dónde están las áreas de operación de cada una de esas organizaciones.

Entonces atender la amenaza de esa determinada organización criminal implicará llevar acciones coordinadas no solamente en un municipio o en un estado, sino en todos en los que ejercen influencia y a los que corren en "operación cucaracha", de los que reciben financiamiento para operaciones en uno u otro lugar; algunos expertos en secuestro saben perfectamente que en un lado cometen el delito y en otro lado guardan a la víctima y en otro cobran el rescate.

Eso requiere, no por atender un tema en particular, sino por poner un ejemplo de que la atención a algunas amenazas pudiera requerir actuar simultáneamente en más de un municipio o en más de un estado, y a eso es a lo que se refiere el artículo 14 constitucional. Nunca dice que la declaratoria podrá decir: en los lugares que estiman o donde quieran. Eso es falso, no es cierto.

Luego decimos que no impone límites temporales precisos a las acciones de seguridad interior.

Bueno, las amenazas a la seguridad interior, creo yo, no pueden decretarse, no puede determinarse que se acaban por decreto y tampoco pueden predecirse tan exactamente que nosotros digamos: y concluyen en nueve meses, en dos meses. ¿Y si sigue qué vamos a hacer? ¿Se acabó? ¿La acción del Estado ya no puede seguir?

Por eso es que va de período en período. Por eso al principio yo decía: cada vez que haya que hacer una prórroga de esa declaratoria o una modificación a esa declaración tiene que darse la correspondiente justificación.

Ahora, en ninguna parte de la ley se prevé que esas declaratorias no puedan estar sujetas al control constitucional de cualquier otro acto de autoridad, y ya habrá alguien que revise si está debidamente fundada y motivada, si algunas de las acciones que se están ordenando puede suspenderse o no suspenderse, etcétera.

Pero yo creo que en ninguna parte de la ley se está diciendo que no tenga temporalidad. Lo único que no se está poniendo es límites, porque esos límites los tiene que poner la amenaza. Ya tenemos 10 años en una amenaza que estamos combatiendo, y que yo insisto, no lo hemos logrado, porque no hemos articulado todo.

Porque si yo voy a combatir las drogas, tengo que mandar a los inspectores de los giros negros para que vayan y vean que no estén vendiendo drogas en los baños; tengo que mandar al de vía pública, para ver que en la vía pública no se estén utilizando los estacionamientos.

Tengo que lograr muchas acciones, tengo que mandar a salud para que haya campaña, etcétera. No quiero extenderme más.

Dice: Permite profundizar la militarización de la seguridad pública, incluso sin que emita una declaratoria de seguridad interior. Porque el artículo 16 dicen que se prevé esa posibilidad.

Yo insistiría que la ley no dice de seguridad pública nada. Dice que deberán de hacer las acciones que le encomiende el Ejecutivo.

Regula la forma en que el Ejecutivo puede cumplir con su responsabilidad de preservar la seguridad interior, en coordinación con todas las demás instancias federales que incluya a las fuerzas armadas como último recurso y siempre con sus atribuciones y competencias, por lo que la aplicación de esta ley no genera un régimen militar, en el concepto de que esto sería como un precedente excepcional que, de presentarse las hipótesis en las que las amenazas representan un grave peligro o conflicto, tendrían que suspenderse garantías.

Por otra parte, a mí me parece que, por lo que dicen de la autoridad civil, yo estoy convencido, el General Secretario en su último discurso del 20 de noviembre ratificó la subordinación total de las fuerzas armadas a la autoridad civil, pero de eso no se lleva a la interpretación, o por lo menos eso considero yo, no deberíamos de llevar a la interpretación de que la subordinación a la autoridad civil quiere decir que si se presenta el jefe de departamento al campo de las acciones, el comandante que está ahí tiene que irle a pedir las autorizaciones a ese Jefe de Departamento. Hay una autoridad civil que mandó a esas tropas y hay una autoridad civil que sirve para el control de esas tropas; pero esa autoridad debe estar previamente determinada; y empieza por el Presidente, como lo dijo la jurisprudencia de la Corte en el año 96 y luego en el 2000.

Y no solamente el Presidente, el Secretario de Gobernación que, por cierto, esta ley le confiere el liderazgo máximo de la coordinación y de la aplicación de la propia ley.

Ahora, si lo que queremos es que si llega el policía auxiliar y bancario al lugar donde están las tropas, pueda este disponer que vayan, que regresen, que bueno; entonces, ya estamos en otra función.

Luego, dice que adscribe la coordinación de las acciones de seguridad interior a la Secretaría de Gobernación en el artículo 19, aunque se ha demostrado que ello abre la puerta para politizar y aunque en esa sección de gobernadores fracasó, Gobernación fracasó, en la conducción de la seguridad.

¿Quién querían que dijera? Está en la ley, es el responsable de la política interior del país, es el responsable de conducir la política y la comunicación con los otros Poderes de la Unión; es el responsable de la comunicación entre el Gobierno Federal y las entidades federativas.

No sé, creemos otra Secretaría o no sé quién pensaríamos que debiera ser el que estuviera al frente de la coordinación de todas estas acciones. Que lo politice o no lo politice, que responda o no en la medida en que utilice esas funciones para cosas distintas a las que le corresponden.

Se asigna el mando de la seguridad interior a las Fuerzas Armadas, siempre que estas intervengan en el artículo 20, fracción. Nuevamente, yo lo que diría sobre este particular, es que alguien tiene que llevar la línea de coordinación en el plano de las operaciones; y precisamente lo que hace este artículo es decir bueno, el Comandante designado aquí criticaba que porque es monopolio de las Fuerzas Armadas.

Bueno, es que el facultado para designar al comandante es el Presidente, no sé si el Gobernador pueda proponer quién sea el comandante militar de esa fuerza, pero la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y su equivalente de la Armada; establecen que las misiones de las Fuerzas Armadas las pueden cumplir por sí o en coordinación con otras autoridades, y que en estas hipótesis el Presidente designará al mando militar a propuesta del Secretario.

Esa es ley vigente, está en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, no lo está inventando esta nueva ley. Y no es cierto que le dé una autoridad sobre nadie, cada quien tiene sus propias responsabilidades y atribuciones.

Omite disponer que las fuerzas estatales y municipales en las regiones donde se apliquen las declaratorias, tengan que fortalecer a sus policías civiles, en tiempo y conforme a las metas concretas que se especifiquen en el 23.

Ya por aquí nos hicieron favor nuestro representante de Pro Juárez, de señalar que hay un artículo en una fracción, no sé si sea por el número de artículos en los que se ponga, como pueda valer más o menos, pero hay una fracción que categóricamente le impone la obligación a esas autoridades estatales o municipales, que pidan auxilio y que sean motivo de una intervención de la Federación, que deben de mantener la inversión, tiene que mantener el esfuerzo y tienen que asumir toda una serie de acciones para recuperar las capacidades que dieron lugar a que la Federación tuviera que entrar ahí.

Por eso me sorprende que digamos que este régimen va a perpetuar la situación de comodidad en la que se encuentran. Ahora no hay nada que nos regule, llevamos diez años, estamos participando y nadie puede decir si estamos más o menos.

La ley lo que va a hacer es precisamente, establecer obligaciones para estas autoridades para recuperar sus capacidades, eso es lo que dice el artículo 14 y 16; la declaratoria del Presidente a partir de lo que hayan ofrecido los propios estados y municipios, establecerá cuáles son las acciones que le requiere a los estados y municipios para que reconstituyan las capacidades que dieron origen a la afectación, a la amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad interior.

Entonces, creo que el programa no lo va a poner la ley, el programa lo tendrá que poner la declaratoria; porque esa declaratoria sí tiene un capítulo que dice "obligaciones de los estados y de los municipios que están afectados por el problema de la seguridad interior".

Y entonces ahí habrá que poner todas esas acciones, los tiempos, los indicadores a los que se refieren.

También hay otra crítica que dice que no obliga en el artículo 28, que las Fuerzas Armadas ajusten su organización y adiestramiento para intervenir en seguridad interior. El problema es precisamente que decimos que las autoridades o las Fuerzas Armadas deben de intervenir porque estamos en una situación de seguridad interior; porque las capacidades de las autoridades a las que les competía originalmente atender el asunto, fueron rebasadas, fueron superadas o no tienen la suficiencia para atender el problema.

Y queremos que las Fuerzas Armadas se disfracen, se amarren las manos para ponerse en esa condición para que vayan a atender el problema. Si el asunto ya se declaró que es de seguridad interior y que se requiere a las Fuerzas Armadas; pues se requiere a las Fuerzas Armadas, no a un remedo de las Fuerzas Armadas, a las que les vamos a quitar sus cuestiones.

Si la seguridad interior es una función de las Fuerzas Armadas también, en ese espectro amplio, en esa parte última; seguramente tendremos que tener capacitación, adiestramiento y tropas especializadas para atender los temas de seguridad interior; pero como Fuerzas Armadas. A eso nos referimos cuando no nos pidan que nos desnaturalicemos, no nos pidan que cambiemos nuestro adiestramiento y nuestros vehículos; si son blindados, son blindados, con eso es con lo que tendremos que salir.

El punto aquí es ese, que si el problema es de seguridad interior y la función de las Fuerzas Armadas es de seguridad interior; tendrán que atender el problema de seguridad interior con la organización, equipamiento y adiestramiento que para seguridad interior, tienen las propias Fuerzas Armadas. Si no, entonces quiere decir que tenemos que seguir con las policías.

Luego, dice que fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil, abriendo las puertas a que crezcan y aumenten las instancias diseñadas para ello en el artículo 30.

La verdad es que muchos de los que dicen esto también son los primeros que cuando hay un evento trascendente, dicen "y a poco la inteligencia militar no identificó el problema"; ¿de qué inteligencia militar hablamos?

La ley no está creando mayor inteligencia, está diciendo que las instancias que tienen funciones de inteligencia, la lleven a cabo y la coordinen para poder proporcionarla para la toma de las decisiones en las acciones de seguridad interior. No está diciendo que las Fuerzas Armadas puedan hacer más.

Alguien por ahí, por cierto, en alguna de las iniciativas le había puesto que se podía recolectar información por cualquier medio. Con toda la razón, muchos se preocuparon y dijeron "oye, ¿cómo que por cualquier medio?". La minuta recogió esa preocupación, y le puso "por cualquier medio lícito"; nos parece de Perogrullo porque si está en la ley, se entiende que es por cualquier medio lícito. Pero bueno, no sobraba, no dañaba y ya la minuta lo recogió y ahora dice que por cualquier medio lícito.

Y esos medios lícitos, quiere decir que se tienen que sujetar a las atribuciones y a los procedimientos que la ley prevea para cada uno. Por ejemplo, las intervenciones telefónicas no podrán practicarse sin autoridad de un juez federal; y ese juez federal tendrá que seguir el procedimiento y revisar que se cumplan los requisitos que el propio Código de Procedimientos establece.

Por cierto, alguien por aquí mencionaba hace un momento que le faculta a las Fuerzas Armadas para actuar en temas de delitos y que no establece límites y demás.

Quiero decirles que esa es otra gran mentira. Lo que dice la ley es que cuando en las acciones de las Fuerzas Armadas, porque cumplidos todos los requisitos fueron llamadas a

participar y están actuando, y en esa actuación descubren la comisión de un delito; deben realizar determinadas actividades.

¿Cuáles? Las mismas que dice el artículo 222, párrafo III del Código Nacional de Procedimientos Penales. No le está dando una nueva, no está dando más, al contrario; precisamente y a petición de nosotros se suprimió, se restringió la participación de nosotros como primer respondiente.

El artículo 222, párrafo III del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice lo mismo que dice esta ley: cuando las Fuerzas Armadas, ahí dice que cuando las autoridades coadyuvantes descubran un delito, se van a limitar a tres cosas: preservar en el conjunto el lugar de los hechos; dos, ponerlo en conocimiento del Ministerio Público; tres, procurar que se le brinde la atención médica a los heridos, si es que los hubiere.

Eso es lo único que tiene que hacer y eso es lo único que dice esta ley y es lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si alguien cree que le están dando otras atribuciones distintas, como de investigación, como de seguir la cadena de custodia, no es cierto. Es falso.

Es más, hay unos acuerdos emitidos por el Procurador recientemente, en el que instruye a sus ministerios públicos y a sus policías para cuál debe ser la participación de las autoridades coadyuvantes en estos casos. Y eso es lo que dice la ley.

Entonces, la invitación es a que leamos bien, con cuidado ese artículo, porque no dice lo que dicen que dice.

Luego dicen que no establece controles robustos, obligando únicamente al Secretario de Gobernación, esto ya lo voy a dar por visto, porque ya lo comentamos, que si no hay nada adicional, nada excepcional no le faculta para hacer nada más allá de lo que las leyes hoy vigentes les dan a las autoridades. No tendría por qué haber mayores controles al respecto; pero de todas formas está previsto que se reporten a todo mundo.

El despliegue de los visitadores, es una responsabilidad de la Comisión Nacional, yo no creo que la Comisión se sintiera a gusto de que le estuvieran imponiendo obligaciones de poner en estos casos, un ejército de visitadores para ver que no se violen derechos humanos.

De hecho, cuando se ha invitado a la Comisión Nacional para que participe en alguna operación, se ha abstenido de designar representante porque dice "yo no me voy a contaminar. Si voy me convierto en parte del operativo y entonces me anulo como un eficaz verificador del respeto de los derechos humanos". Bueno, eso es lo que yo he escuchado por parte de la Comisión Nacional y por tanto, no podrían ponerle aquí una función de que vaya de acompañamiento, porque entonces lo van a inhibir en su función de ombudsman.

Ahora, si quieren creo que también podría ser el momento para que lo incorporen, si consideran que es viable que la Comisión participe de los operativos, que se incorpore. Por nosotros no habría ningún problema, al contrario, nos daría mayor tranquilidad.

Y existe violación al principio de necesidad. Yo diferiría un tanto de lo expresado por el maestro Alan García, porque la propia ley establece que en el procedimiento la autoridad que solicite el apoyo, si es que es por vía de una petición de una entidad federativa, tiene que explicar claramente cuál es la amenaza, cuáles fueron los antecedentes que la llevaron,

cuál es el ámbito de la insuficiencia gubernamental por la cual la amenaza creció y no puede ser atendida por ellos; y cuáles acciones son las que va a hacer para recuperarlo.

Y la declaratoria también tiene que explicar cómo es que llega a esa situación.

El Consejo de Seguridad Nacional es un órgano de consulta. El procedimiento que prevé la norma es que, precisamente las peticiones de intervención federal pasen por el análisis del Consejo de Seguridad Nacional, ¿esto para qué?

Primero, para copiar la información que los órganos federales de seguridad nacional, puedan tener sobre ese mismo fenómeno que se está anunciando. Para que puedan analizar si las causas que expresa la entidad federativa existen, son reales, son de la magnitud y de veras no tienen las capacidades para atenderlas por sí mismo.

Y con todo ese análisis, con toda esa información acopiada de la Federación, someter a consideración del Presidente, que es el de la facultad constitucional, decida si emite o no una declaratoria. Y esa declaratoria tendrá todo el bagaje, todo el soporte de la necesidad en los términos, primero del dictamen del propio Consejo; y de los considerandos que seguramente la declaratoria deberá tener en su conjunto.

Me parece que hay bastante claridad en ese punto.

Perdón por el tiempo, perdón por la vehemencia, es un tema apasionante. Las Fuerzas Armadas no estamos pidiendo una ley para las Fuerzas Armadas solamente.

Esta ley creo que regula genéricamente, no para la amenaza de hoy sino para la de hoy y las que siguen, la seguridad interior, y me parece que lo ha hecho bastante bien la Cámara de Diputados. Me parece que sí están recogidas las principales posturas de las cinco o seis iniciativas que se presentaron sobre el particular y, bueno, como se ha pedido a la Cámara de Senadores, que determinen lo que en conciencia, ni con sus facultades les corresponde y, si es el caso, le brinden a las Fuerzas Armadas la certeza que le va a dar que haya una declaratoria que ordene que vayan, que diga cuándo, en qué lugares y qué acciones concretas son las que se van a hacer.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias, general Ramos Flores.*

Damos paso a la intervención de los senadores.

Debo señalar, con todo respeto a todos los que estamos aquí, que el formato es de participaciones. No estamos deliberando, eso lo haremos en comisiones unidas.

Pido, pues, que se entienda que son participaciones en este momento.

Ha pedido el senador Roberto Gil Zuarth, adelante.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: *Gracias, Presidenta.*

Bienvenidos todos. Yo celebro la oportunidad de dialogar; celebro que tengamos la posibilidad de encontrarnos.

Siempre y en todos los casos, el diálogo ayuda sobre todo a acercar posiciones, si hay intención de acercar posiciones, y yo creo que la puede haber si hacemos un ejercicio de construcción, más allá de posiciones predeterminadas o de ciertas, digamos, determinaciones ya puestas en el juicio que cada uno de nosotros pueda tener sobre la materia.

Hay un primer problema que aparece en estas discusiones, es que no se ha razonado, no se logra clarificar cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.

Parece que hay una preconcepción, y he ahí el problema de tránsito en esta discusión.

Parece que la lectura de nuestra Constitución es que cuando no hay un conflicto bélico con una potencia extranjera o con una amenaza exterior, las Fuerzas Armadas deben estar en los cuarteles, y que no tienen ninguna función fuera de los cuarteles. Eso en nuestro Sistema Jurídico es absolutamente falso.

Las Fuerzas Armadas tienen funciones previstas en leyes, son responsabilidades legalmente establecidas desde mucho tiempo atrás, desarrollada en muchas leyes, no solamente en las leyes orgánicas de la Armada o del Ejército, en muchas otras leyes.

Por cierto, hago un pequeño paréntesis. Esta discusión se dio en el proceso constituyente en 1917, cuando se discutió el artículo 129 de la Constitución, y el voto particular de Paulino Machorro es verdaderamente ilustrativo, muy bello, por cierto; porque, a propósito del debate sobre si había comandancias fijas o no, Paulino Machorro decía: "Es que las Fuerzas Armadas tienen funciones distintas en tiempos de paz a los conflictos bélicos". Y desde entonces, en distintas leyes les hemos dado atribuciones.

Hay por lo menos dos leyes, dos, tres leyes que regulan la función de seguridad interior y no es una función híbrida, es una función específica, reconocida en la Constitución, que está subsumida en el género de la función de la seguridad nacional, pero que tiene una entidad propia en la Ley Orgánica del Ejército de la Fuerza Aérea, el artículo primero establece con toda claridad que se regulan las funciones de seguridad interior del Ejército.

En la Ley Orgánica de la Armada de México, también se establece el artículo primero, que se regulan las funciones de seguridad interior de la Armada de México.

Y permítanme recurrir a un párrafo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ilustra las funciones en tiempos de paz de las Fuerzas Armadas.

En nuestro sistema jurídico, las funciones del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en tiempos de paz, van desde el apoyo a la sociedad civil en casos de desastres naturales, la reforestación de áreas verdes, las sanitarias y de salud pública en general, la custodia y distribución, captación y resguardo de paquetes electorales, las de vigilancia y custodia de bienes nacionales, como son las instalaciones de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, de los Almacenes Nacionales de Depósitos, de Ferrocarriles Nacionales, etcétera. El auxilio a las autoridades encargadas de procuración de justicia y el apoyo para combatir el narcotráfico, entre otras.

También constituye, dice la Corte, un hecho notorio que el gobierno aplica un renglón importante de sus recursos a contar con un Ejército, Fuerza Aérea y Marina, debidamente

equipados, armados y entrenados con el doble fin de estar preparados para un caso de guerra, y en tiempos de paz contribuir a la seguridad interior, lo que es congruente con el texto constitucional.

Esa inversión no podría justificarse si la mayor parte del tiempo los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada permanecieran inactivos en el interior de sus instalaciones.

No es doctrina, es jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso explica por qué, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Armada de México le dé funciones para efectuar operaciones de rescate y salvamento en el mar.

Eso explica por qué la Armada de México es la policía marítima, organiza el servicio de vigilancia en los puertos, porque las Fuerzas Armadas tienen funciones permanentes en nuestro sistema jurídico, distintas a la defensa exterior o a los casos de conflicto bélico.

Es ley, esto no responde a una determinación de un ejecutivo u otro, es el cumplimiento básico de normas vigentes que además informan la construcción del Programa Nacional de Seguridad Nacional, que es público, y que anualmente informan también la construcción de la Agenda Nacional de Riesgos, que es el marco de referencia del trabajo de nuestras Fuerzas Armadas.

La lectura absolutista del 129, es una mala aproximación a este debate.

Por eso también el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que es la base de este modelo, establece cuándo las Fuerzas Armadas pueden participar en tareas distintas al conflicto bélico, y entre ellas dice: terrorismo, sabotaje, navegación marítima, seguridad de aviación, custodia a personal diplomático, etcétera. Esas son las amenazas a la seguridad interior.

Ciertamente en la Ley de Seguridad Nacional, se establece la facultad de las Fuerzas Armadas de participar en operativos militares.

¿Cuáles son esos? Dirán ustedes.

Desde 1940, las Fuerzas Armadas realizan la tarea de erradicación de cultivos. Una obligación a la que estamos comprometidos por tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

Esa es una operación militar que tiene que ver con responsabilidades de carácter internacional.

¿Quién detecta, identifica y detiene a un buque en los mares territoriales de nuestro país? La Armada de México, porque la ley establece que es nuestra policía marítima.

¿Quién detecta a una aeronave en el espacio aéreo mexicano, que tenga un cargamento de marihuana o de cocaína que va a los Estados Unidos o que aterriza en una pista clandestina en Sinaloa? Las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea.

Tenemos que partir del supuesto, de entrada, que nuestras Fuerzas Armadas tienen responsabilidades legales hoy vigentes, y se dice que en el ámbito internacional que esto es inconvencional. Y yo por lo menos la lectura, y hago la precisión, la lectura del caso Montero Aranguren contra Venezuela del 2006, lo que dice claramente la Corte Interamericana es que la participación de Fuerzas Armadas en disturbios internos, violencia interna, situaciones

excepcionales y criminalidad común, deben limitarse al máximo, deben ser verdaderamente excepcionales.

Este precedente está citado en una opinión del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos de 2012, donde dice exactamente lo mismo, y permítanme leerlo:

"No obstante, la legitimidad con la que los Estados pueden recurrir las autoridades militares para ejercer sus funciones, esta medida debe ser siempre de carácter excepcional, aplicándose únicamente cuando las fuerzas policiales o de seguridad no cuenten con la capacidad necesaria para enfrentar la situación, hasta en tanto las fuerzas policiales y de seguridad fortalecen sus capacidades y subsidiaria, en el sentido de que las Fuerzas Armadas deben actuar en apoyo y bajo las ordenes de la autoridad civil electa".

Excepcionalidad, temporalidad, subsidiariedad, los tres principios que se recogen en este proyecto como la estructura base de la intervención de la Federación y de las Fuerzas Armadas.

La propia Corte nos dijo hace tiempo, y no le hemos hecho caso y aquí están las consecuencias y por eso esta discusión, que había que regular el artículo 89, fracción VI. Había que regularla, para que cuando el Presiente dispusiera de la totalidad de las Fuerzas Armadas para tarea de seguridad interior, debía fundar y motivar su decisión.

¿Por qué no ha sucedido así? Porque no hay un procedimiento que vincule al Presidente a fundar y motivar su decisión.

¿Por qué? Porque no hay ley que regule la fracción VI, del artículo 89.

Y hoy ha sido discrecional el despliegue de Fuerzas Armadas, porque no hay supuestos procedimientos, temporalidades, mecanismos de control previstos en norma alguna.

La fracción VI, del artículo 89, es una facultad desnuda, no reglada, y lo que trata de hacer la Ley de Seguridad Interior es ponerle diques procedimentales al ejercicio de la facultad que tiene el Presidente. Que, por cierto, es facultad exclusiva, no la puede ni la debe compartir con nadie; no la puede compartir con el Senado ni con el Congreso, sería inconstitucional; no la puede compartir con ninguna instancia distinta a aquella que tiene en la que está depositada esa función. Es la función primaria de la función ejecutiva.

Por eso cuando se dice que las Fuerzas Armadas deban estar bajo el mando distinto de una autoridad civil, es decir, distinta al del Presidente, no solamente controvierte la Constitución sino desconoce el sentido de esta función ejecutiva.

Uno de los principios vertebrales de la disciplina militar es la unidad de mando, y uno de los elementos constitutivos de la lealtad de las Fuerzas Armadas es que sólo el Presidente, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pueda ejercer ese mando, y ese mando no pueda ser indisponible por el Presidente de la República ni por otra persona distinta al Presidente de la República.

La historia de la Revolución Mexicana nos da suficientes elementos. Los cuartelazos nos dan suficientes elementos para razonar por qué es importante la unidad, verticalidad del mando de las Fuerzas Armadas.

Hay otra confusión sobre los controles

Esta ley dice en qué supuestos la Federación puede intervenir y en qué supuestos la Federación, el Presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas, son los supuestos del 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Ninguno es de seguridad pública, ninguno; es más, ninguno es de la órbita local, ninguno de los delitos descritos en el 5 es competencia local, ninguno: terrorismo, sabotaje, actos de interferencia extranjera, delincuencia organizada, operaciones militares o navales, seguridad de la aviación, ninguno es competencia local, son todas competencias federales y son un listado cerrado, no enunciativo, cerrado.

Sólo en estos casos el Presidente puede emitir una declaratoria de afectación, sólo en estos casos.

¿Y qué pasa cuando el Presidente, vamos a ponernos en ese escenario, declara una afectación fuera de este supuesto?

Como es un acto jurídico que debe estar fundado y motivado, es controvertible, y es controvertible por la entidad federativa intervenida, es controvertible por el Congreso, es controvertible por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es controvertible por aquellos que tengan legitimación activa para ir a la Corte a controvertir el exceso del ejercicio de una facultad.

¿Qué más control constitucional que poder revisar las causas, razones y alcances de la declaratoria de afectación a la seguridad interior? Es decir, de la decisión del Presidente de disponer de las Fuerzas Armadas.

¿Qué más control constitucional que el arbitraje de la Suprema Corte?

Y no solamente eso. La ley establece el contenido mínimo indisponible de la declaratoria de afectación que empieza con algo que no hemos tenido en diez años de intervención federal: diagnóstico.

¿Por qué vamos a intervenir en una determinada entidad federativa o determinada región?

La solicitud incluso debe razonar los índices delictivos, lo dice. Y no solamente se debe razonar el diagnóstico, sino precisar las acciones que se van a cometer en la temporalidad fijada por la declaratoria.

Vamos a conocer por fin el plan de ruta de la intervención de la federación en una determinada realidad local, una cosa que no supimos desafortunadamente en las tres intervenciones en Michoacán, de las intervenciones en Baja California, de las intervenciones en Tamaulipas, de las intervenciones en Chihuahua, de las intervenciones en Durango o en Sinaloa.

En la declaratoria de afectación, no solamente es el acto jurídico habilitante, es la hoja de ruta de la intervención de la Federación y es precisamente el punto mínimo que permitirá la evaluación posterior sobre si se cumplieron los objetivos, si las acciones fueron eficaces y si se cumplió con la motivación que está detrás de la Declaratoria de Afectación.

Eso es rendición de cuentas y eso es transparencia.

Por supuesto que bajo esta lógica no cabe hablar de salida gradual Cómo metemos a los cuarteles, a los astilleros a la Armada de México que cuida el mar territorial o cómo sacamos

a la Fuerza Aérea de cuidar nuestro espacio aéreo o cómo sacamos a nuestras Fuerzas Armadas de la protección de las instalaciones de PEMEX.

No hay posibilidad de una salida gradual. Ah, lo que sí hay que hacer, porque tiene funciones permanentes, es que las Fuerzas Armadas no sean los primeros respondientes, que no estén haciendo las tareas de seguridad pública, que no estén cuidando las escuelas, que no estén cuidando los cruces, que no estén cuidando, que no estén cuidando los bares, que no estén cuidando las calles, que no estén disfrazados de policías municipales en algunas ciudades de nuestro país.

Y esto lo impide por la sencilla razón de que ya no se vale, porque no está eso en ninguno de los supuestos de procedencia de la Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior.

El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional es un listado cerrado y no caben aperturas interpretativas.

Concluyo diciendo que por supuesto, el objetivo es el fortalecimiento de instituciones civiles; por supuesto que el objetivo es el fortalecimiento de la procuración de justicia en el nivel nacional o local y por supuesto, esta ley no sirve para eso.

Esta ley no va a generar los ministerios públicos o policías. Esa es una responsabilidad que corre en paralelo. ¿Qué provocará esta ley? Que ya no se pueda utilizar discrecionalmente Fuerzas Armadas para todo tipo de realidad criminal en nuestro país, porque mientras siga siendo una facultad discrecional van a ser nuestras Fuerzas Armadas enviadas de un lado a otro.
La intención de la discusión de establecer la Ley de Seguridad Interior es racionalizar el ejercicio de esa facultad, porque agravas los supuestos de activación de esa facultad.

Los militares, las Fuerzas Armadas deben retroceder en la tarea que están hoy realizando, que le corresponde a las autoridades civiles, regresarse a sus funciones constitucionales y legales, las que ya he descrito en la lectura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero deben dejar de ser policías.

Y lo vamos a lograr en la medida en la que esta ley manda un mensaje: ya no tienes Fuerzas Armadas para siempre ni por cualquier motivo.

Si quieres Fuerzas Armadas, lo primero que tienes que hacer es razonar que tu realidad cabe en los supuestos de procedencia, fijar compromisos, establecer temporalidades, acciones en concreto. Muchas entidades federativas, las 28 entidades federativas que hoy tienen despliegue de Fuerzas Armadas, muchas de ellas no caben en esto, no cabrán en esta ley, bajo este nuevo supuesto.

Muy pocas tendrán la posibilidad de tener una cobertura desde la aplicación de esta ley, muy pocas. Esa es la forma de poner orden al desorden y el desorden en un estado democrático de derecho se resuelve con leyes, con normas, con reglas que fijan cuándo, cómo, por qué y para qué.

Y sobre el diálogo social, llevamos 10 años en esta discusión, 10 años, esta discusión no empezó la semana pasada en la Cámara de Diputados. Este Senado lleva cuatro años discutiendo seguridad interior.

Hemos realizado no menos de 10 foros al respecto, no me dejarán mentir en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es un momento en el que tenemos que tomar

decisiones, con toda apertura y escuchando las posiciones, pero también razonando no solamente los problemas que enfrentamos, sino la historia y configuración de nuestro sistema institucional.

Todas las Fuerzas Armadas en el mundo realizan funciones de auxilio a las autoridades civiles. La República Checa es uno de los casos. Estados Unidos, Francia, todos los ejércitos en el mundo, bajo la nueva concepción de la seguridad nacional, realizan actividades de apoyo y auxilio a las autoridades civiles; las nuestras también.

Y no hay dos ejércitos en nuestro país, no hay el ejército solidario, patriota, responsable, que está en las tareas humanitarias, en los sismos del 19 de septiembre y por el otro lado un ejército represor, violador de derechos humanos, que está lastimando a nuestra sociedad.

No hay dos ejércitos en nuestro país, sólo hay uno y ese Ejército y esas Fuerzas Armadas requieren certeza a su actuación. Requieren una conducción legal que determine cuándo, cómo, por qué y para qué van a estar auxiliando a las autoridades civiles.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Gracias.*

Tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ; *Bueno, voy a retomar la proposición de ustedes respeto a que no entremos a debatir.*

Estoy realmente, no puedo evitar el decirlo, totalmente sorprendida porque se ha encontrado quién redactó esta ley, la conoces perfectamente bien, la tienes verdaderamente fundada, motivada y argumentada. No, yo también la leí, pero francamente sí me quedan claras varias cosas con esta reunión, sobre todo las dos últimas intervenciones, con todo el respeto que le tengo aquí al General Ramos, que sabe que se lo tengo, y que no es la primera vez que polemizamos.

Está claro que sí es necesario atender que esta es una ley solicitada por las Fuerzas Armadas, no me queda la menor duda y voy a tener que rectificar esa opinión, lo cual es muy meritorio, tampoco lo estoy criticando, simplemente lo estoy enfatizando a partir de que lo estoy constatando.

Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos enfrente, Presidente, presidenta y presidentes que van a tener que conducir la discusión hacia el dictamen de esta minuta que viene de Cámara de Diputados? Que vamos a tener que discutir artículo por artículo y le tomo la palabra al General, desde una hermenéutica integral de que es lo que está detrás.

Porque resulta que no entiendo por qué la Cámara de Diputados, en el marco de esta discusión, para gestar esta minuta, archivan prácticamente en el archivo muerto las reformas en materia de mando mixto.

Ah, pero este tema no es de seguridad pública. Nos tienen congelada la minuta de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional para Estado de Excepción, ah pero tampoco es materia de esta ley.

Ya no entendí. Entonces, pero se dice que aquí no hay híbridos. Entonces, yo creo que necesitamos puntualizar, yo seguí la ruta de cada una de las intervenciones de las

organizaciones, de la oficina del Alto Comisionado, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por supuesto del señor General, al que le reitero que le tengo afecto, no es la primera vez que nos sentamos a manifestar, discutir procesos legislativos y este no será el último seguramente, porque vamos a tener que seguir platicando sobre algunos otros temas que derivan precisamente de esta minita que viene de la Cámara de Diputados. Creo que es necesario retomar una lectura integral de la minuta y entrar a la redacción puntual artículo por artículo, porque en serio, hablarlo así, me parece que no nos da oportunidad incluso de un análisis mucho más puntual, simplemente oímos, pero no hay manera de entrar al debate.

Y yo creo que o que tenemos que continuar de esta reunión es entrar al debate, porque aquí se dice cada quien lo que opina, lo que cree, pero no entramos al debate si ciertamente estamos leyendo lo mismo y si estamos entendiendo lo mismo.

Yo entiendo cosas distintas de lo que aquí se ha argumentado, a partir de la lectura que yo hago. Entonces, vamos a tener que leerlo y entonces dirimir si efectivamente lo que aquí se está diciendo es lo mismo de lo que se está argumentando.

Entonces, me parece que esta reunión es muy importante porque avanza en lo que empezamos el día de ayer, al escuchar a las organizaciones no gubernamentales y a especialistas y que creo que debemos volver a convocarnos, pero ya entrar con un método distinto, ahora sí de debate, en función de lo que dice la ley y la magnitud y la trascendencia de la ley y hacia dónde va, sobre qué temas, seguridad nacional, seguridad interior, Estado de Excepción, que es lo que toca de seguridad pública, claro que lo toca.

Aquí dicen que no, bueno, pues entremos a la discusión para saber identificar, porque entonces estamos leyendo cosas distintas.

No quiero entrar al debate, simplemente quiero dejar constancia de que hoy, más que nunca, de veras creo que estamos obligadas y obligados a discutir de manera seria y profunda la hermenéutica de este dictamen que viene como minuta de la Cámara de Diputados y lamento mucho que se hay votado en contra de mando mixto y no se haya promovido una discusión con esta Cámara de origen por parte de la colegisladora, para dirimir las diferencias de una minuta por cierto que les enviamos, de reforma constitucional que nos llevó más de dos años discutir en este Senado de la República escuchando a distintos funcionarios de todos los órdenes, especialistas, constitucionalistas, etcétera.

Dos años de intenso trabajo para resolver el problema más grave, entiendo la preocupación de las Fuerzas Armadas de que quieren un marco legal para seguir funcionando, tienen 10 años así, cuando menos de manera activa, con cierta normalidad,

Lo han venido haciendo antes, claro que sí, pero en estas tareas tienen 10 años, por cierto con un fracaso terrible que seguimos reproduciendo por parte del sexenio de Calderón y lo volvemos a reproducir en este.

Francamente me parece que eso hay que debatirlo y termino diciendo que además sigue pendiente el problema principal, sí las Fuerzas Armadas hay que darles marco legal, pero la seguridad pública y el desastre que tenemos en el país, el desastre de la inseguridad que tenemos a lo largo y ancho, hay que resolverlo.

Perdón, pero ese sigue para mí siendo el problema principal y original, por cierto también de ese problema derivó que las Fuerzas Armadas estén cumpliendo tareas de policías, eso no lo podemos negar.

Gracias Presidenta.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias senadora de la Peña.*

Ha pedido su intervención el senador Benjamín Robles Montoya, que preside la Comisión Segunda de Estudios Legislativos.

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: *Gracias.*

Yo en primer lugar le quiero agradecer mucho a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política su presencia, es obvio que tiene un interés, como todos nosotros, pero de verdad creo que es un ejercicio muy importante que nos acompañe.

Agradecerle también a la senadora Cristina Díaz la convocatoria a esta reunión, que par a mí sí es hasta histórica, porque de verdad es un ejercicio de si alguna vez en el Senado habíamos celebrado una reunión de presidentes de comisiones, que en un principio era privada y que después se abrió pública, lo cual es bueno, sin duda.

Creo que aquí casi todos estamos a favor, si no es que todos, del parlamento abierto. Decirle a quienes nos han hecho favor de darnos sus puntos de vista, que también estoy muy agradecido, hemos tomado nota, me surgen dudas, preguntas, de todos y quisiera formular una de arranque.

Si estarían dispuestas y dispuestos a volver a venir al Senado, porque me preocuparía mucho que la presencia de ustedes esta tarde noche, pretenda ser la discusión del Senado de la República con quienes se han manifestado, como quienes han expresado un rechazo, me preocuparía mucho.

No se vayan a ofender, pero de repente pensé qué le están haciendo el juego aquí al sistema, mis amigos, no creo que deba ser así. Yo sí creo y ojalá me puedan responder si pueden volver a venir, porque yo lo que pediré es que, como lo ha dicho la senadora Angélica de la Peña, como lo dijo Roberto Gil, es importante el diálogo, es importante hasta los debates.

Como decía el general Alejandro Ramos, y aprovecho para pedirle que también envíe un saludo respetuoso al Secretario de la Defensa, como aquí se ha planteado, hay que revisar este asunto desde todos los ángulos.

Mal haríamos, así como él lo decía, tratar de revisar una ley palabra por palabra, sin tomar en cuenta lo demás, de una manera hermenéutica como aquí se ha planteado; tampoco ver este tema que tiene que ver con todo; y el planteamiento de mando mixto, como aquí se ha planteado.

Aquí deberían estar los diputados para decirnos por qué hicieron lo que hicieron. Aquí debiesen estar no en una reunión, digo, privada-pública de repente; sino en una reunión de trabajo que nos permita precisamente conocer por qué este esfuerzo tan importante que hicimos, donde todos nos pusimos de acuerdo, tiene que ver con todo.

Por eso yo esperaría, y esa será la postura de un servidor, ya saben que como presidente de la Comisión yo siempre actuaré en función de las atribuciones que me confiere nuestro Reglamento; pero mi grupo parlamentario quedaría muy preocupado de que, insisto, se

pretenda con esto saldar la inquietud de una buena parte de la sociedad, que yo creo que no vinieron aquí nada más a que tomemos medio nota y medio los escuchemos.

Sino como aquí se decía, lo dijo bien el senador Roberto Gil, si tenemos el interés encontremos los momentos, los espacios para encontrarlo, porque de entrada yo pienso como muchos de ustedes; más allá de las explicaciones que se nos han dado, donde hasta la pasión, de repente me sentí casi, casi que nos iban a decir "¿entienden o se los enseño con palitos?".

Y lo digo con respeto, porque creo que eso es lo que debe producirse y mi expresión también es de respeto. Creo que aquí debemos discutir un tema de tanta trascendencia. Hay dudas.

Aquí lo dijo muy bien la senadora Cristina Díaz, no se trata de debatir, yo no lo haré. Pero sí de poner una postura de que las Comisiones Unidas, que encabeza la senadora Cristina Díaz, debiésemos abrir una ruta donde podamos en forma de parlamento abierto, escucharnos.

¿Yo qué le voy a decir a los integrantes de mi Comisión?

Yo sí los mantuve al tanto, hablé con uno de los secretarios para que me hiciera favor de comentarlo con el otro integrante de Acción Nacional. No encontré a mis compañeros, el secretario del PRI, pero entiendo que hay una coordinación con la senadora Cristina, para informarles.

Yo no quisiera informarles "es que ya nos reunimos con especialistas, con gente de la sociedad civil que ha debatido, con el representante de la ONU en materia de derechos humanos, y ya dejamos saldado el tema". No, creo que esto como lo han expresado mis compañeros senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, sí debe haber diálogo, sí debe haber debate. No debemos quedarnos con sus notas, que para nosotros son muy importantes; sino revisar todo y todo, incluso retomo el planteamiento de mi General, no es solamente esta ley, sino es todo.

¿Qué vamos a hacer? Porque él mismo lo ha dicho, ellos no quieren estar haciendo tareas policiacas, no les corresponde, están buscando un esquema que les dé certidumbre, se ha dicho. Tenemos que buscar la forma en que las distintas voces, porque con todo respeto –y con esto concluyo– no es posible que como en la época de mis abuelos, todo lo que decimos es no, estás mal, no es correcto.

No, no. En algo estamos bien y todos, porque estamos preocupados. Pero creo que los tiempos de paz que todos queremos, no se construyen haciendo guerra. Y pareciera que le queremos hacer la guerra al pueblo de México.

Es cuánto, senadora.

***SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:** Gracias, senador.*

Pidió la palabra el senador Ricardo Barroso, presidente de la Comisión de Marina.

***SENADOR RICARDO BARROSO:** Muy buenas noches a todos. Es para mí un honor estar en esta mesa.*

Por obviar tiempo, saludo en la presencia de la coordinadora, a todos los aquí integrantes.

Como presidente de la Comisión de Marina, es cierto, le hemos venido dando seguimiento a esta ley; donde hemos encontrado y hemos escuchado las diferentes voces, desde la Oficina, desde una Secretaria; hasta como el día de ayer, que las escuchamos en la calle y prestamos atención a los reclamos, a los señalamientos de muchas personas que están afuera, en otro sentido, como los que estamos el día de hoy.

Con la misma preocupación, creo que de unos y otros lados, que a México le vaya bien y que este tema que lleva en el debate por más de diez años, le podamos acercar una solución no de manera inmediata; sino con una gran voluntad de que nuestro país comience a tener un marco jurídico en el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas en los diferentes estados.

Hemos escuchado los temas sociales, los temas de derechos humanos. Hemos tratado el tema de derechos humanos de las víctimas; pero también me he fijado que tenemos que velar y es por eso que transito y camino con esta ley. Los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, de ese Ejército y esa Marina Armada de México que no son dos, como lo dijo mi compañero Gil; que son los mismos que están al frente defendiéndonos, ayudándonos en catástrofes; como los que están el día de hoy en mi estado, en Baja California Sur.

Los que están el día de hoy en Baja California Sur y que en pláticas con un gran amigo, un gran surcaliforniano, un gran hombre, Silvestre Latoa Camacho, una semana antes de que lo asesinaran, me decía "Ricardo, tenemos que ir con la Ley de Seguridad Interior porque tenemos que regular la participación de las Fuerzas Armadas, porque los ocupamos en Baja California Sur".

Esto que hablo con tanta sinceridad, porque lo estamos viendo en esta mesa, pero los estados que se están convulsionando por la inseguridad estamos pidiendo a gritos la presencia y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas para que le vayan a hacer frente ante la incapacidad, la colusión o la falta de interés de algunos gobiernos estatales que no han dado el ancho.

Y no lo politizamos ni lo partidizamos. Hay una necesidad real de hacerlo. Hoy estamos dando el primer gran paso en esta mesa; mañana o pasado lo habremos de hacer en Comisiones Unidas donde dictaminaremos y votaremos y escucharemos a la representación de cada uno de los miles y miles y miles de mexicanos que están representados por los senadores de diferentes partidos y diferentes entidades dentro de nuestras comisiones.

Quiero reconocer y aplaudir este ejercicio que se acaba de hacer. A cada uno de los que intervinieron el día de hoy en esta mesa o están interviniendo todavía en esta mesa, mi reconocimiento. Y créanme que fue muy valioso para mí compartir esto con ustedes, escuchar las diferentes versiones y nos consideramos listos para llevar a comisiones, en el caso de la Comisión de Marina, esta ley, para poder votar a lo que nuestra consciencia y nuestro conocimiento nos está dando el día de hoy.

Es cuánto.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Gracias, senador.*

Tiene la palabra el senador Enrique Burgos.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: *Muchas gracias.*

Si me lo permite, Presidenta, primero muchas gracias a la Presidenta de nuestra Junta de Coordinación Política, a todas las senadoras y senadores, a los servidores públicos que hoy nos hacen el favor de acompañarnos; muchas gracias por su participación.

Gracias también a la Presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados, que nos acompaña también.

Y subrayadamente agradecer a la representación de organizaciones civiles, de la sociedad, de derechos humanos. El propósito fue escuchar, atender puntos de vista, tomar nota. Y efectivamente, aquí se ha dicho, ya será en la discusión del Senado en donde afinaremos o aclararemos puntos de vista.

Pero por lo pronto, muchas gracias por venir y por darnos sus puntos de vista.

Algo que quisiera subrayar y decirles que deben llevarse la certidumbre, la seguridad, porque surgió el comentario de que no había facultades del Congreso para abordar el tema. Quiero decirles que sí lleven la seguridad de que hay facultades expresas en nuestra Constitución, tanto en el artículo 89, fracción VI, que le da facultad explícita al Presidente de la República para disponer en casos, y lo dice muy literalmente, en materia de seguridad pública y seguridad interior expresamente.

Y en el 31 del 73 constitucional, en donde habla de una facultad implícita, que son esas facultades que se requieren para hacer efectivas las facultades explícitas, entonces sí está facultado el Congreso para abordar el tema.

Segundo. Y no habla ahora de temas propiamente de orden legislativo.

Yo quisiera ahora, si me lo permite nuestras presidencias, hacer otro enfoque distinto.

Yo quisiera decirles, con toda consideración y con todo respeto a gentes a quienes respeto y me siento con amistad, como María Elena Morera, decirles que necesitamos mucho de su ayuda. Que lo que hoy enfrenta el Estado Mexicano, los órdenes de gobierno y la sociedad, es el embate desproporcionado y brutal y creciente de la delincuencia organizada.

Que el Senado está del lado de la sociedad, que el Senado busca una ruta por supuesto, como siempre, de legalidad, de legitimidad, y cumplir con el primer compromiso del Estado Mexicano, que es la protección de la persona, de su integridad individual y de sus bienes; primer compromiso.

Y queremos la ayuda de estas organizaciones, porque tenemos que ir juntos. Mientras estamos aquí platicando, mientras estamos conversando, estoy seguro que hay robos, asaltos, secuestros, y aquellos impunemente no saben de derechos humanos, no tienen ni idea de respetar ningún derecho humano.

Hagamos la tarea de la sociedad de la mano. Vayamos juntos en esta tarea, porque el enemigo no está ni aquí, el enemigo está embozado en las calles, creciente, secuestrando, robando, dejando familias en la orfandad literalmente.

Yo quisiera también decirle al general Ramos, que le dé un saludo respetuoso al señor Secretario, y algo, yo recorro mucho las carreteras, yo soy de carretera por lo general, y me ha tocado ver, a veces voy a las tres de la mañana a mi tierra o salgo muy de madrugada, y veo camiones, no son autobuses, son camiones del Ejército con soldados ahí aguantando el

frío a las cinco de la mañana, seis de la mañana, porque dicen "te vas de Veracruz a Tamaulipas", entonces, solidaridad con el Ejército.

No es un Ejército de impunidad, no es un Ejército que viole garantías; es un Ejército que ha estado con nosotros. Ahí está el 19 de septiembre pasado, como muchos otros.

Este Ejército del que estamos hablando, de las Fuerzas Armadas, incluyo Marina, por supuesto, no le estamos imponiendo una ley, ellos pidieron una ley, estuvieron trabajando o haciendo una tarea sin instrumentos legales. Ahora están diciendo: Dennos instrumentos y rutas legales. Creo que más claro no se puede.

Por eso, con todo respeto y cariño, échennos la mano. Necesitamos salir juntos en este embate, con todo respeto y con toda responsabilidad, bajo la certeza de que habrá constitucionalidad y que habrá escrúpulo en el respeto a los derechos humanos, como dos pilares fundamentales de nuestro quehacer cotidiano.

Muchas gracias, Presidenta.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Gracias.*

Pidió su intervención el senador Ernesto Gándara.

SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: *Muchas gracias. Bienvenidos.*

Rápidamente, porque no quisiera ni repetir, pero sí desde luego adherirme a muchos de los conceptos y de las reflexiones que han hecho en la mayor parte de los casos que estoy de acuerdo, en otros que sería tema de debate. Lo más importante es que nos escuchemos, que reflexionemos, que podamos como legisladores tomar en cuenta todo lo que nos pueda aportar la sociedad organizada, y no se diga las instituciones internacionales con los temas que tienen que ver con el tema más sensible que podemos tener, que es la seguridad de nuestro país, la seguridad de nuestra gente, la seguridad de nuestra familia, independientemente de los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, en fin.

Aquí el tema es que lo único que no podemos hacer, yo no me voy a referir a analizar los artículos, que muy bien lo han hecho especialistas en el tema, pero lo único que no podemos hacer es no hacer nada, es no avanzar, es no legislar, es no coordinarnos, es no tomar en cuenta efectivamente las aportaciones que se dan, pero también, y ahí sí es nuestra responsabilidad como representantes populares, como gente que venimos y fuimos elegidos por la gente, y que constantemente estamos platicando sobre las necesidades de la gente, entre ellos el tema de seguridad, es tomar decisiones, es votar, y desde luego no solamente el trabajo en comisiones sino en el Pleno.

Yo creo que este ejercicio es muy válido, como lo ha sido y bien lo ha dicho el senador Roberto Gil, los muchos foros que se han organizado en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, a los que nosotros hemos asistido a invitación de muchos de ustedes, de los sectores académicos, de las organizaciones, y desde luego el sector privado, de las áreas sociales, en donde hemos ido enriqueciendo las propuestas en materia de seguridad, y en donde yo solamente quisiera aportar una sola reflexión más a todo lo que se ha dicho.

Esta propuesta, este proyecto, esta minuta, estas iniciativas que se dieron y que derivaron, en este caso en la aprobación de la Cámara de Diputados y que ahora tendremos que ver en la Cámara de Senadores, no es el único instrumento jurídico; y ahí es donde tenemos

que cuidar que no se confunda que es el único instrumento jurídico y que no nos basamos y que las Fuerzas Armadas y que los tres niveles de gobierno y que nosotros los legisladores y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tengan sus atribuciones de ley, y desde luego también sus responsabilidades.

Una cosa es lo que es la ley, y otra cosa que es que si en la aplicación se viola la ley, también hay instrumentos de ley para precisamente sancionar alguna situación que se dé.

De tal manera que lo que sí no podemos hacer tampoco, es estarle poniendo peros y peros y peros a todo lo que se da, y finalmente tenemos que tomar decisiones.

Ojalá y en estos días, no importa de manera intensa, podamos agotar todas las reflexiones que se dan.

Y estoy seguro, como dijo mi compañero, el senador Ricardo Barroso y el senador Enrique Burgos, que nosotros vamos a actuar con responsabilidad, con seriedad, con compromiso con el país, con compromiso con la gente con la que representamos, y sobre todo con un fin fundamental, que es que se resuelvan las cosas, como este caso tan importante, que es el tema de seguridad de las familias de nuestro país.

Estoy seguro que no va a ser la única reunión que vamos a tener. Estamos naturalmente ya poniéndonos de acuerdo.

Hay definiciones de la Mesa Directiva, en cuanto a qué comisiones lo tienen que ver en comisiones unidas y cuáles no. Nosotros propusimos entrar, si es decisión de la Mesa Directiva, eso no nos impide como senadores de la República el poder participar en todas las comisiones. Un servidor lo va a hacer y desde luego participar en el Pleno.

Desde luego, es nuestra obligación escuchar; es nuestra obligación reflexionar, pero también es nuestra obligación en todo momento y cuando se presentan iniciativas, minutas y, en este caso cuando somos citados a comisiones y al Pleno, el tomar decisiones.

Muchas gracias.

***SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:** Muchas gracias, senador Gándara.*

Tiene la palabra el senador Torres Graciano, que preside la Comisión de Defensa Nacional.

***SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO:** Gracias senadora.*

Primero que nada, bienvenidos. Celebro igual que mis compañeros esta reunión.

La semana pasada cuando se dio la discusión en Cámara de Diputados, en la oportunidad que he tenido de estar con algunos medios de comunicación, desde entonces dejé claro que no íbamos a procesar este tema, o al menos en mi calidad de Presidente de la Comisión, no me prestaría a procesarlo de un día para otro; que sí teníamos que darnos el espacio para escuchar, para poder analizar las inquietudes que se pudieran dar en torno a este dictamen, y que tendríamos que hacerlo bien y pronto.

Y creo que este espacio que se está dando, toda esta semana de hecho hemos estado escuchando y conociendo diferentes posiciones, nos han permitido tomar nota puntual de esas preocupaciones legítimas muchas, aun aquellas que pudieran no estar muy informadas, pues son realmente yo veo que hay preocupaciones autenticas y que hay que

tomarlas, hay que revisar y no perdemos nada en el tiempo que nos hemos dado para poder hacer este análisis, pues podamos revisar si el texto de esa preocupación realmente deja abiertas posibilidades de las interpretaciones que se le han dado o no, o podemos encontrar otros argumentos.

Yo lo que les puedo decir, que trataremos de conducir con toda institucionalidad, en calidad de Presidente de la Comisión, el proceso, obviamente habremos de tomar también decisiones y en su momento también creo que habremos de razonarlas, el porqué de nuestra decisión.

También les quiero decir que estoy convencido de que ya no puede pasar más tiempo sin que se dé una definición, cada quien asumirá su responsabilidad y su decisión, en sentido positivo, negativo, respecto de la minuta.

Pero así como yo pedí que no fuera de un día para otro, también digo, tenemos que sacarlo en este periodo, no se puede ir de este periodo, porque creo que es necesario y es una responsabilidad nuestra, atender este tema tan sentido.

Yo solamente diría, hoy no tenemos nada, ya lo decía el Senador Gándara, y bueno, ante la nada se permite todo, porque hoy como estamos, pues la situación actual permite que no haya transparencia en muchas decisiones.

Hoy no sabemos si está en un despliegue de Fuerzas Armadas en algún estado, quién va al frente, si nosotros salimos a la calle, vemos ahorita un despliegue de Fuerzas Armadas, de elementos, en las calles recorriendo, pues a la mejor vamos a ser observadores y no vamos a conocer ni que están haciendo ni que causa motivó esa presencia, ni quién está al frente, ni cuánto tiempo van a estar ahí, ni cuál es el territorio de actuación.

Así estamos el día de hoy.

Entonces yo creo que estamos en una situación que no tenemos información, que no tenemos claridad, que no tenemos protocolo y que permite toda la discrecionalidad que pueda haber en las decisiones de la actuación de las Fuerzas Armadas.

Entonces, en ese sentido creo que ya no podemos permitir que se mantenga esta situación y que sí tenemos que regularla. Habrá el debate, seguramente, como decía la senadora de la Peña, en las Comisiones, habrá un debate seguramente muy amplio, largo y qué bueno que se dé y habremos también de, en su momento, de seguir revisando estas propuestas, abiertos.

De mi parte, haremos de llegar a los integrantes de la Comisión de Defensa, pues todas estas inquietudes, de los documentos que nos han hecho llegar, que ya hemos platicado con algunos de ustedes anteriormente y que tengan toda la información y cada quien asumirá su decisión.

Lo que yo pediré es que se haga una decisión informada de los pros, de los contras, de las posiciones a favor, de las posiciones en contra, pero que sí, ya tomemos la decisión y podamos procesar este dictamen.

Esa es la posición que en lo personal tengo y que quiero compartir también de frente y públicamente, de que tenemos que asumir ya el compromiso de no dejar pasar más tiempo sin que se resuelva un tema tan importante como es este de la seguridad interior y particularmente el de la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la autoridad civil.

Muchas gracias.

Bienvenidos de nueva cuenta.

Estamos a sus órdenes.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias Senador.*

Pido unos minutos como presidenta de la Comisión de Gobernación, para que al final la senadora presidenta de JUCOPO, dé el cierre de esta reunión tan valiosa, que ha sido un ejercicio de participaciones, todas importantes.

Yo quisiera resaltar que hoy, lo que nos ocupa, esta minuta en materia de seguridad interior, nos deja claro, al menos lo señalo, que no está regulando a las Fuerzas Armadas, sino que está estableciendo mecanismos de coordinación para ser auxiliar de los gobiernos locales, cuando hay situaciones de emergencia que lo amerite.

Y también nos habla de que no son tareas permanentes, sino que son temporales. Nos está señalando también esta minuta, de manera puntual, las formas y momentos específicos en que el Ejército será el encargado de llevar a cabo el resguardo de la seguridad interna y nos remite al marco constitucional y sin duda también nos orienta hacia otras leyes que son colaterales.

Yo quiero decir que también este proyecto está incorporando principios que están previstos en el artículo cuarto de la Ley de Seguridad Nacional, que es la legalidad, la responsabilidad, el respeto a los derechos humanos, la confidencialidad, la transparencia, la eficiencia, la coordinación y la cooperación.

Yo creo que debemos de dejar muy claro que la seguridad interior se está enmarcando en el ámbito de la seguridad nacional y que estas comisiones que estamos hoy dictaminando y que estamos haciendo este ejercicio importante de participación de cada uno de ustedes, sin duda, bajo la figura de parlamento abierto, pues nos está llamando a que, nos hace un llamado a que se haga uso de esquemas institucionales, que seguramente todos estamos coincidiendo, que lo primero es salvaguardar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la gobernabilidad democrática, en beneficio de todos.

Sin perder de vista que seguridad pública, que seguridad nacional y seguridad interior deben atenderse y regularse bajo distintos esquemas normativos, pero atendidos como todos lo han señalado, de una manera integral en atención y en coordinación, entre los poderes de la Unión y las entidades federativas y municipios.

Yo creo que nos queda muy claro que los que estamos aquí nos interesa salvaguardar la paz, el orden público, el derecho al que tienen todos los mexicanos, de sentirse protegidos a través del Estado Mexicano y tener la certeza jurídica, tanto para las personas físicas y morales y sin duda la conducción legal de las Fuerzas Armadas, pues tiene que estar solventado en una Ley.

Yo por eso, pues agradecer mucho la participación de ustedes, reitero, ha sido muy importante y sin duda la presidenta de JUCOPO, esta iniciativa de convocarnos a todos a su sala de juntas a expresar diferentes puntos de vista, termina en un ejercicio importante.

Mañana seguramente los presidentes de las comisiones estaremos acordando una ruta crítica para llevar esto a la dictaminación.

Le agradezco mucho a cada uno de ustedes y gracias presidenta.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: *Además de agradecerles su presencia, comentábamos hace rato que ha sido una reunión larga, pero no se ha sentido, ha sido, la verdad, muy provechosa, muy fructífera, en torno al trabajo de dictaminación que tendrán que hacer las comisiones.*

Yo sólo cerraré diciendo que recuperar la tranquilidad que todos queremos, no se agota en una sola Ley.

Estas dos legislaturas han avanzado de manera importante en un marco legal, cada día más sólido. Nos falta mucho, es cierto, pero creo que la gran riqueza que tiene el Senado es precisamente que ningún grupo parlamentario tiene mayoría y eso habla, además, de la capacidad de construir acuerdos, de la capacidad que hemos tenido de construir consensos, enriqueciendo muchas iniciativas.

Hay iniciativas, incluso, del Presidente de la República, que han llegado y que han salido con más de 100, de 200 modificaciones.

Así, que bueno, pues gracias a todos por el compromiso, felicito a los integrantes de las comisiones que van a dictaminar y a los que están interesados y que quisieron dictaminar y que van a participar, como lo han venido haciendo, su interés.

Gracias a quienes asistieron de la sociedad civil organizada, de las Fuerzas Armadas, le enviamos un saludo y nuestro reconocimiento a una institución tan querida y tan respetada por los mexicanos y queremos fortalecerla y hacer la parte que nos corresponda en lo que compete al marco legal.

Al Alto Comisionado de Naciones Unidas, muchísimas gracias por la oportunidad de su presencia.

A todos, para que no me equivoque con ninguno.

Muy buenas noches.

Fin de la Versión estenográfica.

En virtud de lo anterior, para estas Comisiones Unidas, de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, resulta fundamental expresar la preocupación de salvaguardar la correcta protección de los derechos humanos y sus garantías.

En ese sentido, es preciso señalar que a raíz de la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección a los derechos humanos y sus garantías debe ser, de forma tal, que tanto la misma ley

como los tratados internaciones en los que el Estado Mexicano es parte, velen por su amparo; por lo que a partir de la reforma constitucional en comento nada puede restringirlos ni suspenderlos, salvo su ejercicio en términos estrictamente de lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicándose en el sentido más amplio y en favor siempre de los derechos humanos.

Es aquí donde impera la necesidad de entender a la Ley de Seguridad Interior como un mecánismo más de salvaguarda y protección plena de los derechos humanos y sus garantías, brindando un orden social armónico en donde impere la seguridad y la paz.

De esta maera no debemos soslayar que la Ley de Seguridad Interior, no es un docuemento normativo aislado del orden jurídico nacional, toda vez que pertenece a éste, su correcta aplicación está vilculada a las normas de todo el universo jurídico mexicano; en tal sentido, la seguridad interior no es un concepto nuevo que será determinado a partir de esta ley, si bien será su marco primordial que delimitará la actuación de las fuerzas armadas en estas tareas (de seguridad interior) dichas acciones no podrán ser de diferente manera a las ya descritas en sus diversos ordenamientos juridicas, mismos que rigen su actuar desde su formación y que a la letra dicen:

Marco Jurídico Fuerzas Armadas para Intervenir en tareas de Seguridad Interior.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 89: "... las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: ...

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército,

de la armada y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación...

Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Artículo 1°... El ejército y fuerza aérea mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

II. Garantizar la seguridad interior;

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas...

Artículo 2°... Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la armada o con otras dependencias de los gobiernos federal, estatales o municipales, todo, conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales.

Artículo 3°: "...El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos deben ser organizados, adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de sus misiones...

Reglamento interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De las Atribuciones y Responsabilidades

CAPÍTULO I

Del General Secretario de la Defensa Nacional

ARTÍCULO 10.- Corresponden al General Secretario las facultades indelegables siguientes:

III. Determinar la elaboración de los planes que sean necesarios para garantizar la defensa y la seguridad interior de la nación, y someterlos a la consideración del Presidente de la República;

Manual del uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas

> ***"El presente manual (para el uso de la fuerza), tiene como propósito, dar cumplimiento a lo dispuesto en las directivas sobre uso de la fuerza, a la vez que se constituye en una guía para la actuación del personal integrante de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones, observando siempre un irrestricto respeto a los Derechos Humanos."***

Art. 3. Principios aplicables al Uso de la Fuerza.

A. La utilización de los niveles de fuerza por los integrantes de las fuerzas armadas, sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tenga asignada, en apoyo a las autoridades civiles.

B. El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.

Estas Comisiones, hemos escuchado diversas voces en atención a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y sobre todo respecto de la preocupación frente a la protección y garantía de ejercicio pleno de los derechos humanos, hay quienes señalan "*que la ley es una carta abierta a que las fuerzas armadas hagan su voluntad militarizando las calles, reprimiendo al pueblo mexicano, y que esta situación significa un retroceso a las garantías y derechos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*", hemos escuchado atentamente todas y cada una de las opiniones pronunciadas en contra de la

aprobación de esta Ley, argumentos que son respetados, pero que tienden a cierta parcialidad; también es necesario insistir sobre la aprobación de la misma, ya que las diversas opiniones antes mencionadas, no observan con atención el otro enfoque que debemos tener en cuenta, que es precisamente la situación real que viven día a día los elementos castrenses en las calles, el momento preciso en que requieren actuar frente a grupos de delincuencia organizada, que como bien sabemos han ganado territorio a las autoridades civiles, y en ocasiones es prácticamente imposible controlar por vías del dialogo, en este supuesto, se encuentran en la disyuntiva de actuar o no, ya que si bien es cierto, su misión es preservar la vida, seguridad y bienestar de las personas librándolas de amenazas o injerencias derivadas de situaciones de violencia generadas por el crimen organizado; también lo es, que no cuentan con un marco jurídico adecuado que regule su actuar, dejándolos en la indefensión absoluta frente a esta situación, pues en la práctica están sucediendo dos cosas: la primera es, que muchos elementos del ejército están siendo procesados penalmente en el medio civil, por usurpación de funciones o abuso de autoridad, derivado que en cumplimiento de su deber no se han enmarcado las realidades vividas en las operaciones contra la delincuencia, el alcance de la fuerza del crimen organizado se ha minimizado por parte de los sectores que se oponen a la aprobación de la presente Ley; la segunda situación y no menos lastimosa, es la muerte de valiosos elementos de las fuerzas armadas que han perdido la vida en cumplimiento de su deber.

Cabe señalar que en algunas ocasiones ha sido debido a la desproporcionada limitación impuesta por los protocolos enmarcados donde prácticamente no se pueden defender ante situaciones altamente hostiles.

Debemos recordar que, actualmente El Ejercito Mexicano dedica su mayor esfuerzo a las acciones de combate al narcotráfico, actividad considerada como principal amenaza a la seguridad de la nación mexicana.

Por tanto, resulta necesario un ordenamiento legal específico que defina y regule las actividades que pueden realizar las dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento de la Seguridad Interior, con el propósito de responder a los cuestionamientos sobre el alcance de la Seguridad Interior e incluso evitar confusiones con las tareas de Seguridad Pública.

En el caso de la Seguridad Interior, fundamentalmente se busca hacer frente a situaciones y fenómenos que vulneran el orden constitucional y la continuidad de las instituciones del Estado, esto es, el orden interno.

Esta Ley habrá de sentar las bases para una correcta coordinación entre las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las Entidades Federativas, en acciones de seguridad interior, con las Fuerzas Armadas, Fuerzas Federales, Inteligencia para la Seguridad Interior y Seguridad Nacional.

La Ley de Seguridad Interior no regula a las Fuerzas Armadas, establece los mecanismos de coordinación para ser auxiliar de los gobiernos locales cuando haya situaciones de emergencia que así lo ameriten, en las cuales no serán tareas permanentes sino temporales. Precisa de manera puntual las formas y momentos específicos en que el Ejército será el encargado de llevar a cabo el resguardo de la seguridad interna. De esta manera, la Iniciativa incorpora los principios previstos en el artículo 4° de la Ley de Seguridad Nacional: legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos, confidencialidad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

En primera instancia, la Suprema Corte emitió en la tesis jurisprudencial P./J.38/2000 la cual estableció que la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles de seguridad pública es constitucional, es decir, un sinnúmero de situaciones que puede enfrentar la autoridad civil pueden ameritar la solicitud de intervención del estado de fuerza del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sin que por ello se justifique la declaración de un estado de

emergencia o excepción que de *jure* afecte la plena vigencia de los derechos humanos de toda la población de una localidad o región determinada.

En este sentido, la tesis jurisprudencial P./J.37/2000 la Suprema Corte fijó una justificación de corte material. En ella, la Corte interpretó las facultades del Presidente de la República para salvaguardar la seguridad interior a la luz de los artículos 29 y 129 constitucionales, de tal suerte que cuando se produjera una situación que hiciera suponer fundamentalmente que, de no enfrentarse con todos los recursos disponibles (incluida la participación de las Fuerzas Armadas), pudiera escalar o degradar en situaciones más graves, *el Presidente de la República está facultado para enfrentarla a través del despliegue de las Fuerzas Armadas de manera subsidiaria, temporal y con pleno respeto de los derechos humanos.*

Estas comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente con la colegisladora de tal manera que se encuentra suficiente fundamento jurídico con lo estipulado en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y con lo dispuesto por *la tesis P./J. 37/2000 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde interpreta las Facultades del Presidente de la República para salvaguardar la seguridad interior a la luz de los artículos 29 y 129 constitucionales; de tal manera que en el caso que se produjera una situación que no se pudiera enfrentar con todos los recursos disponibles incluyendo la participación de las Fuerzas Armadas, en situaciones graves, el Presidente de la República está facultado para enfrentarla a través del despliegue de las Fuerzas Armadas de manera subsidiaria, temporal y con el pleno respeto a los derechos humanos.*

En atención a que la Seguridad Interior se enmarca en el ámbito de la Seguridad Nacional; estas comisiones dictaminadoras estiman pertinente que se hagan *uso de esquemas institucionales que permitan salvaguardar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la gobernabilidad democrática en beneficio de*

la sociedad mexicana; sin perder de vista que Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Seguridad Interior, deben atenderse y regularse bajo distintos esquemas normativos y atendidos de manera integral en atención y coordinación entre los Poderes de la Unión, y las entidades federativas y municipios.

Aunado a lo anterior, las propuestas de los Senadores promoventes concuerdan con el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, "el *cual resalta el desafío de garantizar la Seguridad Interior y reducir la violencia donde más afecta a la población. Considerando el papel destacado que las Fuerzas Armadas han desempeñado en la preservación del orden público y la contención del crimen organizado.*"[67]

Estas comisiones dictaminadoras, concordamos plenamente con el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, básicamente en que "*una perspectiva multidimensional en materia de Seguridad Interior debe identificar el conjunto de vulnerabilidades que han permitido el aumento y la delincuencia en nuestro país. Tal como lo señala el Programa Sectorial de la Secretaria de Gobernación (SEGOB).*"[68] El proyecto de dictamen, ahondan en la necesidad de contar con una política de Seguridad Interior y como comisiones dictaminadoras se encontró viable impulsar un marco jurídico en materia de Seguridad Interior que permita otorgarle certidumbre legal y administrativa a la actuación de las instituciones civiles y militares responsables de su preservación.

Asimismo, para fortalecer la política integral de Seguridad Interior "*se debe fortalecer la presencia de las Fuerzas Federales en el territorio nacional para contribuir a la protección de las instalaciones estratégicas y a un efectivo ejercicio del poder nacional sobre nuestro espacio aéreo, terrestre y marítimo.* Como comisiones dictaminadoras, estimamos viable *la participación de las Fuerzas*

---

[67] **PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL 2014-2018, URL:** http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342824&fecha=30/04/2014. Consultado el 29 de abril de 2017.

[68] Ídem.

Armadas en actividades vinculadas con la Seguridad Pública y la Seguridad Interior y que debe darse en un marco que permita su coordinación con otras instituciones federales para el intercambio de información e inteligencia[69]". Razón por la cual, el énfasis que se destaca en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 que le otorga a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior no debe opacar el fortalecimiento de sus capacidades para el desempeño de su misión principal, que es la Defensa Nacional.

Estas comisiones dictaminadoras coincidimos en que las iniciativas en comento tienen como punto de partida la ineficiencia de las autoridades locales (sean entidades federativas o municipios) para hacer frente a las diversas amenazas a la seguridad interior. De tal manera que el proyecto de decreto contempla los adecuados mecanismos de evaluación e incentivos para que las corporaciones locales retomen sus atribuciones en el ámbito de la seguridad pública.

Finalmente, para estas Comisiones Unidas, es imprescindible procurar dar respuesta a diversos planteamientos que con motivo de la expedición de la Ley de Seguridad Interior, se han planteado en foros académicos, espacios de deliberación, así como en el seno de las Cámaras del Congreso, ello muestra (como lo advertimos en líeas anteriores) la enorme preocupación que en materia de seguridad y justicia, se vive en nuestro país día a día.

Los planteamientos.

a) Si el Congreso de la Unión tiene facultades o competencia para expedir la legislación en materia de seguridad interior;

b) Si el efecto del ordenamiento que se propone para que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad interior implica en realidad que asuman funciones de seguridad pública, vulnerándose tanto lo dispuesto por el artículo 21, párrafo

[69] Ídem.

décimo, de la Constitución General de la República, como lo previsto por el artículo 129 constitucional;

c) Si la facultad legislativa conferida al Congreso de la Unión le permite establecer normas para el orden federal, pero sin la posibilidad de generar las en forma vinculatoria para las entidades federativas; y

d) Si las disposiciones contenidas en la minuta de Ley de Seguridad Interior se establecen afectaciones o vulneraciones a la esfera de los derechos humanos de las personas.

Consideramos, entonces, pertinente analizar esos razonamientos y dilucidar la adecuada sustentación constitucional de la ley que se pretende expedir y la conformidad de sus disposiciones a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

El orden constitucional.

Para efectos de éste Dictamen, permítasenos transcribir los textos de los artículos constitucionales que se estima indispensable tener presentes:

Articulo1°. *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.* (Primer párrafo).

Artículo 6.

A. para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes…

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. (Párrafo quinto, apartado A, fracción I y fracción VIII, párrafos sexto y séptimo).

Artículo 9o. *No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.*

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, sino se profieren injurias contra ésta, si no se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Artículo 16. *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.* (Párrafo primero).

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. (Párrafo quinto).

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. (Párrafo undécimo).

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. (Párrafo duodécimo).

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. (Párrafo décimo tercero).

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. (Párrafo décimo octavo).

Artículo 21. ...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. (Párrafo noveno).

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí, para cumplir los objetivos de seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública que estará sujeto a las siguientes bases mínimas.... (Párrafo décimo).

Artículo 25. *Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución....*

Artículo 29. *En los casos de invasión, perturbación de la paz pública o de cualquier otra que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el*

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarias de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquél no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso se convocará al Congreso para que las acuerde. (Párrafo primero).[70]

Artículo 73. *El Congreso tiene facultad:*

XII. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.

XIV.- Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio;

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la república.

2ª. En caso de epidemias de carácter graves o peligro de invasión de enfermedades exóticas del país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por Presidente de la República.

---

[70] Es el texto vigente, en virtud de lo dispuesto por el artículo décimo sexto transitorio del decreto de la reforma política-electoral del 10 de febrero de 2014, en el que se incluyen la figura de la Fiscalía General de la República.

XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil;

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

***Artículo 89.** Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:*

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

***Artículo 129.** En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer mas funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar....*

Facultades o competencia del Congreso de la Unión para expedir la legislación en materia de seguridad interior.

Con relación al argumento de si el Congreso de la Unión tiene competencia para legislar en materia de seguridad interior, debe señalarse que no existe duda al respecto, tanto desde la perspectiva del otorgamiento de facultades expresas para ello, como a la luz de las facultades implícitas que posee el Poder Legislativo Federal para expedir las leyes que resulten necesarias para que un Poder la Unión

pueda ejercer las facultades que se le confieren en la Constitución General de la República.

Resulta indudable que la adición del año 2004 de la fracción XXIX-M al artículo 73 constitucional le otorgó facultades expresas al Congreso de la Unión para expedir "leyes en materia de seguridad nacional". No debe pasar inadvertido que el otorgamiento de dicha competencia se dio de manera coetánea con la modificación a la fracción VI del artículo 89 constitucional a fin de establecer las facultades del Presidente de la República para "preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación".

En atención a esas modificaciones constitucionales podemos afirmar que la seguridad interior (como también la defensa exterior) de la Federación constituye una vertiente o expresión particular de la seguridad nacional. Esta última se desdobla en acciones de carácter interior y en acciones de carácter exterior. Así, velar por la seguridad interior corresponde al ámbito de la facultad presidencial de preservar la seguridad nacional.

En su oportunidad, con base en las modificaciones constitucionales referidas, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Seguridad Nacional, en cuyo artículo 3 se establece que por seguridad nacional se entienden -entre otras- las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que impliquen la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país y el mantenimiento del orden constitucional, entre otras.

Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional establece doce tipos distintos de amenazas a la seguridad nacional, entre las cuales podemos destacar algunas que indudablemente pertenecen al ámbito de la seguridad interior, como son los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia

organizada (fracción III), los actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada (fracción V), los actos tendentes a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva (fracción VIII) y los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos (fracción XII).

Como se ha afirmado, la seguridad interior es un ámbito de la seguridad nacional. Esto se refuerza con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 1 de la minuta de Ley de Seguridad Interior, al señalarse que: "Las disposiciones de la presente Ley son de Seguridad Nacional". En otras palabras, que estamos ante un ordenamiento de seguridad nacional, que se expediría con base en la atribución conferida al Congreso de la Unión en la fracción XXIX-M del artículo 73 constitucional.

A mayor abundamiento sobre la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior, cabe apreciar lo previsto por la fracción VI del artículo 89 de nuestra Norma Suprema, a la luz de lo señalado por la fracción XXXI del artículo 73 de la propia Constitución. Nos referimos a las facultades implícitas del Congreso para legislar, a fin de que los Poderes de la Unión puedan ejercer las facultades que tienen conferidas por la Ley Fundamental.

Efectivamente, si el Presidente de la República tiene la facultad y la obligación de disponer de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior, a fin de preservar la seguridad nacional en términos de la legislación pertinente, podemos afirmar que frente a esa atribución y las previsiones necesarias para su ejercicio, el Congreso General puede expedir la legislación correspondiente con base en sus facultades implícitas para legislar.

Recordemos la esencia del ejercicio de la facultad implícita legislativa del Congreso de la Unión. En primer término, el otorgamiento de una atribución a un Poder de la Unión en la Constitución; en segundo lugar, la consideración de la

necesaria legislación secundaria para el ejercicio de la facultad conferida, y en tercer sitio la relación de medio a fin, que corresponde establecer al Congreso General para expedir la legislación que haga factible el ejercicio de la atribución conferida, en este caso al Presidente de la República.

En otras palabras, si el Ejecutivo Federal está obligado a preservar la seguridad nacional y para ello es menester disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para realizar tareas de seguridad interior, por la vía de las facultades implícitas el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir la legislación necesaria.

Como puede apreciarse, sostenemos que la minuta de Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados tiene pleno fundamento en la facultad del Congreso General para legislar en materia de seguridad nacional, en virtud de que la seguridad interior es un ámbito de la seguridad nacional y que además así se ha previsto expresamente en el artículo 1 del proyecto de ordenamiento que nos ocupa. Sin embargo y si algunas personas no estimaran suficiente ese razonamiento, en virtud de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 89 constitucional y las facultades conferidas al Presidente de la República en materia de preservación de la seguridad interior del país, por la vía de las facultades implícitas para legislar del Congreso de la Unión se sustenta la competencia del Poder Legislativo Federal para expedir la Ley de Seguridad Interior.

¿El artículo 129 constitucional limita la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública?

Como se adelantó, también se ha señalado que la minuta de Ley de Seguridad Interior es contraria a lo señalado por el párrafo décimo del artículo 21 constitucional y lo previsto por el artículo 129 de nuestra Ley Fundamental.

Lo primero, se dice, porque se sustentaría la intervención de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, en tanto que del precepto constitucional invocado se desprende que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones de carácter civil.

A su vez, se señala que, si nuestro país no se encuentra en estado de guerra o conflagración bélica con ningún otro Estado, que la Fuerza Armada permanente se encuentra constreñida a realizar las funciones estrictas a que se encuentra vinculada en términos de la disciplina militar.

Apreciemos el primer argumento esgrimido en contra de la minuta que se analiza. Es cierto que las instituciones de seguridad pública han de ser de carácter civil, disciplinado y profesional, como lo prevé el párrafo décimo del artículo 21 constitucional. Por otro lado, nos parece reconocer en este argumento el señalamiento de que ante la insuficiencia de las instituciones de seguridad pública de carácter federal, de las entidades federativas o municipales, la Fuerza Armada permanente ha realizado acciones en auxilio de autoridades civiles de esos órdenes de gobierno que se identifican con el concepto de la seguridad pública, y que en ese sentido se pretendería sustentar la actuación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública.

Sin embargo, veamos que no es así.

En la minuta de Ley de Seguridad Interior se plantea con claridad que ante el surgimiento de riesgos y amenazas a la seguridad interior, que hemos señalado en qué consisten, podrá producirse la intervención de las autoridades federales, incluida la Fuerza Armada permanente, en virtud de producirse un riesgo contemplado en la Agenda Nacional de Riesgos a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, o en virtud de generarse una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior por actualizarse una amenaza a la propia seguridad interior. En ningún precepto de la minuta que nos ocupa se prevé o se infiere que la Fuerza Armada permanente realizará tareas o actividades de

seguridad pública. Es más, en el párrafo segundo del artículo 18 de la minuta se señala expresamente que: "En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública."

La seguridad pública es competencia responsabilidad de las autoridades civiles. Cuando el fenómeno delictivo incide en la generación de riesgos y amenazas a la seguridad interior, es cuando se produce la posibilidad de la actuación de la Fuerza Armada permanente.

En efecto y, adicionalmente, en el artículo 20 del ordenamiento que se propone se prevé que la primera colaboración de la Federación con las entidades federativas donde existan amenazas a la seguridad interior debe correr a cargo de las instituciones de seguridad pública de la Federación, y sólo cuando sus capacidades no fueren suficientes, será menester la intervención del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En específico, el artículo 20 de la minuta señala lo siguiente: "Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate..."

Cabe abundar en las consideraciones relativas a los riesgos de seguridad interior y a las amenazas a la seguridad interior.

El concepto de riesgo para la seguridad interior se refiere a cualquier situación que potencialmente pueda convertirse en una amenaza a la seguridad interior. En particular, se contienen en la Agenda Nacional de Riesgos, cuya elaboración y expedición se prevén por el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

El riesgo implica identificar un obstáculo, una interferencia o un elemento contrario a la seguridad interior del país, toda vez que su desarrollo y transformación en una amenaza se opone a la consecución de los objetivos nacionales.

La amenaza a la seguridad interior se conceptualiza como cualquier acción destinada de manera inmediata y directa a afectar: i) la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano y su deber de proteger a la nación frente a cualquier elemento que pueda afectarla en cuanto tal; ii) la preservación de la soberanía nacional sobre su territorio; iii) el mantenimiento del orden constitucional; iv) el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; v) el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación, y vi) la preservación de la democracia, como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional establece con toda claridad -como ya se adelantó- doce casos específicos de amenazas a la seguridad nacional, entre los cuales destacan por su vinculación a la seguridad interior los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; los actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación; los actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones navales contra la delincuencia organizada; los actos que atenten contra la seguridad de la aviación; los actos tendentes a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva, y los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos.

Como se ha expuesto, la minuta de Ley de Seguridad Interior no contempla la asignación de tareas o responsabilidades en materia de seguridad pública para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicanas.

En ese sentido, carece de veracidad la afirmación de que con el ordenamiento que se propone se "militarizarían" las funciones de la seguridad pública.

Por otro lado, debemos analizar con detenimiento la mención de que la Fuerza Armada permanente, encontrándonos en tiempos de paz, no podría realizar ninguna función que no tenga estricta vinculación con la disciplina militar (artículo 129 constitucional).

A riesgo de reiterar la cuestión, dicha disposición convive con lo dispuesto por la fracción VI del artículo 89 de la Ley Fundamental, que faculta y obliga al Presidente la República a "disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente...para la seguridad interior...de la Federación", en aras a preservar la seguridad nacional.

En apariencia estamos ante una contradicción en el texto constitucional. Si el Presidente la República tiene la facultad de disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para mantener la seguridad interior de nuestro país y en tiempos de paz esos cuerpos sólo pueden realizar tareas relacionadas directamente con la disciplina militar, ¿puede o no el Ejecutivo Federal recurrir a la Fuerza Armada permanente con el objetivo constitucional señalado cuando no existe ninguna conflagración bélica?

Es necesario interpretar las disposiciones mencionadas en términos de su objetivo específico y su apreciación como normas que se implican y complementan. Lo previsto por la fracción VI del artículo 89 constitucional tiene que ver con una facultad directa y expresa del Presidente la República para disponer de la Fuerza Armada permanente con el propósito de lograr una encomienda constitucional precisa: preservar la seguridad nacional, que comprende tanto la seguridad interior como la defensa exterior de la Federación.

No se trata de disponer de esa Fuerza Armada permanente para un objetivo distinto. Si la disposición constitucional ordena preservar la seguridad nacional, en

sus vertientes de seguridad interior y defensa exterior de la Federación, debemos apreciar que ese es un elemento que caracteriza la función del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Cuando el artículo 129 constitucional señala que "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", hace referencia expresa a que la Fuerza Armada permanente no puede ejercer ninguna atribución que no se encuentre expresamente prevista en el orden jurídico para el desempeño del propósito de su existencia. Uno de esos propósitos fundamentales es preservar la seguridad nacional y, en ese sentido, salvaguardar la seguridad interior.

Esta consideración se confirma a la luz de la congruencia con las previsiones constitucionales de lo dispuesto por el artículo 1º, fracciones II, III y V de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y por los artículos 1 y 2, fracciones II, VI y VII de la Ley Orgánica de la Armada de México.

En el primer ordenamiento referido se precisa que "el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen..." entre otras las misiones generales de **garantizar la seguridad interior** (fracción II); auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas (fracción III, y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y reconstrucción de las zonas afectadas (fracción V).

En el segundo de los ordenamientos citados se establece que "la Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y **coadyuvar en la seguridad interior del país**..." (artículo 1), así como que son atribuciones de la Armada de México cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado Mexicano (artículo 2, fracción II), proteger instalaciones estratégicas del país en su ámbito de competencia y donde el Mando Supremo ordene (artículo 2,

fracción VI) y auxiliar a la población en los casos y zonas de desastre o emergencia... (artículo 2, fracción VII).

En términos de lo dispuesto por la legislación expedida por el Congreso de la Unión y con base en lo previsto por los artículos 89, fracción VI, y 129 constitucionales, las misiones del Ejército y Fuerza Aérea y de la Armada de México comprenden acciones tendentes a preservar la seguridad interior del Estado Mexicano. En otras palabras, que garantizar la seguridad interior y coadyuvar en la seguridad interior del país constituyen funciones vinculadas directamente con la integración, objetivos y disciplina de esos institutos armados. Salvaguardar la seguridad interior de la Federación es una misión específica de la disciplina militar.

En el sentido de lo expuesto, salvo que queramos hacer una interpretación letrista -ni siquiera gramatical- del artículo 129 constitucional, no se sostiene el argumento de que la disposición de la Fuerza Armada permanente para salvaguardar la seguridad interior como parte integral de la seguridad nacional constituye una función ajena a la disciplina militar.

¿La Ley de Seguridad establecer normas vinculantes para las entidades federativas?

Se ha mencionado que en la minuta de la Cámara de Diputados se contienen disposiciones que vulneran las normas constitucionales de nuestro federalismo al establecerse disposiciones vinculatorias para las entidades federativas y los municipios; que se establecen preceptos que generan obligaciones para los Estados de la Unión y la Ciudad de México, que exceden las previsiones de la Constitución General de la República.

Estimamos que se trata de apreciaciones infundadas que es necesario desvirtuar mediante el análisis específico de las disposiciones de la minuta de Ley de Seguridad Interior, a la luz de las normas contenidas en nuestra Ley Fundamental.

En primer término, debemos dejar sentado que conforme a lo previsto por el artículo 40 constitucional, nos hemos constituido en una República federal, donde sus partes integrantes -los Estados de la Unión y la Ciudad de México- conformamos una unidad denominada Federación. Y ésta ha quedado establecida en términos de los principios contenidos en la propia Constitución General de la República.

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Norma Suprema, se establece que "el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, **en los casos de la competencia de éstos**, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal."

Al referirnos a la seguridad nacional y su conceptualización, así como a su vertiente de seguridad interior, es indispensable tener en consideración lo previsto por el primer párrafo del artículo 25 constitucional en el sentido de que: "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución..."

Como ya se ha expuesto, la propia Constitución establece sendas facultades expresas a favor del Congreso de la Unión y del Presidente de la República en materia de seguridad nacional. Corresponde al Poder Legislativo Federal expedir

la legislación en materia de seguridad nacional. Por su parte, al Ejecutivo Federal corresponde en forma personal y exclusiva preservar la seguridad nacional y, con ese objeto y de acuerdo con las leyes, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior de la Federación.

Conforme a los preceptos constitucionales referidos, es competencia de la Federación, a través del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, actuar en materia de seguridad nacional de acuerdo a las funciones legislativas y ejecutiva que tienen conferidas. Los Estados de la Unión y la Ciudad de México son parte integrante de la Federación, dotados de facultades residuales y propias en términos de la Constitución General de la República. Forman parte de la Unión Federal en términos de los principios plasmados en la Norma Suprema.

A su vez, se desprende que los Poderes de la Unión tienen asignadas una serie de competencias y las partes integrantes de la Federación las propias en los términos señalados por nuestra Ley Fundamental.

Si la Constitución General de la República otorga al Congreso General y al Ejecutivo Federal facultades para legislar y para adoptar las acciones ejecutivas inherentes a la preservación de la seguridad nacional, y las entidades federativas conforman la Federación en los términos establecidos por esa Norma Suprema, se encuentran vinculadas al cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad nacional. Ello sobre la base, desde luego, de que no se invada, trastoque o vulnere alguna competencia que les fuere conferida expresamente por la Constitución General de la República o en términos de las facultades residuales contempladas en el artículo 124 constitucional.

Es ilustrativo señalar el precedente legislativo que se contiene en el párrafo segundo del artículo 1° de la Ley de Seguridad Nacional. En ese precepto se señaló que el ordenamiento en cuestión "tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia, así

como, la forma y términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea....."

En la propia Ley de Seguridad Nacional se incluyen las previsiones para la celebración de convenios de colaboración generales y específicos en la materia entre el ámbito federal y los ámbitos competencia de las autoridades estatales y municipales (artículo 25). Adicionalmente, en el Capítulo Único del Título Sexto del ordenamiento que nos ocupa se contienen las normas que regulan la cooperación de los poderes y órganos de gobierno de las entidades federativas con el ámbito federal, en aras a que este último garantice la seguridad nacional. Resalta lo previsto por la fracción II del artículo 65 en materia de colaboración conforme a la ley en cuestión para "lograr una coordinación efectiva y oportuna de políticas, acciones y programas..." A mayor abundamiento, en el artículo 66 de dicha Ley se establece con precisión que en el ejercicio de las atribuciones que correspondan a los gobiernos de las entidades federativas en virtud del Título aludido, en ningún caso confieren facultades para que se lleven a cabo "actos de molestia o de cualquier naturaleza que afecten la esfera jurídica de los particulares."

Deseamos insistir en que la seguridad interior es una vertiente de la seguridad nacional; en que las disposiciones contenidas en la minuta de Ley de Seguridad Interior pertenecen al ámbito de las disposiciones sobre seguridad nacional; y que en la Ley de Seguridad Nacional se establecen las previsiones generales para la colaboración de las autoridades de las entidades federativas y los municipios con la Federación en materia de seguridad nacional.

Con base en lo anteriormente expuesto, es pertinente analizar la construcción normativa de la minuta de la Ley de Seguridad Interior y sus referencias a las entidades federativas y a sus autoridades. De antemano se señala que los vocablos utilizados para referirse a la relación entre la Federación y sus partes integrantes para efectos de seguridad nacional son los de "coordinación" y "colaboración".

En efecto, y a riesgo de hacer una enunciación exhaustiva de esas previsiones, preferimos citar puntualmente lo aprobado por la H. Cámara de Diputados para sustentar que no existe establecimiento de obligaciones a las entidades federativas sin sustento constitucional, ni invasión de las competencias conferidas por la Ley Fundamental de la República a los Estados de la Unión y la Ciudad de México.

Las menciones en materia de coordinación y colaboración entre los órdenes federal y local del gobierno son las siguientes:

-Artículo 1.- Establece como uno de los objetos de la ley "establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios" en materia de seguridad interior.

-Artículo 4, fracción I.- Establece como una hipótesis de amenaza a la seguridad interior la afectación a los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional. (vinculación con el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional).

-Artículo 4, fracción IV.- Establece la hipótesis, entre otra, de coordinación entre autoridades de la Federación y locales en el supuesto de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior;

-Artículo 5.- Establece el principio de coordinación de las autoridades federales ejecutivas de cualquier naturaleza con las entidades federativas y los municipios, conforme al ámbito de competencia de cada orden de gobierno.

-Artículo 6, primer párrafo.- Establece que en el caso de riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos, las autoridades federales actuarán "en el ámbito de sus respectivas competencias".

-Artículo 6, segundo párrafo.- Establece la competencia de Consejo de Seguridad Nacional para emitir lineamientos en torno a la participación de las entidades

federativas en acciones de seguridad interior para atender la Agenda Nacional de Riesgos (vinculación con el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional) y para reestablecer la colaboración de las entidades federativas y los municipios en las tareas de preservación de la seguridad nacional.

-Artículo 11, primer párrafo.- Establece el principio de coordinación de la Federación con los órdenes de gobierno local y municipal para identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior.

-Artículo 11, segundo párrafo.- Norma la facultad presidencial para disponer la actuación de la Federación a fin de realizar acciones de seguridad interior en el territorio nacional (porciones comprendidas en una o varias entidades federativas o en el territorio de una entidad federativa) y la solicitud de actuación federal en esa materia por parte de las entidades federativas.

-Artículo 11, segundo párrafo, fracción II.- Norma la procedencia de realizar acciones de seguridad interior con base en la Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en caso de amenazas a la misma por la ausencia o insuficiencia de colaboración de las entidades federativas y municipios para preservar la seguridad nacional. (Vinculación con el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional).

-Artículo 12.- Establece la obligación de publicar en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior relativa al territorio o porciones territoriales de la entidad federativa de que se trate.

-Artículo 13.- Establece los elementos que, en su caso, deberán contener las solicitudes de las autoridades competentes de las entidades federativas para que se emita una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el territorio de la entidad correspondiente o parte de él.

-Artículo 14, fracción IV.- Establece que el Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener el señalamiento de aquellas acciones con las que la entidad federativa o el municipio contribuirá para atender la amenaza a la seguridad interior.

-Artículo 20, fracción II.- Establece la previsión de que, en caso de requerirse la actuación de las Fuerzas Armadas para atender los propósitos de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, el Comandante a cargo de dichas Fuerzas elaborará el protocolo de actuación relativo a la coordinación con las autoridades civiles participantes, que comprende a las locales y municipales.

-Artículo 21.- Establece la conformación de un grupo interinstitucional de trabajo de las autoridades participantes en la consecución de los propósitos de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuyo funcionamiento gira en torno a la coordinación entre las instituciones competentes para realizar las acciones de seguridad interior, sin demérito de brindar seguimiento a las acciones de participación de las autoridades locales que asuman responsabilidades en sus ámbitos de competencia.

-Artículo 22.- Establece el principio de cooperación en el ámbito de sus atribuciones de las autoridades competentes para atender la amenaza a la seguridad nacional que hubiere motivado la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

-Artículo 23.- Establece responsabilidades de las autoridades locales, de acuerdo con sus competencias, para contribuir al objetivo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, precisándose las de: i) contribuir con la información con que cuenten en virtud de sus atribuciones; ii) prestar auxilio y colaboración en el ámbito de sus competencias; iii) mantener la inversión pública de su competencia que sea necesaria para mitigar y superar la amenaza a la seguridad interior; iv) dar cumplimiento a las disposiciones legales relativas al ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública; v) informar

periódicamente del avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se hubiere establecido en virtud de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior; vi) contribuir con las acciones que se requieran para atender la amenaza a la seguridad interior, de conformidad con el artículo 14, fracción IV, del ordenamiento que se propone expedir; y vii) dar cumplimiento a los compromisos asumidos para contribuir a la atención de la amenaza y reestablecer la colaboración con la Federación para la preservación de la seguridad nacional.

-Artículo 24.- Establece el principio de coordinación que deberá observar la Secretaría de Gobernación al destinar Fuerzas Federales para realizar acciones de seguridad interior en las entidades federativas.

-Artículo 31, párrafo segundo.- Establece la colaboración de las autoridades locales con la autoridad federal en materia de aportación de información, con base en los esquemas de colaboración y coordinación derivados de la Ley de Seguridad Nacional.

Como puede observarse, la minuta de Ley de Seguridad Interior contiene dos tipos de disposiciones relativas a la actuación de la Federación en las entidades federativas. Por un lado, las relativas al ejercicio de facultades conferidas al Presidente de la República en términos de la titularidad que ostenta del Poder Ejecutivo de la Unión Federal. Se reglamenta el ejercicio de facultades constitucionales del Ejecutivo Federal para preservar la seguridad interior, considerándose la actuación de las autoridades locales en los ámbitos de su competencia para contribuir al objetivo de preservar la seguridad nacional mediante su colaboración.

Por otra parte, las relativas a las atribuciones y competencias de las autoridades de las entidades federativas y los municipios a partir de los principios de coordinación y colaboración entre los órdenes local y federal de gobierno.

Las entidades federativas tienen responsabilidades y obligaciones derivadas de las previsiones constitucionales rectoras de la conformación de la Unión Federal, destacándose en el caso de la minuta de ley que nos ocupa su contribución a la preservación, buena marcha y desarrollo de las instituciones públicas del Estado Mexicano para alcanzar los objetivos de desarrollo nacional que detalla el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución General de la República.

Desde luego, las entidades federativas tienen competencias propias que se resuelven en términos de las previsiones expresas de la Constitución General de la República o el sistema de facultades residuales del artículo 124 constitucional.

Pero también, como partes integrantes de la Federación, en tanto expresión de voluntad política local para constituir al Estado Mexicano, están vinculados a los objetivos de garantizar que el desarrollo nacional "sea integral y sustentable, ... fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático..., (fomente el) crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución de la riqueza... (y) permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege..." la Norma Fundamental (artículo 25, primer párrafo, de la Constitución General de la República).

En nuestra consideración la minuta de Ley de Seguridad Interior ciñe sus previsiones relativas a las entidades federativas a la esfera de sus facultades, competencias y responsabilidades derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Las disposiciones contenidas en la minuta de Ley de Seguridad Interior respetan la esfera de los derechos humanos de las personas?

Aunque resulte elemental mencionarlo, todo ordenamiento legal se emite con base en el principio de la supremacía constitucional. Sus disposiciones están sujetas y

subordinadas a las previsiones de la Constitución General de la República. En ese sentido y contemplándose de manera particular la perspectiva de los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, sus disposiciones implican necesariamente la sujeción a ese principio normativo.

En ese sentido, deseamos destacar que en la disposición que establece el concepto legal de la seguridad interior, se establece la vinculación del Estado Mexicano al propósito de salvaguardar, entre otros objetivos nacionales, el mantenimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho, que desde luego incluyen la vigencia irrestricta de los derechos humanos reconocidos en nuestro orden jurídico. Además, se precisa que cualquier actuación de un órgano público, cualquier procedimiento de los mismos o cualquier acción destinada por esos órganos en materia de seguridad interior, está sujeta al respeto de los derechos humanos.

Cabe enfatizar que en el artículo 3 de la minuta se dispone expresamente que para efectos del ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional. Dicho artículo establece expresamente que la seguridad nacional se rige, entre otros, por el principio del "respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales", de los mismos.

En el sentido de lo expuesto, el artículo 7 de la minuta de Ley de Seguridad Interior contiene una previsión de la mayor amplitud encaminada a sujetar a toda autoridad que deba actuar en materia de seguridad interior al respeto, protección y garantía de los derechos humanos. El artículo propuesto refiere en su primer párrafo que:

"Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y

sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes."

Consideramos necesario abundar, para efectos de la interpretación auténtica del precepto, que la referencia al deber de preservar, siempre y sin ninguna excepción, los derechos humanos y sus garantías, es una disposición derivada directamente de lo previsto por los párrafos primero y tercero del artículo 1° constitucional. Efectivamente, el deber de preservar los derechos humanos y sus garantías implican su respeto, su protección y su garantía.

Por otro lado, el señalamiento que se hace sobre la adopción de protocolos por las autoridades competentes para la aplicación del ordenamiento que se propone nos refiere a la vinculación de esos instrumentos administrativos con el orden constitucional y legal que los sustenta y, por ende, los rige. Es decir, que la expedición de los protocolos para la actuación específica de la autoridad que desarrolla acciones de seguridad interior se ciñe en primer término a las normas constitucionales, enseguida a las disposiciones legales de carácter secundario y, en su caso, a las normas reglamentarias de jerarquía subsecuente. Es evidente que los protocolos que se adopten habrán de adecuarse al orden jurídico del cual emanan, con estricta atención a la jerarquía de las propias normas jurídicas.

También cabe señalar como un elemento destacable del respeto a los derechos humanos que campea en la minuta de Ley de Seguridad Interior, la previsión del párrafo segundo del artículo 7 ya aludido, pues se hace mención expresa de la hipótesis contemplada en el artículo 29 constitucional sobre el llamado doctrinariamente como "estado de necesidad" que trae aparejada la eventual suspensión de derechos y garantías en los términos estrictos que prevé esa disposición para los casos de perturbación grave de la paz pública, invasión u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Queremos afirmar que por ningún motivo la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior o las acciones de seguridad interior podrían implicar la restricción o la suspensión de los

derechos humanos y sus garantías, pues ello es una hipótesis estricta en términos del artículo 29 constitucional.

Estamos conscientes de que una preocupación especial y la consecuente reflexión de la Comisión de Gobernación de la H. Cámara de Diputados en el análisis de las iniciativas que motivaron la aprobación de la minuta de Ley de Seguridad Interior, se constituyó por la convivencia del derecho de reunión y de manifestación con las eventuales acciones necesarias para salvaguardar la seguridad interior de la República.

En ese orden de ideas, apreciamos la pertinencia de incorporar al ordenamiento el texto que se contiene en el artículo 8 de la minuta, a fin de que "las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior".

Nos interesa destacar varias cuestiones derivadas del precepto propuesto. En primer término, su apego estricto al texto del artículo 9° constitucional, que establece que "no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito", y que "no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a alguna autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee".

En segundo término, que si bien en la fracción II del artículo 4 se señalan con precisión aquellas cuestiones que pudieran ser consideradas como amenazas a la seguridad interior y que implican hipótesis específicas de *numerus clausus*, entre ellas nunca podrán comprenderse las relacionadas con el derecho de reunión y el derecho de manifestación que se contienen en el artículo 9° constitucional.

Y en tercer lugar, que el ejercicio de esos derechos humanos nunca podrá considerarse como una materia u objeto de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Nuestra Constitución General de la República establece con propiedad el derecho de acceso a la información, estableciéndose en forma amplia el concepto de información pública, los sujetos obligados a atender el derecho de acceso a la información, la información que debe ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional y los procedimientos para acceder a dicha información pública, entre otras cuestiones relevantes.

Deseamos resaltar que conforme a lo dispuesto por la fracción I del apartado A del párrafo cuarto del artículo 6° constitucional, si bien toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública, se autoriza otorgar la reserva temporal de la misma "por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes." Por su parte, el párrafo sexto de la fracción VIII del citado apartado A del artículo constitucional invocado prescribe que "la ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial."

Con base en ese sustento y lo dispuesto en la materia por la Ley de Seguridad Nacional (artículos 50 al 55), así como en lo previsto por el Título Sexto (artículos 100 a 120) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 9 de la minuta de Ley de Seguridad Interior, en estricta congruencia con la naturaleza de la seguridad interior como una vertiente de la seguridad nacional, establece que "la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información."

Estimamos que esta previsión resulta congruente con otorgar la misma naturaleza que la Ley de Seguridad Nacional otorga a la información derivada de la aplicación de ordenamientos en materia de seguridad nacional, como es el caso de la minuta

que se propone. Así, la información generada en virtud de la aplicación del ordenamiento será protegida, clasificada, desclasificada y entregada por el sujeto obligado responsable en términos de lo previsto por la Ley de Seguridad Nacional y por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el primero de esos ordenamientos se señala con precisión el ámbito de la información susceptible de ser reservada y en el segundo, se contienen las previsiones relativas a la clasificación y desclasificación de la información, incluyéndose de manera particular las previsiones relativas a la información que podrá clasificarse como reservada.

También deseamos destacar la previsión contenida en el artículo 27 de la minuta de Ley de Seguridad Interior, con relación a las tareas que en forma limitativa se establecen para las Fuerzas Armadas que realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito. Es claro que resulta aplicable lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 16 constitucional ante la flagrancia en la comisión del delito, pues toda persona "puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público."

Ahora bien, en el precepto que se invoca de la minuta en cuestión, correspondería a las Fuerza Armadas la realización estricta de cuatro actividades: i) poner los hechos en conocimiento inmediato del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito que le sea posible; ii) preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades antes referidas; iii) adoptar, en su caso, las medidas a su alcance para brindar atención médica de urgencia en caso de que hubiere personas heridas; y iv) poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto y en coordinación con la policía.

Lo anterior es estrictamente congruente con las previsiones del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone la actuación de la autoridad de seguridad

pública y de procuración de justicia ante la comisión de un ilícito en flagrancia. No hay, por tanto, el otorgamiento de ninguna atribución a las Fuerzas Armadas para actuar en caso de la comisión de un delito en flagrancia en forma distinta a lo que deberá hacer cualquier autoridad diferente a la policial y a la de procuración de justicia, e incluso cualquier ciudadano.

Respecto al Artículo 16 del Decreto propuesto, se establece lo siguiente:

"Artículo 16. En aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Lo anterior, sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible."

El espíritu de este artículo obedece a la necesidad de reacción inmediata y cumplimiento del deber por parte del Estado Mexicano por garantizar paz y tranquilidad a los ciudadanos ante casos graves que pongan en peligro a las personas o las Instituciones, y que requieran de la intervención inmediata por parte del aparato del Estado para controlar la situación y estabilizar el orden constitucional de manera excepcional, atendiendo a la facultad que le confiere el artículo 89 fracción VI al Presidente de la República, esto sin perjuicio de que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior sea emitida en el menor tiempo posible.

Respecto a las excepciones a la ley, como se regula en este artículo, resulta pertinente atender a la doctrina jurídica para auxiliarnos a disipar la intención de los legisladores para anteponer la seguridad de los mexicanos y sus instituciones, por lo tanto, se debe auscultar al estudio de Francesco Begni titulado "Linterpretazione della legge" al afirmar lo siguiente:

"... se plantea al intérprete el problema de determinar cuál es la relación entre la letra de la ley y la voluntad contenida en ella. Es precisamente en esta materia de interpretación de la norma de excepción, donde interesa demostrar la falsedad de ese axioma jurídico que pretende que las normas de esta índole sólo pueden interpretarse restrictivamente.

Conforme a la corriente más generalizada de la doctrina, los posibles resultados de la interpretación son los siguientes:

a) *La fórmula de la norma expresa el pensamiento efectivo del legislador; en al caso se dice que se hace una interpretación declarativa.*

b) *La fórmula de la norma dice más de aquello que efectivamente quería (plus seripsit quam voluit). Mediante la interpretación restrictiva, "se corrige la exuberancia verbal de la norma".*

c) *La fórmula de la norma dice menos de lo que efectivamente quería (minus scripsit quom voluit)). Se habla entonces, de interpretación extensiva.*

De ello resulta, en opinión de MANZINI, que para llegar a una segura valorización de la norma, precisando la exacta relación entre la letra y el sentido de aquélla, el intérprete puede extender o restringir el significado literal para adaptarlo al verdadero sentido de la norma.

Pero en manera alguna, observa ROTONDI, interpretar restrictiva o extensivamente la norma significa ampliar o restringir arbitrariamente el contenido de ésta, ya que tales métodos sólo son posibles cuando del complejo de la ley resulte claramente que su formulación rebasa o restringe el pensamiento del legislador; y que el texto dice más o expresamente menos de lo que el legislador ciertamente había querido establecer."[71]

[71] https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/escuela-nal-jurisprudencia/article/viewFile/20524/18430 Consultado el 7 de Diciembre de 2017.

Como bien lo señala Begni, la interpretación de la ley cuando se habla de excepción a la misma, de ninguna manera puede ampliar ni restringir el contenido de dicha ley, por lo cual, solo debe sujetarse al verdadero sentido de la misma. En este caso concreto, el espíritu de la ley es la protección de la Seguridad Interior de las personas y las Instituciones del Estado, de ninguna manera, el sentido de este artículo va encaminado a ejercer actos arbitrarios o de mutuo propio por parte del Presidente de la República en donde se ponga en peligro la seguridad de las personas, sino por el contrario, lo que se pretende es brindar paz y seguridad en el territorio donde se ha rebasado el poder del estado para controlar las amenazas a la Seguridad Interior. A esto se suma el hecho de que el propio artículo establece la celeridad de emitir en el menor tiempo posible la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior para regularizar el procedimiento general que marca esta Ley.

Esta excepción a la ley incluso es utilizada en otros marcos jurídicos de protección de las personas, tal es el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual representa el ordenamiento adjetivo penal que norma el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, de recién implementación en el país. En su artículo 290 se establece una excepción a la orden de cateo sin orden judicial contemplada en el artículo 16 párrafo once constitucional, al señalar lo siguiente:

"Artículo 290. Ingreso de una autoridad a lugar sin autorización judicial

Estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando:

I. Sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas, o

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo.

En los casos de la fracción II, la autoridad que practique el ingreso deberá informarlo dentro de los cinco días siguientes, ante el Órgano jurisdiccional. A

dicha audiencia deberá asistir la persona que otorgó su consentimiento a efectos de ratificarla.

Los motivos que determinaron la inspección sin orden judicial constarán detalladamente en el acta que al efecto se levante."

En consecuencia, este artículo esta jurídicamente sustentado bajo el principio de excepción a la ley que es válido utilizar en todo orden jurídico, a efecto de dar cumplimiento al espíritu del legislador, en este caso concreto, para mantener el orden constitucional, el Estado de Derecho y la Gobernabilidad Democrática de la Nación.

Ahora bien, el artículo 8 establece lo siguiente:

"Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior."

La ratio legis de este artículo obedece a reafirmar el Estado Democrático que caracteriza a nuestro país. En todo ordenamiento jurídico que se construya desde el Poder Legislativo, se debe reconocer el derecho humano a la asociación pacífica que en diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado Mexicano y en nuestra propia carta magna se establecen. Es por ello que este artículo queda salvaguardado dentro de las disposiciones generales de la Ley de Seguridad Interior, misma que de ninguna manera puede permitir, a contrario sensu, los signos de violencia o utilización tergiversada de este tipo de protestas con la finalidad de desestabilizar a las Instituciones del Estado.

Los dos tratados internacionales vinculantes para el Estado Mexicano que protegen el derecho de reunión pacífica y sin armas son:

1. Convención Americana Sobre Derechos Humanos o el llamado "Pacto de San José"

"ARTÍCULO 15.- Derecho de Reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás."

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

"ARTÍCULO 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas."

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado."

A esta disposición constitucional, se suma la jurisprudencia P./J.26/2007 materia constitucional del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Tomo XXV de Mayo de 2007 en el Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente:

"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES.

El primer párrafo del artículo 7o. de la Constitución Federal establece que "Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta"; esto es, la prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio. Lo anterior significa que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el cual una autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate público por estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la atribución de responsabilidades -civiles, penales, administrativas- posteriores a la difusión del mensaje; además, el indicado artículo 7o. constitucional evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad de expresión al establecer que ésta "... no tiene más límites que el respeto a la

vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.". Por su parte, el artículo 6o. constitucional destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones de los poderes públicos al señalar que "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa", a excepción de aquellos casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados y directamente especificados en la Constitución Federal.

Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza."

Como podemos observar, nuestro propio andamiaje jurídico en materia de derechos humanos impone límites a la libertad de asociación y de manifestación o expresión, al señalar que sólo se permitirá ejercer este derecho de manera pacífica y sin armas, lo cual resulta armónico con lo establecido en el artículo 8 que contempla dicho supuesto normativo. Asimismo, se señala expresamente que este derecho podrá ser limitado en atención al interés de la Seguridad Nacional (aspecto que como ya queda de explorado derecho que la Seguridad Interior constituye una vertiente de ésta), que no altere el orden público o para salvaguardar los derechos de terceros.

A esto podemos sumar un estudio de derecho comparado denominado "Directrices sobre la libertad de reunión pacífica" (Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, su nombre en inglés)[72], donde la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la

[72] https://www.osce.org/odihr/73405?download=true Consultado el 7 de Diciembre de 2017.

Cooperación en Europa, establece lo siguiente respecto a las asambleas pacíficas y no pacíficas:

"Asambleas pacíficas y no pacíficas

25. Asambleas pacíficas: solo la reunión pacífica está protegida por el derecho a la libertad de reunión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que "[e] n práctica, el único tipo de eventos que no calificaron como 'asambleas pacíficas' fueron aquellos en los que los organizadores y los participantes intentaron usar la violencia". 56 (ver nota al pie al final del mensaje)

Los participantes también deben abstenerse de utilizar la violencia (aunque el uso de la violencia por un pequeño número de participantes no debe conducir automáticamente a la categorización como no pacífica de una asamblea pacífica, ver párrafo 164). Por lo tanto, una asamblea debe considerarse pacífica si sus organizadores han profesado intenciones pacíficas, y esto debe presumirse a menos que existan pruebas convincentes y demostrables de que quienes organizan o participan en ese evento en particular tienen la intención de utilizar, defender o incitar a la violencia inminente.

26. El término "pacífico" debe interpretarse de manera que incluya una conducta que pueda molestar u otorgarle importancia a las personas que se oponen a las ideas o afirmaciones que intenta promover, e incluso incluir conductas que obstaculicen temporalmente, impidan u obstruyan la actividades de terceros. Por lo tanto, a modo de ejemplo, las asambleas que involucren resistencia puramente pasiva deberían caracterizarse como pacíficas.

Además, en el curso de una asamblea, "un individuo no deja de disfrutar del derecho de reunión pacífica como resultado de la violencia esporádica u otros actos punibles cometidos por otros en el curso de la manifestación, si el individuo en cuestión permanece en paz en sus propias intenciones o comportamiento".

27. El espectro de conductas que constituyen "violencia" debe interpretarse de forma restrictiva, pero excepcionalmente puede ir más allá de la violencia puramente física para incluir el trato inhumano o degradante o la intimidación intencional o el acoso de un "público cautivo". En tales casos, las disposiciones sobre destrucción de derechos también pueden ser contratadas (véase el párrafo 15).

28. Si se cumple este criterio fundamental de paz, desencadena las obligaciones positivas derivadas del derecho a la libertad de reunión pacífica de las autoridades estatales (véanse los párrafos 31 a 34, 104 y 144 a 145). Cabe señalar que las reuniones que sobreviven a esta prueba inicial (y, por lo tanto, que merecen protección) aún pueden ser legítimamente restringidas por orden público u otros motivos legítimos (véase el capítulo 4)."

En consecuencia, el artículo 8 contempla el espíritu protector de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que son vinculantes para el Estado Mexicano, la intención de la Ley de Seguridad Interior versa incluso en proteger y velar en todo momentos por su respeto y protección. Un Estado Democrático como el nuestro de ninguna manera permitirá que se atente contra los derechos humanos, por el contrario, esta Ley protege tanto a Instituciones pero fundamentalmente a los ciudadanos, pues como bien lo señala el artículo 2 de esta ley, se garantiza el mantenimiento del orden constitucional mismo que sostiene como eje principal la obligación para todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias por promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

El presente Proyecto de Ley de Seguridad Interior se compone de 34 artículos, organizados en seis capítulos y cuatro artículos transitorios, es de orden público, de interés General y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.

Objeto, Disposiciones Generales y Principios

Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las Entidades Federativas y los Municipios en la Materia. Las disposiciones de la presente son materia de Seguridad Nacional.

Define a la Seguridad Interior como la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.

En las atribuciones de seguridad interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

La Ley de Seguridad Interior, no solo es una Ley diseñada para las Fuerzas Armas, sino es una responsabilidad de todo el Estado Mexicano, tanto de la población y gobiernos en los tres niveles; siendo así, de orden público, interés general y observancia obligatoria. Regula, por lo tanto, no la dinámica de las Fuerzas Armadas sino la función del Estado Mexicano para atender los riesgos y amenazas. En conjunto la Ley de Seguridad Interior

está diseñada para salvaguardar la Seguridad Interior del País y lo que plantea es, que en caso de amenazas, las autoridades actúen en el ámbito de sus competencias, observando en todo momento los derechos humano y las garantías.

Para atender a lo anterior, el título primero hace referencia tanto a las definiciones de conceptos básicos, como a los principios que se deben observar para la clara interpretación y actuación de la ley. Dentro del mismo marco conceptual, es claro notar la distinción de conceptos sumamente indispensables para su estructura, como Seguridad Nacional, Seguridad Interior, riesgos y amenazas a la seguridad interior; así como la definición de otros.

Por otro lado, concede también plena libertad para las protestas sociales o de motivo político-electoral, misma disposición que va en apego a Derecho. Una de las características de la Ley de Seguridad Interior es que no se centra en el detalle, sino que remite a otros marcos jurídicos donde por supuesto ya se encuentran previstas esas consideraciones, asimismo la supletoriedad que es aplicable.

PROCEDIMIENTO PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE PROTECCIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR.

Dicho procedimiento emana de la necesidad de crear un mecanismo, para que el Ejecutivo Federal pueda ordenar el apoyo de las autoridades federales, en un territorio o zona geográfica específica en cuanto exista una afectación a la Seguridad Interior, mediante una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

En ese sentido, el Presidente se auxiliará del Consejo de Seguridad Nacional para determinar la procedencia de las amenazas, para que en término de 72 horas contadas a

partir de la solicitud, dicha Declaratoria pueda ser emitida, misma que deberá notificarse por medio de la Secretaría de Gobernación, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior se sujeta a dos supuestos, de tal

manera que cuando se superen las capacidades de las autoridades competentes o exista falta o insuficiencia de la participación de entidades federativas y municipios, pueda ser preservada la Seguridad Interior mediante dicha declaratoria

Por otro lado cuando las entidades federativas envíen la petición de Declaratoria, deberá contener una descripción detallada de los hechos que constituyen la amenaza, su origen y motivación, así como el lugar y los grupos afectados además, toda aquella información que consideren pertinente; para que de esta forma se tomen las providencias pertinentes a fin de salvaguardar la Seguridad interior, viendo en todo momento y sin excepción los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos, aplicando las técnicas, tácticas, protocolos, armamento y mecanismos, para neutralizar la amenaza según sean sus características. Ahora bien, cuando la amenaza represente un grave peligro personal e institucional, el ejecutivo federal podrá tener la facultad de continuar con todas las acciones o modificaciones de seguridad que considere idóneas, mismas que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de las consideraciones anotadas, la declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener la autoridad coordinadora, el tipo de amenaza que se pretende atender, las acciones que se llevarán a cabo y el tiempo de duración; en este último punto es preciso mencionar esta vigencia no podrá ser mayor a un año.

Hay quien considera que a partir del procedimiento que prevé esta ley para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior, se le estaría dando al Ejecutivo Federal una facultad extraordinaria y omnipotente, sin embargo, ésta es una de las facultades que por mandato constitucional ya tiene el presidente, misma que se encuentra prevista en el Artículo 89, fracción VI de la Carta Magna.

La presente ley no pretende mantener por un tiempo prolongado o de forma permanente a las fuerzas federales, toda vez que no es posible prorrogar indefinidamente el plazo de la declaratoria de seguridad interior a que hace referencia el artículo 15 de esta Ley; para

ello se dispone, que se dichas declaratorias se encuentren publicadas en el Diario Oficial de la Federación según el numeral 12 de la Ley, el capítulo segundo comprende en general, los plazos, requisitos, supuestos, casos y vigencia que el procedimiento en comento debe contener.

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES

Se considera que las acciones que realicen las Autoridades Federales, a partir de la expedición de la Declaratoria de Protección, serán consideradas como acciones de Seguridad Interior; sin menoscabar las tareas de Seguridad Pública.

En este sentido, será la Secretaria de Gobernación quien implemente acciones de coordinación de las acciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior; así como destinar fuerzas federales para que realicen acciones de Seguridad Interior, donde se requiera.

Se prevé que las Fuerzas Armadas solo intervengan mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Armadas resulten insuficientes, lo anterior mediante un procedimiento dirigido por el Presidente de la República a propuesta de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina.

Ante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, se prevé que las autoridades de las Entidades Federativas, Municipios, tengan responsabilidades, tales como: aportar a la Autoridad Federal coordinadora toda la información que le sea solicitada, que permita cumplir los fines de la declaratoria, prestar auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora para atender la amenaza a la Seguridad Interior, entre otras.

Tratándose de fenómenos naturales perturbadores, la intervención de las Autoridades Federales, se sujetarán a lo previsto en la Ley General de Protección civil. Las Autoridades Federales y las Fuerzas Armadas no requerirán la emisión

de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, en acciones para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior. los mismos realizaran las acciones de Seguridad Interior con su organización, medios y adiestramiento, sin descuidar el fortalecimiento de sus capacidades.

Respecto al capítulo de autoridades se puede puntualizar que solo podrán actuar en el ámbito de sus competencias y no más allá de ellas. Regula la forma en que el Ejecutivo puede cumplir con su responsabilidad de preservar la seguridad interior, en coordinación con todas las demás instancias federales que incluya a las fuerzas armadas como último recurso y siempre con sus atribuciones y competencias, por lo que la aplicación de esta ley no genera un régimen militar, en el concepto de que esto sería como un precedente excepcional que, de presentarse las hipótesis en las que las amenazas representan un grave peligro o conflicto, tendrían que suspenderse garantías.

Este capítulo señala que cuando a petición de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, intervengan las Fuerzas Armadas, serán éstas las que tendrán el mando en la línea de coordinación en el plano de las operaciones, especificando que el Presidente es quien designará al comandante que dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren. En este supuesto cabe aclarar que no es monopolio de las Fuerzas Armadas, ni tampoco que se les dote de más autoridad de la que ya tienen definida. Es la simple aplicación de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea vigente, que faculta a cada quien en sus propias responsabilidades y atribuciones.

Por otro lado, si la seguridad interior es una función de las Fuerzas Armadas éstas deben contar con la capacitación, adiestramiento y tropas especializadas para atender los temas de seguridad interior; pero como Fuerzas Armadas. A eso nos referimos cuando dicen que no se les pida desnaturalizarse, es decir, que cambien su adiestramiento, sus vehículos; sus uniformes, etc. Si para el caso, la amenaza ya se declaró que es de seguridad interior y que se requiere a las Fuerzas Armadas; pues se requiere a las Fuerzas Armadas con todo lo que implica el actuar en su naturaleza de autoridad para resolver asuntos que rebasan las capacidades de las autoridades civiles.

INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR

Las acciones de Seguridad Interior se apoyarán en los órganos, unidades y procesos de inteligencia. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior, podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información.

El capítulo establece que las instancias que tengan funciones de inteligencia, la lleven a cabo y la coordinen para poder proporcionarla y sea usada en la toma de las decisiones en las acciones de seguridad interior, señalando que la información que se obtenga tendrá que ser por medios lícitos, por lo tanto, las intervenciones telefónicas no podrán practicarse sin autoridad de un juez federal; y ese juez federal tendrá que seguir el procedimiento y revisar que se cumplan los requisitos que el propio Código de Procedimientos establece.

CONTROL DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR Y RESPONSABILIDADES.

El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas por conducto de la Secretaria de Gobernación. La misma Secretaria remitirá un informe a la Comisión Bicamaral.

El incumplimeitno a las obligaciones previstas en esta Ley y en la Declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción.

Hablando de los controles de las acciones en materia de seguridad interior, la propia ley establece que en el procedimiento la autoridad que solicite el apoyo, si es que es por vía de una petición de una entidad federativa, tiene que explicar claramente cuál es la amenaza, cuáles fueron los antecedentes que la llevaron, cuál es el ámbito de la insuficiencia gubernamental por la cual la amenaza creció y no puede ser atendida por

ellos; y cuáles acciones son las que va a hacer para recuperarlo. Y la declaratoria también tiene que explicar cómo es que llega a esa situación.

El Consejo de Seguridad Nacional es un órgano de consulta. El procedimiento que prevé la norma es que, precisamente las peticiones de intervención federal pasen por el análisis del Consejo de Seguridad Nacional.

Primero, para copiar la información que los órganos federales de seguridad nacional, puedan tener sobre ese mismo fenómeno que se está anunciando. Para que puedan analizar si las causas que expresa la entidad federativa existen, son reales, son de la magnitud y de veras no tienen las capacidades para atenderlas por sí mismo.

Y con todo ese análisis, con toda esa información acopiada de la Federación, someter a consideración del Presidente, que es el de la facultad constitucional, decida si emite o no una declaratoria. Y esa declaratoria tendrá todo el bagaje, todo el soporte de la necesidad en los términos, primero del dictamen del propio Consejo; y de los considerandos que seguramente la declaratoria deberá tener en su conjunto.

REGIMEN TRANSITORIO

La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; y en su caso con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados.

Asimismo, las Entidades Federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos. derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Si a la entrada en vigor de la presente Ley existen situaciones en las que se surten las hipótesis contenidas en el artículo 11, se aplicará el procedimiento ahí previsto,

sin perjuicio de que en tanto se materializa el mismo, las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas, continúen realizando las acciones que estén llevando a cabo para atenderlas. Las que no requieran declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen.

DE LA DELIBERACIÓN EN COMSIONES UNIDAS.

Previo a la deliberación de las Comisiones Unidas, se acordó por las Juntas Directivas de las Comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, posponer la reunión convocada para esos efectos citada el día 11 de diciembre, con la finalidad de abrir un espacio para escuchar a diversos actores de la sociedad civil, académicos, expertos, así como a servidores públicos operadores de las acciones materia de esta ley, gobernadores y alcaldes.

A través de las versiones estenográficas siguientes damos cuenta de dichas reuniones:

Inicio de la Versión Estenográfica

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de los presidentes de las comisiones dictaminadoras de la minuta de Ley de Seguridad Interior con gobernadores y alcaldes, en el Senado de la República.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: *Damos la bienvenida al senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.*

A la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación.

Al senador Fernando Torres Graciano, también presidente de una de las comisiones dictaminadoras.

A la senadora Dolores Padierna, muchísimas gracias.

Y muy especialmente a los gobernadores por acudir a este ejercicio de diálogo sobre un tema de máximo interés para todos los mexicanos.

La seguridad interior es una responsabilidad que compete a todo el Estado Mexicano y es nuestro deber, desde nuestras respectivas atribuciones, trabajar sin descanso para preservar la gobernabilidad del Estado de Derecho y la tranquilidad de la sociedad.

Hoy, en el poder Legislativo tenemos la gran responsabilidad de dar vida a un marco normativo que pueda delinear la actuación del Estado ante las distintas amenazas a la seguridad interior.

Nuestras Fuerzas Armadas han sido piedra angular en la defensa de todos los mexicanos en la defensa de toda la sociedad. Debemos reconocer su trabajo, dotarles de certeza jurídica en esta noble labor que realizan; las Fuerzas Armadas deben actuar bajo un esquema bien delimitado, que sea conocido por todas y por todos.

Por eso, la Ley de Seguridad Interior es fundamental para dar certidumbre tanto a ciudadanos como al Estado, para procurar nuestra seguridad.

Queremos reconocer el esfuerzo que se hizo en la Cámara de Diputados y decirles que, bueno, a partir de que nos llegó la minuta correspondiente, hemos estado trabajando, escuchando a todas las voces.

Hemos escuchado a organizaciones de la sociedad civil. Hemos tenido también la posibilidad de escuchar a instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha estado con nosotros el Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Han estado también el presidente comisionado del INAI y, bueno, hoy nos da mucho gusto recibir a los gobernadores de Jalisco, de Colima, de Guerrero, de Tlaxcala, de Querétaro, de Durango, de San Luis Potosí, sean muy bienvenidos, dada la responsabilidad que en materia de seguridad ustedes tienen en sus entidades federativas y la coordinación obligada, y qué bueno, que tienen con autoridades locales, que la siguiente reunión será con alcaldes y por supuesto con la autoridad federal y con el Ejército en particular, nos interesa mucho escuchar su opinión.

Cedo el uso de la palabra, le damos la bienvenida al senador Ernesto Gándara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, que hay que decir que no es de las comisiones dictaminadoras, pero que ha estado presente en todas estas reuniones.

Cedo el uso de la palabra al presidente del Senado, el senador Ernesto Cordero.

***SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO:** Muchas gracias senadora Presidente.*

Les agradezco a todos su atención. Saludo a mis compañeros senadores, me da mucho gusto verlos. Saludo a los señores gobernadores, al señor gobernador de Jalisco, de Colima, de Guerrero, de Tlaxcala, al señor gobernador de San Luis Potosí.

Con principal aprecio le doy la bienvenida a nuestros compañeros senadores, al señor gobernador de Querétaro y al señor gobernador de Durango, los tenemos prestados en sus gobiernos estatales, pero son senadores de esta legislatura y bienvenidos a su casa.

Saludo al senador Lozano también y, bueno, yo creo que el ejercicio democrático que estamos haciendo en el Senado, como siempre, de escuchar a todos los actores antes de dictaminar una ley, es algo que ha caracterizado a este Senado de la República.

Hemos hecho las cosas con mucha responsabilidad y me da mucho gusto que sigamos en esa lógica.

El tema que nos compete el día de hoy es de la mayor relevancia, celebro el liderazgo de los presidentes de las comisiones correspondientes, de la senadora Cristina Díaz y del senador Fernando Torres Graciano, para llevar a buen término esta discusión y sobre todo que podamos dictaminar lo mejor para el país.

Esta reunión reviste pues ahora sí que la mayor relevancia, están aquí los actores centrales de esta ley, que son los gobiernos locales, gobiernos locales que enfrentan amenazas a la seguridad interior en cada uno de sus estados, donde las familias mexicanas están siendo amenazadas por las amenazas de seguridad interior por la delincuencia organizada y qué mejor que escuchar su opinión antes de que dictaminemos una ley tan importante.

Muchas gracias Presidenta y te agradezco mucho la invitación.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: *Al contrario, muchas gracias.*

Antes de cederle el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz, que nos hará el favor de conducir esta reunión, quiero agradecer la presencia de nuestro compañero Javier Lozano, senador por Puebla, por supuesto, pero quien viene hoy además con la representación del gobierno de Pueblo.

Y por supuesto, a Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina en el Senado. Bienvenidos. Está el senador José María Tapia, está el senador Juan Carlos Romero Hicks, el senador y exgobernador Ernesto Ruffo y el senador Héctor Flores.

Muy bienvenidos todos.

Adelante.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: *Gracias.*

Una disculpa que omití mencionar a mi compañero, el presidente de la Comisión de Marina, a don Ricardo, y también a mi compañero, el senador Benjamín Robles, quien también dictamina esta iniciativa.

Gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias. Muy buenos días, presidentes.*

Presidenta de la Junta de Coordinación Política, presidente de la Mesa Directiva, senador Cordero; presidentes de las comisiones que integramos este proyecto de dictamen que estamos trabajando en comisiones unidas.

Agradezco mucho a la secretaria de la Comisión, la senadora Dolores Padierna, su presencia. Y, sin duda, ustedes, señores gobernadores, que hoy nos acompañan.

Debo señalar como un antecedente importante, y seré breve, primero señalar lo siguiente:

La sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, se celebró el día 30 de noviembre del presente año; se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior: 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones. El mismo, es remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Y el 30 de noviembre del 2017, mediante oficio, llega a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remite el expediente con la minuta de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

El 1º de diciembre de 2017, mediante oficio, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, instruyó turnar el proyecto referido a las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

El proyecto de Ley de Seguridad Interior, se compone de 34 artículos organizados en seis capítulos y cuatro artículos transitorios. Es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.

Aborda, en principio, que la ley tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Las disposiciones de la presente son materia de seguridad nacional.

Define, asimismo, esta minuta, a la seguridad interior como la condición que proporciona el Estado Mexicano, que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional.

Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinadas para dichos fines, respetando en todo momento los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional, en los términos de la presente ley.

En las atribuciones de seguridad interior, se observarán los principios previstos en el artículo cuatro de la Ley de Seguridad Nacional, y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

La Ley de Seguridad Interior, no es sólo una ley diseñada para las Fuerzas Armadas, sino es una responsabilidad de todo el Estado Mexicano, tanto de la población y gobiernos en los tres niveles, siendo así de orden público, interés general y observancia obligatoria.

Regula, por lo tanto, no la dinámica de las Fuerzas Armadas sino, y subrayo, la función del Estado Mexicano, para atender los riesgos y amenazas.

En conjunto, la Ley de Seguridad Interior está diseñada para salvaguardar la seguridad interior del país, y lo que plantea es que, en caso de amenazas, las autoridades actúen en el ámbito de sus competencias, observando en todo momento los derechos humanos y garantías.

Y concede también la plena libertad para las protestas sociales o de motivo político-electoral, misma disposición que va en apego a derecho.

Una de las características de la Ley de Seguridad Interior es que no se centra en el detalle, sino que nos remite a otros marcos jurídicos donde, por supuesto, ya se encuentran previstas estas consideraciones y, asimismo, la supletoriedad que es aplicable.

Con estos antecedentes, les damos, pues, la más cordial bienvenida.

He ha solicitado la presidenta de JUCOPO, la senadora Ana Lilia, que la participación de cada uno de los señores gobernadores, lo hagamos, si ustedes están de acuerdo, por entidad federativa de acuerdo al orden alfabético.

Así que, si me permiten, tendrá el uso de la palabra el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima.

GOBERNADOR JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ: Muchas gracias, muy buenos días.

Agradezco en todo lo que vale la invitación que nos hace respetuosamente la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política.

Y saludamos también con mucho gusto a la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación.

Mi saludo respetuoso al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, así como a los integrantes de las comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos, así como a todas las senadoras y senadores que aquí nos acompañan.

También saludo respetuoso a los gobernadores de las distintas entidades federativas que participan en este ejercicio, a las autoridades del Gobierno Federal, y a los medios de comunicación.

Señoras y señores:

Para el gobierno de Colima, es necesaria una Ley de Seguridad Interior, considerando el crecimiento de los índices delictivos en los últimos años.

El análisis de esta posibilidad, debe superar, a nuestro juicio, las posiciones de tipo político, partidista o electoral.

Este importante tema, demanda objetividad y, por ello, reconozco este ejercicio republicano de diálogo responsable, y agradezco la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones.

La seguridad interior y la seguridad de las familias mexicanas exigen una respuesta de Estado. Los elementos ausentes de la política pública en materia de seguridad, deben atenderse; y el diseño y análisis de la misma, debe ser un ejercicio permanente.

En Colima, la principal exigencia ciudadana es restablecer las condiciones de seguridad, y se requiere de toda la fuerza del Estado para lograrlo.

Creo que todo análisis sobre los alcances de la ley que nos convoca, requiere compartir la experiencia cercana.

En el caso del estado de Colima, hemos experimentado un deterioro en los índices de seguridad, particularmente un aumento en los homicidios dolosos del fuero federal, como resultado de una confrontación entre peligrosos grupos de la delincuencia organizada.

No debemos omitir que las fuerzas locales de seguridad, han sufrido lamentables bajas, en un esfuerzo permanente de contención y lucha contra estos grupos, cuyo liderazgo tiene su sede en espacios que normalmente van más allá de nuestras fronteras estatales.

En este sentido, Colima no es un estado generador sino importador de violencia.

Los colimenses, somos un pueblo que respeta la ley y que exigimos vivir en paz y armonía.

En esta difícil circunstancia, hemos contado siempre con el respaldo de las Fuerzas Armadas del país, sea del Ejército Mexicano o de la Marina Armada de México, que han actuado en todo momento en estrecha coordinación con las fuerzas estatales y municipales, y con una actitud de pleno respeto a nuestro orden legal y a los derechos humanos.

El pueblo de Colima agradece el apoyo de las instituciones armadas, y solicita su presencia para coadyuvar a restablecer las condiciones de seguridad.

Ese respaldo, logró contener algunos momentos, el avance de los grupos delincuenciales, y nos ofreció respaldo institucional frente a una circunstancia difícil.

Si tuviéramos de una forma más consistente y permanente el respaldo de estas instancias, amparadas en una ley como la que aquí se comenta, considero que nuestros resultados serían ya distintos.

No debe olvidarse que la ley no facultará la invasión de la esfera competencial de las fuerzas del orden local, mismas que estamos en camino de fortalecer.

Tampoco generarán sustitución de estas autoridades ni establecerán un Estado de excepción, pues desde la Constitución en su artículo 89, fracción VI, se expresa cómo facultad y obligaciones

del Ejecutivo, el preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Me parece que una ley que otorgue certeza jurídica a las intervenciones en materia de seguridad interior, con la adecuada regulación de sus implicaciones, alcance y duración, las cuales iniciarían a petición expresa de autoridades claramente definidas y con criterios precisos acerca de su conclusión, sin olvidar el respeto irrestricto a los derechos humanos, puede ofrecer un marco adecuado para construir un nuevo modelo de participación de las Fuerzas Armadas en estas importantes tareas.

No debemos olvidar que la filosofía que inspira a las Fuerzas Armadas del país, es la defensa de la soberanía nacional, lo que implica la preservación de los valores nacionales de libertad, paz y estabilidad.

Me parece que en estos momentos la amenaza a la soberanía y a estos valores, no depende de naciones adversarias, sino de fuerzas locales que actúan extralegalmente, sin límites económicos y haciendo uso de armas de alto poder.

Esto además es un reto que trasciende nuestras fronteras. Creo que todo ello brinda argumentos y evidencias más que suficientes, para acreditar la necesaria participación de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a este desafío de contribuir entre todos a fortalecer la seguridad nacional y la permanencia del Estado de Democrático de Derecho, desafío que se muestra como el más importante de nuestra época.

Entiendo que han surgido diversos cuestionamientos por parte de prestigiados organismos especializados en la defensa de los derechos humanos, pero me parece que la Ley de Seguridad Interior no entra en conflicto con esa sensible materia.

Esos cuestionamientos, si bien inspiran un prudente análisis, precisamente para que la normatividad los considere y garantice, no deben significar la restricción del deber del Estado para imponer sobre grupos delictivos que están amenazando la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas.

La ley considera los principios de racionalidad, proporcionalidad, responsabilidad, legalidad y respeto a las garantías constitucionales y los tratados internacionales.

La ley además ofrece certeza a la coordinación interinstitucional entre autoridades civiles y militares y prevé la intervención de los representantes de los organismos de protección, ya que establece una notificación previa a la Comisión Nacional y a la Comisión Bicameral de los derechos Humanos.

En suma, para el gobierno de Colima esta ley no buscaría sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino establecer una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno para enfrentar el reto de la seguridad interior, dentro del sistema constitucional y en el respeto a los derechos humanos, dando orden y certeza jurídica a lo que en realidad se viene realizando desde hace tiempo.

Es necesario hacerlo así por México.

Muchas gracias a todas y a todos por su atención.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias señor gobernador José Ignacio Peralta.

Tiene en estos momentos ya la palabra el doctor José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango.

GOBERNADOR JOSÉ ROSAS AISPURO: Gracias senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación; presidenta de la Junta de Coordinación Política, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo; señor presidente del Senado, Ernesto Cordero, y a todos los senadores presidentes de las comisiones dictaminadoras, los saludo con mucho afecto.

Nos da un gran gusto estar aquí, en esta que fue nuestra casa y coincidir con nuestros amigos, nuestros compañeros gobernadores y tocar hoy un tema que nos parece de la mayor importancia.

Deciles que, como gobernador de Durango, vengo a pedirle el respaldo a nuestros legisladores, a los senadores de la República, para que se pueda aprobar la minuta que acordara, que aprobara, que enviara la Cámara de Diputados, minuta que hemos revisado en el ámbito de las responsabilidades que en materia de seguridad tenemos en el estado de Durango.

Y lo que hemos podido observar es que esta ley se constriñe estrictamente a las facultades constitucionales y legales y a los tratados internacionales en materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos y nos parece que hoy que en el tema de la seguridad pública y de la seguridad interior ha habido una confusión en términos de que hace años sólo la autoridad civil, como es la responsabilidad que tiene hoy en día el tema de la seguridad pública, que tiene que ver desde la prevención, la investigación y la sanción a quienes cometen un delito.

Pero hoy en día, por las circunstancias, con la presencia que tienen los grupos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, han rebasado lo que en el pasado sólo era un tema que debiéramos de atender las autoridades civiles y ahora hemos pasado a un tema de seguridad interior.

¿Por qué?

Porque en el pasado, sólo en el caso de la droga, México sólo era un país de paso, era sólo el trasiego de la misma y ahora esa droga, una parte se queda en el país, se consume en el país y los grupos de la delincuencia organizada ya no sólo han actuado en materia del tráfico, de la distribución de droga, sino también de otras actividades ilícitas que ponen en riesgo precisamente la seguridad interior.

No es que nosotros estemos abandonando la responsabilidad que tenemos en materia de seguridad pública, esa la estamos asumiendo, pero al vernos rebasados en algunos casos por la debilidad institucional de las corporaciones policiacas, indudablemente que eso pasa o transgrede la seguridad interior.

Y en esa parte es donde necesitamos que el Ejército mexicano pueda tener un marco jurídico que le permita actuar con toda certeza e igual que la sociedad tenga la certeza de la actuación del Ejército.

Hoy en día, el Ejército puede participar y no necesariamente tenemos los protocolos que garanticen una actuación apegada a derecho y con esto, lo que buscamos es que, con lo que yo he podido, después de la revisión de esta minuta, se observa claramente que ahora habrá protocolos a los cuales se tendrá que ceñir el propio Ejército o cualquier corporación de las Fuerzas Armadas, al marina, la Fuerza Aérea y eso permitirá darle certeza a la sociedad y, desde luego, hablo en el caso de Durango, la participación del Ejército Mexicano y de la marina ha sido muy importante para poder restablecer la tranquilidad, para recuperar la paz.

¿Por qué?

Porque las acciones en las que ellos están participando no son en materia de seguridad pública, sino son de seguridad interior, de no tener el respaldo del Ejército Mexicano y de la marina, indudablemente que no habíamos recuperado esa tranquilidad en la Laguna, en el resto del estado y hoy lo que queremos es que tanto el Ejército y la marina tengan esa certeza de que para actuar, en caso de que pongamos en riesgo la seguridad interior, pueda haber la garantía, los protocolos que nos garanticen el pleno respeto a los derechos humanos.

Por eso, para nosotros, la aprobación de esta minuta que envía la Cámara de Diputados, es de la mayor importancia, en tanto se fortalecen las capacidades institucionales, para que hoy los gobiernos estatales estaríamos más obligados a avanzar con mayor rapidez, no sólo en tener un mayor número de elementos en las corporaciones policiacas, sino a tener la capacitación que se requiera, para poder garantizar la seguridad pública.

Pero aquí estamos hablando de un tema que sobrepasa la seguridad pública, que es la seguridad interior y esta seguridad interior, derivado de lo que señala la propia Ley de Seguridad Nacional, hay protocolos muy claros a los cuales se tiene que sujetar.

Por eso, para nosotros, hablo en el caso de Durango, es muy importante el respaldo de las y de los senadores, para aprobar esta minuta y de esa manera poder garantizarle a la sociedad que habremos de seguir trabajando, no sólo para garantizar la seguridad pública, sino para garantizar la seguridad interior. De no hacerlo así, ponemos en riesgo la seguridad interior, hablo en el caso particular de Durango.

Y también quiero decirles que nos han pedido los compañeros gobernadores de Baja California Sur, de Aguascalientes y el gobernador de Tamaulipas, que por razones de agenda no estuvieron, expresarles exactamente el mismo sentir, la misma preocupación que hoy estamos manifestando y creo que en esta parte, más allá de cuestiones de colores partidarios, lo que tenemos es un compromiso con la sociedad, y para poder cumplir con ese compromiso tenemos que tener este marco jurídico que permita esa participación de los tres órdenes de gobierno en los temas sí de la seguridad pública, tal y como lo señala el artículo 21 de nuestra Constitución, pero en este caso necesitamos la presencia de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior.

No estamos pidiendo el apoyo para seguridad pública, lo estamos pidiendo para la seguridad interior, que eso es lo que hoy en día tiene preocupada a la sociedad.

Creo que la mayor inquietud de los ciudadanos es cómo garantizar esa seguridad interior, y que desde luego en la parte de la seguridad pública, nosotros tendremos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar ello.

Hoy, creo que con esto, con esta nueva ley, estaríamos seguros de que le damos la certeza a las Fuerzas Armadas, y también le damos la certeza a los ciudadanos de que éstas actuarán siempre con estricto apego a derecho, y por ende con estricto respeto a los derechos humanos.

Por eso, les agradezco mucho, amigas y amigos senadores, la oportunidad que nos dan de expresar las razones por las cuales requerimos la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior.

Por su atención, muchas gracias.

Muchas gracias, gobernador Rosas Aispuro.

Damos la bienvenida al coordinador del Grupo Parlamentario, don Manuel Bartlett del grupo PT-MORENA. Bienvenido sea usted.

Y al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Benjamín Robles.

Tiene la palabra el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, el gobernador de Guerrero.

GOBERNADOR HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES: Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos.

De manera muy especial, me es muy grato saludar a quien ha convocado a esta reunión, a la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Y de la misma manera, al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y la Presidenta de la Comisión de Gobernación.

A todos y cada uno de los presidentes también de las comisiones que intervienen en esta iniciativa, que es minuta, y a todos y cada uno de los senadores y senadoras que están aquí presentes.

Saludo a mis compañeros y amigos, paisanos, senadores, que están aquí presentes: Esteban Albarrán y Sofío Ramírez, muchas gracias.

Entendiendo la responsabilidad que tienen los senadores de la República y las senadoras, por haber estado también en el Senado de la República en algún momento, me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa y responsable.

Lo primero que les tengo que decir es que no es la primera ocasión que los gobernadores nos reunimos para conversar sobre este tema.

En diversas ocasiones, en diversos lugares, en diversos encuentros, los gobernadores y la gobernadora, hemos tratado este tema de la Ley de Seguridad Interior.

Si bien recuerdo, y no me dejarán mentir aquí los gobernadores que están presentes, salvo alguna opinión de algún gobernador, incluido por supuesto también el Jefe de Gobierno de la ciudad, ha sido en sentido positivo la opinión de gobernadores y gobernadora.

Me parece muy correcto que el Senado de la República convoque para escuchar la opinión de quienes tenemos representaciones en las
Entidades federativas.

Su servidor, en mi carácter de gobernador de Guerrero, me siento con el valor político para expresarles a ustedes que las circunstancias por las que atraviesa el país, orientan a darle la mayor atención y responsabilidad a este tema.

La suma de factores estructurales y de coyuntura, han colocado al país, y especialmente a Guerrero, a una circunstancias de riesgo para la seguridad del país.

He expresado, y lo manifiesto aquí en la representación del Pacto Federal, que Guerrero es un asunto y se ha convertido en un asunto de seguridad nacional.

Voy a darles algunos datos para dimensionar lo que Guerrero enfrenta todos los días:

Más de dos mil homicidios en el presente año, colocan a mi estado en un penoso primer lugar nacional.

Extensas zonas son disputadas todos los días por bandas criminales, por el control del territorio.

Bandas que se multiplicaron por la fragmentación de los llamados "carteles tradicionales o históricos".

El país es el tercer mayor productor de amapola del mundo, y Guerrero produce la mitad de lo que se produce en la nación.

Esta condición alarmante a la que se suma el inexistente control de armas y la alta demanda de heroína de parte de Estados Unidos, son responsables de la circunstancia de violencia y drama que se sufre en mi estado.

No hay que olvidar, señoras y señores, que los Estados Unidos y en los Estados Unidos especialmente se vive el Boom de la heroína.

No hay que descartar también lo que he mencionado, de la gran cantidad de armas que existen en el país.

Los cuatro mil policías del estado de Guerrero son insuficientes para cubrir el territorio. Sin embargo, he de reconocer también el esfuerzo que se hace en el estado por cada uno de los integrantes de la policía del estado.

En el orden municipal, hay cerca de cinco mil policías municipales. Son policías municipales, en su mayoría, ausentes.

La lucha que se enfrenta todos los días por parte de la policía del estado, sería impensable sin la presencia que han manifestado las Fuerzas Armadas.

Por ello, resulta una imperiosa necesidad darle un marco legal que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen.

En Guerrero, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México han sido leales con el pueblo de Guerrero, y han sido también respetuosos de los derechos humanos.

En Guerrero, quienes violan los derechos humanos son los delincuentes; son los delincuentes quienes buscan someter a pueblos y a autoridades. Por ello, la necesidad de la existencia de la Ley de Seguridad Interior.

Por eso estamos convencidos de que la seguridad debe considerarse un derecho humano, en el que todas las instituciones del país debemos contribuir.

Por ello, resulta de la mayor importancia y relevancia este diálogo que sostenemos con el Senado de la República, para fortalecer y para enriquecer la minuta que ha llegado de parte de la Cámara de Diputados.

Como gobernador de Guerrero, considero que es procedente aprobar el dictamen en el Senado para revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres órganos de gobierno en tareas de seguridad.

La Ley de Seguridad contempla temporalidad. Me parece que es un tema muy importante que es necesario difundir más.

Considero también que, en su momento, el Congreso Nacional debe superar, debe colaborar para superar las limitaciones presupuestales en el tema de seguridad en el país.

En Guerrero, siendo una entidad que ha vivido una situación de incidencia delictiva desde hace varios años, el Ejército Mexicano y la Marina y la Policía Federal han estado presentes, pero creo que es importante darles certeza jurídica.

Finalmente, reitero, como gobernador de Guerreo, planteo ante ustedes, con el respeto a sus facultades e investidura, que es procedente para nosotros que esta minuta pueda ser considerada por ustedes y aprobada.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, gobernador Astudillo.

Agradecemos también la participación del senador Joel Ayala, secretario de la Comisión de Defensa Nacional; del senador Héctor Larios, secretario de la Comisión de Gobernación, y de mis amigos y compañeros senadores Esteban Albarrán, miembro de la Comisión de Gobernación y Sofío Ramírez.

Sean todos bienvenidos.

Tiene la palabra el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador por el estado de Jalisco.

GOBERNADOR JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ: Muchas gracias.

Primero, reconocer la convocatoria, ampliar esta discusión, debate, que a todos los mexicanos nos interesa, siendo una prioridad en cada uno de los estados nacionales.

Y que se nos escuche a los distintos ámbitos de gobierno, sociedad civil, distintos actores de la sociedad, es fundamental para el fortalecimiento de la República y sobre todo resolver un problema grave, en el ámbito de la seguridad.

Por ello, acudo a esta Alta Tribuna, con la convicción de que mi voz no tiene más motivo que exponer la visión de una entidad que durante los últimos cinco años ha hecho frente a una, la que sin duda es la principal problemática de nuestro tiempo: el crimen organizado.

En un principio, dedicado al tráfico de estupefacientes y desde fechas recientes, a otros diversos delitos que amenazan la estabilidad del Estado Mexicano.

Sabemos lo que es enfrentar este lastre de forma, digamos aislada, con la mera fuerza estatal, y lo que es hacerlo con el apoyo de nuestras fuerzas armadas.

Por eso, tengo claro que de momento es imprescindible una estrategia conjunta de todos los Órdenes de Gobierno, en la que la presencia del Ejército Mexicano, y la Marina Armada de México, esté claramente delimitada para atender exclusivamente las amenazas a la seguridad interior.

No quisiera ahondar mucho en el caso de Jalisco, pues estoy cierto de que la problemática remite por supuesto a un asunto de primera importancia a nivel nacional.

Baste decir que en el Estado del que provengo, desde el año 2014, se implementó un formato híbrido de mando único, que nos permitió hacer frente a un grupo delictivo de alta peligrosidad y capacidad de fuego.

Ese grupo, hoy considerado el más gravoso para el país, encabezó severos ataques a las fuerzas estatales, agrupadas en torno a lo que denominamos Fuerza Única, lo que devino en una numerosa baja de efectivos de la corporación.

No fue sino hasta el año 2015, luego del ataque a la unidad aérea del Ejército Mexicano en la zona sur del Estado, en aquel 1° de mayo, cuando con el apoyo de nuestras fuerzas armadas logramos finalmente replegar al grupo delictivo, que al ver limitado su alcance en Jalisco, expandió sus actividades criminales a otras entidades del país, dejando a su paso una ola de violencia causada por grupúsculos que afines al cártel y ante la ausencia de sus líderes principales, terminaron por desencadenar una guerra entre sí.

Menciono este relato porque me gustaría dejar clara mi postura como gobernador de una de las entidades preponderante en número, dinámica económica, desarrollo tecnológico, actividad turística, tradición y cultura del país, en el sentido de que es absolutamente necesaria e inaplazable la aprobación de una ley que permita a las fuerzas armadas seguir colaborando con las entidades federativas, en un marco en el que tanto la sociedad militares, tengan derecha sobre sus derecho, facultades, limitaciones y alcances.

Es preciso señalar que, bajo las circunstancias en las que estamos actualmente, la presencia de las fuerzas armadas en las entidades federativas, se da en el marco de un vacío legal.

Este vacío no tiene más que generar incertidumbre. A los gobiernos estatales les da la opción de evadir su responsabilidad, de brindar seguridad con sus fuerzas civiles.

A los militares, les genera angustia, pues caminan a ciegas, haciendo frente a una batalla en la que ellos no pidieron estar, mientras que a la sociedad tampoco le brindan certeza respecto a quienes están al mando y asumen la responsabilidad de su seguridad.

A la luz de este vacío, de esta falta de regulación se abre la puerta a posibles violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, permítanme ser reiterativo.

Se genera el incentivo a los jefes del Ejecutivo Estatal, a dejar de lado su responsabilidad constitucional, indilgando responsabilidad de seguridad pública a las fuerzas armadas.

Ello explica por qué en muchas entidades son militares quienes cumplen las labores de policía de proximidad preventiva, y por absurdo que parezca, hasta de tránsito y vialidad.

Y es que en el marco de este debate debe de quedar absolutamente precisado que ninguna ley puede eximir a los ejecutivos locales de lo que es y seguirá siendo nuestra responsabilidad, garantizar la seguridad de nuestras entidades, a partir de la depuración constante y permanente de nuestras fuerzas de seguridad civil.

Es mucho lo que desde lo local se ha dejado de hacer en los últimos 11 años.

La presencia del Ejército y Armada en labores de seguridad, se dio bajo la premisa de que las policías estatales debían de reformarse, a fin de que en corto plazo pudieran hacerle frente al crimen organizado. Y esto hay que decirlo claro: no se ha logrado.

Muchos ejecutivos estatales han renunciado a su obligación de brindar seguridad, a partir del fortalecimiento de sus instituciones policiacas, y eso es sencillamente inaceptable.

No hay ley capaz de subsanar la ausencia del compromiso de terminación por parte de quienes encabezamos un gobierno subnacional.

Lo primero que tendría que establecer antes de entrar de lleno en el debate del proyecto de ley que se encuentra aquí en el Senado de la República, es la necesidad de que los gobiernos estatales cumplamos con lo que marca la norma y establezcamos tiempos precisos para llevar a la conclusión la depuración de las corporaciones locales, y así asumir cabalmente y en corto plazo la responsabilidad de la seguridad pública en nuestras entidades.

Si establecemos tiempos para que esto suceda, entonces también podría ya, en el marco de la discusión de este Dictamen de Ley, dar certeza a la sociedad de que en el momento que nuestras fuerzas armadas, ante la presencia de cuerpos policiales civiles, estatales, sólidos, depurados y fortalecidos, podrán regresar a sus cuarteles a cumplir sus funciones constitucionales.

El término que marca el proyecto de ley de un año, dependiendo de cada eventualidad, está claro respecto al caso específico, pero es poco preciso respecto a la estrategia general.

La sociedad debe tener certeza sobre cuánto tiempo más se extenderá la presencia de las fuerzas armadas en esta lucha, en la que fueron habilitados.

En este orden de ideas y tratando de embarcar la discusión en algo que vaya un poco más allá del debate de este proyecto de ley, estimo pertinente hacer un llamado a los legisladores a retomar la discusión de la propuesta del Mando Único, que fue enviado por el Ejecutivo Federal, ya hace algunos años.

Me parece fundamental que, en aras de dar certeza a los ciudadanos respecto a la responsabilidad de los gobiernos estatales de asumir la seguridad pública de su entidad, contar con el respaldo normativo que permita consolidar las instituciones policiales más fuertes y menos dispersas.

Aparejado de esto y retomando la línea preventiva que por nada debe de ausentarse en la discusión de una estrategia integral, estimo conveniente alzar la voz para que, luego de desahogada la discusión respecto a la Ley de Seguridad Interior, dé inicio el necesario debate a la legalización de algunas substancias.

Es imprescindible para llevar a cabo este debate, sin tabúes, respecto a la necesidad de atacar lo que es principal remanente de la problemática que enfrentamos.

Lo he dicho en otros espacios y hoy me permito reiterarlo: lo que mata a nuestros jóvenes es la violencia que subyace al trasiego ilegal, no el consumo.

Si queremos darle integralidad a nuestro accionar, es obligatorio abrir el debate.

Criminalizar a las personas, buena parte de estos jóvenes, por una adicción, no es la ruta, y 11 años lo constatan.

Por último, no puedo dejar de referirme a los apuntes que han hecho diversos representantes de la sociedad civil y organismos autónomos respecto al debate que hoy nos convoca.

Estimo necesario despejar cada una de sus preocupaciones, porque estas decisiones deben de contar no solamente con la participación activa de la sociedad civil, sino con la evidencia de que sus postulados no nada más son escuchados, sino que permiten, en los hechos, modificar, rectificar y mejorar la labor de los poderes constituidos, en el caso del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo Federal.

Hay inquietudes, como el Artículo Nueve del Dictamen de esta Ley, respecto al cual advierte que dicha disposición es contraria al principio de máxima publicidad, lo que restringirá el derecho que tiene la ciudadanía de saber sobre los asuntos públicos.

Estimo conveniente, a la luz de este proyecto, que sea aprobado y cuente con la legitimidad suficiente frente a la ciudadanía y de quienes observan más allá de nuestras fronteras.

Finalmente, concluyo. El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, son instituciones que siempre han estado a la altura de su deber patrio.

Durante más de una década, han hecho labores que no les corresponden, con el fin de salvaguardar la seguridad del interior.

No son ellos los que se arrogaron esta función, fue el Estado el que se las encomendó. Desde entonces su actuar ha sido brumoso en lo legal.

Mucho hemos dicho respecto a lo riesgoso de este vacío de cara a las obligaciones, que muchos ejecutivos estatales dejamos de cumplir, pero poco es el riesgo que enfrentan nuestros militares desplegados a lo largo y ancho del país, que enfrentan cada día que tienen que encarar una situación de combate.

Detrás de cada uniformado, hay un mexicano, una mexicana de carne y hueso, ávido de cumplir a su país, pero incierto respecto a la mejor forma de hacerlo.

Una Ley de Seguridad Interior, disipará la bruma en el actuar cotidiano de nuestras fuerzas armadas, en la lucha emprendida hace más de una década.

Una lucha heredada, que tengo que decirlo, tiene que revisarse y abordarse de manera distinta, porque no se trata solamente del uso de la fuerza, sino de un modelo de seguridad integral que nos permita atacar las causas y no solamente los efectos.

En esta línea, un abordaje con regulación clara y concisa, es un primer paso. Como Gobernador Constitucional de una entidad que forma parte de esta Federación, subrayo:

La labor de seguridad pública, debe de seguir siendo responsabilidad de los estados.

La Ley de Seguridad Interior, tiene que ser una nueva y acaso la última oportunidad de trabajar a fondo con las policías estatales, para depurarlas, renovarlas y ponerlas en marcha.

Más allá de salvaguardar la inversión en seguridad pública estatal que establece el Dictamen de Ley, el Marco Normativo debe poner énfasis en que el incentivo no sea la presencia indefinida de las fuerzas armadas en las entidades, sino la impostergable labor de los ejecutivos locales.

La presencia de militares en muchas entidades del país, en todas las entidades para ser más preciso, es necesaria y además bien valorada.

Pero también es cierto, y lo digo no solamente como Gobernador sino como habitante de la segunda urbe más importante del país, que la presencia de las fuerzas armadas en las zonas urbanas, genera un efecto contrario, no el de seguridad, sino el de preocupación y zozobra.

Esto por supuesto no es atribuible a la valerosa labor de nuestros militares sino, repito, a la ausencia de policías estatales civiles que den certeza plena de seguridad a su población.

Hoy, precisamente hoy, se cumplen 11 años de que se anunciara el operativo conjunto Michoacán, que marcó el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Puede ser también hoy, el día en que esa ruta, eminentemente y absurdamente bélica, tome otro cauce, por el beneficio de las mexicanas y los mexicanos.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias gobernador Jorge Aristóteles Sandoval.

Damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Presidente de CONAGO. Bienvenido al Senado.

Y agradecemos, también, la presencia del senador Miguel Barbosa, integrante de la Comisión de Defensa Nacional y de Marina.

Tiene en estos momentos, la palabra nuestro amigo, el gobernador Francisco Domínguez Servién, de Querétaro.

GOBERNADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Muchas gracias, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Compañeras, compañeros senadores, sobre todo los que van a dictaminar esta Ley de Seguridad Interior, muchas gracias por invitarnos, la cual nosotros fuimos parte, aquí el Gobernador Aispuro, de esta LXII Legislatura. Nos da mucho gusto regresar y ahora a pedirles, de favor, retomen, discutan y voten, lo más rápido, esta Ley de Seguridad del Interior.

Igual que el compañero Gobernador de Durango, traemos la voz del Gobernador de Baja California Sur, del Gobernador de Tamaulipas, y del Gobernador de Aguascalientes, haciéndoles la misma petición, y que también los tres fueron de esta LXII Legislatura.

Por supuesto, como se ha dicho aquí, yo no voy a abundar más.

La Constitución Política de cada Estado, y en el caso de Querétaro, no rehuimos a garantizar la seguridad pública de los ciudadanos, de las queretanas y de los queretanos.

Todo lo contrario. En Querétaro estamos echados, andados, hoy cumplimos ya con el 98 por ciento del control de confianza de las policías estatales, somos un estado de paz, hoy nos preparamos con un centro de inteligencia y análisis para darles herramientas a nuestros policías estatales, municipales, investigadores, a una fiscalía autónoma, en la que toma sus decisiones y maneja sus propios recursos y hace sus propias estrategias.

Pero, ya como se ha dicho aquí, una cuestión es la seguridad pública, pero cuando necesitamos de una seguridad del interior, necesitamos de dotar de certeza jurídica a nuestras fuerzas armadas.

Estas fuerzas armadas que han sido leales con el país, que han sido leales con las entidades federativas, y leales con el estado de Querétaro, cuando se ha necesitado: les pedimos encarecidamente lo hagan.

Yo lo que quiero poner en dos artículos, en donde, con todo respeto, yo le pediría al Senado que diga, porque ustedes tienen la Minuta, en dónde dice que se va a militarizar el país; en ningún lado.

Y dos artículos que, para mí, en lo que he escuchado de la sociedad civil, en opinar en el tema de los derechos humanos.

Yo quiero leer tal cual, como dice el Artículo Séptimo: "Los actos realizados por las autoridades con motivo de aplicación de esta Ley, preservar en todo momento y sin excepción, los derechos

humanos, sus garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes".

Y también quiero poner el Octavo: "Movilización de protesta social o las que tengan motivo político electoral, que se realicen pacíficamente, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia, serán consideradas como amenaza a la seguridad del interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad del interior".

Yo sé que podrá haber muchísimas interpretaciones, a mí me ha tocado ser legislador en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, yo tengo mis propias interpretaciones, y aquí dice: "se salvaguarda los derechos humanos"; aquí se salvaguardan las protestas o las manifestaciones de cualquier tipo de movilización civil o electoral.

Así que, a mí no me queda más que seguir pidiéndoles que, a nombre de las queretanas y los queretanos, por el bien de las 32 entidades federativas, nos ayuden a ponerle certeza y tengamos seguridad del interior.

Yo no quiero que el estado de Querétaro sufra lo que algunas entidades de mi país sufren, o de cuestiones que ya empezamos a ver, como los chupa ductos, que si no tenemos a las fuerzas militares no podemos nosotros enfrentar a lo que hoy fuertemente están enfrentando vecinos del estado de Querétaro, porque por ahí pasan los ductos de PEMEX, y en el estado de Querétaro no nos queremos ver vulnerables y siempre vamos a pedir la fuerza de las Fuerzas Armadas, a las cuales desde aquí hay un agradecimiento, en lo personal, como gobernador del estado de Querétaro.

Yo no tengo más, Presidenta. Por mi parte, es cuanto.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias gobernador Francisco Domínguez.

Tiene la palabra el doctor Juan Manuel Carreras López, de San Luis Potosí.

GOBERNADOR JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ: Muchas gracias.

Agradeciendo igualmente a la senadora Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política.

A la senadora María Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación.

Y, bueno, evidentemente agradeciendo también que estuvo con nosotros unos momentos, el senador Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Y a todas las señoras y señores senadores que nos están acompañando.

Muchas gracias por la invitación.

Hay algunos privilegios, después de que ya hablaron varios, para no repetir lo mismo.

Me parece que, yo quiero ser muy puntual, yo creo que aquí estamos hablando de dos temas muy importantes.

Uno. El fortalecimiento del Estado de Derecho.

Me parece que el hecho de que podamos ir a través de una coordinación que existe, al menos yo creo que en todos los estados, con todas las fuerzas federales, estamos hablando sí del Ejército, de la Armada, pero también de la Policía Federal, de todos, que es un esquema que deriva inclusive de nuestra Constitución.

Yo creo que la palabra clave aquí siempre ha sido la coordinación por vivir en un régimen federal.

Y entonces, me parece que el hecho de poder tener una mejor coordinación ante lo que es, ya se dijo aquí por varios compañeros, una de las demandas más importantes que tenemos en los estados, y en regiones de nuestros estados donde tenemos índices delictivos altos, es la principal demanda de la ciudadanía.

Los gobernadores somos el eje de esas coordinaciones en materia de seguridad pública, y en materia también de esquemas delictivos que sobrepasan al fuero común, y la clave ahí siempre ha sido la coordinación tanto con los municipios para poder integrar a las fuerzas policiales municipales, con las carencias que ya se hayan mencionado aquí; pero por el otro lado es muy necesaria también la coordinación con la Federación.

En este caso, yo sí quiero decir el tema, no nos podemos dar el lujo, ese sería el segundo punto, de no tener el mejor esquema posible para poder fortalecer tanto la seguridad pública como la seguridad interior.

No seré yo quien le diga al Poder Legislativo cómo hacerlo. Entiendo muy bien que este es un órgano plural y que seguramente hallarán la manera de conformar el mejor esquema dentro de nuestro régimen constitucional para poder dar esas certezas, pero hay que hacerlo.

Me parece imprescindible, lo digo cotidianamente, nosotros trabajamos de manera cotidiana. Es imprescindible contar con los mejores elementos que tengamos en nuestro país a la mano, para poderle brindar esa certeza a la ciudadanía.

Siguiendo un poco el trámite parlamentario que se utiliza en las cámaras de nuestro país, digamos, estamos a favor.

Seguramente en el Senado hallarán la manera de hacerlo, porque sin duda va a ser un avance; es un avance en el país para poder tener estos elementos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Por supuesto que el fortalecimiento del Estado de derecho implica el respeto y la garantía de los derechos humanos, pues sí, ni modo que no.

El tema es también cómo haces para fortalecer los esquemas de la seguridad que puedan generar, tanto en seguridad pública como en seguridad interior, esta certeza a la ciudadanía, y que pueden llevar a cabo el resto de sus actividades en paz y sin violencia.

Simplemente pongo el ejemplo, en un momento dado no todos los esquemas delictivos que se presentan en un estado tienen que ver con hechos que se generan en ese estado. Muchas veces son organizaciones delincuenciales que tienen territorios mucho más amplios y, en ese sentido, es sin duda un paso muy importante para poder participar todos de manera más coordinada con mayores elementos de inteligencia, con los mejores elementos que se tengan para poderlos combatir.

Muchísimas gracias por la invitación, y estoy seguro, lo digo a nombre del pueblo de San Luis Potosí, que el Senado de la República estará a la altura para poder generarle esta confianza a la ciudadanía en el fortalecimiento del Estado de derecho y también en el fortalecimiento de los elementos necesarios para poder seguir consolidando una mejor seguridad para todos los mexicanos.

Muchísimas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, gobernador Juan Manuel Carreras.

Tiene la palabra el gobernador de Tlaxcala, el licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez.

GOBERNADOR MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ: Gracias, senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, a quien saludo con todo aprecio, y gracias a la presidenta de la Junta de Coordinación, la senadora Ana Lilia Herrera.

Saludo con todo aprecio también a las presidentas y presidentes de las comisiones dictaminadoras y a sus integrantes, las senadoras y senadores presentes, así como a mis compañeros gobernadores.

Quiero comentar tres cosas de manera muy puntual.

El primer punto, es que ha habido suficiente tiempo de deliberación de este tema tan importante; no únicamente en materia de esta minuta, que ahora se encuentra ya en el Senado, aprobada ya por la Cámara de Diputados, sino a lo largo de los últimos cerca de diez años, en los cuales los conceptos de seguridad nacional, de seguridad pública y de seguridad interior se han venido discutiendo, platicando, opinando.

Ha habido un amplio rango en materia de tiempo y de apertura para conocer opiniones, que ha permitido una deliberación adecuada.

Ha sido suficiente el tiempo de deliberación, se han escuchado todas las voces. Está aprobada la Ley en Cámara de Diputados y, por ende, en minuta se encuentra ya en el Senado, y es indispensable que contemos con esta ley.

Es el momento y, en términos categóricos, como gobernador de Tlaxcala me pronuncio por el hecho de que la podamos tener a la brevedad.

El segundo punto es que no es correcta la afirmación de que las Fuerzas Armadas, a partir de esta ley van a estar cotidianamente en las calles.

La ley establece claramente los procedimientos y los protocolos que se deben cumplir para que las Fuerzas Armadas respalden tareas de seguridad pública.

Conocemos entonces cuáles son las etapas, los momentos, las causales, que hacen que sea claramente conocido y legitimado el hecho de que las Fuerzas Armadas participen respaldando las tareas de seguridad pública.

Y al mismo tiempo, hace que los estados tengamos que reforzar nuestra responsabilidad de profesionalizar nuestras policías; de modo que encontramos este doble componente en el hecho de que la ley se apruebe, tanto por parte del funcionamiento del propio Estado mexicano, como de las responsabilidades de cada una de las entidades federativas.

Y finalmente, número tres, la ley misma establece la base de legalidad sobre la que deben actuar las autoridades del Estado Mexicano en esta materia tan importante, no únicamente de las Fuerzas Armadas, sino las autoridades del Estado Mexicano.

La solidaridad con la que las Fuerzas Armadas han participado de modo complementario, supletorio en varios casos en materia de seguridad pública no es suficiente. Necesitamos un marco legal que vaya más allá de esa solidaridad de las Fuerzas Armadas, para que se pueda actuar de un modo plenamente cierto en materia legal.

Y ese marco legal, esa certeza legal en este momento para las Fuerzas Armadas no existe, y lo necesitamos.

Es momento de tener esta ley. No hay consenso, es evidente, pero en términos mayoritarios y en términos de su impacto favorable para el país, tanto para la ciudadanía como para el funcionamiento del propio Estado Mexicano, la requerimos y es inaplazable su aprobación.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, gobernador Marco Antonio Mena.

Tiene la palabra el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Migue Ángel Mancera, además presidente de CONAGO.

DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: Muchas gracias, Presidenta.

Muchas gracias a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, por la convocatoria.

Quiero saludar a todos los distinguidos senadores y senadoras de la República; a todos mis compañeros gobernadores que están aquí acompañándonos.

Al presidente municipal de Ciudad Juárez, también los saludo con mucho gusto.

A nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación.

Primero, déjenme referirme en mi carácter de Presidente de la CONAGO, que acudimos con toda convicción y con mucha disposición al llamado del Senado de la República, porque en el seno de las discusiones de la CONAGO hemos hablado muchas veces de la realidad del país, y de la tarea

que desarrollan las Fuerzas Armadas en cada una de las regiones, de la realidad que vive hoy México, que no es una realidad que nosotros deseáramos pero es un hecho. Es algo que todos los días está acompañando las tareas de seguridad en los diferentes territorios.

En mi carácter de Presidente de CONAGO, reitero la disposición que se ha generado en el propio seno de la organización, para reconocer a las Fuerzas Armadas, para reconocer a nuestro Ejército, para reconocer a la Marina Armada, a la Fuerza Aérea, en todo el apoyo que brindan en el territorio nacional, y ese reconocimiento siempre será reiterado por todos y cada uno de nosotros, que estamos en el día a día viviendo exactamente o que hay que trabajar, lo que hay que enfrentar.

Y ya como se ha dicho en varias ocasiones, no es lo mismo ser borracho que cantinero, así que cuando nos toca a nosotros estar en la realidad de lo que se enfrenta en el territorio, pues se vuelve una problemática muy diferente de lo que pudiera estar en cualquier documento escrito.

Sin embargo, también en mi carácter de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quiero emitir algunas opiniones específicas respecto de esta nota, respecto de esta minuta de proyecto de decreto.

En el antecedente, decirles que las Fuerzas Armadas han planteado la necesidad de contar con un marco normativo que le dé certeza a su actuación prácticamente en todos los territorios.

En la Ciudad de México no tenemos patrullaje, pero basta ir a cualquiera de los territorios para advertir que es una realidad que las Fuerzas Armadas federales o bien el Ejército y la Marina están en el patrullaje de las calles, están en las tareas de seguridad, a manera de seguridad pública, haciendo una función que no les corresponde, pero que si hoy se retiraran de estas tareas, se colocaría en un jaque y en un grave riesgo a la seguridad nacional, a la seguridad no solamente de un territorio, sino considero del país.

Eso es algo que sucede y las Fuerzas Armadas han dicho que, si no cuentan con este marco normativo, se van a retirar. Por supuesto que esto es preocupante para cualquier territorio, es preocupante para todo el país.

Yo creo que hay que ahcer algo, soy un convencido de que hay que dar este marco de legalidad a su actuación. Sin embargo, no quiero dejar de señalar que en esta minuta yo advierto excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas.

Me parece que hay que dejarlo señalado, porque desde el artículo uno se establece con toda precisión que el objeto de esta ley es establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación y hay varios artículos en donde se rebasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales, respecto de quien designe el Ejecutivo Federal como coordinador de las tareas de seguridad.

Me parece que eso es colocar en un riesgo, incluso a la soberanía de los propios estados, me parece que eso va más allá de lo que incluso están pidiendo también las Fuerzas Armadas.

Yo creo que no es algo que estén buscando nuestro Ejército ni las Fuerzas Armadas realizar cuando se habla de identificar o prevenir cualquier tipo de amenaza y usar cualquier tipo de mecanismo, porque eso incluso es extranormativo.

Ya no se está regulando, sinos e está dejando una puerta abierta que rayaría en un exceso de tomar el asidero de esta ley, incluso creo que sería extralegal. Yo creo que no es el espíritu que se ha planteado y me parece que ahí estaríamos mucho más allá de esta tarea.

Se habla de que las fuerzas federales tendrán preferentemente la tarea de acuerdo con esta ley. La realidad que hoy vive nuestro país es que hay cuando menos 400 municipios que no tienen policía, que después tenemos a los que sí tienen policía y no tienen armamento.

Entonces, si nosotros vamos a suplir toda la tarea de seguridad pública con las Fuerzas Armadas, no va a alcanzar, porque nada más las fuerzas federales, con 3 mil o 3 mil 500 elementos no darían para el propio espíritu de la ley; inmediatamente tendríamos que irnos a hablar del Ejército y de la Marina, si no, no se podría complementar la tarea.

Entonces, es claro que tendrá que haber una participación integral, pero de lo que se habló es que nosotros, los gobernadores, solicitáramos el apoyo de las fuerzas para tareas específicas y aquí de lo que se está hablando y me parece verdaderamente algo delicado, es, por ejemplo, cuando se establece en el artículo 11, la fracción segunda, que dice que se puede dar esta declaratoria de protección cuando se origine por falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas o municipios.

¿En qué momento se va a determinar que hay una falta o insuficiencia de colaboración?

Eso ya no es el espíritu de lo que se planteó, eso incluso es descalificar la actuación de un propio estado o de un propio municipio, es decirle, tú no estás haciendo nada y entonces yo voy a hacer una declaratoria para imponer la seguridad en el territorio.

Me parece que eso va mucho más allá de lo que se ha planteado originalmente. No me queda claro tampoco, según quién se van a poder dar estos supuestos; según quién se va a comprometer la capacidad efectiva de una autoridad municipal o estatal, para poder llegar a esta declaratoria.

Entonces, me parece que hay varias disposiciones, en donde se rompe lo que originalmente se planteó, que fueron el artículo 13 y el artículo 14; eso fue el espíritu original.

Hablar de peticiones de entidades federativas, hablar de un procedimiento para que las autoridades federales, léase Fuerzas Federales, Ejército o Marina, Fuerza Aérea, tuvieran una temporalidad y tuvieran una tarea específica en estas tareas de seguridad, y por supuesto darle certeza y certidumbre.

A mí me parece también impostergable que se cuente con un marco normativo que cumpla con lo que están solicitando las Fuerzas Federales, pero no puedo dejar de mencionar que hay excesos que además están haciendo refritos, porque el artículo 16 de esta norma, de esta ley, es un refrito de lo que alguna vez se dio en un debate muy acalorado allá en la Cámara de Diputados, cuando se habla de aquellos casos en que las amenazas de seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas, el funcionamiento de las instituciones.

El Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias o entidades sin perjuicio de emisión de la declaratoria que se hará posteriormente.

Esto ya se intentó una vez, causó un debate muy acalorado y me parece que es vulnerar la propia ley, porque establecemos todo un procedimiento y después hacemos la excepción en la propia norma, colocando en una situación que me parece que no cumple.

Esto no están pidiendo las Fuerzas Armadas, esto no es lo que está pidiendo el Ejército, parece que es ir mucho más allá.

Es una ley, como yo he platicado con la propia Presidenta de la Junta de Coordinación, perfectible, y se trata de que nosotros pudiéramos aportar algunas de las notas que puedan señalar con toda precisión o cercanos a la mejoría de la norma que siempre es perfectible, algo que dé seguridad a todo mundo.

Pero yo creo que era necesario simplemente señalar esto, porque en varios de los artículos se habla de prevención y atención a riesgos y que de estas acciones, por ejemplo, el artículo 26 en el párrafo segundo, dice: "Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior, son de carácter permanente y no requieren la emisión de declaratoria de protección de seguridad interior".

¿Pues entonces para qué hacemos la ley? Digo, hay una Ley de Seguridad Interior que da un marco, que da un asidero. Perdónenme, pero esto es reiterar algo que ya se ha intentado en otras ocasiones y que no ha pasado y que va mucho más allá.

Esto no es lo que nos está pidiendo el Ejército ni la Marina. Ellos nos están pidiendo básicamente lo que dice en el artículo 13 y 14, que lo pidan las entidades.

En el caso de la Ciudad de México, nosotros le pedimos al Ejército nos ayudaran en el patrullaje de la zona del Ajusco, que rebasa nuestra capacidad y competencia territorial. Es una petición expresa del Jefe de Gobierno y es un punto expreso.

Lo mismo en la zona de Chalco y lo mismo en la zona de Tlalnepantla, y ellos no dicen: Oye, un marco normativo que justifique que yo te estoy apoyando aquí el tiempo que te tengo que apoyar aquí para que yo tenga certeza. Pero no es un marco que permita que hagas las investigaciones que quieras, utilizando los métodos que quieras, como quieras y ni siquiera se requiera la propia declaratoria.

Yo creo que eso rebasa, y me parece más grave aún ese artículo que señala que se comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, porque en qué posición va a quedar aquel gobernador que lo señalen así, o que se origine por falta o insuficiencia de colaboración de las entidades federativas o municipios.

Estaría básicamente cometiendo un delito el gobernador, o el presidente municipal que cayera en este supuesto.

A mí me parece que eso es delicado y es cuánto yo quisiera señalar en torno a esto.

Me parece que es una oportunidad para que se pueda corregir esto y darles a nuestras fuerzas armadas lo que están pidiendo, que es certeza a la petición expresa que le formulamos muchos de nosotros para poder complementar tareas de seguridad interior, que es el espíritu de la propia Ley.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Por favor senador, le pido, hay un orden aquí nada más. Ahorita yo les doy la palabra a los senadores, por favor. No, no grito señor.

Solamente tenemos un orden, por favor, para llevar.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: ...votar a favor o en contra.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Por favor le pido, senador Miguel Barbosa, de verdad tenemos un orden, que les vamos a dar la palabra a los senadores.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: ¿Va a votar a favor o en contra el Jefe de Gobierno?

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Compañero: la senadora Cristina Díaz, está conduciendo la reunión.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Senador: sigue la siguiente etapa, que son los senadores. Usted tendrá el derecho a participar. Hay un orden que ya pidieron.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Moderación.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Lo estoy haciendo con moderación, por favor, senador. Usted también respete cómo hemos acordado llevar la reunión; es que llevamos un orden. Siguen los senadores de participar; de participar los senadores.

Ha pedido la palabra el senador Javier Lozano, y después la tendrá usted. ¿Le parece? Perfecto.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias Presidenta.

Saludo a todos los gobernadores aquí presentes.

El gobernador Tony Gali, de Puebla, me ha pedido que, además de saludarlos, y no le fue posible estar en esta reunión.

Hoy cumple Puebla, la capital de Puebla, 30 años de haber sido declarada como Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad.

Pero sí me pidió enviar este mensaje, que es muy concreto.

Primero. Un agradecimiento y reconocimiento al Gobierno Federal, a las fuerzas armadas en particular y a la Policía Federal, por toda la colaboración que han venido realizando con el gobierno de Puebla.

Eso ha dado buenos resultados, sin lugar a dudas, al tiempo que el gobierno de Puebla también está haciendo su trabajo por fortalecer en todos los ámbitos a la policía estatal.

Segundo. Es absolutamente necesario, urgente, impostergable, imprescindible, dotar de la certidumbre jurídica que requiera la actuación de las fuerzas armadas en auxilio a la policía estatal y municipales en el estado de Puebla y en el país entero, como aquí se ha dicho.

Tercero. Creemos que estos principios que señala el proyecto, la minuta de Ley de Seguridad Interior en cuanto a proporcionalidad, gradualidad, oportunidad, temporalidad, subsiriaridad, son acertados y que vinculan muy bien con la Ley de Seguridad Nacional, por cierto.

Ya lo destacó el gobernador de Colima y también el gobernador de Durango.

Creo que no debemos pasar por alto que la Fracción Sexta del Artículo 89 de la Constitución, ya habla de la atribución que tiene el Ejecutivo Federal, de disponer de la totalidad de las fuerzas armadas para la seguridad interior.

Lo que no tenemos es una legislación secundaria que precisamente, que regule esa actuación, pero el concepto de seguridad interior, que es distinto al de seguridad nacional y al de seguridad pública, como aquí también se ha dicho, es lo que se tiene que regular, porque hoy existe ya esa participación y esa colaboración, pero me temo que, en un marco realmente insuficiente, donde si se va a abrir a la discrecionalidad y donde sí puede haber entonces excesos.

De lo que se trata es de acabar con esa discrecionalidad, darle orden, protocolos y, por cierto, esta declaratoria de protección a la seguridad interior, siempre se tiene que hacer haciendo del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se hace en aislado.

Y luego, lo que nosotros no compartimos, el gobernador de Puebla no comparte, y me pidió que lo exprese como tal, no se está militarizando al país, no hay un demérito a los derechos humanos en lo absoluto, no se están agregando atribuciones o facultades en sustitución de responsabilidades de la autoridad local.

Los contrapesos que tiene el Ejecutivo Federal, se mantienen intocados; las reglas de transparencia también están ahí y explícitamente se excluye, como amenazas, la protesta y movilización social, y los asuntos de carácter político electoral.

Y la verdad es que lo que pensamos es que si hay dudas sobre supuestos vicios de constitucionalidad, que yo no aprecio, y lo digo ya como abogado y como senador, pero si los hay, para eso también están los instrumentos de actuación que tienen, tanto cámaras de Diputados como de Senadores, el Procurador de la República, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente, para acudir en acción de inconstitucionalidad y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en última instancia, quien resuelva si es viable un pronunciamiento de esa naturaleza.

Pero por lo demás, y con esto concluyo, y agradezco mucho la oportunidad, es que el gobernador de Puebla está totalmente a favor de proceder a la aprobación de esta Minuta, que está en la Cámara de Senadores.

Por su atención, muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias.

Tiene la palabra el senador Miguel Barbosa.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias Presidenta.

A ver, yo he escuchado con atención las reflexiones de los señores gobernadores.

Sin duda que ellos tienen una posición a favor de que las cámaras del Congreso de la Unión aprueben esta propuesta, esta construcción de esta propuesta de la Ley de Seguridad Interior.

Y desde luego ellos tienen una posición de gobernantes, de responsables de la seguridad pública.

Yo tengo presente, y ellos también lo deben de tener, que el concepto de seguridad pública, es un concepto definido de nuestra Constitución, que tiene un desarrollo en el Artículo 21 Constitucional y de otros artículos, y que se encarga a instituciones de carácter civil.

En los Tres Órdenes de Gobierno, ministerio público, a instituciones de carácter civil. Solamente eso deben de tener presente, para un poco deliberar y concluir sobre la constitucionalidad.

La otra, es el 129 Constitucional; y la otra, es la naturaleza de una Ley Federal, que establece atribuciones, competencias, distribuye, y que una Ley Federal no puede contener ese tipo de contenido, no puede tener esos contenidos.

Evidentemente, es una propuesta inconstitucional y hay mecanismos, como dice Javier, que revisarán, en caso de que se ejerzan por quienes tienen interés y personalidad para presentar esa acción de control constitucional. Eso se verá si hay el número de firmas para poder hacerlo.

Lo que está ocurriendo es sustituir el concepto de seguridad pública por el de seguridad interior.

Se abate el concepto de seguridad pública y se desarrolla el concepto de seguridad interior. Es un asunto, de verdad, muy riesgoso.

Pero yo me hago una pregunta política. ¿Por qué este gobierno, al final de su periodo, por qué este gobierno que termina frente a la opinión pública en condiciones de enorme debilidad, por qué impulsa esto?

¿Por qué no se espera a la legitimidad de la renovación de los poderes públicos en el 2018? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa decisión de que el Ejército esté preocupado; advierta que se puede retirar? No. El Ejército y la Marina reciben órdenes, se preocupan, pero reciben órdenes, no pueden tomar la decisión de retirarse voluntariamente.

Hay una decisión aquí rara de la cual se empezará a escribir, se empezará a hacer afirmaciones, incluso hasta se podrán aportar elementos de prueba de dónde viene esta decisión; de dónde viene esta decisión.

Pero desde luego, ya se nos olvidó a los mexicanos, lo que antes de los 40 existía. Un Ejército que no tenía controles constitucionales, o si los tenía, no los respetaba.

Y esta ley sí permite tener un Ejército mucho más accionante en la vida cotidiana de la sociedad, mucho más.

Y ustedes como autoridades civiles, debieran preocuparse por ello. Sí, claro que sí.

Cuando todo el costo del despliegue del Ejército va a ser descontado de los presupuestos estatales, municipales, de órganos autónomos, de entidades públicas, no va a haber recursos para la profesionalización de las policías y del sistema policial.

Fue una decisión del Poder, y creo que los involucra a ustedes, el haber abandonado lo que en el Senado hicimos sobre la propuesta de Mando Mixto, llamada Mando Mixto; la Reforma Constitucional que ustedes mismos impulsaron en su momento.

Que de Mando Único pasó a Mando Mixto, pero que satisfizo, creo yo, lo que habría sido un nuevo modelo de Seguridad Pública y un nuevo modelo del Sistema Policial.

¿Por qué lo pararon? Yo siempre lo entendí, por falta de recursos, por falta de dinero por el costo; pues esto va a ser igual de costoso.

La carrera de las armas ya no va a ser carrera de las armas ¿eh?, también va a ser una carrera policial.

Al Ejército y a su naturaleza, como carrera de las armas, se le va a deformar.

No va a ser a partir de que esta ley se apruebe cuando empiece el Ejército a actuar y la Marina, ya llevan 12 años de manera formal en las calles.

Ya llevan 12 años, sin un marco legal, desde luego. Ya llevan 12 años, no han ganado la guerra contra el crimen organizado ¿eh? Y se va a deformar todo este tema de las relaciones entre los órganos del Estado, los órganos coercitivos del Estado y la sociedad. Es muy riesgoso.

El tema de los derechos humanos, desde luego, aunque no lo diga esta ley, tendrá que ajustarse a la Constitución y a los tratados internacionales.

¿Por qué no lo metieron? ¿Por qué metieron que sujetarse a los protocolos, me explico, Cuando son protocolos los que va a presentar el comandante designado por el Ejército y la Marina para regresar a sus operaciones?

¿Por qué le permiten al Ejército de manera permanente establecer acciones?

¿No se dan cuenta de eso? Sí se dan cuenta de eso, señores gobernadores, acciones permanentes para poder identificar, investigar, prevenir amenazas, riesgos sobre la seguridad interior. A partir de ese artículo van a permitirse muchas cosas.

Sin duda que tenemos posiciones diferentes. Respetamos sus posiciones, las veo yo en la lógica del ejercicio del Poder Ejecutivo y de la responsabilidad que tienen frente a su pueblo, frente a su sociedad en los temas de seguridad pública, y desde luego escucho.

Y cierro mi intervención preguntándole al señor Jefe de Gobierno de manera muy breve:

Escuchamos y coincidimos en todo lo que dijo sobre los defectos de la ley, y entonces, así como los gobernadores han dicho después de sus reflexiones que apoyan la minuta, yo le preguntaría al Jefe de Gobierno, si está a favor o está en contra.

DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: Yo creo que he abundado en todos y cada uno de los puntos en los cuales advierto un riesgo, de quedar así la ley.

He sido también informado de la posibilidad de que se hagan las modificaciones correspondientes, y yo estoy a favor de que las Fuerzas Armadas tengan un marco normativo, como lo han solicitado. Lo que no creo que deba quedar aprobado es todo lo que señalé.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: El dictamen como está.

DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: Eso no. Yo creo que como está es un exceso.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Por eso (inaudible)

INTERVENCIÓN: Voy a pedir una moción.

Se nos invitó a dar un plantemiento. Si va a haber un debate entre senadores y gobernadores, abrámoslo entonces así.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Abrámoslo entonces.

INTERVENCIÓN: Porque entonces la situación del parlamento y, de acuerdo a su reglamento…

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Usted es invitado, gobernador.

INTERVENCIÓN: …no hay una discusión.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Usted es invitado.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: A ver, senador Barbosa, permitamos… Senador Barbosa, permitamos al gobernador que se exprese.

Senador Barbosa, por favor, permita… Senador Barbosa.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Gracias, compañeros, por mantener el orden y el respeto en esta reunión de trabajo.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: (Inaudible)

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador Barbosa.

Continuamos, senadora, por favor con el Orden del Día.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Tiene el uso de la palabra, por favor senador Barbosa, le pedimos por favor el respeto en la reunión de trabajo.

Senador Barbosa, hemos tenido reuniones anteriores y aquí hay muchos testigos de presidentes de comisiones y senadores, y aun cuando hay puntos de vista diversos y plurales, hemos mantenido el orden.

Le pido por favor que respetemos a nuestros invitados, están en nuestra casa.

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Conmine al señor invitado a mantener el orden.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Él pidió…

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: No, él viene a querer sugerir procedimientos que no puede sugerir, ¿de acuerdo?

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: No, discúlpeme senador, por favor, mantengamos el orden.

Senador Barbosa…

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Les pido por favor a todos, senador Barbosa, vamos a respetar a los señores gobernadores que tuvieron la mejor…

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Senador Barbosa, por favor.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Les pido a todos orden.

Invitamos y acudieron a nuestra convocatoria los gobernadores, y es del mayor interés para todos llevar con respeto y con orden esta reunión.

Le pido, Presidenta, que pueda continuar, por favor.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Tiene la palabra el senador Manuel Bartlett, quien además es el coordinador del Grupo Parlamentario PT-MORENA.

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Desde luego que nos parece muy importante la presencia de los gobernadores en el Senado de la República.

Hay que situar esta presencia en la situación de hoy.

El Presidente de la República, recibió una serie de señalamientos graves en relación con la ley, una y otra vez.

En una reunión de seguridad, la señora Morera le dijo la situación en la que se encontraba el país y que tenía que revisar todo lo que estaba diciendo.

En la entrega de un premio de derechos humanos, se lo dijo el premiado, que la Ley de Seguridad era peligrosa para el país, un enorme peligro.

Aquí estuvieron representantes de Naciones Unidas, los encargados precisamente de derechos humanos, y estuvieron totalmente en contra de la ley y lo que representa.

Y estuvieron otra serie de organizaciones que, por cierto, fueron regañadas por un general que sentaron ahí y que se puso a intimidar a los participantes.

Eso es lo que motivó que el Presidente abriera una mayor discusión en la participación general de la sociedad civil, dijo.

Los gobernadores están aquí precisamente porque fueron impulsados, con todo respeto, por el Presidente de la República, para apoyar la ley. Esa es la circunstancia en la que estamos.

Afortunadamente aquí hemos oído análisis detallados de la ley, que hacen que no respete, dice el doctor Mancera, el principio que se estaba buscando, porque esta ley no está resolviendo o no está buscando resolver el problema de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, que es seguridad nacional, si nos está manteniendo para siempre, no es cierto que tenga temporalidad, aquí ya lo señaló con toda claridad el doctor Mancera.

Esta ley está hecha para garantizar la presencia del Ejército en México y eso significa la militarización, porque los temas para los cuales está invitado el Ejército a participar son todos temas de seguridad pública, y como no tiene ningún freno, ninguna limitación, van a estar para siempre, es la permanencia del Ejército.

Y claro que es militarización, hay que leer la ley, está por encima de ustedes, gobernadores. El Ejército está en esa ley por encima de los gobernadores.

Están claudicando de sus responsabilidades que aquí han venido a señalar, y eso de borracho y cantinero, yo fui gobernador también. Yo también fui gobernador y lo sé.

Sí es difícil, pero es un tema que corresponde a los gobernadores.

Y meter al Ejército a realizar funciones de los gobernadores, pues es simplemente romper la estructura política del país, romper la estructura política del país y establecer un régimen militar en México.

Pero claro, ya lo señalaron aquí, hay una serie de vericuetos para vejar al Ejército y a la Marina de policías en este país, en detrimento de los gobernadores que aquí están; en detrimento, porque no hay, y nos conocemos bien aquí nosotros, no hay ninguna limitación, ninguna.

Y eso de "vamos a darnos tiempo para fortalecer las policías, los responsables civiles" es mentira. Y es mentira, se los voy a decir con toda franqueza, con el gusto de que estén ustedes aquí para platicar del tema, es mentira porque todo el tiempo, desde que Calderón impulsó esto y aquí está el señor senador Zuarth, que seguramente lo defenderá con toda energía, desde que Calderón estableció la guerra contra las drogas es un acuerdo con Estados Unidos, no se les olvida.

Es el Plan Mérida, ¿ya se les olvidó? Ustedes creen que se está dando este paso obligado en estos momentos que ya se está yendo el Presidente, porque sí, no, es el Plan Mérida, ustedes lo conocen.

El Plan Mérida es un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, con la posición hegemónica de Estados Unidos, aquí está Homeland Security, aquí están todas las agencias internacionales.

Tenemos centros de fusión en donde están Fuerzas Armadas norteamericanas en territorio nacional, en combinación con las policías.

¿Qué no nos damos cuenta? Primero liquida a la estructura federal, sin duda alguna, con el deseo que los municipios no tengan policía alguna, porque ahí es donde se va a dar la explotación petrolera, minera, etcétera.

Es el Plan Mérida, es el ASPAN, son acuerdos del Presidente, que son públicos, sin decir cuál y a qué se refieren, pero acuerdos con el Presidente de los Estados Unidos.

No sólo es la militarización, sino es la hegemonización de los Estados Unidos en México, vía militar. Y no lo estoy diciendo yo, hay estudios con toda claridad.

Estados Unidos, después de las torres gemelas, cambiaron su patrón de seguridad e hicieron que la OEA, todos los países, entre ellos nosotros, muy obedientes, porque ahora somos obedientes a la OEA, aceptamos cuáles son los riesgos que tiene nuestro país.

Y ya no son los riesgos externos, esos ya no existen, somos socios, no, los riesgos fueron definidos por la OEA y esos riesgos que definió la OEA son de seguridad pública, no son de seguridad interior ni de seguridad nacional, son de seguridad pública y es suplantar la estructura política de México por el Ejército y la Marina, vinculados ya a los estados Unidos a través del Comando Norte y el Comando Sur. ¿Qué no los han visto actuar?

Ya se militarizaron los puertos, que es una demanda norteamericana para moverse libremente. Los puertos ya no están manejados por la marina Mercante, están manejados por la Marina.

Los pasos que se van dando, los agentes de migración norteamericanos están en el sistema de migración mexicana. Eso es lo que está ocurriendo.

Van a ser desplazados en esta ley definitiva y formalmente los gobernadores de los estados, los presidentes municipales, para establecer en este país una policía militar, el Ejército y las Fuerzas Armadas, vinculados a los intereses de seguridad norteamericana. Eso es lo que está pasando.

Además de que la ley, lo dice Mancera y tiene toda la razón, la ley no garantiza nada. La ley le garantiza al Ejército que no los metan a la cárcel en algún cambio político que existe, porque están preocupados, porque están actuando fuera del marco constitucional y esa garantía que les están dando es permanente y ya está en los artículos que podríamos ver con todo cuidado.

Yo considero que los gobernadores son la esencia de la política de este país, no son empleados del Presidente de la República. Los gobernadores son representantes de sus pueblos y tienen que garantizar la seguridad de sus pueblos, los gobernadores, y no cederla al Ejército y a la Marina; ya estamos militarizados.

Me preocupa y quiero comentar el caso de Astudillo, también amigo nuestro y compañero y legislador. Él dice que no se puede, que el estado de Guerrero está totalmente dominado por las fuerzas criminales.

Vamos a pensar que es cierto lo que estamos viviendo. Está el artículo 29, gobernador, está la suspensión de garantías. Esos problemas se pueden atender, el de Guerrero, con suspensión de garantías, porque están suspendidas prácticamente, pero la suspensión de garantías, artículo 29, establece un control del congreso y temporalidad definitiva, no ficticia.

Vamos a pedir que haya suspensión de garantías, pero el congreso va a estar cuidando que no se militarice el país, uno; dos, si el Ejecutivo no sea duelo del Ejército y lo use para lo que quiera.

Si no ha habido crecimiento en las policías es porque no han querido. Llevamos 12 años, aquí se dijo, en esa militarización permanente, pero derrotada, por cierto, derrotada, 12 años y no hace más efecto que haber más violencia, más muertos, más violencia en todos lados, desplazamiento de población, desaparecidos, control del estado y regiones completas en donde van a estar las explotaciones norteamericanas.

Es algo muy grave, no ha querido ni Calderón ni Peña Nieto reforzar la seguridad pública, les han dejado caer a los gobernadores los recursos, porque tienen la obligación de fortalecer al Ejército y la Marina.

Miles de millones se han gastado fortaleciendo a la Marina y al Ejército, en lugar de fortalecer a las policías, porque ese es un mandato norteamericano, démonos cuenta, este es un asunto de la nación, del salvamento de la soberanía nacional.

La presencia del Ejército y la Marina en estas condiciones es una amenaza a la soberanía nacional, la presencia de ellos. tenemos que fortalecer a las policías y esta ley no garantiza que se vaya el Ejército a los cuarteles.

El gobernador de Jalisco, creí que se iba a ir por un lado y se nos fue por el otro, pero sus palabras han sido importantes aquí, sí, tienen que tomar el mando de sus estados.

No pueden permitir que sea el Ejército el que los haga gobernadores, es una violación de sus propios compromisos con sus estados ya demás de eso, de que la militarización es lo más peligroso que ha habido en Latinoamérica siempre y no se debe permitir nunca.

El poder civil tiene que fortalecerse por encima del poder militar. El poder militar está para servir al poder civil, no lo olvidemos. El riesgo que ha ocurrido en toda Latinoamérica con esos pasos absolutamente necesarios.

Sí, vamos a ayudar al gobernador de Guerrero, vamos a aplicar el artículo 29, bajo control del Estado, del Congreso. Esta ley no tiene control del congreso.

¿Saben ustedes cuál es el control, señores gobernadores? Es avisarle a una comisión ahí entre diputados y senadores, le avisan. El artículo 29, que es histórico, establece el control del congreso para evitar la militarización permanente y evitar el exceso de poder del Presidente de la República.

Yo les pediría que reflexionáramos, el Presidente no es nuestro jefe, ni de ustedes ni de nosotros. La patria está en riesgo, la soberanía está casi entregada, no sigamos adelante con estas leyes que van quitándole a la nación la estructura política que hemos construido con un gran esfuerzo.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias.

Tiene la palabra la senadora Dolores Padierna y después la tendrá, lo ha pedido, el gobernador Francisco Domínguez, de Querétaro ya sí también usted en un momento.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bienvenidos señores gobernadores, señor Jefe de Gobierno.

En efecto, como aquí se ha mencionado, este debate lleva varios años, prácticamente 12, desde que Felipe Calderón tomó esta decisión, este modelo de seguridad militarizada y tenemos todos estos años dando ese debate.

Esperábamos, desde luego, una iniciativa de Ley de Seguridad Interior que retomara todos los comentarios que se han dado a lo largo de estos años, por los humanistas, por las organizaciones de expertos, expertas y muchísima gente que ha venido opinando, que realmente todos nos encontramos en una situación de muchísima preocupación, porque esta ley pareciera que parte de cero, no retoma la experiencia, no retoma las opiniones de nadie.

Pero quisiera, en primer lugar, decir que, en 2006, cuando Felipe Calderón toma esta decisión, dijo muy claramente que era para inhibir la violencia, para disminuir los índices delictivos y lo que se ve es lo contrario.

Si uno revisa, porque también esta ley no parte de un análisis, ni estadístico, ni operativo, ni un diagnóstico territorial, delincuencial, de inteligencia, nada, o sea, parte de cero y no ayuda a lo que se pretende conseguir.

Pero decía yo que cada año es el más violento del anterior. Es decir, la violencia se ha venido incrementando en forma exponencial, cuando se suponía que venía a disminuir el índice delictivo de aquel tiempo.

Yo quisiera decir que Calderón, incluso llamó que venía a parar la ola de violencia, y de acuerdo a las estadísticas del propio Sistema Nacional de Seguridad, el año 2006 era, dentro de todos los 12 años, el más bajo. Comenzó entonces la ola de violencia después de ese año.

Ha venido uno que otro año bajando, pero en realidad el índice de homicidios, etcétera, ha venido en incremento de manera exponencial.

Otro elemento que ustedes mencionan, que es el fortalecimiento institucional de las policías, pues se vino a debilitar aún más.

Si uno revisa el diagnóstico del fortalecimiento institucional en materia de seguridad en el año 2006, y en el que tenemos ahora, se ve un debilitamiento muy fuerte de las policías.

Antes era uno que otro municipio, uno que otro Estado; ahora son muchísimos, son 400 municipios que ni policía ya tiene y antes esta situación no existía.

De tal manera que diríamos, y yo estoy de acuerdo con el gobernador de Jalisco, que él propone, muy certeramente, que entremos a ese plan.

Primero, debemos de tener un plan de fortalecimiento de las policías estatales y municipales, ponerle fecha de término y en ese momento tomar algunas decisiones para que verdaderamente esto sea temporal.

Eso es cumplir con la norma, como bien él lo señala, depurar las policías, darles un tiempo a los gobernadores para el fortalecimiento institucional en todas las tareas de prevención. De otra manera, es la sustitución del Ejército por las policías.

Y entonces pareciera una actitud cómoda, y en ese sentido tiene mucha razón el senador, porque pareciera entonces que los gobernadores adoptan la actitud cómoda de que el Ejército haga las tareas que les corresponden a los gobernadores.

Yo, por último, diría tres asuntos rápido: no se puede mantener al Ejército de manera permanente. Eso es inconstitucional.

Esta ley está violentando, muchos artículos constitucionales, ya los constitucionalistas, aquí, han demostrado cómo llevan al menos 18 artículos de la Constitución.

Nosotros no podríamos apoyar una ley de esta naturaleza, tiene que revisarse, tiene que componerse porque los expertos y la Constitución señalan que la presencia del Ejército debe de ser a respuesta de una actividad extraordinaria, temporal, específica, pero de ninguna manera permanente, y de ninguna manera, como esta ley lo sugiere, de manera ambigua, a petición del Ejecutivo Federal, el Presidente por encima de los gobernadores, sin una coordinación adecuada, y todo lo que aquí se está viendo en esta ley.

Simplemente nos quedamos con las cifras alarmantes de la violencia. No podemos admitir que la violencia, entonces, sea el statu quo normal.

Ya tenemos 12 años así y normalizar, legalizar un fracaso como modelo de seguridad, no parece la mejor opción.

El modelo de seguridad militarizada, es un error, es la respuesta que dio Calderón, la que copió Peña Nieto, la que han aceptado la mayoría de los gobernadores, el fracaso está a la vista, simplemente de las estadísticas que da el INEGI y el propio Sistema Nacional de Seguridad.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias senadora.

Tiene la palabra el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

GOBERNADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Muchas gracias.

Primero, sí sabemos que los gobernadores estamos invitados, pero también acordarnos que cada entidad federativa tiene tres senadores que representan a nuestros estados.

Creo que si tenemos todo el derecho de opinar aquí; les agradecemos.

Y, también, conociendo el ámbito legislativo, sabemos que este es un Proyecto de Dictamen, que ya fue aprobado en Cámara de Diputados, pero de ninguna forma les venimos a decir aquí que no quiten comas y puntos.

Nosotros esperamos que aquí exista un debate en Comisiones, en todas las dictaminadoras, en el Pleno, y que nos va a dar, no a los gobernadores, a todos los mexicanos, la mejor ley del interior.

Lo que sí venimos a pedir abiertamente, a nosotros no nos cabildeó el Presidente de la República, ¿eh?, que quede clarisísimo. Lo hacemos personalísimo; sí queremos certeza jurídica para el Ejército. En sus manos está.

Y tenemos la confianza que esta LXII Legislatura, que van a sacar una excelente Ley del Interior.

Y tampoco rechazo, rotundamente, que los gobernadores rehuimos a nuestra facultad constitucional, obligación constitucional, en hacerle frente a la seguridad pública.

Y si alguien quiere debatir en ese tema, yo en lo personal, por Querétaro, y como gobernador de Querétaro, tengo todo lo contrario, tengo los números, se los acabo de decir, 98 por ciento de pruebas de confianza, basado en la policía estatal, incremento de policías estatales, incremento en infraestructura.

A mí me entregaron un gobierno sin policía judicial, la tuve que hacer en estos primeros dos años. Pero tengo que seguir preparándola y fortaleciéndola.

Pero de ninguna manera, nadie nos va a decir que no estamos haciendo nuestra tarea constitucional, obligatoria, los gobernadores.

Por lo pronto, yo pienso que mis compañeros tendrán, cada quien su palabra, pero de ninguna manera nadie me puede descalificar de que no hacemos frente a nuestra tarea constitucional.

Y, por último, para terminar, estamos en manos del Senado de la República, o sabemos, pero también hay tres senadores por entidad federativa.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias gobernador Francisco Domínguez.

Señalamos que, en esta reunión, como hemos venido celebrando otras, se exponen los puntos de vista, no entramos al debate, el debate se va a dar en las Comisiones.

Aquí, en estos momentos, estamos escuchando opiniones importantes, diversas y plurales, pero no hay debate.

Tiene la palabra, la pidió el senador Ernesto Ruffo.

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Qué tal señores gobernadores. Sean ustedes bienvenidos.

Aprovecho, claro, la oportunidad de aclarar situaciones, experiencias, al haberme tocado la experiencia de haber sido gobernador de Baja California, y ser testigo de que la estrategia de Seguridad Pública Nacional ha sido un fracaso, desde hace muchos años.

No hemos atinado a encontrar rumbo que dé efectividad y eficiencia a nuestros asuntos de seguridad.

Esto, creo que se vio agravado desde las decisiones de federalizar algunos tipos de delito, como es el crimen organizado.

Porque eso nos fue quitando la capacidad, en municipios y en estados, de cómo combatir, dado el conocimiento que se tiene de la localidad y de la región, estos asuntos de estos lamentables negocios de crimen organizado, y fueron concentrados en decisiones federales.

Y ahora estos asuntos de seguridad pública nacional están realmente en un hoyo negro porque hay impunidad, hay policías mezclados.

Esto nunca se aclara y trasciende nuestros mandatos como alcaldes o como gobernadores.

Yo no tengo duda alguna de que necesitamos un marco que ampare la presencia de las fuerzas militares en nuestra actividad de seguridad pública.

La coordinación que se debe de ejercer al mando estatal, es una responsabilidad ineludible en nuestros mandatos como gobernadores, ahora yo hablo como representante ante la unión, como senador de Baja California.

Creo que la coordinación es la esencia de la salida a una buena estrategia de seguridad.

Más sin embargo los excesos que bien señalara el jefe de la Ciudad de México, Mancera, me hacen temer, me preocupan porque se ve una absolutización de lo que yo coloquialmente le llamo el hoyo negro, no nos vaya a llevar a asuntos como Venezuela y Cuba.

De manera que este asunto que se venía discutiendo en el seno de la Cámara de los Diputados, que es el Mando Mixto, y que fue desechado en Comisiones, quita el mecanismo del protocolo en cómo los gobernadores podrían, de una forma transparente, coordinarse con las fuerzas armadas, ahora va a recaer sólo con la Ley de Seguridad Interior, en lo que decide el Presidente de la República, a través de las órdenes que les dé, y se verá limitada la soberanía de los estados.

Es por ello la trascendencia de esto, por lo que yo apelo a esta búsqueda de transparencia, en sí la efectiva coordinación de las fuerzas de seguridad pública, federales, estatales y municipales, más no sin embargo en un marco excesivo que si bien ampara la presencia de las fuerzas armadas en las actividades de seguridad pública, provee espacios para excesos que podrían llevarnos a una pues extremada presencia de decisiones centralizadas en el Presidente de la República, y que dadas las circunstancias políticas nacionales, no me sorprendería ir avanzando hacia una especie de dictadura.

Así que apelemos a que sea precisamente la separación de los Poderes y las responsabilidades de los gobernadores, cada uno de ustedes en sus regiones, para que haya, efectivamente, una

buena estrategia y no se vaya quedando en uno solo de los Poderes de la Unión, con el absolutismo de las decisiones. Y mi respeto a las fuerzas armadas.

Gracias.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Gracias senador.

Tiene el uso de la palabra el senador Roberto Gil.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias Presidenta.

Bienvenidos señores gobernadores.

Desde que surgió la idea de escucharlos, pensamos muchos que era no solamente necesario escuchar su punto de vista sobre la ley, sobre los problemas que viven sus entidades federativas en materia de seguridad, sino lo que podemos hacer para resolverlos.

Por aquí se hizo una afirmación hace unos momentos, en el sentido de que el Ejército y la Marina no han podido con el crimen organizado.

Yo creo que hay que corregir esa afirmación. Es el Estado Mexicano el que ha fallado en el combate y contención del crimen organizado.

El Estado Mexicano en sus desdoblamientos locales, también en la respuesta federal, en nuestra incapacidad de construir instituciones sólidas, de formar policías, ministerios públicos, resolver el problema, la grave crisis penitenciaria que vive nuestro país.

Yo creo que deberíamos de empezar nuestras reflexiones, asumiendo que quien ha quedado a deber es el Estado Mexicano en su conjunto, en todos los ámbitos y niveles de gobierno, pero también en las distintas expresiones del Poder Público.

Me gustaría aprovechar su presencia, porque hay algo que no se ha puesto sobre la mesa y que está en el fondo del problema.

Hemos reducido esta conversación a una dicotomía que, a mi juicio, es falsa o por lo menos es incompleta: Militares en la calle o militares en los cuarteles.

Esa dicotomía es absolutamente falsa, porque por lo menos en los últimos 30 años, las Fuerzas Armadas han adquirido funciones permanentes que no se corresponden o que son un poco más complejas que las tareas de seguridad pública, o el viejo modelo de defensa exterior frente a una invasión de los Estados Unidos, o responsabilidades asociadas simplemente a la estricta disciplina militar.

Han adquirido, a lo largo del tiempo, desde que estas reflexiones se iniciaron, han adquirido funciones permanentes y no es posible prescindir de las Fuerzas Armadas.

Voy a poner algunos ejemplos: Hay 3 mil instalaciones estratégicas en el país, el 47 por ciento corresponden a PEMEX.

¿Quién cuida las instalaciones estratégicas de este país? Las Fuerzas Armadas.

¿Quién realiza la función de Policía Marítima en el mar y aguas territoriales mexicanos? La Armada de México, no tenemos una Guardia Costera. Los servicios de guarda costa, dice la ley, corresponden a la Armada de México.

El Ejército Mexicano es autoridad administrativa que aplica la regulación de armas de fuego y explosivos, esa es una función permanente. No solamente eso, no solamente da los permisos de producción, de portación o de acceso a las armas, sino también tiene responsabilidades de impedir que, por ejemplo, circulen armas en un mercado ilegal. Es su responsabilidad y la ha sido desde hace mucho tiempo.

La primera vez que discutió este país sobre los alcances, sobre la relación entre el poder militar y el poder civil, fue en 1857, a propósito de las comandancias militares fijas.

La discusión era: ¿Deben estar los militares teniendo funciones de carácter permanente en instalaciones militares en sus estados? Y la respuesta del constituyente del 57 fue que sí.

En el 17, de nueva cuenta discutimos la relación poder civil-poder militar.

Durante los largos periodos de institucionalización de las Fuerzas Armadas, se revisó cuáles iban a ser las misiones esenciales de las Fuerzas Armadas y se dijo son dos: la misión uno, seguridad interior; la misión dos, defensa exterior.

Son funciones permanentes de las Fuerzas Armadas, que están previstas en leyes, descritas en leyes.

Pero sucedió algo en el país, que es lo que está en el fondo de nuestra problemática actual. Decía el senador Ruffo, la federalización de la delincuencia organizada; no solamente eso, dijimos que el crimen organizado era no un problema de seguridad pública sino un problema de seguridad nacional.

Y a partir de 2004-2005, el crimen organizado es una responsabilidad no solamente federal sino también se combate desde los instrumentales del régimen de seguridad nacional.

Y por eso las Fuerzas Armadas también tienen funciones permanentes asociadas al crimen organizado, porque este país decidió en los años 90´s y 2000, que nos enfrentaríamos al problema del crimen organizado desde un instrumental distinto al de la seguridad pública.

No solamente le quitamos la potestad a estados y municipios y la concentramos en la Federación, sino hicimos un régimen especial desde la Constitución en materia de seguridad nacional, con regímenes especiales, no solamente de investigación sino también de tipología de delitos y de formas de colaboración.

La materia de la delincuencia organizada es una materia federal, y el problema que tenemos en el país en este momento es que ni los estados pueden con la delincuencia organizada ni la federación asume por completo la responsabilidad de la delincuencia organizada, porque hoy ya prácticamente toda realidad de seguridad pública se entiende como delincuencia organizada,

desde los homicidios hasta los delitos que están previstos en la propia Ley Federal de Delincuencia Organizada.

Detrás de la problemática sobre la presencia de las Fuerzas Armadas, está esta zona gris de delincuencia organizada que no hemos sabido resolver en términos de qué parte le corresponde a la Federación y qué parte le corresponde a las entidades federativas.

Y desde la emisión de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, se dijo claramente que los estados y los municipios tienen deberes de colaboración en materia de seguridad nacional, y específicamente en cuanto al crimen organizado, deberes de colaboración.

Por eso la minuta insiste en eso, porque las entidades federativas y los municipios, por lo menos desde hace 20 años tienen deberes de colaboración. No son responsables directos sino colaboran y contribuyen a la contención del crimen organizado.

Y llevamos 12 años en el discurso político institucional aventándonos la bolita entidades federativas y municipios, y la Federación.

Es crimen organizado, te corresponde a ti; es narcotráfico, te corresponde a ti o me corresponde a mí; es homicidio, no es homicidio, atraje el caso, no atraje el caso. Eso está en el fondo de esta discusión.

En el fondo de esta discusión está claramente distinguir los ámbitos de competencia y de responsabilidad del combate al crimen organizado.

Por eso, en la evolución de la discusión de seguridad interior, se abandonaron las clausulas abiertas de cualquier tipo de daño que se pueda provocar a la población, o cualquier tipo de fenómeno criminal. Y se redujo, por lo menos así entiendo el modelo, se redujo a los supuestos previstos en la Ley de Seguridad Nacional.

¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que resolver.

Las Fuerzas Armadas no deben estar haciendo tareas de seguridad pública, pero sí tienen tareas de seguridad nacional, y la función de seguridad interior es una función, una vertiente –ha dicho la Suprema Corte– de la seguridad nacional, nada tiene que ver con la seguridad pública.

El problema es que hoy en día, como la facultad del Presidente es absolutamente discrecional, se utilizan Fuerzas Armadas para resolver todo tipo de problema, incluso las de seguridad pública.

Lo que motiva la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, es reducir esa discrecionalidad y que el Presidente de la República sólo pueda ordenar el uso de Fuerzas Armadas para resolver los problemas que le corresponden a la Federación, específicamente y especialmente delincuencia organizada y no solamente las otras atribuciones que tiene la Federación.

No podemos estar más militarizados ya; 27 entidades federativas tienen presencia permanente de las Fuerzas Armadas, el 87 por ciento del territorio nacional.

¿Por qué? Porque la facultad no está reglamentada.

Desde 1996, la Corte nos dijo: Esa función exclusiva del Presidente disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior en el ámbito de la seguridad nacional, debe hacerse fundando y motivando su ejercicio. Es decir, razones de hecho y de derecho motivan el ejercicio de esa facultad.

Hoy, como no existe ningún procedimiento que obliga a ello, basta una llamada telefónica o una orden de un funcionario público para que las Fuerzas Armadas se desplieguen de manera inmediata, y se despliegan sin saber a dónde ni por qué ni por cuánto tiempo ni para qué. Eso es lo que tenemos que resolver.

Y el gran problema que tiene el país, insisto, es crimen organizado, y donde no nos podemos poner de acuerdo es qué vamos a hacer cada quien con esa parte, cuál es nuestra responsabilidad federación, estados y municipios en ese problema.

Pero mientras seguridad nacional, mejor dicho, mientras delincuencia organizada sea seguridad nacional, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad directa. El problema es que lo hacen sin ningún margen de certidumbre jurídica.

Tenemos dos opciones: O dejamos las cosas como están, dejando la facultad y discrecionalidad al Presidente de la República de utilizar Fuerzas Armadas para todo, o revisamos el modelo de seguridad nacional y sacamos a las Fuerzas Armadas de esa responsabilidad.

Porque mientras estén ahí en esas prescripciones legales la responsabilidad de nuestros militares y marinos, las Fuerzas Armadas no pueden decir que no.

Se ha instalado la idea en nuestro país que es una ocurrencia de un Presidente de la República. Señoras y señores, desde los años 90's, mejor dicho, desde los años 40's, la tarea de erradicación de cultivos las vienen desarrollando las Fuerzas Armadas.

En el Programa Nacional de Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas describen esas tareas permanentes que van, insisto, desde entrar a Guerrero a destruir un cultivo de amapola, hasta controlar y cuidar nuestro espacio aéreo de las aeronaves que vienen con droga de otros países, o las lanchas rápidas que cruzan nuestro mar territorial.

Insisto, el dilema es: no militares en los cuarteles o militares en las calles. Ese es un dilema absolutamente falso. No hay una razón histórica institucional que nos pueda llevar a esa conclusión.

Si las Fuerzas Armadas van a participar en seguridad nacional y específicamente en crimen organizado, cuáles son las condiciones de certidumbre jurídica para que lo hagan, en el entendido de que es materia federal, y en el entendido de que las entidades federativas tienen responsabilidades concretas de colaboración a las Fuerzas Armadas y específicamente a la autoridad federal.

Concluyo diciendo que ojalá no se instale entre nosotros la idea de suspensiones de garantías, es el peor de los mundos.

La suspensión de garantías, además de que tiene restricciones convencionales, solamente se puede utilizar para guerra, peligro público o amenazas que impacten a la seguridad e

independencia del Estado, y convencionalmente no está autorizado utilizar sus previsiones de garantías para fenómenos criminales como delitos de trasiego de drogas y demás, no está convencionalmente autorizado.

Pero más allá de eso, lo que puede instalar en nuestro país estas microsuspensiones de derechos humanos, hoy Guerrero, mañana Tamaulipas, pasado mañana Veracruz. Pero peor aún, puede instalar en nuestro país el populismo de la mano dura.

Yo quiero ver un congreso que no le autorice a un gobernador la suspensión de garantías cuando hay un riesgo latente de seguridad.

Ojalá no nos instalemos en esas rutas, hay soluciones mejores; y la solución, por lo menos la de corto plazo, es que ningún Presidente de la República tenga libre disposición de las Fuerzas Armadas para tareas que no le corresponden, y eso se hace a través de una ley que le fije las condiciones de procedencia, el procedimiento y, sobre todo, los resultados que debe buscar esa intervención.

Por su atención, muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, senador Roberto Gil.

Tiene la palabra el gobernador Astudillo y posteriormente el senador Héctor Flores.

GOBERNADOR HÉCTOR ASTUDILLO FLORES: Pues muchas gracias.

Ha sido en verdad muy interesante, cuando se recibió la invitación entendimos o entendí que era un asunto de venir a presentar nuestras reflexiones y las reflexiones se han venido a presentar con datos.

Los datos que he dado, de ninguna manera presentan una renuncia a mis responsabilidades, y yo creo que ningún gobernador viene con ese propósito.

Creo que mi estado, Guerrero, vive problemas muy serios, muy graves, pero no son de ninguna manera para que se coloquen bajo el supuesto del artículo 29, porque en Guerrero se llena de turismo, don Manuel; hay turismo en Zihuatanejo, en Acapulco y hay tránsito normal. Hay clases en todas las escuelas en este momento, después del sismo, y hay labores burocráticas normales.

No aceptaría yo, con todo respeto, que se nos enfocara bajo el 29 constitucional.

Porque díganme ustedes en este momento dónde no hay problemas del tema de seguridad; en todo el país. Es un problema del país, por eso estamos aquí con ustedes que son los representantes del Pacto Federal.

Yo agradezco mucho todas las aportaciones.

Yo coincido que en el uso de sus facultades, ustedes revisen esta minuta.

Yo creo que es su responsabilidad hacerlo, y lo digo con todo respeto, porque yo vengo al Senado con respeto y agradezco mucho a quienes nos tratan con respeto. Porque ya fui senador, y luego

cuando uno es senador piensa que uno puede regañar a todos. No, no, ser senador es un ser humano normal, y cuando fui senador de veras que traté de ser siempre un hombre muy educado, porque hay que darle nivel al Senado.

Yo les agradezco mucho la oportunidad, don Manuel, usted fue gobernador, nada más que usted fue gobernador entre el 92 y el 99; vivimos otro tiempo muy diferente a la circunstancia que usted vivió. Y lo digo también con todo respeto, siempre lo he respetado y además le profeso una gran estimación.

Creo que el dilema del Senado, es mi conclusión, son dos cosas: Una, dejar las cosas como están, arreglar esa minuta y sacar una buena ley en beneficio de los mexicanos.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias gobernador Astudillo.
Tiene la palabra el senador Héctor Flores y posteriormente el gobernador Sandoval.

SENADOR HÉCTOR FLORES ÁVALOS: Muchas gracias, senadora Presidenta.

Simplemente voy a tratar de ser muy breve y resumir algunos argumentos, pero sobre todo aprovechar la presencia de ustedes para compartirles esta reflexión y desde luego buscar alguna salida alternativa.

Yo parto de una idea, la primera es reconocer que estamos enfrentando un problema extraordinario. En mi opinión, la confección de una ley propositiva, buena, saludable para la República, tendría que partir de dos premisas.

La primera, de reconocer una problemática existente, la situación real que se vive y la segunda, la de aspirar a resolverlo con el mejor modelo posible.

Si no se toma en cuenta ninguno de estos extremos, creo que estaríamos cayendo en un error, si solamente nos fijamos en la problemática que tenemos en la profundidad y en la gravedad de la problemática, pero no aspiramos a resolverlo de una forma benéfica, de una forma jurídicamente sostenible, creo que estaríamos cayendo en un error.

Efectivamente, el problema que hoy enfrentamos, este problema que ha referido anteriormente algunos de mis compañeros, particularmente el senador Roberto Gil, es un problema que es profundo y grave y que relata desde luego una competencia de la Federación, que es una competencia que ya se explicó y creo que se explicó muy bien, respecto de las facultades que derivan del artículo 89 de la Constitución a favor del Presidente.

Sin embargo, pienso que la redacción deja algunos aspectos en duda y que han motivado una creciente inconformidad por parte de la sociedad y de algunos sectores, específicamente identificados con defensa de derechos humanos o con aspectos relacionados con seguridad pública y seguridad nacional.

Yo quiero referirme a dos de ellos, simple y sencillamente para mostrar, en la opinión de un servidor, la gratuidad de estos problemas, porque creo que no es algo que está buscando ni las

Fuerzas Armadas ni el Gobierno Federal y creo que simple y sencillamente transita por ahí, estamos perdiendo la capacidad de resolverlo.

Miren, el primero tiene que ver con el artículo séptimo. Si ustedes lo revisan, hace referencia a una preservación de los derechos humanos y dice innecesariamente de conformidad con los protocolos que expidan las autoridades.

Eso, primeramente, es gratuito, no tiene ni que estar en una ley de esta naturaleza, es una obligación de carácter constitucional y, segundo, pareciera ser que la preservación de los derechos humanos queda subordinada al cumplimiento de los protocolos, lo cual es evidentemente un despropósito.

Eso es algo que es fácilmente arreglable y ustedes, señores gobernadores, tienen desde luego influencia y capacidad de operar a través de sus senadores y a través de sus diputados federales.

La siguiente parte que me preocupa es el artículo octavo, donde hace referencia a otro tema que ha generado una enorme inconformidad en la sociedad y que tiene que ver con el tratamiento de estas manifestaciones de carácter político-electoral.

No hay necesidad de incluir la palabra pacíficamente, este es un tema que ha sido aquí abiertamente discutido, pero no hay necesidad. En ningún momento se ve la intención, entiendo yo, por los diálogos que tuvimos con los representantes de las Fuerzas Armadas, de tomar un camino en ese sentido.

Pero es abiertamente inconstitucional el derecho a la manifestación y a la libre expresión de las ideas, está consagrado en el artículo sexto constitucional y no prevé este requisito.

Esto es algo abiertamente inconstitucional.

De manera que simple y sencillamente, concluyendo, pidiéndoles esa reflexión y esa oportunidad para que podamos, a través de acciones muy sencillas y muy concretas, perfeccionar este texto y tener un ordenamiento con el que yo, en lo fundamental, coincido, en la necesidad de regular, no solamente la parte que tiene que ver con la solicitud de los gobernadores y de las legislaturas locales, para atender un problema de esta naturaleza, como también para resolver la problemática que refería hace un momento mi compañero, que es desplegar una facultad eminentemente federal, en coordinación con los estados y bajo protocolos establecidos que hoy no tenemos.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias senador Héctor Flores.

Tiene la palabra el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Diaz. Posteriormente el senador Romero Hicks, el senador Benjamín Robles y concluiríamos con el senador Héctor Larios.

Tiene usted la palabra.

GOBERNADOR JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ: Primero, de nueva cuenta reconociendo la convocatoria a esta alta tribuna, hacer el planteamiento y por supuesto señalar que nosotros venimos en representación de una soberanía.

Por eso pedimos, exigimos respeto, como también nosotros lo habremos de plantear, atentos a sus consideraciones, plantear en el esquema que nosotros hemos referido, la situación es un problema por supuesto nacional, no de ahora, se vienen agravando los insumos ante el crimen organizado, que se dan a diario, provienen del tráfico de estupefacientes, el tráfico de drogas.

Del vecino país del norte reconocemos que el consumo sigue ampliando. Debemos de revisar a fondo un análisis de una política integral, un sistema modelo que efectivamente, coincidiendo con algunos senadores, una cosa es lo que debe ser, otra cosa es lo que es.

Cientos de mexicanos salen a las calles dispuestos a arriesgar su seguridad, su integridad física, por salvaguardar la nuestra y la de nuestras familias; ante ello, mi reconocimiento.

Las Fuerzas Armadas y el Ejército Mexicano no pidieron estar ahí, ha sido el problema de una situación en un esquema social que hoy los obliga a estar ahí; qué les dicen a ellos, que caminan a diario ante el vacío legal que sigue siendo una realidad a casi 12 años.

Debemos actuar de inmediato. Yo por eso repito: debemos de ahcer el análisis de cómo integramos, desde la base social, la estructura social, porque esta lucha solamente la podemos ganar del lado de la sociedad civil organizada.
Dos, el respeto a los derechos humanos es irrestricto y está establecido en la propia Constitución. No abandonemos la discusión de la iniciativa que se dio de mando único.

Más de 2 mil 400 municipios donde solamente 300 de ellos tienen capacidad real, vayamos entonces a la discusión, a la depuración. Muchos de estos municipios aislados se encuentran corrompidos, infiltrados por el crimen organizado, pero que tienen gran parte del territorio.

Muchas de nuestras instituciones, ninguna se escapa a ello, en eso es donde estamos trabajando. Yo sí puedo hablar por mi estado, por el estado de jalisco, hemos trabajado mucho en la depuración, hemos tomado el control de policías municipales, donde nos ha pedido el alcalde o la alcaldesa, no esperamos a que llegue la fuerza federal, actuamos inmediatamente, asumiendo nuestra responsabilidad de acuerdo a lo que establece la propia Constitución y lo que nos confirió, la confianza, el pueblo de Jalisco.

Pero ante distintas variables que no han surtido el efecto que aspiramos, uno de ellos es la falta de capacitación, depuración de los cuerpos policiales municipales y estatales, a lo que yo me refiero en mi atribución o en mi esfera de responsabilidad.

Son muchos los esfuerzos, pero hay estados y hoy escapó a ellos esta realidad. Ahí tenemos que darle certeza al militar y por supuesto al ciudadano, de qué es lo que puede y no debe de hacer, de cómo capacitar al militar que no está capacitado para salir a la zona urbana.
De cómo referirnos a qué tipo y qué protocolos se deben de respetar. Asumir con responsabilidad la discusión del artículo cuarto, cuáles son las causas, para las causas. Asumir con responsabilidad la discusión del artículo octavo, del noveno, en materia de transparencia.

Del onceavo, cuándo y cómo, eso lo habrán de discutir ustedes con el profesionalismo legislativo, la responsabilidad que ustedes tienen y seremos respetuosos.

Nosotros actuamos a diario porque allá tenemos la responsabilidad, en el ámbito de impartición de justicia, de procuración de la misma, de la reinserción.

Hoy estamos entrando en una nueva era, en el nuevo Sistema Adversarial Acusatorio Penal. Cierto es que hay muchas fallas de las personas, no del sistema.

Cierto es que entramos de manera acelerada. En Jalisco, cuando llegamos, éramos el último lugar, no había ningún tipo de avance. Tuvimos que invertir, atender, capacitar.

Muchos quieren seguir actuando a la vieja usanza. Hoy el sistema es bueno, pero debemos encargarnos entonces de capacitar y de dotar de mejores herramientas, de perfeccionar el modelo, pero ante la realidad que vivimos.

Y repito: hoy lo que está matando a nuestros jóvenes no es la adicción o el consumo, es el tráfico de estupefacientes. Vayamos a discusiones de fondo y serias, para poder legalizar algunas de éstas y poder entonces, desde una visión de Estado, de salud, resolver el problema que va a seguir creciendo.

Si seguimos sólo pensando en la fuerza, es como un árbol que vamos a estar podando y más inversión, más recursos, más en el ámbito policial y militar.

Por eso esta es la última oportunidad. Debemos ser un referente y lo que pedimos es que se analice esta ley, en la minuta que tienen, artículo por artículo, darle certeza a la sociedad civil, darle certeza a organismos internacionales para que nuestras familias puedan crecer en un ambiente armónico, de paz, donde su desarrollo pueda alcanzar el entorno y la felicidad, que es la obligación de los que representamos algún cargo en los distintos ámbitos de gobierno en la República.

Por ello vuelvo a convocar a que en la reflexión se defina temporalidad, capacidades, límites y también en un esquema con el gobierno federal, como resolveremos, desde el ámbito municipal, la depuración, capacitación y evitar la infiltración del crimen organizado.
El tema mando único sigue pendiente, no es solamente la Ley de Seguridad Interior la que va a resolver el problema, si es darle claridad, especificidad., para que podamos nosotros concretar y avanzar en un marco integral, sin dejar de acudir a lo que nuestra responsabilidad nos conmina y decirles que, por supuesto, nuestro único jefe, en mi caso, es el pueblo de Jalisco y es a quien atendemos a diario.

Y que nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a dar el debate y nuestro punto de vista. Los responsables hoy de que esto se apruebe o no se apruebe, son ustedes, los senadores, en quien está la confianza para que en la discusión sea respetado tanto a favor o en contra, pero que podamos enriquecer la discusión para resolver el problema que nos exigen miles, millones de familias mexicanas que se enfrentan a él a diario.

Gracias por su atención.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Presidenta, si me permite, queremos agradecer la participación de los gobernadores, por supuesto que, si desean permanecer aquí, son muy bienvenidos, pero algunos de ustedes ya nos manifestaron que tienen problemas de agenda.

Llevan tres horas aquí los gobernadores y tenemos alcaldes que tienen que irse, que es la siguiente reunión que tenemos. Entonces, yo pediría a mis compañeras y compañeros senadores, su comprensión para que esta reunión se vaya agilizando y podamos dar pie particularmente al alcalde de Juárez, que tiene dos horas aquí con nosotros y tenía alguna complicación también de agenda, que pudiéramos abrir el espacio para su participación.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias a los gobernadores.

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA MINUTA DE LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, CON ALCALDES, EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: *Muchas gracias, porque ya llevan también un buen rato esperándonos. Y así como un grupo de especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil.*

Le cedo el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz, para continuar con la sesión.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchísimas gracias.*

Sean todos bienvenidos a esta mesa de trabajo, donde estamos escuchando sus puntos de vista, sus opiniones, que son muy valiosas y de esta manera estamos en el Senado abriendo los espacios. Y como lo hemos venido señalando, en la figura de parlamento abierto, donde hay oportunidad de todos ser escuchados. Vuelvo a convocar a todos a llevarlo en el orden y en el respeto que todos merecemos.

Por razones de tiempo y de su función, primero una disculpa, porque ya tenían un rato, más de dos horas esperando, presidentes municipales, algunos se tuvieron que retirar, pero otros permanecieron, y obviamente están con la presión de su agenda para tomar sus vuelos.

Le vamos a dar, en primer término, al alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, el alcalde Héctor Armando Cabada, la palabra. Tiene usted la palabra, alcalde, y una disculpa.

ALCALDE HÉCTOR ARMANDO CABADA ALVÍDREZ: *Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a la Presidenta por la invitación.*

Señores senadores y senadoras:

Ha sido sin duda muy interesante lo que hemos escuchado esta mañana, por parte de los señores senadores. Y obviamente también por parte de los señores gobernadores.

Agradezco la invitación para exponer el punto de vista sobre la Ley de Seguridad Interna, desde la perspectiva de la ciudad que me toca dirigir como presidente municipal.

Ciudad Juárez ha sido en muchos sentidos un icono de ciudad violenta, que ha tomado relevancia no sólo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Pero también nos dio la oportunidad de salir adelante en el tema, y aunque sabemos que no está resuelto definitivamente; sabemos de la necesidad de adecuar nuestra legislación para estar en condiciones de enfrentar los nuevos retos que se nos presentan.

Esto lo digo porque quienes hemos vivido el embate de la violencia en un grado extremo, como es el caso que nos tocó vivir en Ciudad Juárez, entendemos que nos enfrentamos a un crimen organizado que es progresivo, que evoluciona y que muta, y que frecuentemente establece en nuevos parámetros de operación que retan a la imaginación.

Es necesario que el Estado también evolucione, porque el enemigo que enfrentamos ha trascendido las regulaciones ordinarias, debido a la capacidad de organización y sobre todo de hacerse de infraestructura y equipo, buscando constantemente superar las capacidades del Estado Mexicano.

Durante muchos años la posición geográfica de Ciudad Juárez ha sido un punto estratégico para el trasiego de drogas, sin embargo, al fortalecerse la estructura criminal pasó a convertirse en un importante punto de consumo, con las consecuencias de generación criminal que esto conlleva. Además de que las instituciones de seguridad local no evolucionaron a la misma velocidad que lo hizo el crimen organizado.

Es importante decir que en Juárez la racha de violencia inició en el año 2007, con agresiones a miembros de los cuerpos de seguridad. Debo aclarar que para ese momento la infiltración debió tener décadas de trabajo, de tal manera que llegó a ser institucionalizada. Ése es uno de los grandes problemas que ocasionaron la gran ola de violencia.

Esa infiltración propició que los cuerpos de orden municipal y estatal fueran incapaces de enfrentar a un enemigo que les carcomía las entrañas, y que en muchos sentidos dictaba la política de ataque a los criminales.

Esta situación dio paso a que en marzo del año 2008 iniciara el operativo conjunto Chihuahua, donde el Ejército mexicano y las Fuerzas Federales asumieron de manera interdisciplinaria las funciones que les competían a los cuerpos de seguridad municipales y estatales.

Es importante comentar que para ese punto la sociedad se sentía indefensa y veía en las Fuerzas Militares una esperanza de volver a alcanzar la paz que toda sociedad requiere. El Ejército Mexicano cuenta con el aval de la comunidad como institución.

Los primeros resultados que tuvimos fueron un incremento importante en las puestas a disposición por delitos contra la salud y posesión de armas, esto dio oportunidad a los cuerpos locales de seguridad de retomar el control de su operación y de incorporarse al combate a los criminales.

Aun y cuando podemos estimar que en la experiencia de Juárez la intervención de las fuerzas castrenses ene l combate directo contra el crimen organizado fue importante; también tenemos que

decir que trajo consecuencias que deben ser replanteadas y subsanadas. Una de ellas es la falta de preparación de las Fuerzas Militares frente a las tareas de prevención y de proximidad social; mientras que actualmente un policía municipal tiene como uno de sus requisitos la preparatoria, también tiene que tener conocimiento sobre derechos constitucionales, un catálogo de delitos, regulaciones para el debido proceso y procedimientos en actuaciones como primer respondiente.

Para dar certeza a las acciones de los militares ante la sociedad, será imprescindible la transparencia en la resolución de las afectaciones a los derechos humanos.

Otro punto que debe considerarse es que para cumplir con plazos adecuados es necesario que conforme se da la intervención, las corporaciones de seguridad se consoliden y generen estrategias que permitan en el tiempo determinado la recuperación de la habilidad para combatir al crimen, en el caso de Chihuahua, el Centro Estatal de Control de Confianza fue un paso fundamental para le revalorización de las policías locales.

La definición de los plazos de intervención tiene invariablemente que pasar por la evaluación de estrategias necesarias para que los cuerpos locales de policía restablezcan su competencia en la labor de seguridad.

Adicionalmente, es necesario que los cuerpos de seguridad locales tengan también una estrategia para un equipamiento, no sólo con recursos extraordinarios provenientes del Gobierno Federal, sino como una estrategia propia de las localidades, porque los municipios no pueden supeditar el equipamiento policiaco, al dinero proveniente de los fondos federales, para ello es necesario que de sí, dediquen recursos propios a fin de acelerar este proceso. Es el caso que a nosotros nos ha interesado desde que asumimos la Administración, con recursos propios hemos comprado más de 300 patrullas y asumimos solamente con 155 patrullas funcionando para un municipio como el nuestro.

También es importante que, para la tranquilidad social, sean transparentes los mecanismos de rendición de cuentas de los resultados de la intervención, incluyendo a las autoridades locales en el informe.

Otro punto que debe quedar claro en el articulado, es la certeza sobre el período de la intervención, dejando claro el método y forma de evaluar para declarar la finalización. Para ello, será necesario que de manera interdisciplinaria se determinen las bases para su aclaración, a fin de evitar que se vuelvan plazos indeterminados.

De igual manera, debe aclararse que la recopilación de la información debe ajustarse a los lineamientos del Sistema Jurídico Mexicano y establecer de manera precisa que los mecanismos para ese fin se sujeten a los principios de legalidad de un marco regulatorio para el ejercicio de esta facultad.

Debemos tener claro que el crimen organizado es un desestabilizador que genera un clima de intranquilidad en la sociedad, y como parte de la Ley de Seguridad Interna debemos de partir de la base, el estado debe proporcionar seguridad a los gobernados otorgando a las fuerzas del orden las herramientas necesarias para salir adelante en esta tarea.

Desde la responsabilidad que tengo de dirigir una ciudad como Juárez, que ha vivido en carne propia un clima de violencia exacerbado, con todo respeto les digo que lo peor que podemos hacer es asumir que el destino de las estrategias es el uso ilegítimo de la fuerza del Estado.

Ante la sociedad mexicana debemos asumir con toda responsabilidad los tiempos que estamos viviendo y asegurar a los ciudadanos que a través de disposiciones generales y abstractas, es como se generan las leyes y reglamentos evitando los catálogos casuísticos que son, en su mayoría, aventurados e inútiles.

Yo me quiero pronunciar, finalmente, porque se retome, lo planteo con todo respeto a través de las dos Cámaras, el tema del Mando Mixto. También el tema de certificar a nuestras policías, Ciudad Juárez es la única ciudad que tiene certificada a su policía, que la decisión no pueda tomarse de manera unilateral, que intervengamos en esto los gobiernos locales y que sea siempre una coordinación y nunca una subordinación.

Es mi planteamiento que dejo ante esta Cámara con todo respeto.

Gracias por su atención.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias al presidente municipal Héctor Cabada.*

Muchísimas gracias.

Tiene la palabra el presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, Adrián de la Garza Santos.

PRESIDENTE MUNICIPAL ADRIÁN DE LA GARZA SANTOS: *Muchas gracias, muy buenas tardes.*

No me voy a extender mucho en la palabra, estuve escuchando a los últimos gobernadores que estuvieron por aquí, escuché con atención también al Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua; y creo que no está en discusión para los que tenemos a cargo ciudades o estados, la necesidad o no de que esté el Ejército en labores de seguridad pública.

Lo que creo que si es importante, a mí me tocó participar en materia de seguridad pública, desde principios del año 2000 aproximadamente, y se acrecentó la presencia del Ejército muy fuerte en Nuevo León a partir del 2006, en donde se hace una declaración prácticamente de combate frontal al crimen organizado. Si mal no lo recuerdo lo hizo el propio Presidente de la República cuando estaba tomando protesta, y viene a dar una precisa importante en muchos de los estados, de que se estaba dando la lucha contra la delincuencia organizada.

Nuevo León no fue la excepción, me tocó vivirlo, me tocó vivirlo como Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, como Director también de la Agencia del Ministerio Público, como Procurador; y creo que la necesidad que tiene el país de ahora, en estos momentos, porque se habla mucho de reforzar las policías; tenemos muchos años reforzando las policías, tenemos muchos años también trabajando en materia de certificación de los policías.

Hemos tenido avances importantes, sin embargo todavía se requiere la presencia del Ejército en las calles, y aquí es donde viene la intervención en el sentido de que desde entonces, desde el

2006 cuando se da la presencia más fuerte del Ejército, aun y cuando ya estaba en muchas partes del país, nunca se reguló la forma en que iba a estar.

Esto ha traído inseguridad jurídica tanto para los militares como para los propios procesados, incluso ahora que se está ya dando la implementación formalmente del sistema acusatorio a raíz de la reforma constitucional, pone en entredicho muchas veces la formalidad en que se ponen a disposición a los detenidos, que si lo puso el Ejército los jueces no lo toman en consideración, lo tiene que hacer el policía aun y cuando el propio elemento militar fue el que hizo la detención. En fin, ha dado muchos problemas de seguridad jurídica en todos los sentidos.

Creo que esta Ley de Seguridad Interior viene a darle esta certeza, aunque en ese sentido habrá que tomar las consideraciones necesarias a efecto de que la presencia del Ejército en los lugares sea de manera temporal, que se precisen de forma clara las formas en que podrá entrar en función el Ejército de forma temporal, de forma gradual y de forma también territorial.

Dejar muy claro también que la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades civiles, que actuaría en un momento dado el Ejército incluso como auxiliar del Ministerio Público, en todo caso cuando el Ministerio Público así lo solicitara, para poderle dar formalidad a su actuación. Y que siempre las investigaciones estarían bajo el orden civil y, sobre todo, del Ministerio Público.

Y, bueno, a final de cuentas decir nada más, hacer la aclaración porque creo que en algunos casos se ha considerado como si esto, como si la ley, si entrara en vigor la Ley de Seguridad Interior, lo están tomando como si se hablara de un estado de excepción. Creo yo que al contrario, es la forma de regular la entrada del Ejército sin entrar en materia de estado de excepción.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias al presidente Adrián de la Garza.*

Tiene ahora la palabra la señora Isabel Miranda de Wallace, quien dirige la organización Alto al Secuestro.

ISABEL MIRANDA DE WALLACE: *Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.*

Saludo muy respetuosamente a todos los senadores y a todos mis compañeros de la sociedad civil.

Antes de decir lo que tengo preparado, de verdad yo quisiera pedir desde el fondo de mi corazón que lo que se decida en el Senado, sea para el bien de nuestro país.

Yo creo que más allá de que alguien tenga la razón o no la tenga, de las posiciones políticas o desde las trincheras en que cada uno nos encontramos; todos debemos de ver por el bien de nuestro país, de México, que es el único país que tenemos los mexicanos.

Podemos ir y viajar y pasearnos, pero siempre nuestra casa será México. Ojalá que ese espíritu sea el que nos lleve a discutir esta ley y, sobre todo, a ustedes, los senadores, que es a los que les corresponde a tomar la mejor decisión.

A mí me gustaría empezar por preguntar o poner sobre la mesa, ¿en qué sí estamos de acuerdo?

En que todos los operadores civiles o militares deben respetar integralmente los derechos humanos, en que no debe militarizarse la seguridad pública, en que debe de haber mejores policías y ministerios públicos, indudablemente con salarios más elevados y mejor formación.

Que la intervención de las Fuerzas Armadas debe ser complementaria y subsidiaria, y por razones de excepcionalidad como las que actualmente vivimos. Esto ya está en la Constitución y en las leyes que de ella derivan. El problema no está, entonces, en las leyes, sino en las prácticas, en las buenas o malas prácticas.

La pregunta sería, ¿a quién le conviene que no haya un marco regulatorio para toda las Fuerzas Armadas, que está en situación de excepcionalidad y complementariedad dentro de la seguridad interior?

¿Qué hay detrás del interés de continuar en este vacío legal? Eso es lo que me pregunto.

Y para ello me permití traer tres láminas, que me parece nos van a ayudar muchísimo a todos, y tiene que ver con el último informe de la OEA, y todos los Estados que forman parte de ella. Aquí la tienen ustedes.

Ahí están, ¿quiénes son los que dentro de la OEA, los gobiernos, los países, utilizan a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior? Esto no es lo que diga Isabel, no es lo que diga una ONG, es lo que dice la OEA, es su último informe.

Y ahí, si quieren pasar la siguiente, por favor.

Como pueden ver, el 79% de los países utilizan las Fuerzas Armadas porque, bueno, como sabemos no todos tienen Fuerzas Armadas; pero el 79% de los países que están en la OEA utilizan las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad interior.

Creo que eso nos debe de dar una luz, que no somos la excepción, México, para la utilización de las Fuerzas Armadas.

Hace muchos años, el rol de los héroes era diferente. Hoy son tan cotidianos los actos de heroísmo que llevan a cabo muchos policías, marinos, soldados y ciudadanos, que ya no los agradecemos y no los valoramos, están ahí para atender a la población en casos de desastre, para defender nuestras vidas y a nuestro país.

Permítanme recordarles, que desde el 1º de diciembre del 2012 al 10 de diciembre de 2017, han muerto en cumplimiento de su deber únicamente, digo que únicamente en lo que son policías, no tengo el dato de todas las fuerzas armadas, 329 soldados; militares desaparecidos, 65 militares, de los cuales 19 fueron encontrados torturados.

Eso es lo que hay también del otro lado de la moneda.

Hoy vivimos una crisis, pero no únicamente de seguridad, es mucho más profunda. Hay quienes le apuestan por debilitar a nuestras instituciones, por darles capacidad al Estado.

Hay quienes van al exterior a pedir, incluso, comisiones de la verdad, como si nuestras instituciones no fueran capaces de darle viabilidad a cualquier conflicto que tengamos los mexicanos.

Hay quienes ponen los derechos de los delincuentes o de los imputados por encima de todos los de los ciudadanos, incluso, de los del país, argumentando los derechos humanos, como si únicamente ellos los tuvieran o fueran más importantes que los de la sociedad entera.

Hay quienes, incluso, se niegan a reconocer los derechos humanos de los policías y de las fuerzas armadas.

Todos nos indignamos, indudablemente, cuando vemos a un soldado o a un policía teniendo una conducta inapropiada, pero muchos son indiferentes a las torturas que sufren las víctimas del delito, o más aún, a las violaciones en contra de un miembro en roles de seguridad, y peor aún, tiene más credibilidad, muchas veces las palabras de un imputado que la propia palabra de una autoridad. Esto es inadmisible, así no se construyen instituciones fuertes.

Les pueden disparar sin que ello constituya el delito, como es el de tentativa de homicidio. Hoy tenemos a gente que le ha disparado a nuestras Fuerzas Armadas, a los policías, lo acabamos de ver en Morelos; y a pesar de que hay fuego cruzado durante dos horas, nadie se puso a disposición por el tema de tentativa de homicidio.

¿O qué piensan, que cuando los delincuentes les disparan a los policías o soldados es para saludarlos? ¡No, senadores! Es con el fin de aniquilarlos.

Estos grupos, incluso, desarrollan metodologías no solamente en México, sino en el extranjero, de confrontación violenta para dañar a todo: pero principalmente a los que tienen el deber de darnos seguridad y que no son otro que nuestra propia gente.

Estas metodologías están perfectamente diseñadas y se han aplicado en protestas sociales, como en Estados Unidos y América Latina; tienen una unidad de comando y son utilizadas como estrategia política por ciertos grupos de interés que se financian en el Wall Street.

Por ello, nos pronunciamos a que no se realice algún cambio fundamental para que en el tema de protesta, indudablemente, se respete el derecho de la protesta. Estamos a favor de que la gente se pueda manifestar, pero lo que no estamos a favor es en que el Estado no pueda actuar en contra de las manifestaciones violentas, como las que hemos visto, en las que queman a policías, en la que llegan y queman casas, en las que llegan y queman incluso de Palacio Nacional.

Hemos visto cómo los policías de la Ciudad de México y a los de la policía federal, de verdad, les avientan petardos con fuego y no pasa absolutamente nada.

Es falso lo que afirman sin pruebas de que ahí donde ha trabajado el Ejército ha subido la violencia, los homicidios y los secuestros. No se puede analizar de manera facilona los datos de Chihuahua, Durango, Guerrero y Tamaulipas, sin relacionarlos y vincularlos con los experimentos que hemos denunciado en estos estados vinculados con la equivocada implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal; en el que los policías fueron los últimos en ser disque capacitados, muchos ni siquiera han recibido una capacitación.

A quien primero se capacitó, indudablemente, fue al Poder Judicial. No estamos hablando de que si el sistema en sí esté mal diseñado; estamos hablando de que no tenemos policías que puedan aportar pruebas fehacientes o que no estén contaminadas para que puedan ser valoradas por un juez.

No se puede distinguir entre los homicidios que se deben a la guerra, a la llamada guerra del narcotráfico, que en Chihuahua produjo la policía, y el hipergarantismo de estas organizaciones que se resisten a ver la realidad.

Permítanme expresarles, senadoras y senadores, que una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad; y hoy nos enfrentamos ante una realidad grave en nuestro país, en la que el crimen organizado y el narcotráfico se ha apoderado de parte de nuestro territorio, en el que se ha cooptado a muchas de nuestras policías y hasta presidentes municipales, lo cual impide la gobernanza.

En algunos casos por corrupción, y en otros por miedo, aplicando la Ley de Plata o Plomo. Así que mientras esta situación esté latente, es imposible retirar las Fuerzas Armadas de algunas partes de nuestro territorio.

Yo no me quiero imaginar cómo sería Tamaulipas sin el Ejército, en donde no pueden transitar en las carreteras si no es a través de estas caravanas cuidadas por el Ejército, la Marina o la Policía Federal.

Estamos de acuerdo en que la ley es perfectible, indudablemente, pero hay muchas leyes, como fue la Ley de Víctimas, por ejemplo, que continúa sin estar terminada y que ha sufrido varias modificaciones.

Eso es lo mismo que debemos de hacer con esta ley, debemos de tener, una vez que ustedes lo aprueben, un marco regulatorio, no un vacío legal; y después, conforme un tiempo, poder hacer los ajustes que requieran ya en la práctica. Me parece que eso sería muy sano, como se ha venido haciendo con otras leyes.

Lo que sí es importante dejar plasmado en el ordenamiento correspondiente, es el que se construyan policías suficientes y capaces para poder atender los temas que les competen, y no tener el desastre de policías civil que hoy tenemos.

No dejemos a discreción de los gobernadores este tema. Por décadas hemos tenido la experiencia de que no les interesa, sólo levantan la mano y piden la ayuda y se les manda al Ejército.

Hagan las leyes y normas necesarias destinando, sobre todo, recursos económicos para que verdaderamente se construya una política pública transversal en la que se ataque de raíz el problema de desigualdad, en la que haya dinero para la prevención del delito, en la que existan policías, repito, preparados, suficientes ministerios públicos capaces y jueces honestos.

Hay que destinar recursos económicos y no sólo tinta. Hagamos los ajustes que requiere el nuevo Sistema de Justicia Penal para que quien quebrante la ley no quede impune por tecnicismos, pese a haber cometido delitos.

Pero más aún, no pongamos la carga política y social en contra de nuestras Fuerzas Armadas, no se lo merecen. El Ejército y la Marina están dentro de las dos instituciones mejor calificadas por encima de otras muchas instituciones.

Es falso que violen derechos humanos sólo por el simple hecho de promulgar una ley. Ni nuestra Constitución, ni los tratados internacionales distinguen entre la actuación de las Fuerzas Armadas y las policías en materia de derechos humanos, es decir, todos estamos obligados a respetar los derechos humanos.

Son las mismas reglas para la detención de personas cuando han cometido delitos para la presentación inmediata frente al ministerio público, para la declaración y el testimonio en el juicio oral. Es decir, a la milicia o a las Fuerzas Armadas no se les aplican leyes diferentes, todos tienen que respetar los derechos humanos.

También existen las mismas reglas para el uso de la fuerza, en ambos sistemas está prohibida la tortura y la intimidación o la incomunicación.

Por virtud de nuestro sistema de derechos humanos, los militares que cometan una falta serán juzgados por tribunales civiles; quienes afirman lo contrario, se equivocan de siglo, pues en el presente siglo no existe otra realidad jurídica.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia ya ha dicho en varias sentencias, que tratándose del tema de seguridad los derechos humanos deben de tener una interpretación integral, ha dictado sentencias en las que si las fuerzas militares no cumplieron con los requisitos de legalidad en las detenciones, no se cumplen con la formalidad esencial de procedimiento y el debido proceso.

No es una sentencia solamente en la que en una acción de inconstitucionalidad, señalo que el Secretario de la Defensa y de Marina podrían participar en el Consejo de Seguridad Pública, como afirman los detractores de la ley, como ustedes saben ellos participan incluso en el Consejo Nacional de Seguridad.

Son decenas, si no es que centenas de sentencias del Poder Judicial Federal, que confirman la tesis fundamental de que no hay diferencia entre la actuación de militares y policías y que como consecuencia, confirma la actuación excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior.

Es mentira que se pretenda militarizar el país. Señores, hace mucho que las Fuerzas Armadas ejercen diferentes tareas, como aquí lo acaba de decir precisamente el senador Gil, de muchos tipos, así es que hemos convivido con las Fuerzas Armadas.

Pero déjenme decirles que México no está fuera de la realidad ni de la norma en el ámbito internacional. Tanto en América Latina como en Europa, las Fuerzas Armadas hacen funciones de seguridad, igual que las Fuerzas Armadas en México, en condiciones de complementariedad, excepcionalidad y por métodos legales similares, a la propuesta de esta Ley de Seguridad Interior como lo acabo de demostrar.

Aprovecho para exigir como ciudadana, a este H. Senado, la aprobación de la minuta de ley del uso de la fuerza que existe en esta Cámara desde mayo de 2009, no es posible que no haya sido aprobada la ley de uso de la fuerza.

La ley es importante porque pone un marco regulatorio a la actuación de todos los operadores que requieren usar la fuerza de manera legítima, de forma racional y proporcional, y cuando exista la necesidad mediante un plan de uso de la fuerza en las manifestaciones violentas, que permite garantizar los derechos de todos.

Es falso el debate de que se violen derechos humanos per se, en la ley.

Me permito citar al señor Elizondo Meyer, dice en un artículo que escribió: "...si vive en una zona insegura del país, y tiene la suerte de que no lo extorsionen en la puerta de su casa, es probablemente gracias a la presencia de las Fuerzas Armadas.

Es fácil prometer regresar al cuartel, pero imposible hacerlo sin tener policías eficientes y honestas.

Sin guerra contra el crimen organizado, tendríamos gobierno del crimen organizado...". De ese tamaño estaríamos.

Nadie ha dicho que la Ley de Seguridad Interior va a acabar con la delincuencia, eso es una mentira, no es varita mágica la ley, es sólo el marco jurídico que requieren las Fuerzas Armadas para actuar de manera que se determine con precisión la facultad constitucional que tiene el Presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior de la nación, determinar los procedimientos y requisitos para generar garantías para todos.

Por supuesto que estamos a favor de que se elimine este vacío y se determine un marco jurídico precisamente para que en los juicios estén legitimizadas las Fuerzas Armadas cuando hagan este tipo de labores.

Gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Gracias a la señora Isabel Miranda de Wallace.*

Tiene la palabra el maestro Juan Ibarrola.

MAESTRO JUAN IBARROLA: *Muy buenas tardes a todos, por respeto al tiempo de todos los que están aquí, procuraré ser lo más breve y directo posible.*

Lamento mucho que el discurso englobe única y exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Y lo lamento porque en realidad no son las Fuerzas Armadas las que han pedido tener este tipo de responsabilidades, más que de tareas, las tareas las tienen, y las tareas las van a seguir haciendo.

Valdría mucho la pena analizar la idea, aceptar la idea, perdón, de que este país está militarizado; pero está militarizado no porque las Fuerzas Armadas hayan querido que se militarizara, porque, bien lo han comentado aquí de ambos frentes, es decir, los senadores y los gobernadores, en el sentido de que las tareas de seguridad pública las hacen las Fuerzas Armadas. Pero también hacen tareas de apoyo a la población en caso de desastre, también hacen tareas en función de educación, cruzada contra el hambre, reforestación.

Y creo que valdría la pena ya comenzar a quitarle lo negativo a que el militarismo, que creo que sí, se vuelve anacrónico el término que quizá algunos retos traen de los años 70 y 80.

El militarismo en México es diferente, porque si preguntamos dónde, ¿quiénes están ayudando a los desplazados en Chiapas?, son los soldados, no son las ONG, no es el gobierno local, no son organismos internacionales, son los soldados los que están ayudando a esa gente.

Sin embargo, en materia de lo que es la seguridad interior, lo que se ha olvidado aquí es precisamente la responsabilidad que otros actores deben de tener en función de esa seguridad interior, que lo que busca, y es lo que no he escuchado el día de hoy aquí, es la fortaleza institucional, la fortaleza de las instituciones municipales y estatales, que creo que ese es uno de los beneficios que traerá esta ley, es decir, en qué momento ya tienen que fortalecerse.

No existe un solo gobernador, alcalde ni senador que esté en este momento en funciones, que haya tomado su función sin que las Fuerzas Armadas no estuvieran a un lado para apoyarlos. Ninguno.

Entonces, quizá los señores gobernadores y los señores y las señoras senadoras deberían de tomar en cuenta esto, o se convierte en una forma de gobernar y de legislar. Es decir, teniendo a las Fuerzas Armadas de un lado o es preferible darles a las Fuerzas Armadas un marco jurídico para que dejen de hacer eso de lo que tanto algunos grupos estén insistiendo que no se haga; es decir, militarización, es decir un poder absoluto a los militares, lo digo con respeto, los militares tienen poder, pero no los mexicanos, los militares de todo el mundo, para eso es, para eso son las Fuerzas Armadas, para que sea una institución de poder, de poder del Estado, gobierne quien gobierne.

Creo también importante decirlo, y con esto concluyo, que no es un tema de temporalidad, es decir, no porque esté terminando un gobierno se intente hacer una ley interior. Ustedes lo conocen mejor que yo, cuántos años se lleva con este tema, cuántos años se lleva también con las Fuerzas Armadas en las calles, las Fuerzas Armadas no van a regresar a los cuarteles, porque desde hace muchos años, no desde hace 12, sino como de, como bien lo decía el senador Gil, desde los años 40 no están dentro de los cuarteles, ojalá entonces que no regresen.

Concluyo con la sorpresa también de que yo no veo a los estudiantes de Tamaulipas, como tampoco veo a los médicos de Chihuahua, esos que no pueden dar consulta. Tampoco veo a los mineros en Zacatecas o tampoco veo a los pobladores de Lázaro Cárdenas, Michoacán; como tampoco veo a los pescadores de Veracruz o a los industriales de la carne en La Laguna y de la leche, manifestándose en contra de esta ley; y eso en verdad me sorprende porque si se les pregunta a ellos, no quieren que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias al maestro Ibarrola.*

Tiene la palabra la presidenta municipal de Tetela del Volcán, Puebla, Ana Bertha Haro Sánchez.

¿Es de Morelos, perdón?

PRESIDENTA MUNICIPAL ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ: *Morelos.*

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Morelos, discúlpeme.*

PRESIDENTA MUNICIPAL ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ: *Muy buenas tardes. Con el permiso de todos los presentes.*

Quiero agradecer la invitación que hiciera la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de esta Junta de Coordinación Política del Senado de la República, es para mí un honor poder estar aquí para dar mi punto de vista, y, sobre todo, considero que este foro que se ha abierto para escucharnos a todos, en este caso una servidora como alcaldesa del municipio de Tetela del Volcán, Morelos, es precisamente con la finalidad de poder captar todo este enriquecimiento de ideas que cada uno ha estado manifestando y poder tomar la mejor decisión, antes de emitir precisamente ya de manera definitiva lo que viene siendo esta Ley de Seguridad Interna.

Uno como alcalde pasamos a ser el más cercano a la población, somos el gobierno de mayor cercanía.

Quiero manifestar, hemos visto el esfuerzo que ha hecho el gobierno del estado en Morelos con el tema del mando único; sin embargo, lo vemos como alcaldes a veces se queda ahí como una limitante, una limitante porque si se requiere tener también una coordinación municipal, sí la vamos teniendo, pero es un riesgo, considero, el que no se fortalezca la seguridad en cada nivel de gobierno.

Y empezar desde la base es muy bueno, desde los municipios e ir sumando, si fortalecemos a la seguridad municipal que es la más cercana, y con base en eso también la seguridad estatal, la seguridad federal y nos coordinamos de manera correcta, considero que es la mejor solución. De lo contrario quedamos muy lejos de una decisión que se pueda tomar a un nivel que inclusive a veces por alguna diferencia política pudiéramos estar en riesgo los gobiernos más lejanos.

Entonces, en lo particular tengo ejemplos de lo que viene siendo esta situación, por ejemplo, del mando único, y en lo particular el municipio de Tetela del Volcán del estado de Morelos ha sido uno de los municipios más seguros, ha habido una participación de la misma ciudadanía que simplemente con radios de comunicación nos coordinamos con seguridad pública nos coordinamos, que también es fortalecer precisamente a los ciudadanos para que los ciudadanos seamos los primeros que nos cuidemos entre nosotros, entre cada uno, y existe esta coordinación de ciudadanía, policía municipal, estatal y federal, y que todos vayamos sumando con una adecuada coordinación.

En el tema de lo que viene siendo el Ejército, Tetela del Volcán es un lugar boscoso, estamos muy cerca del volcán, hemos tenido mucho el apoyo, y mi reconocimiento para el Ejército mexicano, nos ha apoyado en el tema del cuidado que tiene que ver con los árboles, evitar la tala, ahora en el desastre por el sismo nos ha estado acompañando con el Plan DN3, un reconocimiento desde luego, pero considero que sí también hay que dejar muy claro la función también en qué momento es prudente que pueda entrar.

Yo coincido que en este caso las fuerzas del Ejército deben de participar a petición en puntos exclusivos que se requiera, no precisamente que sea de manera constante, a menos que también así se pida y se requiera de manera constante, pero si no es a motivación expresa no sería precisamente la solución.

Y efectivamente el poder realizar un marco jurídico adecuado, sucedió recientemente cuando subieron a hacer un trabajo en el bosque de ir precisamente a vigilar, evitar la tala clandestina, y cuando quisieron actuar, detener a las personas que encontraron, uno de ellos me decían: "es que no podemos actuar porque no tenemos la cuestión de la ley bien normada".

Entonces, sí inhiben, el Ejército inhibe, pero en esos casos no pudo actuar como quisiera por no tener bien esta cuestión normativa.

La Ley de Seguridad Interior, como se viene manifestando, así como está, considero que sería un retroceso, habría que tomar lo bueno y complementarla a fin de que no se vea vulnerado lo que es la soberanía y, sobre todo, el tema que tiene que ver con el que pueda causar algún temor o incertidumbre a los ciudadanos.

Se generan dos cuestiones y quizá eso es lo que se tiene que ir viendo directamente con cada municipio o en cada localidad, habrá quien requiera al Ejército, por eso les da seguridad de acuerdo a las condiciones que están viviendo, y habrá quien diga no requerimos el Ejército porque da temor en la situación.

Concluyendo.

Considero que se debe de fortalecer más bien la seguridad pública en los tres niveles de gobierno, coordinar bien estas tres fuerzas de gobierno, contar con el marco normativo de la legalidad para la correcta actuación de las Fuerzas Armadas, y solicitar el apoyo de ellos de manera expresa.

Por el bien de nuestro país, actuando con responsabilidad, vale la pena dedicar tiempo a analizar cómo se está haciendo hoy aquí, como estamos todos analizando esta Ley de Seguridad Interior, vale la pena antes de emitirla y que se realicen los ajustes pertinentes para salvaguardar la seguridad y soberanía de nuestra nación.

Y desde luego antes de entrar en vigor, esta Ley de Seguridad Interior, además de fortalecer las instituciones de seguridad desde el ámbito municipal, también considerar los recursos que se tienen previstos para la implementación de dicha ley, y, sin duda, si cuando nos vamos al fondo de todo esto, que tiene que ver con la seguridad de la nación, nos remontamos desde luego a que tenemos que trabajar muy fuerte en el tema de la educación desde nuestras localidades, ahí está la base y en las familias, todo delincuente, persona bien o mal sale de las familias, entonces, debemos de trabajar en leyes que ayuden a hacer ese fomento, ese fortalecimiento desde el ámbito familiar para que en varios años, porque es un trabajo de mucho tiempo, ir fortaleciendo en nuestro país a fin de garantizar esta seguridad y soberanía.

Esto es parte de mi punto de vista, les agradezco la atención.

Gracias.

***SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:** Muchas gracias a la presidenta municipal, Ana Bertha Haro Sánchez.*

Tiene ahora la palabra, de México SOS, su director, Orlando Camacho.

ORLANDO CAMACHO: *Muy buenas tardes. Gracias, Senadores, por recibirnos e invitarnos a comentar algunos de los puntos que me parece que son importantes en esta Ley de Seguridad Interior.*

Lo primero que quisiera comentar es, esta idea de generar una Ley de Seguridad Interior no es nueva, ya tiene muchos años, simplemente en el sexenio pasado, en las oficinas propias de México SOS, ahí tuvimos algunas reuniones con Senadores en ese momento, con gente del Ejército, con gente de Marina, con gente de la Secretaría de Gobernación, en donde tratábamos de ver cómo podíamos darle un marco a esto, ¿por qué? Porque ya estaba pasando, entonces, esto no es una discusión nueva, es una discusión que viene desde hace tiempo y que ha ido adquiriendo yo creo que más fuerza precisamente porque cada día tenemos a las Fuerzas Armadas más presentes en todo el país.

Es decir, en el momento en que se emita esta ley no quiere decir que al día siguiente las Fuerzas Armadas saldrán a los diferentes estados, municipios, a hacer labores; no, ya están, empezamos con seis, hoy tenemos 28, 27 estados que ya tienen presencia de nuestras Fuerzas Armadas, y, por supuesto, un número importante también de policías federales, entonces, no es nuevo.

Y hay que partir desde México SOS, desde ese tiempo nos interesa mucho esta ley porque estamos viendo una realidad, no es un supuesto, esta ya es una realidad, y para nosotros la realidad tiene tres componentes principales.

El primero es, como se ha comentado por todo mundo, vivimos en una situación complicada, muy complicada de delincuencia, de violencia, de desagravio, de pisoteo, ya a veces nada más es saber no quién deja de nadar en el lodo, sino quién sabe nadar mejor en el lodo, y nos vamos librando de esa situación, y se nos olvida que hay otro tipo de ámbitos, pero ya estamos viviendo en esa situación muy complicada, hace rato escuché a algunos de los Senadores decir que bueno, cuando llegamos a una situación extraordinaria, entonces habría que tomar esto, pues yo no sé si esto no es extraordinario, qué es extraordinario, a lo mejor no han paseado por el país para darnos cuenta de lo que están sufriendo y está viviendo la gente, la sociedad, la ciudadanía, los niños, las escuelas, las familias, si no nos hemos dado cuenta de ello, pues entonces yo les invitaría a que nos diéramos una vuela para que viéramos lo que es extraordinario y digo extraordinario porque no es lo que quisiéramos vivir, lo ordinario es lo que quisiéramos vivir en plenitud, en paz, cuando nuestros hijos van y regresan, cuando nuestras hijas salen a divertirse y pueden regresar, cuando tenemos que hacer reuniones en casa, porque entonces ya no se puede pasar a otra forma de hacer las cosas.

Hoy estamos viviendo ya en una situación complicada, es la primera.

La segunda realidad es que tenemos instituciones locales débiles, algún estado y tampoco generalizo, hay estados que han hecho un esfuerzo importante y han metido recursos, coordinación, se han preparado internacionalmente, han reclutado de forma distinta y hay ejemplos que han fortalecido a sus policías, lo han hecho, pero no son todos y son los menos, y cuando hay un cambio de gobierno, a veces esa parte que se hizo bien se nos empieza a caer, esa es la segunda realidad.

Sí tenemos instituciones locales débiles que no han podido sustentar y enfrentar una ola de delincuencia de la que hablaba.

Y la tercera realidad es que las fuerzas armadas ya están, ahí están y están no solamente haciendo a lo mejor labores que no les corresponden, porque tampoco quieren estar ahí, si ustedes platican con los almirantes, con los vicealmirantes, con los generales, con la gente a cargo, y ellos les dicen: "Nosotros no queremos estar aquí eh". Nos estamos metiendo en una bola de problemas porque a nuestros marinos y a nuestros soldados ya los llamó la PGR, porque hicieron algo que a lo mejor no debieron hacer y se brincaron un debido proceso y son las cosas que tenemos que ir corrigiendo, porque no son primeros respondientes.

Entonces el almirante te dice, pero cómo le hago si ya encontré dos depósitos de combustible y de gasolina en dos casas y no puedo entrar y nada más la estoy medio custodiando, pero no puedo, pero no llega, pero tampoco el local entra porque no le corresponde, pero sí al otro, pero tampoco le entra porque no ha llegado y ya me lo acaban de cambiar, ¿qué hago? Se fueron.

Pero esa es la realidad de todos los días, entonces ya están ahí cumpliendo algunas funciones y funciones muchas que no les corresponden y que no quisieran cumplirlas, pero además con otra.

Están ahí cada día en una relación más positiva con la sociedad, que si destacamos una presencia, la presencia militar en nuestros lugares es que ha habido una apertura por parte de ellos y también por parte de la ciudadanía para recibirlos, o ya no es tan cerrado ese núcleo, hoy se abre, yo les doy ejemplos muy puntuales, nosotros tenemos las mesas de seguridad de justicia, las mesas se sientan generales, se sientan militares, se sientan almirantes, se sientan policías federales, además de las demás instituciones, ya se nos fue el Presidente de Ciudad Juárez.

Pero gran parte para sacar adelante la situación de Ciudad Juárez, tuvo que ver con una mesa de seguridad y justicia de Ciudad Juárez donde estaban sentadas todas las autoridades coordinadas, todas, porque había un objetivo mayor.

De acuerdo con don Juan, con lo que dice, cuando se bajó en la zona sur de Tamaulipas, el tema de la extorsión y el cobro de piso disminuyó considerablemente, tuvo que ver con una coordinación perfectamente bien hecha entre la sociedad, entre la Policía Federal y entre la Marina, esos fueron los tres, pero lo mismo pasó con otras instancias y con otros problemas.

Y entonces, cuando sale esta Ley de Seguridad Interior, me parece que no está violentando algunas de las cosas que se han dicho más bien creo que sobre una realidad que ya existe, está tratando de regular, de normar ciertas conductas que hoy también quedan muy ambiguas, y que son las que hay que ir corrigiendo.

Por ejemplo, hoy queda a discreción de un gobernador hablarle al Presidente o al Secretario de Gobernación por el teléfono rojo y decirle mándame militares o mándame marinos o mándame Policía Federal, ya verán si se los manda o no se los manda, pero ahí están.

Hoy hay más militares afuera en las calles, más soldados del Ejército, que el total que compone el número de la Policía Federal, y esas son llamadas del teléfono rojo, tal vez, para decir, mándanos, porque nos urge, porque lo necesitamos.

Hoy la ley nos dice: "Trata de regular eso, si es perfectible, pues hay que perfeccionarlo" .Pero ella nos dice que debe de haber una declaratoria, hoy nos dice que tiene que pasar por un proceso, hoy nos dice que eso tiene un periodo vigente, y hoy nos dice que el que no cumpla eso y además

tiene que haber un plan de cómo va a fortalecer las instituciones, eso hoy no existe, la realidad está, pero eso no existe, entonces lo está normalizando.

Hoy existen 90 días para emitir una declaratoria, cuando ya están las fuerzas armadas, cosa que hoy no está así, hoy ya hay 90 días, si ya están las fuerzas armadas, el gobernador tiene que ponerse las pilas.

Hoy hay ya una obligación o cierta obligación para poder pagar lo que le corresponde al gobierno del estado pagar sobre las fuerzas armadas, cosa que hoy durante muchos años muchas de las fuerzas no han recibido ni en recursos y ellos terminan pagando la gasolina, las patrullas siguen poniendo al personal, la comida y no sólo de los suyos, sino de los policías que les están metiendo y hay estados concretas, o sea, siguen haciendo labores sin que nadie les regule nada y nadie le exija la otra parte que le corresponde y fueron los acuerdos en los que acordaron.

Creo que una cuestión es esta Ley de Seguridad Interior, y otra cosa es todo ese fortalecimiento de la Institución Policial que, por supuesto, tenemos que entrarle, tenemos que entrarle con mucha fuerza a ese fortalecimiento de nuestras intuiciones, pero no debe ser una si no se da la otra.

La realidad y la problemática es una para regular y normar, y el objetivo de esta ley es esa, cómo regularizamos y normalizamos esto, pero eso no quiere quitar el dedo del renglón para esforzarnos todos con la misma pasión que estamos defendiendo o apoyando o criticando esta ley, para que exista la otra parte, no brincamos igual cuando el presupuesto se fue a cero en los temas de prevención.

Eso es delicadísimo, usted lo acaba de comentar.

Hoy tenemos que regular, no sabemos cuántas empresas, en diferentes estados están poniendo de su dinero y a su personal para ayudar a los estados a reclutar con campañas que ellos conocen cómo hacerlo para policías, que además el 80% en promedio, se los van a tirar por los controles de confianza que eso totalmente tenemos que corregir, pero ya el 80% va para abajo, de entrada.

Entonces cómo le pedimos que fortalezca las instituciones policiales si tampoco les estamos dando razón.

Pero ese es un tema que tenemos que tratar al ladito si quieren, pero eso no puede mermar la otra, son cosas que deben ir caminando de la mano.

Y diría que hoy necesitamos ser más claros cuando nos dicen, en cuestiones de militarizar al país, yo también entiendo qué es eso de militarizar al país, cuando ya tenemos 27 estados.

Y me cuesta trabajo entender también, dónde estamos violentando los derechos humanos, porque si un soldado o un marino violenta derechos humanos o comete un delito, pues se va a la cárcel, se le juzgue por eso.

Ese es el tema de fondo y es donde, porque es muy fácil ahorita que hablemos en temas generales, vayámonos a los temas específicos y concretos y veamos la coordinación que se está teniendo entre varias autoridades locales con el Ejército, lo que usted comentaba, ahí también, me cuesta un poco de trabajo entender dónde, porque esto es retrógrada, esta ley no la entiendo, por

qué usted comenta que era retrógrada, así lo dijo y no lo entiendo, al contrario lo que estamos haciendo es tratar de normalizar algo que ya está, entonces más bien perfeccionando lo que tenemos que perfeccionar.

Yo terminaría diciendo que cuidemos con seriedad la ambigüedad de los conceptos y si la ley presenta alguna ambigüedad de algunos conceptos, corrijámoslo, ahí está el Senado, para eso está el Senado y para eso está el Congreso, corrijamos los puntos que hay que corregir. Pero el concepto general es que ya es una realidad y hoy tenemos que proteger eso.

De la misma manera que hoy dicen, bueno, está usurpando a lo mejor algunas responsabilidades que le correspondería a alguna policía local, que no la tenemos, porque las tenemos débiles, y que tenemos que ver qué están haciendo y que hasta ahora sí ya nos dimos cuenta, y no hace 10 años, pues también tendríamos que estar pensando con mucha seriedad en cómo sacamos una ley en contra de la delincuencia organizada, una ley nacional también, para ir viendo cómo están las atribuciones entre los estados y la Federación, porque hoy ahí también hay una cuestión de incompatibilidad, pero de otra realidad, la realidad es que los estados hoy se están metiendo en temas de delincuencia organizada, porque la Federación no está pudiendo en forma completa. Normalicemos y regularicemos eso también, son realidades.

Hay una Ley Nacional de Ejecución Penal, que en 45 años no se había llevado a cabo, ya salió afortunadamente, la sociedad civil estuvo muy metida. Hoy nos normaliza otra problemática que también está parada, que es el tema de nuestros penales.

Y a lo mejor no lo saben, pero hay sociedad civil que ha construido cuarteles en estados, porque dicen, necesitamos que estén en Nuevo León, como la Laguna, como Coahuila, o sea, cuarteles, hoy les están donando terrenos a la Marina en otro estado, para que entonces digan, por favor necesitamos que estén aquí porque nuestras instituciones no están jalando, y con ustedes nos sentimos hasta ahora protegidos.

La sociedad civil también se da cuenta de ello, no quiere decir, si militarizarnos, ya estamos entonces militarizados, trabajando, tratando de sacar adelante esto que estamos queriendo sacar adelante.

Terminaría simplemente diciendo que los enemigos de México no son los marinos, no son los militares, no es la Policía Federal, no son nuestras policías locales, no es la sociedad civil. Los enemigos son los "otros", los narcos, los malandros, los de las armas, los delincuentes, los secuestradores. Ésos son los enemigos de México, ésos son. Unámonos todos los demás que estamos de este lado, y entonces organicemos, normalicemos lo que cada uno tiene que hacer, corrijamos lo que tengamos que corregir, pero actuemos como un grupo, un equipo, un país en contra de quienes realmente así son, los malandros y los que están haciéndole daño a nuestros hijos y a nuestras familias.

Conociendo al país completo desde donde estamos, porque estamos en todo el país, les puedo decir que el tener unas Fuerzas Armadas hoy que estén presentes funcionando, haciendo labores incluso que no les corresponden, y otras que sí, ha sido una enorme gratificación para la gente que vive ahí, normemos lo que tengamos que normalizar, pero sobre ello, los enemigos de México son otros.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias al señor Orlando Camacho.*

Tiene la palabra don Jorge Amado, Director de Seguridad Ciudadana en Nezahualcóyotl, del Estado de México.

SEÑOR JORGE AMADO: *Muchas gracias. Buenas tardes.*

El tiempo que hablamos particularmente para aportar lo que la experiencia de cada quien y de cada institución le arroja sobre esta temática.

Yo pienso que el tema es si esta ley es la ley que la seguridad de los ciudadanos y del país necesita ahora para responder a una necesidad muy particular que ha sido expresada por los militares, en el sentido de legalizar su participación en esta problemática nacional.

Y yo me pregunto si ésta es la única forma legislativa de resolver ese problema, o si hay alternativas, algunas incluso ya elaboradas y aprobadas por el propio Senado, pero congeladas allá en la Cámara de Diputados.

A mí me parece que la reglamentación del 29 constitucional sí es una tarea, y es una tarea que está en proceso de ser resuelta, si ése es el objetivo. Pero leyendo el texto de la minuta, o más bien de la iniciativa y de la minuta, uno encuentra que hay propósitos varios, además de ése tal vez, y que ése no se resuelve bien, porque hay juicios muy claros que hablan de la inconstitucionalidad del conjunto de los conceptos, y algunos de manera muy particular. Pero ésa no es, digamos, la calidad con la que aquí vengo. Yo vengo a hablar brevemente sobre una experiencia.

Es posible que en un municipio que tiene un poco más de un millón de habitantes, se organice la seguridad ciudadana sin desgastar, ni a las Fuerzas Federales, ni a las Fuerzas Militares, con un modelo que garantice que la ciudadanía pierda miedo y que las autoridades policiales entren en contacto muy próximo y de esa manera empoderen a los ciudadanos, se legitimen las autoridades y se desempoderen y por lo tanto se aíslen y debiliten los delincuentes. No les hablo de paraíso terrenal, obviamente tenemos inseguridad, obviamente tenemos delitos, estamos en una batalla constante en esa dirección, pero los resultados son mejores ahí, que en las delegaciones vecinas y que en los municipios vecinos. Y entonces nosotros podemos llegar a algunas conclusiones importantes.

Nosotros hemos llegado a la conclusión de que más fuerza no necesariamente significa más seguridad. Que la seguridad, sobre todo en el nivel local, en el nivel ciudadano está muy vinculado con la proximidad social, porque la proximidad social facilita la captación de información que luego cuando se sistematiza es muy útil como inteligencia, no sólo para la corporación local, sino para aportarla a las otras corporaciones.

Entonces, la labor de seguridad ciudadana es una fuente importante de cooperación y de colaboración con otras áreas. Y quiero ilustrar lo que estoy diciendo.

En este momento para tratar de contener un incremento exagerado de la incidencia delictiva, no sólo en delitos digamos, robos violentos, sino también en homicidios y otros muy graves, en los principales municipios del Estado de México, tenemos 15 bases de operaciones mixtas

combinadas Marina y SEDENA, en Naucalpan, 15 bases de operaciones mixtas en Tlalnepantla, y 15 bases de operaciones mixtas en Ecatepec. Y ¿saben qué? los resultados son magros.

Y más o menos cuando están, baja un poquito, pero en cuanto se van, regresan. Es decir, no son la solución. Y nosotros tenemos un esquema de colaboración con las Fuerzas Armadas muy diferente, y con las Fuerzas Federales. Cuando necesitamos un apoyo puntual lo pedimos, nos lo dan y resolvemos problemas que nosotros no podemos resolver.

Por ejemplo, tengo aquí la memoria de un secuestrador que vio de Reynosa, se instauró en una colonia del municipio. El hombre se sentía la máxima potencia, secuestraba. Una vez nuestros policías lo encontraron en flagrancia, lo detuvieron, lo pusieron a disposición del ministerio público con todas las evidencias, eso sucedió el jueves, el lunes ya estaba libre. Porque el ministerio público se las arregló para que cambiaran la declaración, los policías, etcétera.

¿Cuál es la conclusión nuestra? Necesitamos pedir un apoyo superior, y nosotros, yo personalmente fui a hablar con los órganos de inteligencia de la Marina y pedí su intervención, y la Marina discretamente, si mandar un pelotón de marinos, con el personal de inteligencia que ellos tienen, hizo la investigación correspondiente, puso el caso en la SEIDO, y el señor está preso, y varias casas de seguridad de lado de Iztacalco y de lado de Nezahualcóyotl fueron ubicadas y nos erradicaron ese problema, y en ese aspecto se redujo la incidencia.

Y les podría contar muchos casos, y al revés, mucha de la información que nosotros captamos todos los días, a veces, mediante remisiones de infractores y a veces de delincuentes, la proporcionamos a la Policía Federal, la proporcionamos al Ejército, cuando nos la pide, o la Marina también, y no hay desgaste, ni económico, ni de legitimidad por la intervención de las autoridades federales, lo que hay es un resultado bastante constructivo en todos los sentidos de la palabra, presupuestalmente el gobierno no ha tenido que invertir gran cosa.

Y debo decirles que en Nezahualcóyotl no solamente hemos venido reduciendo la incidencia con la medición que ustedes quieren, y quieran de manera muy notable, en los años del 13 al 15 fue del 64 %, ahora no puede ser tanto porque así son las leyes de la incidencia, pero estamos avanzando. Y la percepción de la ciudadanía nos ha favorecido, en la última encuesta del INEGI de al ENSU, sacamos la mejor calificación de las 4 zonas de la Ciudad de México, de Ecatepec y de la ciudad de Toluca nosotros.

Y nos colocaron, a la hora de la pregunta de la efectividad de la policía municipal, como la quinta a nivel nacional y lo mismo a la hora de "¿confía usted en su policía como la quinta a nivel nacional?".

Yo digo, es un modelito sencillo, no es magia de nadie, pero si lo aplicamos en muchas partes seguramente estaríamos en condiciones de tener resultados diferentes, y no es que volvamos a los militares a sus cuarteles, es que no los utilicemos en una estrategia que después de diez años podemos decir que ha fracasado, necesitamos una nueva estrategia, y esa nueva estrategia significa fortalecer capacidades, no sólo locales, federales y estatales.

Las aduanas, en manos del crimen organizado en Tamaulipas, no son falta de capacidades institucionales locales, son falta de capacidades institucionales federales, son modelos.

En Reinosa cualquier ciudadano que vaya va a ser seguido desde el momento que baja del avión hasta cuando se va al hotel y cuando sale del hotel también porque tienen un sistema de halconazgo muy eficiente, pero por más Halcones que tengan la mayoría de los ciudadanos están atemorizados, nunca se van a manifestar, nunca los van a ver en la calle manifestándose porque parte de la estrategia del crimen organizado es atemorizar y aterrorizar a los ciudadanos, entonces necesitamos una nueva estrategia.

Mi crítica principal a este proyecto de ley es que de alguna manera institucionaliza y le da permanencia a lo que no es la solución, tiene pisos y una estrategia que está demostrado que no funciona… y el Senado, con las capacidades que tiene, se toma el tiempo que sea necesario para la ley, para hacer la ley que el país y que las Fuerzas Armadas necesitan.

Ese es mi planteamiento.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias a don José Jorge Amador.*

Tiene la palabra el doctor Samuel González Ruiz.

DOCTOR SAMUEL GONZÁLEZ RUIZ: *Muchas gracias por la invitación, senadora.*

Senadoras, senadores, gracias.

Creo que es bien importante esta reflexión, y después de haber oído a quien conozco desde hace mucho tiempo, al ingeniero Amador Amador, y de conocer de cómo traba él en Nezahualcóyotl, yo creo que todos estamos convencidos que modelos como ese es lo que hay que desarrollar en todo el país, como también el de Ciudad Juárez que acabamos de ver.

El problema no está en los modelos que acaba de desarrollar el ingeniero Amador, ni el de Ciudad Juárez, ni en todos los otros modelos que han sido exitosos, el problema está precisamente en los otros lugares donde eso no ha sucedido y hay que reflexionar el por qué.

O sea, con toda claridad les decimos: "mejorar a las policías municipales y estatales no es un problema de leyes".

Los señores candidatos a la Presidente de la República, que en los próximos meses darán sus proyectos de gobierno, tendrán los mismos elementos para discutir sus proyectos de seguridad porque ya está todo en la ley, nadie puede inventar nada más porque ya lo pusimos desde hace veinte años en evoluciones que están en la ley, esto no es un problema de leyes, sino de prácticas.

Perdónenme que se los diga, pero es como si me dicen, ¿qué se requiere para hacer un pastel? Pues se requiere la harina, se requiere el azúcar, los huevos, la levadura y la leche, pues ahora mézclala, mézclala y vas a ver si te sale el pastel o no.

Cuando gentes que no saben hacer pasteles se ponen a decir cómo hacer los pasteles, pues el resultado es, por ejemplo, algunos estudios del Cide, sobre militarización que no tiene ni pies, ni cabeza, para decirlo con toda claridad, ¿verdad? se ponen a decir que los militares cuando han llegado han subido los delitos, cuando es exactamente un fenómeno que no se puede analizar así.

Ponte a hacer el pastel, el señor ingeniero Amador Amador sabe hacer pasteles porque lo ha hecho durante quince años en la Policía en Nezahualcóyotl, él si sabe hacer pasteles, sabe cómo se manejan a los policías, sabe cómo se da la interrelación entre los policías municipales y los policías federales y los militares y puede dar los resultados que reconocemos en Nezahualcóyotl, el problema es por qué en otras partes del país no se ha hecho eso.

La respuesta es muy sencilla porque a los policías no les pagan lo que les deben de pagar, porque no tienen carrera, porque la Cámara de Diputados, que es la que debe de dar los recursos, no se los ha dado; porque hemos discutido y tirado el dinero en muchos elementos que te implican, desde luego, la capacitación que ha sido deficitaria para los policías y los ministerios públicos de todo el país.

¿Por qué, no nos engañemos, el problema de la inseguridad en el país tiene que ver con la equivocación a la hora de implementar el modelo procesal acusatorio? Y es clarísimo cuando se analizan los datos de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León, de como cuando llegó el Sistema Procesal Acusatorio los mismos que pretenden que no existan personas metidas en la cárcel, aunque esté determinado en la Convención Americana de Derechos Humanos las reglas para que una persona pueda estar ahí en las condiciones, en las causas y condiciones que señala la Constitución en relación con el diseño de la Constitución, pues no lo permiten.

Todos tenemos derecho a la libertad y la seguridad, lo he dicho muchas veces, y la Constitución dice cómo.

Si yo estuviera cometiendo delitos de secuestro y los amenazara a ustedes con un secuestro, ustedes tienen derecho a ser protegidos en los términos que está señalados en la Constitución.

Ahora bien, esos errores de implementación se están reflejando hoy en esta crisis que vivimos, es decir, cosechamos, estamos cosechando en todo el aumento a la delincuencia y a los delitos que están sucediendo en varias partes del país, los errores en el proceso de implementación de la reforma judicial y, desde luego, que están haciendo crisis.

Dicho esto creo yo que es muy importante reflexionar lo siguiente.

Señoras senadoras; señores senadores:

Creo que alguna parte de la discusión confunde los momentos históricos.

En el año 2006, cuando salieron a anunciar esta guerra contra el narcotráfico, no estaban las condiciones institucionales, ni legales para poder, digamos, sostener el establecimiento de un sistema de derechos humanos en el país.

Nosotros, con nuestro equipo de trabajo, producimos un libro, que se llama "La fuerza de la razón y la razón de la fuerza", que desarrollamos a partir del caso Atenco.

El libro fue publicado en 2009 y llega a una conclusión, que es total y absoluta. No hay diferencias en las legislaciones internacionales, en el tratamiento en materia de derechos humanos de militares y de policías, ahí están todas las sentencias.

La fuerza, la manera de detener las reglas para procesar son exactamente las mismas, no hay ninguna diferencia si son militares o son policías, y eso, ese libro tiene un elemento muy importante, por eso coadyuvamos con algunos diputados a hacer el proyecto de Ley de Uso de la Fuerza para la Federación, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en el año 2009, y que no se ha trabajado.

Hay un espacio muy grave en materia de Ley de Uso de la Fuerza en este país, no se ha terminado de trabajar.

¿Y cómo podemos darle certeza a las personas y a los policías, y a los militares que usan la fuerza si no tenemos esas reglas?

Bien, entonces en materia de derechos humanos no hay ninguna diferencia entre la actuación de policías y la actuación de militares.

Vamos ahora al problema de competencias. Cuando a mí me hablan: es que no se entiende y voy a criticar a mi amigo Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el director, que publique un artículo, no se entiende qué es la seguridad privada, la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad exterior y la seguridad nacional, dice él que no se entiende.

Para mí es perfectamente claro y he escrito el libro sobre el tema, el primero se llamó "Seguridad pública en México, problemas, perspectivas y propuestas", es un asunto de grado, así de simple, es un asunto de grado.

Voy a ser muy sintético. ¿Verdad?

Si alguien, yo, empiezo a escandalizar, claro, sin ser Senador, porque si no, no me pueden sacar. ¿Verdad? los regañaría, desde luego, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, pero si yo empiezo a escandalizar aquí, va a venir el señor, que es la parte de vigilancia interna ¿Verdad? y me va a sacar de la sala.

¿Qué es eso? Seguridad privada de las instituciones o de las empresas. ¿Verdad?

Si yo empiezo a escandalizar con gente, a las cuatro de la mañana, con otros tres amigos, se va a tratar de una falta administrativa, problema de policía municipal, de bando de policía y buen gobierno ¿Verdad?

Si nosotros, en lugar de escandalizar, nos ponemos a dañar edificios, entramos en el problema del código penal del estado. ¿Verdad?

Si esos mismos, nos organizamos y nos dedicamos a hacer secuestros, entramos en el problema de la Ley de Secuestros, y ahí empezamos con materia federal.

Si tenemos armas y empezamos a disparar, pues entramos de lleno en el campo federal, porque la otra es una Ley de Secuestros ¿Verdad? que tiene un ámbito local, y un ámbito federal.

Si nosotros cuatro y otro más nos dedicamos a la delincuencia organizada, pues, estás en un problema donde empiezas a estar en el asunto de la Ley de Seguridad Nacional, en sus dos aspectos: la seguridad externa del país, es decir, un ataque de una potencia extranjera frente a

México, y la seguridad interior, el mantenimiento de la Constitución, de las instituciones, del orden público.

Díganme o expliquenme ¿Qué es lo que no se entiende de lo que acabo de decir? Que está perfectamente implícito en la Constitución. ¿Verdad?

¿Por qué se afirma, por parte de algunos estudiosos, que no se entiende?

Es un asunto de escalamiento ¿Verdad? y donde deben tener competencias.

La Constitución es clarísima en el 21. ¿Verdad?

"La Seguridad Pública compete a los municipios, a los estados y a la federación".

Y en cada una de esas tres fases, tiene competencia la policía municipal, la policía estatal y la policía federal.

El Presidente de la República, de acuerdo al artículo 89, fracción VI ¿Verdad? tiene la facultad de disponer de la totalidad de las fuerzas armadas para apoyar a la seguridad interior del país ¿Verdad?

Y ¿Qué quiere decir eso? Que puede, dentro del ámbito de su competencia, determinar la coadyuvancia ¿Con quién? Con las autoridades federales. ¡Clarísimo, constitucional! ¿Verdad?

Ahora, la Constitución también tiene reglas y tiene reglas de transferencia precisas. Cuando el Presidente está en una localidad o en un lugar, el mando total de las policías, de las fuerzas que sean ¿Verdad? está en el Presidente por disposición constitucional.

Y el Gobernador también tiene, de acuerdo al 115 de la Constitución, capacidades para tomar las fuerzas locales de policía en ciertas condiciones. Tiene ya reglas de transferencia, y desde luego, el Jefe de Gobierno en otras condiciones, según el 122 de la Constitución.

Díganme ¿Dónde está la confusión?

Díganme ¿Cómo es posible que esas reglas puedan ser inconstitucionales por una Ley de Seguridad Pública, que lo que va a reglamentar es precisamente eso en la materia federal?

No, no hay ningún problema de constitucionalidad. El que lo diga ¿Verdad? está engañando, porque la parte de inconstitucionalidad que dicen se refiere a la competencia ¿Verdad? y esa competencia es una competencia perfectamente constitucional, porque está señalado en los artículos de la Constitución, que comenté ¿Verdad?

Entonces, la regulación, y esto, perdónenme que les diga ¿Verdad? pero creo que hay una confusión gigantesca ¿Verdad?

Todos estamos de acuerdo en que se deben mejorar las policías municipales y las policías estatales y las policías federales.

No creo que exista alguien que diga: "Que no debe mejorarse" ¿Verdad?

Ya están las leyes ahí puestas, mejórese ¿Verdad?

Aquí estamos hablando de una cosa distinta, no de ¿Cuál es el modelo de seguridad, que ya está perfectamente determinado en la Constitución?

Sino de ¿Cuál es la manera en que el Presidente de la República puede ejercer esa fracción que está en el artículo 89 de la Constitución, y de eso estamos hablando?

Por eso no tiene razón el que se discuta de otras cosas ¿Verdad?

Y perdón que lo diga con toda franqueza ¿Verdad? a mí me parece que de lo que se trata aquí es que no se legisle para regular ese artículo, es de lo que se trata; no se trata de regularlo correctamente o incorrectamente, se trata de impedir que se legisle, y perdonen que se los diga ¿Verdad?

Esos que lo dicen, están como un siglo atrás. Si a mí me hubieras dicho el siglo pasado ¿Si se podía regular esto? Te diría que no. Pero ustedes están trabajando en materia de derechos humanos.

México se ha incorporado al Sistema de Derechos Humanos.

Hoy tenemos la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo el esquema de derechos humanos, y por lo tanto me parece ésta, perdónenme que se los diga, una discusión que se equivocó de siglo.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias a Samuel García.*

Tiene la palabra el Presidente Municipal, Francisco Cienfuegos, de Guadalupe, Nuevo León, además es Presidente Adjunto de la FENAM, y viene también en representación de la Federación Nacional de Municipios Libres por México.

PRESIDENTE MUNICIPAL FRANCISCO CIENFUEGOS MARTÍNEZ: *Muchas gracias, senadora.*

Muchas gracias a la senadora Ana Lilia, también por considerarnos, invitarnos a estas mesas de trabajo, a estas reuniones de trabajo.

A mis compañeros alcaldes, que hoy han participado también aquí y, por supuesto, al resto de los Senadores, asociaciones civiles y expertos en la materia.

Voy a hablar un poco del antecedente y de lo que a nosotros nos toca vivir como alcaldes.

Yo comparto mucho de lo que aquí han dicho. Orlando Camacho, creo que es regular lo que ya está. O sea, hoy en día en las calles existe la participación del ejército, de las fuerzas armadas.

Lo que comentaba hace un momento Samuel González: "No hay dinero".

Simple y sencillamente si tú quieres comparar la policía municipal, yo tengo una corporación en Ciudad Guadalupe, que rondamos un poco más de 900 mil habitantes, y son un poco más de mil elementos operativos, no tenemos la capacidad que tendría ninguna corporación de las fuerzas armadas. Hacer frente con lo que nosotros tenemos, pues sería, no estas equiparando la fuerza que ellos tienen.

Sin embargo, para poder garantizar en muchos de los aspectos, como decía José Jorge Amador, necesitas de esas fuerzas para poder garantizar hoy en día, y esa es la realidad, la seguridad de nuestras ciudades.

Si lo queremos ver de otra manera, sería simple y sencillamente hablar no con la verdad.

En Ciudad Guadalupe, en el año del 2010, aproximadamente, 2009-2010, hubo un mes y medio, más o menos, que no hubo ni un solo policía en la calle. Un día llegó el ejército y se puso en cautiverio y a disposición del ministerio público al 100 % de los elementos operativos de la corporación. ¿Por qué? Porque estaba inmiscuido el crimen organizado en Nuevo León.

Fue, entonces, cuando se creó la institución policial "Fuerza Civil".

A Adrián, mi compañero Alcalde, le tocó ser Procurador del estado en aquel entonces, e imagínense, tomaron toda una ciudad, el ejército, sin tener las facultades o la reglamentación necesaria.

Y yo estoy de acuerdo en el valor que se le esté dando al tener esta Ley de Seguridad Interior. Creo que el fin óptimo, el procedimiento legal para que las fuerzas federales y las fuerzas armadas intervengan en el apoyo de las instituciones locales y que la facultad constitucional, para tenerla, esté realmente facultada, y que se pueda garantizar el actuar de ellos.

En Guadalupe hay una policía, hay un batallón de una policía militar, hoy, y próximamente va a haber dos, y hacen una gran labor, nada más que tiene que estar al lado un policía municipal, porque lo que lleguen a hacer, no tienen ellos la facultad, no van a ir al ministerio público a decir: "La detención fue así, de esta manera", no, la tiene que hacer, esa parte jurídica, la tiene que hacer la policía local. Entonces, hay ahí un área de oportunidad grandísima.

Estoy de acuerdo, lo que comentaba María Isabel, toda ley es perfectible, yo fui presidente de la comisión de justicia y seguridad pública, y presidente del congreso en el estado de Nuevo León.

Y le implementación del sistema penal acusatorio que tiene un sinfín de recovecos, tienes que avanzar como país, como estado, tienes que avanzar, no te puedes detener, habrá, que, en la práctica tomar nota, y toda reforma tiene una contrarreforma, pero no por eso, para poner a todos de acuerdo, discúlpenme, y yo lo viví como Diputado, eso es prácticamente podríamos decir imposible, pero no por eso, no por eso, en su mayoría, hay que avanzar.

Estos puntos que se han tocado y ya no quiero ser repetitivo, sí creo en el fortalecimiento de la policía municipal, soy un convencido de ello; yo considero que debe, ¿cuál es la diferencia de un policía y de un contador público?, ¿cuál es la diferencia de un policía de un ingeniero, de un doctor?

Tiene que haber instituciones educativas que formen policías, y que la carrera policial, una carrera policial no es de 6 meses, discúlpenme, yo creo que tiene que ver un destino correcto de la profesionalización de los policías, y decir, no recibimos la capacitación del instituto de desarrollo de tal, no es cierto, no es así.

Si queremos policías profesionales, tenemos que tener policías con carrera profesional, y en base a eso que su vida la dediquen realmente a la profesión que emana de una institución educativa.

El factor de los derechos humanos, Senadores es muy importante, en esto y la regularización de esto, mejorar los mecanismos de coordinación entre las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad estatal, y por supuesto los municipales, y esto que pueda superar las afectaciones que exista en la Ley de Seguridad Interior.

En nombre y en representación de los municipios que pertenecemos a la CENAM yo aplaudo y que se esté llevando a cabo y que dentro de poco podamos tener una ley de seguridad, apuntar lo que no se está, lo que pueda ser perfectible, y que en un futuro inmediato podamos seguir contribuyendo en esta materia.

Muchas gracias.

***SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:** Muchísimas gracias al presidente de CEMAN, Francisco Cienfuegos, y además presidente municipal de la ciudad de donde yo vivo, muchas gracias.*

Tiene la palabra el maestro Javier Oliva, y con ello concluimos esta segunda reunión de trabajo para pasar a la tercera.

***MAESTRO JAVIER OLIVA:** Primero quiero agradecer esta muy buena oportunidad para poder dirigirme a ustedes, muchas gracias a las senadoras, a la Presidenta de la Junta de Coordinación, y a la Presidenta de la Comisión de Gobernación.*

Yo quisiera también, ya han hablado sobre varios de los puntos y la importancia que tiene esta ley, yo quisiera, en estos minutos tratar de aportar algunos elementos si es posible, ¿en qué mundo estamos viviendo?

Es decir, qué está pasando con las fuerzas armadas en otras partes del mundo, y no pensar que México, aunque el origen del nombre de México, según Gutierre Tibóne, es el ombligo de la luna, pues tampoco nos lo creamos, porque estamos en una condición de la sinergias de las fuerzas de la criminalidad, de la ciberseguridad, hoy para la OTAN el tema número dos de su agenda, de la OTAN, después de lo que es el terrorismo, es la ciberseguridad; después de que ha estado documentada la intervención de hackers rusos para incidir en la opinión del votante catalán, del votante inglés en el Brexit del 23 de julio del 2016 para incidir en la votación alemana, que está en su peor crisis de 1945, en política, no ha podido formar gobierno a la fecha, nunca les había pasado.

Con esto yo quiero llamar la atención respecto en dónde estamos parados, y qué desafíos están enfrentando las fuerzas armadas de México.

La semana pasada se reformó la constitución en Francia, el presidente Macron junto con el partido que creó en las elecciones presidenciales pasadas, trató de darle regularidad a las medidas del

estado de excepción, cómo se llama en Francia, en donde, entre otras cosas se permite el patrullaje de las fuerzas armadas, sea en el metro, sea en la Torre Eiffel, sea en el metro de Toulouse o sea en las playas de Brest, ya está legalizado.

No se había aplicado el estado de excepción en Francia desde 1953 cuando comenzó la guerra de independencia de Argelia.

Entonces, estoy hablando de la democracia francesa, una de las tres democracias liberales fundadoras del pluralismo, del liberalismo y de la tolerancia.

Hoy el estado de emergencia en Francia es constitucional.

No estoy diciendo con esto, todos los casos son diferentes, todas las realidades tienen sus excepciones, pero vivimos en el mismo planeta, aunque algunos no lo crean, como bien se apuntaba hace un momento.

También otro caso muy importante es lo que sucede con las fuerzas armadas de Colombia, en el proceso del post conflicto, después de la negociación con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, hoy las fuerzas armadas de Colombia es muy importante, no porque yo lo diga, porque de suyo es, están revisando su doctrina militar.

Muy rápidamente, quiero ser muy esquemático, de la doctrina militar viene el adiestramiento, del adiestramiento viene el equipamiento orgánico, es decir, qué tipo de armamento, y después vienen las misiones.

Es decir, cambiar la doctrina militar significa cambiar las misiones operativas de las fuerzas armadas.

Tuve la oportunidad de opinar en la doctrina militar colombiana, se llama la Doctrina Damasco, es un país que es importante precisar, católica, tiene su sistema político.

Pero lo que quiero decir con esto es que hoy, por ejemplo, el presidente Santos, por primera vez en la historia de Colombia, escúchenlo bien, fue autorizada la fuerza aérea para bombardear zonas de influencia de grupos de Bacrin, que es el acrónimo, de bandas criminales organizadas.

Por primera vez en la historia la fuerza aérea de Colombia atacó instalaciones del crimen organizado.

Por otro lado, tenemos embarcaciones de la armada alemana, perteneciente a la Organización del Atlántico Norte deteniendo migrantes en las aguas internacionales del Mediterráneo.

A la fecha, la armada alemana no ha desarrollado los protocolos interrogatorios para los migrantes que suben a sus embarcaciones y se los llevan a Europa.

Con esto quiero decir, que las fuerzas armadas en buena parte del mundo, les hablé de la OTAN, les hablé de Colombia, les hablé de Francia, están en un proceso de transformación.

Y, lo digo con toda seriedad, porque yo desde hace muchos años me dedico a estudiar estos temas, las fuerzas de México llevan mucha ventaja para enfrentar esta agenda de seguridad

internacional, seguridad regional, y ya Samuel lo explicó de una manera brillante, explicó las dimensiones de la seguridad, de tal manera que me parece, y es muy importante este foro en el Senado de la República, también tuve oportunidad, junto con Juan Ibarrola de participar en los foros convocados por la Cámara de Diputados.

Estamos en un punto de inflexión, ustedes, no sé si recuerden cuando se estaba discutiendo la Ley de Seguridad Nacional, muchos decíamos, y lo seguimos sosteniendo que la Ley de Seguridad Nacional, muchos decíamos, y lo seguimos sosteniendo, que la Ley de Seguridad Nacional es la ley orgánica del CISEN, pero ya tenemos una ley, y se puede discutir, incluso se modificó ese mismo año.

Yo lo que sostengo, es que estamos en un punto de inflexión, si en esta ocasión no se aprueba, es evidente que la agenda político-electoral lo va a impedir, y, si persistimos en esta pendiente de violencia, si persistimos en esta pendiente de indefinición, los riesgos, va a haber casi 15 mil candidatos recorriendo, sin contar los que van a ser candidatos a las estructuras de gobierno municipal, es decir, a los síndicos regidores, es decir, vamos a tener casi 15 mil candidatos por medio 4 aspirantes por cada uno de los 3,400 cargos de elección, de presidente de la república a todas las presidencias municipales, y sí me parece que un estado en algunas partes del país debilitado estructuralmente para hacerle frente a este tipo de problemas, que en muchas partes del mundo el crimen organizado es un tema fundamental, de agenda de fuerzas armadas, de los servicios de inteligencia, de corporaciones policíacas, esto en un último ejemplo.

El ejército húngaro, fue desplegado en la frontera con Croacia para detener la migración forzada o involuntaria que viene de los escenarios bélicos de Siria, Afganistán e Irak.

La condición que le puso al parlamento, Lilia, Senadora, perdón, -es que nos conocemos de hace algún tiempo.

Sí, claro, pero es la Presidenta de la Junta.

Es la condición del juicio de parlamento, a Víctor lo ahorcó, que es el Primer Ministro, despliega en el personal armado, pero sin armamento letal, es decir, armamento policial, cachiporras, pistolas laza redes, inmovilizadores, pero en términos de la doctrina militar, y Juan sabe bien de esto, Juan Ibarrola, si un soldado es desplegado, Senador, sin su armamento letal, no es un soldado, está cumpliendo otras funciones, hay una confusión estructural de la misión del elemento militar, entonces, en las condiciones en las que el país está yo no quisiera exagerar, pero sí me parece que son urgentes y que si nosotros miramos un poco más allá de la coyuntura en la que nos encontramos, acabamos de escuchar muy valiosos testimonios de presidentes municipales y de líderes de organizaciones sociales, me parece que tenemos todos los elementos para poder abordar esta discusión, y cuando faltan unos cuantos días para que termine el período ordinario de sesiones, y les deseo a todos un feliz 2018, pero que lo celebremos con una Ley de Seguridad Interior aprobada, esa es mi propuesta.

Muchas gracias.

Gracias, senadora Cristina Díaz, por la invitación.

***SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:** Muchas gracias al doctor Javier Oliva.*

Con ello concluimos esta segunda reunión y agradecemos a todos ustedes sus participaciones tan valiosas a nombre de los presidentes de las comisiones, Senador Benjamín Robles, Segunda de Estudios Legislativos; el Senador Fernando Torres Graciano de la Defensa Nacional; de parte de la Comisión de Gobernación; y por parte de Marina del Senador Ricardo Barroso, sin duda de quienes también están conmigo en Mesa Directiva, la Senadora Dolores Padierna, el Senador Héctor Larios, la Senadora Angélica de la Peña, el coordinador del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, Luis Sánchez; y sin duda quien hoy nos da la hospitalidad de su sala de juntas de la Presidenta de JUCOPO.

Damos paso a la tercera reunión.

Muchísimas gracias a todos ustedes.

Versión Estenográfica de la Reunión de los presidentes de las comisiones dictaminadoras de la minuta a la Ley de Seguridad interior con ONGS, en el Senado de la República.

INTERVENCIÓN: *...sentimos que no nos han oído, sentimos que les hemos dicho y nada de lo que les hemos dicho lo han tomado en cuenta.*

Hace unas semanas, sorprendentemente pasó una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados; una iniciativa que pasó sin que le dieran tiempo a los diputados de leerla para que la votaran. Estamos preocupados que suceda lo mismo acá en el Senado.

Y sobre todo, muy preocupados porque la ley de la que estamos hablando es una ley muy importante, una ley que puede alterar –si pasa como está– la relación de Estado, la relación del pacto Federal y la relación con los militares y el Gobierno civil.

Escuchaba al general Ramos la semana pasada en su ponencia. Con el general Ramos tengo una buena relación y estoy de acuerdo con él en muchos puntos; es decir, debe de cubrirse el actuar de las Fuerzas Armadas. Pero no estoy de acuerdo con él en el cómo.

Y lo escuchaba y me sorprendía oír lo que él decía, pues él estaba diciendo una interpretación de la ley que es completamente opuesta a la que yo leo y a la que leemos muchos de los colectivos. Eso quiere decir nada más que la ley es muy ambigua y que una ley tan importante no puede ser ambigua.

Celebramos que el Presidente, el viernes haya decidido que quiere un diálogo con respecto a esta ley. Celebramos que este sea el principio de ese diálogo, que no sea esto nada más lo que ustedes toman como un diálogo; porque yo no he oído un diálogo, yo he oído que viene gente y da una postura y no hay un debate, no se llega a un acuerdo.

Sé que ustedes lo saben hacer. El Senado ha participado en varias ocasiones en parlamento abierto con la sociedad civil, de lo cual han brotado grandes leyes que se han implementado con consenso nacional.

Les pedimos hagan lo mismo con ésta. No hay una prisa, se puede hacer, se puede legislar rápidamente.

En el Sistema Nacional Anticorrupción se modificaron siete leyes en un par de meses. Esto se puede lograr rápidamente si hay voluntad política. Les pedimos voluntad política.

Me voy a permitir leerles un comunicado del Colectivo Seguridad sin Guerra:

"La rápida aprobación de un nuevo dictamen de Ley de Seguridad Interior por la Cámara de Diputados, y su inminente aprobación en próximos días por el Senado; ha generado profunda preocupación entre organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales.

Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; la Comisión Nacional de Derechos Humanos; como un nutrido grupo de expertos y organizaciones han señalado los riesgos implícitos en el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, y la posible vulneración de derecho para la seguridad y la libertad de las personas.

El día previo a la apresurada votación en la Cámara de Diputados, el 29 de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que: 'la emisión de una Ley de Seguridad Interior en los términos que se plantea, contribuirá a mantener el estado actual de las cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia y la inseguridad que se enfrenta; dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles; instancias a las que les corresponde de manera exclusiva, llevar a cabo las tareas de seguridad pública en términos del artículo 21 constitucional'.

El martes 5 de diciembre, el Colectivo Seguridad sin Guerra, llevó al Senado más de 120 mil firmas ciudadanas que manifestaron rechazo a la aprobación de la ley; recabadas en la plataforma Change.org.

Dichas firmas fueron retenidas en la entrada del recinto legislativo y hoy, ya han rebasado más de 200 mil firmas ciudadanas.

Desde Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad Al Hussein, recordó que durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las Fuerzas Armadas había sido inevitable debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales; y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policías robustas y mejor preparadas.

Tanto en el plano federal como en el estatal, indicó que el proyecto de Ley de Seguridad Interior no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de salida gradual, para poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de policía.

Y recalcó que la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, no es la respuesta adecuada.

El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley.

El mismo día, la COPARMEX emitió una carta en la que realizó diversas consideraciones relacionadas con la certeza jurídica. El irrestricto respeto a los derechos humanos, la transparencia en la función de seguridad y el necesario fortalecimiento de la seguridad pública; urgiendo al Senado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior de forma aislada, sino como parte de una estrategia de seguridad integral.

El miércoles 6 de diciembre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, envió una carta con observaciones preliminarles, a las senadoras y senadores con 14 preocupaciones identificadas en el proyecto de la Ley de Seguridad Interior, a saber:

La ambigüedad de los conceptos.
La violación al principio de necesidad.
El papel indebido de las Fuerzas Armadas.
Sometimiento de la autoridad civil al mando militar.
La ausencia de controles.
La ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones.
La indebida regulación del uso de la fuerza.
La indebida protección y garantía de los derechos humanos.
Las afectaciones a la protesta social.
La ausencia de transparencia.
La lesión a la autonomía.
La inconstitucionalidad e inconvencionalidad.
El ámbito de excepción del derecho procesal administrativo.
La ausencia de explicitud de los principios rectores.

El 7 de diciembre, el Comisionado Presidente del INAI advirtió a los senadores y senadoras integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, que el artículo 9º de la minuta implicaría retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información, en caso de ser aprobada.

'El texto, así como está, merece un análisis de mayor amplitud. Ojalá que los senadores escuchen otras voces y puedan tomar, en su caso, la decisión de atender la sugerencia que les hacemos: redactar de mejor manera ese texto para que este artículo no se preste a fomentar confusión y en todo caso, deja claro que de ninguna manera la información que tenga origen en las cuestiones de seguridad nacional o de seguridad interior, tenga la posibilidad de volverse intocable o inaccesible a cualquier ciudadano' Enfatizó.

El mismo 7 de diciembre, la Oficina Regional de Amnistía Internacional hizo un enérgico llamado al Senado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior y desarrolló cinco puntos de gran alarma y preocupación.

En una misiva dirigida al Presidente del Senado y a los presidentes de las Comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Seguridad Pública, Defensa, Marina y Estudios Legislativos Segunda.

A estas advertencias y solicitudes, se suman las recientes cartas de Diputados Parlamentarios Europeos; de la Red Plurinacional de Jueces y Juezas de las Américas; relatores y exrelatores de Naciones Unidas; el pronunciamiento de académicos de la UNAM y del CIDE; el desplegado de más de 240 organizaciones nacionales, entre otras. Todas, pidiendo al Senado detener la aprobación de la ley y generar un debate serio e integral, que permita construir las bases para una seguridad ciudadana.

Además, se pide revisar cuidadosamente la constitucionalidad y la compatibilidad de la propuesta, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito.

El pasado viernes 8 de diciembre, en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, tras un nuevo llamado a la prudencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la petición del propio galardonado, a no aprobar la Ley de Seguridad Interior en el Senado; el Presidente de la República llamó al Senado... reconoció que existen distintos puntos de vista en cuanto a la aprobación de esta ley y enfatizó la necesidad de construir instituciones civiles eficaces, en un marco de respeto pleno a los derechos humanos.

E hizo un llamado al Senado de la República para que amplíe los espacios de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para poder escuchar todas las voces y poder enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance de una iniciativa presentada, a ampliar el diálogo.

Desde el Colectivo de Seguridad sin Guerra, celebramos y hacemos nuestro el llamado del Presidente de la República al diálogo.

Es por lo anterior que reafirmando la voluntad de construir en consenso, junto con los legisladores, investigadores, los representantes de organismos internacionales, Fuerzas Armadas y sociedad civil; desde el Colectivo Seguridad sin Guerra emitimos la siguiente convocatoria:

Once años de guerra son demasiados. Asumiendo el pertinente llamado del Presidente de la República de ampliar los espacios de diálogo sobre la Ley de Seguridad Interior y reconociendo que el mismo sólo será eficaz si involucra a todos los actores políticos y sociales que deben ser escuchados para la construcción de una agenda para la paz, desde el Colectivo Seguridad sin Guerra, conformado por más de 250 organizaciones de la sociedad civil y más de 100 personas expertas en temas de seguridad, justicia y derechos humanos, estimamos indispensable la reflexión nacional sobre un modelo de seguridad ciudadana que permita la formación de policías y que realmente dé certeza jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que convocamos a las personas enlistadas al final de la presente, a un diálogo nacional sobre la seguridad ciudadana.

Los objetivos:

Primero. Construir una agenda legislativa integral que permita avanzar a un modelo de seguridad no militarizado, compatible con la Constitución y que lleve a la formación de instituciones civiles capaces de asumir sus responsabilidades en materia de seguridad.

Segundo. Elaborar una propuesta legislativa de regulación de las Fuerzas Armadas, compatible con nuestro régimen constitucional y democrático, que erogue seguridad jurídica a los cuerpos castrenses y que incluya un plan gradual de retiro regulado.

Lugar y fecha:

Se llevarán a cabo en un lugar por definir en la Ciudad de México, de ocho a 20 horas los días 23 y 24 de enero del 2018.

Formato:

Se garantizará el respeto entre los dialogantes, fijando tiempos precisos para las intervenciones y la designación de moderadores rotativos para asegurar imparcialidad y equidad en la conducción de las mesas.

Se contarán con comisiones relatoras conformadas por representantes de las partes involucradas.

Los representantes de los medios de comunicación no podrán intervenir en la discusión.

Convocados y convocadas:

Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico del Ejecutivo Federal.

Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.

Miguel Ángel Mancera, presidente de la CONAGO.

Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos.

Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

Manuel Granados Covarrubias, presidente nacional del PRD.

Damian Zepeda Vidales, presidente nacional del PAN.

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI.

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de MORENA.

Integrantes de las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Integrantes de las comisiones de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Integrantes de las comisiones de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Integrantes de las comisiones de Marina de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Integrantes de las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Integrantes de las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su representante.

La Secretaría de la Marina, a través de su representante.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Y representantes del Colectivo de Seguridad sin Guerra.

Realmente quisiera que lo tomaran muy en serio. La ley que está a punto de aprobarse por ustedes, es una ley que está a punto de aprobarse por ustedes es una ley, puede cambiar –como ya mencioné– civil-militar y la relación del Pacto Federal.

Cedo la palabra a mis compañeros.

Gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias.*

Tiene la palabra José Francisco de Villa Soto, Causa en Común.

JOSÉ FRANCISCO DE VILLA SOTO: *Muchas gracias, compañeras y compañeros, por esta invitación, por escucharnos de nuevo aquí en este Senado de la República.*

Reiterando lo que se mencionó hace un momento, me gustaría hacer énfasis en un punto importante de lo que implicaría la aprobación de esta ley.

La aprobación sería grave, porque más allá de los problemas legales antes mencionados, lo que haría es extender y fortalecer el arraigo de las Fuerzas Armadas como fuerza política, y enviaría una señal clara a todos los niveles de gobierno, en el sentido de que se evadiría la responsabilidad que se tiene con las policías.

Establecer una ley o aprobar una ley en estos términos, hace a un lado el compromiso que se tiene con las policías en cuanto al fortalecimiento.

Pero no sólo esto. Un ejemplo, anteriormente se menciona una ley que realmente no tenía problemas, que se decía mentiras y eso es falso. Usamos la metáfora de que se está construyendo una medicina, una medicina que está mal diseñada, y más allá de darle salud al paciente, que en

este caso sería el país, se está construyendo una medicina que lo va a matar, que le va a explotar o que le va a generar un problema en todo su sistema interno.

No es de oponerse a una ley por oponerse a la ley en etéreo, es que en esta minuta, en específico está mal diseñada, y la medicina va a matar al paciente más que a resolver el problema.

Y ustedes me pueden decir: Bueno, ¿por qué mencionas esta metáfora o por qué lo estás diciendo?

Basta ver la minuta que se tiene hacia unos comentarios técnicos muy generales. Por ejemplo, la exposición de motivos.

La exposición de motivos es sumamente indeterminada. Y aquí una petición, sí sería muy importante que la postura de la sociedad civil expresamente se señale cuál es la postura y no solamente se mencione "participaron tal en tal fecha", como si se validara a través de una reunión de esta naturaleza.

Sí es muy importante que se acote qué dice cada quién y en qué sentido, porque en la minuta que se presentó por parte de la Cámara de Diputados, simplemente se leen nombres y no se dice el contenido de las reuniones. Es una petición, por favor.

Si nosotros nos vamos al artículo dos, ya se mencionó expresamente, hay una serie de definiciones indeterminadas que desde donde podemos apreciar, el hecho de que tengamos conceptos indeterminados genera arbitrariedad, y utilizando la metáfora que utilizamos de la medicina que mata, no sabemos, si los términos son precisos generaría incertidumbre tanto para los que pidan controlar como los que apliquen la ley.

Por otro lado, tenemos el artículo quinto, aludiendo a las cuestiones de inconstitucionalidad.

Hasta donde recuerdo, el artículo 89 constitucional, establece que es el titular del Ejecutivo. Por qué el Secretario de Gobernación aparece aquí como figura.

Entiendo la relación de una administración pública centralizada, pero es muy diferente un Secretario de Estado por el nivel de responsabilidad que se tiene, a un titular o a un Presidente de la República. Y si estamos hablando de verdades y de cumplir la Constitución, en la Constitución nunca dice "Secretario de Gobernación", ¿verdad?

Pero bueno, el artículo quinto establece la figura para el Secretario de Gobernación.

Ahora, yo veo con preocupación que incluso una de las personas que anteriormente participó, leía con un afán y con una felicidad el artículo séptimo, y decía que ahí se encontraba la protección de los derechos humanos; y como en ocasiones pasadas se mencionó, el artículo séptimo es totalmente violatorio al artículo 1° constitucional.

Ustedes recuerdan lo que ya se había mencionado anteriormente, que existe una reforma de derechos humanos en el 2011, en el cual de cualquier orden, de cualquier fuente, Constitución, tratados internacionales, se puede abrevar el corpus iuris en materia de derecho internacional.

Pero, oh sorpresa, leemos el artículo séptimo, y establece que la protección de los derechos humanos y garantía será de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes, lo cual contraviene el artículo constitucional, porque es muy simple, el artículo 1° dice "todo el orden internacional y nacional", y aquí dice "de conformidad con unos protocolos" que, como ustedes recordarán, un protocolo lo hace un titular de área, un director, no sé, según la normativa interna.

Yo no leería esto como si fuera la protección de los derechos humanos, porque al contrario, es una grave violación al artículo 1° constitucional.

En general, en la Constitución, lo que ustedes perfectamente conocen, existe un Pacto Federal, y la forma en la que está diseñada la ingeniería de esta normativa, genera un pobre balance en el cual la Federación se ve fortalecida y las entidades federativas se ven aniquiladas por el diseño y la rendición de cuentas que presenta la ley.

Yo vería, a la luz de un análisis constitucional, cómo se vulnera el Pacto Federal que lo hace la ley, y como Senado de la República sé que ustedes tienen la vocación y el objetivo de defender este Pacto Federal.

Yo me preguntaría, ¿cómo se genera un balance a partir de esta ley? Que si hacemos una asimetría se da.

En general, otro tema por ejemplo, el término de la ley, que establece un año como si estuviera acotado. Pero, oh sorpresa, por decisión del Ejecutivo se puede prorrogar las veces que se considere.

Yo no entiendo cómo lo que nos lleva a una falta de diseño y de pesos y contrapesos que debería garantizar la ley.

Yo les pido por favor que no aprobemos o no se apruebe por ustedes una medicina que va a matar al paciente. Que a quien la use le va a explotar si fuera un arma, o al paciente le va a matar.

Más bien, no es oponerse a una ley por oponerse. Se tienen que generar las políticas públicas que nos permitan salir adelante, y no por salir del paso o por el miedo se apruebe cualquier cosa que nos va a matar y que nos va a llevar a todos en el camino.

Muchas gracias.

***SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:** Muchas gracias a José Francisco de Villa Soto.*

*En estos momentos, también se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida al consejero de la embajada de Francia, a Leopold **Stafanin**. Gracias por estar aquí con nosotros.*

Tiene la palabra la señora Ana Laura Magaloni del CIDE.

***ANA LAURA MAGALONI:** Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí.*

A mí me gustaría empezar por otro lado. Me gustaría empezar diciendo que en el banquillo de los acusados no deberían de estar las Fuerzas Armadas.

Lo que ha movido la necesidad de debatir la Ley de Seguridad Interior y lo que venimos padeciendo durante la última década, al menos, no tiene que ver con las Fuerzas Armadas, tiene que ver con la negligencia, la irresponsabilidad o de plano los pactos mafiosos que han creado gobernadores, presidentes municipales y el Gobierno Federal.

Hoy nos encontramos con que las Fuerzas Armadas tienen que participar en esto que la Ley de Seguridad Nacional denomina delincuencia organizada, porque por varios años, por muchas décadas, policías, procuradurías, peritos, políticas preventivas, fiscalías, tribunales, fueron descuidados o controlados políticamente.

Entonces, tenemos instituciones muy débiles frente a un contexto de inseguridad cada vez más creciente y no tenemos claro cómo salir de esta encrucijada.

Necesitamos en los próximos 10 años tener una ruta critica que nos permita generar un cuerpo técnico de expertos en seguridad, en procuración de justicia, en impartición de justicia y ese proceso toma por lo menos 10 años si empezamos a caminar.

Y ese pacto de que vamos a caminar por esa línea, no se ha dado y es un pacto político. Vamos a dejar que los sistemas de ejecución de ley, se independicen de la política, para que puedan tener la fuerza y la autonomía que requieren para hacer frente a los problemas de seguridad y mientras que no exista ese pacto, las Fuerzas Armadas no nos van a poder sacar de donde estamos.

Queramos o no, hoy necesitamos a las Fuerzas Armadas para contener la ola de violencia que se vive en regiones del país. Sin embargo, la Ley de Seguridad Interior me parece que no genera un contexto de exigencia a los gobernadores y a los presidentes municipales y al Ejecutivo Federal.

No puede ser que años de descuido tengas atrás la posibilidad de invitar al Ejército. Cuáles van a ser los incentivos de todos estos actores políticos a invertir en la seguridad de sus estados.

La Ley de Seguridad Interior te da la posibilidad de no hacerlo y eso es lo que me parece extraordinariamente delicado. Necesitamos un contexto en donde México tenga el acuerdo, en donde en los siguientes 10 años vamos a crear estas instituciones y nos e va a resolver porque estén las Fuerzas Armadas en la calle.

A mí me gustaría pensar que más que discutir aisladamente el papel de las Fuerzas Armadas, pudiéramos discutir el resto de la estrategia. Aquí falta una amplia discusión con temas de policías municipales, estatales, fiscalía, consejos de la Judicatura y solamente así podemos entender por qué y cómo el papel de las Fuerzas Armadas va a ser excepcional, temporal y subsidiario.

Hoy podemos decir está en la ley, pero todos sabemos que en la práctica no está sucediendo así y que una vez que entra el Ejército ya no puede salir, no hay nada en la ley que le cree un contexto de exigencia a los gobiernos para invertir en sus policías, en sus procuradurías y en darle la puerta de salida al Ejército.

Entonces, esta no es una solución al problema, esta me parece que puede incentivar lo opuesto, puede seguir dando subsidios a los estados para no hacer lo que hace 10 años tuvieron que empezar a hacer.

Y que como tal acaba generando el peor de los vacíos tanto para las Fuerzas Armadas como para la población afectada por la violencia. Este no es el marco jurídico que le va a permitir a las Fuerzas Armadas tener la certeza de que es subsidiaria, excepcional y temporal su participación en labores de seguridad.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias Ana Laura Magaloni.*

Tiene la palabra la señora Tania Reneaum Panszi, de Amnistía Internacional.

TANIA RENEAUM PANSZI: *Gracias senadora.*

Buenas tardes, senadoras, senadores, muchas gracias por abrir este espacio en esta reunión de trabajo de Ley de Seguridad Interior.

La mejor defensa que puede ocurrirle a una iniciativa controvertida como ésta, es nutrirla de debate, es generar bases analíticas derivadas de la evidencia empírica.

Es dialogar entre la diversidad y la pluralidad de perspectivas, como un requisito indispensable para la legitimidad, entendiendo el diálogo como un ejercicio de intercambio de ideas y como un ejercicio bilateral.

No solamente una nota, una toma de nota de opiniones, un diálogo en verdad y para construir algunos argumentos se ha de comenzar por responder algunas preguntas.

¿Por qué se considera que la presencia militar mejora la seguridad pública? ¿En dónde está la evidencia que muestra que la presencia del Ejército disminuye la violencia y los índices de inseguridad?

Estas preguntas tendrían que dialogar con datos publicados por el INEGI, que muestran que, en Guerrero, una de las entidades federativas con mayor presencia del Ejército, se registró la tasa más alta de homicidios en 2015, con 67 asesinatos por cada cien mil habitantes.

Otras entidades federativas también con una presencia importante de las Fuerzas Armadas, como Chihuahua, registraron una tasa de 42 por cada 100 mil habitantes y en Sinaloa 36 homicidios por cada cien mil habitantes.

También se tendría que atender a los hallazgos de investigaciones realizadas, por ejemplo, por Amnistía Internacional y en una investigación sobre tortura de mujeres en México, nuestra organización que la Marina y el Ejército mostraron altas tasas de violaciones sexuales durante los arrestos de mujeres.

De 10 arrestos llevados a cabo por la marina, 8 habrían incluido la violación y en el caso del Ejército, 5 de cada 10 habían incluido la violación.

Otro dato que llama la atención es la tasa de letalidad de las Fuerzas Armadas. Un proyecto académico de la Universidad de Nueva York midió a las Fuerzas Armadas de México por su alta tasa de letalidad.

Según el Comité de la Cruz Roja Internacional, una tasa de letalidad normal por grupos armados en conflictos, es de 4 personas heridas por una persona muerta.

En el caso de México, el Ejército mata 8 personas por cada una herida; en el caso de la Marina, mueren 30 personas por cada una herida.

En resumen, las Fuerzas Armadas en México son entrenadas con el uso excesivo de la fuerza, lo cual no es apropiado para la seguridad pública de un país.

También es ambigua la 'percepción de seguridad que proporciona la presencia del Ejército. Durante el 2017 Impacto Social Metropolitan Group hizo una encuesta nacional sobre temas de seguridad y corrupción y ante la pregunta ¿qué tan seguros se siente usted en presencia del Ejército? Una de cada tres personas dijeron que muy seguro.

No nos alegremos. Uno de cada tres dijeron que poco seguro y uno de cada tres ni seguro ni inseguro.

Puede concluirse que el Ejército no hace sentir a la gente más segura, pero su presencia sabemos que sí acarrea consecuencias no deseadas.

Continúo con las preguntas que podrían nutrir el debate: ¿por qué se considera apropiado aprobar una ley que evoca los vacíos institucionales?

Se ha repetido en distintos espacios y foros, incluso hay un acuerdo entre quienes apoyan esta iniciativa y entre quienes no, que estamos teniendo esta discusión que hemos llegado aquí, porque durante más de tres décadas se ha dejado de lado una verdadera política para fortalecer los cuerpos policiales y para crear una verdadera seguridad pública.

En su informe sobre detenciones arbitrarias, Amnistía Internacional llamó a dignificar las condiciones de trabajo de los cuerpos policiales, a proveerles de capacitación, de relaciones de trabajo dignas, de salarios apropiados.

Amnistía no es la única voz que ha observado tal situación. Ya desde hace más de una década se puso en el debate público lo indispensable de fortalecer a los cuerpos policiales.

Durante años, hemos extrañado, hemos echado en falta la presencia del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, con sus funciones de control hacia el Ejecutivo.

Nunca les hemos escuchado preguntar firmemente sobre una política integral de seguridad púbica.

Nunca les hemos, o pocas veces, les hemos escuchado preguntar sobre el destino de los recursos públicos, a fortalecer a las policías.

Pocas veces les hemos escuchado preguntar por el adecuado ejercicio de los recursos del presupuesto y de los resultados.

Desde los años 90, el Estado Mexicano ha utilizado políticas de mano dura para paliar la inseguridad.

Se aumentaron penas en casi todos los códigos penales del país, se incluyeron nuevos tipos penales y estas iniciativas no reflejan un estudio de sus consecuencias efectivas o no, no sabemos si esto ha funcionado o no para controlar la delincuencia y proveer de seguridad a las personas.

Se ha analizado muy poco el rol de las instituciones de seguridad pública, la responsabilidad de los órganos políticos, y en el debate, se ha desdibujado por completo la relación de las ciudadanas y de los ciudadanos con el Estado.

La forma en que la violencia ha conducido a la fragmentación social y el hecho de que el Estado ha transformado la seguridad en la esencia de su legitimidad, dejando de lado discusiones sobre el acceso a otros derechos como la educación, la salud, los salarios dignos, el trabajo, la vivienda digna.

Finalmente, quisiera preguntar cómo vamos a gestionar, como el Estado Mexicano va a gestionar, de aprobarse esta Ley, el diálogo con socios estratégicos.

En el contexto de la negociación del Acuerdo Global con la Unión Europea, se ha abierto un debate sobre el Acuerdo con México.

Tres parlamentarios, de tres grupos políticos distintos, y con tres nacionalidades diferentes, han mostrado preocupación por la posible aprobación de esta Ley, y han llegado a cuestionar si el Acuerdo podría firmarse ante un paso tan negativo para los derechos humanos, como la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

No es una novedad para este Senado lo que aquí digo. El 6 de diciembre de este año, ustedes recibieron una carta de una parlamentaria alemana, manifestando sus preocupaciones.

Parece una valoración ligera en ocasiones decir que esta Ley se ha de aprobar, pero que es perfectible.

Una disposición, una Ley que cambia el término de relación con los ciudadanos y el Estado, no puede ser aprobada con ligereza.

Amnistía Internacional, hace un llamado al Senado para rechazar el proyecto de Seguridad Interior, y que abra un verdadero debate donde intervengan actores políticos, los académicos y las académicas, y la sociedad civil.

Agradecemos esta toma de nota de nuestras opiniones, pero esta toma de nota no es un diálogo y tampoco es un debate.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Gracias.*

Tiene la palabra Alejandro Madrazo, del CIDE.

ALEJANDRO MADRAZO: *Senadoras y senadores.*

Les agradezco este espacio y les confieso que vengo el día de hoy con sentimientos encontrados a este Salón.

Vengo con sentimientos encontrados porque, por una parte, siento algo de alivio de que no estemos ya ante la aprobación de esta Ley.

De que hayan hecho caso del llamado que hizo el Presidente de la República a abrir un diálogo, y espero continúen con esa actitud, haciendo eco del llamado que la sociedad civil les hace hoy en boca del Colectivo Seguridad sin Guerra, a tener un diálogo mucho más robusto y serio, en el futuro y en las semanas por venir.

Sin embargo, vengo también con el corazón muy pesado. Vengo con el corazón muy pesado porque hace un año yo estuve aquí, para discutir una Iniciativa semejante a ésta, pero no tan mala y no tan peligrosa.

Hace un año, se me pidió que viniera yo aquí a presentar un adelanto de las investigaciones y de los datos que en el CIDE habíamos trabajado, para entender el proceso de militarización durante los primeros cinco años de militarización de 2006 a 2011.

Y en ese entonces ofrecí los resultados de las investigaciones de todo un equipo de trabajo que nos permitían ver con claridad los riesgos que implica la militarización y la estrategia de seguridad.

Hoy, estoy ante ustedes con una norma ya aprobada por la Cámara Baja, que es aún más laxa en los controles en el uso del Ejército.

Que es menos responsable con las facultades que tiene el Congreso de la Unión para mantener algún tipo de regulación sobre la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Una Ley que fue aprobada fast track, sin debida discusión, sobre un texto que se conoció poco antes de que fuera votado en Comisiones y que fue votado en el Pleno el mismo día y que fue votado en Comisiones.

Esto es un madruguete, que por suerte ha sido detenido aquí en el Senado y espero sea detenido hasta que no sea debidamente debatido.

En este contexto, es con enorme pesadumbre que vengo a repetir algunas de las cosas que ya sabemos que ustedes saben.

Pero también alertarles sobre algunas cosas que quizá no estén ustedes conscientes que están aprobando en esta versión de la Ley, porque no estaban en esta versión de la Ley hace un año.

Si me permiten, les recordaré muy brevemente lo que ya sabemos que ustedes saben.

Señalaré algunas cosas que quizá no sepan pero que me parecen de la más grave consecuencia para la vida de este país, y después hablaré muy brevemente sobre qué sí se puede hacer y debe hacer ante la circunstancia, porque siempre se dice qué alternativas hay, pues sí las hay y las hemos propuesto.

Lo que sabemos que ustedes saben, saben que la política de militarizar la seguridad pública, es una política contraproducente.

Así lo registran los datos, así lo revelan todos los estudios serios, y no les pido que le crean al CIDE y a los trabajos que hemos realizado ahí; créanle al Instituto Belisario Dominguez, que es el espacio en donde aquí se realiza investigación para informar del trabajo legislativo con base en evidencia.

Sabemos, hoy, que se incrementan los homicidios en seis por ciento, en promedio, cuando ha habido despliegues de operativos federales en los municipios en los que se han desplegado, pero que cuando el Ejército participa, ese aumento no es del seis por ciento, sino del nueve por ciento.

Sabemos, hoy, que han incrementado los homicidios a lo largo de este año en que ha continuado la política de militarización a la que ustedes quieren arropar legalmente el día de hoy.

Hoy, estamos ante un país más violento del que estábamos hace un año; con una ley más laxa, de la que estábamos hace un año; con policías más desarticuladas de las que estábamos hace un año. Todo, siguiendo la política de militarización.

Sabemos que ustedes saben que esta es una Ley inconstitucional, que está diseñada para darle la vuelta y hacer fraude al Artículo 21 Constitucional, que se aprobó en 2008, precisamente en un contexto en el que se le otorgaron más facultades discrecionales al Ejecutivo, para perseguir, a través de la Procuraduría General de la República, a la delincuencia organizada.

En ese mismo pacto, de 2008, se estableció con toda claridad que no puede utilizarse a las fuerzas castrenses para tareas de seguridad pública.

Pues bien, hoy en día, tenemos una Ley ante nosotros que, a confesión de parte, no necesitamos probar más porque nos dice que lo que pretende es hacer como que no son de seguridad pública las tareas que son de seguridad pública y que pretenden que el Ejército lleve a cabo.

Leo, del texto de la Ley: "En ningún caso, las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las fuerzas armadas, se considerarán, o tendrán la condición de seguridad pública".

Qué clase de lenguaje es ese. Es un lenguaje esquivo, que engaña.

Si ustedes quisieran acotar, si el Legislativo quisiera acotar las labores de seguridad interior, diría: "Por ningún motivo podrán realizar acciones de seguridad pública". Tal como los define la Constitución.

Lo que aquí están haciendo es pretendiendo que, con una etiqueta, pueden violar la Constitución, y eso es muy delicado. Todo eso ya lo saben.

También saben que la Ley no contiene controles al Ejecutivo. Que el Ejecutivo puede unilateralmente desplegar el Ejército, sin tener que rendir cuentas a nadie, y eso es muy peligroso.

Lo que quizá no sepan, y esto gracias a la observación que hizo Amnistía Internacional, lo notamos, yo tengo que confesar que la primera vez que la leí, no encontré esto en la Ley, pero precisamente esta Ley tiene un lenguaje muy sutil, que necesita ser debatido con mucho detalle.

Permítanme leerles el Artículo 26, en donde viene escondido un pequeño regalo a las fuerzas armadas, para autogobernarse.

Dice, el segundo párrafo del Artículo 26, que aprobó la Cámara de Diputados: "Las acciones que se realicen para identificar y pre prevenir y atender riesgos a la seguridad interior, son de carácter permanente, y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección de seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso se requieran".

Pudiendo, se pueden suscribir o pueden no suscribirse. No se necesita declaratoria de seguridad interior, por lo tanto, no se necesita autorización del Ejecutivo.

¿Para qué? para enfrentar los riesgos a la seguridad interior; riesgos que se definen como situaciones que potencialmente pudieran ser amenazas.

¿Qué quiere decir eso? Lo que quiera el Ejército, lo va a interpretar el Ejército y nadie puede revisarle eso; porque además –y esto quizá ustedes no lo sepan– los actos administrativos de esta ley no son impugnables.

El artículo 10° dice, con todas sus letras, que la materia de Seguridad Interior quedará excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como espero sepan, es una ley supletoria. Para cuando una ley no contempla mecanismos administrativos para impugnar actos administrativos, se aplique la ley supletoria, que es la de Procedimiento Administrativo.

Pues bien, esta ley no contempla mecanismos para impugnar los actos que se deriven de ella. Sin embargo, sí contempla una disposición expresa para evadir la posibilidad de impugnación a través de la ley supletoria, que es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ahora bien, otra cosa que quizá no tengan ustedes consciente, cuando actúe el Ejército conforme al artículo 26°, sin una declaratoria de seguridad interior, no tiene que informar al Ejecutivo. Los informes al Ejecutivo que contempla el artículo, la conjunción de los artículos 32° y 14°, dependen de que haya una autoridad encargada de coordinar las acciones de seguridad interior; pero esa autoridad no existe hasta que no haya una declaración de seguridad interior. Y eso no existe si se actúa conforme al artículo 26°.

Entonces, tenemos a un Ejército que sin autorización del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, puede actuar, enfrentar potenciales acciones, circunstancias que potencialmente puedan ser de seguridad interior, sin rendirle cuentas al Ejecutivo.

Finalmente, esta ley somete a las autoridades civiles en al menos dos aspectos, ante las autoridades militares, que podrían estar actuando conforme a esta ley, sin autorización del Ejecutivo:

Una viene en el artículo 31° y otra viene en el artículo transitorio 2°. En el artículo 31° se obliga a todos los órganos de Gobierno, incluyendo los órganos autónomos, constitucionalmente autónomos, a entregar toda la información que se les requiera bajo seguridad interior. Eso quiere decir que nuestros datos personales, conforme al INE, pueden ir a dar ahí; o nuestros expedientes médicos conforme al IMSS, pueden ser requeridos por seguridad interior.

El artículo 2° transitorio establece que las entidades federales, del Gobierno Federal, pero también de estados y municipios; tendrán que pagar de su presupuesto las acciones de seguridad interior que se realicen.

Entonces, están ustedes discutiendo una ley que le permite, bajo el artículo 26°, autogobernarse al Ejército. No sólo se trata de una ley que le permite al Ejecutivo sin contrapesos, sin respetar el pacto federal, militarizar al país; sino una ley que puede ser utilizada por el propio Ejército para autogobernarse.

Eso es muy peligroso y es más peligroso cuando uno ve la trayectoria que han seguido las iniciativas desde 2009, cuando el presidente Felipe Calderón presentó la primera versión de la Ley de Seguridad Interior, que era un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional; y uno ve la misma pluma, la misma redacción, el mismo estilo presentarse una y otra y otra vez.

Perdón, yo veo a instituciones de gobierno postradas ante la inseguridad que vive el país, ante la inercia de llegar a un proceso electoral y postradas ante un sostenido empuje de una misma pluma, que desde 2009 viene diciéndoles: queremos esta ley, queremos esta ley. Y la Cámara de Diputados ya les dio la ley que querían.

Ahora, ¿hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas. Las hemos articulado, pero ahí les va:

Seguridad interior. En efecto, existe una cláusula de seguridad interior en la Constitución; habría que darle contenido.

Les doy una referencia histórica, nada más para que sepamos de dónde viene. Originalmente la cláusula de seguridad interior de la Constitución del 24, viene del Estatuto de Gobierno del Imperio, que hablaba de "orden interior"; y el "orden interior" se refería a los levantamientos federalistas y republicanos que se estaban pronunciando en contra del Emperador.

Se refería a la secesión de entidades, como lo fue Centroamérica, y se refería a los ataques de las tribus que vivían en el norte del país.

¿Por qué se utilizaba orden interno o seguridad interior para esos tres?

Porque no se les quería reconocer el carácter de externo, no se le quería reconocer la calidad política de una potencia soberana o un Estado o de una nación soberana a la fundación Comanche o reconocerle el carácter político a un opositor político que quería establecer un gobierno republicano en este país.

Si hoy tiene algún contenido seguridad interior, que es un vestigio del siglo XIX, de la época del imperio, es con relación al artículo 119 constitucional. En el artículo 119 constitucional se establece

que para preservar el pacto federal, la Federación está obligada a proteger a los estados; y entonces si vamos a regular seguridad interior, tiene que ser regulando el artículo 119, que sólo puede ser activado por los congresos estatales o excepcionalmente los gobernadores, pero en realidad son los congresos estatales; no unilateralmente el Presidente de la República, los congresos estatales. Y es específicamente para levantamientos de carácter político.

¿Tenemos ejemplos recientes en nuestra historia? Sí, sí los tenemos. ¿Habría que regular eso? Quizá. ¿Es prioritario? Para un periodo electoral, no lo creo. Pero si quieren regular seguridad interior, por ahí tiene que ir la cosa.

¿Qué sí tenemos? Una crisis de seguridad pública que, como decía Ana Laura, hoy en día depende del Ejército y su despliegue territorial.

¿Cómo regulamos y protegemos a nuestras Fuerzas Armadas, que por la irresponsabilidad del mando civil están expuestas, y lo están, a reclamos de estar trabajando por fuera de la Constitución; ¿cómo protegemos eso?

Muy sencillo. Tenemos que dar un marco jurídico y tenemos el fundamento constitucional para hacerlo. En 2008 se reformó la Constitución para prohibir la existencia de labores de seguridad pública por parte de fuerzas castrenses.

Claramente, esa reforma constitucional no se ha implementado. Lo que tendrían que estar legislando es una legislación transitoria, con una fecha de caducidad fija, mediante la cual se dieran facultades al Ejército para su desmovilización, desmilitarización de la seguridad pública y simultánea construcción de cuerpos de seguridad pública civiles en los municipios y en los estados.

Démosles un marco que les regule, sí, que les regule la salida, y que obligue a los gobiernos civiles a asumir su responsabilidad en seguridad pública, no una Ley de Seguridad Interior que haga permanente su presencia y la dependencia del Gobierno civil en la tarea de seguridad pública; sino un régimen transitorio de salida.

Y me dirán: pero habrá en el futuro momentos excepcionales en que sea tan abrumador el riesgo de seguridad pública, que haya que utilizar al Ejército. Quizá. Si ese es el caso, entonces hagan lo que la Constitución establece, reconozcan la gravedad de la crisis; activen el artículo 29 constitucional y suspendan el artículo 21 constitucional, que prohíbe las labores de seguridad pública por parte de fuerzas castrenses.

Se mencionaba hace un momento, tratando de decirnos que es muy normal que el Ejército participe en labores de seguridad, que en Francia, cuna de la democracia, hoy hay un estado de excepción y los militares realizan labores de seguridad pública. La palabra operativa ahí, que aquí tenemos quien nos pueda aclarar mejor cuál es la situación en Francia; pero la palabra operativa es estado de excepción.

Políticamente hay que reconocer la excepción y hay que responsabilizarse de ella, y es importante hacerlo porque el Congreso entra a fiscalizar lo que hace el Ejecutivo si se activa el artículo 29. Esta ley lo que pretende es justamente, tener un estado de excepción de facto sin responsabilizarse políticamente y sin someter al escrutinio del Congreso el despliegue del Ejército por parte del Ejecutivo.

Eso es lo que hace esta ley, no nos hagamos guajes.

Finalmente, quiero hacer la siguiente reflexión:

Este foro puede ser una de dos cosas, puede ser el inicio de un diálogo serio, que responda el llamado a la sociedad civil, que construya una ruta para que discutamos, ahora en periodo electoral tenemos que definir como país hacia dónde queremos ir; una solución integral en materia de seguridad pública.

Eso, si este Senado decide detener la aprobación para abrir mesas de trabajo, no un espacio en el que pasamos todos a posicionarnos y es un rosario de opiniones. Esto, en todo caso, es una lluvia de ideas para generar un orden del día de las mesas de trabajo que tendrían que llevarse a cabo entre sociedad civil, Gobierno, Legislativo, estados, municipios, expertos y órganos internacionales que han manifestado su preocupación.

Puede ser eso. Puede también ser una simulación, como lo fue el último año en el que tuvimos aquí una discusión sobre la gravedad de los datos que nos decían acerca de la catástrofe que ha sido la militarización del país; y un año después claramente no se hizo caso de lo que los datos y la evidencia muestran.

Puede ser una simulación, puede ser un ejercicio serio. Ustedes deben de decidir esto en este Senado. Y para decidirlo, yo les ruego que hagan la siguiente reflexión y el siguiente ejercicio mental:

Yo no soy muy propenso en mis clases para poner contrafácticos, cosas que no ocurren y que no son lo que tenemos enfrente. Pero en este caso les voy a pedir que se imaginen algo que hoy todavía no saben que ocurrirá; imagínense por favor que su enemigo político, que el candidato del partido que ustedes no respaldan, gana la elección en julio y tiene el poder de ejercer estas facultades sin ningún control por parte de nadie.

Hagan el ejercicio de pensar que un multimillonario loco y racista llega a la Presidencia de la República, y que tiene estas facultades, sin control alguno, para militarizar el país.

Están ustedes ante una decisión histórica, con una responsabilidad como yo no he visto a lo largo de mi vida.

Este país no había estado en una crisis como la que está, desde hace 100 años, y la responsabilidad está en este Senado, en este cuerpo de legisladores de contener la postración que hasta ahora hemos visto en nuestros gobernantes, dispuestos a aprobar lo que se con tal de evadir la responsabilidad de proveer lo que la Constitución dice tiene que ser responsabilidad de las instituciones civiles: seguridad pública.

Dejen de jugar con etiquetas, dejen de llamarle seguridad interior a lo que no lo es; dejen de decir mentiras y engañar diciendo que hay documentos como la Agenda de Riesgos que son públicos, cuando no lo son y son secretos, y háganse responsables, porque la crisis es grave y los ciudadanos no somos tontos y nos damos cuenta cuando hay una simulación.

Muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias.*

Tiene la palabra José Antonio Caballero.

JOSÉ ANTONIO CABALLERO: *Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.*

Yo quiero iniciar hablando y retomando algunos de los puntos que hizo el general Alejandro Ramos precisamente en su intervención la semana pasada.

El general Ramos hablaba de "la ley no es para las Fuerzas Armadas sino para la seguridad interior de todo el Estado" "El problema no se resuelve en forma reactiva, el problema no es contener a la delincuencia organizada sino atender a la pobreza y a la desigualdad", "la amenaza a la seguridad interior tiene que ver con el combate a la delincuencia organizada".

Pareciera que cuando hablamos del tema de seguridad interior, estamos hablando del problema que vive nuestro país en materia de delincuencia organizada.

Viendo los hechos, es un hecho que hay un despliegue del Ejército desde hace mucho tiempo en las calles. De hecho, el despliegue empezó desde mediados de los años 90's.

Ciertamente ha tenido épocas donde esto ha aumentado, pero también es un hecho que dentro de este despliegue el Ejército, las Fuerzas Armadas, están haciendo funciones de seguridad pública. Es una cosa que no podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo y eso es lo que tenemos frente a nosotros.

Me parece que también es un hecho que el día de mañana no podemos simplemente al Ejército que regrese a los cuarteles y que hay muchas zonas del país que simplemente no tienen cuerpos de policía y esa es la razón por la cual el Ejército está ocupando y haciendo esas funciones.

Sobre eso, nos viene efectivamente la pregunta de si esta ley o este proyecto nos puede resolver el problema.

Quiero hacer primero una pequeña reflexión sobre la distinción entre seguridad pública y seguridad nacional.

La seguridad pública y la seguridad nacional, me parece, debieran verse desde la perspectiva de un continuo. De un lado tenemos seguridad pública, de un lado tenemos seguridad nacional.

De hecho, Samuel González había hecho algún apunte en ese sentido al inicio. Yo no estoy de acuerdo con la conclusión a que llega Samuel, pero el apunte fue interesante para tratar de distinguir la cuestión.

Seguridad pública puede ser una cuestión desde, incluso nuestro texto constitucional en materia de competencias ni siquiera es clave en esa materia, el 73, el 115, fracción III, inciso h); o el 21, se reenvían los unos a los otros, el 73, fracción XXIII, para simplemente mayor referencia.

La nota interesante aquí es que tenemos una crisis innegable de seguridad pública en el país desde hace muchos años y ni siquiera hemos sido capaces de definir constitucionalmente las competencias en materia de seguridad pública.

Al margen de ese problema, lo que podríamos ver es cuándo un problema de seguridad pública se convierte en un problema de seguridad nacional.

Este es un poco el punto. Si estamos hablando de seguridad interior y queremos colocar el tema de seguridad interior dentro de la seguridad nacional, y esto lo vamos a establecer como delincuencia organizada, cuando la delincuencia organizada se vuelve efectivamente un problema de seguridad nacional.

Y esto no es una respuesta sencilla. No es una respuesta que simplemente se pueda dar cuando alguien se encuentre en los términos de la ley federal para prevenir la delincuencia organizada, para el combate a la delincuencia organizada, el artículo dos. Me parece que es una sobresimplificación, y ese tipo de sobresimplificaciones tienen problemas prácticos muy concretos.

Vayan ustedes a la PGR y pregunten cómo opera la SEIDO. La SEIDO opera como bombero, por eso no es eficaz la SEIDO, porque todo se convierte en delincuencia organizada y no tenemos cualidad en cómo estamos enfocando el problema.

Me parece que detrás del proyecto de seguridad interior tenemos el mismo problema, una dificultad muy grave en definir cuáles son los alcances y cuáles pueden ser los límites o las fronteras entre seguridad pública y seguridad nacional.

La ley, o en este caso la minuta, lo resuelve dogmáticamente. Dice: No será seguridad pública, porque yo digo que no es seguridad pública. Es el dogma en ese sentido. Esta es una muy mala manera de resolverlo.

Me parece que aquí es un primer punto donde tenemos que empezar a establecer algunos puntos a distinguir.

Las labores de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad nacional.

La ley amplía notablemente la función, y aquí lo que tenemos es un debate de Estado.

¿En qué sentido? Un Estado, una democracia constitucional contemporánea, digamos, se caracteriza típicamente por tener mandos civiles; mandos civiles incluso al frente del Ejército.

En ese sentido, lo que está habilitando concretamente la ley, por ejemplo, es a crear toda una división de inteligencia militar en labores de seguridad nacional, en aspectos que tendrían que ver con la seguridad interior.

Si notan ustedes, el CISE no aparece en toda la ley. ¿No les parece irónico que en una ley que trate de seguridad nacional, el organismo civil del Estado mexicano en materia de seguridad nacional no aparezca mencionado?

Aparece el consejo, pero un cosa muy interesante es que lo que se está habilitando aquí es abrir una rama de inteligencia de las Fuerzas Armadas en cuestiones que tienen típicamente que ver con una cuestión civil.

Y aquí hay una cuestión muy importante de cómo nos estamos definiendo como Estado.

Al margen del papel bueno o malo que están haciendo las Fuerzas Armadas, de facto están ahí afuera, eso es un hecho. Ahora la pregunta es: ¿También esto debe habilitar en cuestiones de inteligencia? Es una cuestión que tendríamos que ver.

¿Hasta dónde se está extendiendo la función? Por ahí alguien comentaba que de hecho la Marina patrulla el mar, la Fuerza Aérea patrulla el aire, ciertamente, pero de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, éstas son funciones de seguridad nacional.

Eso quiere decir que también en este nivel hay una distinción muy clarita entre cuáles son las funciones de seguridad nacional y cuáles son las funciones de seguridad pública, y esto debemos dejarlo muy claro.

Está el tema que mencionó Alejandro de la transferencia de información a las distintas instituciones; esta obligación que tienen las distintas instituciones.

Aquí el comentario duro es: estamos abaratando los datos personales de las personas en México, para decirlo con toda claridad.

Si revisan ustedes no sólo esta norma, sino también el SAT, todas las atribuciones que tiene el SAT, empezamos a ver un abaratamiento de la protección de datos personales muy importante. Me parece que es clave no banalizar este tipo de cuestiones.

Y cuando estamos obligando a distintas instituciones del Estado nacional a transferir abiertamente paquetes de información, estamos generando riesgos importantes en temas de protección de datos personales.

Una cuestión adicional. La amplitud del artículo 26.

Alejandro se refería al último párrafo del 26. Yo me quiero referir simplemente al concepto de seguridad interior dentro del 26.

Lo voy a leer y trataré de ilustrar un poco cuál es el problema.

"Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces, para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación, instalaciones estratégicas que lo requieran".

Noten el problema en "aquellas zonas o áreas geográficas del país", esto no tiene una contención específica. Es decir, estamos problematizando a todo el país como una situación susceptible de tener impacto en efecto o efectos en áreas de seguridad nacional.

Esto me parece que, a la luz de las atribuciones que se están dando en esta materia, necesitamos regularlo.

Tenemos, por un lado, una definición abierta de qué implica la amenaza propiamente dicho; y, por otro lado, tenemos una definición abierta de cuál es la extensión.

Me parece que tenemos que tener mucho cuidado por esto.

¿Por qué? Se ha comentado que efectivamente en esta materia la rendición de cuentas puede ser distinta a propósito de su carácter de seguridad nacional, pero entonces aquí tenemos la tormenta perfecta.

Tenemos una situación que todo se puede clasificar como seguridad nacional y entonces acabamos con cualquier proceso de rendición de cuentas.

Ojo. No se entienda que estoy tratando de decir que el Ejército tiene que cesar inmediatamente sus actividades.

Lo que estoy tratando de decir, y aquí coincido con Alejandro, necesitamos un régimen de transición que nos pueda llevar a un momento donde el Ejército pueda regresar efectivamente a los cuarteles a hacer funciones, las funciones generales que les corresponden y dejar el tema de seguridad pública. Esto, me temo, el proyecto no nos está ayudando a resolver.

Finalmente, el tema de autoridades locales y seguridad nacional, la ley parece tener también importantes problemas o la minuta parece tener importantes problemas, estableciendo cuál es el ámbito de la seguridad nacional.

Déjenme citar, el artículo, fracción primera, son supuestos en donde se podría intervenir por entenderse que hay una amenaza a la seguridad interior y dice: "cuando se comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, para atenderla, ¿cuáles son las autoridades competentes para atender una situación de seguridad nacional? Pues no son otras que las autoridades federales.

Las autoridades locales no tienen competencias en materia de seguridad nacional. Esto lo que quiere decir es que la propia minuta ni siquiera está siendo muy clara para entender cuáles son los alcances de la materia en seguridad nacional.

Efectivamente, cuando una autoridad local se puede ver desbordada por un fenómeno que eventualmente puede considerarse como de seguridad pública, pero porque sus características específicas se están superando, entonces puede ser que la propia autoridad local llame a esta colaboración.

Pero aquí tenemos un problema y con esto cierro: el artículo 27 habla de la detención., escuchaba también, me parece que es el presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, cuando comentaba que los policías municipales tenían que patrullar junto con elementos del Ejército, para poder realizar detenciones.

Me parece que, si el Ejército está en las calles, que el Ejército perfectamente puede realizar detenciones, aquí no hay ningún problema, esto es en términos del 16, cualquier ciudadano puede

realizar una detención y siempre y cuando presente al detenido inmediatamente a la autoridad y esto es lo único que no se regula en el artículo 27.

Se regula la idea de llamar al Ministerio Público, de llamar a las policías, pero cuando hay flagrancia abierta, cualquier persona puede hacer esa detención y eso lo establece el artículo 16 de la Constitución.

En ese sentido efectivamente, el artículo 222, también del Código nacional de Procedimientos Penales, establece cuando operan las autoridades en coadyuvancia.

Me parece que en dado caso también habría que revisar esto, pero quiero cerrar, presente, con este punto; lo que nos está doliendo detrás de este proyecto efectivamente, creo que son dos cosas, una es la seguridad pública y nuestra falta de capacidad para poder garantizar una seguridad pública estable en todo el país, creo que no se está avanzando muy claro en esto.

Tampoco se está resolviendo implícitamente la situación de que el Ejército de facto está realizando situaciones de seguridad pública y esto no lo vamos a resolver dogmáticamente con un dictado de ley.

Y la segunda es que tampoco estamos entendiendo bien qué vamos a entender por delincuencia organizada, como esa delincuencia organizada que entendemos que es un fenómeno que afecta a la seguridad nacional.

Si no tenemos esto claro, me parece que vamos a seguir dando palos de ciego de alguna manera dentro de la construcción institucional que se está tratando de hacer y con esto lo dejaré.

Gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchísimas gracias a José Antonio Caballero.*

Concluimos entonces con la señora Dorina Celia Zoon, de Open Society.

DORINA CELIA ZOON: *No voy a tomar mucho tiempo para repetir los argumentos de mis colegas, sólo quiero decir que creo, después del momento de Ayotzinapa, este es el momento donde la comunidad internacional está mirando a México con la más preocupación y el más intenso interés, porque se trata de decisión de estrategia política extremadamente importante.*

Y quiero decir que hemos debatido mucho de si nos presentamos y atendemos hoy esta reunión, porque ya se está diciendo que la decisión está tomada, que estas conversaciones son una reiteración de las preocupaciones de la sociedad civil y que es un momento coyuntural para responder al llamado del Presidente y para poder cerrar esta sesión legislativa con la aprobación de la ley.

Realmente esperamos que no va a ser así, esperamos que esto sea sólo un momento del diálogo, pero desde Justice Iniciative, nosotros creemos que la Ley de Seguridad Interior no es el punto para nada.

En 2006 el Ejecutivo mexicano tenía la opción de elegir el camino de la militarización o de elegir el camino del fortalecimiento de las instituciones de investigación y de procuración de justicia, de

poner el dinero del Estado en las acciones militares o de poner el dinero en inteligencia financiera, de ir detrás de una lista de capos del crimen organizado o de ir detrás de redes criminales y detrás de las estructuras políticas y económicas y financieras que les mantienen y ha elegido la militarización, diciendo que no tenía idea de las consecuencias de esta militarización.

Cinco o seis años más tarde la nueva administración ha prometido que va a cambiar de estrategia y lo que ha hecho, a continuar y ha extendido la estrategia.

En este momento no sólo que la violencia ha crecido, pero no sé si se puede decir que el crimen organizado está más débil de lo que era hace unos años o que las oportunidades o que la probabilidad de que se pueda luchar contra el crimen organizado en este momento, es más alta que era en 2005, en diciembre.

Entonces, creo que también las organizaciones de derechos humanos han visto desde un escenario de inicio de 2000 de violaciones de derechos humanos a violaciones generalizadas a violaciones sistemáticas, a un nivel de barbarie que no existía en México en los años antes, montañas de cadáveres, montañas de partes humanas, prisiones transformadas en campos de exterminación, fosas con miles y miles de cadáveres.

Es el nivel de violencia, la brutalidad de lo que hemos visto en estos últimos años, nos hace pensar que no es sólo la intervención militar que tiene que ser defendida, pero que es de nuevo un momento de inflexión y de decisión política si este país quiere parar un momentito, no más, un momentito y pensar, primero, regularizar el uso de la fuerza.

Después lo que le daría la certeza a las Fuerzas Armadas y después lo que más le daría la certeza a las fuerzas armadas, sería saber cuánto tiempo van a tener que continuar así, cuáles son las condiciones para su retiro, hasta cuándo tienen que esperar para retirarse, cuáles son los pasos que el Ejecutivo, el Legislativo va a tomar para llegar al momento de transición, del final de transición, y tal vez que más que esto, tal vez que las Fuerzas Armadas deberían saber contra quién están luchando.

Tal vez, que la política de droga de este país tiene que ser repensada; tal vez que es necesario, más allá del debate de la Ley de Seguridad y de los aspectos técnicos, es necesario un gran debate sobre cuáles son las opciones políticas y cuál es el pacto político y cómo México vea que se va a continuar.

Entonces, yo voy a parar aquí y muchas gracias por invitarnos.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias a la señora Dorina Celia Zoon.*

Ahora, harán uso de su participación, de su palabra, el presidente de la Segunda Comisión de Estudios Legislativos, el senador Benjamín Robles.

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: *Gracias.*

Y quiero subrayar que hago uso de la palabra precisamente en ese contexto, porque me gustaría debatir, pero aquí nos ha pedido la presidenta de las Comisiones Unidas que no debatamos hasta que arranque la revisión del Dictamen, y me parece correcto que así sea, por eso lo he externado.

Pero ya que me refiero a la senadora Cristina Díaz, le quiero agradecer la apertura que se tuvo para que se abriera este tercer segmento.

No tengo la dicha de conocer a quienes han hecho uso de la palabra, sino que, a través de uno de sus integrantes de este Colectivo, les giramos la invitación porque nos parecía muy importante que todas las voces que se han estado expresando, se escucharan aquí en el Senado.

Pero hago propio, por lo menos lo que entiendo es el espíritu de parte de lo que han dicho.

Ojalá tengamos aquí la sensibilidad, y me refiero a mi querida amiga Ana Lilia Herrera, en su calidad de Presidenta de la JUCOPO, no quede hasta aquí, porque yo también externo esa preocupación, el escuchar a la sociedad.

Yo ya había anticipado que estaría pidiendo, desde el mismo arranque de la sesión de Comisiones Unidas, para revisar el Dictamen, que estaría pidiendo tiempo, inclusive he dicho que no hay necesidad de acelerar y buscar que antes de que termine este Periodo se apruebe esta Ley, y menos en los términos de la Minuta que nos fue remitida por la colegisladora.

Yo creo que sí es importante que revisemos lo que han dicho ustedes, como lo que dijeron los alcaldes, algunos académicos, miembros de otras organizaciones, lo que dijeron los gobernadores.

Quiero que sepan que, en el caso personal, lo voy a revisar puntualmente.

La versión estenográfica la vamos a pedir, como la hemos solicitado en reuniones pasadas, y revisar puntualmente.

Qué destaco, y ahí me refiero un poquito a mis compañeros presidentes de las Comisiones Unidas, por supuesto a la senadora Ana Lilia Herrera, en su carácter de presidenta de la JUCOPO. Yo creo que debemos ser muy sensibles y no acelerarnos.

Ha habido tanta claridad en las posturas, sin necesidad de entrar al debate, que está claro que sería un gravísimo error aprobar en sus términos la Minuta, sin cambiar ni un punto, ni una coma y ojalá todos estemos viendo.

Porque si no, van a tener razón quienes aquí dicen que nada más estamos jugando, porque si bien es cierto que el Presidente de la República hizo el llamado al Senado, yo hasta me pongo a pensar que el Presidente ni tuvo tiempo de reflexionarlo, sino fue tal la presión del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del galardonado, que tuvo la decisión de hacer este planteamiento.

Y tampoco creo que el propio Presidente esté jugando, mal haría, para pensar que este diálogo con la sociedad, porque él habló de diálogo, se haya agotado el día de hoy.

A mí me parece, y por eso me refiero a los presidentes de las Comisiones Unidas, que nuestra responsabilidad debe ser, ahora, analizar lo que aquí se ha expresado.

Y más aún, seguir abriendo, senadora, los espacios porque hay algunas personas que nosotros invitamos, la verdad es que gracias a le generosidad, insisto, de Cristina, desde la tarde noche del

sábado, una parte del domingo, estuvimos haciendo la invitación a través de uno de sus integrantes. Alguno no pudo llegar, otros no podían cambiar su agenda.

Yo les decía, bueno, pues yo estoy planteando que el martes se pueda seguir discutiendo esto, y hoy lo insisto, yo diría que la propuesta que hace este Colectivo Seguridad sin Guerra, me parece muy interesante, de convocarnos de una manera seria a todos los involucrados, los representantes del Gobierno Federal, en enero, como aquí se ha planteado, varios días para discutir este tema.

Porque a diferencia de lo que dijo Javier Oliva, y me refiero a él por el cariño y el afecto que nos tenemos, yo creo que él sí no se va a sentir por lo que yo diga, yo no creo que debamos tener, para este año, una Iniciativa de tal envergadura aprobada en fast track, porque eso es lo que haríamos, si nosotros insistimos, y me refiero al Senado, porque yo estoy en contra, de que se pueda aprobar en unos cuantos días, en unas sesiones, insisto, sobre las rodillas.

Porque a pesar de que es una ley de tan pocos artículos, poco más de 30, cuatro transitorios, estoy seguro que la mayor parte de mis compañeras y compañeros no la han leído, porque ya sabemos cómo nos gastamos las cosas aquí.

Como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, yo he ofrecido, y lo reitero, pues asumir las responsabilidades que me confiere el Reglamento, y por eso estamos aquí.

Pero también planteo que, para pasar al debate de nosotros, todavía falta que escuchemos a muchas voces.

Inclusive, ojalá no nada más hubiese sido escuchar, sino preguntar, debatir, pero la presidenta Cristina Díaz fue muy puntual, lo ha sido con nosotros, y en el caso de un servidor, lo he aceptado, esperando que sí vaya a haber en el momento de que nos veamos en debate.

Este debate implica una revisión puntual, artículo por artículo, como qué se ha dicho, hasta palabra por palabra, porque agarrándose de una palabra, es como vemos el riesgo nacional que se puede presentar de aplicarse una Ley, que ya de por sí, digo, a primera vista, después de escuchar a todos, ¿eh?, a todos.

Porque cuando hablaron los gobernadores yo veía una postura que después corrigió el señor Gobernador de Querétaro, y yo pensé que decían pues ya apruébenla. Ya después al final dijeron, no, bueno, ustedes revisen.

Hay quienes plantean que debe haber más ejercicios como éste. Yo estoy totalmente de acuerdo.

Y hay quienes pensamos que, de entrada, tiene que corregirse, porque el debate no es estar a favor o en contra de los integrantes del Ejército y la Armada; ese no es.

Nuestro respeto; nos ayudan mucho, yo soy senador por Oaxaca y ahora nos han ayudado mucho ante la contingencia de los temblores. Ese no es el tema.

El tema es cómo aquí se ha denunciado el peligro que podía tener aplicar una Ley donde yo por lo menos hasta ahorita llevo 23 observaciones, muchas de ellas comentadas aquí, y que yo espero que todos podamos estar debatiendo.

Entonces el debate no es el Ejército, no lo es, eso lo respetamos. Tampoco si hay una Ley o no de Seguridad, pero no puede ser ésta, pues tiene que corregirse, nos han hecho muchos planteamientos.

Y yo por eso no solamente me refiero a los invitados, a quienes ya les agradecí que hayan hecho el esfuerzo de trasladarse, de cambiar sus agendas para estar con nosotros, de esperar hasta que les tocaron el turno de sentarse, sino a mis compañeros.

No cometamos el tremendo error de aprobar sobre las rodillas, sin hacer los ajustes que merece una Iniciativa de éstas, hoy convertida prácticamente ya en Dictamen, porque circuló un Dictamen, que espero que se corrija, porque hacer cambios nada más en la Exposición de Motivos, es como burlarnos de las personas que han estado aquí.

No puede ser cambiar solamente la Exposición de Motivos. Hay que cambiar, y de fondo, muchos de los elementos que incluyen el articulado de esta Minuta, que nos llegó de la Cámara de Diputados, que allá fue aprobada fast track y que no puede correr esa misma suerte aquí en este Senado.

Es el comentario. Por supuesto que me estoy preparando para el Debate, y les garantizo a los que están aquí hoy presentes, a quienes les reitero otra vez mi gratitud, que sus planteamientos los estaremos haciendo propios porque la mayor parte del pueblo que está atento de este tema, les da la razón.

Muchas gracias por su presencia.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Presidenta, por favor.*

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: *Gracias, Presidenta.*

Quiero ser muy breve, quiero agradecer el tiempo, la generosidad del tiempo de todos los aquí presentes, muchos reincidentes, qué bueno, en venir al Senado, que es la casa de todos los mexicanos.

Quiero disculparme porque debo retirarme. Sólo quiero reiterar que mi reconocimiento a los presidentes y presidentas de las comisiones dictaminadoras; a quienes no lo son, pero han estado participando de estas reuniones que han enriquecido mucho, sin duda, la visión de cada uno de los senadores.

Y decirles que yo llevaré sus inquietudes. No depende de mí, ojalá dependiera de una sola persona; pero no depende de una sola persona. En la Junta de Coordinación Política están representados todos los grupos parlamentarios, como ustedes lo saben; y yo por supuesto que por un interés personal, pero también institucional, he permanecido estos días que hemos tenido reuniones, con mucho interés.

Y con todo el interés estaré llevando los planteamientos de cada uno de ustedes a los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Me retiro, ofrezco una disculpa sentida, y muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias a la presidenta de JUCOPO, a la senadora Ana Lilia Herrera.*

Continuamos.

Ha solicitado la palabra el senador Héctor Larios, posteriormente la senadora Angélica de la Peña.

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *Gracias, Presidenta.*

Primeramente, quisiera hacer referencia al planteamiento de por qué no debatir ahora, o sea, un diálogo supone el intercambio de opiniones y un debate supone el contraste de opiniones divergentes y los razonamientos por los cuales se tienen estas posiciones diferentes.

A título personal les diría, ahora no podría sostener ese diálogo. Tengo, como todo ser humano, ideas anteriores sobre estos temas. Hoy hemos escuchado a muchísimas voces; empezamos con los gobernadores.

Absolutamente todos los gobernadores que estuvieron aquí presentes, todos se manifestaron a favor de que exista una Ley de Seguridad Interior y que se tome con la mayor urgencia; particularmente uno de ellos insistió en que habría que revisar algunos términos, algunos conceptos, algunos artículos.

INTERVENCIÓN: *¿Y fueron de todos los partidos?*

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *De todos los partidos, sí. Vamos, estuvo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, del PRD; y estuvieron del PRI y del PAN.*

Luego escuchamos alcaldes. A excepción de uno, todos los demás se manifestaron a favor, con diferentes argumentos.

Luego estuvieron algunos representantes de organismos sociales, que piensan, que se expresaron a favor, ustedes los escucharon, Alto al Secuestro; México Unido contra la Delincuencia. No.

Ah, bueno, por eso dije creo, y por eso no me atrevería ahora a debatir, tomé nota de prácticamente todos los temas que me llamaron la atención.

Entonces, el primer razonamiento es: sí hay posiciones encontradas dentro de las autoridades, los gobernadores; hay quienes "así como está", otros dicen "háganle cambios". Todos a favor de que exista esta ley. En el caso de los alcaldes, uno que dice "no debe existir esta ley", así lo entendí yo. Y en la sociedad civil y en los académicos, también estuvieron académicos hace rato, que están a favor.

INTERVENCIÓN: *¿Pero qué académicos están a favor?*

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *¿Samuel no es académico?*

INTERVENCIÓN: *No, Samuel es consultor…*

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Bueno, no discutamos ahora eso…*

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *Bueno, personas conocedoras del tema que están a favor y personas que tienen credibilidad, como ustedes, y entonces hay que poner los argumentos sobre la mesa.*

Creo que el primer debate es mucho más de fondo, porque traduzco, de lo que escucho, que hay posiciones que dicen "no debe haber una Ley de Seguridad Interior; debe haber un régimen de transición, debe haber otras mecánicas, pero no debe haber Ley de Seguridad Interior".

INTERVENCIÓN: *O si la hay, tiene que ser al 119 constitucional, que es donde corresponde.*

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *Bueno, el contenido podría ser muy semejante. Tú dices solamente, lo único que cambiaría es quién detona y el 119 constitucional, si mal no recuerdo dice que los congresos locales o en su defecto los ejecutivos, ¿no?*

INTERVENCIÓN: *Que no es menor.*

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *No es menor. Aquí entiendo que son los ejecutivos.*

INTERVENCIÓN: *No, el Ejecutivo.*

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *Incluso el cuestionamiento de si la autorización es del Ejecutivo, del titular del Ejecutivo o en qué momento se cambió al Secretario de Gobernación, ¿lo decías tú, no?*

Bueno, pero de fondo, o sea, si es una discusión de fondo, debe haber o no debe haber la ley. La mayor parte de las opiniones que hemos escuchado todo el día, la mayor parte de los comentarios que yo he recibido, es "sí debe haber ley, háganle cambios".

Y entonces, al principio el enfoque es exactamente qué cambios hay que hacerle; que algunos me parecen muy sensatos, o sea, ¿qué tiene que hacer el Ejército en el tema de controlar o de conducir o de proteger una manifestación del tipo de que sea?

La palabra "pacífico" me parece que es una valoración que no debe de estar. Ese cambio u otros que no comenté ahora, para no meterme en broncas, digo, en broncas conmigo mismo, ¿no?

La reflexión que hago es, quienes manifiestan estar en contra de algunos artículos, a veces en general manifiestan "como lo apruebes, voy a estar en contra"; porque de fondo traduce una posición de "no debe haber Ley de Seguridad Interior". Eso lo pongo sobre la mesa, es parte de la reflexión que tenemos que hacer nosotros y luego debatir entre nosotros.

Creo, al final del día, que también ya en la realidad lo que está ahora en el marco jurídico, tanto por el 119 como por el 89, fracción VI; ya existe esa facultad del Ejecutivo en el caso del 89, libremente, de disponer de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Aéreas, ¿así dice la fracción VI, no? De todas las Fuerzas Armadas, disponer para temas de defensa nacional y de seguridad interior, ¿así dice, no?

Ya existe eso y ya se usa.

INTERVENCIÓN: *Ojo, se usa para seguridad pública, que está prohibido por la propia Constitución.*

Sí es importante subrayar que hay una confusión en esta ley entre seguridad pública y seguridad interior; y de eso se trata la ley, de generar esa confusión.

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *Respeto tu opinión, pero creo que hay otro debate que está también. Existe un concepto, o sea, la delincuencia organizada puede ser parte de la seguridad interior.*

Es un debate que hay, me queda clara tu posición, pero también hay posiciones diversas. Hay que poner en la balanza todas estas cosas.

Yo les agradezco mucho su participación, la verdad es que me ilustra en muchos temas. Como también agradezco las pasadas, que la vida no es ni blanco ni negó, tiene muchos matices, y en lo personal lo que pienso es hacer una reflexión, ordenar mis apuntes.

Y le pediría a la presidenta de la Comisión de Gobernación, a la senadora Cristina Díaz, más que a ella al equipo técnico o que dispusieras que el equipo técnico nos haga llegar la mayor parte de la información que haya surgido en este día y en otros anteriores, que nos permita a todos construir nuestras propias posiciones.

INTERVENCIÓN: *Senador, una pregunta, mencionó que los gobernadores, pero según yo sólo fueron seis, ¿y el resto se manifestaron en otra sesión o en algo?*

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *No, los gobernadores que vinieron aquí.*

INTERVENCIÓN: *Ah, ok, que son seis de los del resto.*

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *Vinieron representando a... No, no vinieron representando, son los integrantes de la Comisión de Seguridad de la CONAGO; y me corrigen aquí los que estuvieron, pero estuvo presente el presidente de la CONAGO, que es el doctor Mancera.*

Estuvo el Gobernador de Querétaro, estuvo el Gobernador de Durango, de Jalisco, de Tlaxcala, de Guerrero, Astudillo; Carreras, de San Luis.

INTERVENCIÓN: *¿Y esto está consensado por todos los gobernadores, la posición de...?*

INTERVENCIÓN: *No, tienen diferencias entre ellos.*

INTERVENCIÓN: *Sí, porque seis del resto, es...*

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *A ver, la posición de la CONAGO, unánime, es "sí debe haber una ley y háganla lo más rápido". Esa es una posición uniforme de absolutamente todos los gobernadores.*

INTERVENCIÓN: *Pero además de rapidez, contenidos.*

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: *Ah, bueno, en cuanto a los contenidos sí, uno de ellos, de los que estuvieron aquí; no nada más uno, dos o tres dijeron "vale la pena que revisen los contenidos que están ahí".*

Pero sí están de acuerdo en que exista la ley, lo cual tiene muchas implicaciones; o sea, sí están de acuerdo en que la seguridad interior tenga el contenido de delincuencia organizada, fundamentalmente el narcotráfico, eso es lo que expresan, eso es lo que expresaron ellos, cada quien póngale el valor que quiera a lo que dicen ellos, pero eso es lo que dicen y eso sí es unánime.

Muchísimas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Gracias, senador Héctor Larios, secretario de la Comisión de Gobernación.*

Debo comentarles a todos ustedes que en el micrositio de la Comisión de Gobernación, encontrarán todos los videos de cada una de estas sesiones, que desde el día martes hemos recibido a quienes se manifestaron, por instrucción de la Mesa Directiva, nos convocó a las comisiones y a JUCOPO a recibir a los representantes que estaban manifestándose.

Y así hemos tenido, en consecuencia, una serie de mesas de diálogo o de trabajo donde se han escuchado todas las voces.

Tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña.

Me pide, y lo hago con mucho gusto, estuvo la señora Anita Müller, que es consejera política. Se retiró, pero aquí estuvo con nosotros.

Tiene la palabra la senadora de la Peña.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: *Gracias, Presidenta.*

Yo agradezco que se hayan realizado estas reuniones el día de hoy. Estuvimos presentes en la entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos 2017 a Miguel Álvarez, y hubo contundencia en la intervención del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su calidad de ombudsman de la nación.

Y, por supuesto, también el discurso de Miguel, que no tuvo desperdicio al señalar lo que todas y todos conocemos, la situación que creo que reconocemos, más allá de las distintas vertientes que se pueda tener, compleja que tiene el país, y la importancia de que se respeten los derechos humanos a partir de que se atienda la problemática que está afectando a los derechos humanos.

Creo que la respuesta del Presidente de la República al solicitarle al Senado de la República se abriera al diálogo con las organizaciones, yo quiero hacer énfasis particularmente a propósito de estas dos intervenciones.

Claro, antes en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, también la galardonada también lo mencionó, la escuchamos todas y todos; pero particularmente el contexto de la entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos tiene una gran relevancia que se haya pedido el diálogo con

quienes están señalando observaciones, quienes están haciendo criticas concretas a este proceso, y prácticamente la intención de aprobar en sus términos la minuta de Cámara de Diputados.

Yo creo que es importante mencionar el contexto. El contexto, reitero, se dio a partir de estas dos críticas.

Yo celebro que hoy que estaba citadas las comisiones para aprobar en sus términos la minuta de Cámara de Diputados, se haya transformado la reunión para escuchar a todas las demás propuestas, no solamente las que se expresaron en los Pinos en la entrega del premio a Miguel Álvarez.

Yo creo que es importante contextualizar la situación, porque parece que no es menor escuchar al ombudsman, las organizaciones todas son respetables, todas son importantes, escuchar a todos los expertos, pero estamos hablando a un organismo autónomo garante de los derechos humanos en este país, que es el ombudsman, es la defensoría de los derechos humanos de la nación, no es cualquier situación, porque además tiene facultades expresas en la Constitución para emprender acciones de inconstitucionalidad, también hay que contextualizar la importancia que tiene el ombudsman de la nación.

De tal manera que yo celebro que se haya cambiado la dinámica de aprobar en sus términos la minuta que estaba aprobada para hoy, y se haya abierto efectivamente por la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, y los señores presidentes de las otras tres comisiones, se haya cambiado la dinámica del día de hoy para abrir a una discusión y escuchar además a algunos gobernadores, a algunos presidentes municipales o funcionarios municipales, y por supuesto a las organizaciones y académicos que hoy están aquí.

Si hay polémica, ya sabemos que hay polémica. No voy a entrar al debate de quiénes han estado diciendo: Sí, tal cual que se apruebe, etcétera.

Yo quiero retomar, y con eso termino, Presidenta, además de agradecerle que se haya cambiado el sentido del ejercicio de los trabajos del día de hoy del Senado de la República, quiero tomar una de las partes de la intervención de Dorina Zoon, cuando decía, no recuerdo otro contexto nacional de discusión, toda esta reacción que ha habido en el país, después lo definió claramente, después de lo de Ayotzinapa.

Es decir, de esa relevancia es la preocupación manifestada por los organismos internacionales, de los cuales México está vinculado y también de distintos legisladores y legisladoras del ámbito particularmente de la Unión Europea, de juezas y jueces de Las Américas, sin demérito de los nacionales, los y las constitucionalistas que de diversas instituciones de educación superior han manifestado su preocupación respecto a esta minuta de Cámara de Diputados y su inminente aprobación por el Senado de la República.

Es necesario que lo discutamos. Es necesario que la Junta de Coordinación Política haga además una valoración política, además de doctrinal, también una valoración política, del significado de aprobar esta minuta así como la manda la Cámara de Diputados.

No tenemos prisa. Si en diez u once años hemos tenido esta situación, ya después de diez u once años no queramos en unas cuantas horas, al final del periodo ordinario de sesiones, prácticamente

entrando a la etapa de fin de año, etcétera, una ley que no va a tener buen fin, por cierto, no va a tener buen fin.

Si el Presidente de la República actúa en consecuencia como lo observamos ahora en la entrega, incluso tiene facultad de veto. Antes de que se promulgue tiene facultad de veto. Y yo creo, por como yo lo observé, puedo estar equivocada, pero como yo lo observé, puede ser que lo ejerza, porque me parece que hay que escuchar, saber escuchar y atender lo que se está oyendo.

Yo creo que no improvisó, sabía perfectamente, bien, porque ha sido pública la posición del ombudsman, y sabía perfectamente bien que si el galardonado por el premio nacional, que todos conocemos la trayectoria de Miguel Álvarez Gándara, sabíamos perfectamente bien, casi intuíamos lo que iba a decir Miguel en los Pinos la semana pasada.

De tal manera que anticipemos a cualquier acción de inconstitucionalidad; anticipemos a los amicus curiae, anticipemos a las posibles controversias constitucionales; anticipemos a un clima de inconformidad que no ayuda, y cierto, es verdad lo que dice Ana Laura Magaloni, no es una bronca contra las Fuerzas Armadas. Nadie, de quienes hemos estado en la discusión, hemos dicho: "Oh, las Fuerzas...", no. Todos reconocemos que les hemos endilgado una responsabilidad que ellos mismos han dicho: ni estamos preparados ni nos hemos educado para eso y simple y sencillamente tenemos que hacerlo porque nos lo han ordenado.

Pero el desgaste de las tropas es eminente, ahí está, ya no podemos seguir estando incluso enfrentando sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la gran cantidad de señalamientos que se hacen contra ellos, porque están haciendo una tarea para la que no están formados.

Yo creo que no estamos en debate con eso, de tal manera que yo y con eso termino, Presidenta, abogo a la experiencia que tenemos en este Senado de la República de hacer buenas leyes y de tener buenas prácticas en el ejercicio del trabajo parlamentario y legislativo.

Empezamos, Roberto, con las reformas al Código de Justicia Militar, escuchando a los expertos y a los organismos internacionales, nos fue bien en esas reformas.

Después otras leyes importantes en el marco de cuando tú eras presidente de la Comisión de Justicia y luego después como Presidente de la Mesa Directiva; buenas prácticas, ejemplares prácticas del trabajo parlamentario y legislativo. No las menciono porque son un montón.

Con la Presidenta de la Comisión de Gobernación qué puedo decir, acabamos de terminar un proceso que es ejemplo que hay que vindicar con todos los honores del trabajo parlamentario, del trabajo de parlamento abierto, con la Ley sobre Desaparición Forzada de Personas e Involuntaria también.

Entre otros textos importantes, legislativos y reformas a marcos jurídicos y reformas constitucionales importantísimas que han tenido grandes consultas.

Yo le pido, Presidenta, de veras, y al señor senador Enrique Burgos, que también está aquí, al Presidente de la Comisión de Defensa, la Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que de veras vaya que aquí está y claro, a quienes integran las comisiones que están acá, que de veras diriman en el marco de la Junta de Coordinación Política, que es el ámbito

político y parlamentario de este Senado de la República, a hacer las cosas bien y cerrar bien el año y no esto nos dé al traste con un ejercicio que hemos venido haciendo de genuino parlamento abierto y que ahí están publicadas en el Diario Oficial de la Federación las buenas leyes que hemos hecho.

Esta puede ser una cosa que bate una carga terrible y estamos en tiempo de hacerlo con calma, hacerlo bien, discutirlo bien, reflexionarlo bien y sobre todo tengamos presente la rigurosidad, constitucionalidad de la constitucionalidad que tenemos que ejercer en la revisión de lo que nos manda la Cámara de Diputados y sentarnos con la Cámara de Diputados también, no estoy denostando a la colegisladora, de ninguna manera.

Sino que nos sentemos y como resultado también de estas observaciones que ustedes han hecho, que yo creo que tienen que ser tomadas en consideración, tienen que ser valoradas en sus términos y entrar al debate, entremos al debate donde sí estamos de acuerdo, donde no estamos de acuerdo.

Me parece que el resumen que acaba de ahcer el senador Larios es bastante interesante. Hay quienes piensan que debe ser así, pero la mayoría, si lo medimos de veras, ciertamente la reacción a nivel internacional no se había dado, por desgracia, desde Ayotzinapa.

***INTERVENCIÓN:** Senadora, una pregunta, si me permite.*

***SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:** Para pedir la palabra se coordina la mesa y dejemos al final, si hay alguna participación.*

Cede el señor Roberto Gil a su participación.

***INTERVENCIÓN:** Quería yo preguntarle, porque no estoy al tanto del proceso legislativo, si dado que vino la Comisión de Derechos Humanos al llamado a abrir el diálogo en un evento sobre derechos humanos y la Comisión de Derechos Humanos va a participar en la dictaminación en este cuerpo legislativo.*

Y bueno, también preguntarle a usted y a todos los senadores que, si están dispuestos a responder al llamado, al diálogo que les está haciendo Seguridad sin Guerra, que es justamente a quien aludía el Presidente, cuando le pidió al senado que participara en el diálogo.

O sea, si se va a integrar al proceso de legislación el hecho de que sea llamado desde Derechos Humanos la apertura de este diálogo.

***SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ:** Si me permite contestarle rápido.*

Mire, solicitamos en dos ocasiones a la Mesa que integrara a la Comisión de Derechos Humanos para el dictamen. En las dos ocasiones votaron mayoritariamente y dijeron que la Comisión de Derechos Humanos no dictamina.

Ah, pero eso no va a evitar que yo esté aquí y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos también lo estén cuando lo decidan.

***SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:** Tiene la palabra el senador Roberto Gil Zuarth.*

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: *Gracias Presidenta.*

Voy a acatar escrupulosamente su instrucción de no debatir, sino simplemente comentar sobre lo acontecido en estas últimas sesiones, las del día de hoy.

La primera precisión que me gustaría hacer es que yo espero que estos foros y el proceso de dictaminación que va a seguir las comisiones dictaminadoras, no obedezca la instrucción del señor Presidente de la República, porque parece que estamos concediendo que la razón por la cual abrimos estos espacios de diálogo y estaos dispuestos a escuchar algunas posiciones e incluso a corregir algunas redacciones, tenga que ver con lo que fue dicho por el Presidente de la República, en el evento ya mencionado.

Yo creo que debiéramos ser cuidadosos en no dejar que estas especies puedan generar percepciones sobre la manera en la que este Senado reivindica su independencia y su soberanía frente al Poder Ejecutivo.

La segunda precisión o, mejor dicho, el segundo comentario es que el diálogo tiene que ser honorable, honesto y socialmente útil, porque ahorita mismo hay otro debate en redes sociales, mientras aquí estábamos escuchando, hay otro debate inducido, a propósito de lo que aquí se ha comentado, el diálogo democrático debe ser honorable, serio.

Ojalá podamos avanzar en un debate sin tantos adjetivos y con un poco más de intención de construir no solamente una solución específica a esta problemática, sino frente a todo lo que tenemos que hacer por delante.

Yo siempre he insistido que, para reconstruir las instituciones en materia de seguridad y justicia, necesitamos hacer cinco cosas: la primera es cambiar nuestra política de drogas.

La segunda es reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La tercera, reconstruir las instituciones de procuración de justicia y, sobre todo, resolver la grave problemática de acceso a la justicia a nivel local.

Por supuesto, empezar a construir nuevos diseños para justicia cotidiana, porque ahí es donde no se resuelven oportunamente los conflictos, se convierten en dramas penales.

Y hoy en Iztapalapa la violencia se explica más por el acceso al agua que por el narcotráfico. En esa medida tenemos que construir una presencia del Estado que pueda dar solución a las necesidades de las personas y que nos e tenga que recurrir a esquemas violentos de proveeduría de servicios ni tampoco a la imposición de la fuerza en situaciones de convivencia difícil, como puede ser en algunas zonas de nuestro país.

Y, por último, otra cosa que tenemos que ahcer y permítanme utilizar la metáfora, pero al revés, y la quinta cosa que hay que hacer es quitar la adicción a la militarización del país y para quitar esa adicción lo que hay que provocar es una suerte de síndrome de abstinencia.

Cuando los estados y los municipios dejen de tener en sus manos el recurso de las Fuerzas Armadas, van a tener que empezar a construir y a ejercer sus propias responsabilidades de otra

manera y a en eso creo, en ese marco debemos de inscribir la regulación de la presencia de las Fuerzas Armadas en contextos de seguridad a secas.

Y me lleva este a secas a una reflexión que les pido que se lleven y lo decía hace un rato el doctor Caballero: la relación civil militar no cambió hace cinco años o hace una administración y media.

La relación civil militar cambió en los noventas, setentas desde la perspectiva de operaciones, pero desde el punto de vista institucional cambió en los años noventa y cambió cuando decidimos que delincuencia organizada no iba a ser tratada desde los esquemas de respuesta del Estado, propios de la seguridad pública y la metimos al esquema de seguridad nacional, que implica no solamente otros sujetos, sino también otros instrumentos que tiene el Estado para enfrentar esa realidad.

Ese fue el cambio dramático en la relación civil y militar, y desde entonces se ha agudizado ese problema.

El Artículo que enlista los delitos que corresponden a delincuencia organizada, ha sufrido 13 reformas, hoy tiene 26 categorías de delitos, los últimos los ambientales, pero también está el robo de vehículos.

Cuando nosotros dijimos que delincuencia organizada, me refiero como país, hace muchos años, que delincuencia organizada iba a estar en la esfera de la seguridad nacional, metimos a los militares a una tarea permanente ante delincuencia organizada, y eso ha provocado una enorme irresponsabilidad local y una serie de zonas grises en la relación entre las entidades federativas y la Federación.

Robo de vehículos, ¿delincuencia organizada?; robo de hidrocarburos, derechos de autor. Es un problema de diseño institucional que ha tenido otro problema en los hechos, que como se ha ido ampliando la categoría de delincuencia organizada, conforme se han ido profundizando las zonas grises, conforme hemos estado en esta relación tirante entre entidades federativas y municipios, lo que ha pasado es que ese instrumento, el puente entre el Artículo 129, la relación de separación poder civil militar, y delincuencia organizada, tiene un puente de comunicación, que es el famoso 89, Fracción Sexta, la disposición de la totalidad de las fuerzas armadas para atender seguridad interior y defensa exterior.

Ahí está el punto de comunión entre el régimen, la excepción, seguridad nacional, entre delincuencia organizada y la posibilidad de invadir la esfera de la seguridad pública.

En los hechos lo que ha pasado es que se utiliza un esquema de seguridad nacional para sustituir las responsabilidades en materia de seguridad pública, y que no nos extrañe la imponente presencia de las fuerzas armadas.

La reflexión que yo les pido es la siguiente: se dice muy recurrentemente que hay que buscar la manera de sacar a las fuerzas armadas de donde están. Y yo coincido con ustedes, hay que sacarlas de seguridad pública.

Pero la pregunta es si las fuerzas armadas, en un contexto democrático, no tienen otra responsabilidad, o no van a tener otra responsabilidad.

He enlistado algunas de las funciones en el programa de seguridad nacional, en las propias leyes orgánicas; la segunda misión que tienen las fuerzas armadas, según sus leyes orgánicas, es la protección de la seguridad interior.

Parece que nos sacamos de la chistera ese concepto, tiene historia y ha evolucionado en la historia de nuestras instituciones y también de la interpretación.

Pero parece como que estamos inventando una cosa nueva.

Hay funciones que está realizando el Ejército y la Armada de México, que no son de seguridad pública, que están en el ámbito de la seguridad nacional, y que en la doctrina castrense se conocen como de seguridad interior.

Se conoce como seguridad interior no solamente por textos legales sino también por una serie de desdoblamientos normativos que están ahí entre nuestras normas.

La reflexión es si podemos sostener que las fuerzas armadas pueden regresar a los planteles hoy, mañana o en algún momento.

Yo creo que no, en razón de la situación de emergencia, pero también porque creo que a lo largo de nuestro aspecto institucional les hemos dado algunas tareas que son de carácter permanente.

Entonces también revisemos si el Ejército va a seguir haciendo el control de armas de fuego; o revisemos si vamos a tener a lo mejor a una guardia costera civil, o si, por ejemplo, la protección de las selvas y de los bosques les corresponde a las fuerzas armadas.

Esas tareas son mucho más complejas que la persecución del narcotráfico.

Y por supuesto, y aquí la reflexión más encarecida. Si ustedes revisan lo que hoy significas delincuencia organizada en nuestro régimen legal, es mucho más que narcotráfico, desafortunadamente.

Y mientras hemos metido delitos y fenómenos al tratamiento excepcional de la delincuencia organizada, hemos dado indirectamente más responsabilidades a las fuerzas armadas. De eso se trata para mí esta discusión.

La Constitución es una caja de herramientas, y ahí hay una herramienta que hay que regular.

Entiendo que la función de la ley es normar las potestades públicas. Hay una potestad público no regulada, discrecional, en muchas cosas arbitraria.

Hay que atarle las manos al Presidente actual o a los que siguen, precisamente para que no sigamos agudizando esta crisis, en la cual las fuerzas armadas se desdibujan de sus funciones.

Y ojalá que este debate sirva para replantearnos cuál es el papel de las fuerzas armadas en un contexto democrático, con muchos problemas de inseguridad, pero sobre todo con la necesidad de encontrarle su espacio y su lugar en nuestro diseño institucional.

Por su atención, muchas gracias.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias senador Roberto Gil.*

Estamos por concluir. Tengo la última intervención del senador Enrique Burgos, no sin antes si alguien de ustedes tiene algún comentario.

Bien. Senador, usted cierra.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: *Muchas gracias.*

Presidenta de la Comisión de Gobernación:

No soy integrante de ninguna de las comisiones dictaminadoras, pero gracias por la oportunidad.

Efectivamente, creo que son conceptos, todos, enriquecedores.

A lo largo de esta mañana y ya entrada la tarde, se han escuchado puntos de vista, todos valiosos, todos con validez en cuanto a su argumentación.

Creo que dejaría yo solamente a salvo dos o tres puntos.

Primero. Efectivamente, el Congreso es el espacio natural de debate, en donde las distintas fuerzas y las distintas vertientes habremos de aportar nuestros puntos de vista. Es la naturaleza de un Senado plural.

Segundo. Y creo que esto es coincidente, dejar a salvo la institucionalidad de las fuerzas armadas.

Como aquí lo decía la doctora Magaloni, por ningún motivo, son las fuerzas armadas las que están en el banquillo de los acusados. Al contrario, han sido un factor de altísima relevancia y en cierto sentido insustituibles en ese escenario.

Por otro lado, advertir que la realidad, y yo lo expresaría diciendo la calle; la calle está en un verdadero aprieto, en una complejidad, en donde bajo distintas formas, decía el maestro Roberto Gil, por un lado, delincuencia organizada, por otro narcotráfico, pero en una y en otra y por distintos niveles, hay tensión, provocada por este margen de inseguridad.

¿Cuál sería -lo asumo como un punto de vista personal-, cuál sería nuestro compromiso? Buscar dos pilares.

Uno. Constitucionalidad en esta Ley, constitucionalidad plena y respeto pleno, también, a los derechos humanos.

Y, por último, agradecer la presencia; tengo el gusto de haber escuchado, de haber conocido a muchos de los presentes, y sin duda personas respetables, personas que pueden aportar.

Seguramente seguiremos haciendo buenas síntesis de ideas, sin dogmatismos y sin ortodoxias.

Muchas gracias Presidenta.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: *Muchas gracias.*

Pues les agradezco muchísimo. Son casi siete horas que estamos cumpliendo de estar en esta Mesa de trabajo, con actores muy importantes, que han expresado opiniones, todas ellas muy puntuales, y sin duda enriquecen, pues, nuestro trabajo.

Ya los presidentes de las Comisiones haremos una ruta, una ruta crítica y en verdad muy reconocidos por todo este tiempo y por todo este espacio.

Desde las 10:15, 10:20 que iniciamos y, sin duda, pues también al Canal del Congreso y a quienes nos han seguido desde temprano y que son interesados.

Toda esta versión, estará en el micrositio de la Comisión de Gobernación.

Muchísimas gracias.

Fin de la versión estenográfica

Es importante destacar que en la reunión de Comisiones Unidas celebrada el día 13 del mes de diciembre del año 2017, los integrantes de las comisiones Unidas, votaron en lo general por mayoría a favor del presente dictamen, quedando la discusión en lo particular en el Pleno del Senado de la República.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

ARTÍCULO ÚNICO. – Se expide la Ley de Seguridad Interior para quedar como sigue:

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia.

Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional.

Artículo 2. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.

Artículo 3. En el ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acciones de seguridad interior: aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con

los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior;

II. Amenazas a la Seguridad Interior: Las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional;

III. Riesgo a la Seguridad Interior: situación que potencialmente puede convertirse en una Amenaza a la Seguridad Interior;

IV. Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: el mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior;

V. Fuerzas Armadas: El Ejército, Armada y Fuerza Área;

VI. Fuerzas Federales: Las instituciones policiales federales;

VII. Inteligencia para la Seguridad Interior: el conjunto de conocimientos obtenidos a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad interior;

VIII. Seguridad Interior: lo previsto en el artículo 2 de la presente Ley;

IX. Seguridad Nacional: lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional, y

X. Uso legítimo de la fuerza: la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las

Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

Artículo 5. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia.

Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional.

Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas.

Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE PROTECCIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas:

I. Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo **1** de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables.

Artículo 12. En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional,

determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.

Artículo 13. Las peticiones de las Legislaturas de las entidades federativas o de su respectivo Ejecutivo deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior, especificando entre otros, los aspectos siguientes:

I. Amenaza identificada y el impacto de la misma;

II. Área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas;

III. Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza identificada en la entidad federativa o área geográfica afectada;

IV. Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza identificada;

V. El compromiso de contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de reestablecer la colaboración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que establezca la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y

VI. La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y para la toma de decisiones correspondientes.

Artículo 14. El Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener lo siguiente:

I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán;

II. La amenaza a la Seguridad Interior que se atenderá;

III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las Acciones de Seguridad Interior;

IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la Amenaza a la Seguridad Interior;

V. Las Fuerzas Federales participantes;

VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley;

VII. Las Acciones de Seguridad Interior que se llevarán a cabo, y

VIII. La temporalidad de la Declaratoria.

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá determinar la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica.

Artículo 15. La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo.

Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones de Seguridad Interior. Las modificaciones y prórrogas deberán notificarse y publicarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la presente Ley.

Artículo 16. En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Lo anterior, sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES

Artículo 17. A partir de la expedición de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento, se considerarán como Acciones de Seguridad Interior.

Artículo 18. En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las autoridades federales conforme a lo previsto en la presente Ley, tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.

Artículo 19. La Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 20. Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate, conforme al procedimiento siguiente:

I. El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en términos del artículo 21;

II. El Comandante designado en términos de la fracción anterior elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes;

III. El protocolo contemplará la integración de grupos interinstitucionales, a fin de que cada uno lleve a cabo la misión que se les asigne con base en las atribuciones y responsabilidades que les correspondan, coordinadas por el Comandante, y

IV. Las Fuerzas Armadas actuarán realizando las Acciones de Seguridad Interior previstas en la Declaratoria respectiva.

Artículo 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas.

Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada.

Artículo 23. Durante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en el marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, asumirán las siguientes responsabilidades:

I. Atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que sean convocadas;

II. Aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea solicitada o con que cuenten, que permita cumplir los fines de la Declaratoria;

III. Prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora para atender la Amenaza a la Seguridad Interior;

IV. Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior y superarla;

V. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la Ley de la materia;

VI. Presentar los informes periódicos ante la autoridad federal coordinadora sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe en el marco de la Declaratoria;

VII. Las que se establezcan conforme a la fracción IV del artículo 14 de esta Ley; y

VIII. En el caso de las entidades federativas, las que haya comprometido en los términos de la fracción V del artículo 13 de esta Ley.

Artículo 24. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, destinará Fuerzas Federales para que realicen Acciones de Seguridad Interior, en aquellas áreas o zonas del territorio nacional que así lo requieran.

Artículo 25. Tratándose de fenómenos naturales perturbadores, la intervención de las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, se sujetará a lo previsto en la Ley General de Protección Civil y, en su caso, a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías Generales de Comunicación e Instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.

Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.

Artículo 27. Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.

Artículo 28. Las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior con su organización, medios y adiestramiento, sin descuidar el fortalecimiento de sus capacidades.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 29. Las Acciones de Seguridad Interior se apoyarán en los órganos, unidades y procesos de inteligencia previstos en las leyes respectivas.

Artículo 30. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley.

En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, la colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto se establezcan.

CAPÍTULO QUINTO
DEL CONTROL DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 32. El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 33. El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la Comisión Bicamaral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de control previstas en dicha ley.

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 34. El incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y en la Declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; y en su caso con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados.

Asimismo, las Entidades Federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Cuarto. Si a la entrada en vigor de la presente Ley existen situaciones en las que se surten las hipótesis contenidas en el artículo 11, se aplicará el procedimiento ahí previsto, sin perjuicio de que en tanto se materializa el mismo, las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas, continúen realizando las acciones que estén llevando a cabo para atenderlas. Las que no requieran Declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen.

14-12-2017
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad Interior.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 75 votos en pro, 44 en contra y 3 abstenciones.
Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Gaceta Parlamentaria 13 de diciembre de 2017.
Discusión y votación 14 de diciembre de 2017.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DEFENSA NACIONAL, DE MARINA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Versiones Estenográficas

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Antes de proceder a consultarle a la Asamblea, Presidente, le pido si nos autoriza que el Senador Daniel Ávila, también forme parte de la votación anterior, porque no le funcionó el sistema y quedaría un voto más a favor, entonces de esa ley.

Entonces procederemos ahora a consultar a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo de manera muy clara levantando su mano para proceder.

(La Asamblea asiente)

Muy bien, quienes estén en contra de que se omita la lectura del dictamen, también manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

De manera evidente, Presidente, se permite que se omita la lectura de este dictamen.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Les informo que la Senadora Angélica de la Peña Gómez entregó una solicitud de moción suspensiva que desahogaremos una vez que transcurra la presentación del dictamen por parte de las comisiones.

Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña, por favor.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) La intención de esta moción en términos del 105 del Reglamento, que establece que la moción suspensiva de un debate en el Pleno, tiene por objeto que no se inicie o que se interrumpa, a efecto de que el asunto de que se trata sea revisado o devuelto a comisiones.

Señor Presidente, de tal manera que estamos planteando, solicitando la moción suspensiva justo antes de que usted proceda con lo que está refiriendo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sí, Senadora, precisamente atendiendo a su solicitud, su moción suspensiva se va a desahogar antes de que inicie el debate, permítanos presentar el dictamen por parte de las comisiones y antes de que inicie el debate procederemos a desahogar su moción suspensiva.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Es de procedimiento.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Por eso, lo vamos a hacer antes del debate.

Gracias.

Antes de iniciar con las intervenciones que genera el dictamen a discusión, les informo que la Mesa Directiva ya tiene un registro abundante de Senadores para participar en las diferentes etapas, por lo que a fin de asegurar que todos obtengan la atención del Pleno para sus respectivas exposiciones, le solicito a las señoras y señores Senadores que participarán en el debate, se ajusten al tiempo reglamentario correspondiente.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, hasta por diez minutos.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente.

Senadores, el dictamen que hoy se somete a su consideración, en primer lugar tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Como sabemos, durante la última década, nuestro país ha atravesado por una crisis de seguridad que rebasa el umbral de la seguridad pública y que está poniendo en riesgo la seguridad interior.

Por ello, debemos contar con una ley que legitime y dé certidumbre a las acciones relativas a la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles en materia de seguridad interior.

Es importante, Senadores, señalar que con la presente ley no se pretende que las Fuerzas Armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente, falso el dicho quien lo dice.

Y mucho menos es intención del gobierno de la República, militarizar al país como algunos aseguran.

Se establece, a la seguridad interior, dentro del marco constitucional y de convencionalidad como referentes fundamentales para la vigencia de los derechos humanos.

El mayor interés de todos, es salvaguardar los derechos humanos y las garantías.

Debemos decir que su aplicación se deben observar principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y a sus garantías, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación, racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, estrictamente, señalo, se trata de regular su actuación y debida intervención a través de la coordinación y bajo el mando de la autoridad civil del gobierno de la República y no de manera autónoma y sin mecanismos de control.

Actualmente nuestras Fuerzas Armadas no tienen un marco legal para estar en las calles.

Y hay que decirlo fuerte, hay que dejarlo claro, no existe mayor medio de control que el estricto apego a la legalidad y al Estado de derecho.

En este Senado hemos atendido y escuchado las voces de quienes han expresado su preocupación e incluso su inconformidad con la ley.

Recibimos en diversas reuniones, no solamente en las últimas horas, lo hicimos en enero del 2017, en enero de este año, hemos recibido a funcionarios a organismos internacionales, a gobernadores, a presidentes municipales, académicos, representantes de la sociedad civil, y no es correcto acusar y no es justo decir que sólo fue una simulación y que no escuchamos a quienes consideran que la ley es contraria a los derechos humanos.

Los derechos humanos y sus garantías están en la raíz de la Constitución y estamos proponiendo modificaciones fundamentales para que la ley sea plenamente constitucional y convencional con los tratados internacionales.

Somos conscientes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en esta se reconoce la existencia de la facultad y obligación del Estado a garantizar su seguridad y mantener el orden público siempre que se apliquen procedimientos conforme a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales de todos los individuos bajo la jurisdicción estatal.

El Tribunal Interamericano ha determinado en ese sentido que el poder estatal en materia de mantenimiento de la seguridad y del orden público no es ilimitado, pues está condicionado por el respeto de los derechos humanos.

Y si bien la Corte Interamericana ha determinado que en algunas circunstancias la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública seguramente implica, sin duda lo señala, la posibilidad de riesgo en la materia.

Por ello, los estados deben ser cuidadosos al utilizar la Fuerzas Armadas como elemento de control de los disturbios internos, la violencia interna, situaciones excepcionales y la criminalidad común.

Por eso, debo de reconocer que durante más de una década se ha hecho uso responsable de la intervención de las Fuerzas Armadas, lo otro es un falso debate.

Y advierto que es difícil concluir que el empleo de las Fuerzas Armadas para la realización de tareas de seguridad pública constituye en sí mismo una violación a los derechos humanos como pretenden hacernos ver, eso es falso.

Se nos ha dicho también que esta ley es una puerta abierta y sin controles para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia que no le corresponde.

¿Cómo hemos respondido ante ello?

Estableciendo en esta ley que estamos discutiendo límites geográficos y temporales al procedimiento para la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, lo previsto en los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la ley, se apega estrictamente a los estándares internacionales de derechos humanos, que no les quepa la menor duda.

Y particularmente el artículo 13 establece los requisitos mínimos con los que se debe contar las peticiones de las legislaturas, de las entidades federativas o el titular del Ejecutivo cuando aquellas estén en receso y las cuales incluyan el área geográfica específica.

El 14 estipula que el acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior debe incluir las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las acciones de seguridad interior así, y lo subrayo, como la temporalidad de la declaratoria.

El 15 menciona expresamente que la vigencia de la intervención federal no podrá exceder de un año y únicamente será prorrogable mientras subsista la amenaza a la seguridad interior y siempre que medie una justificación que cumpla con los mismos requisitos que establece el artículo 12, es decir, contar con la consideración, primero, del Consejo de Seguridad Nacional y notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación en periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas.

La declaratoria es un acto jurídico concreto que puede ser controvertido constitucionalmente, tiene controles esta declaratoria.

Y el artículo 16 faculta al Presidente de la República a ordenar acciones inmediatas en los casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro; sin embargo, la sujeta a la emisión posterior de una declaratoria de protección a la seguridad interior en el menor plazo posible.

Cabe destacar que lo que está previsto en la fracción V del artículo 13, la solicitud de intervención de las autoridades federales debe ir acompañada del compromiso de las entidades federativas de atender la amenaza, restablecer la colaboración con la Federación de acuerdo con el artículo 1° de la Ley de Seguridad Nacional.

Lo comento todo esto porque da la impresión que muchos Senadores o muchas personas nada más leemos un artículo y lo vemos aislado y no lo ponemos en el contexto primero del marco constitucional y de otros ordenamientos jurídicos y, entonces, andamos diciendo o estamos señalando que estamos poniendo en riesgo no solamente a la sociedad con la militarización, sino que también estamos poniendo en riesgo los derechos humanos.

Y quiero destacar que la declaratoria de protección a la seguridad interior únicamente procede en dos supuestos específicos.

Primero. Cuando se superen las capacidades de las autoridades competentes.

Segundo. Exista falta insuficiencia de la participación de las entidades federativas y municipio.

Por lo anterior, me permito concluir que el propósito de la Ley de Seguridad Interior no es convertir la intervención de las autoridades federales en las acciones de seguridad interior en acciones permanentes, por el contrario, su propósito es sentar las bases, procedimientos, modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la preservación de la seguridad interior.

Por último, está la necesidad señalada y reiterada de fortalecer a los cuerpos policiales con la finalidad primordial que retomen la legitimidad y el control de la seguridad como fuerza civil, previstas en las fracciones IV, V y VI del artículo 23, así como el Quinto Transitorio.

Los convoco a que todos leamos estos artículos, y lo digo con mucho respeto, pero, sobre todo, el Artículo Quinto Transitorio, nos va a dejar muy claro qué queremos para México.

Esto significa que las entidades federativas que soliciten la declaratoria deberán presentar un programa, primero, con plazos; dos, con acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad.

Segundo, incluir los objetivos respecto al estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

Tercero, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública va a emitir un dictamen de cumplimiento.

En el grupo parlamentario del PRI reconocemos que las acciones realizadas actualmente por el Ejército y la Marina Armada de México, en apoyo a las autoridades civiles, tienen como fin principal lograr un México en paz

y en donde se garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos y el desarrollo democrático, así como el desarrollo de cada comunidad, de cada entidad federativa mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.

Concluyo.

Senadores, queda claro, no se militarizan las calles, al contrario, se pone orden.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Cristina Díaz.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Fernando Torres Graciano, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por diez minutos.

Y reitero mi súplica, de que se ajusten al tiempo programado, por favor.

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, Presidente.

Venimos a nombre de la Comisión de la Defensa Nacional, a presentar este dictamen que fue trabajado todavía el día de ayer con la Comisión de Gobernación; de Marina; y de Estudios Legislativos.

Aprovecho para hacer un reconocimiento a los Presidentes de estas comisiones, al Senador Benjamín Robles, al Senador Ricardo Barroso, por supuesto a la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación, por el trabajo que se llevó, la coordinación para poder sacar de manera institucional y cuidando el proceso de dictaminación.

He de mencionar que este dictamen que estamos hoy poniendo a consideración es resultado de un proceso que realmente permitió la discusión y escuchar las voces que estaban a favor o en contra, o incluso aquellas que tenían dudas.

No es proceso de fast track, como se dijo, es una dictaminación que se llevó, además de la comisión, en función de muchas mesas que se realizaron.

El 6 de diciembre se atendió a las Comisiones Unidas, en las Comisiones Unidas a organizaciones de la sociedad civil, a funcionarios provenientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, también se atendió los comentarios del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la propia Secretaría de Defensa Nacional.

El 7 de diciembre, en otra reunión, se atendieron las inquietudes y comentarios del Comisionado Presidente del INAI, el doctor Francisco Javier Acuña, quien planteó algunas de las inquietudes que tenían en relación al artículo 9 del proyecto de dictamen que llegó de Cámara de Diputados.

El 11 de diciembre, nuevamente, se hicieron mesas de trabajo donde se atendieron los comentarios de los gobernadores de diferentes estados, también alcaldes, así como a diversas organizaciones de la sociedad civil organizada que vinieron a presentar también, insisto, comentarios a favor, en contra, dudas, respecto a la minuta que estábamos en análisis.

Ayer tuvimos un amplio debate en el seno de las comisiones, estuvimos cerca de, casi nueve horas, desde que iniciamos por la mañana, con diferentes inquietudes que tuvimos la oportunidad de hacer, llegar comentarios, propuestas, a efecto de poder modificar, aclarar o mejorar la redacción de la minuta que nos llegó de Cámara de Diputados.

Un amplio debate que se dio por parte de los Senadores que integran las comisiones y me parece, entonces, que no se puede decir que esta ley no se discutió, no se debatió y no se conoció.

Después de este debate se hicieron diferentes modificaciones a esta minuta, haré referencia a algunas de ellas.

El artículo 8, que era uno de los artículos que ha causado, pues mucha inquietud, crítica, se hizo una modificación para que quede muy claro que la protesta social no será considerada, bajo ninguna circunstancia, un tema de amenaza a la seguridad interior.

En consecuencia, por ningún motivo se podrá hacer uso de fuerzas federales o de las Fuerzas Armadas para contener una protesta social o de carácter político electoral.

Había una inquietud porque decía la minuta original "que siempre y cuando fueran pacíficamente". Se ha eliminado esta disposición o esta palabra, a efecto de dejarlo de manera absoluta de que no hay interpretación, jamás podrá ser objeto de protesta social, perdón, de Seguridad Interior una protesta social.

Del mismo modo, se modificó el artículo 10 para precisar que la aplicación supletoria de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General de Seguridad Nacional y Seguridad Pública se harán en el ámbito de sus respectivas competencias, a efecto de dar mayor claridad al texto que venía original porque se daba una discusión respecto a que se podía interpretar cuando entraba en vigor una ley u otra, y que podría darse una discusión ahí de supletoriedad y por eso creemos que con esta redacción quedará mejor.

También en el artículo 16 se hicieron modificaciones para que cuando el Ejecutivo Federal lleve acciones inmediatas en los casos de amenaza a la seguridad interior, que representen un grave peligro a la integridad de las personas, la Secretaría de Gobernación, cuando lleguen fuerzas federales o Fuerzas Armadas a un estado la Secretaría de Gobernación tenga la obligación de notificarle a los gobiernos de las entidades.

Si bien es una disposición constitucional, una facultad constitucional y exclusiva del Presidente de hacer uso de las Fuerzas Armadas para atender temas de contingencia o graves, aquí lo que estamos buscando es que ese Ejecutivo estatal, que una vez que se dé la orden para que puedan llegar fuerzas federales o Fuerzas Armadas, tenga un acto jurídico que le permita controvertir esa decisión del Ejecutivo Federal, y esto es un control final del camino porque abre la puerta a que un estado, un Ejecutivo Federal pudiera presentar la controversia.

Esto creo que sí es un control constitucional que limita esa facultad exclusiva del Presidente, una facultad que tiene en la Constitución, y que no es nueva por cierto, la ha tenido siempre en nuestra Constitución.

También se modificó el artículo 22 para establecer "que cuando la amenaza no requiera de la intervención de las Fuerzas Armadas", porque, insistimos, esta ley no es para las Fuerzas Armadas, también permite la intervención para un acto de seguridad interior a las fuerzas federales, y cuando se el caso quede claro que será una autoridad civil la que estará al frente de esta intervención.

También se agrega, como lo comentaba hace unos momentos la Senadora Cristina Díaz, un artículo transitorio que es fundamental, quiero insistir en él. Establece la posibilidad de que, dentro de 180 días siguientes a la entrada en vigor de la ley, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales puedan, que soliciten una declaratoria de protección y que para poder solicitarla puedan y deban presentar un programa, como ya se dijo aquí, con plazos, acciones, presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función judicial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública

Esto no es otra cosa más que dar respuesta a una inquietud que se manifestó también en estas mesas de análisis, que se decía que vamos a permanecer o vamos a legalizar lo que ha pasado en algunos estados y municipios, que cuando llegaban las fuerzas federales o las Fuerzas Armadas ese municipio, ese estado dejaba de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad pública, dejaba de poner presupuesto para fortalecer a sus órganos de seguridad pública civil, y que entonces, pues eran lo mismo en el cumplimiento de sus obligaciones.

Este transitorio está permitiendo y obligando que estos estados, que estos municipios que soliciten la intervención, al mismo tiempo se comprometan a cumplir con el modelo de seguridad pública y el modelo policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad.

Y se comprometen a cumplirlo ya ponerle tiempos y un programa y presupuesto, creo que este artículo que fue propuesta, por cierto, del Senador Roberto Gil, y que fue aceptado, nos parece que es un gran avance respecto a la minuta que llegó por parte de Cámara de Diputados.

Ya aquí se ha comentado parte de los requisitos que deberá tener esta declaratoria, que cuando el presidente la emita, la tendrá que fundamentar, motivar, establecer cuáles son las causas que motivan o generan esa amenaza a la seguridad interior, la obligación de publicarla en el periódico oficial, la obligación de rendirle un informe a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para que pueda ser realmente esta comisión un control legislativo al ejercicio de esta facultad, que, por cierto, lo comento, en lo personal, estaremos realizando las funciones que tiene hoy en ley esta Comisión Bicamaral y, si es necesario, ampliarlas.

Hagámoslo, habremos representar en lo personal una iniciativa para modificar las funciones y que realmente esta Comisión Bicamaral pueda ejercer a plenitud ese control legislativo en el ámbito de sus competencias en función de esta declaratoria cuando sea el caso.

La otra discusión que se ha dado alrededor de este dictamen ha sido el tema de la temporalidad, sin duda que siempre es mejorable las relaciones, pero me parece que el tema de la temporalidad viene claro en cuanto a que es un año.

La discusión está en que si esa causa que motivó la llegada o la declaratoria no ha sido resuelta pueda permanecer y se pueda prorrogar, y había quien decía, pues entonces, se quedará eternamente ahí la causa.

No es así como, y se comentó también aquí, hay que leerlo de manera integral porque también en este dictamen se establece que se deberá de motivar y justificar la permanencia de la causa que originó la declaratoria, no se una prórroga discrecional, es una prórroga con controles.

Finalmente, mucho se ha dicho también del tema de la participación de las Fuerzas Armadas en la calle.

Pareciera que desconocemos la realidad de lo que ha sido la presencia, la actuación, las facultades de las Fuerzas Armadas en otras tareas, además de las tareas que creemos, a veces equivocadamente son solamente la de preservar el territorio nacional frente a una amenaza exterior, y hay muchas tareas.

Yo recomiendo leer un artículo que publicó el Senador Roberto Gil, el día de ayer, en el periódico El Financiero, donde muy claramente nos dice, qué otras tareas tienen las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista administrativo, de la seguridad que tienen en nuestras costas, y de cómo se fueron incorporando también ya desde hace muchos años, facultades a las Fuerzas Armadas, pero también al mismo tiempo cómo se incorporó el tema de la delincuencia organizada como un tema de seguridad nacional y que en ese momento que se hizo esa incorporación se le dieron facultades a las Fuerzas Armadas en el tema de combate a la delincuencia organizada.

Creo que es muy ilustrativo, ya dará él, seguramente aquí, una explicación más amplia del tema.

Reconozcamos que hay una presencia, hoy en día, de las Fuerzas Armadas, según el informe de la Sedena del año 2016, se encontraban activas 142 bases de operaciones mixtas en el territorio nacional.

Había, según este informe, tres mil 386 militares, vehículos militares y despliegues de las Fuerzas Armadas en diferentes estados.

Y esto ha sido reconocido, buscado y además solicitado por muchos de los estados. Hoy en día, también está la presencia de otros cuerpos como son la Policía Militar, en Guanajuato, estado al que yo pertenezco. Hoy se está construyendo una brigada, las instalaciones de una brigada de Policía Militar a petición del estado, de los municipios, municipios que incluso se peleaban la sede de esta brigada, y que incluso participaron con presupuesto para poder tener ahí el apoyo de esta Policía Militar.

Creo que lo que estamos haciendo con esta ley, no es una ley a las Fuerzas Armadas, es una ley que establece procedimientos, tiempos, requisitos para regular la declaratoria, y en consecuencia la participación de fuerzas federales o Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, una facultad que tienen desde hace muchos años en la propia ley que regula al Ejército, y en otras leyes como es la de Seguridad Nacional.

Estas son las consideraciones que venimos a poner a su consideración a nombre de la Comisión de Defensa Nacional, y en lo personal, habremos de dar otras discusiones con otras reservas, ya como simplemente Senador y miembro de esta Asamblea.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Presidente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Barroso Agramont, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Marina, hasta por diez minutos.

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez (Desde su escaño): Yo quiero que usted observe que los presidentes de comisión que están posicionando el tema, han excedido del tiempo para su intervención, y esto quiere decir que es un tema complicado, un tema extenso, y que considere esto al momento de que se haga uso de la tribuna. Porque los argumentos nunca van a ser suficientes para poder hablar en la perspectiva que tenemos ahí, y se requiere de tiempo, que eso es lo que ustedes no quieren dar.

Quiero hacer esa observación solamente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Pedraza.

Señor Senador Barroso, adelante.

El Senador Ricardo Barroso Agramont: Con permiso de la mesa, muy buenas tardes tengan todos ustedes.

Compañeros, efectivamente, como Presidente de la Comisión de Marina vengo a fijar nuestro posicionamiento como de este dictamen, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los miembros de nuestra comisión, de las Comisiones Unidas de quienes participaron en los distintos foros, sociedad civil, Fuerzas Armadas, grupos organizados, Senadores, presidentes municipales y gobernadores de las diferentes entidades federativas que nos acompañaron para construir este dictamen.

Con el único fin de hacer un México más justo, más fuerte y una protección a nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales desde esta tribuna les mando un gran reconocimiento tanto a la Marina como al Ejército.

Con su permiso, compañeras y compañeros.

Durante la última década nuestras Fuerzas Armadas se han enfrentado al enorme desafío de auxiliar a las autoridades civiles en tareas de seguridad interior.

Con su labor han contribuido a preservar el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática, lo que ha permitido garantizar viabilidad y continuidad a las instituciones del Estado mexicano.

Sin embargo, compañeros, su participación se ha dado sin contar con un marco jurídico que delimita sus funciones, la temporalidad y su espacio de actuación.

Así como el procedimiento y supuestos que se requieren para que las Fuerzas Armadas intervengan en labores de seguridad interior.

En ello radica la importancia y trascendencia de la ley que hoy estamos discutiendo de seguridad interior.

Que hoy se somete a nuestra consideración, no sólo porque brinda certidumbre jurídica las Fuerzas Armadas, en el desempeño de sus tareas de seguridad interior, sino también porque busca garantizar que la actuación

de ésta se dé con total apego al respeto de los derechos humanos de conformidad por lo establecido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en la materia.

La intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad se da mediante la declaratoria de protección a la seguridad interior que emitirá el Jefe del Ejecutivo, ya sea por decisión propia o a petición de las legislaturas locales o los gobernadores, cuando estas últimas no se encuentren reunidas.

Cabe resaltar que dicha atribución del Ejecutivo estará sometida a controles instituciones que garanticen los pesos y contrapesos que deben de prevalecer en los estados democráticos.

La declaratoria tendrá que ser notificada, tanto a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La ley establece una temporalidad para el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo cual no podrá ser mayor a un año y sólo se prorrogará dicho período cuando persista la amenaza de seguridad interior que motivó esta declaratoria.

Además, compañeros, establece de manera contundente las acciones de seguridad que lleven a cabo las Fuerzas Armadas.

Bajo ningún caso tienen como objeto sustituir la obligación de las autoridades de otros órganos de gobierno en el cumplimiento de responsabilidades en materia de seguridad pública.

Compañeras y compañeros:

Esta legislación responde a los cambios globales vertiginosos que obligan a los estados a contar con mejores mecanismos para garantizar la seguridad de nuestro país.

Nosotros los legisladores consideramos que resulta impostergable contar con una legislación que dé certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en sus tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz en el interior del territorio nacional.

No podemos aplazar más la regulación de una situación de excepción que ha persistido en nuestro país por más de diez años.

Con la aprobación que estemos dando, estamos dando un importante paso para saldar la cuenta pendiente con nuestras Fuerzas Armadas, y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Es cuanto, compañeros.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Señor Senador.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Quisiera, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Que también el Pleno pudiese conocer la parte que no dice el dictamen y que así suele suceder.

Los dictámenes que a veces leemos aquí no dicen todo lo que sucedió, y a mí me parece muy importante.

En la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, por ejemplo, el voto estuvo dividido. Hubo dos Senadores que votamos en contra de la presentación de este dictamen.

Pero también en las otras comisiones codictaminadoras sucedió lo mismo. Y a mí me parece que la presentación, en este momento, también debe incluir para conocimiento de todas y de todos ustedes, lo que ahí se dijo, que no quede solamente en el tema de los integrantes.

Y a mí me parece muy oportuno, porque aquí se han hecho expresiones en la presentación del dictamen, que merecen de entrada una respuesta, porque la Senadora Cristina Díaz, señalando, inclusive, con el dedo flamígero, decía, acusándome de que esto no era simulación, cuando yo he dicho que ha sido una simulación, lo dije en comisiones y hoy lo vuelvo a reiterar.

Y lo reitero, porque, miren, aquí tenemos otra vez en nuestras manos una nota que viene desde Ginebra, donde otra vez, expertos, expertas de la ONU, como también lo han hecho los representantes en materia de derechos humanos, eso no viene el dictamen, por eso es importante que ustedes lo conozcan, han expresado el rechazo, y le han pedido a este Senado de la República no aprobar en sus términos el dictamen que hoy estamos arrancando en el debate.

¿Por qué? Porque como no se dice aquí, se dice lo contrario, pisotea los derechos humanos, es un riesgo y, por supuesto, implica que el riesgo de militarizar el país está muy claro.

“Seguridad sin Guerra”, nos plantean desde las calles, Senadoras y Senadores, y por eso yo le digo a la Senadora Cristina Díaz que, a quienes hay que meter al orden es a los que han permitido la corrupción, es a los que se han beneficiado con el trabajo de bandas criminales, es a quienes forman parte, en buena medida, de la actual administración que está por concluir.

¿Qué se dijo, y que no se refiere en el dictamen, y que me parece muy importante?

Senador Presidente, compañeras y compañeros, que conozcan para valorar de una manera más clara este dictamen.

Se dijo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto y también esta Legislatura están a punto de pasar a la historia como los que regresaron el militarismo a nuestro país, como los que convirtieron al estado de excepción en la cotidianidad de nuestro país.

Y reitero, lo que dije ayer en la reunión de comisiones, y esta vez con un mayor convencimiento. Este Senado de la República estaría a punto de aprobar uno de los más graves retrocesos para el Estado de derecho y los derechos humanos en México de la postrevolución, y lo hace ignorando miles, miles de voces provenientes de la sociedad que permanentemente han advertido sobre los graves riesgos de esta ley.

El día de ayer, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones de Derechos Humanos de varios estados, como la Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, por mencionar sólo algunas, se pronunciaron públicamente porque no se aprobara esta ley y se abriera un proceso de diálogo público y abierto, un debate nacional que se estuvo planteando.

Miren, esta minuta, hoy convertida en dictamen, prácticamente sin cambiarle nada, llegó aquí a esta sesión de Pleno, llegó el 5 de diciembre. Y hoy, en diez días, si eso no se llama legislar sobre las rodillas, entonces, no sé lo que significa, en diez días, un tema tan candente, tan discutido a nivel nacional, y a nivel internacional, pretendemos darle ya el carpetazo.

Y nosotros decimos que eso es peligroso, lo dijimos varios Senadores que intervenimos en las comisiones el día de ayer, porque sostenemos que se trata, ni más ni menos, cuando hablamos de quienes ayer se hicieron escuchar con declaraciones en distintos puntos del país y del mundo, de organismos defensores de los derechos humanos, insisto, de México y de todo el planeta.

Y yo preguntaría. ¿Qué más razones quieren, entonces, Senadoras y Senadores, para no aprobar esta ley, que la advertencia de quienes defienden día a día los derechos humanos en este país?

¿Qué más razones quieren que la advertencia de los organismos internacionales que día a día los defienden a nivel internacional, como la ONU, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, entre otras?

Y les pregunto y esperaría una respuesta clara y directa cuando entremos al debate.

¿Cuánto vale para ustedes, Senadoras y Senadores del PRI y los aliados que hoy quieren seguir con este proceso y votar, la palabra de todos estos organismos?

¿Cuánto vale para ustedes la palabra de estos organismos internacionales?

Por lo visto nada, y aquí seguirá, como ya lo escuchamos, que ha habido foros, que hubo audiencias, que hubo consultas desde hace más de un año, inclusive han llegado a expresar y además de las audiencias llevadas del lunes pasado, con eso quieren decir que atendieron el llamado de Peña Nieto hace unos días cuando le advirtieron en un evento que todos recordamos, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el galardonado que esta ley no debe aprobarse.

Por eso nosotros insistimos, ya lo hemos dicho, las audiencias de esta semana, las audiencias de la semana pasada fueron realizadas, pero a modo para que los representantes de las Fuerzas Armadas tomara la palabra en último lugar sin la posibilidad de que nadie le refutara sus dichos.

¿Qué clase de debate público es ese, en donde no hay una verdadera confrontación de ideas?

Y las que se hayan realizado antes, compañeras y compañeros, hace casi un año, como algunos han expresado no versaron sobre este proyecto específico que estamos discutiendo, que no se diga entonces que se ha escuchado en la sociedad para la aprobación de este proyecto, porque decía el Senador Gil y yo creo que con razón que las Fuerzas Armadas se les ha asignado tareas permanentes más allá de las que deberían ser sus funciones ordinarias.

Tareas que les hemos dados desde las propias leyes, es cierto, pero eso no significa que sea correcto que tengan esa responsabilidades, el gran problema es que el Estado mexicano no ha avanzado en la construcción de instituciones civiles que cumplan con esas funciones y permitan que las Fuerzas Armadas se concentren exclusivamente en las labores que sí le corresponden acorde a su naturaleza castrense, y en lugar de eso, el Estado mexicano, incluyendo al Congreso de la Unión ha preferido comodinamente asignarle a las Fuerzas Armadas cada vez más atribuciones en ámbitos que nada tienen que ver con su función ordinaria.

Muchos Senadores que estuvimos debatiendo en esta sesión de Comisiones Unidas, insisto, lo sostengo para que ustedes lo sepan, reiteramos que con esta Ley de Seguridad Interior, el Estado mexicano vuelve a caer en esa tendencia comodina de darle más facultades a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que no le corresponden, todo lo quieren resolver con el Ejército y ha seguido reflexionando sobre el contenido de esta ley.

Lo hemos hecho varios Senadores y no puedo compartir entonces la postura de varios Senadores, como el Senador Roberto Gil, en el sentido de que provocará que no se use a los militares de una manera indiscriminada, no, por el contrario, estoy convencido, y así lo expresamos varios Senadores en este debate de comisiones codictaminadoras, versión que no aparece en el documento que se les ha hecho llegar, nosotros sostenemos lo contrario, estamos convencidos de que esta ley potenciará el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas, porque aunque la declaratoria de protección a la seguridad interior, tiene vigencia de un año, el Presidente de la República la podría prorrogar todas las veces que se le ocurra.

Y es más, tal vez, tal vez no lo hayan advertido, compañeras y compañeros, pero los militares ni siquiera necesitarán una declaratoria de protección a la seguridad interior, porque los artículos 6 y 26, así lo dijimos en esta reunión de comisiones unidas, expresamente establecen que podrán atender riesgos, riesgos a la seguridad interior sin la necesidad de declaratoria, pero para actuar en caso de amenazas a la seguridad interior, se los apuntamos, tampoco necesitarán declaratoria, porque el artículo 4 fracción III dice que las amenazas a la seguridad interior son las mismas que señala la Ley de Seguridad Nacional y esa ley, compañeras y compañeros no establece que las Fuerzas Armadas requieran declaratoria para atender amenazas de seguridad nacional.

Quiero decirles también que ayer, en esta reunión de comisiones, decía el Senador Preciado, que México ya está militarizado, y seguramente muchos estarán de acuerdo con él, y entonces yo pregunto, por qué entonces, Senadoras y Senadores, no avanzamos en la ruta de desmilitarizar al país y construir instituciones civiles que garanticen la seguridad que exigen los mexicanos, pero no, en lugar de eso, el Congreso está por brindar un marco jurídico que podría permitirle, que le permitiría al Ejército continuar permanentemente realizando labores policiales.

No se engañen, compañeras y compañeros, esta ley no va a provocar que las entidades depuren y fortalezcan sus instituciones policiales.

Esta obligación, y lo dije ayer en la reunión de comisiones, y eso no aparece en el dictamen, se las impuso la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde el 2009 y no la cumplieron, dos veces, recuerden, Senadores, dos veces, dos, tuvimos que reformar el transitorio de esa ley para ampliarles el paso porque lo incumplieron.

Concluyo, Senador Presidente.

Quiero lanzar, y espero que en el debate se pueda responder, quiero lanzar un cuestionamiento directo al PRI y al PAN, esta ley obliga a las autoridades civiles de las entidades a rendirle cuentas al militar que sea designado como coordinador de los avances del fortalecimiento de sus capacidades institucionales. Esto está en la fracción VI del artículo 23.

Muchas entidades más afectadas por el narcotráfico, sabemos que son gobernadas por ustedes, gobiernos del PRI y del PAN.

Y les pregunto, estarán dispuestos a que la gobernadora Pavlovich o el Gobernador García Cabeza de Vaca o el gobernador Astudillo o el Gobernador Rosas Aispuro o el Gobernador Ordaz o el Gobernador Corral, que fueron electos por la voluntad popular, le deban rendir cuentas a un militar designado por el Ejecutivo Federal, un militar que además no es el Secretario de la Defensa.

Muchas y muchos de ustedes, me imagino que aspiran a ser gobernadores.

¿Estarían dispuestos a algo así?

Parte de lo que ha dicho, señor Presidente no está contenido en el dictamen y por eso solicité participar en la presentación del mismo, porque como suele suceder, los dictámenes tienen la visión parcial de quien viene todo lo positivo, pero ahora hasta hubo acusaciones respecto de lo que se dijo, por eso vale que todos conozcan, no militaricemos al país.

“Seguridad sin Guerra”.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Como se anunció al principio del trámite para la discusión del proyecto de Ley de Seguridad Interior, después de transcurridas las presentaciones por parte de las comisiones, desahogaremos la solicitud de moción suspensiva que entrega la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a fin de agotar los extremos de lo que dispone el artículo 105 del Reglamento del Senado.

Consulto si la moción suspensiva tiene el apoyo de al menos cinco Senadores.

Comprobado el requisito del artículo 105 del Reglamento, tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Señoras Senadoras, señores Senadores:

Vamos a iniciar quizás una de las discusiones más trascendentales que el Congreso de la Unión debe dar y que este Senado de la República está a punto de iniciar a menos de que se atienda la moción suspensiva que estoy presentando para que sea devuelto a las comisiones que hoy están presentando este dictamen, las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

¿Bajo qué argumentos? Y voy a ser muy breve.

Primero. He constatado, hemos constatado, a partir de las presentaciones del dictamen de cada una de las comisiones, tanto de Gobernación, como de Defensa, como de Marina, y también referida por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, de que en este proceso se tomó en consideración las propuestas, las preocupaciones, las solicitudes expresas formales de distintos organismos internacionales de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos en donde México, como Estado parte, está vinculado, y eso no es verdad.

Una cosa es que se haya recibido el oficio, que le hayamos dado lectura o que eventualmente hayan venido algunos de sus representantes a sentarse en alguna de las reuniones que se han promovido para ser escuchados, y otra cosa es que se haya entrado a debate, que se les haya respondido sus cuestionamientos, que se haya atendido sus preocupaciones, pero sobre todo se haya atendido el llamado a que esta Ley de Seguridad Interior no sea aprobada textual, eso no pasó.

Organismos internacionales de los que México forma parte, de los que México está vinculado, eso no pasó.

No simulemos, lo que aquí nos han venido a decir, además, que las organizaciones de la sociedad civil, expertos constitucionalistas que no tienen ningún motivo político, que llegan representando intereses genuinos que les preocupa como organizaciones que tienen trabajo a lo largo y ancho en el país, que conocen, valoran, tienen diagnósticos, tienen estudios, enfrentan todos los días situaciones de violaciones graves a los derechos humanos.

No estamos inventando el liderazgo que tienen estas organizaciones a lo largo y ancho del país con propuestas, con diagnósticos, con preocupaciones genuinas que aquí nos están tomando en consideración, se les oyó, pero no se les escuchó, así como entró por un oído salió por el otro, fueron maltratadas, utilizadas y, entonces, yo escucho en el dictamen que aquí acaban de presentar la Presidenta a la que le tengo mucho afecto, sin duda, ya los señores presidentes de las otras comisiones decir la verdad, una falacia, demagogia, no es verdad que eso haya acontecido.

Además, también se manifestó la preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha apoyado a esa preocupación diversas comisiones estatales de derechos humanos de prácticamente más de la mitad de los organismos de derechos humanos del país, de las entidades federativas, también evidenciando su preocupación por la aprobación de esta ley, tampoco se está tomando en consideración.

Organismos constitucionalmente autónomos, cuya materia es precisamente la preservación de los derechos humanos en este país, tampoco se les oyó.

Bueno, legisladores de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, yo entregaré en su momento incluso lo que han planteado personalidades de ministerios eclesiásticos que han dicho “no a esta Ley de Seguridad Interior”.

¿Qué hemos planteado? Y por eso argumento, argumento esta moción señalando reiteradamente ahora, a este Senado de la República, que regrese a comisiones para que se creen las condiciones de discusión de un real, verdadero, Parlamento Abierto que hoy en este proceso se ha evidenciado no existe, no vengan aquí a argumentar que hubo Parlamento Abierto, porque es mentira, es una demagogia, hoy estamos frente a la posibilidad de que ustedes impongan una Ley de Seguridad Interior, por cierto, que se va a judicializar, no le va a servir a las Fuerzas Armadas, y seguimos con el desastre de inseguridad.

Llamo a la responsabilidad, con todo afecto, llamo a la responsabilidad, con todo afecto y con todo respeto, a todas y a todos a que se apruebe esta moción suspensiva y se regrese organizadamente tomar en cuenta lo que aquí se ha señalado reiteradamente por infinidad de organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, constitucionalistas, académicos, en fin, gente preocupada por su país y organismos que están preocupados por lo que seguramente el Estado mexicano está incumpliendo y vendrán las recomendaciones.

Es todo, gracias a ustedes por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Si hay lugar para hablar a favor de la moción suspensiva que acaba de presentar la compañera.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Permítame ver si hay algún impugnador, Senador Cárdenas, de la moción, y que esto generaría un debate sobre la moción.

De no haber, queda registrado que usted apoya la moción de la Senadora De la Peña, y procederíamos a votar la moción.

¿Hay algún impugnador a la moción presentada por la Senadora De la Peña?

Siendo así, debido a que no hay quien impugne la moción, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada.

Quienes estén por la afirmativa, como siempre se acostumbra, les pedimos que lo hagan levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Se vota o no se vota.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está concedida, Senador.

Ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para votar la moción suspensiva, presentada por la Senadora De la Peña.

Un voto por la afirmativa, es un voto porque se acepte la moción suspensiva de la Senadora De la Peña.

Corrijo, un voto en afirmativo es un voto porque se acepte a discusión la moción de la Senadora Angélica de la Peña.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto.

Senadora Ivonne, ¿en qué sentido?

En contra.

¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?

De no ser así daremos cuenta de la votación.

A favor 39 votos a favor; en contra 69 y cero abstenciones.

Por lo tanto, no se admite a discusión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Desechada la moción.

Continuamos con el trámite del proyecto de decreto.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación sobre este dictamen a diversos artículos, mismas que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está publicado desde ayer en la Gaceta, si la Asamblea las acepta la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría les dé lectura.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura a las propuestas de modificación al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Propuesta de modificación.

Voy a ser muy específica en lo que se cambiaría.

Artículo 1.- La presente ley es el orden público de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sus disposiciones son materia de seguridad nacional en término de lo dispuesto por las fracciones del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad interior.

Respecto al artículo 7 se cambiaría: “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento, sin excepción, los derechos humanos y sus garantías de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes”.

Respecto al artículo número 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral, que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior.

Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta ley se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de sus competencias.

La materia de seguridad interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

Respecto al artículo número 16. Se propone que quede: “en aquellos casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas u el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”.

El Presidente de la República, de acuerdo a sus facultades, podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la administración pública federal, incluidas las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas.

Lo anterior sin perjuicio de la comunicación que realice la Secretaría de Gobernación de forma posterior a los titulares del Poder Ejecutivo respectivo de las entidades federativas y la emisión en el menor tiempo posible de la declaratoria de protección a la seguridad interior.

Respecto al artículo número 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismo participantes, a efecto de coordinar la realización de las acciones de seguridad interior, así como para el seguimiento de las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley y de las disposiciones reglamentarias de las Fuerzas Armadas.

Artículo número 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la declaratoria cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada.

Cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas el Presidente designará a la autoridad civil que corresponde a propuesta del Secretario de Gobernación.

Artículo número 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación o instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del programa de seguridad nacional y la agenda nacional de riesgos.

El artículo Quinto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de esta ley las entidades federativas municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieron realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección en términos de la misma, a efecto de solicitar la declaratoria correspondiente, deberán en el ámbito de sus atribuciones presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de la función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual incluye o incluye a los objetivos respecto al estado de fuerza mínimo requerido las condiciones de desarrollo policial, así como los protocolos, las evaluaciones y las unidades operativas de información necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

El Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en un plazo de 90 días contados a partir de que las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, acredite la presentación del programa señalado en el párrafo anterior deberá emitir el dictamen correspondiente mismo que será entregado al solicitante.

Esto firmado por supuesto por la Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el Presidente de la Comisión de Marina y también ellos tres firman este documento que son las propuestas de modificación al proyecto de decreto que se expide.

Es todo, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren al texto del dictamen las modificaciones dadas a conocer.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez (Desde su escaño): Presidente, quiero manifestarme en contra de la inclusión de estos artículos que acaba de leer la señora Secretaria.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En su voto se manifestará, Senadora De la Peña.

Continuamos con la votación económica, por favor.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Nuevamente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren al texto del dictamen las modificaciones dadas a conocer anteriormente.

Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo como es la forma acostumbrada, levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez (Desde su escaño): **Gracias**, Presidente, muy gentil.

Le pido que sea nominal, si es tan amable.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Cinco, muchachos. Listo.

Ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por tres minutos.

El voto en afirmativo es porque se acepten que se integren al dictamen las consideraciones mencionadas.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Señor Presidente, doy cuenta de la votación.

Le informo, Presidente, y también a la Asamblea que quedan 74 votos a favor; 28 votos en contra y cero abstenciones.

Entonces, por lo tanto, sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia la discusión del dictamen será con las modificaciones aprobadas por la Asamblea.

Antes de pasar a la etapa de votos particulares, les informo que están registrados los de los Senadores y Senadoras, Benjamín Robles Montoya, Alejandro Encinas y Juan Carlos Romero Hicks, Dolores Padierna Luna, Héctor Flores y Fernando Torres Graciano, Manuel Bartlett Díaz; Luis Sánchez Jiménez a nombre del grupo parlamentario del PRD, y Rabindranath Salazar Solorio.

Se presentarán en tribuna en la forma en que se enunciaron y que corresponden al orden en que los entregaron las comisiones y se recibieron ante la Mesa Directiva.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar su voto particular, hasta por diez minutos.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros:

Mal venida la época que se pretende instalar hoy en México: la época del centralismo militar y despótico.

Seamos claros, compañeras y compañeros.

La Ley de Seguridad Interior que nos proponen votar, lo que hace es, instaurar un régimen de gobierno absolutamente distinto al que señala nuestra Constitución, y que estoy seguro, aspira la inmensa mayoría del pueblo mexicano.

Su ley le despoja a la República su carácter federal, su espíritu democrático y su vocación libertaria.

Su ley nos devuelve a los tiempos más oscuros cuando un hombre, un comandante decidía a su arbitrio la vida o muerte de un ciudadano, y lo hacía sentado en una mesa de notables, de camaradas sin más freno que sus pasiones, determinando así el destino de cualquiera.

No, compañeras y compañeros Senadores, la bota militar no debe sonar inmisericorde e incesante en las calles de nuestras ciudades, atropellando los derechos y la libertad de las personas, de los niños y las mujeres; de los luchadores sociales, y aún de los periodistas y críticos de la situación imperante de nuestras poblaciones.

Bastante ha sufrido América Latina y México mismo en situaciones como esta de pleno centralismo militar.

A lo largo de su historia sí ha sucedido, como para tener que volver a darle paso por este conducto institucional a viejos fantasmas que desean instalarse otra vez en nuestra realidad, viejos fantasmas que conocemos bien. La desaparición de personas por pretendidas razones de seguridad nacional, la violación de derechos por razones confidenciales, a capricho, sí, del señor comandante o el sometimiento de la libertad de la expresión de los jóvenes por la única vía que conocen los regímenes despóticos, el miedo, la persecución y la venganza.

Y que no se malentienda, nadie puede estar en contra del Ejército o la Marina o la Fuerza Armada, ese es un falso debate.

Nadie puede dejar de agradecer los servicios que han prestado a México, principalmente en situaciones de desastres y emergencias, como las que recientemente han ocurrido en el mes de septiembre cuando su presencia fue fundamental para preservar esperanza de poblaciones enteras, incluyendo las enclavadas en el corazón de mi estado, el estado de Oaxaca.

¡No! insisto, eso no es el debate. Pero tampoco se puede olvidar que este país, que en nuestro país creemos profundamente en las instituciones civiles, en un mando civil, en una condición civil y civilizada de México.

Ya lo señalaba el general Lázaro Cárdenas en su discurso de toma de protesta como Presidente de la República: “La abnegación del Ejército, lo cito, debe estar correspondida, no solamente con la estimación de las sociedades que han encontrado en él un escudo, ni sólo con el aplauso del pueblo que tiene en él un reflejo constante de sus aspiraciones y baluarte decidido de sus conquistas, sino con el progreso positivo del orden material que eleve su bienestar y su decoro y con nuevas ideas que fortifiquen su espíritu dándole funciones sociales y disciplinas más de acuerdo a sus características de institución humana, esencialmente constituida para proteger y salvaguardar el desenvolvimiento económico, intelectual y moral del pueblo”. Y cierro la cita.

Pues, les digo, compañeras y compañeros, que a tantas décadas, creo que cualquier mexicano de bien puede seguir suscribiendo aquellas palabras de Cárdenas, y es ahí, entre otras cosas, porque todos queremos lo mejor para el Ejército y para cada uno de sus soldados e integrantes.

Queremos que ellos y sus familias vivan mejor, con garantías para sus descendientes, con salud y condiciones de tranquilidad para los suyos.

Deseamos su bienestar. ¡Sí!

Pero lo que no queremos, con todo respeto, es que el Ejército gobierne este país. Si alguien quiere claudicar en esta convicción, pues que lo diga ahora, y que lo diga con toda la claridad posible, porque, compañeras y compañeros. ¿En qué se traduce la convicción de contar con un gobierno civil y no con uno militar?

Por ejemplo, en términos llanos, es en preferir invertir en el conocimiento, en el diálogo y la educación, en permitir que las ideas y las expresiones circulen libremente por nuestro territorio antes de uniformarnos en un solo credo: en creer en la diversidad humana como fuente de dicha y no en la diversidad como una débil convicción a la cual hay que despreciar y someter a control.

La diversidad, compañeras y compañeros, ese tesoro se agota con la represión. Y si alguien piensa que exagero con estas palabras, le puede bastar con leer un par de artículos de la propuesta presentada por el PRI y sus aliados, para comprobar que ellos quieren imponer un centralismo militar a discreción de un comandante.

El artículo 6 señala, y abro la cita: “Las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo de la Ley de Seguridad Nacional”.

Es decir, en términos reales, compañeras y compañeros, las Fuerzas Armadas podrán hacerlo todo, todo, sin control institucional alguno, sin reserva alguna, sin reglamentación posible.

¿Por qué?

Les pregunto. ¿Quién define esa agenda y los riesgos ahí contenidos?

¡Sí! como muchos estarán pensando, el Consejo de Seguridad Nacional.

Y ¿Quiénes conforman ese Consejo? Pues, los empleados del Presidente.

A los mexicanos, compañeras, compañeros que pretenden aprobar esta iniciativa tan desastrosa, a los mexicanos no nos engañan, no quieran burlarse de la inteligencia del pueblo, porque esa es una de las principales características de los regímenes despóticos, como el que pretenden los Senadores del PRI y sus aliados imponerle a este país.

Someten a la gente a una eterna minoría de edad disfrazada de benevolencia, disfrazada de orden. Por todo, este día acudimos a una sesión histórica en la que hay dos posiciones encontradas:

Una, la del PRI y sus aliados que han preferido doblar las manos inexplicable y antipatrióticamente antes las exigencias de la militarización y el despotismo.

Que le está dando la espalda a la historia, y no sé si por ignorancia, descuido o convicción a sus propios descendientes, a sus propios hijos, porque sépanlo bien, la represión tarde o temprano es pareja, no distingue, no preguntará a aquel joven ¿si su padre o su madre votó este día a favor o en contra de la ley?

La represión por las armas es un mal que ha devorar sin compasión a quien menos se sospecha.

Y por otro lado, estamos quienes alertamos al país del golpe a la democracia que ellos quieren asestar.

Quienes, de ninguna manera somos impolutos o infalibles, pero al menos, compañeras y compañeros Senadores, al menos somos conscientes de que mucho ha sufrido nuestro pueblo y muchos pueblos del orbe ante la instauración de un régimen despótico, como para ahora abrirle la puerta sin antes luchar con todas nuestras fuerzas y posibilidades.

Porque sépanlo bien, no les será fácil militarizar México; tendrán que hacerle frente a algo más que un botón, a algo más que un tablero electrónico de votación; tendrán que hacerle frente a la dignidad de los ciudadanos y a su inmenso espíritu; tendrán que hacerle frente a cada hombre, a cada mujer libre; tendrán que hacerle frente a la vida.

Y no temo decirles: Que al final, como siempre vamos a derrotarlos.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Benjamín Robles.

Tiene ahora el uso de la tribuna, para presentar su voto en particular, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar el voto en contra, que hemos suscrito de manera conjunta el Senador Juan Carlos Romero Hicks y un servidor, en contra de la pretensión de aprobar esta Ley de Seguridad Interior, que sin lugar a dudas representará, además de un grave error histórico, una profunda regresión, en la muy incipiente democracia que vivimos en nuestro país.

Quiero destacar la afortunada concurrencia y coincidencia que he tenido con el Senador Romero Hicks, donde nos solamente hemos coincidido en el análisis del contenido legislativo de esta ley, sino también en la experiencia que al frente él en el caso del estado de Guerrero, yo en el de Guanajuato, yo en el caso de la Ciudad de México, hemos tenido sobre este tema al haber tenido la responsabilidad fundamental de gobernar nuestras entidades.

Pero quiero iniciar, con el ánimo de establecer con toda claridad cuál debe ser el ámbito de la discusión, porque desde el día de ayer y hoy mismo hemos visto cómo se pretende simplificar y se pretende reducir la dimensión de este debate con visiones que no corresponden al contenido, el propio dictamen a discusión.

Hay quienes quieren reducir este debate entre quienes están a favor y quienes están en contra de las Fuerzas Armadas, nada más falso que ello, más bien el debate está entre quienes consideramos que las Fuerzas Armadas deben cumplir con la ley, apegadas a las facultades y competencias quienes mandatan la Constitución, sin invadir las competencias de la autoridad civil, como es el caso de las tareas de seguridad pública, de que cuando exista una situación de excepción como es la actualidad, se analicen y se analicen labores distintas, las Fuerzas Armadas estén sujetas a controles políticos y parlamentarios que rindan cuentas y que no gocen de ninguna situación de excepción.

Por ejemplo, hasta el día de hoy, después de una década de intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública que competen estrictamente a la autoridad civil, las Fuerzas Armadas no han informado de su desempeño en las tareas realizadas hasta ahora en el combate a la delincuencia organizada. Los problemas que han enfrentado en materia de relajamiento de la disciplina militar, no han informado sobre el número de deserciones registradas, el número de elementos de las fuerzas especiales que se han incorporado a los grupos delictivos, los problemas de corrupción y penetración de las organizaciones criminales en los mandos y en las tropas de las Fuerzas Armadas, ni de las violaciones de los derechos humanos en que han incurrido algunos de estos elementos y las sanciones que se han impuesto.

¿Cuáles controles propone, por ejemplo esta ley? Ninguno, salvo la presentación de un informe del Secretario de Gobernación sobre la aplicación de la declaratoria de protección a la seguridad interior que decrete el Presidente de la República a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que siendo objetivos no es en realidad un órgano de control, pues carece de la fuerza, de las facultades y de competencias reales para considerarse un órgano de control parlamentario.

Yo he tenido la oportunidad de participar en esta Comisión Bicameral siendo Diputado y Senador, he tenido la oportunidad de presidirla, y la verdad es que salvo la discusión de la Agenda Nacional de Riesgos, todos los debates y la información que se presenta en esta Comisión Bicameral son insustanciales, más aún, la Agenda Nacional de Riesgos sale publicada en los periódicos de circulación nacional y replica errores como los cometidos en el pasado.

Hoy, dentro de la Agenda Nacional de Riesgos, más allá de los problemas de las fronteras, de la delincuencia organizada, está considerado como uno de los factores del anarquismo, como si una corriente ideológica fuera

un peligro a la seguridad nacional, así nos consideraban a los comunistas en los años 50's, en los años 60's y en los años 70's y fuimos perseguidos por nuestra forma de pensar.

No queremos que se repliquen situaciones de esta naturaleza.

Yo por eso creo que más bien el debate está entre quienes queremos que se respete a las Fuerzas Armadas y quienes quieren que les tengamos miedo, siguiendo el viejo consejo del príncipe: "Prefiero que me teman a que me amen".

Queremos respetar a las Fuerzas Armadas y que éstas cumplan sus labores constitucionales en beneficio de la población.

También es falso, quienes consideran que este debate se da entre quienes quieren resolver los problemas de inseguridad y violencia en que se encuentra sometidos la inmensa mayoría de los mexicanos y quienes no queremos hacerlo, por el contrario, estoy convencido de que todas y todos queremos recuperar la paz, la paz que nos robaron los malos gobiernos, la corrupción y la delincuencia organizada que se ha enquistado, incluso en el gobierno mismo.

Nos han dicho que qué tanto alegamos respecto a la militarización del país, aquí nos vino a decir la Presidenta de la Comisión de Gobernación, que el país no se va a militarizar, mientras que el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional nos dice que el país ya está militarizado, que el Ejército realiza operaciones en 29 estados de la República.

Por eso, tampoco ese es el debate.

La pregunta es, ¿si la militarización de las tareas de seguridad pública va a resolver los problemas de violencia y de inseguridad? Y es claro que no, no los van a resolver, porque en más de 10 años ya no pudieron resolverlo, este año va a ser el año más violento de las últimas dos décadas en México, y en los primeros cinco años de este gobierno, donde el Ejército ha estado en las calles y en las comunidades, se han cometido alrededor de 96 mil homicidios en el país, más de 3 mil homicidios de los que se cometieron en todo el sexenio anterior.

Ya se demostró que la militarización de las tareas de seguridad pública ha fracasado, como ha fracasado, sí, hay que decirlo, el Estado mexicano en su función sustantiva de garantizar la seguridad de las personas y la protección de su patrimonio.

Por eso, lo que hay que discutir no es una ley que conculque libertades, lo que hay que replantear es toda la estrategia de combate, de inseguridad y al crimen. Eso es lo que deberíamos discutir.

Sin embargo, algo debe andar mal, muy mal en este gobierno y en la mayoría de los integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados, algo anda mal cuando como nunca hemos visto la mayor oposición a una ley en este país, ni la reforma energética demostró tanta inconformidad, hemos visto cómo organismos nacionales e internacionales han demandado no aprobar esta Ley, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 25 comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos de la OEA, el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, los rectores de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Iberoamericana, el Premio Nacional de Derechos Humanos, la Galardonada con la Medalla Belisario Domínguez, Amnistía Internacional, decenas de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, académicos, intelectuales que han expresado su preocupación e inconformidad como esta ley y, en particular, lo vimos el día de hoy cómo en un hecho sin precedente, los seis mandatos de Naciones Unidas, en materia de derechos humanos se han manifestado porque no se apruebe esta ley.

Todos, absolutamente todos, quizás con la excepción de los gobernadores que fueron mandados a traer para podar esta ley en una actitud de sumisión, todos le dicen, todos le gritan al soberano que camina desnudo y el soberano no escucha.

Pero en realidad el soberano no escucha, en realidad el soberano no atiende, en realidad al Presidente no le importa esta inconformidad generalizada, yo creo que no, sí escucha, pero no le importa porque han tomado una decisión política que representa un vuelvo al pasado, se pretende legalizar y otorgar facultades meta

constitucionales al Presidente de la República para utilizar las Fuerzas Armadas, para dirimir los asuntos de la política nacional.

Como me lo dijo en una reunión que sostuvo en el año 2011, con el entonces gobernador del Estado de México, me dijo: “el arte de la política es saber conservar el poder sea como sea”.

Es larga, muy larga la lista de agravios a los mexicanos en el abuso del poder por parte del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, y hemos visto como a lo largo de la historia este abuso del poder presidencial ha atentado contra la población civil, lo vimos en los años 50’s con la represión al Movimiento Ferrocarrilero y la intervención del Ejército, como también rompió la huelga el Ejército de los trabajadores petroleros en la Refinería de Azcapotzalco en 1963.

Vimos cómo intervino el Ejército en el asesinato de dirigentes sociales, como el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962, en el estado de Morelos, a pesar de haber acordado con el Presidente López Mateos incorporarse a la vida institucional.

Hemos visto cómo por mandato del Presidente el Ejército ha intervenido contra los movimientos estudiantiles, tomando en 1966 la Universidad Nicolaita, en Michoacán.

En 1968 no solamente la masacre de Tlatelolco, sino con las tomas de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Y cómo el Campo Militar Número Uno se convirtió en un espacio de detenciones arbitrarias y tortura contra los estudiantes de manera ilegal.

Vimos cómo intervino en 1970, en la Universidad de Chapingo.

Y en 1976 en la escuela de agronomía de la Universidad de Chihuahua, en la Ciudad de Delicias.

Vimos cómo en los años 70’s, a partir de 75, la Operación Cóndor, en el noroeste de la República, en Oaxaca, en Guerrero y Michoacán, enfrentó a la población civil arrasando a comunidades campesinas completas, generando homicidios y ejecuciones extrajudiciales, vejaciones y violaciones profundas a los derechos humanos, al igual que en la década de los 70’s durante la Guerra Sucia, además de perseguir al Movimiento Guerrillero reprimió a la disidencia política.

No se pueden olvidar las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales como las cometidas desde la base militar de Pie de la Cuesta en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, cuando desde naves de la Fuerza Aérea Mexicana se arrojaban vivos a los opositores desde las naves de la Fuerza Aérea Mexicana.

¿Cuándo cambió esta situación?

Cuando hubo una rectificación en la forma de hacer política en este país, es cuando hay un cambio que debemos reivindicar en la relación con las Fuerzas Armadas y el desempeño de sus funciones institucionales, en los años 80’s cuando tras una reforma política se dieron los espacios a la participación legal y electoral de la oposición, principalmente de la izquierda, lo que ha demostrado que la salida debe de darse con medidas de corte democrático y no con el endurecimiento, la mano dura ha fracasado y hay que asumir que la militarización de las tareas de seguridad pública han fracasado también.

No queremos que esto se repita.

No queremos una nueva Guerra Sucia en el proceso electoral del 2018.

No queremos a las Fuerzas Armadas interviniendo en la vida y en los asuntos políticos de la nación.

El Ejército no quiere involucrarse en la política.

Yo lo he vivido expresa y directamente cuando, por ejemplo, en el 2006 el General Secretario Clemente Vega fue un factor fundamental, no para que no interviniera el Ejército frente al plantón de Reforma, sino para buscar una salida pacífica al proceso postelectoral de ese año.

Esta ley es inconstitucional, violenta los tratados internacionales suscritos por nuestro país, que conforme a nuestra Constitución tienen rango de ley y es obligatorio a su cumplimiento, esta ley socava los derechos y libertades de los mexicanos, confunde los conceptos de seguridad nacional y seguridad interior desde la vieja visión de la seguridad del Estado con los asuntos vinculados a la seguridad ciudadana.

Somete a la población civil a la autoridad militar, a permitir que las Fuerzas Armadas realicen investigaciones con el apoyo de los órganos de inteligencia del Estado mexicano, lo que con orden de juez nos dice les permitirá allanar domicilios de particulares, intervenir comunicaciones telefónicas y electrónicas, decomisar equipos, detener a civiles sin la mediación de la autoridad judicial.

Con esta ley invadirán las Fuerzas Armadas el derecho a la privacidad y la protección de daños personales de los ciudadanos al obligar a todas las autoridades a entregar la información particular que se le requiera.

Viola el derecho a la información al pretender reservar toda la información vinculada con las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior a considerarlas como información de seguridad nacional.

Subordina a la autoridad civil, federal, porque no solamente es a la autoridad estatal y municipal, porque la Policía Federal Preventiva, la Gendarmería Nacional se subordinarán al mandato de las Fuerzas Armadas al establecerse la declaratoria de protección a la seguridad interior en el momento en que el Presidente decide un comandante para coordinar los operativos.

En síntesis, esta ley, y lo dijo aquí claramente el Senador Torres Graciano, viene a legalizar una situación de excepción, convierte la excepción en ley, y se entrega al control político y el mando territorial a las Fuerzas Armadas, es una nueva modalidad de totalitarismo que ya se ha aplicado en otros países de América Latina, estas medidas son las que llevaron a los gobiernos dictatoriales en Centro y Sudamérica hace ya varias décadas, pero que ahora adoptan nuevas modalidades, esta modalidad totalitaria y autoritaria que representa el golpe de Estado Legislativo.

Hoy no queremos vernos en el espejo de Honduras, tenemos que defender nuestras libertades y decimos con toda claridad:

No a la militarización de la política.

No al fortalecimiento metainstitucional de las facultades discrecionales del Presidente de la República.

Y fundamentalmente no a la pérdida de nuestras libertades y derechos.

Queremos vivir en paz.

Y para vivir y recuperar la paz, lo que necesitamos es democracia, enfrentar la desigualdad, enfrentar la corrupción, la impunidad y entender que este pueblo está ávido de cambios que es necesario otro régimen político.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Alejandro Encinas.

Informo a la Asamblea que la intervención del Senador es a nombre propio y del Senador Juan Carlos Romero Hicks.

Tiene ahora el uso de la tribuna, para su voto en particular, la Senadora Dolores Padierna Luna.

Les recuerdo a los Senadores oradores que el tiempo para su intervención es de diez minutos.

La Senador Dolores Padierna Luna: La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, haciendo labores de seguridad pública que corresponden jurídicamente a las policías, han resultado contraproducentes.

La realidad y todos los análisis serios de este tema son contundentes y dan cuenta del fracaso que hoy se quiere legalizar.

En el año 2006, Felipe Calderón decidió lanzar una cruzada policiaco-militar en ocho estados de la República sin tener un diagnóstico claro sobre la fuerza, la presencia, la organización de los grupos criminales, sin contar con datos mínimos, estadísticos, criminalísticos, de inteligencia y de operativos que sustentaran una intervención de esa naturaleza, no tenía base legal, actuó violando la Constitución al margen del Estado de derecho y de espaldas a los tratados internacionales y a la opinión pública de especialistas en el tema.

En 2006, la única entidad federativa que tenía índices de violencia e inseguridad por encima de la media era Michoacán, mientras que en las otras siete entidades donde también aplicó su cruzada contra el narcotráfico con los operativos de las Fuerzas Armadas, eran entidades que estaba por debajo de la media en los índices de violencia e inseguridad, así estaba Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa.

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de este esquema de seguridad con la presencia permanente e indefinida de las Fuerzas Armadas en labores cotidianas de seguridad pública, se incrementaron los índices de violencia en forma exponencial en esas ocho entidades donde originalmente se desplegó este esquema de seguridad.

Aquí podemos ver cómo en las ocho entidades de la República, que son las líneas rosa, están por debajo de la media; y cómo Michoacán era el único que estaba por encima de la media.

Acá podemos ver, con datos del Inegi y con datos del Sistema Nacional de Seguridad, cómo antes del 2006 todos los índices de violencia estaban más o menos controlados.

A partir de la entrada del operativo se disparó la violencia criminal de forma exponencial, contrario a lo que se expresó sobre, que así lo dijo Calderón, sobre una ola de violencia que ameritaba acciones extraordinarias, entre ella la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Estadísticamente en ese momento la ola de violencia nunca existió, y más bien esta ola de violencia vino después con la fallida estrategia de Calderón, lo que viene a demostrar que sacara a la calle a los militares fue una decisión de carácter político sin sustento estadístico, ni analítico.

En las ocho entidades donde se aplicó este plan la violencia creció y luego se extendió a más y más entidades de la República dejando un baño de sangre en todo el país.

La sustitución de las policías por el Ejército conllevó a un debilitamiento de las estructuras de seguridad pública, estatales y municipales. Todos los recursos económicos y materiales se destinaron a las instancias federales abandonando el seguimiento a los gobernadores para que realmente capacitaran a sus policías y, en un momento dado, poder retirar al Ejército a sus cuarteles.

En todas las, en las iniciativas que se entregaron a este dictamen, aprobado en la Cámara de Diputados, aparece un común denominador, la debilidad de las corporaciones policiales, estatales y municipales y la infiltración de los cuerpos policiales por parte de la delincuencia.

Lo cual es cierto, aunque no debiera generalizarse y, sin embargo, si esa es la causa, ¿por qué aún no se atendió con una depuración de los cuerpos policiacos con formación policial, con estrategias legales y urgentes? Al contrario, todo empeoró.

Por supuesto que muchas corporaciones policiales, pero de los tres órdenes de gobierno, y no sólo de los estados y municipios, se encuentran infiltradas por grupos criminales, y que las principales violaciones a los derechos humanos son cometidas por los propios agentes encargados de cumplir la ley.

Pero resulta inadmisible suponer que con la implementación del modelo de seguridad militarizado esos males desaparecerán de la noche a la mañana, resultó exactamente lo contrario, los males se incrementaron, el modelo escogido por Felipe Calderón, y retomado por Enrique Peña Nieto, ha sido duramente cuestionado, pues no va acompañado, ni aparejado de una serie de medidas que, según los especialistas, resultarían fundamentales para lograr un modelo realmente efectivo, tendiente a erradicar la corrupción y a erradicar la impunidad.

Veamos datos.

La propia PGR, a través de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, reconoce que las averiguaciones previas que mantienen abiertas al día de hoy por el delito de desaparición forzada, al mes de septiembre de 2015, la Policía Federal es señalada como probable responsable del 41 % de los casos de desaparición forzada; el Ejército Mexicano es supuesto responsable de 35 % de los casos; y las policías municipales del 18 %.

Estas cifras, sin lugar a dudas, nos dan una muestra de que la crisis en los cuerpos policiales y de seguridad está en los tres niveles de gobierno y no como se afirma en este dictamen, sólo a nivel municipal y estatal, y se da tanto en las policías, pero también en las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, la debilidad institucional de las corporaciones policiales, estatales y municipales, y su fuerte propensión a incurrir en actos de corrupción, no puede ser la premisa sobre la cual se pretenda imponer este modelo de seguridad militarizada, pues no existen datos ciertos, ni un estudio que permita dimensionar la intervención real de las Fuerzas Armadas de Seguridad por cada territorio en particular, y no de manera genérica y abstracta como se hace en este dictamen.

El dictamen omite todo lo concerniente a la procuración de justicia, a la investigación criminal, a las labores de prevención, a la falta de sanción, a los actos delictivos; es decir, la impunidad repercute directamente en el aumento de la incidencia delictiva y en la capacidad de fuerza de los grupos delictivos.

De acuerdo a los datos del Inegi y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Calderón sumó en su mandato un total de 120 mil 935 homicidios dolosos.

Por su parte, Peña Nieto acumula 114 mil 61 asesinatos en lo que va de su administración, hasta octubre pasado.

Pero falta un largo año todavía para que acabe el sexenio de Peña Nieto y está a tan sólo 6 mil 874 muertos para alcanzar el récord de Calderón.

De mantenerse en la tendencia de homicidios que lleva este año, 2017, que ya es el año más violento de toda la historia reciente, en tres meses más el mandatario del PRI establecerá la nueva marca como el sexenio más violento desde la Revolución Mexicana.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que de enero a octubre de 2017 se han registrado 23 mil 968 homicidios dolosos, y tan sólo en octubre hubo 2 mil 764 asesinatos.

Estas cifras superan ya los 22 mil 849 homicidios dolosos que se registraron en el año 2011, año que fue considerado el año más violento, y que fue cuando se inició la guerra contra el narcotráfico, producto de ella.

Este recuento de cifras evidencia no sólo la inexistente estrategia de seguridad, sino, sobre todo, la ineficacia de la intervención de las Fuerzas Armadas realizando tareas de prevención, de seguridad y de persecución de delitos.

Las cifras no son opiniones o subjetividades, como algunos legisladores señalan a quienes nos oponemos a esta ley; los números no nos dejan mentir al afirmar que legalizar este modelo de seguridad militarizada es un sinsentido.

Por otra parte, estas cifras de impunidad la señala la Universidad de Las Américas de Puebla, que señala que el Índice Global de Impunidad en México en 2016 con información obtenida del Inegi y otras fuentes oficiales, del total de delitos consumados, solo el 5 % llega a una sentencia condenatoria, la impunidad, por tanto, es del 95 %.

Por ello es indispensable conocer las debilidades institucionales de las fuerzas policiales, estatales y municipales para diseñar una estrategia de fortalecimiento gradual para en esa medida aplicar el retiro gradual de las Fuerzas Armadas.

También se requiere tener a la mano el diagnóstico de la debilidad institucional de las procuradurías o fiscalías estatales para no tener una visión sesgada del problema; se debe resolver el alto grado de impunidad existente en México.

Otro de los datos elocuentes y un estudio vital que no debe de faltar en un análisis como éste, son los datos que miden el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas en los años recientes.

El CIDE hace un estudio sobre la operación de las Fuerzas Armadas en operativos de combate a la delincuencia y sobre la letalidad de sus actuaciones, basándose en información oficial; deduce que este dicho estudio arroja el dato de que 4 de cada 10 combates fueron eventos de letalidad perfecta. Es decir, donde solo hubo muertos, ningún herido, una letalidad del 100 %.

Los eventos de letalidad del 100 % se incrementaron año con año. En 2007 hubo 15; en 2011, 451; y actualmente se registran más del 86 % de los casos con índice de letalidad total.

Es decir, que para las Fuerzas Armadas la prioridad es abatir a las personas, a las que se les hace frente, en vez de detenerlas y presentarlas ante Ministerio Público, procesarlas, juzgarlas como debería de ser y como lo marca la Constitución.

La actuación de las Fuerzas Armadas en estos casos no sólo es letal, sino violatoria de los derechos humanos.

Todo ello ha repercutido en una espiral de violencia criminal que reacciona ante la fuerza letal con cada vez mayor violencia y virulencia, validar estos hechos es aceptar que los principios de presunción de inocencia, del debido proceso quedan subsumidos a meros formalismos frente a la actuación militar que prioriza la muerte sobre las defensiones y los procesamientos judiciales.

Hay el uso legítimo de la fuerza que debería de tener protocolos, indicadores, estándares muy claros que permitan no sólo limitar abusos y excesos, sino procurar el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida y a la integridad de la ciudadanía.

El artículo 21 constitucional contempla los principios rectores de las fuerzas de seguridad pública, la legalidad, la eficacia, el profesionalismo y la honradez.

Por ello se debe regular el uso de la fuerza, de los cuerpos de seguridad, ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana.

El Tribunal Europeo ha establecido la necesidad de tener un marco jurídico-administrativo para inhibir y evitar que se violen los derechos humanos.

También debe haber marcos normativos que rijan la prevención, la supresión y castigo a conductas violatorias de los derechos humanos.

Las operaciones de la policía deben estar autorizadas por el derecho interno y reguladas por él, dentro del marco de un sistema de efectivas salvaguardas contra las arbitrariedades y el uso ilegítimo de la fuerza.

Todo debe apegarse a los estándares internacionales. El Sistema Interamericano se ha pronunciado por la excepcionalidad de las armas letales tal como lo establecen los principios básicos de la ONU, el uso de la fuerza pública no tiene por qué resultar en la pérdida de vidas humanas, éstas, si acaso es el resultado en condiciones de excepción, son excepción y no la norma el principio de proporcionalidad también está presente en todos los ordenamientos internacionales y en nuestra Constitución.

Si el uso de la fuerza de las armas es inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán actuar en proporción a la gravedad del delito, en los estándares internacionales no se considera la participación de las Fuerzas Armadas, realizando labores de seguridad pública o de seguridad interior ordinaria, porque las Fuerzas Armadas tienen para su regulación otros principios, el derecho internacional humanitario es lo que los rige.

Sin embargo, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior establece todo lo contrario y conociendo los riesgos que implica la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, instancias internacionales y nacionales se han pronunciado en contra de los contenidos de este dictamen.

PRESIDENCIA SEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Concluya Senadora Padierna, por favor.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Ninguna ley como ésta había generado un repudio nacional e internacional tan grande, generalizado y contundente como esta Ley de Seguridad Interior.

Se han rechazado, desechado las voces más prestigiadas y experimentadas en la materia; se han convertido en un Congreso de la Unión como cómplice mudo y abyecto de un golpe autoritario que sepulta el Estado de derecho.

El Presidente Peña Nieto llamó el viernes 8 de diciembre a un diálogo, y lo que observamos aquí, es un monólogo autoritario entre las cuatro paredes de este recinto, se colonizó este Senado por los representantes jurídicos del alto mando militar, justo previo a las elecciones más complicadas de la historia, están preparando una sucesión presidencial militarizada para generar miedo, si no es con votos, lo quieren hacer a toda costa con las armas.

Lo oprobioso de esta ley es la forma en que ceden el poder del Estado ante los militares, como se hace, cómo se hace, que claudiquen los gobernadores, el gobierno federal, los municipios, el Congreso de la Unión, los congresos de los estados, el Poder Judicial, los órganos autónomos, las comisiones de derechos humanos, todos estarían supeditados a un mando militar en cuanto se haga la declaratoria en tal o cual territorio del país.

Ahora en lugar de mandar a Castillo, enviado a Michoacán a suplantar todo el poder de las autoridades estatales legalmente electas, llegará un comandante a Michoacán, a Morelos, a Tamaulipas, a Colima, a los 27 estados, porque se trata de una sesión del poder a los militares que irán tomándolo conforme vayan emitiéndose las declaratorias de protección a la seguridad interior, hasta que los militares operen en toda la República, porque en esta ley el Ejército hará acciones permanentes de prevención.

Ante esta Ley de Seguridad Interior hoy día existen controles a los militares. En esta ley se omiten todos los controles, por ejemplo, si un militar quiere allanar un domicilio tiene el control de un juez, que debe autorizarlo, nadie puede ser molestado en su domicilio sin una orden de un juez.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Concluya, Senadora Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Pues ahora con esta Ley de Seguridad Interior basta con que el mando militar diga, en esta casa hay un riesgo de amenaza, se allana esa casa, más grave aún no tienen que justificarlo, porque en esta ley todos los datos de inteligencia, todo lo que son análisis de riesgos y toda la información que manejen las Fuerzas Armadas, es considerada de Seguridad Nacional y nadie podrá tener acceso a ella.

Esta Ley de Seguridad Interior se guía por la doctrina militar, no establece incertidumbre jurídica para nadie, no contiene procedimientos claros, no incluye los derechos humanos, todo se engloba en una burbuja oscura, ajena a la democracia, a los valores y a los principios establecidos en la Constitución que diseña una República democrática.

No es que estemos culpando al Ejército de la ola de violencia, pero sí estamos afirmando que la fallida estrategia de seguridad militarizada que involucra al Ejército, no funciona.

Si el plan es malo, los resultados son peores, y quien lo ejecuta, en este caso el Ejército, sufren los efectos de esa decisión.

Definitivamente, militarizar al país, lejos de ser una solución, es legalizar la tragedia de desolación, de violencia y de muerte en ausencia de gobernabilidad que se vive en varios estados del país.

Podrán repetir, una y otra vez, que no se trata de militarizar la seguridad pública.

Podrán insistir en que es un instrumento jurídico para normalizar, para regularizar lo irregular, lo que no podrán lograr es la credibilidad y la legitimidad frente a la población.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Concluya, por favor, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Esta no es una Ley para la Seguridad Interior, sino una ley para la guerra civil.

En mi siguiente intervención, que me apunté en contra, seguiré argumentando muchos elementos en contra de la Ley de Seguridad Interior.

(Aplausos)

El Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora.

Les recuerdo a los oradores que la intervención es hasta por diez minutos.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Presidente, Presidente,

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) De acuerdo al artículo 59, reclamo el quórum.

A simple vista no hay ni 40 Senadores, no está ni siquiera la Presidenta de la Comisión de Gobernación, que vino muy apasionadamente a decirnos una serie de mentiras.

Está regresando.

Ya empezaron a llamarles.

Pero, cuente, a simple vista no hay, por lo tanto debe suspenderse la sesión.

Dice el artículo 59, en su fracción III: “Que cuando a simple vista inmediatamente hay que suspender la sesión”.

No hay necesidad de rectificar el quórum.

Ellos saben cuál es el resultado, y lo único que les importa es contar a sus borregos a la hora de meterlos al corral, pero no les importa debatir la ley más sentida para la ciudadanía en estos momentos.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: ¿Solicita se verifique el quórum, Senadora?

Servicios Parlamentarios, puede abrir el tablero para la verificación, hasta por diez minutos.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Estas equivocada, yo estoy aquí sentada, estaba acá sentada.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Orden, Senadora.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Yo estaba aquí sentada.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Les pido a las Senadoras guardar la compostura y el orden en el Senado.

Ahora tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez, a nombre del grupo parlamentario del PRD.

Servicio Parlamentarios, abra el sistema electrónico para la verificación del quórum, hasta diez minutos.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros:

Vengo a nombre de mi fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a presentar un voto particular en contra de esta Ley de Seguridad Interior.

Considerando que el Gobierno Federal, que prácticamente la mayoría de los gobernadores se han dado por vencidos en la responsabilidad de cuidar la seguridad de las personas.

Considerando que al estar apoyando esta ley, están simple y sencillamente haciendo caso omiso de lo que la Constitución misma establece en sus responsabilidades.

La seguridad pública corresponde a la autoridad civil.

La minuta que presentan las comisiones dictaminadoras tiene por objeto expedir una Ley de Seguridad Interior en la cual se pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles, mediante la integración…

Presidente, pediría que me den condiciones para exponer.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Favor de poner atención al orador, por favor.

Está abierto el tablero para la verificación del quórum, hasta por diez minutos.

Verifique el cronómetro.

Continúe, por favor, Senador.

Orden, por favor, Senadores.

Senadores, les pedimos poner…

Continúe, Senador.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Bien.

Compañeras y compañeros:

La minuta que presentan las comisiones dictaminadoras tiene por objeto expedir una Ley de Seguridad Interior, en la cual se pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio a las autoridades civiles mediante la integración, organización, funcionamiento y control de las instituciones y autoridades encargadas de contribuir a preservar la seguridad interior de la Federación, así como establecer los procedimientos y las bases de coordinación con las entidades federativas y los municipios.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados confunde los conceptos de Seguridad Interior y de Seguridad Nacional, considerándolos análogos, lo que resulta erróneo. Dicha confusión es la primera base de una enunciada acción de inconstitucionalidad que seguramente se presentará en los días posteriores a la probable aprobación de esta ley.

Para nuestro grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, esta minuta es inconstitucional e inconvencional, ya que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre Seguridad Interior.

El propio dictamen invoca únicamente criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para justificar una facultad que no tiene el Presidente de la República.

La fracción VI del artículo 89 de la Constitución establece la facultad del Presidente de la República para preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y lo faculta para disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentemente, o sea, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para la Seguridad Interior y Defensa Exterior de la Federación.

Sin embargo, dentro del propio artículo 89, el Presidente de la República carece de la facultad de emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior.

Esta ley tiene por objeto preservar las instituciones del Estado, su objetivo explícito no es la seguridad de las personas, sino mantener la gobernabilidad fundada en una discrecionalidad riesgosa.

Se plantea un procedimiento para emitir la declaratoria de afectación a la seguridad interior, el cual se podrá iniciar a solicitud de Presidente de la República o de los gobernadores de las entidades federativas, ésta implica la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, cuando se consideran comprometidas o superadas las capacidades efectivas de las instituciones de seguridad pública para atenderla, o se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en preservar la seguridad nacional.

En el procedimiento se indica que una vez recibida la solicitud previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional se emitirá la declaratoria sin ningún tipo de control legal, ésta se notifica únicamente a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se publica en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios o periódicos oficiales de las entidades federativas.

Cabe señalar que el único mecanismo de control legislativo contemplado en esta minuta es justamente ese, el envío de un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Asimismo se establece que el incumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley, será sancionada conforme a las leyes aplicables en la materia.

Por lo que es evidente que el dictamen adolece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las acciones militares.

Se contempla la posibilidad de contemplar declaratorias en varias entidades del país, simultáneamente, cuyas condiciones y vigencias podrían modificarse, de acuerdo con el único criterio del Presidente.

La minuta señala que las acciones desarrolladas por la aplicación de esta ley, no tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias y sus responsabilidades.

Sin embargo, sí se establece el carácter subsidiario de las acciones, lo cual resulta una contradicción en sí misma.

Lo anterior constituye una evidente posibilidad de ruptura del Estado de derecho, se crea un nivel intermedio entre el estado de normalidad democrática y el estado de excepción, al limitarse en el control de las acciones sin ningún tipo de contrapesos, lo cual representa un riesgo para la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos.

De aprobarse esta minuta se establecerá de manera permanente lo que en cualquier democracia es una excepción, el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad pública.

En el grupo parlamentario del PRD afirmamos que la seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil en concordancia con el artículo 21 de la Constitución que establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que excluye a las instituciones castrenses en tales tareas.

Es indispensable tomar en consideración la dimensión internacional de los derechos humanos, el reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y establecer un modelo de seguridad humana, insisto, un modelo de seguridad humana que combata los altos índices de criminalidad, pero también de corrupción e impunidad en el que nos encontramos inmersos, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, el artículo 1 de nuestra Carta Magna, se establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, con la obligación a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias.

De observar el bloque de constitucionalidad, ejercer un control difuso de convencionalidad y aplicar el método de interpretación idóneo para garantizar el principio pro persona, eso es lo que establece nuestra Constitución, eso es lo que quieren borrar ahora con esta ley.

Esta misma reforma es la que en su Transitorio Cuarto, mandató al Congreso de la Unión a expedir la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de derechos y las garantías.

En la Cámara de Diputados debió ser valorada, ya que representa una salida fundada en la Constitución para situaciones excepcionales.

Lo que desde nuestra perspectiva es la vía constitucional y legal que permite a un estado democrático de derecho, enfrentar aquellas situaciones y condiciones excepcionales que deben ser resueltas por decisiones y acciones de emergencia, y con el único fin de reestablecer la situación de normalidad.

Al respecto, es importante recordar que el Senado de la República, desde el pasado 9 de diciembre del 2015, remitió a la Colegisladora el dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, y que desde nuestra perspectiva es la única medida para realizar acciones de seguridad interior acorde a la exigencia del constitucionalismo democrático contemporáneo, cuyos ejes principales deben tener al menos los siguientes.

Esa minuta, esa minuta que está en la Cámara de Diputados, que fue trabajada aquí con mucha paciencia, con mucha dedicación, que fue aquí acordada por consenso de todas y todos los 128 Senadoras y Senadores, porque cuando queremos, podemos hacer bien las cosas en el Senado de la República, esa minuta de consenso está congelada en la Cámara de Diputados.

Decía yo que los ejes que se deben contener son al menos los siguientes, las situaciones por las que debe decretarse la restricción o suspensión de derechos y garantías, los actores que deben intervenir en la declaratoria de protección a seguridad interior, el procedimiento para la declaratoria, los principios que deberán observarse, los derechos y principios intangibles, el control jurisdiccional, la conclusión de las medidas decretadas.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Concluya, señor Senador.

Comprobada la existencia del quórum, ciérrese el sistema electrónico.

Concluya, por favor, Senador.

Ya atendimos la petición del quórum, Senadora, permítanos continuar con el debate.

Adelante, concluya, Senador, concluya Senador.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias.

Presidente, nada más descuénteme todos estos minutos que hemos estado perdiendo para poder concluir.

Estos parámetros mínimos congruentes con un estado democrático de derecho, son los que desde el PRD consideramos correctos para referir la actuación de las Fuerzas Armadas en el marco de lo establecido en la Constitución.

Es imperativo que la Cámara de Diputados concluya el proceso legislativo que mandata el artículo Cuarto Transitorio de la reforma del 2011, donde indica que desde junio del 2012 debió expedirse la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.

Públicamente como grupo parlamentario hemos respaldado diversos pronunciamientos de organizaciones civiles mexicanas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales como la ONU, desde el alto, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que externó también su preocupación ante la impunidad que prevalece respecto a las actividades de las Fuerzas Armadas en México, en tareas de apoyo en materia de seguridad pública.

Estas y otras organizaciones señalan enfáticamente el riesgo de aprobar una ley de seguridad interior como la que está a discusión en este momento.

Para el grupo parlamentario del PRD, es claro que ante el fracaso de la presente administración para garantizar el derecho a la seguridad pública y poder reconstruir el tejido social lastimado por la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad y ante el aumento de los índices delictivo, no sólo derivados de la delincuencia organizada, sino también del fuero común, prevalece una estrategia encaminada a legitimar la militarización de la seguridad pública.

Los resultados de esta política demuestran graves casos de tortura, de tensiones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones por parte de algunos efectivos militares, como lo han señalado diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Durante cinco años esta administración no logró ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes, lejos de profesionalizar a las policías del país para enfrentar la criminalidad de alto impacto se optó por un modelo centralizado, se equivocó al transferir directamente las atribuciones de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y otorgarlas a la Secretaría de Gobernación.

Todas estas consideraciones nos llevan a disentir de lo que seguramente será una mayoría en favor de esta minuta, se debería valorar la pertinencia de expedir una legislación diferente a la que está en consideración ahora, una que permita regular la seguridad humana, el uso de la fuerza, coordinar las tareas de inteligencia,

investigación, obligar a la transparencia y dotar de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las Fuerzas Armadas.

Antes de aprobar una ley que legalice que el Ejército realice tareas de seguridad pública que por mandato de la Constitución le están impedidas.

¿Dónde está el mando mixto?

¿Dónde está alguna alternativa para ir a resolver el tema de la seguridad pública?

No hay en este momento ninguna alternativa.

En mérito de lo expuesto solicitamos, Presidente, tenerlos por presentados con el presente voto particular del grupo parlamentario del PRD en contra del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene la Ley de Seguridad Interior.

Y por obvio de tiempo le entrego la versión completa, le pido sea incluida íntegramente en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador.

Servicios Parlamentarios integre al Diario de los Debates la intervención íntegra del Senador Luis Sánchez.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Ya que no trae lentes, mi querido Presidente, entonces, por favor, y no lo vea a simple vista, le pido nuevamente rectifique, porque entraron y salieron.

Es que está en la Ley Orgánica.

Acabo de contarlos, tengo el video, son 41 Senadores.

No puede ser.

Que sean responsables, es lo mínimo que pueden hacer en una ley tan importante.

Estoy mandando los videos para que vea la ciudadanía cómo está vacío este salón.

Es una burla.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Hemos atendido su petición.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Es que no necesitaría ni pedir abrir el tablero.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño de la Senadora Rocío.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Presidente, solamente la compañera no registró asistencia, cómo está pidiendo la voz.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño del Senador Carlos Puente.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.

Nada más para que quede claro y aceptado.

Las Senadoras y los Senadores han hecho un pase de lista, se ha rectificado el quórum y tenemos quórum, pero de la bancada que los señalan llenan los escaños con asesores.

Pido y solicito que los escaños sean ocupados por los titulares de los mismos y no por los asesores.

Es cuanto.

Gracias, mi Senador.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Adelante, Senador Manuel Bartlett, para su intervención.

Senadores, favor de poner atención al orador.

Continuemos con el debate.

Adelante, Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Senadores y Senadoras.

A principios de 2017 nuestro grupo parlamentario presentó al Pleno una completa e integral iniciativa en materia de seguridad interior, alternativa a las oficiales, y que hasta el momento la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado no ha querido dictaminar ni siquiera por ese pluralismo en el Senado podemos tener ese tipo de participaciones.

Esperamos que democráticamente este voto particular sea al menos discutido en este Pleno democrático y supuestamente plural.

En esa iniciativa que es nuestro voto particular, en más de 200 páginas que hemos presentado ya a la mesa pidiendo que se publique en el Diario Oficial del día de hoy, hacemos un estudio pormenorizado del tema, abordamos lo siguiente.

Las razones geopolíticas que impulsan la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, esas tienen que ver con nuestra integración subordinada a los Estados Unidos, y el propósito de ese país para que en América Latina se constituyan estados policiacos militares.

No se tomó en cuenta y lo ocultan y callan.

Exponemos de acuerdo a documentos académicos y políticos en los Estados Unidos lo que es un Estado policiaco militar, el que consiste fundamentalmente en otorgar a las Fuerzas Armadas el control social de las sociedades nacionales para proteger los intereses de las empresas trasnacionales y, además, garantizar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el control militar del continente.

Definimos y distinguimos de acuerdo a las nuevas concepciones teóricas del gobierno de los Estados Unidos las diferencias entre seguridad pública, interior y nacional.

Precisamos lo que es el militarismo y las consecuencias históricas que ha tenido en relación a la negación del desarrollo democrático de los países y la afectación de los derechos humanos, ahí está perfectamente establecido.

El juicio histórico para el militarismo es negativo, contribuye a consolidar regímenes autoritarios que desprecian los derechos humanos.

Cinco. Abundamos ampliamente en la evolución de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus impactos en los países de América Latina, hacemos un estudio ahí comparado de la influencia de la doctrina de seguridad nacional en la Unión Europea.

Realizamos un análisis de derecho comparado sobre los estados de sitio, que es en lo que vamos a terminar, y sus diferencias con los estados de emergencia, asuntos constitucionales que nunca se tratan.

Explicamos cómo se ha ido construyendo el Estado Policiaco Militar en México después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Por ejemplo, nuestra integración de facto al Comando Norte de los Estados Unidos.

Los acuerdos inconstitucionales que dieron lugar al ASPAN y a la Iniciativa Mérida, así como los cambios jurídicos nacionales para incorporar en el derecho mexicano el concepto de seguridad nacional en 2004 y 2005.

Exponemos ahí la subordinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y hacemos una crítica a sus principales resoluciones en la materia, nadie lo quiso ver.

Analizamos y criticamos todas las iniciativas presentadas por otras fuerzas políticas para aprobar la Ley de Seguridad Interior, lo hicimos con todo cuidado, nadie lo quiso ver.

Exponemos que en esas iniciativas se violentan los artículos 1, 21, 73, 119 y 129 de la Constitución, e infringen principios en tratados y resoluciones de organismos supranacionales de derechos humanos. Aquí han estado presentes demandando el rechazo de esta iniciativa, nosotros lo hicimos en aquel tiempo.

Abordamos los costos de la militarización en México, que tampoco se analiza en términos de afectación a los derechos humanos, los costos sociales que han implicado miles de muertos, desparecidos y desplazados.

También con datos oficiales exhibimos el aumento en el gasto militar en los últimos años en detrimento del gasto de educación, salud y producción y protección de los derechos humanos.

Demostramos que es una mentira oficial, que es una mentira oficial que no tengamos policías. Aquí se dice: “no hay policías, tenemos que sostener al Ejército”, mentira.

Existen en este momento 55 mil policías y federales; 213 mil policías estatales y 134 mil policías municipales, pero no quisieron verlo, y quisiera dar cuenta de que hubo una tendencia absoluta al gasto militar, pero están las policías, y están las policías que pueden encargarse de este país.

Finalmente, realizamos las siguientes propuestas que aquí nuevamente presentamos como voto particular, el dictamen alternativo al que presentan las comisiones unidas.

Proponemos, desde entonces, pero no lo han querido dictaminar porque así se procede en este Congreso, solamente imponen lo que ordena el Presidente de la República y no atienden los planteamientos plurales y fundados de los diversos Senadores de este Pleno.

Proponemos: derogar las facultades del Congreso de la Unión, previstas en la fracción XXIX-M del artículo 73 constitucional, para aprobar leyes en materia de seguridad nacional.

La seguridad nacional, como es entendida por las Naciones Unidas y no por la vieja y nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que es la que están imponiendo hoy, es una tarea que corresponde a los ciudadanos y a todas las autoridades, fundamentalmente a las civiles de acuerdo con sus competencias.

En una democracia constitucional el último garante de la seguridad nacional es el propio pueblo, y el órgano el control constitucional y no las Fuerzas Armadas.

Se debe rechazar la guerra ofensiva, la Constitución de la República sólo permite la guerra exterior en legítima defensa.

¡Ah! Pero este vuelco a los principios de seguridad nacional ya no tenemos enemigo exterior, ni supuestas amenazas, acechanzas o posibilidades de un enemigo exterior.

No, todos los enemigos, dice la seguridad norteamericana, son los enemigos interiores, los propios mexicanos.

Período de paz, digo, las Fuerzas Armadas en el ámbito interno podrán tener mediante una reforma constitucional las siguientes facultades:

Intervenir en situación de suspensión de garantías, que se alarman cuando les decimos: ¿quieren solucionar estos problemas, como le decíamos al gobernador de Guerrero? Lo único que tienen que hacer es pedir una suspensión de garantías.

Pero la suspensión de garantías tiene un control del Congreso, no tenemos un Presidente aspirante a dictadorcillo con el manejo personal de las Fuerzas Armadas. No. Hay mecanismos en la Constitución, que es la suspensión de garantías.

No quieren, porque la suspensión de garantías, como veremos, implica el control del Congreso, y en el caso de lo que están proponiendo no hay ninguna garantía, es el dictador Peña Nieto con sus huestes militarizadas el que puede decidir lo que se le dé la gana.

Eso, así empezaron en Chile, ¿eh? con este tipo de medidas.

Pueden intervenir en la suspensión de garantías, intervenir en situación de suspensión siempre subordinadas, siempre subordinadas a las autoridades civiles y al sistema normativo.

Participar en la intervención federal, prevista en el artículo 119 de la Constitución, con supervisión de las autoridades civiles por siete días en los términos del primer párrafo de esa norma.

Cumplidos los siete días, sin que exista solución en la entidad federativa o región de que se trate, se debe iniciar el procedimiento de suspensión de garantías, no aplicar la suspensión de manera permanente en todo el país.

En caso de amenazas y riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud, educativas, en esto último supuesto, que sí pueden participar la autoridad militar, actuará sin armas y estará subordinada de acuerdo a las competencias constitucionales y legales de cada autoridad, el Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial Federal y al resto de los niveles de gobierno y órganos constitucionales y establecidos en la norma fundamental.

En el plazo de tres meses, los integrantes de las Fuerzas Armadas de la República deberán regresar a sus cuarteles en los términos del artículo 129 de la Constitución, a sus cuarteles, sí, sin que puedan atender tareas de seguridad pública de ninguna otra manera porque no está comprendida en los supuestos constitucionales la posibilidad de las Fuerzas Armadas en todas las funciones de seguridad pública.

Las autoridades competentes, en los tres niveles de gobierno, deben reasumir sus facultades, reasumir sus facultades en materia de seguridad pública.

La autoridad que no pueda resumir sus competencias, la autoridad que no pueda resumir sus competencias, como son el gobernador que estuvo aquí hace unos días, integralmente no puede, lo que debe comunicar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que éste inicie sobre la entidad federativa correspondiente al procedimiento de suspensión de garantías.

Además de iniciar, respecto al gobernador, iniciar, respecto al gobernador, los presidentes de juicio político y de responsabilidades que correspondan por el abandono a la seguridad de su propio territorio, se deben declarar nulos por inconstitucionales, por no haber sido conocidos, discutido y aprobados por el Senado todos los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública, suscritas por el gobierno de la República.

Fox, Calderón y Peña Nieto están operando inconstitucionalmente y los acuerdos que establecen esta hegemonía norteamericana son inconstitucionales, deben declararse nulos por inconstitucionales.

En México, decíamos entonces, y hoy lo repito, se debe constituir una comisión de la verdad que debe investigar los actos y omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos, por montones en éste y en el anterior sexenio, respecto a las conductas de los responsables civiles y militares, incluyendo a los presidentes de la República que haya ocurrido con motivo de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Es normal, un juicio de responsabilidades a quienes han echado a andar esta maquinaria infernal que tiene a México sumido en una desgracia brutal y que les es muy fácil decir: “más violencia, más fuerza, exterminémoslos a todos”, esa es la respuesta de esta iniciativa o este dictamen que se está poniendo a discusión.

Se deben de aprobar de inmediato las reglas y procedimientos para constituir un sistema de profesionalización y de carrera policial que atienda las necesidades de los tres niveles de gobierno, que tampoco estaba, ahora lo pretenden meter en un Artículo Quinto Transitorio que nadie conoce y que lo presentan como gran solución de última hora.

Como ven ustedes, esta iniciativa, que es voto particular, la presentamos hace dos años y no la tomaron en cuenta, y es una salida constitucional respetando a nuestras instituciones, y no esa guerra de usura a las que nos ha sometido los Estados Unidos, en donde van destruyendo nuestras instituciones, el federalismo, al Congreso de la Unión, los municipios quedan sometidos, y de eso se trata.

Más adelante les platicaré lo que es la guerra de cuarta generación para que se den cuenta de que están destruyendo las instituciones del país, están destruyendo nuestros sistemas de justicia, están destruyendo a los gobiernos de los estados, que ciegos y sordos aquí se quedaron callados proponiendo algunos pequeños cambios que ni si siquiera a esos le hicieron caso.

Ese es un punto de acuerdo, de verdad, no adelanto el dictamen, no adelanto el debate, simplemente presento mi punto de acuerdo.

Y yo le pediría al señor Presidente, que pida, si se discute este punto de acuerdo, que, como verán ustedes es posible atender la seguridad de este país sin convertirnos en el país de Pinochet.

Muchas gracias señor Presidente, esperemos el voto.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor David Flores .Ávalos.

Senador, ¿le parece si una vez que terminemos con este trámite que iniciamos de la dictaminación de esta ley ponemos y sometemos a consideración del Pleno su punto de acuerdo?

Le parece que cuando terminemos la discusión de este dictamen, procedemos con su punto de acuerdo, con mucho gusto.

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez (Desde su escaño): Gracias Presidente, nada más para preguntar si el sentido del voto, porque no se ha argumentado cuál es el voto particular, y los votos particulares solamente son en contra.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tendríamos que, si me permite, desahoguemos el trámite en el que estamos; si se rechaza el dictamen que presentan las comisiones en lo general, entonces pasaríamos a realizar la votación a cada uno de los votos particulares, y en ese momento, si me permite, aclararemos en qué consiste cada una de las alternativas que los compañeros que están subiendo a tribuna están presentando.

El Senador Isidro Pedraza Chávez (Desde su escaño): Presidente, es muy claro el Reglamento, y lo único que le estoy preguntando yo es que nos informe a la Asamblea, apegado al Reglamento, con qué objeto va a hacer uso de la palabra el orador que se ha anunciado, porque se puede solamente hacer reservas de votos particulares, son en contra, y no puede haber votos particulares a favor.

Esa es la precisión que yo le pido.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El voto particular que presentará el Senador Flores, pues es una alternativa en caso en que el dictamen sea rechazado, deje que tome la tribuna y que nos explique en qué consiste.

Es un derecho, como el de todos nosotros registrar un voto particular, el Senador Flores que suba a la tribuna y nos explique en qué consiste su voto particular.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta (Desde su escaño): A ver, yo siempre escucho con atención al Senador Flores, aporta mucho razonamiento jurídico. Pero es cierto lo que dice Pedraza, parece que ya al final del Senado ya le sabe bien.

Cuando yo fui presidente, Benjamín Robles inauguro, hace mucho, él inauguró los votos particulares a favor. Cuando el Reglamento del Congreso establece que sólo puede ser en contra, porque lo demás ya se un debate en los general, sólo esta consideración, y yo sin duda que no serán 20 minutos de escuchar al Senador Flores sin que se aproveche, no tiene desperdicio cada que habla.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, me quedo con su última consideración, y escuchemos al Senador Flores, que seguramente su posicionamiento explicará en qué sentido considera su posición alternativa al dictamen que estamos discutiendo y debatiendo.

Adelante, Senador Flores.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román (Desde su escaño): Sí, aunque les moleste. Esta es una ley muy sentida, peligrosa; la ciudadanía está atenta en estos momentos, y es una vergüenza que este Senado quiera nada más imponer la ley sin debatir. No están presentes quienes la defienden, no les importa, ese es el sentido de su ausencia.

Usted es muy estricto y quiere que cuando está uno presente tiene que votar, que no estás obligado, no lo dice ninguna ley, pero sí, la ley es muy clara, en el 59, y cuando a simple vista no hay quórum, debe levantarse la sesión, y es muy poco, no es ético que vienen, pasan lista y se vuelven a ir de inmediato, empezando por la burbuja, mire, está vacío, ahí.

Entonces, creo que tiene que haber una responsabilidad por parte de los Senadores, y, le pido nuevamente que se vuelva a llamar a quórum, y se les pida que permanezcan en el lugar, porque si no estaremos insistiendo, y apegados a la ley, le pido que vuelva a rectificar quórum; a simple vista no lo hay, debería suspenderse la sesión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Sansores.

Atendiendo a su petición, voy a pedir, de acuerdo a lo que establece el artículo 58, que es lo más parecido al momento en el que estamos.

Que se abra el sistema electrónico para verificar quórum, hasta por 90 minutos, y mientras procedamos a desahogar el debate en el que estamos.

(Se abre el sistema electrónico)

Gracias.

Adelante Senador Flores, por favor.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez (Desde su escaño)**:** Presidente, en la facultad de usted está el ordenar la apertura del reloj, nada más que yo escuché 90 minutos, son dos horas, una hora y media.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Es correcto, es correcto, Senador.

Es correcto, de acuerdo al artículo 58, que es cuando se abre el registro para registrar asistencia, que es lo más parecido a la situación en la que estamos, que es verificar la presencia y asistencia de los Senadores, en ese sentido estoy actuando de acuerdo al 58, que se abra el sistema electrónico de votación por 90 minutos, y mientras permítanos, dada la importancia de esta ley, permitamos a los compañeros que hagan uso de la tribuna y expongan sus ideas, y escuchémoslos con respeto.

Adelante, Senador Flores.

El Senador Héctor Flores Ávalos: Muchas gracias, Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores:

Quiero empezar mi intervención reconociendo que efectivamente me gustaría que no estuviéramos discutiendo este dictamen.

Me gustaría sinceramente que en este Senado de la República, habláramos de otros temas, del fortalecimiento al federalismo, de una reestructura del sistema federal, que reconozca, por ejemplo, la facultad de los estados, de gravar el consumo o una parte de la renta.

Pero siempre sobre la base de gobiernos locales que ya son responsables con sus finanzas, y sobre todo, que han evolucionado positivamente y dejado atrás toda sospecha de malversación.

Ojalá el tema de un debate tan acalorado, tan intenso y que despierta tanta pasión fuera algún otro, relacionado con educación, con fomento económico, con modernidad y con desarrollo, en una palabra.

Pero la realidad es otra, estamos frente a un escenario sumamente complejo que parte de reconocer y hay que decirlo con claridad, una tragedia.

Gobiernos de todos los partidos políticos de izquierda, de centro, de derecha; a nivel federal, estatal o municipal durante muchos años no han sabido construir una respuesta duradera para brindar plena seguridad a la población.

Es un tema que ha sido responsabilidad de todos, y si me permiten decirlo de esta forma, no considero que alguna fuerza política podría exculparse de este problema.

México enfrenta un tema de seguridad interior desde hace décadas. Hay desde luego diversas opiniones sobre las causas que dieron lugar a ello, pero a este momento resulta indudable que la capacidad de los estados y municipios para hacerse cargo de la tarea fundamental y primaria que constituye el proveer condiciones mínimas de seguridad a la población ha sido considerablemente mermada, en algunos casos, y en otros incluso anulada.

Principalmente frente a la creciente amenaza que representan las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, al secuestro o a la venta ilegal de combustibles, recientemente.

Las organizaciones criminales han minado policías locales, estatales y municipales, se trata de una amenaza que cuenta con recursos financieros para corromper o violentar voluntades o incluso para incrementar considerablemente su capacidad de fuero. Ese es el tamaño y el tipo de enemigo que enfrentamos.

Desde luego pueden hacerse críticas a la estrategia que se ha seguido, se pueden, y yo agregaría: se deben cuestionar los despliegues de la fuerza castrense a lo largo del territorio nacional y en operativos supuestamente planificados, que ante la búsqueda de generar capacidad de reacción ante presuntas agresiones, no han aportado una solución efectiva y de largo plazo.

Los resultados han ocasionado datos preocupantes sobre el aumento en la tasa de homicidios, al igual que sobre denuncias de violaciones graves a derechos humanos, tales como detenciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, entre otras, lo que pone en evidencia, decía y recalco, la necesidad de cuestionar y revisar dicha estrategia en forma integral para mantener el orden público y la seguridad en el país.

Sin embargo, lo que hoy se tiene es una condición de debilidad de las capacidades institucionales locales en determinadas zonas del país, debilidad que, primero, coloca al ciudadano en un riesgo inadmisible frente a grupos criminales que son, eso sí, el mayor enemigo.

Esa condición lamentable, y en algunos casos trágica de debilidad, ha sido atendida por el Gobierno Federal, principalmente a petición de las autoridades locales que se han visto rebasadas o simplemente comprometidas en su capacidad de respuesta, lo que ha generado efectivamente la presencia de personal militar a lo largo y ancho del país realizando en los hechos tareas que no tienen una regulación específica, y que peor aún, resalto, pero aún son producto de la utilización discrecional de facultades por parte del Presidente de la República.

Hoy se tiene una presencia militar en estados y municipios sin condiciones de certidumbre o de certeza jurídica sobre la causa que obligó al despliegue, la temporalidad de su permanencia o los protocolos a que habrán de ajustarse.

Este aspecto de la discrecionalidad del Presidente para disponer de las Fuerzas Armadas no es menor.

Escuchaba hace un momento a un colega Senador, a quien respeto, y respeto mucho, hablaba sobre la participación del Ejército en eventos lamentables de los años 50s, 60s y 70s, de todos conocidos, pues es precisamente la discrecionalidad y la falta de controles lo que en su momento propició que eso ocurriera y que se generara además un nivel de desinformación que no sólo incrementó la zozobra y la incertidumbre de la población, sino que sobre todo minó la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, particularmente en sus Fuerzas Armadas.

Esa es la parte que consideramos de enorme importancia analizar, discutir y resolver en el dictamen que se presenta.

La incertidumbre que hoy se vive en México sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, genera una situación anormalidad constitucional que debe resolverse.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados contenía un texto cuestionable y dudoso, así lo dijimos y así lo dialogamos con los integrantes de las comisiones dictaminadoras.

Advertimos fundamentalmente dos aspectos: Uno, relacionado con la protección y salvaguarda de los derechos humanos bajo la aplicación de la ley; y el otro, relacionado con los límites a la libre manifestación de las ideas. Después de una amplia discusión con los integrantes de estas comisiones, se lograron avances importantes que, en lo personal, considero de una gran relevancia.

Primero. Se modificó la redacción del artículo 7 constitucional para aclarar que, efectivamente, el respeto, el resguardo de los derechos fundamentales tendría que estar directa, directamente referido a la norma constitucional y a los tratados internacionales de los que México es parte.

Segundo. Se modificó, efectivamente, el artículo 8 para sustraer la limitante que constituía sujetar las manifestaciones sociales a una condición pacífica que no encontraba sustento constitucional.

Estos, al igual que el resto de las modificaciones realizadas durante el análisis de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, se consideran importantes avances en la construcción de la ley.

Sin embargo, y es la materia del voto particular, existen otros aspectos en los que debe profundizarse.

Primero. Los niveles de coordinación con las autoridades locales.

Segundo. La permanencia o la temporalidad de la presencia de las fuerzas federales en el ámbito local.

Tercero. El debido restablecimiento de las capacidades de las autoridades locales.

En ese sentido, consideramos de la mayor relevancia entrar de inmediato al análisis de estos tres planteamientos, aun reconociendo que la materia de seguridad interior es competencia federal, de lo cual no tengo duda, y que corresponde a las autoridades de esa esfera competencial encargarse de su ejecución, lo cierto es que este proyecto no prevé suficientes mecanismos de coordinación que garanticen un adecuado aterrizaje en la esfera local, que salvaguarde la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios y, sobre todo, la posibilidad de que sean analizadas y atendidas sus sugerencias para la solución de una problemática que les es propia.

Por otra parte, si bien es atendible que el Presidente de la República tenga la facultad de prorrogar los efectos de la declaratoria de protección de seguridad interior cuando subsistan las causas que le dieron origen, también debe analizarse la conveniencia de que no exista ningún límite o control a esa prórroga, que abone a la certidumbre jurídica, tanto de las fuerzas federales desplegadas, como también y, sobre todo, de los propios gobernados.

Finalmente, preocupa que no se atienda con profundidad el problema del restablecimiento de las capacidades locales, de las autoridades locales. Esta debiera ser la premisa fundamental de la ley, pues, queda claro que a medida en que los estados y municipios recuperen su capacidad de brindar las condiciones mínimas de seguridad para la población, podrán entonces hablarse de normalidad constitucional.

Concluyo, Presidente, diciendo que la intervención de las fuerzas federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que originalmente debieron satisfacer las autoridades locales, es un tema controvertido, incómodo y en cierta medida penoso, pero no por controvertido e incómodo o penoso lo debemos ignorar, al contrario, esta condición apremia a su solución.

Muchas gracias, Presidente.

Gracias, compañeros.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Le suplico corrija usted el procedimiento que ordenó, debido a que usted está registrando asistencia, y lo que se le solicitó amablemente fue la verificación del quórum.

La asistencia se registra una vez en cada Asamblea, y no quisiéramos creer que el reloj parlamentario se adelantó y estemos ya tomando la asistencia del día viernes.

Entonces, digo, así como usted le hace, le hacemos nosotros también. Simplemente se le pidió la verificación del quórum, y usted está registrando asistencia.

Entonces, le pido se apegue al pedimento de la compañera, con apoyo de cinco Senadores, y lo registremos por el tiempo que señala el reglamento.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Blásquez.

Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, verificando quórum.

El reglamento no establece el tiempo para abrir el sistema electrónico para verificar quórum, y está sujeto a la interpretación de esta Mesa, en mi interpretación, lo más parecido a la verificación del quórum, es el registro de asistencia.

Entiendo, perfectamente que esto no es registro de asistencia. Está abierto el tablero electrónico por 90 minutos para que podamos verificar el quórum.

Yo lo que les pediría es, en virtud de la importancia de este dictamen y de esta discusión, escuchemos a los compañeros. Yo creo que esa es la esencia de un Parlamento, que podamos discutir, debatir y no estar discutiendo si el tablero se abre por 90, 10, 15 o 20 minutos.

Creo que el Reglamento, y le pediría que lo leyera con puntualidad, en ningún momento dice cuál es el tiempo mínimo máximo para abrir el sistema electrónico a la hora de la verificación de quórum.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

Con el debido respeto, en otras asambleas, siendo usted Presidente en otros trabajos legislativos, usted ha ordenado el procedimiento que se le está pidiendo, la verificación del quórum.

Y yo recuerdo que usted, en algunas ocasiones, llegó a declarar que no había quórum e intempestivamente se han suspendido asambleas.

Yo le pido, que así como usted señala, debido a la importancia de esta Asamblea y debido a la vigilancia ciudadana a la que estamos siendo sujetos, haga usted la verificación del quórum de acuerdo al criterio establecido, al criterio que usamos nosotros como legisladores y no abriendo un registro de asistencia por 90 minutos.

Se lo pido de manera comedida.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

Eso es exactamente lo que estamos haciendo, verificando quórum y con el único afán de poder desahogar esta discusión y de escuchar los argumentos en la tribuna de los compañeros, que me parece que eso es lo más

importante en este momento, es que abrimos la verificación de quórum por 90 minutos, busque usted en el Reglamento y 50 con puntualidad, que tengo que sujetarme a un tiempo mínimo, máximo para verificar quórum, con todo gusto atiendo su petición, verá que no existe y está a la interpretación de esta Mesa Directiva, interpretamos que estamos verificando quórum por 90 minutos y yo les pediría que escuchemos los argumentos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar, para presentar su voto en particular.

Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Presidente, yo de verdad estoy convencido que la normalidad del procedimiento parlamentario provoca normalidad en todo lo que se genera y es una responsabilidad de la Mesa Directiva crear este ambiente, este resultado final.

Sí me preocupa que se tomen decisiones así que no tienen ningún fundamento, usted funda esta determinación de los 90 minutos a partir del 58, que se refiere al tiempo que debe de poderse registrar asistencia antes del inicio de su sesión y 30 minutos más, así dice el 58. El 59 se refiere al tema de la verificación del quórum, lo dejo dicho para que no sea un antecedente.

Porque de verdad me parece un acto hasta de provocación, que establezca un tiempo de esta naturaleza, no tiene precedente, pero me acojo a que la Mesa Directiva interpreta, interpreta el Reglamento del Senado, y acepto y acato lo que usted dijo, porque tiene esa facultad aunque no esté de acuerdo con ello.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Presidente Barbosa, usted fue Presidente de este Senado y le agradezco mucho su comentario.

Me parece que en este momento está claro que hay el quórum suficiente para continuar con la sesión, pediría que se cerrara el sistema electrónico y escucháramos a nuestro compañero el Senador Rabindranath Salazar.

Tiene el uso de la voz desde su escaño, la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Insistimos, lo que le dijo el Senador Barbosa es exacto.

Usted escribió un artículo y está equivocado, porque el artículo 58 es muy claro, es para la asistencia, yo esgrimí el 59, donde dice en ese momento, a simple vista no había, cuando habían pasado cinco minutos, habían 31 Diputados presentes… Senadores presentes.

Entonces a ese momento a simple vista cuando hay devoción por la legalidad, porque ustedes son muy devotos de la ley cuando les conviene, pero esto es un acto de marrullería y deja un precedente que provoca a que entonces, si aquí hay anarquía, pues vamos a ser anárquicos.

Entonces eso es lo que vamos a hacer, porque usted no se está dando a respetar, nos inventa artículos que no existen, para nada más dar el tiempo, 90 minutos, no mejor convócalos a que todos vengan, que estemos asistiendo a este debate, que cuando menos escuchen los puntos de vista que son en contra de lo que ellos por la línea van a votar como borregos, sin haber leído y sin saber de qué se trata, eso es lo que queremos y lo que le pedimos amablemente, respetuosamente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Gándara.

El Senador Ernesto Gándara Camou: (Desde su escaño) Señor Presidente, con todo respeto a todas y todos nuestros compañeros del Senado de la República, estamos hablando de respeto al Reglamento de legalidad y desde luego no de simulación.

Hay aquí gente que está hablando, Senadores de la República que no marcaron su verificación de quórum, su verificación, su presencia.

Le pido, señor Presidente, que cuando dé la palabra, pues se sepa que existe legalmente en esa verificación la persona Senador o Senadora que hicimos la verificación de quórum y no puede ser que estemos hablando que no hay quórum cuando están hablando como si fueran, pues la verdad personas inexistentes.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gándara.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, Presidente.

Yo solamente le pediría a la Senadora Layda Sansores que nos respetemos entre todos.

Yo siempre, yo siempre la he respetado, creo que aquí hemos tratado siempre de cuidar las posturas, cada quien sube a la tribuna, manifiesta si está a favor o en contra, se vale, pero que no nos descalifiquemos ni nos llamemos borregos unos a otros, porque podríamos entrar en un debate de descalificaciones, cuando el debate de fondo es tratar la Ley de Seguridad Interior y la definición que cada legislador tome queda en su conciencia.

Entonces con el respeto que yo le tengo y que además, siempre he sido, siempre hemos tenido. . .

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora Gómez del Campo, concluya, por favor su participación.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Bueno, solamente que nos respetemos, que guardemos, de verdad aquí la compostura, tiene que ser este un debate de altura, es un tema fundamental para los ciudadanos, efectivamente, para los ciudadanos.

Muchas gracias, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Compañeros, les pediría que pudiéramos seguir desahogando esta sesión.

Le pediría al Senador Rabindranath Salazar, hiciera uso de la tribuna para presentar su voto particular.

Adelante, Senador.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Yo le pregunto al Presidente, tenemos ya, ¿contamos con el quórum, Presidente o esperaremos los 90 minutos?

Sí, Presidente, ante un debate tan importante sí es importantísima la presencia de los legisladores, pues para poder ver la posición de cada uno. Yo sí le pediría que siga abierto el tablero pues para ver con quién contamos y quién no.

Amigas y amigos Senadores:

En México requerimos seguridad sin guerra, en nuestro país, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, son un modelo de patriotismo, solidaridad y lealtad, ejemplar ha sido su posición institucional en momentos de tragedia, el auxilio a la población civil prestando su valiosa ayuda en caso de desastres naturales para preservar el orden, el auxilio de las personas y sus bienes, así como para la reconstrucción de zonas afectadas mediante la activación del plan de auxilio a la población civil en caso de desastres conocido como el Plan DN-III.

Han coadyuvado también con las tareas policiales en el combate contra la delincuencia organizada, y lo más importante, la protección de las libertades, es decir, de nuestra soberanía nacional.

Son por estas y por muchas más razones que esos bonos de credibilidad no pueden seguir siendo dilapidados, cuando las Fuerzas Armadas se le exigen tareas que no les competen constitucionalmente, como es el caso de las funciones de seguridad pública, prevención y persecución de los delitos.

Entendemos la preocupación de quienes han afirmado que al Ejército es preciso dotarlo del marco jurídico idóneo que permita una legal, viable y prudente inclusión de su presencia en labores que competen coordinadamente a la policía.

Particularmente en un momento tan complejo para nuestro país, donde la fallida estrategia de la guerra contra el narcotráfico iniciada el pasado sexenio y donde las corporaciones policiales han sido rebasadas, cooptadas e ineficientes, generando una mayor escalada de violencia, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos.

Sin embargo, esa preocupación no debe ser justificación para medidas con un grado extremo de desesperación como la que da cuenta en el contenido de la minuta de la Ley de Seguridad Interior, una ley sin sustento constitucional y con ambigüedad en la falta de controles para la regulación del uso de la fuerza, como ya se ha venido mencionando.

Una ley que invade competencias constitucionales por parte de Fuerzas Armadas a ministerios públicos en materia de investigación y persecución de los delitos.

Una ley que no define de manera clara el término de uso de fuerza, por lo que el actuar de las instancias de seguridad interior ante cualquier situación no será proporcional e incluso irracional al no ajustarse a los estándares internacionales en la materia.

Una ley que por sus contenidos y entrada en vigor será objeto de una lluvia de amparos y acciones de inconstitucionalidad por sus contenidos totalmente regresivos a los derechos humanos.

Y contradictorios, además, con diversos artículos constitucionales en relación al debido proceso, a la protección de datos personales, a la máxima publicidad y a la falta de facultades por el Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior, entre otras.

Son éstas y otras preocupaciones no solamente expresadas por mí o por mi grupo parlamentario del PT-Morena, pueden ustedes ver todos estos días la preocupación de la gente que se ha venido a manifestar en torno al Senado. Pueden ustedes ver la preocupación de la gente en las redes sociales, pueden ustedes advertir múltiples voces a nivel nacional como internacional, por ejemplo, los académicos de las universidades, el ombudsman nacional en derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y por la comunidad internacional, tan es así que Amnistía Internacional y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab, han advertido acerca de la regresión que significaría aprobar esta ley en los términos que viene.

Asimismo, tenemos también una copia del oficio que ha enviado la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Evelyn Gebhardt, mediante una carta que ha remitido a todos mis compañeros Senadores donde ha expresado su preocupación respecto de la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior, ya que estimó que no se cumple con las recomendaciones que diversos organismos internacionales han emitido a México para resolver los retos en materia de seguridad pública.

Por otro lado, resulta preocupante que una vez más quienes son mayoría en este Congreso simulen tomar en cuenta las voces de expertos, académicos, universidades, gobernadores, y que de forma fast track, como en otros casos, pretendan aprobar una ley que lo único que generará es un retroceso al principio de progresividad inmerso en los derechos humanos.

La minuta que incluye la Ley de Seguridad Interior es un infortunio legal por donde se observe, en primer lugar, porque este Congreso no tiene facultades para discutir y aprobar una Ley de Seguridad Interior desde el ámbito del derecho constitucional mexicano para el Legislativo federal sus facultades son expresas y limitadas, es decir,

para que nuestro Congreso de la Unión pudiera emitir la ley en mención se requiere de facultades inmersas en la Constitución federal; no obstante, el artículo 73 constitucional no le faculta expresamente a ninguna de las dos Cámaras la emisión de una ley en materia de seguridad interior, por lo que de legislar en esta materia traería como consecuencia un acto nulo.

Por otra parte, se pretende darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, lo anterior no garantizará una mayor seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, ya que la nula ausencia de controles y la indebida regulación del uso de la fuerza permitirán que las Fuerzas Armadas sean utilizadas para reprimir protestas, incluso pacíficas, de la sociedad civil, situación que concuerda con las declaraciones del General Salvador Cienfuegos.

Voy a leer textualmente lo que ha expresado el General en algunos medios de comunicación.

Leo textual.

“Se pretende regular a las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, situación que desnaturaliza su función primordial que es defender la integridad, la independencia y, sobre todo, la soberanía de la nación”.

En suma, este Congreso no tiene facultades para legislar en la materia ya que se mezclan los conceptos básicos de seguridad interior pretendiéndola mañosamente hacerla parte de la seguridad nacional.

Preocupa además que esta ley pretende aprobarse previo a los comisiones federales y locales, considerados los más importantes en la historia reciente de nuestro país, por lo que resulta sospechoso militarizar al país y legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas ante posibles situaciones que atenten al orden constitucional y al fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno.

Lo anterior, sin lugar a dudas, puede concatenarse con el actuar de las autoridades electorales en los últimos procesos de los años 2016 y 2017, en donde como es costumbre quedó evidenciado por la sociedad la ineficacia de los encargados de evitar actos violatorios de la ley.

En dicho punto hoy resulta contradictorio emitir discursos legaloides para justificar la militarización del país y buscar un efectivo Estado de derecho, cuando hace poco más de un mes los que hoy cometen este atropello castigaron al Fiscal que se atrevió a aplicar la ley, al tiempo de evidenciar casos de corrupción y el uso indebido de recursos para financiar campañas electorales.

Sólo por recordar, más de 12 países han generado sanciones a diversos funcionarios desde generales, Diputados, vicepresidentes y presidentes, y tenemos lamentablemente conocimiento que nuestro país no avanza en la investigación en el lamentable acontecimiento de corrupción de Odebrecht.

La obligación pretendida en el artículo 31 de la ley en comento, a cargo de las autoridades federales, locales y municipales, incluso órganos autónomos de proporcionar a instancias de seguridad interior información confidencial de los ciudadanos sin mediar mandamiento u orden judicial alguno, además de ser inconstitucional y regresivo a los derechos humanos en materia de protección de datos personales será la puerta para poder intimidar y perseguir a quienes pretendan el siguiente año iniciar la lucha por un cambio verdadero para nuestro país.

Nos resulta preocupante la prisa por avanzar en la aprobación de lo que supuestamente es una importante ley para los mexicanos que contrasta con lo poco importante que es para la gran mayoría parlamentaria aquí presente en no tener Fiscal General de la República desde el 7 de octubre, así como también titular de la FEPADE.

Pendiente también el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, recuérdenlo bien, la ley que hoy se pretende aprobar es y será una de las más rechazadas por el sector social, organizaciones civiles, instituciones y órganos autónomos mexicanos, incluso por órganos internacionales, siendo su aprobación el reflejo de la incompetencia de los gobierno para contener la creciente ola de violencia, así como de la ineptitud y falta de voluntad para atacar de raíz los orígenes de la inseguridad que flagela a los mexicanos, tales como el desempleo, la desigualdad, la pobreza, la migración, la falta de oportunidades, el atraso educativo, entre otros.

Compañeras y compañeros Senadores.

Pregunto a ustedes:

¿Qué hay detrás de la aprobación de esta ley que legitima el totalitarismo en las calles a 200 días de las elecciones y que posibilitaría la represión de conflictos postelectorales?

¿Por qué se insiste con inusitado interés en aprobar una ley tan evidentemente inconstitucional?

Y finalmente, ¿por qué aprobar y decretar el fracaso de la política de seguridad pública militarizando por ley al país y exponiendo a una institución que ha basado su prestigio precisamente porque no realiza las funciones que estamos a punto de otorgarle?

Esas preguntas deberán responderlas de frente a la nación quienes voten a favor de esta grave decisión parlamentaria. Por lo pronto es evidente que el impulsor de esta legislación deberá ser considerado para la historia parlamentaria como el enemigo número uno del Ejército mexicano.

Por último, que quede claro, nosotros no estamos en contra del servicio y vocación de nuestras Fuerzas Armadas, sino que estamos en contra del uso faccioso e inconstitucional que se pretende dar a éstas. Por lo que no está de más recordarles que aquellos que avalen el presente dictamen cometerán un agravio contra nuestro pueblo.

Por lo anteriormente señalado, mi voto será en contra.

En México urge seguridad sin guerra.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Salazar.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con la venia, señor Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores, buenas tardes.

Sin duda, nos ocupa un asunto de la mayor importancia en nuestro actuar legislativo, estamos ante una pieza de legislación largamente delineada, puntualmente planteada y que ha propiciado la polaridad de los argumentos y la polémica, no sólo sobre el ordenamiento mismo, sino con respecto a la función constitución del Poder Legislativo Federal.

Quiero hacer un reconocimiento expreso a la tarea diligente, profesional y de alta, de miras, que ha campeado en la actuación de las comisiones dictaminadoras.

Nuestras compañeras y compañeros Senadores de las Comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional y de Marina, de Estudios Legislativos, Segunda, tienen nuestro más amplio reconocimiento.

No me refiero únicamente a la recepción, dictamen y deliberación de la minuta de la Ley de Seguridad Interior, remitida por la Cámara de Diputados, sino por todo el proceso de conocimiento y análisis de las dos iniciativas en la materia que se presentaron en nuestras Cámaras, suscritas por los distinguidos compañeros Senadores Roberto Gil Zuarth y el Senador Miguel Barbosa Huerta.

A su vez, se siguió con disciplina y compromiso el proceso de análisis, deliberación y dictamen de las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados.

Este proceso, compañeros Senadores, abrimos distintos espacios para recibir puntos de vista de las organizaciones sociales y estudiosos de los temas de la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública.

Son ejercicios de diálogo que permiten conocer razones y enriquecer visiones, pero nuestra responsabilidad es resolver democráticamente ante este honorable Pleno.

Se ha actuado con seriedad, con profundidad, con convicción para aportar al país un ordenamiento que conjunte el apego a la Constitución y el sustrato de la realidad imperante para garantizar la seguridad interior de nuestro país.

Al apreciar la minuta de la Cámara de Diputados no podemos dejar de afirmar que se trata de un instrumento emanado específicamente de las reformas constitucionales del 2004, que establecieron la facultad del Congreso General para legislar en materia de seguridad nacional y que, también, determinaron las vertientes de la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación que integran el concepto de la seguridad nacional.

No podemos desligar la minuta a discusión de su naturaleza como un ordenamiento particular en materia de seguridad nacional.

No estamos ante la emisión de un ordenamiento en materia de seguridad pública, ni tampoco en la vertiente de la seguridad nacional que corresponde a la defensa exterior de la Federación.

Nos hacemos cargos de que en diversos ámbitos se ha señalado que la propuesta de Ley de Seguridad Interior tiene como propósito conferir a las Fuerzas Armadas responsabilidades de seguridad pública.

Se dice incluso que estamos en el umbral de la militarización de nuestro país, son presunciones y afirmaciones sin sustento que debemos controvertir, pero no sólo porque no les asista la razón, sino porque constituyen una ofensa que no merecen las mujeres y los hombres que integran nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea.

El papel de los indultos armados, como ejemplo, de patriotismo y servicio a la República en situaciones que ponen en peligro a la población o ponen en riesgo a las instituciones de nuestro sistema democrático de gobierno, no merece que se hagan juicios apresurados e irreflexivos sobre el ordenamiento que hoy estamos discutiendo.

Compañeros, ¿por qué hemos llegado a este punto?

Porque existen situaciones, estoy pensando ahora en las manifestaciones más peligrosas y violentas de la delincuencia organizada que pisotean los derechos de las personas y amenazan el funcionamiento de las instituciones públicas en el cumplimiento de los más altos objetivos, como son brindar seguridad a la población, garantizar el disfrute de sus libertades y proporcionar el desarrollo del potencial y capacidades de nuestro pueblo para alcanzar sus objetivos de desarrollo democrático, de crecimiento económico, de justicia social, de impulso al bienestar, así como el progreso de toda nuestra sociedad.

Permítanme exponerlo de una forma esquemática.

El Estado mexicano tiene al pueblo que lo constituye y da sustento, al deber de preservar la viabilidad de sus objetivos nacionales. Corresponde al Presidente de la República preservar la seguridad nacional, que incluye las acciones necesarias de seguridad interior.

Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo Federal puede disponer de ellas para salvaguardar la seguridad interior; y la seguridad interior puede estar en riesgo y ser objeto de amenazas por distintos factores, una epidemia de salud, un desastre natural, o la violencia contra la población de grupos delictivos pueden constituir esos riesgos o esas amenazas.

Pero el Estado mexicano es una Federación y tiene distintos órdenes de gobierno con competencias propias, en ocasiones concurrentes, en ocasiones coincidentes y en ocasiones exclusivas.

Sé que ahora observamos con mayor atención las manifestaciones delincuenciales que afectan la seguridad de las personas en nuestro país.

En lo esencial, la seguridad pública es competencia de los municipios, de las entidades federativas y de la Federación; y la persecución del delito es competencia de las entidades federativas en lo local; y la Procuraduría General de la República en lo federal.

Pero el ciudadano de cualquier de las entidades federativas representadas en este Honorable Senado es uno solo e invisible, es ciudadano en el municipio, en la entidad federativa y en la República, no hay parte de él que sólo sea municipal, o que sea local, o sólo sea federal, y el problema que enfrenta es el deterioro de las condiciones necesarias para vivir y desarrollarse en un ambiente de paz y tranquilidad social.

Ante esa descripción, que puede no ser lejana en lo que ocurre en algunas comunidades de nuestro país, distintos integrantes del Poder Legislativo propusieron expedir la Ley de Seguridad Interior para atender una doble preocupación: por un lado, la necesidad impostergable de construir en donde no existen y de fortalecer las que ya existen, las instituciones de seguridad pública.

Y, por otra parte, otorgar, nuestras Fuerzas Armadas, la certeza del orden jurídico sobre la estricta naturaleza de su colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno ante manifestaciones de la delincuencia organizada, que para el Estado mexicano constituyen una amenaza de seguridad interior.

Si la situación que se enfrenta en una determinada entidad federativa o región de nuestra República implica una amenaza a la seguridad interior, podría desarrollarse el procedimiento que permita sustentar con certeza el papel que frente a esa amenaza desarrollaran las Fuerzas Armadas, siempre sobre la base de la insuficiencia, de las capacidades ordinarias, para hacerles frente.

Y esa determinación se encuentra vinculada a un elemento que en muchas entidades federativas no ha sido elusivo conformar las instituciones de seguridad pública que se requieren para hacer frente a las funciones de prevención del delito, de vigilancia para el imperio de la ley; de inteligencia ante el fenómeno delictivo y, en su caso, de reacción frente a quienes recurren a la violencia en la secuela de las conductas delictivas.

Si las Fuerzas Armadas permanentemente van a actuar, es porque existe una amenaza a la seguridad interior, y si esa amenaza a la seguridad interior está vinculada con las insuficiencias y deficiencias institucionales de los órdenes local y municipal, deberán adoptarse a las medidas indispensables para superar esta situación.

Hay una experiencia que estamos incorporando en la normatividad, también de carácter doble, con el cual queremos descubrir un panorama de incentivos correctos.

Para la Fuerza Armada permanente la sujeción de su esfera de actuar para perseverar la seguridad interior, y, por ende la seguridad nacional.

Y, para las autoridades responsables de la seguridad pública, el objetivo ineludible de construir sus propias capacidades institucionales con una programación cierta para el tiempo y evaluable en los resultados para honrar su compromiso con la comunidad, con la sociedad que sirven.

También se ha mencionado que en esta ley se contienen elementos que ponen en riesgo la efectiva vigencia de los derechos humanos.

Compañeros, no comparto esas consideraciones, de ninguna forma la ley implica que dejará de tener estricta aplicación para toda autoridad lo dispuesto por el artículo 1 de nuestra ley fundamental, que establece el reconocimiento a los derechos humanos a toda persona que se encuentre en nuestro territorio sea porque contengan en la propia Constitución o en los tratados internacional de los que formamos parte y específicamente en lo relativo a los derechos humanos y sus garantías, no puede suspenderse ni restringirse, sino en los términos de qué manera expresa establezca nuestra norma suprema.

Compañeras, compañeros Senadores:

Quiero insistir que frente a ciertos hechos y situaciones lo que está en peligro de la marcha del Estado mexicano para la consecución de los objetivos nacionales, que nuestro pueblo se ha dado libre y democráticamente, situaciones de amenaza a la seguridad interior, y esa amenaza agravia, vulnera y en muy lamentables ocasiones transforma a nuestras y nuestros compatriotas en víctimas; de hecho de la delincuencia en común y de la delincuencia organizada.

El hilo vinculante entre el reto de construir y fortalecer estas instituciones y vulneración a libertades y derechos fundamentales de las personas es afirmar que se debe garantizar la seguridad interior de nuestro país.

Por eso, compañero, nosotros en el Partido Verde votaremos a favor, les pido a ustedes su reflexión para lograr esa aprobación.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Aréchiga.

Tiene el uso de la tribuna a nombre del Partido de la Revolución Democrática la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, con su venia, señor Presidente.

Todo diseño del Estado democrático moderno descansa en una premisa. El poder público funda su legitimidad en un diseño constitucional que pone los derechos fundamentales de las personas en la más alta jerarquía de valores y reglas.

La autoridad del Estado gira en torno a esta esfera de derechos, desde aquí fluye el diseño normativo del Estado en general, y del uso de la fuerza en particular.

Al Estado se le entregan poderes legítimos de uso de la fuerza, precisamente para garantizar el ejercicio de los derechos mencionados.

La fuerza legítima se usa a favor, nunca en contra de los derechos; de lo contrario, ya no es legítima.

Surgen así dos obligaciones del Estado: neutralizar el uso de la fuerza por parte de los actores privados, y evitar el uso propio de la violencia en formatos no legítimos.

Entonces, el Estado puede usar la fuerza, pero no puede hacerlo de ninguna manera, de cualquier manera, ya que de lo contrario él mismo incurriría en aquello que está llamado a evitar.

De allí el principio de la racionalidad, racionalización del uso de la fuerza el cual se traduce en conceptos y reglas de control que envuelven la violencia al Estado en formatos restrictivos, es decir, en normas que trazan un continuo que empieza por el menor y van al mayor uso posible de la fuerza.

Los países diseñan normas para asegurar estos formatos, y la comunidad internacional hace lo propio, no hay uso legítimo posible de la fuerza sin reglas.

El mandato normativo nacional e internacional del uso racional de la fuerza asigna a la institución armada-civil denominada policía, el rol regular, la protección a la ciudadanía. Ahí comienza en el extremo mínimo posible el uso de la fuerza, y el mandato mencionado, el mandato mencionado asigna a la institución armada militar, el rol de uso máximo de la fuerza en escenarios no regulares, ¿cuál es el caso de la guerra entre estados o interna?

Nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es clara en ese sentido.

En primer lugar el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.

Este precepto constitucional fue reformado en el año 2006, por lo que cualquier tesis jurisprudencia o considerando de acción de inconstitucionalidad que pretendan hacer valer para justificar la presencia de los militares en las calles haciendo labores de policía, no es vigente; por más que se esfuercen en invocarlas.

La acción de inconstitucionalidad 1/1996 se determinó previo a la modificación del artículo 21, y especialmente a la materia de derechos humanos que se reformó en 2011.

Hoy, la perspectiva de derechos humanos obliga a la Corte, por cierto a resolver de manera diferente.

La Constitución hace una distinción muy tajante, muy radical entre tiempos de paz y tiempos de guerra.

En tiempos de guerra a partir de una declaración aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión en términos de los artículos 73 y 89 de la Constitución, el presidente en su carácter de Jefe de Estado declararía que estamos en guerra, y esto permitiría la movilidad de las Fuerzas Armadas del país por todo el territorio nacional.

Por otro lado, en uso de la facultad conferida al Presidente de la República en la fracción VI del artículo 89 de la Constitución puede emitir una declaratoria, únicamente, en materia de seguridad nacional, así lo establece el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2002, por el que se adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73, fracción XXIX-M, y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.

Por cierto, aquí tenemos, en este Senado de la República, a quien presidía la Comisión de Puntos Constitucionales, en ese entonces, hoy, el Senador Manuel Bartlett.

Nunca, en ese dictamen, se refirió, por cierto a la seguridad interior, como aquí se quiere entender. Todo el dictamen suyo, como Presidente, fue basado en seguridad nacional.

Señoras y señores Senadores:

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que esta ley establece, no tiene sustento constitucional.

Repito. La única declaratoria que puede emitir el Ejecutivo, es en materia de Seguridad Nacional.

La Constitución es clara. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar.

El Constituyente del 57, y en especial, al emitir su voto particular, Ponciano Arriaga, estableció: “El que suscribe ha creído siempre, como ahora cree, que el poder militar debe ser enteramente pasivo”.

Como ustedes saben, señoras y señores, seguramente recuerdan el voto particular de don Ponciano Arriaga, que fue aprobado expresamente por una mayoría de 74 contra 5 votos, así como voto particular, y por tanto, desde ahí el Constituyente del 57 quedó vinculado a estos mismos extremos.

Quienes argumentan que el uso de las Fuerzas Armadas está sujeto a los criterios de excepcionalidad y temporalidad, son falaces en sus argumentos.

Primero. La ley perpetúa el uso del Ejército y la Marina en funciones de Seguridad Pública. No hay excepcionalidad ninguna.

Estamos normalización de las Fuerzas Armadas a las calles para revisar tareas de policía, e incluso de primer respondiente, es inconstitucional, e invierte el principio de uso racional de la fuerza dominante en el mundo democrático contemporáneo al ubicar el instrumento de uso máximo de la fuerza en el papel de recurso regular, multiplicando ad infinitum los riesgo del exceso.

No hay excepcionalidad ninguna, cuando en más del 75 % del territorio nacional, las Fuerzas Armadas se encuentran haciendo labores de seguridad pública.

Este es el mapa, este es el mapa. Todo lo rojo, ahí están las Fuerzas Armadas.

Este es el mapa de la verdad de la presencia de las Fuerzas Armadas en las entidades federativas.

No hay excepcionalidad ninguna.

Esta anomalía comenzó, por cierto, hay fechas históricas que tenemos que recordar, el 12 diciembre de 2006, con Felipe Calderón. Ese sexenio terminó, por cierto, con diez entidades federativas con presencia militar, hoy tenemos 28 entidades con Fuerzas Armadas teniendo labores de seguridad pública.

Segundo. Emitir una declaratoria por un año, y emitir otra al año siguiente, no cumple con el requisito y el criterio de temporalidad. Es una simulación que se cubre con un simple requisito administrativo, sin control, sin contrapesos.

En relación al criterio de subsidiaridad, en efecto, las Fuerzas Armadas están y estarán haciendo labores por defecto de las policías.

Ergo. Las Fuerzas Armadas están y estarán en labores de seguridad pública. Sus mismos argumentos les desnudan, entre otras razones, entre otras razones, porque no hemos atendido el problema fundamental de no tener las corporaciones policiacas que se dediquen a hacer su tarea de garantizar el derecho de la seguridad pública de las y de los mexicanos.

En todo caso, la verificación de cualquiera de estos criterios, tendría que ajustarse a algún control, y en esta ley no hay controles, ni parlamentarios, ni jurisdiccionales, ni de ningún tipo.

Lo hemos visto, lo hemos experimentado. Once años con las Fuerzas Armadas haciendo labores de policía, nos han dado más que números y estadísticas, nos han dejado miles de muertos, miles de personas desaparecidas, miles de personas desplazadas de manera forzosa, miles de violaciones a los derechos humanos y ha acrecentado los niveles de violencia a tasas que no veíamos desde hace 20 años. Esa realidad, señoras y señores, no lo podemos ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo.

La ley que hoy pretenden aprobar con la denominación de Ley de Seguridad Interior, crea un concepto ambiguo, oscuro e híbrido entre la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública.

No hay nadie en este Pleno, nadie, ni siquiera los promoventes, que pueda determinan con precisión qué es la Seguridad Interior, mucho menos con las definiciones que la ley establece, mezclando términos de Seguridad Nacional con aquellos que justifican suspensión de garantías, de acuerdo al artículo 29 de nuestra Carta Magna y, con lo que en los hechos es Seguridad Pública.

Ayer mismo, en la reunión de Comisiones Unidas, debemos recordar, en las que se aprobó este dictamen, se escucharon argumentos acalorados en los que se desgarraban las vestiduras diciendo que la gente está harta de extorsiones, de secuestros, de cobros de piso, bueno, hasta de robo en microbuses, que la gente está harta de la inseguridad.

Escúchense, Senadoras y Senadores, Presidente, voy a terminar. Todo ello, todo ello, escuchamos ayer es materia de Seguridad Pública, no de Seguridad Nacional.

Si ustedes no pueden diferenciar qué es materia de Seguridad Interior, y qué es materia de Seguridad Pública, quienes operen esta ley, mucho menos podrán diferenciarlo.

Las leyes que se expiden deben cumplir, por lo menos, los principios de legalidad y taxatividad, así lo ha determinado reiterado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta ley no cumple, no se acerca siquiera a esos principios a los que estamos obligados, así es que o estamos en un momento de guerra declarado en términos de los artículos 73 y 89, o estamos en una situación de suspensión de garantías declarada conforme a los procedimientos del artículo 29 o estamos en la situación en donde en términos del artículo 89 constitucional fracción VI en la que el Presidente de la República hace una declaración expresa mediante un decreto fundado y motivado, y motivando una situación en la que se declare que es necesario preservar la seguridad nacional, no nos confundamos.

A quienes quieren hacer creer que esta ley tiene sustento constitucional, es decir, a quienes están aquí y van a votarlo, a quienes dar certeza a las Fuerzas Armadas haciendo labores de policía, les decimos, una ley secundaria no hace constitucional lo que en origen es inconstitucional, no tenemos facultades para legislar en materia que corresponde a las entidades federativas.

Otro artículo violentado, el 124, a quienes dicen: "No vamos a militarizar el país, porque el país, porque el país ya está militarizado". Sí, en efecto, a consecuencia de ello, tenemos las condiciones de seguridad pública, de muertes, de violaciones a derechos humanos que hoy vivimos en México, si queremos resultados diferentes, hagamos algo diferente, esto perpetúa lo que las evidencias nos gritan que no funciona.

Lamentamos profundamente la simulación de diálogo, de la que fueron objeto quienes desde la sociedad civil, la Academia y los organismos internacionales se acercaron a este Senado de la República dando un voto de confianza y creyendo que en verdad serían escuchados.

Por último, quiero informar que previamente antes de terminar, entregaré a la Mesa Directiva, diversas comunicaciones de organismos internacionales, organismos públicos de derechos humanos, de especialistas en derecho constitucional y derechos humanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil pronunciándose en contra de la aprobación de esta ley u que no fueron tomados en consideración, pero que le pido al Presidente de la Mesa, sean incluidos en el Diario de Debates íntegramente.

Estas comunicaciones también debieron estar en el dictamen que presentamos las Comisiones Unidas. Por ello solicito que se integren, señor Presidente al Diario de Debates.

Asimismo, en este momento también vamos a entregar dos anexos, el primero, que incluyen las recomendaciones hechas a México, tanto del sistema universal como del sistema interamericano en materia de seguridad pública y específicamente en materia del uso de las Fuerzas Armadas y fortalecimiento de las instituciones civiles, el segundo anexo que voy a entregar contiene un listado de 123 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto a la Sedena como a la Secretaría de Marina por violaciones a los derechos humanos en un lapso del año 2007 al 2016.

Además, entrego el listado de la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en materia de Fuerzas Armadas, en contra de México por involucramiento de elementos de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo anterior, y agradezco su paciencia, el voto de las Senadoras y de los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática será en contra de este dictamen.

Y adelantaremos, por supuesto las reservas a cada uno de los artículos.

Yo he manifestado mi preocupación de diversas formas.

He dicho casi suplicando, de veras, no partidizar la discusión de esta ley, pero ni modo, hoy ustedes con su decisión la están partidizando, lo lamento profundamente.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora De la Peña.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Nuestro posicionamiento va a ser para situar el tema de la seguridad en México y todos los pasos que ha seguido, porque la Ley de Seguridad Interior que hoy se va a imponer por el PRI y sus aliados, es el último eslabón en la construcción de un Estado Policiaco Militar, subordinado, lo he dicho, pero nadie lo oye a los Estados Unidos.

La construcción del Estado Policiaco Militar, elaboración paulatina de un sistema jurídico concatenado y planeado en el exterior.

El Estado Policiaco Militar significa un estricto control social por las Fuerzas Armadas, control social, eso es lo que se persigue al mantener al Ejército y a la Marina en las calles de México.

Las amenazas ya nos dijeron, no son externas, no hay enemigo externo, es nuestro socio, enemigos internos dicen, el terrorismo, la guerra contra las drogas, crimen organizado, ese es el enemigo, ese es el enemigo de la seguridad nacional y del Estado Policiaco Militar.

Las empresas transnacionales exigen la garantía de la represión política y militar, lo hemos discutido aquí y se van a acordar.

El Estado Policiaco Militar suma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no es una ley aparte, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de noviembre del 96, las reformas al Código Penal Federal de ese año que establece el tipo penal de la delincuencia organizada, la delincuencia organizada entra, unión de tres personas o más, para cometer cualquier delito, delincuencia organizada, puede ser cualquier delito.

Si mencionan al terrorismo, pero no nada más, cualquier delito es delincuencia organizada, si así lo quieren.

Permite las operaciones en cubiertas, la intervención de las comunicaciones privadas, ya, aquí en estas leyes que aquí se aprobaron, como parte de este establecimiento del Estado Policiaco Militar que hoy concluye.

En 2002 México se integró al Comando Norte de los Estados Unidos tras los atentados de Nueva York el 11 de septiembre del 2001 y de la expedición importantísima de la Patriot Act que ya nos rige.

El término de seguridad interior no deriva de nuestra historia constitucional, deriva del concepto Homeland Security para el 2001, los riesgos y amenazas, repito, no se refieren al exterior, claro, sino la amenaza al interior en donde los enemigos son los terroristas, los narcotraficantes, los riesgos y amenazas, repito no se refieren al exterior, claro, sino la amenaza al interior, en donde los enemigos son los terroristas, los narcotraficantes, los invasores, los que quieran devenir, se trata de control social.

El 28 de octubre de 2013, se celebró en México la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA que manejan ya saben quién, ahora hasta nosotros, que aprobó la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA, la declaración sobre seguridad en las Américas, y esta declaración sobre seguridad establecida por la OEA, seguridad en las Américas, introdujo las nuevas amenazas de seguridad nacional de los Estados Unidos, terrorismo, crimen organizado, inmigración ilegal. Aunque ajenas la hicieron propias todos los países de América Latina.

El 5 de abril de 2004 se publicó la Reforma Constitucional en los artículos 73, fracción XXIX-M, y 89 fracción VI para introducir, importar a los Estados Unidos ese concepto de seguridad nacional, es la consecuencia de la aprobación de este catálogo, decálogo de la OEA, inmediatamente se incorpora a la Constitución de la República. De ahí surge ese concepto de esa movilización, de esa manipulación de la OEA a todos los países de América Latina que estableció estas medidas y se meten en la Constitución.

Si no entendemos esto y si no le damos seguimiento no entendemos por qué aparece de repente una nueva concepción de la seguridad nacional, hay que reformar la Constitución, para seguridad interior, para seguridad nacional, ese concepto de seguridad que es al que le preocupa Estados Unidos, no a nosotros, nosotros no tenemos los problemas del terrorismo por las guerras extranjeras, nosotros no tenemos una serie de

preocupaciones, pero se convierten en amenaza interior, desaparece la amenaza de cualquier poder hegemónico de América Latina, que ya sabemos cuál es, esa ya no es amenaza, las amenazas son las que a ellos les interesa para que se persigan aquí para su propio beneficio.

El 5 de abril de 2004 se publicó la Reforma Constitucional a los artículos 73, digo ya lo comentábamos, importando el concepto de seguridad nacional.

La Ley de Seguridad Nacional se publicó en el Diario Oficial en enero del 2005, su artículo define a la seguridad nacional, como lo decíamos, frente a las amenazas y riesgos que definen la rebelión, el terrorismo, el sabotaje, pero faculta además la intervención de comunicaciones y las operaciones encubiertas.

Otro eslabón, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN, suscrito por Vicente Fox en marzo de 2005, que involucra Canadá, Estados Unidos y México, en un esfuerzo conjunto integrado, nuestras políticas de seguridad deben ser para garantizar la integración de los Estados Unidos, Canadá y México, con los objetivos de seguridad de los Estados Unidos.

En 2009 y 2013 el ASPAN se modifica, cambia de nombre y se llama diálogo económico de alto nivel, es lo mismo, ese lo utiliza Zedillo, y ahí se dan un sinnúmero de acuerdos económicos, políticos de seguridad que comprometen a México a la política definida entre el país hegemónico y el pequeño Presidente Peña Nieto sin que lo apruebe el Senado, nadie sabe qué van arreglando, sino simplemente lo que sacan en los boletines que quieren.

Calderón, para impedir el paso de las drogas a los Estados Unidos, inicia en diciembre del 2006 la guerra contra las drogas, con la exigencia de Estados Unidos, lo analizamos en su tiempo, exigido por Estados Unidos, ellos quieren que los muertos estén en México, desde entonces, a que nosotros tenemos que perseguir, aniquilar, matar a todos aquellos que llevan drogas allá, pero la militarización en Estados Unidos no existe y los muertos están aquí, no allá, para eso los Estados Unidos exigen y se acepta que aquí haya una guerra contra las drogas.

Costó en ese período más de cien mil muertos, la guerra contra las drogas, impuesta por los Estados Unidos, con la presión de ellos, para que no pasen las drogas allá y los muertos estén aquí. Claro, costó en ese período más de cien mil muertos y más de 30 mil desaparecidos, violentó el Estado de derecho al permitir que las Fuerzas Armadas realizaran ya desde entonces funciones contra la Constitución de la República.

La Iniciativa Mérida que se les olvida, se lo comentaba yo a los gobernadores si abrían los ojos, verdad, la Iniciativa Mérida, lo saben, el acuerdo de Calderón con George Bush, 30 de julio de 2008, no ratificado por el Senado, es inconstitucional, pero implica formalmente la obligación de mantener nuestras Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos diseña libremente las políticas militares y seguridad, y las implementan en la región, las Fuerzas Armadas quedan subordinadas al Departamento de Estado, a la “Home Security”, a la CIA y otras agencias del gobierno de Estados Unidos.

No se les olvide tampoco, recuerden ustedes a cada rato el Congreso de los Estados Unidos analiza si el dinero que son nada, con lo que gastamos nosotros en la militarización, en la compra de armas allá, el Congreso de los Estados Unidos se permite supervisarnos, porque con el Plan Mérida nos comprometimos a hacer lo que ellos quieren y están siempre pendientes y ver si los cuatro dólares que nos mandaron han sido eficientemente analizados por el Congreso de los Estados Unidos ¿eh? Nos revisa a ver si somos eficientes o no.

Y cuando hay alguna cosa que no les gusta, como la escapatoria, la salida del Chapo, fue un golpe en el New York Times y dice “esos mexicanos no sirven para nada, vamos a presionarlos para que sí sirvan”.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2 de enero de 2009, Iniciativa de Calderón, permite el uso de agencia encubiertos, la información satelital, la telefonía y el Internet, incluye el concepto de inteligencia preventiva desde antes, la georeferencia de equipos de modificación móvil en tiempo real y el sistema de escuchas, con la obligación, no se nos olvide, porque es un sistema concatenado con la obligación con esos acuerdos de transmitir y compartir toda la inteligencia que tengamos, toda, con los Estados Unidos.

El Pacto Por México, fíjense, 2 de diciembre de 2012, comprometió a imponer el nuevo Sistema Penal Acusatorio e introducir a la Constitución del 2008, con el fin de homologar el sistema penal mexicano al norteamericano, con lo que si sustituyes parte de esa guerra de cuarta generación, se sustituye la cultura jurídica nacional de origen románico por el cómo lo, ¿por qué? Porque ellos quieren que el sistema penal en México sea igual suyo.

Y les quiero decir que el sistema penal norteamericano es pésimo, todo se arregla, inconstitucionalmente se arreglan y se ponen, si aceptas te quito años, ese sistema penal es ajeno a la cultura mexicana, es un fracaso en México, porque los abogados, los magistrados, los jueces, no saben de eso, no están entrenados, para eso estudiaron otra cosa, y la Suprema Corte que en un principio, recuerdo, se opuso, después fue sometida como acostumbran y dijo "está muy bien, es un gran sistema".

Es un gran sistema imposible porque tienen que meter miles de estudios y cortes, y los jueces tienen que estar ahí, en fin, una cultura ajena que es parte de esa guerra de destrucción la cultura mexicana.

No se les olvide que las telecomunicaciones cien por ciento abiertas a la inversión extranjera.

Fíjense, Carlos Pascual, se acuerdan de Carlos Pascual, ese Embajador cuando llega de un Estado fallido en Irak, en 2011, como Embajador en México, impulsó, llegó a impulsar la presidencia de agentes norteamericanos en territorio nacional y en sus declaraciones para combatir el crimen organizado de acuerdo al sistema jurídico de los Estados Unidos, y dijo, fíjense dijo, que esto es muy importante y hay que, y lo vamos a discutir, dijo: "ese desvergonzado y majadero de Pascual, después el encargado en el Departamento de Estado de la privatización energética en México, ahí con Hillary Clinton, que algunas querían de Presidenta con sus camisetas, dijo que no contábamos con Estado de derecho, que teníamos que escuchar a ellos porque nos van a enseñar.

El Transitorio Octavo de la reforma energética, acuérdense, aquí aprobado, garantiza a las trasnacionales, obviamente, la ocupación temporal, o sea la expropiación para poner a su disposición el territorio nacional para que exploten sus recursos a gusto, energéticos, mineros, eléctricos, etcétera.

Pueden exigirle al gobierno mexicano que expropie, que les entreguen la parte del territorio nacional que ellos quieran, aprobado en este Senado, no se les olvide.

El 6 de octubre de 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce el envío de efectivos a las fuerzas, al exterior, operaciones ya combinadas con el mando norte.

Les recuerdo también la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el 12 de noviembre de 2015, aprobado aquí la reforma a la Ley de Armas, que permiten, y les pereció muy bien, la presencia de agentes armados de Migración y Aduanas, esos que matan a los jóvenes mexicanos, incluso desde allá, armados los agentes de Migración y Aduanas de los Estados Unidos en territorio nacional, armados, aquí se aprobó, ¿eh?

¿Quién lo pidió?

Para que sepan lo que es un Estado Policiaco Militar armado aquí.

Las reformas a la ley.

Ya termino, es un recorrido que nos recuerdan muchas cosas de aquí del Senado.

Las reformas a la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos que establecen un régimen penal especial en materia de hidrocarburos para que las transnacionales vinieran con tranquilidad a quedarse con la industria petrolera mexicana, establecieron ahí, el terrorismo en materia de petróleo, que nunca hemos tenido terrorismo, pero pues a ellos les preocupa.

El 13 de mayo de 2016 se reúnen los mandos de la Defensa de Estados Unidos con los Secretarios de Defensa y Marina de México, el Jefe del Ejército de Estados Unidos agradeció el apoyo de México para consolidar las políticas de seguridad en el continente, apoyo militar.

Otra joya de aquí, las reformas al Código Militar y la aprobación al Código Militar de Procedimientos Penales publicados en el Diario Oficial, en 2016 confirieron poder desmedido al Secretario de la Defensa, que nombra todo, su justicia es él, y permite cateos, intervención de telecomunicaciones, ustedes están de testigos, aquí lo discutimos, aquí se aprobó, dándole al Ejército una serie de funciones exorbitantes.

En junio de 2017, también aquí, recuerden, todo es de aquí, mi querido Presidente, es un recordatorio, es un amable recordatorio.

En junio de 2017 se militarizan los puertos del país. No estamos militarizando nada, ¿eh? Se militarizaron los puertos del país porque el Embajador de los Estados Unidos, Pascual, estableció en el Congreso o señaló en el Congreso de Estados Unidos que no cabían sus barcos, su exportación en sus puertos, que necesita los puertos mexicanos, así se dijo, y para eso, para que estén tranquilos, se militarizaron los puertos.

El 19 de mayo los Secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación tuvieron reuniones con el Secretario del Departamento, del Departamento, Tillerson, ¿se acuerdan? Es el ExxonMobil; y con John Kelly, acuerdos opacos y participación del Senado y constitucionales, fortalecen y subordinan a México a los intereses de Estados Unidos, publicado en el New York Times, aquí no.

Entre el 14 y el 16 de junio de 2016, se celebró en Miami, Florida.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Concluya, señor Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: La Confederación de Alto Nivel sobre la Seguridad y Economía para México y Centroamérica, se mutó nuevamente la Alianza en la Prosperidad y Seguridad, el ASPAN, para darle un enfoque ya primordialmente mexicano.

Voy a concluir con esto para ser actual.

Videgaray y Osorio Chong, el promotor del militarismo en México en lugar de las policías, se reunieron hoy con todos los Secretarios, la plana mayor de Estados Unidos, el Departamento de Estado, y para hablar de la cooperación, o sea, su, la rendición de cuentas en materia de seguridad.

Osorio Chong anunció a los Estados Unidos, frente a estas autoridades militares de ese país y parte del Gabinete norteamericano, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior cuando no empezamos a discutirla en el Senado, apareció en CNN, y sin tomar en cuenta para nada a Osorio Chong, no se enteró de la opinión a esta ley de la Organización de las Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales en las que están burlando esta ley.

Nadie eso dijo, sí, esta ley es el eslabón final de esta sumisión de la seguridad nacional a los Estados Unidos.

No se les olvide, aunque se hagan como que no oyen, esa es la verdad, esa es la verdad y todo mundo se hace guaje, estamos entregando la seguridad nacional a los Estados Unidos, ya completándola.

¿Les parece eso patriótico?, ¿les parece entregar la seguridad de nuestro pueblo, de nuestros recursos, a los Estados Unidos?

¿Ustedes creen que su objetivo es la protección y la seguridad de México?

No, ese es otro tema que vamos a ver, es la intervención, la ocupación territorial, nuestros recursos, la destrucción de nuestra cultura, la educación, todo lo que nos hace mexicanos, hay que cambiar, eso se llama, para que sepan, y aquí lo podemos todavía discutir, se llama “la Guerra de Cuarta Generación”, silenciosa, que ya ocupó, y cuentan con ustedes, con ustedes, para consolidarla.

Qué vergüenza.

Gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, don Manuel Bartlett.

Corresponde el turno, para posicionar a nombre del Partido Acción Nacional, al Senador Fernando Herrera Ávila.

En uso de la tribuna el Senador Fernando Herrera.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Permítame un segundo, señor Senador.

¿Con qué objeto, Senadora Layda Sansores?

Perdón, sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para insistirle, respetuosamente, de acuerdo al artículo 59, cheque el quórum, a simple vista no hay, entonces debe ser suspendida la sesión.

Se están exhibiendo, esto nosotros lo estamos transmitiendo a la sociedad civil para que vean cuál es el interés de los que defienden y se envuelven en la bandera defendiendo una ley perversa.

Entonces, por favor, yo le pido que cumpla con su obligación, como Presidente, y dé por terminada esta sesión porque no hay quórum a simple vista.

Son cuarenta y tantos Senadores, no llegan a cincuenta los que están presentes.

Insistimos una y otra vez y no entiende.

Están ahí en el restaurante tomando vino. Ya vimos al Senador Yunes, más de media botella de vino, está feliz.

Entonces no se vale, por favor, llámelos a la responsabilidad, esta es una ley muy importante y, mínimo, deberían de escuchar de qué se trata, qué es lo que van a votar en contra del pueblo.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora, por sus comentarios.

Adelante, señor Senador Fernando Herrera Ávila, a nombre del Partido Acción Nacional, para hacer el posicionamiento.

El Senador Fernando Herrera Ávila: Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, con todo respeto, terminaremos esta etapa procesal del posicionamiento de los partidos y valoraremos la solicitud que usted acaba de formular.

Adelante, señor Fernando Herrera Ávila.

El Senador Fernando Herrera Ávila: Gracias.

Señoras y señores Senadores:

Hago uso de la tribuna para razonar el sentido del voto de las Senadoras y de los Senadores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, respecto del dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior.

Todos aquí estamos conscientes de las consecuencias que tendrán las decisiones que vamos a tomar.

Por ello, debemos hacer acopio de la mayor virtud en la política, virtud que es la prudencia. Prudencia que no significa ni parálisis por indecisión ni inacción frente a los problemas si no hacemos caso de las consecuencias de nuestros actos.

La ley que se discute es un tema de gran trascendencia para el futuro de nuestro país. Estamos ante un proyecto ante el que destacados organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, gobernadores de las entidades federativas, y la propia urgencia del tema exigen la expedición de un marco jurídico que otorgue certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad.

Esto ha generado un intenso debate en donde diversos actores de acuerdo a sus convicciones e ideología han expresado su opinión respecto de la ley, algunos de forma institucional, otros en foros escribiendo, y otros más en la protesta en la vía pública.

Los Senadores del PAN sabemos que no hay un modelo ni ley perfectos, no obstante no es recomendable dada la urgencia que se soslaye el problema, es absolutamente indispensable atender el llamado de comunidades asoladas por el crimen organizado que se ha elevado en presencia y actividades en diversas zonas de nuestro país.

No podemos negarnos a escuchar a los ciudadanos que demandan seguridad y orden. Tenemos la obligación, como una de las cámaras integrantes del Poder Legislativo de confeccionar una ley que siente las bases mínimas para que las Fuerzas Armadas acudan en auxilio de la población cuando las fuerzas policiales civiles han sido rebasadas.

Por otro lado, hay quienes observan riesgos en la llamada militarización de las labores de seguridad, argumentando, entre otras cosas, que existe el riesgo de que se vulneren derechos humanos, y hay que decirlo abiertamente, temen represión por parte del gobierno.

Son muchos los reclamos que se escuchan, y de altísima consideración las observaciones sobre el proyecto, que expresan que la ley representa un peligroso parche ante la incapacidad institucional de los tres niveles de gobierno para garantizar la integridad de los ciudadanos.

Dado que la ley no viene acompañada de otras reformas necesarias, como el mando policial mixto, así como otros ejes para lograr una estrategia integral de seguridad.

Se dice que los conceptos contenidos en la ley son vagos y laxos, que propiciarán incertidumbre en su aplicación.

También se ha criticado que la ley genera incentivos, incentivos perversos para que se petrifique el statu quo negativo de hoy y no se creen cuerpos policíacos capaces.

No podemos dejar de mencionar el exhorto del representante en México del Alto Comisionado de la ONU; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de Amnistía Internacional para que el Senado no apruebe la minuta.

Sin duda esto es un hecho sin precedente que nos invita a reflexionar.

En nuestro grupo parlamentario hay voz, sensibilidades y voz, visiones de abordar este asunto.

Hay quienes legítimamente se preocupan por la grave situación de inseguridad que se vive en sus estados, y por ello, pugnan por la aprobación inmediata de la ley.

En la otra versión están las y los Senadores, que sin desdeñar la urgencia privilegian una ley mejor mediante una mayor reflexión.

Proponen que se atiendan las observaciones de los organismos internacionales, y que se realicen foros abiertos para escuchar todas las voces.

Nadie está totalmente equivocado ni nadie tiene totalmente la verdad.

Como coordinador del grupo parlamentario respeto y respetamos ambos puntos de vista, porque obedecen a causas legítimas.

Dada la situación, cada Senadora y Senador del grupo parlamentario de Acción Nacional expresará en su voto su propia sensibilidad sobre el tema.

Mi papel de coordinador, expreso que mi partido tiene una visión integral que corre sobre cuatro ejes.

Hace falta una fiscalía autónoma, que se consolide el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Seguridad y la Ley de Seguridad Pública. Son los cuatro pilares de un todo por el que no dejaremos de luchar, porque sólo un sistema integral como el que propone Acción Nacional puede lograr el abatimiento de la criminalidad en el país.

Nuestro sistema es un proyecto integral que respeta a los ciudadanos, a los derechos humanos, al federalismo y al municipio como la piedra angular de la organización política de nuestro país.

Estamos en contra de un proyecto que sólo busque salir del paso, y que sólo responda a presiones de coyuntura.

Desde esta tribuna expresamos todo nuestro respeto y admiración por la labor de las Fuerzas Armadas.

Estamos convencidos de que esfuerzo merece una buena ley de seguridad para que elementos, sus elementos dejen de ser cuestionados por su actuación.

Desde luego, esto en detrimento de las instituciones castrenses y de su imagen.

Buscamos que las Fuerzas Armadas actúen al amparo de la legalidad, y consideramos que este proyecto no es lo que ellos merecen.

Los Senadores del PAN lucharemos por lograr una ley que devuelva a la dignidad a las Fuerzas Armadas.

Senadoras y Senadores:

Estamos a unas horas de concluir el período ordinario de sesiones. Periodo que antecede a momentos políticos cruciales que vivirá nuestro país en los próximos meses.

No le enviemos a México y al mundo un mensaje equivocado de debilidad institucional e irresponsabilidad, actuemos, actuemos con prudencia y asumamos cada cual nuestra responsabilidad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán. Muchas gracias, Senador Fernando Herrera Ávila.

Corresponde el turno al Senador Ernesto Gándara Camou, del Partido Revolucionario Institucional para establecer la posición de este partido.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señor Presidente.

Y, desde luego, de la de mis compañeras y compañeros Senadores de la República.

Vengo a nombre de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PRI a expresar las reflexiones y los razonamientos del por qué estamos a favor de este proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Antes que nada, quisiera hacer una reflexión reiterada por todas y todos ustedes sobre las Fuerzas Armadas de México, sobre los soldados, marinos, sus familias, su historia, y desde luego una institución que a veces se quiere satanizar, por querer ganar una discusión.

Las Fuerzas Armadas han tenido una actuación medular que se caracteriza por un inquebrantable patriotismo, incuestionable lealtad y probado compromiso.

Todos hemos sido testigos de la heroica labor que han realizado nuestras Fuerzas Armadas en la defensa del país hacia la seguridad exterior y la seguridad interior, y desde luego, no es casualidad que sea la institución con mayor respeto, confianza, credibilidad y admiración en nuestro país.

Por el contrario, dicha institución obedece al patriotismo, a la lealtad en que se conducen sus funciones, que van desde las tradicionales como la defensa de la soberanía hasta el auxilio en las necesidades públicos y el apoyo en la reconstrucción, desafortunadamente cuando se dan desastre naturales.

Este proyecto de Ley de Seguridad Interior tiene como objetivo medular establecer un marco jurídico que regule las tareas de seguridad por parte de las fuerzas federales, incluyendo las Fuerzas Armadas y por establecer un proceso precisamente para ejercer algo que sea viable.

Hay un hecho en el que todos estamos ocupados preocupados por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras comunidades. es el crecimiento de la delincuencia organizada, es el crecimiento de algo que ha rebasado en las localidades a las propias instituciones, y que no hay otra manera más que avanzar fortaleciendo a las propias instituciones, y desde luego, y desde luego hacer equipo todos juntos, en una adversidad, que desde luego tenemos que enfrentar.

Precisamente, para razonar en sentido positivo nuestro voto, lo primero que debemos advertir es que contamos con Fuerzas Armadas ejemplares.

Este proyecto de ley, en el que desde luego estamos convencido que se debe de llevar a cabo, contempla los principios de confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación, racionalidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiaridad y gratuidad, así como obligaciones concernientes al uso legítimo de la fuerza pública.

Otro aspecto a considerar en esta ley, cuenta con procedimientos establecidos para emitir la declaratoria de protección de la seguridad interior, la que no podrá exceder de un año, y sólo podrá ser prorrogada mientras subsista la amenaza de seguridad interior.

La ley contempla equilibrios entre los poderes debido a que toda información, toda intervención de las fuerzas federales y armadas, deberá ser notificada a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Hay quienes señalan que la expedición de la Ley de Seguridad Interior implica eximir a los órdenes estatales de sus responsabilidades en materia de seguridad pública. No es así.

Las acciones de seguridad interior que realicen las autoridades federales con motivo de esta ley, tendrán como objetivo complementar y, desde luego, coordinarse con las autoridades de todos los niveles.

Quisiera también comentarles, que estamos revisando, efectivamente, la minuta aprobada en la Cámara de Diputados hace ya dos semanas, el 30 de noviembre, un trabajo realizado por nuestras compañeras y

compañeros Diputados Federales de todos los partidos, foros que se han realizado y reuniones y consultas durante todo el año del 2017, y en donde esa minuta, que llegó hace dos semanas a este Senado de la República, desde luego continuamos con esas consultas, recibimos todas las aportaciones, las inquietudes y las reflexiones de organismos de la sociedad civil, de organismos institucionales, organismos constitucionales autónomos de representaciones, desde luego públicas y de la sociedad internacional, y fueron escuchados, y fueron debatidas y lo seguimos haciendo en este Pleno.

La minuta que recibimos hace dos semanas es diferente del dictamen que en este momento estamos presentando las Comisiones Unidas, en donde se contemplan muchos de los comentarios para mejorar la ley, no para obstruirla, no para no hacer nada, no para sentarnos y cruzarnos de brazo y decir que: “pues, ni hablar”.

Estamos mal en seguridad, las Fuerzas Armadas las van a cuestionar unos, otros dicen que son como lo son, una gran institución, y no estamos haciendo nuestro trabajo.

Voy a enumerar rápidamente nueve, nueve reformas que se están haciendo de la minuta a lo que es este dictamen que ahora estamos discutiendo, y en donde efectivamente, muchas de las razones, de los cuales gentes nos han dicho sus inquietudes sobre el texto y la redacción, están siendo tomadas en cuenta.

Primer cambio. Se modifica el artículo 1 de la ley a fin de establecer que las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior forman parte del principio de Seguridad Nacional previsto en el artículo 73, fracción XXIX-M y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad interior.

Esta modificación pretende dejar en claro que la ley no es inconstitucional y que los legisladores sí tienen facultades para expedirlas.

Segundo, el artículo 7. Se modifica, en materia de derechos humanos, con el objeto de dejar claro que la ley protegerá y garantizará los derechos humanos consagrados en la Constitución y en todos los tratados internacionales respectivos.

Tercero cambio. En materia de movilizaciones de protesta social que se encuentra en el artículo 8, el dictamen eliminó la frase, para que quede muy claro, entre comillas, “Que se realicen pacíficamente”. Cierro comillas.

Esto con el objeto de asegurar y de tener muy claro que toda, toda protesta no es materia de seguridad interior, y que desde luego se respeta el derecho a la protesta social.

Cuarto. En materia de transparencia, tuvimos aquí comentarios por parte del Instituto de Transparencia.

Se modifica el artículo 9 con el objeto de establecer que la información que se genere sobre Seguridad Interior, será considerada de Seguridad Nacional, pero se regulará conforme los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Quinto cambio. El artículo 16 también se modifica para referir que el Presidente, con base en sus facultades previstas en el artículo 89, fracción VI de la Constitución, podrá ordenar acciones inmediatas para la defensa de la seguridad interior.

Sexto cambio. Se modifica el artículo 10 para establecer que la aplicación supletoria de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con las competencias de las distintas autoridades.

Séptimo cambio. Se modifica el artículo 21 con el objeto de establecer que los grupos interinstitucionales se formen en una declaración de protección de seguridad interior y estarán sujetos a los esquemas de colaboración que ejercen los poderes.

Octavo. Se modifica el artículo 22, para que en concordancia con la Constitución se delimite que la dirección de los grupos interinstitucionales estará a cargo de una autoridad civil.

Noveno cambio. Se modifica el artículo 26 para que este establezca que las autoridades federales y las Fuerzas Armadas actúan con base en sus competencias establecidas en la Constitución y en las leyes.

Y no solamente eso, se adhiere un Artículo Quinto Transitorio, que fue una de las preocupaciones que nos expresaron también quienes fueron escuchados, que refiere que a los 180 días de aprobada la ley, los estados y los municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuviesen realizando acciones que puedan ser una materia de declaratoria de protección en los términos de la ley, deberá en el ámbito de sus atribuciones presentar un programa de plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado el Consejo Nacional de Seguridad.

Sí quise reiterar que se ha escuchado, que se está cambiando, que estamos trabajando en este Pleno para algo fundamental que es la seguridad, desde luego interior, la seguridad nacional, la coordinación.

El grupo parlamentario del PRI apoya un ejercicio de construcción y no de destrucción, de sensatez, de seriedad y de fortalecimiento de las instituciones y no de demagogia y de populismo, no es declarando unilateralmente Amnistía a favor de los que afectan a las víctimas, de los victimarios, de la delincuencia organizada como se van a lograr las cosas, las cosas y desde luego el futuro de México está basado en un fortalecimiento del Estado de derecho, de las instituciones, del respeto a la Constitución y, desde luego, el respeto a los derechos humanos.

Todo nuestro respeto a la memoria de las víctimas, a las familias de las víctimas, a la memoria de las víctimas, de los soldados y marinos de México y a sus familias, que ahí están en estos momentos, dando la vida, ejerciendo su responsabilidad, los médicos militares, los ingenieros, la gente que en este momento está en las zonas más recónditas defendiendo la seguridad de nuestro país, por el bien de México y por el respeto de la Fuerzas Armadas, vamos a votar por esta ley y desde luego vamos a garantizar en el futuro que tengamos una mejor seguridad para que lo que más queremos, que son nuestros hijos y las próximas generaciones.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Gándara Camou.

Informo a la Asamblea, que pasamos ahora a las intervenciones para la discusión en lo general, con fundamento en lo dispuesto por el artículo.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

Senadora Sansores, intuyo el propósito.

Perdón, sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Hace rato usted dijo que inmediatamente terminara el Senador Herrera iba usted a rectificar el quórum, no lo hizo, ya pasó otro Senador, y no lo hace, le pedimos que insista en que vengan los compañeros a escuchar una ley que no conocen para que al menos sepan de qué manera están traicionando al pueblo de México.

Por eso creemos que es importante, es una ley muy sensible, tal vez la más importante y la más sentida de las que hemos aprobado, la reforma energética en su momento, la gente no captó de qué se trataba por el engaño y la seducción que hizo el gobierno, pero esta ley sí, saben qué viene, cuál es el capítulo que sigue, saben que la militarización y la dictadura están en la puerta.

Entonces, por favor le pido, cumpla con lo que pide un Senador, cumpla y se rectifica el quórum.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con mucho gusto atiendo a su solicitud y debo de aclarar que mi comentario fue que terminado el momento procesal de la participación de los grupos parlamentarios, haríamos la rectificación de quórum, tiene usted razón.

Ábrase el sistema para la rectificación de quórum, hasta por diez minutos.

Sonido en el escaño de la Senadora Hilaria, por favor.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: (Desde su escaño) Señor Presidente, todas y todos hemos sido respetuosos, antes, durante y al término de nuestras sesiones.

Cada quien ha sido libre de tomar sus determinaciones y de su responsabilidad de quedarse o de salirse, finalmente somos mayores de edad.

Yo he escuchado en el desarrollo de esta sesión a cada rato estar pidiendo y solicitando y solicitando que haya asistencia, la Senadora Layda, y yo le quiero recordar a ella que ayer también tuvimos reformas sustantivas y no vino a la sesión, aquí enfrente no podíamos ni escuchar, porque tenía un ruidazo y hasta bailando el tubo, tubo, indecorosamente y nadie fue a decirle ni a llamarle la atención, por respeto, no vino a la sesión y no pasó nada, ni nadie fue a decirle que pasara y se viniese a sentar.

Hemos sido muy respetuosos, y en ese mismo respeto le exijo que se conduzca con respeto, con cada una de las Senadoras y de los Senadores, que no es posible y no lo vamos a permitir que nos falte al respeto, porque nosotros nunca se lo hemos faltado, y si quiere que se lo faltemos, sí se lo faltamos también, sabemos hacerlo.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Hilaria Domínguez.

Atienda a la solicitud de que se abra el sistema para la verificación de quórum.

Permítame un segundo, Senadora, le suplico me permita dar respuesta a su propia solicitud. El sistema está abierto para la verificación del quórum y en aras de continuar esta Asamblea en los mejores términos y en plena armonía, conmino a todas las Senadoras y a todos los Senadores a que nos esforcemos en respetar al Senado de la República.

Tiene ahora la palabra ya en el apartado, permítame un segundo, Senadora.

Tiene la palabra para abrir el apartado de la discusión en lo general, la Senadora Dolores Padierna, del Partido del Trabajo para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

Solicito respeto a la Asamblea, Senadora Dolores Padierna, en uso de la tribuna.

Adelante, Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: La campaña “Seguridad sin Guerra”. . .

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora Dolores Padierna, le suplico, inicie su intervención.

En uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: En la campaña “Seguridad sin Guerra”, hubo un colectivo de 240 organizaciones civiles hicieron un pronunciamiento el 27 de noviembre, de varios puntos que yo quiero retomar.

Por el respeto exigen, el respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional, ya que esta Ley de Seguridad Interior atentaría contra la Constitución, los tratados internacionales que México ha firmado.

Exigen que la presencia del Ejército en las calles deba ser excepcional, extraordinaria y no permanente, la vía para despliegues extraordinarios del Ejército sería únicamente el artículo 29 constitucional y a la fecha no tenemos una ley reglamentaria de este artículo que establezca los contrapesos, los mecanismos de vigilancia, de la actuación y es un pendiente legislativo.

Es urgente un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles, reformar a las policías, las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria, cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

Aquí hay muchos argumentos, se los he dicho hasta el cansancio por varios Senadores que esta ley no militariza al país, y quiero ir directo a los artículos 19, 20, 21 y 22 de esta iniciativa.

El artículo 19, que además estos cuatro artículos tienen que leerse en conjunto, no van separados, están ligados uno con el otro.

El artículo 19 simplemente establece que la Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones en la declaratoria de protección a la seguridad interior.

Y ya sabemos que la Secretaría de Gobernación se rige por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hasta ahí no tiene nada que ver y es este artículo el 19 el que retoma la exposición de motivos para decir que no se militariza porque la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a sus funciones de la Ley Orgánica, estaría cumpliendo con ese cometido, pero basta con irse a esta declaración, simplemente enunciativa.

En la práctica quien coordinará, quien ejecutará la declaración de seguridad interior será un mando castrense, y leo textualmente.

El artículo 20, fracción I.- “El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa y la Marina, no del Secretario de Gobernación, sino de las Fuerzas Armadas, designará a un comandante de las Fuerzas Armadas quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en los términos del artículo siguiente”.

Que es el artículo 21, es decir, que un comandante de las Fuerzas Armadas va a dirigir los grupos interinstitucionales.

Fracción II. El comandante designado elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes, es decir, se le da la facultad a las Fuerzas Armadas de autorregularse, de definir su propio protocolo de actuación y, además, de dirigir al personal civil participante, quien manda, quien dirige a los civiles es un militar.

¿Cómo debemos de denominar este modelo? Pues militarista, militarización del país.

El artículo 21 dice que se constituirán un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades y organismos participantes a efecto de coordinar la realización de las actividades de seguridad interior, será una actividad castrense designada por los Secretarios de la Defensa y de la Marina quienes van a dirigir los grupos interinstitucionales a efecto de coordinar todo, es decir, se supedita a la autoridad civil depositada en la Secretaría de Gobernación a los altos mandos castrenses y a las ordenanzas de la autoridad militar.

¿Cómo debemos de denominar esto? Pues simplemente que se está militarizando al país, se trata de una claudicación, de una delegación de facultades civiles hacia los mandos castrenses, la militarización de la toma de decisiones de gobierno es, en esencia, un acto de militarización puro y duro, esta Ley de Seguridad Interior instaura la militarización porque otorga a los mandos castrenses la facultad de dirigir a los grupos interinstitucionales integrados por las autoridades civiles, sobrepone el mando militar, al mando civil.

Y no conformes con la sesión de facultades a las autoridades castrenses en el ámbito federal, estos artículos establecen que adicionalmente las autoridades estatales se tendrán que sujetar y someter al arbitrio y supervisión de las autoridades castrenses, pues confiere a las Fuerzas Armadas, lo digo entre comillas, el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas, es decir, al momento que surta efectos la declaratoria de protección de seguridad interior, tanto las autoridades

federales como las estatales y, por ende, las municipales quedarán supeditadas al mandato de la autoridad castrense.

Si esto no es militarizar al país, entonces, expliquen a la opinión pública cómo puede entenderse esta delegación ilegal inconstitucional e inconvencional de facultades a una autoridad civil, a una autoridad militar, es una delegación, una renuncia a las facultades de los gobernadores, del gobierno federal y que lo ceden a los militares.

El artículo 19 de esta ley, que tiene todas las disposiciones para las Fuerzas Armadas, es inocuo realmente acudir al artículo 19, porque la Secretaría de Gobernación es solamente mencionada para de manera formal, porque en los hechos el artículo 20 y el artículo 21 están dándole en todo momento la facultad a los militares.

Y en el artículo 22 se habla de las autoridades respectivas, no se dice quiénes son las autoridades respectivas, pero si el artículo 21 está hablando de los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y todas las autoridades correspondientes, pero aquí lo abre a todas las autoridades respectivas, tienen la obligación de cooperar para atender las causas que motivaron la declaratoria de seguridad, siempre actuando bajo la coordinación, la supervisión y el mandato de la autoridad castrense, se vuelve a ratificar el sentido militarista de esta iniciativa en el artículo 22, la expresión abstracta de autoridades respectivas, además violenta el principio de certeza jurídica y el de legalidad, pues no establece con claridad si se trata de autoridades que gobiernan una zona especial, un territorio o donde se haga la declaratoria, ni tampoco se refiere si se trata a las autoridades que dice el propio artículo 13 de este texto en vez de dar claridad a la función y a la operación de las Fuerzas Armadas se les deja en total discrecionalidad y sólo va a complejizar su coordinación en el terreno y en la práctica.

La propuesta de modificación que se hizo al artículo 22 raya en lo superficial y en lo absurdo, dice que si en la declaratoria no se ocupa de las Fuerzas Armadas, entonces, no recae, pero si se les cita a las Fuerzas Armadas en la declaratoria, el mando recae en las Fuerzas Armadas por encima de las autoridades civiles.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Concluya, señora Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Termino, Presidente, diciéndole que se desconocen otros sistemas de coordinación, como se crean estas coordinaciones interinstitucionales preguntamos:

¿El Sistema Nacional de Seguridad Pública va a desaparecer?

¿La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia va a desaparecer?

¿El Sistema Nacional de Protección Civil va a desaparecer?

¿La Conferencia Nacional de Gobernadores va a desaparecer?

¿Las instancias de coordinación de los municipales para este asunto van a desaparecer?

¿En qué prioridad van a estar, van a coexistir? No lo dice la ley.

Y entonces, se invoca a la participación de las Fuerzas Armadas desconociendo que existen diversos sistemas de coordinación.

Eso sí, civiles.

Eso sí, constitucionales.

Eso sí que están velando por el tema de la seguridad castrense que no se dice, y, además, todos los que ellos emitan será absolutamente secreto porque lo consideran de seguridad nacional.

Bueno, rechazamos contundentemente los contenidos oprobiosos y vergonzosos de este dictamen de Ley de Seguridad Interior porque legaliza una estrategia aplicada por más de diez años que es un modelo de seguridad que evidencia todo su fracaso.

Por todas estas consideraciones y muchas más, votaremos en contra.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

Me permito informar a la Asamblea que existen registrados 38 oradores, por lo que suplico a todos los Senadores se restrinjan al uso de los cinco minutos a los que el Reglamento autoriza.

Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador Víctor Hermosillo, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, respetuosamente le digo que en el momento procesal de la discusión, permítame un segundo, en la discusión en lo general la oradora que hizo uso de la palabra no la aludió, usted no fue aludida por la oradora que hizo uso de la palabra, por lo tanto no es de concederse su petición.

En uso de la tribuna el Senador Víctor Hermosillo, del Partido Acción Nacional.

Senador don Víctor Hermosillo, en uso de la tribuna.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bueno, trataré de ser breve y hablaré de conceptos.

La Ley de Seguridad Interior que se propone es la joya de la corona del fracaso de la administración del Presidente Peña Nieto.

Por varios años, en la administración del anterior Presidente Calderón, los priístas estuvieron en contra de que las Fuerzas Armadas combatieran el narcotráfico y el crimen organizado y culparon a la anterior administración.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: A ver, Senador Demédicis.

Amigos Senadores y Senadoras:

Estamos haciendo un esfuerzo por conducir esta sesión en los mejores términos, permítame un segundo, Senadora, yo la escuché con toda la atención.

En aras de continuar con la sesión en un plano de armonía, a pesar de que en el momento procesal, de la oradora que hizo anteriormente uso de la palabra usted no fue aludida, en otra intervención lo fue, se le conceden los cinco minutos.

Le estoy concediendo el uso de la voz, Senadora.

Senadora, tiene usted el uso de la voz.

Senador Hermosillo, permítame que la Senadora Layda Sansores haga uso de la tribuna, por cinco minutos.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Nada más para contestarle a la compañera Hilda, para que si quiere también venga aquí a alusiones personales.

Hilaria, bueno ¡Madre santa!

Entonces no la he aludido.

Compañera yo estuve presente el día de ayer, estuvimos con varios compañeros trabajando, haciéndole su fiesta y su convivio a los trabajadores, pero cada vez que había votación estuvimos, aquí nos regresábamos y votábamos y se quedaban mis compañeros.

Pídale, por favor, orden.

Y yo no sé si estaba usted aquí cuando en la última, en el último dictamen, de la Ley de Archivos, ¿se acuerda qué pasó?, ¿se acuerda qué pasó en la Ley de Archivos?, ¿se acuerda porque no estaba usted presente?

En la Ley de Archivos de pronto, cuando ya se había acabado la discusión, preguntó el Presidente si habían otros artículos, que si habían artículos reservados, y no los hubieron, entonces de pronto dijo: "se termina la sesión y se convoca para las 7:30 de la noche", haciendo tiempo de una manera, así con estas mañas que tienen aquí en el Senado, con esas estrategias gansteriles suspendieron de pronto la sesión y entonces hasta las 7:30, tratando de que terminaran el dictamen para ver si en la noche se discutía.

Esa fue la realidad, pero chequen todos nuestros votos, que aquí estuvimos con compañeros también del PAN, con compañeros del PRI y de todos los que quisieron convivir con los trabajadores.

No estábamos jugando, aquí estuvimos todo el día hasta que se acabó la sesión.

Entonces no me puede usted argumentar, y no es ofensa pedir que se rectifique el quórum, es un derecho, aprenda y lea lo que dice el Reglamento.

Y una disculpa, para que no queden confusiones, cuando me refería al Senador Héctor Yunes, que estaba tomando su botella de vino en el cuarto piso, y aquí hay varios que no pasan el alcoholímetro ahorita, no me refería a usted, compañero José Francisco, que ha estado durante toda la sesión presente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Layda Sansores.

Suplico a la Asamblea guardemos el mayor orden posible para continuar con la sesión en plena armonía.

En uso de la voz.

Antes de que don Víctor Hermosillo haga su intervención, ciérrese el sistema electrónico, han registrado su asistencia 104 Senadores, por lo tal, hay quórum.

Senador Víctor Hermosillo, en uso de la tribuna.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la directiva.

Trataré de ser breve y hablaré de conceptos.

La Ley de Seguridad Interior que se propone es la joya de la corona del fracaso de la administración del Presidente Peña Nieto.

Por varios años, en la administración del anterior Presidente Calderón, los priístas estuvieron en contra de que las Fuerzas Armadas combatieran el narcotráfico y el crimen organizado y culparon a la anterior administración de la inmensa cantidad de muertes que ocurrieron en ese período, las calificaron como "las muertes de Calderón".

Al iniciar esta administración ofrecieron una estrategia diferente y que volvería la paz a la nación.

Ya al término de esta administración las Fuerzas Armadas siguen en las calles, la violencia subió, las muertes se multiplicaron y el narcotráfico y el crimen organizado siguen azotando al país.

A los muertos de este sexenio los llamaremos ¿las muertes de Peña Nieto?

Y ahora con esta ley que están dándole a las Fuerzas Armadas, legalidad para a través del Ejecutivo o del Secretario de Gobernación, fuerza tal que al actuar en los estados de la nación están por arriba de los gobiernos estatales.

Se acaba el federalismo en vez de impulsarlo en una democracia incipiente como la nuestra.

Las responsabilidades las toma el Ejército por arriba de las autoridades civiles y las declaran menores de edad cívica.

El trabajo de las Fuerzas Armadas será opaco y sin rendimientos por ser declarado “de seguridad nacional”.

En vez de reforzar las fuerzas de las policías municipales y estatales, que tienen sus obligaciones dentro de las leyes y están más cerca de los ciudadanos, las ignoran.

Todo lo centralizan, sólo el Presidente sabe cómo gobernar al país, según los priístas y sus aliados, y por eso estamos como estamos.

El abuso de poder a lo largo y a lo ancho de nuestra historia es proverbial. Esta ley que permita al Presidente disponer de las Fuerzas Armadas con tanta facilidad es una tentación muy peligrosa y no solucionará la situación de violencia en el país, como lo ha demostrado ya por más de 12 años.

Lo que se necesita es acabar con la corrupción por el bien nacional, acabar con el negocio que tiene a políticos, jueces, autoridades civiles y militares en contubernio con los delincuentes que piensan más en llenarse los bolsillos que en el futuro de la nación.

Que recuerden que en un país convulsionado por el crimen, éste alcanza a todos, que ni sus hijos escapan por más guardias que tengan.

Se acaba el federalismo, los gobernadores dependen totalmente del centro.

Ya no existen estados libres y soberanos, vienen a la gran capital a pedir dinero y protección.

Regresamos al presidencialismo de los tiempos de Díaz Ordaz.

Es una vergüenza lo que estamos haciendo como Senadores.

Culpo al PRI y a sus aliados por este retroceso cívico, político y moral.

Esta ley de ser aprobada será también una gran tentación de abuso de poder para los siguientes presidentes.

El autoritarismo en un país con una débil ciudadanía como el nuestro es una tentación, acuérdense de Venezuela, donde el atropello de la población por las Fuerzas Armadas por manifestarse en contra del régimen y que tiene a este país en una situación lamentable, y de la falta de respeto a los derechos humanos.

Por último, un gobierno que no escucha a la sociedad no es un gobierno democrático.

En el estudio y dictamen de esta ley se hizo oídos sordos a la ciudadanía, ante el reclamo de múltiple organizaciones nacionales e internacionales, y esto es peligroso y no habla bien del país.

El gobierno perdió miserablemente el tiempo, y no aportó nada nuevo a la seguridad interna en el país en seis años, y ahora cierra el telón con una ley impopular y muy peligrosa.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, don Víctor Hermosillo y Celada.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Gracias, con su venia señor Presidente.

Compañeras, compañeros:

Para entender el proyecto de Ley de Seguridad Interior debemos remitirnos a los orígenes posrevolucionarios que forjaron la primera Ley Orgánica del Ejército Nacional en 1926.

El contexto en el que se desarrollaba México viniendo de una revolución armada que dejó más de un millón de muertos, una economía frágil y desordenada, entre otros muchos efectos que provocaron la desestabilización del país.

Se estableció en el artículo 1 de dicho ordenamiento lo siguiente:

El Ejército y la Armada Nacional son instituciones destinadas a defender la integridad e independencia de la patria, a mantener el imperio de la Constitución y de las leyes, y a conservar el orden interior.

Desde el mismo ordenamiento jurídico notamos la existencia de un espíritu protector, mismo que da razón de ser a nuestras Fuerzas Armadas, toda vez que quedan encargadas de defender la integridad e independencia de la patria, y a su vez a conservar el orden interior.

Todos los ciudadanos estamos obligados a respetar los derechos humanos de todas las personas; sin embargo, los servidores públicos tenemos la obligación de promover respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme lo señala el artículo 1 de la Constitución política.

En estas últimas semanas hemos escuchado distintos puntos de vista sobre el proyecto de Ley de Seguridad Interior.

El desconocimiento de la propuesta y de los principios que rigen a nuestras fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas es lo que genera confusión y, a su vez, un rechazo a la misma.

Se les olvida que ya el artículo 89, fracción VI de nuestra Constitución vigente, desde el 5 de abril del 2004; y la fracción VII de la misma, estipula lo siguiente:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanentemente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Séptimo. Disponer de la guardia nacional para los mismos objetos en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.

Es importante señalarles que no podemos entender nuestras leyes en una forma literal, la interpretación tiene que ser sistemática entrelazada entre sí y funcional.

En atención a ello se le puede conferir la gran responsabilidad de cumplir con la Ley de Seguridad Interior, que hoy se discute a quien con su tradición de honor, valor y lealtad realizan todas sus actividades por el honor de México, máximas que han forjado a miles de hombres y mujeres que darían su vida sin pensarlo por cumplir con la misión que se les otorgue en la Constitución mexicana.

Si sólo a nuestras Fuerzas Armadas mismas que son confiables y se les puede encomendar la restauración del orden y los principios de nuestra Constitución política, entendiendo que el territorio, la población y el gobierno son elementos que forman parte del Estado soberano mexicano conformado a su vez por un conjunto de instituciones que regulan la vida nacional.

El estudio de este proyecto de ley nos obliga a profundizar en materia de seguridad nacional.

La Ley de Seguridad Interior no da a las Fuerzas Armadas facultades de policía. El segundo párrafo del artículo 18 de la ley establece claramente que en ningún momento las Fuerzas Armadas tendrán condiciones de seguridad pública.

Las acciones de la fuerzas federales se limitarán a lo que establece el artículo 3, y 5 de la Ley de Seguridad Interior, tal y como se estableció en el decreto presidencial de 9 de mayo de 2007 cuando las Fuerzas Armadas iniciaron acciones de combate contra el crimen organizado.

Tres. Las Fuerzas Armadas no van a realizar acciones de investigación y persecución de delitos, esto está establecido perfectamente en el artículo 21. Esa es una facultad exclusiva del Ministerio Público y de la policía que actúa bajo el mando del Ministerio Público.

La Ley de Seguridad Interior sí genera controles para edificar el debido respeto de los derechos humanos con la expedición de esta ley se genera un mecanismo de declaratoria de protección de seguridad interior que ya lo establece el artículo 89 constitucional, y simplemente viene a regularlo.

Cuando se incumplen los lineamientos específicos a la declaratoria las personas quedan sujetas a responsabilidades administrativas y penales, según corresponda.

Las fuerzas federales, Policía Federal y Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en la protesta social, la manifestación pacífica de las ideas, es un derecho reconocido en nuestra Constitución y en la legislación internacional misma que protege el Estado en el artículo 133 constitucional.

El artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior, establece claramente: Las protestas nunca pueden considerarse actos de seguridad interior, por lo que está absolutamente prohibido el uso de las Fuerzas Armadas.

Y por último, la Ley de Seguridad Interior no fomenta la intervención militar, al contrario, restringe la acción de las Fuerzas Armadas a casos específicos, claramente establecidos en el mismo ordenamiento y además establece una limitante temporal para las acciones.

Es cuando, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Verónica Martínez Espinoza.

Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador Luis Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra.

Apelo a la sensibilidad de las Senadoras y Senadores, oradores, para restringirse a los cinco minutos que el reglamento permite.

Faltan 32 oradores.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros:

Se reconoce la crisis que vivimos desde hace 11 años.

Se reconoce que desde hace 11 años hacia acá el crimen organizado va ganando terreno.

Se reconoce que se ha perdido la guerra con el crimen organizado.

Se reconoce con esta ley que se ha fracasado desde el Estado, pero no se hace nada para corregir esto.

Lo hemos dicho, una y otra vez, no es con esta ley como se va a resolver el problema de la seguridad pública.

Y ayer en comisiones decían: "Que esta ley ya no era para eso, que era solamente para normar a las Fuerzas Armadas".

No hay un análisis serio del fenómeno delictivo para poder redactar esta ley.

Hemos esperado que alguien haga aquí un razonamiento, con la experiencia ya de estos 10 u 11 años en que tenemos a las Fuerzas Armadas en las calles, y no se hace.

Hay ejemplos, ahora se los explico, hay ejemplos de ejercicios que se tienen en el país, en municipios que son verdaderamente exitosos en materia de seguridad pública. Este no es el único, son muy pocos, pero este es un ejemplo de un municipio que decidió hacer las cosas distintas, y quiero exponérselos.

Este municipio es Nezahualcóyotl.

En el año 2011 gobernaba el PRI; en el 2012 recuperó el PRD ese gobierno municipal. Aquí está Nezahualcóyotl, así recibió la inseguridad en el municipio, y vean ustedes la gráfica cómo cae.

Aquí está Ecatepec, mismo año. Vean ustedes, pero hay un repunte muy fuerte.

Y está Tlalnepantla y Naucalpan.

Aquí está Tlalnepantla, sube.

Aquí está Naucalpan, aquí está Tlalnepantla, prácticamente en el mismo sentido.

Gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, gobierno del PDR en la misma región.

Esta es la incidencia delictual per cápita anual, 2011-2016.

Este es el homicidio doloso per cápita, 2011-2016. Prácticamente hay resultados, miren ustedes.

Ecatepec, del PRI, en dónde anda.

Naucalpan, cae un tanto y recupera.

Nezahualcóyotl, es el que tiene mejores resultados.

Tlalnepantla, vean hasta dónde está Tlalnepantla, es éste.

Otro ejemplo, otro ejemplo. Robo de vehículos per cápita anual, 2011-2016.

Vean, Nezahualcóyotl tiene un repunte y vean hasta dónde llegó, hasta abajo.

Ecatepec no puede recuperarse.

Tlalnepantla dio muy buenos resultados. ¡No, perdón! Tlalnepantla es el que peores resultados ha dado.

Naucalpan, casi llega al mismo nivel que Nezahualcóyotl.

Esta es otra gráfica. El PRD gobernó entre el 2006-2009, así se comportó el robo de vehículos asegurados.

En el 2009 pierde el PRD y gana el PRI, y vean ustedes el repunte en el número de vehículos asegurados.

En el 2012 recupera el PRD, y vean ustedes cómo va.

Estas gráficas se las muestro y les digo: Nezahualcóyotl, en el Estado de México, es el único municipio que no ha aceptado el Mando Único. El resto de los municipios tienen Mando Único. Está ahí la policía estatal.

En Naucalpan, en Tlalnepantla, en Ecatepec, en cada uno de estos municipios, 15 bases mixtas de operación, que les llaman, donde está la Marina, está el Ejército, está la Policía Federal y la Policía Estatal, y ahí están los resultados de esos municipios.

Y ¿Por qué resulta que en Nezahualcóyotl, donde no hay un Mando Único, donde hay una coordinación, una coordinación de las policías, donde hay un acercamiento de la policía municipal a la ciudadanía, donde hay la recuperación del valor de la ciudadanía para defenderse de los delincuentes, donde nuestros policías municipales se acercan, hay proximidad?

Hoy tienen ya, incluso, algunos ejercicios mucho más cercanos. Hay directorios de WhatsApp de vecinos, de las diversas manzanas y se comunican por WhatsApp con su policía municipal.

Se ha hecho, por supuesto, un trabajo muy profundo con la policía municipal para darles mejores salarios, para darles mejores condiciones laborales, para darles equipo, para darles condiciones laborales dignas, y ahí están los resultados.

¿Por qué, si desde un municipio como Nezahualcóyotl, se puede tener estos resultados en materia de seguridad pública, por qué no se puede en el resto? con recursos propios del municipio se ha logrado esto.

No hay recursos extraordinarios, luego, entonces, si este es exitoso ¿Por qué no se puede en resto de los municipios y por qué no se puede en el Estado de México y en resto de los estados?

Porque si revisamos, es en gran parte la corrupción que existe en esta materia. Si hoy vamos a un Ministerio Público de cualquiera de los estados, ustedes se darán cuenta, podríamos darnos cuenta de enorme corrupción que existe ahí.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Concluya, señor Senador.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Concluyo, Presidente, con gusto.

Si nos damos una vuelta, qué es lo que están haciendo las procuradurías hoy en los estados, nuestras fiscalías que en su inmensa mayoría las que están formadas no son autónomas de ninguna manera, si nos damos la vuelta para ver qué están haciendo los Poderes Judiciales de los estados se dan cuenta de toda la corrupción que prevalece y las policías estatales metidas en la corrupción y la inmensa mayoría de las policías municipales, no nos vengan a decir que con esta ley vamos a ir a resolver eso, porque eso es falso, porque con esta ley no se está considerando absolutamente nada de la seguridad pública.

Sí, Presidente, sé que hay prisa por resolver.

Pero allá afuera hay gente que tiene prisa porque le resolvamos este problema de inseguridad.

Hago un llamado, señoras y señores Senadoras y Senadores, hago un llamado a sensibilizarlos, cómo va a quedar este país después de desoír a los organismos internacionales o acaso creen que están complotando en nuestra contra, acaso creen que están en contra de este país la ONU, a quién se le ocurre pensar que la ONU no tiene injerencia en eso, a quién se le ocurre pensar que no son una autoridad para darnos recomendaciones, mal va a quedar México.

Muy mal vamos quedar, peor vamos a quedar de lo que estamos hoy en nuestra imagen internacional.

Señoras y señores Senadores y Senadoras, haremos esto, escuchemos esas voces autorizadas de las organizaciones civiles en México, de los rectores de las universidades, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, escuchemos la voz de la ONU, de los relatores de la ONU que hoy nos recetaron otra carta pidiendo que no aprobemos esto.

Ojalá, ojalá y pudieran escuchar, abrir los oídos, porque aquí, desgraciadamente con esta ley no vamos a corregir todo esto que vimos de corrupción, porque la falta de inseguridad en México es básicamente la corrupción y la desidia de gobernantes, del gobierno federal y de gobiernos municipales en su gran mayoría.

Muchas gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

En uso de la voz, la Senadora Marina Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, Presidente.

Yo quisiera solamente recordarles y después de escuchar al Senador que me antecedió en el uso de la palabra, que el Jefe de Gobierno de nuestra queridísima Ciudad de México ha solicitado en diferentes ocasiones y yo quiero destacar concretamente, el apoyo de las fuerzas armadas para poder hacer operativos en El Ajusco.

Lo pongo en la mesa, gobierno del PRD, también recordar que el primer operativo federal que se realizó fue en el estado de Michoacán, a petición por cierto, del PRD.

Y hablando de Nezahualcóyotl, el municipio, yo quisiera revivir una nota y voy a citar textualmente del jueves 20 de septiembre de 2012 que dice lo siguiente:

Periódico El Universal. Por el incremento de 14 % en los índices delictivos en los últimos dos meses, casi mil elementos del Ejército, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Ministerial y la Municipal, iniciaron el Operativo Neza, para vigilar las calles.

Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de enero a septiembre de 2012, se han registrado 119 homicidios en Nezahualcóyotl en los que se han utilizado armas de fuego, no será la primera vez que fuerzas federales patrullen la zona, durante las administraciones de los alcaldes perredistas, Héctor Miguel Bautista López, Luis Sánchez Jiménez y Víctor Manuel Bautista López, la Policía Federal y el Ejército, realizaron operativos por la presencia de bandas del crimen organizado.

Estoy compartiéndoles una nota, porque yo no quiero que aquí se venga a decir a la máxima tribuna pues muchas cosas que no son ciertas y porque a lo mejor en estos momentos pues te conviene hablar a favor o te conviene hablar en contra.

Yo sí creo que tenemos que estar velando por la seguridad de los mexicanos.

Y quiero compartirles algunas cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública 2017, que estimó que tan sólo en 2016 fueron más de 24.2 millones el número de víctimas de 18 años

y más de algún delito en el país, es una cifra extremadamente alta, uno de cada cinco mexicanos prácticamente sufrió a manos de la delincuencia, por eso no extraña que 7 de cada 10 mexicanos hoy se sientan inseguros en su comunidad, lo que debe ocuparnos, compañeros Senadores es lo que a la gente verdaderamente le interesa y lo que les interesa a los mexicanos es vivir tranquilos, poder ir a su trabajo sin el temor de ser asaltados, poder ir al banco a retirar sus remesas o la nómina de su empresa sin zozobra, poder hacer negocios sin el miedo a ser secuestrado o extorsionado o evitar que los jóvenes estén en riesgo frente a la cada vez mayor oferta de drogas en escuelas, fiestas o centros de esparcimiento.

Yo creo que los mexicanos y los padres de familia, lo que quieren es que sus hijos regresen con bien a casa y eso no está ocurriendo, no hemos sido capaces de ello.

A la gente no le interesa quién haga las labores de seguridad, protección y vigilancia, siempre y cuando se haga de manera eficaz y yo creo que ahí está el problema medular.

Hoy el arreglo bajo el que se opera, pues no está cumpliendo su función, en muchos rincones del país es la misma policía la que inspira miedo, la que está contaminada o está colapsada por la corrupción, no estoy generalizando, pero es la realidad.

Ahí están los ejemplos de lo que pasaba en Monterrey o en Acapulco, que si no fuera por la intervención del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en el auxilio a las autoridades civiles, la situación sería mucho peor, pero lo que se requiere es que esa participación sea ordenada y bajo reglas que le den certidumbre, y en otra arena lograr también lo que una y otra vez hemos insistido, que los estados y municipios reconstruyan los cuerpos policiales.

Pensar en un régimen de leyes y de derechos para todos en México pasa por la reconstrucción de las instituciones policiales.

Es increíble que la mayoría de los policías en México, en pleno siglo XXI, casi siempre trabajen sin procedimientos operativos regulados, sin métodos, sin capacitación, sin incentivos adecuados y sin equipamiento.

Quiero, y le pediría paciencia un par de minutos, Senador Presidente.

Desde mi perspectiva lo más delicado y lo que más preocupa a la sociedad civil en torno a la discusión de este dictamen es que han pasado más de diez años en México de la puesta en marcha de la estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada, sostenida fuertemente en el despliegue de militares, pero no ha estado acompañada de garantías en materia de justicia y de derechos humanos.

El fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público no puede quedar en segundo plano.

Yo quiero, bueno, creo que es muy poco tiempo, cinco minutos para externar las bondades de este tema y también las preocupaciones que tengo como Senadora de la República, pero quiero compartir, por un lado, que esta ley sí se queda corta, es absolutamente perfectible, sólo representa un paso, pero es un paso que debe darse para eliminar la discrecionalidad en la intervención federal.

Insisto, estamos a favor, pero bajo la reserva de que tendrá que estar acompañada de normativa complementaria como es el mando mixto y de indicadores sobre profesionalización de los cuerpos policiales locales, tenemos que cumplir la doble exigencia social de regresar a los militares a los cuartelas y garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias, pero tenemos y debemos seguir trabajando.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Sonido en el escaño del Senador Luis Sánchez.

¿Con qué objeto, señor Senador?

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Para rectificar los dichos de la Senadora Mariana Gómez del Campo que acaba de hacer.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Tiene usted la palabra.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Presidente.

En verdad que no entendí el objetivo de refutar lo que vine a decir aquí.

Quien me antecede en la palabra lee una nota fechada de El Universal, su sección metrópoli, fechada el jueves 20 de septiembre del 2012, donde se dice una declaración del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme Sastre, es el que informa de todo esto.

Yo hace un rato les comentaba que Nezahualcóyotl era gobernado desde el 97 y hasta el 2009, y les doy una parte nada más de ese trabajo, estos son el robo de vehículos asegurados, según OCRA, este es un dato que no miente, y estoy poniendo solamente vehículos robados asegurados para hacer una nota verídica, que no piensen que estamos alterando, esto lo pueden consultar ustedes, está en Internet.

Y vean cómo se prevalece el robo de vehículos entre 4 y 4.2 vehículos se robaban hasta que el PRD dejó de gobernar.

Y vean, en el 2009, cuando entra el PRI, que por cierto nos gana a los perredistas prácticamente la gran mayoría de los municipios que gobernábamos, y también lo que gobernaba el PAN, vean ustedes cómo se dispara el robo de vehículos.

Recuperamos en el 2012, y ahí está la caída en el robo de vehículos.

Y déjenme decirles que este fenómeno se presentó a partir de esa fecha en toda la zona metropolitana. De alguna manera los gobiernos municipales del PAN, los gobiernos municipales del PRD habíamos mantenido a la delincuencia organizada un tanto alejada de los municipios, pero es en el 2009 cuando desde Toluca mandan a los directores de seguridad pública de los municipios que gobernaba el PRI cuando se generaliza la violencia, la delincuencia organizada en todos estos municipios metropolitanos, ahí están las cifras y no mentimos.

Pero cuando recuperamos los otros en Nezahualcóyotl volvimos a implementar el mismo modelo de seguridad pública y ahí están los resultados, no estoy viniendo a esta alta tribuna a decir mentiras, estoy diciendo una experiencia exitosa de un gobierno municipal que enfrenta la delincuencia, que no ve en la seguridad pública eso que sí ven muchas y muchos, que es un negocio.

Porque hay que decirlo, para muchos es un negocio, es extorsionar a la ciudadanía y ese dinero va subiendo hasta llegar a las más altas esferas del poder en los estados o los municipios.

Y cuando vengo a decir aquí que esta ley no soluciona nada, es porque no hay nada aquí expuesto para ir a atacar este fenómeno, porque allá votaron en contra la minuta que les enviamos aquí de mando mixto que otra vez de repente hacemos bien las cosas en este Senado, y fue votado aquí por unanimidad después de muchos años de trabajo, es lo que teníamos como la idea de mando mixto, pero aquí mismo, en este mismo espacio, escuchamos que el Secretario de Gobernación dijo que no era la solución y, entonces, la congelaron y después la desecharon en fast track, sin encontrar alternativa ninguna.

No hay hoy una propuesta alternativa en materia de seguridad pública.

Por eso insisto, esta ley no soluciona.

Esta ley pone en peligro los derechos humanos.

Esta ley contraviene convenios internacionales y, sobre todo, es violatoria de la Constitución.

Ahí hay ejemplos, hay ejemplos de gobiernos honestos, de gobiernos que quieren hacer bien las cosas, que no se venga aquí a tratar de desacreditar esos grandes esfuerzos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez.

Corresponde su turno al Senador Carlos Manuel Merino, del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

En uso de la voz el Senador Carlos Manuel Merino.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Permítame un segundo, señor Senador Merino.

Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo.

¿Con qué objeto, Senadora?

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Solamente le pido que me apunte para rectificación de hechos.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Así lo haremos.

Por favor, señor Senador Manuel Merino.

El Senador Carlos Manuel Merino Campos: Gracias.

Con su permiso, Presidente.

El pasado 4 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado expresando su preocupación sobre el proyecto de ley que hoy nos ocupa, por contener preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, lo que significaría la normalización, regularización y permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

La experiencia demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, perdón, en materia de seguridad pública viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.

El concepto de Seguridad Interior nace en el propio texto de la Constitución de 1917, en el artículo 89, fracción VI, decía: “disponer de la Fuerza Armada permanente, del mar y tierra, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Y es hasta abril de 2004 que se incluye el término de Seguridad Nacional, desde entonces la Constitución mexicana, existen las dos vertientes: Seguridad Interior y la Defensa Exterior.

En la misma reforma el Constituyente facultó al Congreso para expedir leyes en materia de seguridad nacional en el artículo 73, fracción XXIX-M, pero jamás se ha otorgado al Congreso la facultad de legislar en materia de seguridad interior.

Exponen los promoventes de esta ley que debe aprobarse para combatir los altos índices de violencia en aras de proteger y garantizar los derechos humanos de los gobernados.

En el artículo 2 de la iniciativa se definiría por primera vez en una ley el concepto de seguridad interior.

Es criticable el concepto de "uso legítimo de la fuerza", señalado en el artículo 3 de la iniciativa, pues advierte que el ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza, ello permitiría a las Fuerzas Armadas ejercerla para repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, hacer uso de su potencial y capacidad destructiva, pero además viola ese despliegue de fuerzas.

El contenido del diverso 129 constitucional, que expresa limitaciones a su actuación, "en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", y que se relaciona con el artículo 29 que regula la suspensión de los derechos fundamentales en el país para que el Ejecutivo, con la aprobación del Congreso, pueda hacer frente a situaciones o estados de emergencia.

En los artículos 11 y 12 se establece un procedimiento con el que el Presidente podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas y tras una declaratoria de protección de Seguridad Interior, y que dure hasta un año, y previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior.

No obstante, el artículo 6 otorga de forma absoluta al Presidente, potestad de ordenar sin necesidad de declaratoria, la intervención de las Fuerzas Armadas y señala que será bajo la premisa de dar cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y Agenda Nacional de Riegos, contenida en la Ley de Seguridad Nacional.

La iniciativa ni fortalece a las policías, ni capacita a los militares como para intervenir en el servicio público de Seguridad Pública a cargo de los tres órdenes de gobierno, en términos de los artículos 21, 115 y 122.

Y contraviene esta propuesta, pues las instituciones de seguridad pública deben de ser de carácter civil y no militar.

Esta iniciativa es omisa para sancionar a los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que no asume la generación de responsabilidades que pudieren derivarse al cometer una conducta que afecte a un civil, pues sólo menciona el artículo 34, "que todo incumplimiento será sancionado en términos de los sistemas de responsabilidad y anticorrupción".

Se faculta al Ejecutivo Federal a abrir una vía hacia la militarización del país dando forma legal al hecho de que las autoridades federales, estatales y municipales continúen evadiendo sus responsabilidades constitucionales, en materia de seguridad pública, en vez de asumir su obligación de capacitar y poner a las fuerzas policíacas al nivel que corresponde.

Se pudiera pretender normalizar la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y agravar la situación, en materia de derechos humanos y violencia, en el marco de la participación del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado, en contra de las recomendaciones internacionales, y a pesar de los graves indicios de violaciones de los derechos humanos cometidas por éstas en los últimos años.

Este parece un proceso legislativo bastante atropellado, que bajo el espíritu de resolver la carencia de un marco legal que regule y limite la participación de las Fuerzas Armadas, a efecto de evitar los excesos y abusos de fuerza, que ya es un hecho notorio, el Ejecutivo Federal expande sus facultades en temas de seguridad pública y sólo se encamina a emplear las Fuerzas Armadas discrecionalmente y sin autorización del Senado.

No se advierten pesos ni contrapesos, es decir, en un clima de necesidad se hace presente la oportunidad con que, parece, el Presidente pretende legitimar y reorientar el uso de la fuerza en los próximos procesos del 2018, y así no tener que acudir a la Corte Internacional tras una posible denuncia por violar y poner en peligro la vigencia de los derechos humanos en México.

Incluso al pretender sustituir las competencias de otras autoridades como en la persecución de los delitos.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador.

Corresponde ahora el uso de la tribuna a la Senadora Laura Angélica Rojas, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Laura Angélica Laura Rojas Hernández: Gracias, Presidente. Hace poco más de una década que las Fuerzas Armadas de nuestro país comenzaron a realizar tareas relacionadas con la seguridad pública. Una obligación reservada a los cuerpos civiles en todos los regímenes democráticos.

No hay duda del respeto que el pueblo mexicano le profesa al Ejército y a la Marina. No sólo por la ayuda humanitaria que suelen prestar cada vez que se necesita, sino porque son los únicos que han logrado generar y mantener cierta paz en muchas comunidades a lo largo y ancho del país.

Durante estos años nuestras Fuerzas Armadas han servido con lealtad y disciplina en el combate al crimen organizado. Por ello, se les reconoce y agradece.

Pero, también hay que decir que estos años de lucha no sólo se han perdido invaluables días de soldados y marinos, sino que institucionalmente han sufrido un desgaste por los constantes cuestionamientos y recordatorios de que las tareas relacionadas con la seguridad pública que realizan son irregulares.

A nuestros soldados y marinos se les dijo que su lucha contra los criminales sería temporal; que el Estado mexicano pondría todas sus capacidades en la tarea de definir un modelo policial cuya implementación contaría con recursos económicos y humanos suficientes, para que pudieran regresar a los cuarteles.

Lo mismo se les dijo a los organismos internacionales de derechos humanos que han señalado una y otra vez la necesidad de normalizar la situación.

Pero, a una década que eso se cumpla, no está si quiera a la vista.

Y ese es el problema de fondo, que parece que pretendemos perpetuar una situación que es claramente extraordinaria, pero que además no ha dado resultados.

En lugar de haberse reducido la violencia y la inseguridad, hoy estamos peor que nunca, y ya se dijo, de los 10 estados con presencia militar, con los que empezamos, hoy hay 28, casi todo el país.

Por otro lado, no se trata de eludir la realidad, es un hecho que ante la incapacidad del estado de generar policías profesionales y confiables, hoy día no hay quien supla a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública que realizan.

El problema es la forma en la que se pretende dar respuesta a esa realidad. Ante el fracaso de los poderes ejecutivos, de los tres órdenes de gobierno, por un lado, se desecha la Cámara de Diputados la minuta sobre mando mixto.

Esa minuta que definía un modelo y establecía mecanismos para avanzar hacia la profesionalización de las policías.

Y, por el otro, aprobamos una ley que incentiva la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden.

Si acompañado a la aprobación de esta ley, porque evidente que así será, no hay un compromiso público de los grupos parlamentarios para construir en un corto plazo el marco jurídico pendiente sobre el modelo policial, pero también sobre una reforma integrado al sistema de procuración de justicia, el mensaje no será otro, sino el de la rendición.

Porque aun admitiendo que la existencia de esta ley es necesaria para regular lo que ya sucede de facto, también creo que podríamos haber generado un mucho mejor producto legislativo.

Ideas y propuestas hay, por ejemplo, en la iniciativa del Senador Roberto Gil, se establece un listado taxativo sobre lo que puede considerarse afectaciones a la seguridad interior.

Crea un comité de seguridad interior coadyuvante del Ejecutivo Federal en la conducción de la política de la materia; regula la intervención de comunicaciones privadas, sujeto al control judicial, establece controles legislativos reales al conferir atribuciones al Congreso de la Unión para que a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional dictamine la declaratoria; faculta Senado de la República para retirar a las Fuerzas Armadas de manera anticipada, entre otras.

Estas propuestas atienden por cierto varias de las preocupaciones externadas por los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil.

Y aquí, déjenme hacer una reflexión sobre la tan mentada vocación multilateralista de México., y repetir lo que el PAN ha dicho, año tras año en las comparecencias de los cancilleres en este Senado.

Y es que no se puede, por un lado, reconocer la importancia de los organismos internacionales y asumir que somos parte de ellos sólo cuando nos aplauden, y no cuando nos dicen que las cosas no están bien.

No se puede participar activamente y liderara en los organismos internacionales cuando éstos condenan violaciones graves a derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, y desautorizarlos cuando señalan riesgos a los mismos en nuestro país.

No podemos reconocer el expertis de estos organismos y pedirles su ayuda para crear leyes como las de tortura o desaparición forzada, redactadas en gran medida con sus aportaciones concretas y al mismo tiempo desestimar sus preocupaciones sobre este proyecto de ley.

Nunca antes cuatro altos comisionados se habían pronunciado sobre un problema específico en México, precisamente sobre la necesidad de retirar de manera gradual a las Fuerzas Armadas de las tareas que no son parte de su mandato.

Y nunca antes dos organismos de estados, la ONU y la CNDH, dos organismos autónomos del Estado mexicano, la CNDH y el Inai, y 25 organismos públicos de derechos humanos habían pedido públicamente al Senado considerar la aprobación de una ley.

Voy a terminar ya, Presidente.

Quiero reconocer el esfuerzo que hicieron los presidentes de las comisiones por impulsar varios cambios importantes.

Como el artículo 9, sobre transparencia.

El del artículo 7 sobre protección a los derechos humanos o el Transitorio Quinto que exige a los gobiernos locales la presentación de un programa para avanzar en la profesionalización de las policías.

Sin embargo, aún con estos cambios, el llamado ha sido el día de hoy reiterado por parte de esos organismos internacionales y en un acto sin precedentes se han sumado siete mandatos de derechos humanos de la ONU.

El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias.

El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria.

El relator especial sobre el derecho a la privacidad.

El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias.

El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Y, el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión.

Compañeras y compañeros:

¿De verdad creen que todos estos organismos internacionales y nacionales, conformados por expertos y expertas, están equivocados?

Concluyo diciendo que no se trata de que no haya ley, ni de dejar en la indefensión y a merced del crimen y la violencia a los ciudadanos, como se ha argumentado planteando un falso debate.

Se trata de contar con la mejor ley posible, y creo honestamente que esta ley no es el instrumento transformador que nos lleven a mejorar la situación de inseguridad y violencia que vivimos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Laura Angélica Rojas.

Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador Javier Lozano Alarcón, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

En uso de la tribuna el Senador Lozano Alarcón.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, Presidente.

Buenas noches a todos.

En primer lugar, quiero manifestar mi más amplio y sentido reconocimiento a la patriótica labor, responsable, entregada, profesional y leal de nuestras Fuerzas Armadas, Ejército Mexicano, Marina Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana, y también a la Policía Federal y a la Gendarmería.

Y no sólo hablo a nombre propio, creo que me acompañan las Senadoras representantes del estado de Puebla, aquí presentes, no así quienes se ostentan como Senadores por el estado de Puebla, pero son plurinominales al servicio de su corrupto partido, que es muy distinto, y que gobierno y sociedad en Puebla, estamos muy reconocidos con esta patriótica labor.

Yo lamento que al reconocimiento que se ha hecho, una y otra vez aquí a las Fuerzas Armadas, de pronto siga la hipocresía de regatearles un marco jurídico que les brinde certidumbre para su actuación.

Más aún, es reprobable que los mimos que hoy fustigan y advierten amenazas a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, sean los mismos que aplauden la monumental estupidez de otorgarle amnistía, perdón, y olvido a los capos de la delincuencia organizada.

Ahora resulta que los buenos son los delincuentes y los malos son nuestras Fuerzas Armadas.

(Aplausos)

¡Vergüenza les debería de dar!

Igualmente reprobable es que vengan Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional, que ayer aplaudían la actuación de nuestros Presidentes de la República, y hoy por mero cálculo político, por afanes e instrucciones de su ambicioso líder, hoy reprueben esa actuación, la cuestionen y vengan a decir absurdos para favorecer dicha ambición personal.

Lamento la pobre incongruencia de quienes al tiempo que piden que el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México permanezca en las calles, entonces apoyen, y apoyando a los gobiernos locales, desde luego, ponen en tela de juicio su capacidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, y les nieguen una ley a la altura de sus necesidades.

Lamento, lamento que se levanten campañas basadas en prejuicios, fobias, ignorancia, desinformación y mala fe, y que se privilegien las descalificaciones personales y las frases hechas y los populares hashtag en redes sociales.

Qué pena que se diga que nos estamos precipitando, que trabajamos en lo oscurito después de 10 años de discusión de este tema, de un tema que se ha ventilado suficientemente, que todo mundo ha hablado, ha discutido, ha presentado documentos, diez años también de incertidumbre para nuestras Fuerzas Armadas.

Ignoran o no entienden los opositores del proyecto que ya la Constitución Mexicana otorga al Ejecutivo Federal la facultad de disponer de la totalidad de nuestras Fuerzas Armadas, fracción VI del artículo 89.

Es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Aquí no se está inventando nada.

Que sean unos ignorantes que no sabían que esa facultad existía, es otra cosa, pero lo que urge es una legislación secundaria que regule precisamente cuándo, cómo y dónde deben participar en auxilio de nuestras autoridades civiles y locales las Fuerzas Federales.

Pasa desapercibido para los críticos que, mientras que dicen que se está militarizando al país, ya tenemos una Ley de Seguridad Nacional, y que la Seguridad Interior es parte de la Seguridad Nacional.

Otra vez, otra vez lamento su supina ignorancia. Vergüenza les debería de dar, casi seis años de Senadores, y no entender la diferencia entre Seguridad Nacional, pues, Seguridad Interior integrada, y la Seguridad Pública, que es otro concepto.

Aquí mienten los que afirman que se vulneran derechos humanos fundamentales. Que me demuestren una sola expresión en este proyecto que vulneren dichos derechos humanos fundamentales.

Mienten quienes sostienen que se cancele el principio de máxima publicidad en cuanto a la rendición de cuentas, a la máxima publicidad, a la protección de datos personales en cuanto a la legislación en materia de transparencia. ¡Mienten!

Falta a la verdad quienes repiten que con esta ley se suplanta a la autoridad estatal por parte de la autoridad federal. ¡Mienten nuevamente!

Vergüenza les debería de dar que después de leer las adecuaciones a los artículos 7 y 8, insistan en que se ponen en riesgo los derechos humanos fundamentales y se castiguen las movilizaciones sociales y las que tienen carácter político electoral.

¡O no saben leer, o vienen aquí con toda mezquindad a tratar de confundir al respetable! ¡Eso no se vale!

Elevemos el nivel, tengamos capacidad para debatir con argumentos. Esta ley pone orden precisa, cuándo y cómo es que se debe entender que está en riesgo la seguridad interior, que hay una declaratoria del Ejecutivo, que se da cuenta a la Comisión Bicameral del Congreso, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

que se tiene que publicar, que se tiene que poner orden en cuanto a la coordinación entre las Fuerzas Federales y las Fuerzas Locales.

Se trata de una ley que fija principios fundamentales, que armonizan con la Ley de Seguridad Nacional, gradualidad, proporcionalidad, oportunidad, temporalidad, subsidiaridad, es un instrumento jurídico, ahora resulta que me van a presionar, es un instrumento jurídico como dije, que da vista en todo momento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ya con los ajustes realizados, se impone por primera vez una obligación para que en 180 días los gobiernos locales donde hay presencia de las autoridades federales, deban rendir todo un programa, un programa precisamente con plazos y acciones, presupuesto en seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, a efecto de que hagan su tarea y así lo justifiquen ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Miren, compañeras y compañeros, se los digo como abogado, se lo digo como Senador de la República, y conste que no soy miembro de ninguna de las cuatro comisiones dictaminadoras, porque la mezquindad de quien coordina mi grupo parlamentario por instrucciones de su dirigente nacional me impidió como abogado en todas ellas.

Eso sí, me mandaron a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para tratar con bueyes.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Concluya, señor Senador.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Voy a concluir ya.

Como abogado y como Senador les digo, yo estoy convencido de que nada de lo que aquí se ha planteado es contrario a la Constitución, pero miren, para eso tenemos instituciones y leyes y respeto a la Constitución misma, para eso está la acción de inconstitucionalidad, si alguien estima que aquí se están vulnerando principios o disposiciones de la Constitución, presente su acción de inconstitucionalidad, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que sea el tribunal supremo el que tenga la última palabra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (Desde su escaño) Señor Senador, permítame, discúlpeme que lo interrumpa.

Sonido en el escaño de la Senadora Adriana Dávila, ¿con qué objeto, Senadora?

La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Para ver si el orador me permite hacer una pregunta.

El Senador Javier Lozano Alarcón: No.

Pero ante la duda, precisamente, pero ante la duda tenemos esa acción de inconstitucionalidad.

Ambas Cámaras del Congreso tienen la facultad de presentar, de impulsar dicho proceso, esto se llama vivir al amparo de leyes e instituciones, aunque algunos estén por mandarlas al diablo, pero aquí nosotros, tenemos el ejemplo de virtud y de respeto a la Constitución y a nuestras instituciones.

Y miren, mientras sigamos siendo una República representativa, democrática y federal, los 500 Diputados y los 128 Senadores somos los que tenemos la facultad constitucional de aprobar leyes y, por cierto, en democracia, la mayoría gana, aprendan que esto así es.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Lozano, permítame un segundo.

Senador, sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza, ¿con qué objeto?

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Para subir a hacer una rectificación de hechos, lo acaba de decir el señor proponente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias por su intervención, Senador Lozano.

Se le concede el uso de la voz al Senador Isidro Pedraza para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

Permítame un segundo, por favor, Senador Isidro Pedraza.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

¿Con qué objeto, Senador?

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Sólo para recordar a la Presidencia que sólo tiene trámite preferente las alusiones personales, la solicitud de tomar la voz por la vía de rectificación de hechos debe hacerse hasta que han terminado los turnos de oradores a favor y en contra, eso dice nuestro Reglamento, usted debe de registrar al Senador al final de la lista en razón de que ha solicitado el uso de la palabra por rectificación de hechos y no fue aludido de manera directa por el orador.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Discúlpeme, señor Senador, ofrezco una disculpa a la Asamblea y rectifico mi determinación.

En la rectificación de hechos la podrá hacer usted al final de la lista de oradores.

Perdón, señor Senador, continúo con la lista de oradores.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: No me voy a quitar de aquí si no me dejas hablar.

Lo que sí quiero decir Presidente, porque en el marco del debate que se está dando, hace un rato pasó el Senador Luis Sánchez a hacer una rectificación de hechos y se le concedió la palabra, si ya hay un precedente, debe respetarse el Presidente, eso es lo que dice la práctica parlamentaria.

Aquí se hicieron…

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Termine su intervención, no le asiste la razón legal, pero termine su intervención.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Bien. Hay necesidad de dirigirme a ustedes compañeros, porque se han estado expresando una serie de exabruptos en términos de lo que no comparten, de la visión que tenemos en torno a esta Ley de Seguridad Interior.

De entrada, quiero decirles que hay muchas organizaciones de derechos humanos, la propia Federación de Comisiones de Derechos Humanos en el país, se ha pronunciado en contra de esta ley que no debe de ser aprobada, porque esta ley tiene contradicciones, tiene ambigüedades, faltan a preceptos constitucionales y la misma ley es inconstitucional, de manera general, sí, estoy viendo lo que dijo aquí, tiene profundos problemas de constitucionalidad, de convencionalidad, de ausencia de contrapesos, de controles democráticos, de inexistencia de límites de temporalidad precisos respecto a la vigencia de las declaratorias de afectación a la seguridad interior al prever la posibilidad de prórrogas sin controles de carácter progresivo, es en el artículo 15, dijeron que aquí había que precisar en dónde están las violaciones, carece de controles adicionales en materia de derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias, artículos 7 y 12, de controles legislativos posteriores para evaluar los resultados de las declaratorias.

Artículo 33. Transgrede los principios de máxima publicidad y el ejercicio del derecho humano de acceso a la información.

Artículo 9. Prevé alta discrecionalidad del Ejecutivo.

Artículo 16. Contiene ambigüedades.

Artículo 10. Y da excesos y lugar a la criminalización de la protesta social a violaciones de los derechos humanos, implicará incluso esto, consecuencias más graves en materia de seguridad.

Aquí se mencionó que no conocemos lo que tiene establecido el artículo 86, pero compañeros, esta ley de carácter federal, es una ley que trata de sumirse en una ley de carácter general y es ahí uno de los rasgos de inconstitucional que tiene, que no se puede resolver con ese transitorio que están pretendiendo presentar.

Este es uno de los graves errores que presenta esta iniciativa, nosotros o esta minuta.

Compañeros, yo quiero decirles, incluso, que aquí se ha estado haciendo una polarización de las posiciones políticas y de las conductas de varios de nosotros, hemos llegado con la desconfianza al albazo legislativo, y hemos estado buscando en el Reglamento y en las discusiones de este órgano, encontrar el método para darle transparencia a esto.

Nosotros tenemos que evitar que nos pase lo que nos pasó cuando llegamos a esta Cámara de Senadores, muchos de ustedes recordarán que la anterior Legislatura aprobó contra la voluntad de la mayoría una Ley de Víctimas; esa Ley de Víctimas fue rechazada por la sociedad, esa Ley de Víctimas fue judicializada, y aquí están tratando de repetir el mismo escenario al final del sexenio, y tuvieron que corregir al principio de esta Legislatura el propio Presidente Peña Nieto, para dar oportunidad de elaborar una nueva Ley de Víctimas.

Yo creo que en la medida en que estemos empeñados nosotros en politizar esto, y no entender si hay un conjunto de voces que están llamándonos a que esta ley no puede darse como está planteada, nadie está negando que tenga que establecerse una ley que regule la presencia de las Fuerzas Armadas y la Marina en este país, pero esta ley no es la ley que lo resuelve, esta ley es un mecanismo para legitimar el abuso de la fuerza, atropellar los derechos humanos, y no habla, de ninguna manera de garantizar conceptos que no tienen claros, incluso.

El propio Cienfuegos, el 6 de diciembre de este año, a una pregunta expresa que le hicieron ahí acerca del concepto de seguridad, el propio Secretario dijo de la Defensa Nacional, en el periódico Excélsior, el 6 de diciembre de 2017, “no hay nada que defina, decía el General Cienfuegos en aquella oportunidad, qué es la seguridad interior”.

¿Y cuándo son problemas de seguridad interior? Desde mi punto de vista estamos entrando ya en un panorama donde muchos de los asuntos que considerábamos de seguridad pública hoy han escalado y tienen que ser considerados problemas de seguridad interior.

Yo quiero decirles frente a lo que se vino a decir aquí que hay tres conceptos importantes que tenemos que tener claros.

Cuando se habla de seguridad pública nos referimos a la capacidad del Estado para preservar la integridad física de las personas, la integridad física de las personas y su patrimonio, garantizando una convivencia pacífica en la sociedad.

La seguridad interior es un concepto que involucra a asegurar el funcionamiento de las instituciones, la gobernabilidad democrática o el Estado de derecho ante el surgimiento de riesgos internos, lo que esta ley no materializa.

Y tercero. La seguridad nacional está relacionada con la capacidad de proteger el territorio de amenazas externas.

Estos conceptos no han quedado claros a los que han venido aquí a defender, hay compañeros que en un afán solícito y presto de querer ser más…

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Concluya, Senador.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Voy a terminar, de querer ser corifeos de esta iniciativa, lo que hacen es negar una discusión auténtica, civilizada, de cuáles son las verdaderas contradicciones y debilidades de esta ley, no ayudan posiciones que a veces parecen más lambisconas que posiciones basadas en un conocimiento jurídico.

Aquí se tiene que tener claro cuál es el alcance legal de esta ley y cuáles son las contradicciones jurídicas que contiene.

Por eso a veces pretender aquí ser más papista que el Papa desacredita a la persona que lo está haciendo.

Muchas gracias, Presidente, por su tolerancia.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Isidro Pedraza.

Corresponde el uso de la voz.

Sonido en el escaño del Senador Encinas.

¿Con qué objeto, señor Senador?

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Es una moción de procedimiento a fin de normar el criterio del debate sobre alusiones personales y rectificación de hechos.

Yo quisiera solicitar le instruyera a la Secretaría diera lectura al artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que regula los debates de esta Cámara de Senadores.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Me parece pertinente su sugerencia, señor Senador Encinas.

Solicito a la Secretaría dé lectura al artículo referido por el Senador Alejandro Encinas.

¿Perdón, Senador, se refiere al artículo?

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) El artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Senador, el Reglamento que rige la actuación del Senado de la República es justamente el Reglamento del Senado de la República.

Rectifica usted la solicitud de que se lea el artículo, estamos actuando en base al Reglamento del Senado de la República.

Corresponde el uso de la voz al Senador.

A ver, Senador Encinas.

Sonido en el escaño del Senador Encinas.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) No, rectifico.

Esta Cámara se regula también por el Reglamento del Congreso y el Reglamento del Senado de la República es omiso en este caso, no lo define con precisión.

Por lo tanto, de manera supletoria, se aplica el del Congreso General.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Permítame un segundo, señor Senador.

Me voy a permitir dar lectura, para mayor claridad a la Asamblea y a solicitud del Senador Alejandro Encinas, el artículo 78 del Reglamento del Senado de la República a la letra.

"En el desarrollo del debate se concede la palabra a un Senador cuando se le alude de manera personal, para estos efectos el solicitante interviene inmediatamente después del orador".

El artículo 79 establece. La rectificación de hechos se limita exclusivamente a enunciar los que habiendo sido referidos se estiman incorrectos y a exponer clara y concisamente las razones que se tienen para ello, no establece que se haga en forma inmediata.

Por lo que en apego a la literalidad de este Reglamento que rige al Senado de la República, procederemos con el criterio de que las alusiones personales podrán ser respondidas de manera inmediata.

Y rectificación de hechos se hará una lista y al término de la relación de los oradores registrados podrá dárseles el uso de la voz a quienes así lo hayan solicitado.

En uso de la voz el Senador Raúl Morón, para hablar en contra del dictamen.

En uso de la tribuna el Senador Morón.

El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, Presidente.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores.

No votaré yo a favor de una Ley de Seguridad Interior que atenta contra los derechos humanos y la democracia, una ley que nos quiere obligar a perpetuar la guerra. Esta guerra que tristemente comenzó en mi estado con el operativo conjunto Michoacán, hoy es elevada a rango de ley, y con esto llega a su estado más crítico esta tendencia militarista que está acabando también con las libertades y con la democracia, que costaron durante décadas muchas muertes que hasta el día de hoy no han tenido justicia.

Los resultados de esta guerra están a la vista, más de cien mil personas han sido asesinadas durante estos sexenios, no se sabe el número exacto de víctimas, de desaparición forzada, cuyas cifras extraoficiales hablan de hasta 30 mil desapariciones.

Además, muchas partes del país siguen siendo un auténtico campo de guerra y la presencia de las Fuerzas Armadas no ha sido la solución y tampoco lo podría ser la seguridad humana de la sociedad mexicana sólo puede venir de los poderes civiles, del fortalecimiento del Estado y de una auténtica transformación y fortalecimiento tanto de las policías municipales y estatales, como del Poder Judicial de las procuradurías para investigar y castigar los delitos.

Esta ley significa emprender el camino contrario, impone una fase todavía más cuestionable de esta guerra sin haber resuelto las consecuencias en materia de derechos humanos y estrategia no militaristas de la etapa anterior.

Los resultados, en materia de seguridad, han sido regresivos en estos dos sexenios, cabe destacar que esta situación de excepcionalidad siempre fue presentada como una medida temporal, ya que carecía de un marco normativo y servía para preparar una política pública de seguridad más profunda y de mayor calado.

No fue así, esta ley es una claudicación del poder civil en materia de seguridad y transfiere de manera ilegítima al poder militar esta responsabilidad.

Ahora se quiere que sea legal, pero no legítima y que las Fuerzas Armadas sean obligadas a cumplir funciones que sólo competen a los poderes civiles.

El Parlamento Europeo, entre otros organismos e instituciones, han dicho que esta ley no es la solución idónea frente a los problemas de inseguridad, delincuencia y violencia que enfrenta México.

Escuchemos bien esto, cito: “un mando militar en tareas de seguridad pública, según todas las experiencias internacionales, es inapropiado”, término de la cita.

Esta ley vuelve a colocar a nuestras Fuerzas Armadas en riesgo de no cumplir con sus responsabilidades que evidentemente son más nobles y necesarias, que participar en una guerra interior; violenta las funciones del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Armada que deben ser instituciones de ayuda y servicio para el pueblo de México y que, por el contrario, hoy quieren obligarlas a que cumplan con funciones de investigación y procuración de justicia, lo que desnaturaliza su función primordial, que es defender la integridad, la independencia, la soberanía de la nación y apoyar a la población ante situaciones de desastres y emergencias, tareas por lo cual han ganado el reconocimiento de los mexicanos y las mexicanas.

No bastaron los múltiples señalamientos y argumentos que se hicieron llegar a las comisiones para sustentar la petición de ampliar su revisión y análisis, entre las que se encuentran la inconstitucionalidad, su ataque al federalismo, su inconvencionalidad, entre otras, las que ya han sido expuestas por otros y otras compañeras Senadoras y Senadores, así como por diversas organizaciones y organismos defensores de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales.

Ningún ordenamiento había generado un cuestionamiento internacional de tal magnitud, es inédita la manera en que ha sido cuestionada esta ley por los organismos internacionales, además su gran ambigüedad abre la puerta a una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria, como el concepto mismo de seguridad interior.

Esta ley hace caso omiso una vez más de la grave situación que vive México en materia de derechos humanos, es parte de una política negacionista que precisamente niega y quiere esconder, como si esto fuera posible, la desaparición forzada de miles de mexicanos o de homicidios y tortura como consecuencia de una política belicista, militarista, que en los últimos once años han marco el trágico rumbo de México, ha tenido en su fallida guerra contra el crimen organizado.

Niega el dolor de miles de víctimas y su derecho a la verdad y a la justicia.

Antes de modificar las atribuciones de las Fuerzas Armadas en México el Gobierno Federal debe cumplir con las recomendaciones de las que ha sido objeto en lo que se refiere a la violación sistemática contra los derechos humanos.

Es urgente que el actual Gobierno Federal genere las condiciones para esclarecer las masacres de San Fernando, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como miles de desapariciones forzadas en las que se presume hubo una participación de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Tenemos que decirlo con todas sus palabras, la Ley de Seguridad Interior es una ley de represión y de guerra.

Desde hace dos sexenios se desplegó una estrategia fallida contra la impunidad, la corrupción y la violencia que ha dejado, con la omisión o anuencia de los últimos gobiernos federales, que las empresas criminales crezcan y se diversifiquen.

Lo que México necesita es una política de paz y de reconstrucción nacional, una política de Estado que construya una paz con justicia desde las mismas instituciones.

México está herido y su dolor es inmenso, miles de víctimas de la absurda guerra contra el crimen organizado nos reclaman hoy que cambiemos el rumbo, que abramos las vías de una política pública para la paz, de la cual tenemos experiencias exitosas en América Latina y que hoy son más necesaria que nunca.

Una paz con justicia para salir, por fin, de la pesadilla de esta guerra.

Senadoras y Senadores:

Para muchas y muchos mexicanos la aprobación de esta ley es la prueba contundente de que México necesita un cambio de régimen, los que voten a favor van adelantar contra su voluntad esta transformación que México ya exige. Hoy también comienza la lucha por otro México.

Ustedes con su voto a favor de esta guerra han creado un frente de ciudadanos y de organismos a nivel internacional junto a los cuales lucharemos para que esta ley sea parte de una pesadilla del pasado y no de una eterna guerra del presente.

Hoy tenemos que elegir la paz como un camino para la democracia, la seguridad humana y la reconstrucción de México.

Hoy podemos comenzar el camino hacia un proceso de paz que debe cambiar el rumbo del país.

Visto desde esta perspectiva no existe esta fatalidad que quieren presentar como única alternativa y que se traduce en votar la guerra con esta ley.

Por el contrario, si pensamos en el futuro de México desde la perspectiva de un proceso de pacificación y reconstrucción nacional con el imperativo de los derechos humanos, la libertad de la democracia y un nuevo modelo de distribución de la riqueza, las posibilidades se abren y podemos comenzar un verdadero diálogo nacional con la sociedad para recuperar las opciones de paz para México.

En esta hora, en la que el Gobierno Federal y sus aliados en este Senado predican la guerra interior como única alternativa.

¿Militarización o proceso de paz?

Esa es la pregunta que hoy votamos a responder en este Senado de la República.

México sueña con construir otro país que hoy nos exige una seguridad sin guerra, por eso mi voto es por la paz y en contra de esta iniciativa.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Morón.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia.

Distinguidos legisladores:

México quiere y merece paz, seguridad ciudadana y certeza jurídica, es el tamaño del reto que tenemos que reconocer. Y la sociedad reclama resultados, resultados y más resultados.

Las Fuerzas Armadas de México están conformadas por hombres y mujeres valientes, dispuestos a dar la vida por todos nosotros, no deben considerarse como jugadores emergentes en un combate interminable contra la delincuencia, y merecen instituciones sólidas que protejan su actuación.

Pero las Fuerzas Armadas no viven en un país diferente al que vivimos el resto de los mexicanos, y así como debe de darse certeza jurídica a su actuar es nuestra obligación como legisladores construir un marco jurídico que vele por estos valores enunciados.

Encontrar un equilibrio no es fácil, ni una tarea acabada, pero la polarización tampoco es la respuesta, por eso me manifiesto en contra de este proyecto de dictamen.

Desde el artículo 1 surgen argumentos en contra, se establece por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer, primero, las bases; segundo, los procedimientos, y tercero, las modalidades de coordinación entre poderes de la Unión, entidades federativas y municipios.

Esta iniciativa no establece bases, no establece procedimientos y no establece las modalidades de coordinación.

No siquiera se menciona la palabra Congreso, Senado, Corte, ¿entonces qué poderes pretende coordinar?

Propone principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, pero ninguno de ellos se respeta en el articulado, por el contrario está basado en la irracionalidad, en el anacronismo y la desproporcionalidad, el centralismo y la perpetuidad.

Estamos de acuerdo en la intención, pero el remedio propuesto no es el indicado.

No es posible tantas voces equivocadas, organismos internacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos; especialistas, pero aquí se hicieron oídos sordos, y lo único que se hizo evidente es que este diagnóstico parcial y equivocado pues da un tratamiento inapropiado.

Preguntas básicas.

Primero. ¿Se necesitaba una ley?, no, lo que se necesita se reglamentar la certeza jurídica y no lo logran.

¿Es novedosa? No. Es un documento referencial cuyo valor agregado es mínimo, porque no hay contrapesos, y no se elimina la discrecionalidad.

¿Dónde está el Congreso?, ¿dónde están las autoridades locales?

Tercero. Viola posiblemente derechos humanos, pues es lo que afirman organismos internacionales y nacionales, y debe de ser un motivo de preocupación.

Cuarto. ¿Contradice el marco jurídico actual?

Juristas respetados, así lo señalan, y denuncian la posible violación a disposiciones constitucionales.

Y la lista de preguntas podría continuar.

Esto es muy lamentable, porque de compañeros de este Senado tuvimos mejores iniciativas y que fueron ignoradas.

Por ejemplo, se definía en otra iniciativa el supuesto de afectación a la seguridad interior, aquí no valió.

La posible creación de un comité de seguridad jurídica, se olvida.

El contemplar la participación del Congreso, mínima.

El limitar la temporalidad del intervención y mecanismos del términos de vigencia, a un lado.

El dictamen nos sugiere una enorme cantidad de razones para oponernos. Por ejemplo, el artículo 2 establece la seguridad interior como una condición que le da al Estado mexicano, la salvaguarda en la permanencia y continuidad de las órdenes del gobierno y de instituciones, pero no tiene materialización.

Este proceso legislativo se ha convertido en una contradicción, afectó la estabilidad institucional, se violentaron los procedimientos legislativos, hasta ayer se integraron las comisiones unidas. La población no pudo acceder a su derecho de audiencia. Este servidor, Juan Carlos Romero Hicks propuso que se abrieran las audiencias púbicas, y ayer, se votó en contra, no queríamos diálogo.

El señor Presidente de la República exhortó al Senado a abrir el diálogo, no se hizo de manera abierta.

En este Senado hemos pasado de un Poder Legislativo a un querer legislativo o peor aún, y no quiero ser irrespetuoso, llegamos a un perder legislativo. Cada vez más el Congreso de la Unión pierde facultades, cada vez menos funciona como contrapeso, cada vez menos se representa y se escucha al elector. Pareciera que hemos perdido el sentido común.

Escucho voces a las que respeto con actitudes elocuentes, pero sin razón. Y este Congreso no puede permitirse terminar siendo una oficialía de partes, que sólo responde a otros intereses.

Nadie es el dueño de la verdad. Lo que sí puedo comentar, porque un gobierno local, y afortunadamente entregarlo sin violencia e inseguridad agravada, sin corrupción e impunidad que pareciera que estamos leyendo diferentes realidades y textos diferentes.

Pues hoy frente a la historia ni siquiera el concepto de seguridad se define apropiadamente, en el resto del mundo lo que permea más es el concepto de seguridad ciudadana.

Gran intención y gran fracaso en la solución, porque dejamos aspectos pendientes, el mando mixto que aquí construimos el año pasado, la justicia cotidiana, el control el uso legítimo de la fuerza, entre otras circunstancias.

Me pesa y por eso voy a votar a favor de México, a favor de sus Fuerzas Armadas y de las buenas policías que todavía tenemos; a favor de la autoridad local, que entiende el federalismo, y por eso mi obligación es votar en contra.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Romero Hicks.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: Presidente, antes de tomar el tiempo, solamente quiero reconocer al Senador César Pedroza la rectificación que hizo hace un momento, habla de sus calidades, que la palabra cuando la solicita un Senador por alusiones personales le debe ser concedida de inmediato, y que no tiene uno que recurrir a la mochila sonora para que te den el derecho a la palabra.

Pero, ya quedó claro, y para que no quede un precedente.

Por otro lado, las palabras sabias del Senador Romero Hicks, siempre aprende uno de él.

Por mi parte yo si quiero expresarles con toda la rudeza que la Ley de Seguridad Interior es una ley de mierda, que expresa la vileza de un hombre débil, arrodillado ante los Estados Unidos y al poder militar.

Y que en los estertores de su desprestigiado mandato, vino aquí a sembrar miedo, impotencia y rabia.

Esta ley es preludio de dictadura, es la militarización del país, lo quieran reconocer o no.

Y, repito las palabras del gran constituyente, el general Múgica, justamente hace cien años, qué visión, refiriéndose a la militarización, a primera vista no hay amenaza, pero se convierte indefectiblemente en un desquiciamiento, pues corriendo el tiempo, creyéndose privilegiados, terminarán por despreciar el poder civil.

Qué pasará con este marco que no tiene controles, que le deja que ellos se autogobiernen.

Las modificaciones que se hicieron en este Senado son una burla, Peña Nieto pidió respetuosamente, ante la avalancha, ante la presión que tenía para lavarse la cara, que se hicieran las consultas, y entonces, rápidamente oyeron, pero no escucharon a las organizaciones civiles que estuvieron aquí en el Senado, tampoco a los organismos internacionales, como si fueran gentes inexpertas.

Aquí nos quedó claro que todo esto fue un maquillaje, que no sirve para nada, fue una simulación, no cambió la esencia, y, que lo que sí, pues Peña no traiciona su vocación de farsante, y los Senadores, en su mayoría, su fama de serviles y de inútiles.

Por esto, porque hacemos contrapeso, y es nuestra función primordial, y ya lo tenemos que tener registrado que ya ser va a terminar nuestro período.

Nunca un ordenamiento de seguridad había provocado tanta inseguridad y miedo en la ciudadanía, y nunca tantos organismos internacionales y nacionales habían clamado al Ejecutivo y a los legisladores que detuvieran esta ley.

El Congreso fue sordo, ya lo dijeron acá, a la advertencia de que esta ley irrumpe el orden constitucional, es inconvencional, da licencia para matar y para violar los derechos humanos. Y ya lo verán.

No es buena, ni para las Fuerzas Armadas, ni para los ciudadanos, ni para nadie. Desafía, esto es un desafío a los organismos internacionales.

Dice una compañerita, que son fieles a la línea: “Que no viola los derechos humanos”.

Bueno, aquí nada más con un ejemplo. Que lea el artículo 31.

Imagínense que hoy los órganos autónomos, pues, deberán proporcionarle la información que pida la autoridad. Así dice el artículo 31. O sea, la Comisión de Derechos Humanos, que es autónoma, cuando venga a pedirle la autoridad de las Fuerzas Armadas información, pongamos el ejemplo a un sobreviviente de Tlatlaya que recurre a la Comisión de Derechos Humanos.

¡Ah, no! Pues, van ellos, y deme el expediente y deme la información necesaria, la que ellos quieran, y estará obligado a darla.

Dejamos en la indefensión a los ciudadanos. Esto es gravísimo, se acaba con todo, con la secrecía, el secreto bancario, con todo, y no nos damos cuenta que esta es violación a los derechos humanos. Y se va haciendo el caminito ¡Eh!

Esta ley es un remate. Ya habíamos aprobado otras cinco. El Código de Procedimientos Penales que existe, un código nacional, y entonces, ahora sí lléveselo.

Y nosotros aprobamos un Código Militar de Procedimientos Penales. Que no se acuerdan que dio, entonces, la posibilidad que pueden catear las casas de los ciudadanos.

Cuando se lo piden a un ministerio militar, el ministerio pide la autorización al juez militar, y entonces, podrían entrar a la casa de cualquiera o a este Congreso, incluso.

Entonces, estamos dándole cada vez mayores atribuciones y, pues, si esta ley es perfectible, dijo aquí una compañera, bueno, y ¿por qué tanta prisa?

Once años nos hemos pasado en una guerra que no pedimos.

No se dedicaron un minuto, no sé cuánto tiempo debieron haberle dado a las fuerzas policiacas para que se reforzaran, se fortalecieran, para darles dignidad. No nos hemos ocupado.

¡Ah! Pero con esto, si deberás creían que no iba a ser a perpetuidad, y que nada más que un año, y al año otra vez el Presidente dice que otra otro, y así nos la podemos pasar hasta la eternidad, junto con esta ley se debió haber presentado un plan concreto por escrito, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el retiro gradual de las tropas.

Y entonces, les creeríamos una propuesta de cómo se van a capacitar a las policías, cómo se van a fortalecer.

¡Ah! Pero también un plan de cómo vamos a capacitar a las Fuerzas Armadas, porque esto es importantísimo.

Que creen que porque lo dicta la ley. Su mentalidad va a cambiar de la noche a la mañana.

Fue muy claro el Comandante, el General Cienfuegos, cuando dijo: “Nosotros, así textualmente, hemos sido preparados para matar, no para detener”.

O qué, les digo ¿Se puede cambiar, así nada más porque sí el chip?

¿Quién los va a capacitar?

El General Alejandro Ramos, que vino aquí a este Senado, por cierto muy arrogante, y todavía no se aprueba la ley, el que fue autor intelectual del desafuero de AMLO, seguramente debe estar por ahí escondido, vino a este Senado a defender su ley, o más bien, la ley que le dictaron en inglés.

Pero en un momento de lucidez reconoció que la labor del Ejército, dijo él muy diplomáticamente: “No había sido exitosa”. No, debió haber dicho que había sido un fracaso.

Pero dijo algo que es muy importante, y que sí hay que considerarlo, dijo: “No fue exitosa porque no se atendieron las causas que originaron la violencia”.

Y díganme dónde está este plan, estas estrategias integrales que van atender las causas del crimen. No están. Aquí nada más la ley, con todas las líneas y los dictadores que les deben haber hecho.

La presencia del Ejército, pues, ya lo sabemos, ha traído como consecuencia más violencia y muerte, pero lo que no dicen que es una estrategia imperialista, y aquí lo dijo el Senador Bartlett: “Ellos nos venden las armas, consumen las drogas y nosotros ponemos los muertos”. Y estamos librando, desde hace once años, una guerra que no merecemos.

México compró, en 2014, a Estados Unidos mil millones de dólares en armamento, cifra que triplica el gasto, que a través de la iniciativa Mérida nos dan.

¡Fiebre de compras de México! Dijo entusiasmado el Almirante William Gortney, cuando adquirimos después 9 mil millones de dólares. El 70 % de las armas decomisadas provienen de Estados Unidos, es un negocio redondo.

Pero seguimos insistiendo en que hay que combatir la delincuencia, cuerpo a cuerpo, bala a bala. Impunidad e indulgencia plenaria para los militares sin controles.

Ellos ¿Cuándo han rendido cuentas? Ni las rendirán.

Aquí veo, los órganos internos de control en la Sedena y Semar, pues, son nombrados a placer por las mismas secretarías militares.

¿Quién los va a controlar?

¿Cuándo han venido a este Congreso a rendir cuentas?

¡No, no, no! aquí van, aquí van los Senadores en peregrinación, humildemente a recibir instrucciones a donde ellos los citen, pero aquí, no sólo ahora.

Nunca en la historia ha venido un Secretario de la Defensa o de Marina a rendir cuentas al Senado, como se hace en los Estados Unidos.

Bueno, pues entonces, con toda esa impunidad y estos sin controles, oiremos hablar de ejecuciones extrajudiciales, que en la historia oficial se dicen: "enfrentamientos".

Vendrá la multiplicación de Atencos, de Tanhuatos, de Tlatlayas, de más Ayotzinapas y Nochistlanes.

Sabemos de más desaparecidos, de cuartos de tortura, de colgados y apaleados, de aviones que arrojan al mar a los detenidos, de cárceles en que las víctimas se pudren entre orines e inmundicia.

Oiremos muy pronto el crujir de huesos en los cuarteles militares.

Y que quede claro, antes de que ustedes, Senadores, se avienten desde lo más alto, desde la punta aquí del Senado, desde las gradas, les digo: No estoy en contra de las fuerzas militares.

Aquí, aquí se envuelven en la bandera para escudarse y no defender la ley y no decir por qué están aprobando esta mierda.

Entonces quiero decirles que en la historia del país las fuerzas militares han tenido una misión y las ha prestigiado, y eso lo reconocemos, pero yo, lo que estoy en contra es que sean usados como policías y ellos mismos tampoco quieren, ellos no eligieron esta profesión y no están preparados.

No estoy de acuerdo en que no rindan cuentas, en que no haya controles y hagan lo que quieran y que cuando los mande Peña Nieto el control de Peña va a ser Peña.

Entonces esto es una aberración.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: Discúlpeme Presidente, aquí han tomado el tiempo que han querido y voy a terminar, por favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La interrumpí porque me parecía que el Senador Bartlett quería hacerle una pregunta, pero entiendo su comentario y proceda usted.

La Senadora Layda Sansores San Román: Sí, han sido muy pacientes, se pasan, lo que quieran, aquí es el único derecho que nos dan, de pataleo, pues ahora me oyen.

La Ley de Seguridad es una tragedia para México, Peña Nieto usa al Congreso que se deja para aprobar una aberración cada vez más degradado el Congreso, es una vergüenza, y miren, sepan que ningún Estado de derecho que esté consolidado, los ministros o secretarios de la Defensa, o Marina, son militares y mucho menos cuidan al Presidente, no es labor de militares. Eso tenemos que irnos dando cuenta, porque entonces es el Poder sobre el Poder, esta ley no es para darle certidumbre a las fuerzas castrenses, sino para que puedan autogobernarse y para que Peña pueda blindarse, mejor hablen con la verdad, le preocupa proteger los intereses transnacionales, pero además sabe que perderá las elecciones, que la ciudadanía no aceptará más

fraudes y teme las protestas ciudadanas, a Peña no le importa la seguridad de los mexicanos, lo que quiere es un ejército privado que lo proteja de sus raterías, lo que quiere es salvar su pellejo, Peña es un cobarde, de hombre tiene el nombre, las entrañas de gallina, diría el poeta.

Pero no está puesto el punto final, ciudadanos, habrá que acudir a la Suprema Corte, a los organismos internacionales, se cerró esta puerta, pues haremos otra y sigamos colocando andamios y escaleras, estamos indignados, traemos el llanto degollado, la rabia, pero las arterias vivas, no a la Ley Golpista y a ustedes sátrapas les sobrevivirá la vergüenza. (Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra el Senador, sonido en el escaño del Senador Barbosa.

El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Muy simple, Presidente.

Se escucha algo en las gradas, parece que le están haciendo algo a alguien, están no sé, un grito medio raro, exhórtelos, no, al final, nadie está diciendo que salgan, sino que no participen bajo ninguna forma de expresión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene usted, razón, Senador, y ahorita averiguamos quién está sometido a tanto dolor ahí en la galería.

Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador José María Tapia Franco.

El Senador José María Tapia Franco: Con el permiso de la Presidencia.

De verdad que he escuchado aberraciones jurídicas, políticas y personales a lo largo de mucho tiempo, pero nada como lo que muchas y muchos Senadores han manifestado esta noche.

Desvirtuar el objetivo de la ley que como patriotas y mexicanos y en apego a la protección de miles de ciudadanos o millones de ciudadanos que están viviendo en más de 27 entidades del país y negarles la oportunidad de garantizarles su seguridad es algo que realmente es inhumano y con muy poca conciencia del deber ciudadano o político que tenemos como Senadores.

El objetivo principal de esta ley, es garantizar que toda la población de nuestro país se rija por el principio rector que es posible alcanzar escenario de estabilidad de paz y orden, elementos esenciales para el desarrollo político, social y económico de México.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Disculpe que lo interrumpa.

¿Acepta una pregunta del Senador Luis Fernández?

El Senador José María Tapia Franco: No, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

El Senador José María Tapia Franco: En pleno respeto, en pleno respeto a los derechos humanos, como la propia ley lo establece.

En esta ley, se regula la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, lo que se traduce en certeza jurídica para la población y para los propios integrantes de las instituciones militares de nuestro país.

La Ley de Seguridad interior, es un importante paso para saldar una cuenta pendiente con nuestras Fuerzas Armadas, y aquí quiero hacer una pausa.

En la discusión que hemos tenido en comisiones les pregunté a mis compañeras y compañeros cuántos de los presentes tenían familias o familiares de origen castrense en el Ejército y levantaron la mano muy pocos.

Quiero decirles que yo provengo de una familia integrada por miembros de las Fuerzas Armadas, mis dos abuelos generales y mi padre médico militar y han estado al servicio con orgullo y patriotismo de nuestro país. Y es por ello que es necesario darle la certidumbre jurídica, pero también reconocer su labor patriota y con orgullo que nos brindan.

La legislación define a la seguridad interior como la condición que proporciona al Estado mexicano salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional.

Esta ley contempla bases y procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en materia de preservación de la seguridad interior.

Las atribuciones de seguridad pública se realizarán en observancia a los principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad y gradualidad, además de las obligaciones inherentes al uso legítimo de la fuerza.

Las actuaciones de las Fuerzas Armadas se encuentran delimitadas, señores, no se trata de una militarización del país, en virtud de que toda intervención tendrá una temporalidad específica que no podrá exceder de más de un año y sólo podrá prorrogarse por acuerdo del Presidente, siempre que la amenaza o el riesgo subsista en el interior de los estados.

Pero quiero ir un poquito más allá y le pido una comprensión, pues me voy a exceder en el tiempo, Presidente.

Aquí se ha dicho y se ha hablado y se ha debatido que es una Ley para las Fuerzas Armadas. Falso, no es una ley exclusivamente para las Fuerzas Armadas, compañeras y compañeros.

Se ha tratado de exponer una realidad clara que vivimos hace mucho más de una década e nuestro país y que viene desde los años 70's con el inicio de la operación Cóndor, después Marte y después de las atribuciones que el Ejército ha tenido en materia de narcotráfico y delincuencia organizada.

Manifiestan que esta ley no protege a la población, es un argumento fuera de contexto y falso, puesto que salvaguardando la permanencia y continuidad de los órdenes de gobierno y de las instituciones que procuraron un Estado de derecho y de gobernabilidad democrática, se deriva el bienestar social.

Una mentira más, se dice que no explica el uso legítimo de la fuerza. Otra vez falso.

En el caso de esta ley no se enfoca a definir el uso de la fuerza, es correcto, porque nos remite a los protocolos ya establecidos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional en cuanto al método técnicas y tácticas para el uso personal de la fuerza.

Se dice que no establece protocolos, y eso nuevamente es falso, ya que señala que se sujetará a los protocolos establecidos por las leyes en la materia.

Se dice que el Presidente puede hacer uso de las Fuerzas Armadas sin necesidad de declaratoria. De verdad, me preocupa que no la hayamos leído o estudiado en unas fracciones y en otras sí, porque estamos hablando de cuestiones diferentes.

Esto nuevamente es falso y fuera de contexto, compañeras y compañeros Senadores.

Se establece que se implementarán políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos y amenazas contempladas en la Agenda Nacional de Amenazas y Riesgos que nosotros como Poder Legislativo, en coordinación con la Cámara de Diputados, establecemos.

Se dice nuevamente, falsamente, con un engaño claro hacia la opinión pública y hacia los millones de mexicanos que están viendo este debate, que reprime la libertad de expresión, y nuevamente les quiero decir que esto es falto, ya que en el artículo 8 de la ley establece que las movilizaciones de protesta social que tengan un motivo político-electoral, y me sumo a las modificaciones que se hicieron para quitarla pacíficamente, serán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenaza de la seguridad interior.

Se dice que la ley provoca una militarización en las calles, yo creo que no hay nada más falso que este término, lo que pretende esta ley es regular la forma en que el Ejecutivo pretende y puede cumplir con su responsabilidad de preservar la seguridad interior en coordinación con todas las demás instancias federales que incluyan y que incluyen a las Fuerzas Armadas.

Esta ley además establece ¡Ah! este es un tema que quiero aclarar alguna fracción, se dice que la autoridad civil se va a subordinar al mando militar y con esto provoca un atentado a la soberanía y al Estado de derecho y la democracia.

Se les olvida que el titular del Ejecutivo Federal, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es civil y es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y tiene bajo su control y bajo su mando a las fuerzas federales.

Y, por último, se argumenta que los conceptos de seguridad interior y seguridad nacional nada tienen que ver, pues que son de diferente naturaleza.

Quisiéramos que leyéramos el artículo 89 de nuestra Constitución en la fracción VI, que a la letra dice: “para preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior, y son facultades del Presidente de la República”, pero creo que para algunas fracciones el 1 de julio lo ven muy cerquita y quieren politizar una ley que da certeza y garantías.

Y concluyo, Presidente.

En un documento denominado “Proyecto de nación 2018-2024” presentado hace pocos días o semanas por el señor López, en un fragmento que se refiere al fortalecimiento de la procuración de justicia, para ser muy específico, como lo dijo el Senador de mi partido, el Senador Patricio Martínez el día de ayer en la página 77, les ordena a sus fracciones que es necesaria la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, ya que es impensable que el Ejército continúe realizando labores sin un marco jurídico legal y apropiado”.

Y en consecuencia, hago y dejo una pregunta.

¿Por qué hay Senadores que se oponen a que esta ley, que se debate en el Pleno, y no piensan por los ciudadanos, a quiénes protegen dichos Senadores, o será acaso que están pensando que la amnistía contra los delincuentes, extorsionadores y delincuentes organizados es la solución para modificar al país?

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Tapia.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Mendoza.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, Presidente.

Buenas noches compañeras y compañeros Senadores.

Dado que no nos dimos la oportunidad de un verdadero proceso de diálogo, donde cada una y cada uno de nosotros pudiera escuchar los argumentos de la sociedad civil con respecto a la expedición de una Ley de Seguridad Interior, voy a recuperar los argumentos sobre la inconstitucionalidad que han hecho valer más de 200 organizaciones y cien especialistas que componen el colectivo seguridad sin guerra.

A pesar de que se ha modificado el artículo 1 del dictamen, creyendo que por poner una frase en automático se vuelve constitucional, al momento no se acredita que el Congreso tenga facultad constitucional expresa para legislar en esta materia.

Y llama la atención que quieran dar la interpretación al artículo 73 constitucional como facultad implícita cuando no existe ninguna referencia en ninguna frase de la Constitución Federal que mandate la expedición de la legislación necesaria en materia de seguridad interior ni para hacer efectivas las facultades propias del 73.

Al regularizar el paradigma de seguridad militarizada, para darle normalidad a lo anormal, que desde hace once años se desplegaron masivamente a efectivos en actividades propias de autoridades civiles, se está violentando el noveno del artículo 21 constitucional en el que se establece sin equívocos que las funciones de seguridad pública estarán a cargo de las autoridades civiles.

Y se violenta también el artículo 29 constitucional al normalizar el estado de excepción y la suspensión del ejercicio de derechos y sus garantías.

Se violenta el artículo 129 que establece expresamente y sin interpretaciones que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión militar, perdón, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

También permite que el Ejército, sin facultades constitucionales y sin controles judiciales para ello, pueda intervenir llamadas, correos electrónicos y hacer espionaje.

Invade atribuciones de los órganos autónomos.

La minuta de la ley dice que los entes autónomos están obligados a dar información de las investigaciones que llevan a cabo a las instituciones que participan en las declaratorias de seguridad interior.

Se viola también el derecho a la información por lo que la ley clasifica toda la información relacionada con operativos y abusos que se cometan como información reservada por seguridad nacional, con lo que anulan la posibilidad de tener información para la investigación de violaciones a derechos humanos cometidas en acciones militares.

Esta ley niega el acceso a la justicia, a las víctimas que quieran reclamar la responsabilidad patrimonial por hechos ilícitos del Ejército al excluir la posibilidad de que aplique el procedimiento administrativo para actos derivados de la Ley de Seguridad Interior.

Viola el pacto federal en su artículo 115 y 119 al someter a la autoridad de una entidad federativa o municipal sin que participe en ninguna decisión de las afectaciones de seguridad interior, a que puedan remover a una policía o puedan imponer a otra en el ámbito de lo local.

Se violenta el debido proceso y con ello la violación a derechos procesales.

De acuerdo a la ley, los militares pueden detener y poner a disposición de la autoridad competente a las personas que se encuentren cometiendo algún delito, pueden disparar, hacer uso de la fuerza, hacer uso de la fuerza letal con las reglas que no se ajustan ni se aplican a los conflictos armados, ni a respetar principios de distinción entre objetivo militar o enemigo a combatir, y a la población civil tampoco aplica la regla de uso de la fuerza.

Anula en los hechos las reformas constitucionales de 2008, en materia del Sistema Penal Acusatorio; y del 2014, que establecen la creación de una Fiscalía autónoma, pues sus preceptos menoscaban los principios de una procuración de justicia que cumpla con ambas reformas.

El artículo transitorio propuesto es anticonstitucional, la legislación que se emita en seguridad interior es una legislación federal.

Mediante este transitorio se pretende generar obligaciones tanto para los estados como para los municipios en materia de seguridad pública al proponer presentar un programa, lo cual exclusivamente debería hacerse a través de una ley general, que por su naturaleza jurídica sí distribuye competencias y se puede regular obligaciones tanto en los estados como para los municipios.

En otras palabras, una simple ley federal no es instrumento normativo para establecer obligaciones para los estados y municipios en materia de seguridad pública, en su caso debería haberse generado una propuesta de ley general al Sistema Nacional de Seguridad Pública, legislación en materia de seguridad interior.

Esa legislación va a regular y con ello preservar la militarización de la seguridad pública que inició masivamente hace ya casi once años, por lo que estamos en contra de esta ley.

Gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert.

La Senadora María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, Presidente.

El 6 de diciembre del 2006, cuando se anunció la implementación del Operativo Conjunto Michoacán y se le declaró la guerra al narcotráfico, estoy segura de que ninguna mexicana o mexicano sospechaba el curso que tomaría esta decisión.

Los militares recibieron la orden de salir de sus cuarteles para comenzar a llevar a cabo tareas de seguridad pública ante la creciente amenaza de la delincuencia organizada que había infiltrado a policías municipales y estatales.

Sin embargo, durante estos años hubo un vacío en nuestras leyes para normar la forma en la cual tendría que actuar el Ejército en determinados momentos.

Todos los expertos en seguridad coinciden en que las Fuerzas Armadas están formadas y entrenadas para acabar con el enemigo, mientras que las tareas de seguridad pública tienen otra naturaleza y requieren de la capacitación suficiente para aprehender a los presuntos responsables y someterlos a la procuración de justicia.

Durante once años el Ejército ha desempeñado estas tareas sin un marco jurídico adecuado que brinde certeza tanto a los ciudadanos y ciudadanas como a los hombres y mujeres valientes que entregan su vida por la defensa nacional.

Desde esta tribuna quiero reconocer a mujeres y hombres que conforman al Ejército Mexicano por la lealtad con la que han intentado salvaguardar la seguridad pública durante todos estos años.

Una tarea que, todos y todas sabemos, no les toca, pero que han desempeñado con honor y valentía.

Quiero reconocer a todos y cada uno de los soldados, cuyos nombres desconocemos, pero que están ahí en la primera fila, literal, al pie del cañón tratando de resolver sin estrategia, ni rumbo alguno, una crisis que está llenando a esta tierra sólo de cadáveres.

Quiero también a nombre de la clase política, aquí representada, pedirles una disculpa por someterlos a la extrema violencia y al poder corrupción del narcotráfico.

Miles de hombres y mujeres del Ejército han muerto al igual que miles de civiles en esta guerra sin sentido y sin ningún rumbo.

Quiero disculparme también porque durante once años las políticas y los políticos no hemos sido capaces de ofrecerles una vía, una solución, en lugar de esto los hemos dejado morir hasta el punto de hacernos pensar que esta ley significará su reivindicación.

Séneca decía: “Si no sabes hacia dónde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable”.

Justamente la falta de una estrategia contra el narco nos ha dejado un país lleno de sangre, de violencia y de confusión.

De la suma de todas nuestras desesperaciones nace este error que estamos cometiendo hoy, compañeras y compañeros, esta urgencia, la Ley de Seguridad Interior.

Quiero decirles a los hombres y a las mujeres del Ejército que entiendo su desesperación e impotencia por este marco jurídico que ansían, pero no comparto este antídoto, y aseguro que lo que se piensa será la solución, sólo agudizará el problema.

Uno de los valores más premiados y reconocidos entre las Fuerzas Armadas es la disciplina y la responsabilidad, y por ello no concibo la idea de que este Senado de la República apruebe de manera atropellada y sin apertura al diálogo este proyecto de dictamen.

Ninguneando a organizaciones de la sociedad civil, y lo increíble, más aún, a organizamos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como nunca han hecho puntuales señalamientos acerca de las graves fallas que este proyecto contiene.

Desde aquí les digo: “Así no porque éste no es el modo de legitimar su actuación, éste es el derrotero para su descrédito”, el del Ejército, porque esta ley está ya confrontando al Ejército y a los políticos con la sociedad civil; viendo a los soldados del Ejército Nacional como una amenaza latente, en lugar de como defensores de la nación y del pueblo.

Porque hace unos meses tras el sismo del 19 de septiembre todas y todos nos conmovimos con su apoyo y compromiso por este país.

Y hoy, esto, y más se puede perder. Porque las voces en contra, nacionales e internacionales suenan al unísono, así no, porque la Ley de Seguridad Interior atenta contra la Constitución y contra los derechos humanos.

Porque cuando la historia tenga que juzgar culpables, seremos nosotras y nosotros, amigos y amigas por aprobar esta ley, y ustedes por proponerla.

A mis compañeras y compañeros Senadores les pregunto con el corazón en la mano, con el temor de las consecuencias que en el futuro nos puede traer esta ley.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Señora Senadora Peimbert, me permite, ¿acepta una palabra de la Senadora Calderón?

No, para rectificación de hechos.

Continúe Senadora Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Gracias, con la desesperación de millones de ciudadanos, ¿qué, no podemos frenar esta sinrazón? A pesar de haber voces más que calificadas en la arena ciudadana y académica, con los gritos ciudadanos, con el desacuerdo de expertos en el mundo entero.

¿Cómo van a salir a la calle, tranquilas y tranquilos?

¿Qué explicación le van a dar a los ciudadanos?

¿Cómo van a volver a pedir un voto?

Cómo en el poder más democrático y representativo del estado constitucional de derecho, es capaz de aprobar un instrumento que posibilita una pesadilla autoritaria.

He escuchado a compañeras y compañeros diciendo que su única intención es honrar a nuestras Fuerzas Armadas.

Que quieren hacer un merecido reconocimiento a la labor que han cumplido durante estos años, a pesar de no tener una base jurídica para hacerlo.

Hoy les digo, compañeros y compañeras legisladores, que si de verdad quieren honrar y reconocer al Ejército, adopten sus principios de jerarquía, y hagan caso a los señalamientos de los organismos internacionales.

Las Fuerzas Armadas tienen un comandante supremo, que es el Presidente de la República; nosotras y nosotros tenemos jefes supremos, las y los ciudadanos que representamos que gritan, así, no.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senador Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores:

Uno de los símbolos patrios que juramos respetar reza: “mexicanos al grito de guerra, al sonoro rugir del cañón”.

Y vaya que el Presidente Peña Nieto y los asesores en turno se tomaron muy al pie de la letra nuestro himno nacional.

Tanto el presidente Peña como los Diputados Federales que aprobaron la minuta que llegó aquí, hoy convertirá en dictamen, pues les salió un republicanismo bélico trasnochado.

Y digo esto porque institucionalizar el miedo, legalizar la acción militar aun en supuestos jurídicos no es, compañeras y compañeros, no es la solución a los males del país, y quien así lo crea, mancilla la investidura de servidor público que nosotros ostentamos como representantes de nuestras respectivas entidades.

Si hace algunos años el señor de la triste figura que habita en Los Pinos señaló que la corrupción es un tema cultural. Con esta propuesta, no hace más que legitimar el estado represor que ha incubado el PRI desde hace 80 años.

Usted, señor Peña Nieto, que ordenó el uso irracional de la fuerza pública en Atenco, y, ojo, no soy yo que como discurso de izquierda lo señala, sino la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Usted, señor Peña Nieto que ordenó el uso irracional de la fuerza pública en Atenco, hoy quiere botas y armas en las calles.

Y, ustedes, camaradas representantes del PRI, hagan memoria, hagan memoria de la matanza del 2 de octubre de 1968, de la guerra fría contra los luchadores sociales a lo largo de décadas de la guerra contra campesinos, estudiantes, sindicalizados, maestros, contra indígenas de Chiapas y Oaxaca. Hagan memoria, y no lleven a México otra vez a esos tiempos.

Ellos son, mexicanas y mexicanos; ellos son, los que desde el poder mal habido han hecho de la corrupción una cultura, y que hoy quieren acabar con el árbol a hachazos.

Ellos son, ellos son, mexicanas y mexicanos los que joden a la nación.

Ellos son los que hoy proponen una minuta impresentable convertida en dictamen, sin la mínima idea siquiera de la definición de Estado.

¡Ah!, pero eso sí, en el nombre del Estado mexicano buscan proteger su seguridad con supuestos jurídicos discrecionales a través de acuerdos políticos.

Compañeras, compañeros:

Aprobar esta ley de verdad, se los decimos una vez más, representa no sólo ignorar el mandato popular del que estamos investidos, no, además de eso constituye violentar todos y cada uno de los principios constitucionales, legales e internacionales existentes.

Como representantes populares no podemos hacer oídos sordos al clamor popular, a la exigencia de diversos organismos nacionales e internacionales dedicados a la protección de derechos humanos y del control del poder público.

Pero tampoco podemos seguir legislando, compañeras y compañeros al vapor por instrucciones del Ejecutivo, no somos sus empleados, somos un poder federal, de un triunvirato del Pacto de la Unión, entiéndalo bien, compañeras y compañeros.

No podemos seguir legislando al arbitrio, por mandato u ocurrencia las más de las veces con un total y profundo desconocimiento de los temas; porque confundir o no tener clara la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional, no es un tema menor, por el contrario, representa en este momento una enorme amenaza para la seguridad ciudadana.

Compañeras, compañeros:

Legislar con evidencia hoy más que nunca es de enorme responsabilidad.

Ahí están las opiniones, insistimos una vez más, de las y los expertos en la materia, pero también de evaluaciones serias que nos permiten saber si esta política de que el Ejército realice funciones de seguridad pública, ha funcionado o no, y escuchar, compañeras y compañeros, pero escuchar en serio los testimonios de las personas que directa e indirectamente han sido afectadas para bien o para mal por el actuar del Ejército durante el desempeño de sus funciones policiales es también hoy importante y fundamental.

Miren, Senadores y Senadoras, en materia de seguridad pública lo que nos hace falta es reforzar la aplicación de protocolos, pero sobre todo fortalecer los cuerpos, los cuerpos policiacos.

La seguridad interior, la llamada seguridad interior es responsabilidad del Presidente de la República, pero también de los gobernadores y los municipios.

Como aquí se ha expresado, que año tras año tienen subejercicios en los recursos que precisamente deben dedicarse a fortalecer los cuerpos de seguridad estatal y municipal.

Sí, qué fácil, qué fácil es centralizarlo todo. Que sea el Gobierno Federal quien marque las directrices, o incluso, diga qué hacer y qué no.

Mucho más fácil es sentarse y cruzarse de brazos y decir: “Si en el municipio o en el estado hay delincuencia, es porque el Gobierno Federal no ha hecho nada”.

No, compañeros, la situación de violencia y los índices de criminalidad en que vivimos no son cosas menores. Pero tener al Ejército en las calles realizando funciones de prevención o persecución del delito, no resuelve el conflicto. Esta ley no va a cambiar las.

El Ejército, aquí se ha reiterado, una y otra vez, lleva diez años en las calles y no se han reducido los índices delictivos. Por el contrario, se está manchando la reputación de las instituciones torales para el país como lo son nuestras fuerzas castrenses.

Insisten ustedes en legalizar una estrategia que no ha funcionado y que no va a funcionar.

Los miembros del Ejército y la Marina son personas entradas para combatir en guerras, su entrenamiento es diferente, su fuerza letal es excesiva para su uso en agentes civiles, aún y cuando sean delincuentes.

Abramos los ojos, leamos los reportes. Desde que el Ejército salió a las calles a hacer las tareas de las autoridades civiles, el número de denuncias por uso indebido de la fuerza, por violaciones a los derechos humanos, ha incrementado de manera alarmante, y esto no puede continuar así.

Por ello, ante los patrones de conducta que hemos identificado para evitar, precisamente, la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias, el uso desproporcionado de la fuerza, entre otros, lo más importante, y que es donde debemos enfocarnos, es en obligar a que cada orden de gobierno a ejercer sus facultades y a cumplir con sus funciones, a tener cuerpos policiales bien capacitados, con sueldos dignos, cambiar a los altos mandos de dichas corporación y, sobre todo, generar políticas públicas verdaderamente efectivas para la prevención del delito y penitenciarias que fortalezcan la reinserción social.

Por ello, compañeras y compañeros, no podemos permitir que las Fuerzas Armadas actúen de mutuo propio, sin un mandato claro y mucho menos sin que ello quede documentado.

Hemos insistido, y les pedimos que escuchen las voces de académicos, de instituciones de derechos humanos, nacionales e internacionales que nos exigen no aprobar esta ley. Es un riesgo, es un error, y los conminamos a actuar como lo está planteando la mayor parte del pueblo de México.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) ¿Quién sigue?

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me permite, Senador Pedraza.

Tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez.

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, amigo Miguel Barbosa.

Decía nuestro compañero Senador Brito, desde la sierra de Guerrero. Precisamente desde allá queremos traer la voz a ustedes, desde los estados, donde por muchos años hemos vivido en carne propia el miedo a nuestro patrimonio, el miedo a nuestra integridad física, pero lo más grave, el miedo a la seguridad y al derecho a la vida de nuestras familias, a esos quiero referirme, a los que no tienen voz porque aquí no llega, a los que no tienen académicos para que les puedan hacer un análisis de su condición de vida, a ellos quiero referirme, a los miles de mexicanos, y particularmente de Guerrero, que es mi estado, donde se ha llenado de luto por factores externos, pero también por los problemas propios de una entidad federativa que ha estado sumida por muchos años ante la falta de empleo y de oportunidades. Allá va mi reflexión.

Yo respeto la opinión de todas y todos ustedes, y lo digo con la más profunda responsabilidad.

Qué bueno que ya escucharon a los académicos, a las organizaciones sociales, a los organismos internacionales, a todas y a todos, y gran parte de ello tienen una ruta de razón.

Pero yo les pregunto y ¿Cuándo van a escuchar a las miles de familias que han llorado sangre porque han perdido a sus hijos?

¿Cuándo van a preguntarles?

¿Cuándo van a escuchar a las familias, que allá en Guerrero han sido desplazadas por la inseguridad?

Aquí hemos escuchado argumentos, perdón, pero son argumentos del centro. Ninguno de ustedes, excepto el Senador Esteban y el Senador Celestino Cesáreo Guzmán, ninguno de ustedes vive en Guerrero. Lo conocen como turistas.

Pero piensen, piensen que Guerrero también es parte del territorio mexicano, piensen que cada entidad federativa tiene sus propias necesidades, sus propias características y su propia manera de cómo buscar un acuerdo de coordinación institucional en los tres niveles de gobierno.

Mucho se ha cuestionado la labor del Ejército. Honrar a las Fuerzas Armadas es reconocer también lo que han aportado a este país.

No nada más en los momentos de desastres naturales, de contingencias o de ayuda humanitaria, hay que honrar también a las Fuerzas Armadas, en lo que representa la noble tarea de cuidar muchas mexicanas y mexicanos que su patrimonio y en su integridad.

Honrar a las Fuerzas Armadas significa también reconocer que son mexicanos, que atrás de cada soldado hay una familia que son padres, que son hermanos, que son hijos, que son esposos y que su familia fueron concebidos cuando se incorporaron al Ejército Nacional y a la Marina para desarrollar tareas de seguridad nacional, no para andar patrullando calles, no para andar levantando borrachos, no para andar cuidando jardines, no para estar cuidando las playas de Acapulco.

Pero eso es lo que a nosotros nos ha dado un mayor espacio de tranquilidad.

Hoy Acapulco, revisen las estadísticas, Acapulco tiene turismo, obvio, no tendríamos turismo con los policías municipales o gran parte de los policías municipales que no han acreditado los exámenes o los indicadores de control de confianza.

Zihuatanejo no tendría turismo ni Taxco o el propio Acapulco o los policías municipales de Iguala y gran porcentaje de los policías municipales no cumplen con los requisitos indicadores de representarnos en materia de seguridad, qué sería entonces del estado de Guerrero, de sus ciudadanos, de los que viven en la sierra, de los que están en ello, de los grupos organizados peleando su territorio y su control de mercado si no fuera por la noble tarea de las Fuerzas Armadas a los que muchos aquí han venido a cuestionar de manera despiadada sin darse cuenta que antes de ser institución también son seres humanos.

Qué sería del estado de Guerrero con cerca de 3 mil 500 millones de habitantes cuando apenas tiene 4 mil policías estatales.

Significa entonces que la estadística, cerca, cada policía le tocaría atender un promedio de entre 800, 900 guerrerenses.

Por eso es que los invitamos a que desde el centro, del centro del país piensen también que los derechos humanos de otras entidades federativas como lo es el caso de Guerrero.

Los invitamos a que busquemos un espacio de reglamentación, los que vivimos en Guerrero reconocemos la aportación que hacen las Fuerzas Armadas, lo único que pedimos es que se busque un instrumento legal donde ellos puedan desarrollar tareas de manera coordinada con el estado y con los municipios.

No comparto, no comparto cuando se señala la violación a la autonomía de las entidades federativas, por el contrario, les pedimos que respeten el Pacto Federal y que respeten la autonomía que cada entidad federativa tiene y que respeten a sus autoridades, así como aquí se escucharon a organizaciones sociales y académicos, también aquí se escucharon a gobernadores, son gobernadores no de un rato, son gobernadores no de un interinato, son gobernadores constitucionalmente electos por los ciudadanos de cada entidad federativa y los gobernadores en su gran mayoría han dicho sí a la Ley de Seguridad Interior, que es perfectible sí, que podemos seguir avanzando en el corto plazo, sí, pero hoy consideramos que lo más importante es dar certeza jurídica al territorio mexicano y, sobre todo, a las entidades que hemos sido, a las entidades que han sido invadidas por la delincuencia organizada y que sus ciudadanos solamente piden un espacio de seguridad, de tranquilidad y de que sus familias tengan derecho a vivir con mayor seguridad y patrimonio en el derecho a la vida.

Yo les aprecio este espacio, respeto las opiniones de todas mis compañeras Senadoras y Senadores, sé que muchos lo expresaron con su más profunda responsabilidad, pero no quisiera equivocarme de que muchos también lo hicieron en función de una línea política, de un proceso electoral.

Eso aquí no se vale, eso aquí no cuenta, como decía mi compañera Marcela, por su espacio de atención, muchas gracias y estamos para poder atender y servirles desde Guerrero que también es México.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Celestino Cesáreo Guzmán.

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán: Con su permiso, Senador Presidente.

Qué bueno que me toca hablar después de mi paisano y amigo, Senador Sofío Ramírez, porque aquí ha señalado que en Guerrero hay 4 mil policías, y efectivamente es una confesión de que las autoridades en sus distintas etapas no están funcionando.

Durante 10 años el Ejército ha estado en las calles, durante 10 años, entonces ha quedado demostrado por el nivel de inseguridad y violencia que no es con la fuerza como se va a combatir este flagelo, sino con proximidad social, la fuerza del Ejército ya está en las calles y no hay resultados.

Por eso en la fracción parlamentaria del PRD creemos que tomar decisiones apresuradas y equivocadas no es la opción, optar por esta ruta fácil, lo que hoy se somete a votación es claudicar.

Encontremos la ruta que nos devuelva la tranquilidad, no le fallemos al país, a nuestras familias y a nuestras futuras generaciones, aprobar esta ley significa mantener la ruta fallida, es alargar la negra noche de la violencia y condenar a miles de familias a la tragedia, pretender lograr la paz por la vía de las armas no tiene sentido, la estrategia de seguridad es un círculo vicioso que no ha funcionado y ha disparado los índices de violencia.

La puesta en marcha de esta ley, no será viable mientras no se hagan las correcciones necesarias, no será posible mientras no se limpie la casa, mientras no se rompan las alianzas perniciosas, no habrá estrategia de seguridad que funcione.

O cómo podrán coordinarse las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad interior , con cuerpos policiacos municipales, estatales o federales, coludidos con la delincuencia, no hay confianza entre las propias instituciones, esa es la verdad, mi voto es en contra de esta ley inacabada y contradictoria que pretende llenar los vacíos que han dejado los responsables de la seguridad pública, la persecución e investigación del delito, la administración de justicia y la readaptación social, la cadena que debería ser virtuosa es viciosa, esta ley se contradice con la Carta Magna en sus artículos 129 y 21, ignorar los señalamientos, de cientos de organizaciones sociales, Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un verdadero despropósito.

Si el ejército no está en los cuartes es porque las instituciones de seguridad han fracasado, apostar que el Ejército haga la tarea de los gobiernos no es la solución.

Mi voto es en contra de reforzar este modelo presidencialista, vertical y autoritario que tanto daño ha hecho al país.

No podríamos dar más facultades al Presidente Peña Nieto, cuando bajo su mandato han ocurrido reiteradas y graves violaciones de derechos humanos, incluidas varias ejecuciones extra judiciales, desapariciones y torturas.

Hasta julio las organizaciones de derechos humanos y la CNDH habían recibido casi 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros de la Fuerzas Armadas, incluidas más de dos mil durante este gobierno.

Mi voto en contra es porque en un país como éste, donde la corrupción y la impunidad son la regla, con instituciones señaladas por organismos internacionales y del país, es insensato concentrar mayor capacidad de fuego a disposición del Presidente.

¿Por qué descargar en el Ejército una responsabilidad que les corresponde a los gobiernos civiles?

Vivimos en una situación de guerra, el Presidente no la ha declarado, tampoco el Congreso de la Unión.

Si bien se hicieron foros de discusión para diseñar esta ley, no es suficiente, persisten las dudas, algo es claro, la iniciativa ha encontrado un amplio rechazo social y ante ello me opongo que se legisle a espaldas de la gente, no comparto que se cierre la posibilidad de escuchar a expertos, a las organizaciones sociales que se manifiestan en las calles, estoy en contra de aprobar una legislación poco clara que permite cualquier operación militar sin rendición de cuentas, sin protocolos claros de actuación.

De aprobarse esta ley se pone en predicamentos a los propios militares cuya formación es bélica.

Considerar la seguridad interior como parte de la seguridad nacional es un riesgo, es ambiguo no establecer la frontera entre ambos.

El artículo 129 constitucional dice que en tiempos de paz el Ejército no tendrá ninguna actividad distinta de la disciplina militar.

En tanto que el artículo 21 constitucional, en sus párrafos noveno y décimo, señala que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el desempeño de la seguridad pública le corresponde a la Federación las entidades estatales y los municipios en términos de lo que establece la Constitución y las leyes.

Eso dice la ley, la realidad es que no se cumple y es hasta injusto pretender que las Fuerzas Armadas carguen sobre sus hombros los pecados de todos.

Finalmente, por los miles de ciudadanos que se han manifestado en estas dos semanas, por los cientos de organizaciones sociales de derechos humanos y el reclamo de expertos en la materia, anuncio mi voto en contra.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Olvera Acevedo.

El Senador Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su permiso, señor Presidente.

Cobarde es quien ante la carencia de argumentos utiliza la diatriba y la ofensa para descalificar de manera enfermiza.

Yo reconozco aquí en el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Presidente que ha tenido el valor de transformar este país y no tan sólo de administrar el gobierno.

Quiero hacer un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas de mi país, al Ejército Mexicano y a la Marina.

Compañeras y compañeros Senadores:

La responsabilidad primigenia del Estado es cuidar y proteger la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, utilizando la fuerza institucional, la fuerza legítima.

Esta fuerza, sin duda, en México debe de acotarse, debe de reglamentarse, estamos obligados a reconocer la realidad, las policías locales, estatales, municipales, civiles, no han podido dar los resultados de eficacia y de eficiencia en el combate al crimen organizado, esta es una realidad que no podemos nosotros soslayar.

Compañeras y compañeros.

Hago un llamado a la responsabilidad.

Es muy rentable vender ante la población y en el exterior el concepto de la militarización y la violación a los derechos humanos.

La argumentación jurídica el día de ayer la hizo de manera magistral nuestro compañero el Senador Roberto Gil Zuarth, y yo como profano del derecho no tengo interés en entrar en esa esfera, vengo a hablar a nombre de las personas que sufren los embates del crimen organizado, de los gobernadores, de los presidentes municipales que padecen y sufren esta situación, de las familias de las víctimas, la ciudadanía les exige a ellos, a las autoridades locales, paz y tranquilidad que ellos no pueden brindarles, y ante esa impotencia ellos llaman desesperadamente al auxilio del Ejecutivo Federal.

Se habla del fortalecimiento de las policías civiles, de las policías locales, esto tenemos que reconocer es un proceso largo, no se puede lograr rápidamente, no estábamos preparados para lo que está ocurriendo.

El día de ayer, compañeras y compañeros, me gritaron: “¡traidor, asesino!”

Yo quiero decir a esta soberanía, a este Pleno, no soy ni seré cobarde y menos asesino, da mucha rentabilidad popular explotar el concepto de militarización y desde luego que nos asusta a todos, pero no es eso lo que está sucediendo ni lo que va a suceder en este país, ustedes han vendido ese concepto aquí y de manera irresponsable hacia el exterior.

No engañemos a nuestra gente, digamos la verdad, esta ley propone la reglamentación de las Fuerzas Armadas en sus acciones en el interior de la República.

La Ley de Seguridad Interior no da a las Fuerzas Armadas facultades de policía, las acciones de las Fuerzas Armadas se limitarán lo que establece el artículo 3 y 5 de esta ley.

Las Fuerzas Armadas no van a realizar acciones de investigación y persecución de delitos, las Fuerzas Armadas, Policía Federal, tienen prohibido intervenir en las propuestas sociales, hay que puntualizarlo, porque ese es argumento de ustedes, malo por cierto.

Se establece claramente que nunca podrán considerarse las protestas como actos de seguridad interior.

La Ley de Seguridad Interior remite a la emisión de protocolo porque la declaratoria se realiza en función de situaciones específicas o fenómenos graves que aparecen en determinadas zonas del país, en ningún momento se ataca el derecho a la información.

Tengo en mi poder las opiniones de diversos gobernadores que han comentado sobre la necesidad que tienen de contar con el apoyo del Ejecutivo Federal, por eso yo quiero decirles a ustedes, ustedes van a decidir, nosotros ya fijamos posición.

Si a golpes de retórica quieren resolver, quieren ustedes resolver la desesperación de quienes sufren los embates de la delincuencia organizada ustedes serán los golpistas.

Ahora, el propósito de normar las acciones de la lucha contra el crimen organizado se le llama represión y militarización.

Aquí es donde está el debate, no hay tal militarización, ni tal represión, aquí hay prevalecido descalificaciones, hemos recibido opiniones de lo que parece una junta de notables o un evento de alfombra roja con artistas y toda la parafernalia del cine.

Respetuosamente les digo que esas personas no conocen la realidad de muchos municipios y estados, no la conocen, no la conocen.

Ustedes tienen la palabra, o aprobamos esta ley o estaremos potenciando, defendiendo, apoyando al crimen organizado.

No soy asesino, ni seré traidor.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias.

Presidente, gracias por las facilidades para instalar esta pantalla.

Nuestro país camina peligrosamente en la cuerda floja del autoritarismo militar.

Los muertos de Peña y Calderón suman más de 210 mil, y el país sigue cayendo en una insondable espiral de sangre y violencia.

Esta ley lo único que garantiza, porque ya hace muchos años Einstein nos dijo: “que loco es aquel que hace siempre lo mismo y espera resultados diferentes”.

Esta ley lo único que garantiza es que vamos a tener más violencia y vamos a tener cada vez más dificultad en regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas.

Para el Ejército Mexicano tampoco son buenas noticias porque esta ley desaparece todo el incentivo a que se formen cuerpos policiales profesionales y suficientes para regresar al Ejército a sus tareas constitucionales.

La demanda para que sigan haciendo labores de seguridad pública va aumentar y los va a seguir exponiendo a mayores casos de violaciones a derechos humanos.

Aquí ya se ha dicho todo, creo que desde la sociedad civil nos han llegado muy buenos análisis y recomendaciones.

El Colectivo Seguridad sin Guerra, mis compañeros y compañeras el día de hoy aquí han dado excelentes argumentos.

Yo prefiero utilizar mi tiempo para darle voz a quienes no la tienen, esas voces incómodas que muchos de ustedes quisieran que no existieran, son las voces del dolor, son los costos de la seguridad militarizada.

Son las viudas, las madres, los hermanos que lloran y reclaman la injusta muerte de sus familiares inocentes, o los sobrevivientes que les cambió la vida para siempre.

Si la consigna a ustedes les ha doblegado la razón espero que cuando menos permanezca abierto su corazón.

Los invito, con mucho respeto, a que veamos estos testimonios.

(Proyección de video)

De no aceptar las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, el gobierno mexicano se pone a la par de gobiernos represores como el de Rodrigo Duterte, en Filipinas; de Nicolás Maduro, en Venezuela; y de Aung San Suu Kyi, en Birmania.

La tres últimas recomendaciones en materia de derechos humanos son las que acabo de leer antes de la mexicana, de ese tamaño ve la ONU el peligro de esta ley, lo compara con países que tienen genocidios o donde su democracia está en juego.

En Filipinas, el Presidente Duterte ha generado un genocidio de más de 9 mil 400 personas, consumidores de drogas que sin juicio alguno son ejecutados.

El caso de Venezuela, el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva dentro de las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

O en Birmania, donde ocurre un genocidio y el Alto Comisionado dio una recomendación en octubre pasado, donde más de 600 mil personas han sido desplazadas y se ha documentado la quema de aldeas completas y estamos prácticamente ante una barrida, una limpieza racial. De ese tamaño.

Presidente, quiero solicitarle la posibilidad de proyectar un último video de tres minutos para concluir mi participación con ello.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador lleva ya usted siete minutos, y el tiempo asignado son cinco.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Si, le pido tres más.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me parece, Senador que ya se excedió de tiempo, si estuviera usted en la tribuna se lo concederíamos, pero para ver los videos; le sugiero que los distribuya en la Asamblea, y que cada quien lo vea en su momento, gracias.

Tiene el uso de la palabra.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Bueno, vamos a pasarle los videos, con mucho gusto, ese es el problema, eso es lo que no queremos escuchar, esto es lo que quisiera que no existiera, pero déjeme decirle, déjeme terminar con esto.

Por qué, quién está leyendo mal, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos o ustedes.

Me parece que lo que están haciendo al aprobar esta ley es mandar al diablo a las instituciones internacionales, mandar al diablo a la ONU, mandar al diablo a la OEA, y mandar al diablo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ustedes saben muy bien que esta ley no va a mejorar la seguridad, y va a seguir exponiendo al Ejército Mexicano a estas violaciones de derechos humanos.

Queremos Seguridad sin Guerra.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Delgado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores.

El Senador Gerardo Flores Ramírez: Gracias, Presidente.

Sólo me quiero referir muy brevemente a lo que acabamos de escuchar.

Yo no coincido con el Senador que me antecedió en el uso de la tribuna, en el sentido de que son voces sin eco que no queremos escuchar. Lo que yo creo que debió elegir de mejor manera de cómo utilizar su tiempo, honor o en respeto de la Asamblea, si traen ese tipo de recursos pues hay que saber cómo administrar el tiempo, y no tratar de hablar y al mismo tiempo utilizar intensivamente el tiempo que también hay que respetar el tiempo de todos los demás.

Buenas noches a todos ustedes compañeras y compañeros, hemos estado discutiendo toda esta tarde, lo que va de la noche esta Ley de Seguridad Interior.

En esta ocasión me quiero dirigir, ya lo hizo, creo de manera muy destacada mi compañero el Senador Sofío en esta tribuna cuando se refería o se dirigía sobre todo a las víctimas, a las familias de las víctimas, a las mamás que han perdido un hijo, a las familias que han perdido un ser querido a causa del crimen organizado; a las comunidades que han sido azotadas por la violencia de grupos delincuenciales.

También a los comerciantes, a los empresarios que son lamentablemente intimidades en varias regiones del país.

A todas las personas que viven con miedo de salir a las calles por la presencia del narcotráfico; a las personas que viven en municipios donde la policía ha sido capturadas por la delincuencia organizada, yo escucho que vienen aquí a decir que no al uso de las Fuerzas Armadas, al uso las Fuerzas Federales en tareas de seguridad en diversas regiones del país, pero no escucho una solución real al problema de la deficiente construcción de los cuerpos policiales en nuestro país.

Me dirijo también a las familias afectadas por desastres naturales o sismos que han sido apoyadas por el Ejército, a lo cual también ya se han referido algunos colegas en esta tribuna.

Y a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que día con día con lealtad, profesionalismo y valentía recorren el país para recuperar la paz y tranquilidad, y que no tienen seguridad jurídica.

¿Por qué me dirijo específicamente a estas personas?

Porque son estos madres, padres e hijos de familia los que a diario sufren la violencia en las calles. Son estas familias la que han notado que sin el apoyo de las Fuerzas Armadas la violencia seguiría y seguiría en sus calles.

Que la presencia de los soldados, marinos y policías federales han permitido el retorno gradual a la normalidad en sus comunidades.

La Ley de Seguridad Interior es relevante por estas familias que han sido víctimas de la violencia de la delincuencia organizada.

¿Qué esa la Ley de Seguridad Interior?

Creo que ya lo han explicado de manera suficiente varios colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, también quienes han cuestionado el contenido de esta ley, pero voy a hacer una referencia rápida.

Primero, es una ley que lo dice en su propio artículo 1, tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior.

Es una ley que llena un vacío legal al establecer un procedimiento, los responsables la duración, el objetivo y los mecanismos de participación y la rendición de cuentas de las fuerzas federales, incluidas las Fuerzas Armadas.

Es una ley que pondrá un límite legal a la actuación de las Fuerzas Armadas, las cuales actualmente hoy no tienen un límite específico.

Se acaba con la discrecionalidad, con la que se invoca a las Fuerzas Armadas.

Fomenta la coordinación entre las fuerzas federales, estatales y armadas para enfrentar los riesgos de amenazas a la seguridad interior.

Es el último recurso para atender amenazas a la seguridad interior. Serán las Fuerzas Armadas, antes está el recurrir a las fuerzas federales y estatales.

Los militares y marinos no se quedarán permanentemente en las calles como falsamente o inexactamente se ha querido insistir a través de varias intervenciones.

Por el contrario, la ley establece que la participación de las fuerzas federales no podrá exceder de un año, que hay un control legislativo, porque primero se tiene que notificar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, así como remitirle informes.

Por aquí escuché a un colega Senador que cuestionaba la utilidad de esta Comisión Bicameral, que incluso señalaba que él había sido presidente y cuestionaba su utilidad, me parece que siendo o habiendo sido presidente pudo haber hecho mejores cosas por sacarle mejor provecho a la función de este órgano bicameral.

Voy a brincarme algunos aspectos, creo que ya han sido abordaros son suficiencia.

De manera muy concreta si quiero reiterar lo que ya han dicho aquí y lo voy a reiterar, porque lo que no podemos permitirnos es que una mentira se repita mil veces, y es el hecho de que esta ley específica protege, cuida, preserva y garantiza los derechos humanos de los mexicanos.

Es falso que con esta ley se violen los derechos de los mexicanos.

Es falso que militarice al país, al contrario, como ya lo dije, la ley establece límites a las fuerzas federales, se ha dicho también que es una, que con mucha claridad prohíbe utilizar a las Fuerzas Armadas frente a movilizaciones sociales o protestas político-electorales.

Amigas y amigos, familias víctimas de la delincuencia organizada. El mayor peligro que enfrenta México es la demagogia y el populismo mesiánico.

No podemos permitir que un día el Mesías tropical proponga en su proyecto de nación, la aprobación de una ley de seguridad interior y diez días después sus Diputados voten en contra de dicha ley.

Pero la inconsistencia no tiene límites porque dos días después el Mesías propuso ofrecer amnistía a los narcotraficantes.

Las ocurrencias, las puntadas y barbaridades, como proponer amnistía a los miembros de la delincuencia organizada, no le devolverán a la madre su hijo desaparecido.

A los presuntos delincuentes se les tiene que seguir un proceso, juzgar, sancionar conforme a la ley, respetando sus derechos, desde luego.

Hay que legislar con responsabilidad. Dejemos a un lado coyuntura electoral. Legislemos para recuperar la paz y la tranquilidad.

El próximo Presidente requerirá de este andamiaje legal para implementar las políticas públicas de seguridad para preservar la seguridad interior.

Compañeras y compañeros Senadores:

Para el Partido Verde, la Ley de Seguridad Interior es un muy importante avance para el país.

Sólo quiero hacer mención, antes de concluir, algunas expresiones que se han utilizado en esta tribuna, se dijo que es una ley de represión y de guerra. Es absolutamente falso, es una visión claramente subjetiva, que lejos de informar en verdadero contenido de esta ley, lo único que hace es tratar de desvirtuarla de manera bastante subjetiva y sin mucho fundamento.

Hablan aquí de que es hora de un cambio de régimen, pero ese cambio de régimen del que hablan es un cambio de régimen apoyado en la amnistía a los delincuentes, a esos que han matado a miles de mexicanos.

Hay quien, incluso, vino aquí de manera muy ligera a calificar la ley como una “Ley de Mierda”. Lo que es una mierda, es pretender resolver los problemas de seguridad de este país con esta ocurrencia de la amnistía.

México no se puede arriesgar a ese tipo de ocurrencias. No se vale que se venga a esta tribuna a proponer esto y a descalificar una ley como ésta, que sí tiene un trabajo serio, aunque muchos de ustedes no lo quieran reconocer.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo.

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: “Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra”. Papa Francisco.

Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy, por convicción y siendo Senadora del PAN, del norte de la República, me presento ante ustedes para expresar las razones de mi voto en contra del dictamen de la Ley de Seguridad Interior.

Cuando el gobierno del ex presidente Felipe Calderón decidió arrancar una batalla contra la delincuencia, con el despliegue de cinco mil militares a causa de más de 500 asesinatos en Michoacán, la decisión fue coyuntural, la mejor en su momento.
Las maniobras que se llevaron a cabo tuvieron siempre un objetivo focalizado. Esa política buscaba restarle fuerzas al crimen.

Sin embargo, sabemos que los grupos del narcotráfico crecieron en 900 %, y según el Centro de Investigación y Desarrollo Económicos, la tasa de civiles muertos subió en más de dos mil por ciento en enfrentamientos.

Por ello, en el período de elecciones del 2012 el tema se convirtió en un asunto de discusión entre los candidatos, pues los datos estadísticos demostraban que la participación del Ejército, haciendo el trabajo de la policía, había empeorado la situación de la violencia.

El 4 de diciembre del 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo: “Que mantendría al Ejército en las calles”. Pero al mismo tiempo expresó: “Que así sería”.

Abro comillas. “En tanto se aplica la nueva política de Estado por la seguridad y la justicia, que permita su gradual regreso a los cuarteles”. Cierro comillas.

Su nueva política de seguridad nunca llegó. Aumentaron los efectivos en las ciudades y se multiplicaron los números de víctimas, creció la tasa de homicidios y la violación a los derechos humanos.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reporte mensual de número de víctimas de homicidio doloso en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad federativa, muestran que a nivel nacional y hasta el mes de octubre de 2017 se han registrado 23 mil 968 homicidio dolosos.

Traduzcamos qué significa mantener a la Fuerza Armada en las calles. El informe de Wallace, titulada “Justicia Olvidada”, la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México, muestran cifras oficiales, del 2012 al 2016, en las cuales apunta que durante esos años ha habido 268 investigaciones de tortura y delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; 121 investigaciones por abuso de autoridad; 31 por delitos relacionados por violencia sexual; 17 por homicidio; 13 por lesiones; 9 por delitos con la Administración de Justicia; 3 por extorsión; 3 por privación ilegal de la libertad; 2 por robo y el 1 por allanamiento de morada. Todas estas violaciones a derechos humanos cometidos por soldados, tanto de la Sedena, como de la Semar.

Con esa ley, que se aprobará por mayoría, perpetuaríamos a la participación de las Fuerzas Armadas en cuestión de Seguridad Interior haciendo el trabajo que debería hacer una policía bien capacitada.

Asimismo, el dictamen está repleto de ambigüedades, con una redacción tal laxa que permite hacer diferentes interpretaciones.

La vaguedad de una ley como ésta, genera impunidad, corrupción y, sobre todo, una inmensa discrecionalidad.

Por eso, justamente, lo que quiere decir el PRI-Gobierno, allegarse de más poder para controlar a la sociedad mexicana, hace un mes pasaron modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones con el mismo propósito: tener total dominio de espacios estratégicos con fines electorales.

Tiene el Congreso, con legisladores incondicionales de otros partidos, control al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El caso de Coahuila es una muestra clara.

Ha manejado con toda opacidad y de manera arbitraria los programas sociales del orden federal, y ahora quiere militarizar la seguridad interior medrando políticamente con las Fuerzas Armadas.

Por el otro lado, es muy preocupante que no se escuche a las organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, y al mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, no ignorantes como lo han calificado algunos compañeros Senadores.

Asimismo, en México, la CNDH, una treintena de ONG´s, y más de 200 activistas, además del propio sector empresarial, desde la Coparmex, se han pronunciado en contra.

Más de un Senador ha expresado que existe en México un embate desproporcionado de violencia y que por eso se hace necesaria la aprobación de esta ley, casi despótica, pero pareciera que hablan de la urgencia de inventar la solución.

¿Dónde está la policía?

¿No es éste el último año del Presidente Peña Nieto?

La escalada de violencia ¿Es culpa del PRI-Gobierno y su pésima política de seguridad?

Este dictamen rompe el pacto federal al atentar contra la soberanía de las entidades federativas, peor aún establece un sometimiento en el orden presupuestario y financiero a las decisiones que tome el Ejecutivo Federal.

Recordemos que la militarización ha tenido graves consecuencias, aumento en la violencia y violaciones a derechos humanos, ha disminuido la exigencia de una reforma policial civil y una inexistente rendición de cuentas.

Hablemos claro, se ha permitido la violencia con fines de desestabilización.

El PRI busca presentarse como el salvador de la crisis que ellos mismos han creado, lo único que han logrado es crear al Estado de derecho con leyes a modo y de esta forma arruinar al pobre que sufre los intereses perversos.

Para finalizar quiero hacer un llamado irreductible y respetuoso al Presidente de la República para que antes de promulgar este decreto de ley, realice a nombre del Estado mexicano una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que como en muchos temas del interés regional, pronuncie una interpretación del dictamen de ley de seguridad interior, a la luz de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Creo que nos vendría bien a la ciudadanía y gobernantes, porque los mexicanos no merecemos leyes que favorezcan y privilegien el ejercicio de los derechos humanos.

Nos merecemos leyes.

Por lo anterior escueto y reitero que mi voto será en contra de este dictamen y presentaré dos paquetes de reservas.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia.

En el 2006 la administración federal tomó la decisión de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Esto se llevó a cabo sin tener una estrategia definida en materia de seguridad, y los resultados fueron catastróficos, más de 121 mil homicidios dolosos, incremento de la violencia, violación a los derechos humanos, el consumo de drogas entre los jóvenes se expandió más rápido, y ante tal panorama, en el año 2012, durante su primera visita al Heroico Colegio Militar, como Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, prometió el regreso gradual de militares y marinos a los cuarteles, con la implementación de una nueva política de seguridad.

Nada de eso ocurrió, la política de seguridad fue un fracaso, empoderaron a la Secretaría de Gobernación al atribuirle facultades en materia de seguridad pública, crearon la gendarmería, la cual ha brillado por su opacidad y siguen manteniendo a las Fuerzas Armadas en la calle.

A casi un año de que termine la actual administración federal se plantea regular el quehacer de las Fuerzas Armadas, es decir, primero prometen que regresarán a sus cuarteles y después desean aprobar una ley que garantice la permanencia del Ejército y Marina en las calles.

Así de contradictorio y difuso ha sido el gobierno de la República.

Del análisis de la Ley de Seguridad Interior, es fácil identificar la gran ambigüedad que existe, la cual provocaría confusión y daría pie para que las Fuerzas Armadas actúen con discrecionalidad y sus actos sean justificados jurídicamente.

La Ley no contempla límite alguno en el quehacer de las Fuerzas Armadas, pero sí garantiza que las acciones de seguridad interior serán llevadas a cabo con su organización, medios y adiestramiento.

Casos como Tlatlaya del Estado de México, como el Palmarito, en Puebla, ilustran de sobremanera el actuar de las Fuerzas Armadas, es claro que su entrenamiento no es para prevenir los delitos, sino para realizar acciones bélicas.

Resulta llamativo que las Fuerzas Armadas no sustituirían las civiles, pero estas últimas sí estarán a su disposición ante amenazas a la seguridad interior.

Contraria a esta propuesta, se debería atender a deficiencia de las policías estatales y municipales, quienes no cuentan con el entrenamiento necesario para hacer frente a dichos delitos.

Por tal razón no es viable la subordinación de las fuerzas civiles a las Fuerzas Armadas.

Otro tema relevante es que las autoridades deberán preservar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Es decir, por los protocolos que señalen las Fuerzas Armadas y no según el bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad.

Cabe mencionar que dentro de la guerra contra el crimen organizado, la Comisión de los Derechos Humanos ha recibido aproximadamente 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército y determinó más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

Tan sólo en el 2016 se reportaron 439 denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional y 258 contra la Secretaría de Marina.

Asimismo, dio cuenta que 216 fueron por tortura, 28 por privación de la vida y 15 por desaparición forzada, lo que representó en los casos de tortura y desaparición forzada un incremento del 332 % y del 36.3, respectivamente, en comparación con el 2015, los datos mencionados hablan por sí mismo.

Por lo que respecta al artículo 8 la Ley de Seguridad Interior ordena que las movilizaciones que tengan motivo político electoral no serán consideradas como amenazas de la seguridad interior.

Lo anterior deja la puerta abierta para que las protestas sociales y libertad de expresión puedan ser consideradas como un riesgo a la seguridad interior, por tal razón las Fuerzas Armadas podrían intervenir en la disolución de dichas manifestaciones.

Finalmente no se contempla recurso alguno de transparencia, rendición de cuenta o contrapeso del Poder Legislativo, únicamente se limitan a rendir un informe al Ejecutivo Federal, es decir, no se valorarán los resultados de la declaratoria a la seguridad interior, mucho menos se conocerán los protocolos de actuación, pues serán considerados como información clasificada.

Lo anterior contradice lo estipulado en el párrafo segundo, artículo 6 de la Constitución Federal.

Para concluir, la Ley de Seguridad Interior no sólo es contraria a varios artículos de la Constitución Federal y violatoria de derechos humanos.

Sino que también deja en desprotección a las propias Fuerzas Armadas al mandarlas a realizar acciones que no les corresponden, situación que le provocará mayor desgaste y con esto la pérdida de credibilidad.

El sacar al Ejército a las calles no resolverá el problema, llevamos 10 años con esta práctica y lo único que ha provocado son más daños, más violencia, más inseguridad, más muerte, lo digo con conocimiento de causa.

En Fresnillo, Zacatecas, municipio al que pertenezco, es rutinario observar a elementos castrenses realizando operativos en patrullas de la policía municipal y que al día de hoy este municipio es considerado a nivel nacional como uno de los cinco municipios más inseguros y más violentos para vivir.

No se puede seguir con esta política de militarización, pues de poco sirve capturar o ejecutar a los líderes del crimen organizado si no se atiende de fondo sus redes de poder y sus recursos económicos.

Asimismo, es primordial contar con instituciones de seguridad pública confiables y bien capacitadas, se deben de atender las recomendaciones de los especialistas en la materia como son la Comisión de Derechos Humanos, el Inai, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales que en los últimos días han manifestado su rechazo a esta ley, pues de no ser así lo único que se llevó a cabo ahora fue un monólogo, puesto que las comisiones se limitaron a escuchar sin realizar algún cambio a la minuta.

Por tal razón, mi voto será en contra del presente dictamen, pues no puedo ser parte de la barbarie que están por cometer.

Ningún estado democrático apuesta a la militarización de su país para garantizar la paz, la vida y la seguridad de sus habitantes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Monreal.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Roberto Gil Zuarth.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Co su permiso, señor Presidente.

En los últimos días, en esta misma sesión, hemos escuchado la afirmación de que el fracaso en materia de seguridad se debe a las Fuerzas Armadas.

Hemos escuchado también la frívola acusación de que la situación de los derechos humanos se debe fundamentalmente al actuar de las Fuerzas Armadas.

Se ha dicho incluso que el índice delictivo y sobre todo los homicidios en nuestro país encuentran causa en las Fuerzas Armadas.

Habría que decir aquí con toda responsabilidad que esta afirmación, estas afirmaciones, no solamente son mezquinas, sino también resultan ser profundamente irresponsables.

El fracaso en materia de seguridad no es de las Fuerzas Armadas, es del Estado mexicano en su conjunto.

De los órdenes de gobierno que no han hecho su trabajo a lo largo de muchos años.

De municipios que se han arrodillado frente al crimen organizado.

De entidades federativas que no han generado capacidades institucionales propias.

De entidades federativas que han buscado el auxilio de la Federación para dedicarse a otra cosa distinta a proveer a sus ciudadanos de seguridad y de justicia.

La responsabilidad de decisiones que hemos tomado también a nivel federal en los últimos años.

De la ausencia de una política de Estado integral.

De la ausencia de un compromiso democrático para no partirizar la seguridad y la justicia, para no usar la seguridad como arena electoral.

Nada más revelador de esa ausencia de un consejo democrático que en la víspera de las elecciones de 2018 estemos intentando capitalizar el drama de la seguridad electoralmente.

Hay un falso dilema en el que se insiste y en el que no se dice de manera completa la verdad, “militares a la calle o militares a los cuarteles”.

Ese dilema es falso, o por lo menos es históricamente distorsionado.

Las Fuerzas Armadas no pueden regresar a los cuarteles por la sencilla razón de que tienen funciones permanentes, las tienen desde nuestro texto constitucional, desde que se institucionalizaron como organizaciones permanente armadas y han ganado funciones permanentes a lo largo del tiempo, en reformas que ha hecho el Congreso de la Unión y decisiones que ha tomado su Comandante Supremo, no en las últimas administraciones, sino por más de 40 años, o hay que recordar quién se encarga, por ejemplo, de custodiar el espacio aéreo mexicano.

¿Quién se encarga de fungir como policía marítima en las aguas territoriales mexicanas?

¿Quién se encarga, por ejemplo, del control de los armamentos?

¿Quién es autoridad administrativa en materia de armas, fuegos y explosivos?

¿Quién se encarga de cuidar las instalaciones estratégicas?

¿Quién se encarga de las operaciones de rescate y salvamento en el mar?

¿Quién se encarga en buena medida de auxiliar a la población en situaciones de necesidad, o que incluso colabora con organizaciones civiles en materia de salubridad, como son las campañas de vacunación?

Pero lo que tenemos que reconocer es que fueron los poderes públicos los que les hemos dado atribuciones en materia de seguridad.

Y no fue la última administración anterior a esta, sino es el supuesto consenso viene desde los años 90.

Y no me refiero a aquella utilización política de las Fuerzas Armadas, como cuando se les mandaba a hacer operaciones de carácter político, a lastimar a la sociedad, o bien como recurso de presión contra los ciudadanos, me refiero a la decisión que tomamos, que tomó el país en materia de delincuencia organizada.

En los años 90s, o partir de los años 90s, en ese período que comprende desde 1996 hasta lo que llevamos del siglo XXI, hemos hecho tres cosas esencialmente en materia de delincuencia organizada.

En primer lugar hemos federalizado la responsabilidad de combatir el crimen organizado, antes estaba en el ámbito local, antes todos los fenómenos criminales eran responsabilidad directa de estados y municipios.

Conforme fue creciendo el problema del crimen organizado tomamos la decisión de federalizar su combate y ahí estas las reformas de los años 90s, creamos el régimen de crimen organizado con instrumentos especiales, muchos de ellos ventajas procesales e instituciones que le daban una posibilidad mayor al Estado frente a quienes delinquían.

La segunda decisión es que convertimos al crimen organizado en una materia de seguridad nacional, la sacamos de la órbita y la respuesta primaria de la seguridad pública y la llevamos al régimen de seguridad nacional, y en esa medida le dimos funciones permanentes a las Fuerzas Armadas para actuar en contra del crimen organizado, fue el régimen o es el régimen de seguridad nacional que deriva de la Reforma del 2004 y su Ley Reglamentaria en 2005 que le da actuación a las Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado.

Aquí hay quien dice que fue una decisión de la administración 2006 y 2012, hay que leer qué responsabilidades tenía el Estado mexicano, qué responsabilidades tenía la Federación y qué deberes tenían las Fuerzas Armadas desde que decidimos convertir la delincuencia organizada en una cuestión de seguridad nacional y no en un fenómeno que se atendería desde los instrumentos de la seguridad pública.

Y la tercera cosa que hicimos o que hemos hecho, incluyendo esta Legislatura, es ir ampliando progresivamente los fenómenos criminales que se tratan desde la óptica, desde el ángulo, desde el régimen de la delincuencia organizada.

Hemos reformado profusamente ese régimen, 13 decretos reformatorios, 26 categorías de delitos, desde por supuesto narcotráfico hasta robo de vehículos, hasta piratería o delitos asociados a los derechos de propiedad.

Mientras estén esos delitos en el régimen de seguridad nacional que no nos extrañe que las Fuerzas Armadas tengan tareas permanentes en esa materia.

(Aplausos)

Y en la medida en la que se ha diversificado y pulverizado el crimen organizado y en la medida en la que nuestras instituciones civiles han mostrado debilidad, hemos aumentado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, se han convertido desafortunadamente en primeros respondientes y no en el último recurso del Estado mexicano.

Y eso ha sido posible porque en nuestra Constitución hay una función, una facultad presidencial no reglada, la multicitada fracción VI del artículo 89 de la Constitución, que dice: “que el Presidente de la República tiene la facultad de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para efectos de seguridad interior y defensa exterior”.

Por cierto, una redacción que no fue modificada, ni en la reforma de seguridad nacional, ni en la reforma al artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública, una función que lleva varios siglos en nuestro texto constitucional y que es el fundamento por el cual el Presidente de la República, en las últimas cinco administraciones, ha desplegado Fuerzas Armadas para tareas de seguridad hasta el grado de que se han convertido en primeros respondientes.

De tal suerte que no es intelectualmente honesto, ni políticamente responsable decir que las Fuerzas Armadas tienen que regresarse a los cuarteles sin resolver el problema de fondo, que es el régimen de delincuencia organizada.

Habría que complementar esa afirmación de que tenemos que regresar a los cuarteles a los militares.

¿Quién está proponiendo que las Fuerzas Armadas dejen de combatir el crimen organizado?

¿Quién está proponiendo que dejen esa tarea que le ha dado la Republica?

¿Quién está proponiendo que la delincuencia organizada quede en manos de estados y municipios o, de plano, que nadie las combata?

México no se puede dar el lujo de reducir la presión y la inhibición hacia el crimen organizado, a menos que ya estemos dispuestos a entregarles la República y nuestra convivencia.

De lo que se trata esta ley es de regular una función presidencial, una facultad exclusiva del Presidente, una facultad que debe coexistir con la plena vigencia de los derechos fundamentales porque la reglamentación de la seguridad interior no implica excepción a la aplicación estricta de los derechos y libertades públicas consagrados en la Constitución.

Es una función que está asociada a la necesidad de generar marcos de paz y que debe, insisto, coexistir con la plena vigencia de los derechos fundamentales.

Hemos escuchado, desafortunadamente, propuestas de que nuestro país tiene que ir a las suspensiones de garantías, a los estados de excepción para enfrentar los problemas de seguridad.

Nada más irresponsable, nada más inconstitucional que resolver los problemas de delincuencia común desde el régimen de excepción.

Y les recuerdo, por cierto, les recuerdo, por cierto, que está inconvencionalmente, convencionalmente prohibido utilizar el régimen de excepción, la suspensión de garantías para enfrentar problemas de delincuencia, aún en su versión de delincuencia organizada.

En nuestro país se ha instalado un círculo vicioso, un círculo vicioso al que hay que encontrarle salida.

En estas zonas grises entre la responsabilidad federal y las responsabilidades locales, en la medida en que los estados y los municipios no tienen capacidades se ha recurrido a las Fuerzas Armadas, siempre es más barato, más rápido y más fácil recurrir a las reservas de militares y marinos que formar policías.

Y en la medida en la que los estados y los municipios tienen Fuerzas Armadas no han podido o no han querido regular, formar a sus policías.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) ¿Me permite una pregunta, Senador?

El Senador Roberto Gil Zuarth: Por supuesto, Senadora.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le han aceptado la pregunta, Senadora Padierna.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias.

Senador Gil Zuarth, sólo preguntarle en todo este relato que usted está haciendo, preguntarle ¿cuáles son los resultados en materia de derechos humanos y qué le parecen a usted?

El Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora, el problema de derechos humanos en el país es mucho más complejo que estigmatizar a las Fuerzas Armadas, porque los primeros violadores de derechos humanos son los delincuentes que están en la calle.

(Aplausos)

En la medida en la que los estados y los municipios han tenido la ocasión y la oportunidad, el recurso de las Fuerzas Armadas no han formado policías, y de ese círculo vicioso tenemos que salir, y la salida es precisamente, creo que me están haciendo otra pregunta.

Voy a aceptar todas si me da más tiempo.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Presidente, nada más quiero que me conteste, ¿por qué no contesta?

El Senador Roberto Gil Zuarth: Ya le contesté, Senadora.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora Dolores Padierna, me parece que su pregunta fue atendida.

Tiene la palabra para hacer una pregunta el Senador el Senador Mario Delgado.

El Senador Roberto Gil Zuarth: O si quiere también hablamos de la violación a derechos humanos a manos de los policías locales, de los policías estatales.
El problema de los derechos humanos es un problema estructural, es ausencia de Estado, es ausencia de Estado, y si ustedes creen que la forma de resolver el problema de los derechos humanos es este juego maniqueo de culpar a las Fuerzas Armadas, se les olvida la otra parte de la ecuación, que es justamente el drama de violencia que generan los delincuentes en el país por ausencia de Estado, empezando por el ámbito local.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado, por favor.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: (Desde su escaño) La pregunta es para usted, Presidente.

¿Cómo valora el tiempo porque cuando yo les di voz a las víctimas no me permitió ni siquiera ocho minutos? ¿nada más cómo valora usted el tiempo de los oradores?

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le respondo después, Senador Delgado.

Gracias.

Adelante, Senador Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Concluyo, Presidente.

Frente a los riesgos y a los problemas de seguridad en el país nos hemos aferrado a la respuesta de contención a cargo de las Fuerzas Armadas.

México ha adquirido una adicción a la respuesta de fuerza antes que a la paciente construcción de instituciones.

Debemos provocar una suerte de síndrome de abstinencia, dejar de dosificar gradualmente Fuerzas Armadas para que el cuerpo social recupere su capacidad de pensar y, sobre todo, de actuar con claridad.

Las soluciones están a la vista, pero la primera es atarle las manos a este Presidente o a los que siguen, de tal manera que el despliegue de fuerzas, de las Fuerzas Armadas no sea a discreción, ni a contentillo.

Que las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no está pidiendo un amparo para ir a hacer lo que quieran a los territorios de nuestro país.

Lo que piden es la certidumbre de cuándo pueden y deben ser llamado a servir a la República, que no sean primero respondientes, sino el último recurso que tiene el Estado mexicano para pacificar un territorio, resolver un problema criminal.

Concluyo, Presidente, diciendo que en México no hay dos Ejércitos, no hay el Ejército patriota, leal, diligente de la ayuda humanitaria en los sismos o en las inundaciones, y del otro lado el Ejército represor, violador de derechos humanos, causante de la violencia.

Es un solo Ejército y es el que está demandado certidumbre, seguridad jurídica y la renovación de un pacto sobre su lugar en nuestro sistema constitucional.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Gil.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa.

El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Parece que sí hay debate ya.

A ver, el tema de la inseguridad pública debería corresponder a un nuevo modelo policial, a un nuevo modelo de seguridad pública.

La decisión que se tomó desde el poder fue abandonar la construcción de esos dos modelos cuando se canceló la discusión y, en su caso, la aprobación de la reforma constitucional que enviamos a la Cámara de Diputados.

De la cual los oradores que han estado acá formaron parte en esa construcción de esa propuesta, pero se decidió abandonar el modelo de esta forma de atacar al crimen organizado y se entregó a las Fuerzas Armadas este destino.

La esencia de la propuesta de esta reforma, de la Ley de Seguridad Interior, es eliminar el concepto de seguridad pública y desarrollar el concepto de la Ley de Seguridad Interior.

El artículo 89, fracción VI, que se ha venido a mencionar en innumerables ocasiones, tiene su origen inclusive en la Constitución de 1917, ha estado intocado a lo largo de más de un siglo, y en él se le otorga al Presidente de la República la faculta de preservar la seguridad nacional y de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para asuntos de seguridad interior y defensa exterior.

En ningún lado de la Constitución se establece que la seguridad interior es una vertiente de la seguridad nacional.

No encuentra uno en el texto constitucional una definición de cada uno de ellas.
‘
Por eso va a las leyes, a las bases legales que desarrollan los conceptos constitucionales, y en la Ley de Seguridad Nacional encontramos esa definición.

Ahora en la Ley de Seguridad Interior encontramos la definición de seguridad interior, y en esta definición estando vigente el texto del artículo 21 constitucional que hace una definición de seguridad interior y establece que la misma debe de estar encargada a instituciones civiles simple y sencillamente se anula, por eso es inconstitucional.

Por eso esta ley, esta propuesta que estamos discutiendo es inconstitucional.

A ver, ya se han expresado de manera muy profusa las y los Senadores, y parece que lo seguirán haciendo, que rechazan la Ley de Seguridad Interior.

De manera tendenciosa se ha señalado que quienes rechazamos esta propuesta, estamos en contra de las Fuerzas Armadas.

Mentira, nada más alejado de la realidad, por lo menos lo digo, por mi parte.

Nuestras Fuerzas Armadas deben ser una fuerza de paz; nuestro Ejército es el heredero de los contingentes armados que se alzaron en contra del usurpador Victoriano Huerta, el asesino de Madero, de Pino Suárez, de

Belisario Domínguez, nuestro Ejército es quien derrotó al general sanguinario y traidor que intentó asesinar a la democracia mexicana.

Nuestras Fuerzas Armadas son un Ejército de origen popular y plural, nacionalista, institucional y solidario con su pueblo. Aquí hacemos nosotros un reconocimiento a las mujeres y los hombres de uniforme, que, sin dudarlo han apoyado a nuestra población en desastres naturales como los ocurridos en septiembre de este año.

La Ley de Seguridad Interior pone en riesgo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, hace casi 50 años el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz cometió el grave error de instruir al Ejército al reprimir a los estudiantes en 1968.

Luis Echeverría los mandó a la guerra sucia, y Felipe Calderón, y, antes inclusive concuerdo con la fecha de 1996 los involucró en el combate al crimen organizado.

Este gobierno ha perdido la visión de Estado. En las filas del gabinete no quedan estadistas, no quedan voces sensatas, que tengan presente, cómo la subordinación de los mandos militares a la autoridad civil ha sido un factor fundamental, primero, de la paz social; y, segundo, de nuestra transición a la democracia.

La aprobación de esta propuesta de ley será un grave error de este gobierno, porque lejos de ofrecer una vía de solución al problema de la inseguridad y de la violencia que vive nuestra nación, profundizará la descomposición social.

Qué lamentable.

Qué terrible que este gobierno termine de esta manera, termine con la aprobación de una ley que va a militarizar al país, que vulnera los derechos humanos y que pone en riesgo nuestra paz social.

Como nunca antes muy diversas instituciones, organizaciones nacionales y extranjeras y personalidades han alzado la voz en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Como siempre ha ocurrido, en este se ha ignorado la crítica, como siempre se ha aparentado apertura, fingido que se escucha a las voces discordantes, pero al final se aprueba lo que se tenía previsto de antemano.

El gobierno no ignora, el enorme rechazo social a esta ley, pero simplemente no le importa. Sus intereses y sus prioridades nunca han sido a favor de la gente.

Reitero, las Fuerzas Armadas no pueden, no deben asumir la función de seguridad pública, porque esto alteraría de manera fundamental la naturaleza de las instituciones básicas del Estado.

Transformar este orden jurídico equivale a cambiar el eje en torno al cual gira el poder político, significaría modificar su cimiento en la legitimidad social para depositarlo en una valoración discrecional y subjetiva del orden y la disciplina.

Los hombres y las mujeres del poder político y la oligarquía mexicana ven venir el cambio de régimen en el 2018; el cambio de régimen no es el cambio de gobierno, es la modificación del modelo económico, político y social.

La mano dura, la militarización del país y el retroceso de las libertades son anhelos largamente acariciados por los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestro país para los cuales la democracia es un molesto obstáculo, y se preparan de esta forma al cambio de régimen que se dará en el año 2018.

La aprobación de esta ley es riesgosa en extremo para la democracia; fatal para las libertades y los derechos civiles, sociales y políticos; lo que viene después no le conviene a nadie, al menos a ningún mexicano con esperanza demócrata e igualitaria.

Afortunadamente a nadie engaña esta simulación, la sociedad tiene perfectamente claro sus riesgos y los motivos que le inspira.

Con todo respeto, y responsabilidad afirmo que con esta ley o sin ellas, el Ejército no ganará la guerra contra el narcotráfico.

El combate a la delincuencia organizada corresponde a las fuerzas policiales civiles.

En todo el desarrollo que hicimos en este Senado en la reforma constitucional, la llamada mando mixto, lo que necesitamos erradicar es la corrupción, en el combate a la delincuencia, y terminar con la impunidad.

Ese es el verdadero clamor de nuestra sociedad, y no la mala utilización de nuestras Fuerzas Armadas.

Los delincuentes cometen delitos, no violan derechos humanos, hay que recordar y tener presente ello, no cometen delitos, no violan derechos humanos; cometen delitos, hay que aplicar la ley, pero hay que pacificar el país.

Hay que aplicar la ley.

Aquí que no se vengan a afirmar circunstancias que tienen toda la orientación política electoral, se vale, también se vale, y lo escuchamos y lo podemos debatir.

Estamos satisfechos de estar del lado correcto de la historia en defensa de los derechos humanos, de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

Nosotros votamos por la paz.

Reconocemos al Ejército Mexicano.

Votamos por la paz, y desafortunadamente creo que sin darse cuenta de los alcances de esta ley, ustedes están votando por la continuidad de una guerra.

Buenas noches, señoras y señores.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Barbosa.

Tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Ávila.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz: Con su permiso, Senador Presidente Ernesto Cordero Arroyo, Senador por la Ciudad de México.

Vengo, con todo respeto y con toda responsabilidad, a dar mi posicionamiento.

Vengo como Senador por el estado libre y soberano de Yucatán.

Vengo como Senador electo constitucionalmente por los yucatecos para representarlos ante este Senado de la República.

Vengo ante esta tribuna del Senado a ser la voz de todos los yucatecos.

No vengo a difamar, no vengo a calumniar, no vengo a decir mentiras, vengo a decir verdades.

Desde esta tribuna quiero reconocer a las mujeres y hombres que conforma al Ejército Mexicano por su lealtad a la patria, por su lealtad a la República.

En todo estado democrático, uno de los principios esenciales es el sistema de equilibrio de poderes, que busca garantizar que los órganos federales, como es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no rebasen sus atribuciones o facultades constitucionales a fin de lograr una mejor representación y justicia social para los ciudadanos de una nación.

En México tenemos la experiencia de haber vivido en un régimen autoritario durante más de 70 años, cuyos Presidentes en turno ejercían atribuciones que sobre pasaban las facultades otorgados por la Constitución, haciendo del ejercicio del poder público una práctica unipersonal y autoritaria a partir del uso excesivo e ilegítimo del Ejército Mexicano, mismo que cometió actos arbitrarios en contra de varios movimientos sociales para mantener el poder del régimen.

Claro ejemplo de ello fue el período de la Guerra Sucia, que se caracterizó por la represión militar y política hacia dichos grupos.

La matanza de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en la hoy Ciudad de México, como consecuencia de una manifestación de estudiantes que luchaban por la democratización de nuestro país.

El halconazo en 1971, en el que fueron masacrados cientos de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La matanza de 45 indígenas de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, en 1997. Pero además de estas acciones militares, se han presentado otras que ponen en tela de juicio el optimismo del proyecto de decreto de la ley en discusión.

La presencia militar dentro de la sociedad civil, de 2000 a 2012, se fue posesionando con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la segunda mitad de este período, el Ejército tuvo una mayor intervención mediante el despliegue de operativos militares en diferentes regiones del país, de lo que se derivó innumerables quejas por violación a los derechos humanos.

Las ejecuciones realizadas por el Ejército en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014.

La represión y desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en octubre de 2014.

Debido a la represión ejercida por el Ejército en contra de los movimientos sociales, en los años 60s y 70s, se propiciaron varios casos de desaparición forzada, que hasta ahora no han sido resueltos. Todos y cada uno de ellos son lamentables para el pueblo mexicano.

Por esa razón debemos votar en contra del proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Interior, porque prácticamente institucionaliza las acciones militares mencionadas y con ello se militariza a México.

También lo asimila a un estado policial, en el que se podrá suprimir arbitrariamente las libertades civiles, y de ser así, regresaremos a un estado antidemocrático.

Vale la pena reflexionar al respecto.

Vale la pena preguntarnos. ¿Si eso es lo que queremos? Yo estoy seguro que no.

El artículo 6 del proyecto de la ley otorga atribuciones a las Fuerzas Armadas para implementar políticas, programas y acciones para prevenir y atender riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgo sin necesidad de declaratoria, de protección a la seguridad interior.

Cuando señala que las Fuerzas Armadas pueden realizar acciones de prevención a favor de la seguridad. No explica los mecanismos para ejercer dicha atribución, tampoco responsabiliza a las Fuerzas Armadas en caso de realizar detenciones, cateos o ejercer violencia de manera arbitraria, y esto, esto es muy grave.

Asimismo, el artículo 7 establece: “Que se deben preservar en todo momento los derechos humanos y sus garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes”.

Sin embargo, recordemos que las Fuerzas Armadas realizan actividades rutinarias, como lo son la instalación de retener en vías públicas y la revisión de automóviles sin orden judicial.

Al respecto, la propuesta de ley resulta ambigua, porque no garantiza que las acciones del Ejército resguarden los derechos humanos, y por su parte, aunque el artículo 8 de dicho proyecto estable que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.
No se determina en qué momento una movilización se torna de carácter grave, puesto que deja abierto a criterio del Ejecutivo Federal la participación de las Fuerzas Armadas.

La amenaza que genera este proyecto de ley es la posibilidad de criminalizar las protestas sociales y usar la fuerza pública como forma de contener las luchas populares violentando su derecho a manifestarse y su libertad de expresión debido a que no se ha dimensionado la actuación del Ejército Mexicano, por su parte, el artículo 30, pretender facultar a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de inteligencia, siempre y cuando utilicen métodos lícitos de recolección de información, con pleno respeto a los derechos humanos.

Sin embargo no explica los mecanismos para revisarlo y por la propia naturaleza que conocemos del Ejército, estas atribuciones resultan riesgosas para los mexicanos, en específico en materia de tortura, pues hemos tenido experiencias claras de ello.

Por ejemplo, en 2016 se calcula que hubo más de 220 casos de tortura y más de 70 casos de desaparición forzada, el tema es tan relevante que incluso Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en México, mostró su preocupación debido a que este proyecto de decreto no aporta soluciones reales a nuestro país para enfrentar los enormes retos en materia de seguridad.

Además violenta los derechos humanos de la sociedad, entre las razones que expone para que dicha iniciativa no se apruebe, están las siguientes: ambigüedad de conceptos, papel indebido de las Fuerzas Armadas, sometimiento de la autoridad civil al mando militar, ausencia de control, indebida regulación del uso de la fuerza, indebida protección y garantía de los derechos humanos, ausencia de trasparencia e inconstitucionalidad de la propuesta.

Asimismo se han pronunciado en contra de esta ley la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, varias comisiones estatales de derechos humanos, universidades como la UNAM, la Ibero y la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, la sociedad civil.

Sin embargo, me resulta sorprendente que aunque expertos en la materia, académicos y millones de mexicanos estamos expresando nuestro rechazo a esta propuesta de ley que no haya la sensibilidad política y menos el compromiso social por parte del PRI y de todos aquellos políticos quienes los apoyan en esta propuesta, que atenta contra la consolidación de nuestra democracia y de los derechos humanos, pero lo peor es que esta propuesta de ley fortalece más al presidencialismo que tanto daño ha hecho a nuestro país.

Por ello, les recuerdo a varios legisladores que se encuentran aquí que nuestro trabajo de muchos años ha sido para democratizar a México, que nosotros no somos producto de un sistema autoritario, somos producto del voto popular, no impongamos a México a nuestra querida patria mano dura y control militar, la historia no olvidará este atropello, se escribirán notas, artículos, incluso libros completos de este intento de traición a nuestra democracia, la historia será la encargada.

Mi voto será en contra de este dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, porque fomenta la arbitrariedad e impunidad, además de ser ambigua, es antidemocrática, porque intenta concentrar más poder en el Ejecutivo Federal, en contraste con el principio de equilibrio de poderes, además

impulsa el autoritarismo en México, lo que representa un retroceso para nuestro país y un atentado contra los derechos humanos cuando se fortalece un régimen autoritario, es segura la transgresión a los derechos humanos del pueblo y un retroceso social.

Por ello, pido a todos ustedes, compañeros legisladores, no aprobar este dictamen, los mexicanos se los van a demandar.
Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Chico Herrera.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su permiso, Presidente.

Primero, comentar a esta honorable Asamblea que vengo yo de un estado muy histórico, donde nace el Ejército Mexicano, algunos historiadores lo señalan en Celaya el 21 de septiembre de 1810 con el generalísimo don Miguel Hidalgo y Costilla o el 22 de octubre de 1810 en Acámbaro, Guanajuato.

Les hago esta introducción para comentar que tenemos un gran respeto con nuestras Fuerzas Armadas, por el Ejército Mexicano.

Nuestras Fuerzas Armadas han sido parte fundamental para combatir el crimen organizado. Por ello es necesario darles un marco jurídico que garantice también su seguridad y establezca los límites de su actuación.

La Ley de Seguridad Interior no está hecha para perpetuar a las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad interior, al contrario, se busca dar mayor certeza y establecer temporalidad a dichas acciones.

No se va a militarizar el país, se trata de un instrumento jurídico que regula adecuadamente la actuación del Ejército Mexicano, una institución con presencia histórica que ha coadyuvado en la construcción de nuestras grandes instituciones, las estadísticas son inobjetables, la mayoría de los mexicanos, más del 60 % desea que el Ejército y la Marina continúen en las calles, continúen en nuestras ciudades, lo cual es un indicador de la percepción de seguridad, de la población con respecto a las Fuerzas Armadas , y el nivel de aprobación de éstas en la sociedad mexicana.

La ley de Seguridad Interior no sólo reglamenta la participación del Ejército, sino también se da mayor certeza a los ciudadanos a favor de la protección de sus derechos humanos.

El enfoque de derechos humanos constituye un elemento central que fortalece no sólo a la ley, sino también a la democracia y al Estado de derecho, la Ley de Seguridad Interior contempla que la actuación de soldados, pilotos y marinos al llevar a cabo sus tareas de seguridad pública tengan como objetivo central proteger y garantizar los derechos humanos de las personas.

Además, se fortalece también la cooperación y coordinación entre las autoridades que colaboran en el manteamiento de la paz y el orden público, frente a riesgos y amenazas que pueden perturbar la paz social y seguridad nacional y sin que exista la suplantación de ninguna autoridad.

Nuestras Fuerzas Armadas han desempeñado funciones importantes en apoyo a la población, por ejemplo, presentar auxilio y protección a las entidades federativas y municipios que han sido afectados por desastres naturales.

Nuestro gran Ejército ha participado de manera activa para que miles de familias tengan paz y tranquilidad.

Por ello, diversos gobernadores no sólo han reconocido el papel de las Fuerzas Armadas, sino también han solicitado el apoyo formal del Ejército y la Marina, con la finalidad de garantizar la seguridad en sus estados.

Hoy, México cuenta con Fuerzas Armadas mejor capacitadas y preparadas, han contribuido a mejorar la vida en el país, la calidad de vida en el país, tranquilidad y el orden social en diversas entidades.

La Ley de Seguridad Interior es un marco jurídico que responde a las necesidades de la población y establece acciones que contribuyan a fortalecer la seguridad pública del país y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Por eso es que yo hago un llamado a esta honorable Asamblea, para que votemos a favor de esta Ley de Seguridad Interior que beneficiará y nos llevará a la paz y tranquilidad que deseamos todos los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Chico.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias.

Antes de iniciar quiero hacer dos comentarios.

Uno, nos interesa la discusión de este tema, compañeros, y a veces para algunos es molesto estarnos oyendo porque creen que solamente venimos a molestar y a abundar en temas ya dichos, pero creo que la actitud de no escuchar, de no ver, obliga a ser reiterativos en los argumentos para que puedan escuchar.

Se trata de que una discusión, aquí en la tribuna, orille un debate que promueva y que provoque cambios, cambios en las posiciones políticas para poderlas asumir en una ley que tenga un alcance de beneficio a la sociedad.

Y pareciera que aquí cuando se fijan posiciones se agrede y se inventen posiciones políticas en contra de entes de nuestra sociedad, y eso es falso, aquí solamente están coexistiendo dos visiones políticas que buscamos lo mismo, pero que la formación, la instrucción, hasta la disciplina hacen que las veamos diferentes.

Aquí el Presidente ahora, debo reconocerlo, que se ha abierto a que podamos subir a expresar una posición política, porque luego a veces se aferran al Reglamento, van a decir ya hablar mucho, y, entonces, vamos a cerrar la discusión y nos pueden dejar sin oportunidad de discutir.

No lo han intentado hacer ya otras veces y creo que lo que menos podemos hacer aquí este día es discutir y contrastar las posiciones políticas que tenemos, poderlas ver desde diferentes puntos de vista para que nos permitan tener la certeza que lo que están haciendo, lo estén haciendo convencidos.

Yo les pediría que dejen salir al legislador independiente que tienen adentro y que el día de hoy puedan aprobar con responsabilidad rechazar esta propuesta de dictamen que nos han dado aquí en este Pleno.

Creo que solamente los hombres libre que están allá escuchando son los que tienen la oportunidad de resolver esto en pleno uso de razón y no atornillados a una encomienda política que hoy creen cumplir, y solamente exhiben una posición de servilismo.

Eso es lo que vemos a veces aquí y expresar estas posiciones pareciera que los ofende, pero lo que queremos es de verdad contrastar, que se debata, que no se salgan del Pleno, porque luego a veces es lo que da coraje, que estamos hablando aquí varias horas y ustedes como tienen decidida una votación se salen y regresan a votar en contra.

Sí, tenemos que hablar muchas veces para que todo lo que decimos ojalá, como son de lento aprendizaje, se les quede grabado.

Miren, hay frases, bueno,…

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Pedraza, lleva usted tres minutos sin entrar en materia.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Sí, es que por eso pedí yo chance de decir estas dos cosas.

Puedo decir la libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica, las personas con hambre y sin trabajo son el material de que están hechas las dictaduras, quería empezar con eso, pero luego pensé que el que quiere gobernar debe oír y debe ver, y aquí han sido omisos en oír y ver.

Luego pensé también decirles que el Estado llama ley a su propia violencia y el crimen a la del individuo, también dijo Alberto Moravia: “una dictadura es un Estado en el que todos temen a uno y unos temen a todos”.

Compañeros, hemos estado analizando desde diferentes perspectivas esta iniciativa, les hemos tratado de decir de diferentes tonos que esto no pasa, y el dirigirse a ustedes y llamarlos a esto tiene que ver con la forma que el debate pueda prosperar y podamos conciliar en un punto que ayude a la sociedad.

Yo creo que el viejo PRI que regresó trajo no solamente el regreso del dedazo, lo acabamos de ver otra vez, también la cooptación de órganos electorales, tratar de imponer la legalidad a través de coartar órganos y resoluciones en los tribunales.

Como dijera el Presidente: “el viejo PRI ha volvido”.

Creo que en ese sentido, ha volvido a tratar de restañar el autoritarismo con el Ejército aplicando y tratando de someter a nuestra sociedad.

No tenemos como antecedente para que esto pueda tener controles la ley que reglamente el uso legítimo de la fuerza pública, esto también sería una garantía, bueno, se pasan acá, hay un control, hay un contrapeso.

Yo creo que en este sentido los argumentos que han dado nuestros compañeros tratan de encaminar que aquí tendremos que abrirnos, no es la manera de justificar las acciones la que nos va a poner en una condición de estar a favor y en contra del Ejército, estamos a favor de la sociedad y no podemos confundir los conceptos.

Hace un rato les propuse, les puse aquí en la mesa lo que significaba la seguridad interior, la seguridad pública, y creo que ahora, como bien decían hace un ratotote, tratan de copiar un modelo extranjero de lo que tiene que ver el concepto de seguridad pública.

Yo quisiera, compañeras y compañeros, que pudiéramos nosotros valorar que a nuestro país se le ha destinado suficiente dinero al combate al crimen organizado, no ha habido una manera de no escatimarle recursos a esto, el presupuesto de este rubro en 2015 se estimó en 209 mil 400 millones de pesos, de los cuales el 40 % del gasto federal en seguridad se destinó a la seguridad nacional; el 39 % a la función de justicia; y el 21 % a la seguridad interior.

En México el gasto en seguridad interior creció 61 % entre 2008 y 2015, pues la inversión pasó de 27 mil 259 millones de pesos a 43 mil 95 millones de pesos para 2015, el gasto en seguridad interna en el país representó el 1.4 % del gasto total del gobierno federal, y, sin embargo, sólo sea incrementado la violencia.

El crimen avanza y el gasto no se detiene, pero sí persiste el problema de la opacidad sobre el ejercicio del gasto en seguridad, tanto en su destino como en los resultados que producen, esto implica que no existe información confiable sobre qué funciona y qué no, lo que debilita la toma decisiones sobre la permanencia, eliminación o modificación de programas en materia de seguridad pública, sólo con información pertinente y detallada sobre las prioridades del gasto y sus resultados será posible mejorar la eficiencia presupuestal.

Con esta ley que se pretende auxiliar y proteger a las entidades federativas y municipios sustituyendo en sus funciones y responsabilidades a los gobiernos de los estados, nos encaminamos a olvidar que los gobiernos estatales han recibido en los últimos años recursos importantes para atender la inseguridad y que con el modelo

actual al que hoy pretende dar certeza jurídica, no ha permitido incentivar la capacitación y profesionalizarlos de los cuerpos policiacos, además, que garantiza la omisión de su responsabilidad.

Aquí ya han dicho que nosotros tenemos muchos años de guerra, aquí lo que tenemos que decir que aprobar esta ley, como ayer lo expresaron los representantes de la organizaciones sociales de la ciudadanía, que aprobar esta ley es un homenaje al asesinato de más de 213 mil mexicanos y a más de 30 mil 942 personas desaparecidas, que esto es lo que nos han indicado y gritado ayer las organizaciones de la sociedad.

Hace rato lastimosamente alguien aquí no supo valorar lo que significa que sectores incluso del arte se expresen en temas como éste de la seguridad.

Descalificando y diciendo que hacen parafernalia, no sé cómo le dijo, en aras de descalificar el esfuerzo que va encaminado a proteger los intereses de los mexicanos.

Si hay grupos que se han manifestado diciendo y señalando las deficiencias que tiene esta ley, nosotros, en un acto de libertad, deberíamos de rechazar lo que contienen estas iniciativas.

Compañeros, es tiempo de hacer esto.

Hoy es un día en que la historia habrá de registra aquellos que plantean el regreso del autoritarismo y la violencia para combatir el crimen, y los que estamos en contra del, y no estamos en contra del Ejército y la Marina, pero sí en contra de la inconstitucionalidad de esta ley.

Los que pensamos que la Ley de Seguridad Interior no abona, no suma al fortalecimiento del Estado de derecho o para combatir la inseguridad y las diversas expresiones del crimen organizado.

Es, compañeros, la posición de su servidor en lo general de este dictamen y, por último, yo dejaría una reflexión que nos ha preocupado en los últimos días y que ha sido parte de cómo el problema de la inseguridad en México se ha recrudecido.

Hace tiempo, en el 97, se creó un grupo de élite en el Ejército para que en el estado de Tamaulipas pudiera combatir al crimen organizado y, desgraciadamente, la falta de controles, de supervisión, de evaluación, de que desconozcamos nosotros qué mecanismos de control tenían ahí, este grupo del Ejército se convirtió, y se ha convertido, en uno de los grupos criminales más peligrosos que tenemos en el país y que tienen asolado y azotando el estado de Tamaulipas.

Que esto sirva para poder ver de qué manera esto que hoy queremos hacer no se nos vuelva a presentar y a reproducir.

Hay alertas, hay antecedentes, hay preocupaciones, y, compañeros, ustedes han tenido cinco años de tiempo aquí para poder tomar decisiones con nosotros.

Son refritos, compañero, porque yo decía, desde hace rato, no hay una mente abierta y dispuesta para poder entender que esta circunstancia que hoy se pretende abordar está totalmente señalada y rebasada a su entendimiento.

Voy a pedirle, Presidente, que en el límite de mi participación, le voy a entregar diversos documentos que contienen un análisis detallado de los artículos de esta ley que quiero que se anexen al Diario de los Debates.

Por otro lado, le voy a entregar el posicionamiento de la Federación, de organizaciones de derechos humanos sobre la aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Interior que está firmado por más de 23 organismos de derechos humanos de todo el país, para que se anexe a la minuta.

Voy a entregarle también el pronunciamiento de expertos en el tema de derechos humanos de la ONU que han expresado para que esto no sea aprobado, y que esto sirva como una parte que argumente y que fundamente lo que hemos estado aquí señalando porque nuestros compañeros les parecen refritos, pero creo que, desgraciadamente, tendrán que echarse un clavado a revisar argumentos de carácter legal.

Y, finalmente, entregarle una entrevista y palabra del Secretario de la Defensa Nacional en cuanto que no tiene claro cuál es el concepto de Seguridad Interior que se ha estado cuestionando.

Eso es cuanto, compañeras y compañeros.

Gracias por su atención.

Quiero pedirle, en términos de lo que me ha dicho el compañero, que este período, ya de casi receso legislativo, los haga reflexionar y que de verdad liberen al verdadero legislador que el pueblo de México reclama.

Eso es lo que yo le pido a Santa Claus, señor Senador.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Pedraza, por sus buenos deseos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Patricio Martínez.

El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias al señor Presidente.

Muchas gracias a mis compañeras y compañeros, a quienes les pido unos momentos de su atención para hacer algunas reflexiones.

Les pido a los colaboradores y ayudantes de mis compañeras y compañeros por unos momentos guarden el mejor orden que sea posible, quiero decirles que vengo a esta tribuna conmovido, conmovido porque siendo esta la más alta tribuna del país, siendo ésta una tribuna de la que los mexicanos esperan todo, en estos días lo que los mexicanos han estado viendo es un falso debate.

No, lo que hemos tenido tampoco ha sido un diálogo, en muchas ocasiones ha sido un monólogo.

No es de responsabilidad cívica jugar con los tiempos dejando el balón atrás de la media cancha, esa es una estrategia deportiva.
En San Lázaro nos están esperando y necesitamos dar un cambio a lo que hay en las leyes de este país.

Concedo el derecho que tenemos todos a exponer nuestro punto de vista y nuestra verdad.

Vengo conmovido porque desprovisto de todo apunte, y como es la práctica parlamentaria, me ha pedido que tenga aquí una intervención, y mi intervención es para decirles, compañeras y compañeros, ¿alguien de ustedes ha sufrido lo que es el delito, la agresión a la integridad física y a la vida?

¿Alguien de ustedes ha sufrido, sabe lo que es enfriar un proyectil de arma de fuego en su cráneo?

Quiero decirles lo que millones de mexicanos, familiares y víctimas sufren por la inseguridad en este país, yo lo he vivido, y quiero decirles, ir tocando puertas para pedir justicia, como un día se lo dije, a las más altas autoridades del país, tengo el privilegio de venir a pedir justicia, porque el cielo me lo concedió.

Si no fuera así, hoy estarían, mi viuda y mis hijos pidiendo justicia, la cual, lamentablemente quiero decirles, se detuvo a la autora intelectual, pero nunca a los autores; se detuvo a la autora material, pero nunca a los intelectuales, eso quedó impune, impunidad, impunidad ante el delito es lo que viven millones de mexicanos.

No podemos decir que el Ejército es una gran institución, y luego señalarlo como un violador sistemático de los derechos humanos.

No podemos estar hablando mal de nuestras instituciones, no podemos estar hablando mal de México, este Senado tiene que asumir su responsabilidad de exaltar los valores patrios no con un viva México, tiene que

hacerlo demostrando las capacidades que tiene para llegar a conclusiones que favorezcan un nuevo marco legal, porque el que tenemos es obsoleto.

Guardo no el respeto al Ejército, no lo guardo de mis años de estar en la vida pública a la que entré tardíamente, a los 44 años, y entonces, fui presidente municipal, diputado, gobernador y ahora Senador.

Me parece que tener el recuerdo que tengo yo del Ejército cuando aquél piquete de soldados bajaba del tren 7, procedente de la Ciudad de México, iba de la mano con mi padre a recoger la carga en ferrocarriles, no veía a los soldados con temor, los veía con respeto y admiración, y siempre los he visto así, veámoslos así; veamos así a las Fuerzas Armadas.

Este país no puede seguir señalando ni a sus policías ni a su ejército y a sus Fuerzas Armadas como los mayores violadores y los mayores delincuentes.

Perdóneme, mi amigo que ha sostenido aquí un absurdo, ¿cómo que no se violan los derechos humanos por los delincuentes?

Es que, ¿acaso quien me dispara pretendiendo violarme del derecho a la vida, no está violando mi derecho, además de cometer un delito?

No podemos sostener este tipo de argumentos.

(Aplausos)

Cómo es posible que gentes con esa preparación sostengan esos principios.

Concluyo, concluyo nada más diciéndoles Senadoras, Senadores.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Señor Senador Patricio Martínez, acepta una pregunta del Senador Miguel Barbosa.

El Senador Patricio Martínez García: Con mucho gusto, Senador Barbos, sostengo mi admiración y mi respeto por usted, como por todos mis compañeros.

Sostengo que aquí necesitamos contra-argumentar a Roberto Gil Zuarth; necesitamos contra-argumentar con congruencia lo que he señalado; hoy, hoy estamos haciendo con estas iniciativas y con este debate y con esta ley lo que otros están proponiendo en un proyecto de vida nacional para el futuro en sus campañas políticas, y eso no ha sido desmentido en ningún momento, ni lo de Roberto Gil ni lo del proyecto de nación que presentan otras gentes.

Con mucho gusto, Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta (Desde su escaño): Mi querido Patricio, yo comparto todo lo que tú puedas decir. Pero esa mención, aunque la haga el Senador Roberto Gil, a quien tengo un respeto especial, tiene una precisión técnica.

Los delincuentes cometen delitos, las autoridades violan derechos humanos, es una cuestión técnica, Patricio, ¿sí?, sólo eso para que quede claro y no se utilice.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le va a preguntar algo, Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Que quede claro, gracias.

Gracias, Patricio.

El Senador Patricio Martínez García: Haga la pregunta, y le doy respuesta, le doy respuesta porque no tenemos tiempo, y los mexicanos están esperando una resolución de este Senado. Le doy inmediatamente respuesta.

Los tecnicismos no los conoce el pueblo, lo que el pueblo conoce es el delito que sufre y llora pro millones desde hace años y que espera una respuesta de aquí a través de usar la técnica.

Pero por favor, no le digamos al pueblo que los delincuentes cometen delitos y que eso no es una violación a sus derechos.

Eso, esos son justamente aspectos que no van a la vida del pueblo, y a lo que vive y sufre la población.

Compañeras, compañeros, quiero decirles que en las cantinas se usa el adjetivo, en el Senado se debate con razones, con principios y con respeto.

(Aplausos)

Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con mis compañeros que no pertenecen al partido del Presidente de la República, pero es nuestro Presidente.

En la medida en que le dificultemos su desempeño, dificultamos el tránsito de la vida nacional día a día, y quiero decirles, estoy en un estado donde mi gobernador procede de otro partido, pero desde el primer día y hasta la fecha, le ofrezco lealtad a la institución de gobernador que requiere facilidades para que sea un buen gobernador para tener un mejor Chihuahua.

Y yo creo que eso desprovisto de toda ideología partidista, quiero decirles, no vengo a defender una iniciativa de priístas, vengo a defender una iniciativa que México la requiere, con todos sus defectos, pero es un cambio que el país necesita, y si mañana tenemos que regresar a sesiones extraordinarias para hacer el cambio de lo que hoy cambiemos, hagámoslo mañana, al fin y al cabo el proceso legislativo es permanente, constante e inacabado.

Finalmente, quiero pedirles, compañeras, compañeros, vamos viendo por México, pero más allá de esa condición que se guarda del discurso escrito y pre elaborado presentémonos así, con el sentimiento de la población, con lo que millones de madres, de padres, de huérfanos están sufriendo por una tarea que fa creciendo sin preguntarnos por qué es la inseguridad.

Hago un recuerdo, el emperador en China pedía que no le siguieran inundando de drogas, porque su pueblo se estaba perdiendo y el imperio se estaba perdiendo.

Yo les pregunto, aquél México independiente, cuando nace la nación, fue inmediatamente intervenido por quienes querían dividir a los mexicanos, porque a río revuelto, ganancia de pescadores, y ganancia de territorios.

Finalmente les pregunto, hoy, quién quiere dividir a los mexicanos, ustedes no.

Si es alguien de afuera, combatámoslo con una real unidad, y llegando a conclusiones.

El viva México que sea con nuestras actuaciones, y no solamente con un grito el 16 de septiembre.

Que viva México, pero con una acción positiva y definitiva de este Senado para llegar a soluciones.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth (Desde su escaño): Gracias Presidente, y será por alusiones, muy brevemente.

Tiene razón el Senador Barbosa en relación con que en efecto en la concepción tradicional los derechos humanos se entienden como la relación o se explican en términos de la relación del ciudadano y el Estado, pero hace mucho cambió esa doctrina, fueron los alemanes quermes crearon un concepto del efecto y rayador de los derechos fundamentales, que no rigen solamente la relación entre Estado y ciudadanos, sino entre ciudadanos y entre personas no estatales.

La base esencial de las normas penales que tipifican ciertas conductas es la protección de los derechos fundamentales, para eso son las normas penales, para proteger, garantizar e inhibir los derechos fundamentales.

De hecho el canon de justificación de la tipificación penal es justamente los derechos humanos, empezando por el fundamento esencial, que es el principio de dignidad.

Le aprecio mucho la referencia al Senador Barbosa, pero no equivoqué en mi expresión.

Cada vez que un delincuente dispara una pistola, vulnera los derechos humanos de su víctima.

(Aplausos)

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

¿Con qué objeto, Senador Barbosa?

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Es muy breve, porque este irregular intercambio de opiniones, pues, parece que era alusión o no era alusión, no era alusión a él ¡Eh! pero en fin.

Yo nada más quiero hacer una mención de medio minuto. El antecedente de los derechos humanos, eran las garantías individuales, derechos objetivos públicos.

Se asume ya en la reforma, esta reforma del 98, del 2008, esta reforma profunda al artículo 1 constitucional, y se cambia de garantías individuales a derechos humanos. Pero haré una referencia sería, bueno, pues vamos a presentar denuncias en la Comisión de Delitos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2011.

La concepción es. Solamente las autoridades pueden violar derechos humanos, los delincuentes cometen delitos y hay que castigarlos.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Para hechos.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La anoto en la lista, al final de este debate, para rectificación de hechos, Senadora Padierna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, su señoría.

Buenos días.

Bueno, dicen que todas las participaciones se agradecen, pero sólo las breves se agradecen de corazón. Entonces, procuraré ser muy breve. Y empezaré con una pregunta.

¿Qué tienen en común las Naciones Unidas, universidades públicas y privadas, comisiones de derechos humanos de todo el país, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, artistas, iglesias, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, la galardonada con la Presea Belisario Domínguez, y muchísimos juristas, entre ellos, Elisur Arteaga, Pedro Salazar, Diego Valadés, y muchísimos otros, conté 70 en alguna lista?

Todos tienen en común, a pesar de sus tremendas diversidades y diferencias, todos coinciden en la inconveniencia de la ley en comento, su inconstitucionalidad y su daño.

Y a partir de esto, el Presidente invitó a escuchar.

¿Qué pasó? ¿Mintió o le mintieron?

¿A quién escuchó el gobierno?

Nadie dijo que estaba a favor. Nadie que esté afuera del grupo gobernante ha emitido una opinión favorable contra esta ley.

Este es el último acto, el daño final de la estrategia que nunca operó. Es el triste retazo de los diez puntos, aquellos que estarán en algún lugar olvidados en su memoria de los puntos que prometieron como estrategia de seguridad y que nos han llevado a este año terrible de violencia donde se rompieron todos los récords sin una respuesta efectiva del Estado.

Frente a estos diez puntos fallidos y, como dice la canción: que van de fracaso en fracaso, la única respuesta que atina el Estado mexicano no es a plantear una estrategia de seguridad, es a plantear esta ley.

Si bien compartimos la necesidad de un marco adecuado y correcto para las Fuerzas Armadas, y coincidimos con los diagnósticos que así se han planteado en su mayoría, pero esta ley no ofrece ningún avance, por lo que su inminente y triste aprobación nos da un mandato moral y nos obliga a plantear algunos riesgos y consecuencias que esto implica.

Permítanme plantear en argumentos llanos, sencillos y derivados del sentido común lo que encontramos en esta ley, que es inútil, inconstitucional y peligrosa.

Es inconstitucional, y será coartada para la violación de derechos humanos, ya no voy a abonar a esto, porque ha sido planteado con brillantes y claridad en esta tribuna por quien me antecedió en la voz.

Pero sí es inútil porque genera incertidumbre y tensiones innecesarias. Con esta ley, las Fuerzas Armadas no tendrán más argumentos en su defensa, ni tendrán mayor seguridad.

Es falso que dé un marco adecuado, toda vez que, prácticamente todos los juristas han destacado su inconstitucionalidad, más allá de una opinión, es una vulnerabilidad que anuncia su falta de efecto.

¿En qué torpe optimismo cabría pensar que no se va a litigar?

El problema de fondo, se ha comentado también, es la falta en la formación de policías confiables y funcionales, y la anulación de la Ley de Mando Mixto implica que no haya una ruta para su desarrollo y cancela la posibilidad de regresar a una mediana normalidad.

No ayudará, de ninguna forma, a la pacificación del país, ni dará mayor seguridad a los mexicanos, generará mayor incertidumbre.

En el fondo, realmente ¿Qué cambiará?

Es peligrosa, es muy peligrosa, representa un riesgo para la estabilidad nacional y expone al Ejército a un desgaste innecesario.

Uno de los pilares del Estado mexicano de fortaleza y autoridad moral de las Fuerzas Armadas ha sido esta franja que divide la actividad castrense de las autoridades civiles.
Con esta ley no sólo se recorre, se diluye y en el futuro seguramente generará grandes problemas para la nación.

Aprobar esta ley en el último año de gobierno, en el peor año de violencia y con el mayor desprestigio de las instituciones, resulta inoportuno, además de riesgoso; abrirá el debate en los próximos años o en los próximos meses de la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder civil.

Por ejemplo ¿Si debe haber un Secretario de la Defensa Civil, la transparencia de los recursos y controles parlamentarios?

Es una ley sin apoyo popular. Ni un solo actor fuera de la esfera del gobierno ha manifestado a favor de esta. Es una ley impopular.

Coincidimos en la necesidad de dar el marco adecuado a las Fuerzas Armadas, pero también es urgente establecer una ruta para la seguridad, y no abona en esta ley, no son temas diversos.

Que quede claro, estamos a favor de las Fuerzas Armadas, estamos a favor de la institucionalidad, pero en los términos que propone esta ley.

Esta ley no tiene ni razón ni ciencia, no tiene progreso ni moralidad y va contra todas las tendencias históricas del Estado.

Hoy, hoy harán un gran daño. Esta es la ley del fracaso, es la ley del fracaso en la pacificación del país, es la ley del fracaso en construir una policía confiable, es la ley del fracaso de la gendarmería como institución civil, es el fracaso de la política por la incapacidad de oír a la mayoría de las voces sensatas e independientes, es el fracaso del triste gobierno de Peña, que deja un país más inseguro, con instituciones más débiles y que la abona a su obra nefasta a un gobierno que anuncia que la historia lo tendrá por defenestrado, y que se hunde en la soledad de su sinrazón.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Senador.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Cavazos Lerma.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Con su venia, Senador Presidente.

Estimadas Senadoras y Senadores:

Hay doce argumentos reiterados en esta discusión que merecen consideración.

Primero. Esta ley no es una panacea, no resuelve todos los problemas de seguridad, no es su objeto, es un instrumento específico, temporal, sujeto a requerimientos estrictos que da certeza jurídica.

Segundo. Esta ley no militariza al país, regula el apoyo de las Fuerzas Armadas a estados y municipios y sienta las bases para su regreso a su ámbito propio de acción cuando se subsanen las deficiencias que originaron su presencia a través de un programa temporal, con acciones concretas y evaluables.

Tercero. Esta no es una ley para las Fuerzas Armadas, es una Ley de Seguridad Interior, no de Seguridad Púbica, la Seguridad Interior no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, es de todo el Estado mexicano, de todo el gobierno en sus tres poderes y en sus tres órdenes, es por tanto, una ley para atender los riesgos y amenazas a la seguridad interior, a la preservación y continuidad del Estado mexicano.

Cuarto. La seguridad interior es parte de la seguridad nacional, por lo tanto el Congreso tiene facultades para legislar esta ley como lo plantea la fracción XXIX-M del artículo 73 que nos faculta para expedir leyes en materia de seguridad nacional.

Por lo tanto esta ley no es inconstitucional.

Quinto. Las leyes no se interpretan sólo literalmente, también existe la interpretación sistemática, funcional, de biológica, histórica, sociológica, etcétera, etcétera, este ejercicio ha estado ausente en los argumentos de los opositores a esta ley.

Sexto. El uso legítimo de la fuerza implica su uso dentro del sistema jurídico conforme a normas, reglas y protocolos que están en otro ámbito legal y se remite a él, esta ley no incluye todos los temas de la seguridad nacional, porque no es la única ley en el ordenamiento jurídico nacional.

Séptimo. Si hacemos esta interpretación integral, esta ley es constitucional y es convencional, y es armónica con otras leyes, además es compatible con ordenamientos de transparencia y rendición de cuentas que no son modificados, por lo tanto no existe la opacidad que aquí indebidamente se alude.

Octavo. Esta ley respeta los derechos humanos por su armonización con el ordenamiento jurídico nacional, por su compatibilidad con la Constitución General de la República, porque así lo expone en su artículo 2 y porque así lo define su artículo 3 y su correlato en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional.

Noveno. No hay sumisión o sometimiento de las autoridades civiles porque se prevén dos supuestos.

1.- Si la insuficiencia de capacidades se subsana con la Policía Federal Preventiva, el mando federal caerá en manos de un civil que se coordinará con los mandos civiles locales.

2.- Si se necesitan las Fuerzas Armadas, el mando militar se coordinará con las fuerzas civiles del estado, una interpretación funcional y sistemática nos dice que las relaciones entre la Federación, estados y municipios son de coordinación, no de sumisión, además estas relaciones se limitan a los temas especificados en la declaratoria, no incluyen todas las facultades y atribuciones que corresponden a las autoridades civiles.

Décimo. Las manifestaciones de protesta social no podrán ser materia de la declaratoria de protección de la seguridad interior, porque no son amenaza a la seguridad interior.

Décimo primero. Los que hablan de botas militares no son capaces de ver su embotamiento mental.

Décimo segundo. los que hablan engoladamente de errores históricos son incapaces de ver sus sofismas y falacias que son errores de concreción, de argumentación.

Finalmente, un reconocimiento a las Fuerzas Armadas Mexicanas por su invaluable contribución al bienestar de la patria, y por lealtad a ese reconocimiento, voy a votar a favor de esta ley necesaria y patriota.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Cavazos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Adriana Dávila Fernández.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su permiso, señor Presidente.

Esta es una ley que evidentemente tendría que discutirse no con mucho más tiempo, pero sí con mucha más seriedad.

Escuché con muchísimas atención a los oradores, incluyendo los de mi partido que están a favor y que prepararon una excelente Ley de Mando Mixto, que no fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Y, concuerdo cuando lo escuché, debo decir que su voto iba a ser en contra de esta Ley de Seguridad Interior.

Se señala aquí que es irresponsable decir que el fracaso se debe a las Fuerzas Armadas, es igual de irresponsable decir que el éxito en el combate a la seguridad pública depende de las Fuerzas Armadas.

Dice también que los municipios se han arrodillado ante el crimen organizado, por supuesto que se han arrodillado ante la falta de operación del Gobierno Federal, a quien le compete a quién le toca combatir la delincuencia organizada, no se supone que es al Gobierno Federal, los militares a las calles dicen o los militares a los cuarteles.

No señores, los militares a lo que las funciones de las constituciones establecen, eso es lo que tendríamos que hacer, querer mucho a las Fuerzas Armadas y las estamos exponiendo a que todo mundo las demerite y las debilite como están debilitadas hoy las policías municipales, estatales y la federal.

No vayamos lejos de las reformas recientes, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, casi, casi vi en esta ley una copia pegada a la otra.

Es verdaderamente triste pensar que cambiando nueve artículos se puede cambiar esta ley, pero además es increíble pensar que hoy estas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional dicen sean también de seguridad interior, lástima que ya no está aquí el abogado al que le iba a preguntar que me dijera cuáles son las diferencias entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública.

¿No, no está aquí? Porque el otro ya se fue, que no me quiso contestar.

No sabe eso porque ni siquiera está definida las definiciones en esta aparente ley son ambiguas, son justamente para que la interpretación de a lo que quiera el gobierno federal.

Dicen que es constitucional porque estamos dispuestos a la fracción XXIX-M del artículo 73.

¿Estamos facultados realmente para ello?

Pero además dicen que esta ley es de orden público, de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, pero que, además, sus disposiciones son de materia de seguridad nacional.

Pregunto ¿es lo mismo que seguridad interior?

Pero además es increíble pensar que esta ley tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, es decir, también vamos a hablar del Poder Judicial.

¿Díganme en qué parte de la ley viene el Poder Judicial?

Es inconstitucional.

Dice también que es mentira que lo que decimos es que esta ley es permanente y que hay un plazo, que hay un año en el que se puede hacer esta declaratoria por el Ejecutivo Federal; sin embargo, también esta ley dice que ese plazo puede prorrogarse a petición del Ejecutivo, mientras no se acabe con este tema, llevamos más de 30 años con estos problemas de seguridad pública.

No mintamos acá, no vengamos a decir que lo que queremos es un tema de seguridad interior, lo que se pretende con esta ley es regular las funciones de seguridad pública que son responsabilidad de la Federación de los estados y de los municipios, preferimos invertir el dinero en acuerdos con los cuates y este proceso de corrupción que capacitar realmente a las policías.

¿Por qué no se quiso discutir en la Cámara de Diputados el mando mixto? Porque aquí en esta ley, en uno de los artículos tienen escondido lo que significa el mando único, que es lo que realmente les interesa, tener el

control político, el control gubernamental para poder hacer lo que quieran y cuando quieran, incluyendo en el proceso 2018.

Se dice que nosotros queremos usar esta ley para asuntos electorales, ¿están seguros de eso?

¿Quiénes han usado a las fuerzas policiacas y a los demás elementos de seguridad para asuntos electorales? Qué acaso no ha sido el Partido Revolucionario Institucional, se nos olvida muchísimo eso.

Dice, además, que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.

¿Por fin, hay temporalidad o no la hay? Claro que no la hay.

Dice que se arregla con un artículo 5 las facultades que corresponden al tema de seguridad.

Yo pregunto:

¿En la Ley de Seguridad Nacional no se ordenan protocolos de actuación?

¿En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se ordenan protocolos de actuación?

¿Por qué son la sociedad civil las que nos dan cifras y no el Sistema Nacional de Seguridad Pública?

¿Por qué los números de secuestro nos lo tiene que dar una asociación civil, los de trata otra, los de homicidios dolosos otra? ¿por qué no el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Por algo muy simple, la rendición de cuentas es una falacia para este gobierno.

Pero, además, es verdaderamente terrible decir que no nos extrañe que las Fuerzas Armadas estén en estas tareas, se han convertido en los primeros respondientes.

¿Por qué se han convertido en los primeros respondientes? Muy simple, en dos capítulos quieren pensar que se va a reglamentar todo.

Capítulo segundo de los supuestos y procedimientos para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior, cuando se comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderlas, es decir, cuando queramos justificar la debilidad de los gobiernos estatales y municipales en lugar de preparar a los Ministerios Públicos, a las policías y a los servidores públicos.

Cuando se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional.

Y yo pregunto:

¿Cuál va a ser el pretexto de la siguiente elección?

Los gobiernos panistas que se ganaron no saben gobernar, son aquellos gobiernos a los que se les va echar la culpa y por eso va a entrar la Marina y el Ejército.

Los gobiernos perredistas tampoco, los únicos que saben gobernar son los priístas, eso es lo que dicen.

Pero les falló el cálculo, les falló muchísimo porque esta ley está llena de inconsistencias, primero, en sus conceptos.

Segundo. En sus objetivos.

Tercero. En sus fines.

No, señores, con esto no se va a arreglar en lo absoluto nada.

Yo quiero decir que por supuesto que hay la seguridad de que aquí va a ser aprobada la ley, claro que sí, el PRI tiene los votos suficientes, acompañado de otros compañeros Senadores, pero yo espero que la racionalidad de otras instituciones que puedan meter las controversias constitucionales que correspondan pueda hacer ganar que este ordenamiento no pase.

Si de veras queremos a las Fuerzas Armadas, si de veras las respetamos, no las expongamos más, no podemos tenerlas permanentemente haciendo lo que por omisión, acción, complicidad no están haciendo los gobiernos estatales y municipales.

Que no se amenace a los gobernadores diciéndoles que si no se aprueba esta ley ellos no van a poder hacer nada.

Señores, ya lo pueden hacer, está en lo que ellos quisieron meter en el artículo 73 y en la parte constitucional.

Fíjense nada más, tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que estamos con un encargado de despacho de la PGR.

Tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que tuvimos acéfalas por meses las áreas de derechos humanos en Gobernación y en PGR.

Tanto le importa al Gobierno Federal la seguridad pública que disminuyó el presupuesto para seguridad pública.

Tanto le importa al Gobierno Federal la seguridad pública que se nos retiró el 15 % del presupuesto de Iniciativa Mérida en materia de derechos humanos.

Tanto le importa a la seguridad pública al Gobierno Federal que les han dado permiso a sus gobernadores y alcaldes para delinquir y ser partes y cómplices de esta delincuencia organizada.

Han sido parte de esta delincuencia organizada Yarrington, Eugenio Hernández, Duarte, Borge, Moreira, Roberto Sandoval.

Y tanto le importa al PRI que lo que prefieren bajo este esquema es tapar esas debilidades que realmente hacer lo que mejor le corresponde a México.

Si de veras les importa, no aprueben esta ley.

Vayamos a la discusión de la ley del mando mixto, hagamos que las policías funcionen, revisemos que su presupuesto plantee y sirva para lo que tiene que ser.

Revisemos que el Programa Nacional de Seguridad Pública se cumpla, porque sí está establecido un Programa Nacional de Seguridad Pública, pero nadie lo cumple, lo que queremos es tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó.

Estamos a tiempo y el PRI está a tiempo de reflexionar lo que quiere, no por un asunto electoral que es lo que únicamente les ha importado en estos seis años, tiene que ser por un asunto básico, no nos vengan a chantajear diciéndonos que son los guerrerenses o los sinaloenses, o los tamaulipecos los que quieren que esté las Fuerzas Armadas en las calles.

No, señores, cumplan su obligación a aquellos que quisieron ser gobernadores, aquellos que quisieron ser presidentes municipales y cumpla su obligación aquel gobierno que se la pasó durante seis años aquí en esta tribuna en el sexenio pasado echándole la culpa al Gobierno Federal cuando actuaba en materia de seguridad pública.

Cumplan ustedes lo que dijeron que sabían hacer que era gobernar, pero lo triste y lastimoso de esto es que no van a poder cumplirlo porque el PRI demostró que no sabe gobernar.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.

Primero que nada se ha venido a hablar mucho aquí del falso debate, de cierta dicotomías, pareciera que ya les pasaron el script para que digan: "acusen a los que están en contra del Ejército, señálenlos de poco patriotismo".

Y no es cierto, todos aquí reconocemos al Ejército, todos aquí lo hemos visto jugándose la vida en Chiapas, atravesando ríos en inundaciones, sacando gente de pueblos que ustedes no lograron conectar en su momento.

Se ha dicho aquí que hay quienes queremos ver a un Ejército solidario y otros que quieren ve a un Ejército represor.

Y no es cierto, todos reconocemos al Ejército, todos, en algún momento, le hemos estado agradecidos por alguna de sus acciones.

Y también es cierto que el debate no es que el Ejército esté en las calles, o que el Ejército esté en los cuarteles.

El debate es que el Ejército esté siempre acompañado de la Constitución, ese es el verdadero debate.

Y fue el debate también, en 1913, con el surgimiento del Ejército constitucionalista.

Ustedes con este modelo no son parte de la zaga de ese Ejército constitucionalista, son más cercanos a Huerta, a Wilson, a todos aquellos que pusieron al Ejército en contra de la población.

Los que sacaron al Ejército a la Ciudadela, los que sacaron al Ejército a matar a Belisario Domínguez, ese es el modelo que están siguiendo.

Y, miren, si el tema y la argumentación tienen que ver con la seguridad interior, pues vayamos entonces a los clásicos, o alguien va a negarle al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Fix, alguna idea sobre lo que es la Seguridad Interior, y aquí en el diccionario jurídico mexicano está muy claro qué es.

Por eso le quisiera pedir al Presidente que ordene a la Secretaría, haga lectura de la definición de Seguridad Interior, del diccionario jurídico mexicano, y se lo presto por si no lo tienen aquí en la Mesa Directiva.

Y ojalá alguna Secretaria de la Mesa Directiva nos acompañen, ya tenemos dos Presidentes, un ex Presidente del Senado, pero no hay ni una sola Secretaria de Mesa Directiva.

Y le pediría detenga el reloj.

Está en la página 3427, más o menos.

Y le solicito nuevamente detenga el reloj para hacer la lectura conforme establece el Reglamento, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: No se preocupe, Senador Robledo, todas sus instrucciones en la Mesa Directiva serán acatadas de inmediato.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Y se lo agradezco, el respeto al Reglamento es fundamental para el desarrollo del debate parlamentario.

Seguridad internacional, seguridad nacional, seguridad jurídica, seguridad social, no existe el concepto en ese diccionario de Seguridad Interior, se lo están sacando de la manga, están llevando al Ejército sí a las calles para legalizar el fracaso porque ese es el debate, están legalizando una estrategia fracasada, están legalizando algo que ya ocurrió y que, desafortunadamente, hoy simplemente le están dando carta de naturalización.

Y, en ese sentido, yo sí quisiera hacerles un par de planteamientos: primero, aquí se está planteando.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Robledo, ¿acepta una pregunta del Senador Gil?

El Senador Zoé Robledo Aburto: Sí, Senador Gil, por favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil, por favor.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, Senador.

A ver si entendí.

Usted acaba de afirmar que en razón de que en el diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas no exista la definición de Seguridad Interior significa que lo que dice el artículo 89, fracción VI, no existe en la Constitución.

O peor aún, que lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en una tesis de jurisprudencia es también jurídica-ficción.

Le voy a decir lo que dijo la Corte: “de conformidad con el artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos, y como lo ha sostenido el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional, ya sea en su vertiente interna o externa frente a amenazas provenientes más allá de nuestras fronteras”.

Yo he consultado varias veces ese diccionario jurídico, pero la verdad jurídica está en los textos y en la jurisprudencia de la Corte.

(Aplausos)

El Senador Zoé Robledo Aburto: ¿Desea que le conteste la pregunta, supongo?

No, no es lo que quise decir, cuando quiera se lo explico.

Entonces es común justamente el error, el error justamente proviene de ahí, de la base jurídica con la cual quisieron sustituir la ilegitimidad de un gobierno con la fuerza.

Porque volteemos a ver de dónde venimos, ¿por qué estamos en esta discusión?

Porque cuando llegó un régimen ilegítimo entonces sustituyeron la legitimidad vistiendo al Presidente de militar y entonces queriendo sustituir legitimidad con fuerza.

Lo que no ganaron en las urnas sustituirlo con tanquetas en las calles, y pensaron que eso le iba a gustar a la población.

Ese error, legalizar el fracaso tiene que ver no con lo que estamos diciendo nosotros, señores Senadores, tiene que ver con lo que les están diciendo desde el extranjero, lo que les están diciendo en las calles, y lo que les están diciendo a quienes ustedes supuestamente dicen representar.

Hablan de modernidad, ¿por qué no vamos entonces a ver qué ocurre en los países de la OCDE que tanto les gusta citar?

Ahí, de los 35 países, sólo siete tienen un mando militar, que tiene carrera militar, un mando en la defensa que tiene carrera militar. Esta tribuna la utilizó Michelle Bachelet, que fue Ministra de la Defensa en Chile.

En Alemania, hace rato citaron el caso alemán, es una mujer, una médica la que hoy encabeza el Ministerio de la Defensa.

¿Esa es la modernidad de la que hablan Meade, su candidato?

Porque yo ayer no lo escuché en San Juan Chamula decirle a los hermanos chamulas, que los problemas de seguridad de Chamula, por ejemplo, el hecho de que hayan matado al presidente municipal en la plaza pública los va a resolver el Ejército, ¿por qué no se los dijo ahí a los de Chamula?

Quizá porque ahí seguiría en Chamula, porque ahí lo hubieran agarrado y le han dicho: “de ninguna manera vamos a permitirlo”, porque hay mucha más dignidad en ese pueblo que en gran parte de este Senado.

Entonces vayamos al fondo de las cosas, esto lo único que es, de lo único que forma parte es de un diseño ilegal, inconstitucional de la Presidencia autoritaria, eso es lo que quieren dejar.

Saben que van a perder la elección, entonces ocupemos los espacios de poder.

Saben que la gente los quiere sacar, entonces están estableciendo la forma para quedarse.

La Presidencia autoritaria que ustedes quieren instaurar tiene que ver con el Fiscal carnal, tiene que ver con el Fiscal militante, tiene que ver con el hecho de darle salida de impunidad a todos los crímenes de corrupción que se han cometido.

De eso se trata esta discusión, aunque perdamos la elección no vamos a soltar el gobierno, ni el poder.

Pero, ¿qué creen? No se los van a dejar, y no nosotros, la gente que ha dejado de tener miedo. Ustedes están apostándole a la pulsión de la seguridad y la autoridad, y quieren decirle a la gente, no voten por este lado, nos va a llevar al abismo, peor abismo del que ya nos han metido ustedes, y aún peor, en qué cabeza cabe de un demócrata que a punto en unos meses de que haya un cambio de gobierno se empiece a discutir esto, se cambie esto.

No solamente va a hablar de las arbitrariedades, de la falta de escuchas públicas. Lo que ustedes están haciendo es simplemente instaurando esa presidencia autoritaria, que no escucha a la oposición, que no escucha a los especialistas, que no escucha a nadie que le venga a decir, en su enorme soberbia que están equivocados.

Nosotros se los podemos decir en este proceso legislativo, aunque se aburran, aunque se cansen, pero los efectos de lo que están haciendo le van a costar muy caro al país, y de verdad, fraternalmente se los decimos, no lo hagan, hay que hacer algo, sí; hay que hacer esto, no.

Queda más claro cuando escucha uno emocionado a los compañeros de Acción Nacional, que en ese voto de conciencia van a seguir lo que creen que es correcto, y no lo que aquí se ha ido construyendo.

El propio PRI debe recordar, en su historia, que en 1936 crearon a su sector obrero, la Confederación de Trabajadores de México.

Que en 1938 crearon al subsector campesino, la Confederación Nacional Campesina.

Y, en el 43, a su sector popular, la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

Y que en los 40 se deshicieron del sector militar.

Hoy, no son los militares los que nos están pidiendo esto. Hoy, pareciera que simplemente se ha instaurado un nuevo sector, el CAN, la Confederación de Acción Nacional, porque con ellos lo van a sacar.

Y yo respeto a quienes vienen a debatir, pero el CAN que vino a insultar, que vino a hablar de ignorancia, vino y se fue.

Hoy ustedes están a punto de hacerlo, y efectivamente eso no es el PAN.

Hay un PAN patriota que está siguiendo el mandato de su conciencia, y hay otro, que simplemente está obedeciendo la indicación de sus intereses, de su candidato, de la verdad que está ocurriendo aquí, que ustedes están avalando la presidencia autoritaria que pretende permanecer en el poder.

La gente ha perdido el miedo, el miedo se debe de ubicar en el lugar correcto, en ustedes, en sus corazones por el terrible agravio que le están haciendo al Ejército, a la nación y a todos y cada uno de sus representados.

Si alguien de aquí me comprueba que hizo campaña diciendo que iba a militarizar al país o que iba a aprobar la Ley de Seguridad Interior, si alguien se atreve a salir en este momento a hablar con la gente que está afuera, entonces, recobrarán la dignidad y el respeto que la votación que están a punto de someter, los habrá hecho perder quizá para siempre, y yo lo lamento, porque pasamos mucho tiempo juntos, pero ésta superó por completo cualquier descabellado sueño de un autoritarismo que pretende volver, pero que afortunadamente, en poco tiempo se va.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias Senador.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega, no la veo por aquí.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Gracia.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: En lo único que podemos coincidir es que estamos en un falso debate, porque hoy no estamos atacando el problema de fondo. Hoy estamos reconociendo una tragedia, aunque muy pocos en esta tribuna lo dicen, que es, un Estado fallido, y es por donde debíamos de arrancar, no en un debate respecto si el Ejército es bueno, o es malo.

El Ejército no pidió entrar a esta lucha contra el crimen organizado, al Ejército lo forzaron a una lucha que no da resultados, por qué, porque no hay una estrategia, porque no hay indicadores, porque no hay una verdadera conjunción de esfuerzos, de qué sirve meter a un criminal a la cárcel si nuestro sistema de impartición y procuración de justicia no da resultados y en poco tiempo ese criminal vuelve a hacer de las suyas en total libertad e impunidad.

Es por eso que hoy estamos ante un documento, ante un proyecto legislativo que no tiene sentido, no tiene sentido de forma aislada decirle al Ejército, te necesitamos de forma permanente en las calles, porque las autoridades civiles, ejecutivo, legislativo y judicial no tenemos más que reconocer nuestro fracaso.

Gran parte de la transición democrática de este país, de lo poco o bueno que hizo el PRI en sus más de 70s fue lograr hacer civiles a nuestras autoridades.

Hoy parece que hasta eso poco bueno que hicieron quieren darle reversa, por qué, porque están diciendo que las autoridades civiles no servimos para nada.

Yo hago un llamado a la sensatez, si alguno de los compañeros Senadores quieren votar a favor, me dicen, de un país en el mundo en que sacar al Ejército e forma permanente a la calle ha redituado a la ciudadanía, yo con mucho gusto los acompaño a votar a favor.

Pero como sé que no podrán, porque no hay ningún ejemplo de que esto funcione, les pido, de la forma más vehemente que por favor reflexionen y voten en contra.

Si México es ejemplar por tomar ejemplos exitosos de otros países y hacerlos fracasar, gracias PRI, en este caso donde no haya un solo ejemplo de éxito, por favor, a quien quieren engañar.

Por favor no metan a México en una vorágine que en cualquier país del mundo que lo ha intentado ha fracasado, y que va a perjudicar a los ciudadanos al Ejército y a México.

Aquí no hay buenos ni hay malos, aquí hay una decisión errónea que nosotros como Senado estamos a punto de tomar.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Estamos a punto de votar en lo general esta minuta, este proyecto, y tenemos que reflexionar como aquí se ha pedido por varios Senadores de las diferentes fuerzas, que no se está presentando como se dice, una y otra vez, un marco jurídico para la seguridad del interior, como le llaman, sino está por votar un instrumento inconstitucional. Todo lo que se ha dicho y se ha manejado, muchas veces se toca el tema de la inconstitucionalidad, pero eso es lo que vamos a votar, un instrumento inconstitucional.

Viola el artículo 73 constitucional, que no confiere competencia al Congreso para incluir una ley de seguridad, digan lo que digan, no existen facultades de este Congreso para expedir una ley de seguridad interna.

Se violan los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución. Nuestra Constitución indica que la soberanía reside en el pueblo, que el Estado mexicano es una República representativa democrática federal y laica.

No puede, por tanto, establecerse un régimen militar de excepción e indefinido en una ley secundaria.

El militarismo es coincidente con el autoritarismo, aquí se ha dicho, pero no con la democracia, ni con la República.

Se viola el artículo 29 de la Constitución.

Las condiciones jurídicas y políticas de excepción sólo pueden darse a través del procedimiento de la suspensión de garantías, no a través de procedimientos de suspensión, si no establece un régimen de excepción transitorio permanente para emplear las Fuerzas Armadas y preservar el orden o enfrentar riesgos y amenazas internos bajo procedimientos legales que no se fundamentan en el artículo 29 constitucional, que es el propósito del dictamen.

Se viola el artículo 119 de la Constitución, primer párrafo, la intervención federal que contempla ese precepto es a petición de las legislaturas o por el ejecutivo de cada entidad.

Jamás, la intervención federal del artículo 119 constitucional, le da facultades al Titular del Poder Ejecutivo para iniciar el procedimiento que prevé esa norma.

Se viola el artículo 124 de la Constitución. Es evidente que la Federación no tiene competencias para expedir leyes en materia de seguridad interior, por lo que atendiendo a las competencias de los estados, estos pondrían en ejercicio de esa supuesta competencia residual, ocuparse de la seguridad interior en los términos y condiciones que establezca, desde luego sin militarizar a las entidades federativas.

Se viola el artículo 129 de la Constitución. La norma que indica que en tiempos de paz, el lugar de las Fuerzas Armadas son los cuarteles, por lo que las Fuerzas Armadas no pueden ocuparse de seguridad interior.

Aquí se dice que pueden estar cuidado y haciendo, no, no pueden ocuparse de seguridad interior, su espacio es en los cuarteles, fortalezas militares, y su función la disciplina estrictamente militar.

Se viola el artículo 21 de la Constitución, aunque el dictamen señale que las acciones de seguridad interior no tendrán la condición de seguridad pública, lo cierto es que la actuación de las Fuerzas Armadas no tendrá otro propósito que ese.

El artículo 21 constitucional, con claridad dice que la seguridad pública es una competencia de carácter civil.

Se violan los artículos 1, 10, 11, 14, 16 y 17 de la Constitución. El dictamen propone vulnerar los derechos humanos a manos de autoridades militares, el bloque completo de constitucionalidad y convencionalidad, los derechos de reunión, manifestación y tránsito que se verán restringidos permanentemente con las declaratorias de seguridad interior, así como los derechos vinculados al debido proceso que prohíben que las personas sean molestadas en sus propiedades, posiciones si no es a través de mandamientos de la autoridad competente.

Se viola el artículo 89, fracción VI de la Constitución. Una corriente interpretación al artículo 89, fracción VI que dota al Ejecutivo de competencia para emplear las Fuerzas Armadas para la Seguridad Interior, sólo es compatible con lo dispuesto en el artículo 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.
No se puede interpretar de otra forma el artículo 89, fracción VI, porque ello equivaldría a vulnerar el principio de la división de poderes, la soberanía de los estados y el principio de municipio libre.

Unas Fuerzas Armadas en el territorio nacional que obvian y menos precian los controles constitucionales de los Poderes Legislativo y Judicial y la soberanía estatal y municipal.

Solamente en el marco de los artículos 29 y 119 sería permisible el empleo de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior.

Se violan los artículos 49, 115, 116, 124; se viola el principio de certeza jurídica, se reprimirán las manifestaciones, violación a los artículos 6 y 9 de la Constitución.

El artículo 8 del dictamen establece: que las manifestaciones no se considerarán amenazas a la seguridad interior si se realizan conforme a la Constitución.

El problema jurídico consistirá en que la autoridad competente, el Ejecutivo Federal o el Secretario de Gobernación definirán qué es lo que se entiende por manifestaciones conforme a la Constitución.

Se viola el artículo 6 de la Constitución que establece el principio de máxima publicidad.

Se violan los artículos 6 y 16, párrafo segundo de la Constitución, porque según el dictamen, artículo 31, el derecho fundamental a la protección de los datos personales queda desvanecido.

Además, que con motivo de la seguridad interior, se podrán infringir la confidencialidad del padrón electoral, el secreto fiscal bancario o ministerial.

Se contravienen los tratados y las recomendaciones internacionales formuladas por los organismos internacionales sobre derechos humanos, que ha señalado los riesgos en la militarización para los derechos humanos.

El dictamen sirve para perpetuar un modelo, que en 12 años de aplicación de facto, ha demostrado ser inefectivo para reducir la violencia y que por el contrario ha incrementado la inseguridad, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos y los desplazados internos.

En síntesis, un dictamen como el que discutimos sólo puede concebirse desde una concepción dictatorial del poder, constituye un golpe de Estado, rompe los principios de la división de poderes y del federalismo.

En lugar de buscar por todos los medios la paz, de buscar realmente la paz, decreta el exterminio la única solución, el exterminio y la guerra perpetua, la muerte.

Es una falacia decir: Que esto empezó y está presentado y defendido por el Poder Judicial. Eso es falso.

Esto es lo que estamos ahorita presentando para su votación, una, un proyecto que no solamente viola todos estos artículos constitucionales, es un proyecto anticonstitucional, eso es lo que se está presentando aquí, no un marco para el Ejército, ni un marco para buscar la paz, un decreto absolutamente inconstitucional.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente.

Buenos noches, Senadoras y Senadores.

La Ley de Seguridad Interior es un tema que nos compete a todos por las profundas repercusiones que esta iniciativa tiene en la vida de las personas.

Esta ley pretende darle un marco normativo al Ejército y Marina para efectuar labores de seguridad que corresponde realizar a las autoridades civiles.

Es una realidad que nuestras policías están rebasadas en el tema del combate al crimen organizado, ya sea por corrupción, falta de entrenamiento apropiado o equipamiento insuficiente.

Por tanto, el apoyo de las fuerzas castrenses ha sido un parche en un enorme problema que no se ha atendido de fondo, sino más bien un remedio irresponsable creado en 2007, y cuyo costo principal lo pagó la ciudadanía con mucho sufrimiento, inseguridad y violencia.

Lo que votaron los Diputados y que hoy compete al Senado de la República no es una solución, ya que agrava el problema y además es un gigante retroceso en temas de transparencia, derechos humanos y rendición de cuentas.

Hasta el momento se contabilizan once organizaciones internacionales que trabajan en pro de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entre otras organizaciones de la sociedad civil que piden no aprobar este proyecto de ley, porque concuerdan en que se perpetuaría la violencia y se militarizaría al país.

En el caso de la ONU presentan una lista de 14 puntos que ha sido a mayor o menor medida lo que han replicado las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones internacionales y distintos académicos e investigadores del centro de investigaciones y docencias económicas CIDE, que incluyen ambigüedad de conceptos, violación al principio de necesidad, papel indebido de las Fuerzas Armadas, sometimiento de la autoridad civil al mando militar, ausencia de controles, ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones, indebida regulación del uso de la fuerza, indebida protección y garantía de los derechos humanos, afectaciones a la protesta social, ausencia de trasparencia, lesión a la autonomía, inconstitucionalidad e convencionalidad.

De tal manera que la progresividad de los derechos humanos y las reformas del 2011 de las mismas materias se ven totalmente violentadas, además, al omitir las observaciones de la CNDH, de la ONU y de los tratados internacionales, violamos los principios, incluso, del derecho internacional.

Es sumamente importante advertir que el entrenamiento de las fuerzas castrenses consiste preponderantemente en eliminar al enemigo, y no en contener al ciudadano, en las leyes internas del Ejército los entrenan para acabar con el enemigo, no para contenerlo, para acabar, o sea, la orden es disparar a la cabeza o al pecho.

Lo que sin duda será un problema en nuestro país y por evidentes razones desencadenaría una ola de violencia aún más fuerte de la que vivimos.

Confrontar al pueblo del orden castrense en contra del pueblo civil, costará numerosas vidas, son aproximadamente 270 mil miembros del Ejército, son aproximadamente miembros activos del Ejército mexicano y la gran mayoría de ellos no está de acuerdo con esta ley, no está, nada más que como están sometidos a mandos superiores, pues no pueden manifestarse, no lo pueden decir, pero la mayoría de los miembros del Ejército obviamente están en contra, no la quieren.

Cabe destacar que los cambios que se le realizaron a esta ley son insuficientes y no se abordan las críticas que tan justamente se le han hecho por distintos actores.

En lugar de eso, se hace un acto de simulación que busca darle una actuación a las Fuerzas Armadas para evitar que los estados hagan su trabajo en el apropiado entrenamiento y equipamiento de policías, y así poder desentenderse para que el ejército, Fuerza Aérea y Marina, hagan el trabajo que les corresponde a las entidades federativas, así que con la pena, decirle a los gobernadores que tienen que hacer su trabajo, no pueden dárselo al Ejército, ellos deben de realizar su trabajo.

Lo cual es un trato que no merece nuestras valientes fuerzas castrenses, no lo merecen.

Después de casi 12 años vivir en un país desolado por las condiciones de inseguridad, por los muertos y los desparecidos, debemos de buscar nuevas formas de reducir los niveles de violencia.

A como dé lugar la paz, como acaba de decir el Senador Bartlett, más armas en la calle no es la solución, debemos buscar nuevas propuestas y explorar aquellas que aporten y propicien la paz entre los mexicanos, por todo lo anteriormente expuesto, mi voto será, desde luego en contra.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Les informo que la Senadora Sonia Rocha Acosta se apuntó para posicionar a favor y ha decidido enviar su participación al Diario de los Debates, se lo agradecemos.

(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Efectivamente Zapata vive, la lucha sigue.

Con su venia, compañero Presidente.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

En la medida en que los representantes del pueblo están en todo, menos metidos en la discusión seria de un asunto que puede generar una convulsión nacional, le hablo a mi pueblo y le digo de manera respetuosa, mexicanas y mexicanos de todas las condiciones sociales, ante este ataque artero de los conservadores, unidos derrotemos de una vez por todas al neoliberalismo rapaz y autoritario que ha empobrecido a nuestro pueblo y lo ha llevado al fondo del sufrimiento humano y luchemos por instaurar en nuestra patria el Estado social, democrático y de derecho que estoy convencido, que estoy convencido, traerá la felicidad a nuestro pueblo.

Evidentemente aquí no se acepta, pero estamos dando un debate ideológico, por un lado, porque así se definen las categorías políticas, por un lado los conservadores, los que insisten en preservar sus privilegios a costa del dolor de nuestro pueblo y por otro, los liberales, los progresistas, los que orgullosamente impulsamos una corriente de izquierda y que no estamos dispuestos a permitir que nuestro pueblo se convierta en un pueblo de parias, y seguiremos luchando para que esa condición se revierta y nuestro pueblo recupere la alegría y alcance la felicidad a la que tiene derecho.

Todos los que están aquí y votaron a favor de reformas estructurales, obviaron lo elemental, la lógica natural nos dice que antes de hacer una ley como la que se está pretendiendo aprobar en unos momentos, se tiene que hacer un diagnóstico y el diagnóstico no lo han venido a decir, desde la Organización de las Naciones Unidas, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde Amnistía Internacional, desde todos los organismos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, que en todos los países de la tierra, donde se ha utilizado el Ejército para que haga tareas de seguridad, este modelo ha fracasado.

Diez años de tortura para nuestro pueblo, diez años, por qué fracasa la reforma educativa, se los dijimos, hay que hacer una diagnóstico para ver cuál es la condición particular que tiene el Sistema Educativo Nacional y después de entender el diagnóstico, pues ya tenemos que recetar la medicina y la medicina nunca fue la adecuada porque se hizo una reforma laboral y se los dijimos, van a confrontar al país, y el autor intelectual afortunadamente ya se fue para fortuna de la educación nacional, pero ahí quedaron las secuelas de una ley que ustedes son responsables y que nunca mejoró la calidad de la educación en México.

¿Porque fracasó la reforma energética? Exactamente por lo mismo, porque obvian lo elemental, quieren meter medidas y dar medicinas sin saber qué tiene el enfermo, estamos en una situación igual, quieren recetarle al pueblo una ley que aunque ustedes digan que no se va a militarizar, es la militarización del país porque le están dando facultades de dirección al Ejército, porque están generando una ley ambigua que no define con claridad los conceptos y quedan a la interpretación y el arbitrio de quienes lo van a aplicar, porque México es una pías donde la violencia se ha desatado.

Compañeras, compañeros, lo seguiremos sosteniendo, lo seguiremos sosteniendo porque ustedes no se atreven a decirlo, qué país no va a generar violencia, cuando durante un sexenio se han muerto más de 50 mil personas por el problema del hambre, el hambre, el hambre genera felicidad en el pueblo o genera irritación y desesperación social.

No es cierto que las protestas las van a respetar, mienten, mienten, porque cuando las consideran un riesgo las van a reprimir y saben quiénes son los que se manifiestan, los que no encuentran alivio a sus problemas con las respuestas que da un gobierno que no responde a los intereses del pueblo, esos son los que nos manifestamos y la manifestación de los hambrientos no tarda en llegar y van a reprimir al pueblo y a quien van a utilizar para reprimir al pueblo, al que su código le obliga a no cuestionar una orden, sino a obedecerla.

A nuestro noble Ejército Mexicano, como diría mi compañera de Acción Nacional, la compañera Adriana, mentira que respetan al Ejército, mentira, tiene razón, compañera, mienten, porque ustedes son responsables de que nuestro pueblo no vea con buenos ojos, porque el Ejército lo reprime, hay que sancionar a los actores intelectuales, los que mandan que se reprima.

¿Quién es el responsable de la matanza del 68? ¿Nuestro Ejército o Díaz Ordaz?

¿Quién es responsable y a quien hay que sancionar?

¿A Peña Nieto o a los que mataron a los de Tlatlaya?

¿A quién hay que sancionar?

A los que en Tanhuato hicieron ejecuciones extrajudiciales o a quien ordenó esa matanza.

Compañeros, es elemental el razonamiento, nunca lo van a aceptar porque quieren seguir conservando sus privilegios.

Por eso, compañeras, compañeros, este país nunca se va a componer mientras tenga la clase política que tiene.

Y ya se horrorizaron, y lo decíamos en las comisiones, ya se espantaron de lo que han creado, el pueblo efectivamente no tiene miedo porque tiene líderes valientes que vamos a empujar con todo el cambio, aunque les duela y aunque no les guste con todo vamos a empujar el cambio, y vamos a ver quién gana si la voluntad del pueblo o los millones que van a regar ustedes en la elección.

Esta ley por supuesto que tiene su origen en esa desesperación, por eso les urge que hoy se vote, cinco años para plantearla, cinco años para corregirla.

¡Ah! Pero hay que plantearla ahorita porque tenemos que defender nuestros privilegios utilizando a la institución más noble que tiene este país, que es nuestro Ejército Mexicano.

¿Quiénes son los responsables, compañeros?

¿Quiénes son los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 22 de los 42 civiles muertos en un enfrentamiento con miembros de un grupo criminal en Tanhuato, Michoacán, quién ordenó eso?

¿Quién ordenó el asesinato de 22 civiles por soldados en Tlatlaya, Estado de México, quién lo ordenó?

¿Quién ordenó la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quién la ordenó?

Peña Nieto, Peña Nieto.

Ahora resulta.

Quién ordenó el caso en que cinco personas resultaron muertas y dos lesionadas cuando militares abrieron fuego de una camioneta…

PRESIDENCIA DE LA SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Concluya, por favor, señor Senador.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: De una camioneta en un retén del municipio de Sinaloa, de Leyva, el 1 de junio del 2017.

¿Quién ordenó el asesinato de dos estudiantes de postgrado del Tecnológico de Monterrey el 19 de mayo del 2010?

¿Quién ordenó?

Ahí en Los Pinos salen las órdenes.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Concluya, por favor, señor Senador.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: ¿Qué nos recomiendan lo que ustedes se niegan a aceptar, compañeras, compañeros, qué nos recomienda, simplemente qué nos recomiendan?

Que el combate a la delincuencia y la garantía de la seguridad interior se dé y nosotros por eso vamos a votar en contra, será sin violación a la Constitución.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Concluya, Senador, por favor.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Presidenta, con todo respeto, aquí todo mundo ha venido a abusar del tiempo, aquí se han echado 30 minutos.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Con 40 segundos, Senador. Concluya, por favor.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: ¿Qué nos recomiendan y lo aceptamos? Seguridad interior y combate a la delincuencia sin violación a la Constitución.

Los que son muy doctos en derecho que le expliquen al pueblo que no se viola la Constitución, concretamente el artículo 21, párrafo diez, renglón uno, que dice textualmente: "que la seguridad pública será responsabilidad de civiles", vengan a explicarle al pueblo eso, vengan a explicarle por qué dicen que no se viola el artículo 129 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en donde el Ejército tiene tareas específicas en tiempos de paz.

Combate a la delincuencia, a la seguridad interior, sí, con el fortalecimiento de las policías, con respeto irrestricto a los derechos humanos, con respeto a las garantías de los mexicanos y las mexicanas, con mecanismos sólidos de control que garanticen el respeto a los derechos humanos, con fortalecimiento de las autoridades civiles, limitando el papel del Ejército al auxilio y asistencia a las autoridades civiles.

No aceptamos que se denigre a nuestro Ejército al ordenar hacer tareas que no les corresponden y que la Constitución no les faculta.

¡Viva el Ejército mexicano!

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

Adelante, senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Compañeros, muy buenas noches.

Creo que se puede ser opositor a esta ley y al mismo tiempo declararse admirador, agradecido, condoliente con las Fuerzas Armadas de este país.

Creo que sin gritos, sin insultos, sin fobias necesariamente en contra del régimen, uno se puede decir contrario a esta ley.

El precepto constitucional, que es la ley máxima, el precepto máximo en este país, establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en la contención de la delincuencia ha tenido, tiene y tendrá siempre un carácter excepcional. Por esto, dentro de la Constitución no hay espacio jurídico, no hay espacio ético para una Ley de Seguridad Interior.

En todo caso, esta ley legalizará lo inconstitucional, esta ley dará certidumbre o tratará de acolchonar la caída de un régimen que se siente amenazado y ante un proceso electoral que se asoma obviamente buscará, como

las dictaduras o como los dictadores, el control del gobierno después de la muerte, aquí lo que se busca es acolchonar esa caída.

Por si esto no fuera poco, porque está ampliamente discutido, inclusive organismos internacionales de renombre, los más importantes, ya han señalado cuáles son los vicios de esta ley, apelaré al sentido común de un gran escritor mexicano, Renato Leduc, que decía: “la sabia virtud de conocer el tiempo”.

No es materia de un gobierno que ha fracasado francamente en la materia de seguridad interior, de seguridad pública, de seguridad nacional, un gobierno al que se le ha dado un cheque al portador en un principio para reacomodar las instituciones, tal como lo tenía planeado.

Y vemos, y yo no diría que solamente es un fracaso del Presidente, y no solamente es un fracaso del Secretario de Gobernación, porque el fracaso en la seguridad es una derrota social.

Yo creo que nadie podría, en su sano juicio, alegarse, solazarse de la derrota de un Presidente o de un Secretario, o de un Ministro porque no podría atestiguar muertos, creo que todos de una manera directa hemos perdido seres queridos, víctima de la delincuencia.

En lo personal, en catorce meses he perdido cuatro amigos, el último de ellos asesinado en La Paz, Silvestre de la Toba, el Ombudsman de Baja California Sur, junto con su familia.

Triste país donde nos solacemos de esa derrota, cuando la derrota es de todos.

No es tiempo, ni para nosotros como legisladores, ni como para el régimen, estar analizando estas modificaciones, esta es materia, seguramente, de los funcionarios electos que serán consecuencia del próximo proceso electoral.

No le pongo nombre, ni apellido, ni apodo al próximo Presidente, el que sea, de la corriente política triunfante y, por supuesto, de los Senadores y los Diputados que, como consecuencia de ese proceso, se han instalados en las Cámaras.

También quisiera hacer una apreciación porque aquí se ha usado, a manera, digamos, de burla, una propuesta que hizo recientemente el compañero Andrés Manuel López Obrador, de quien, ustedes saben, no soy defensor, pero he de reconocer los puntos importantes que aporta a la agenda nacional.

Él habló de una amnistía, no de un indulto, eso tiene que ser precisado.

El siguiente punto es que me extraña que cerebros muy brillantes, como los que han disertado aquí, pueden ser capaces de modificar la praxis, la doctrina, la doctrina y la praxis y no puedan entender de lo que es la justicia transicional.

Porque la propuesta de Andrés Manuel es impecable, tan así que solamente la han criticado, por cierto rabiosamente, las corrientes políticas y los personajes que se encuentran involucrados en el proceso electoral, pero no los órganos internacionales del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, que son los mismos que están señalando la incongruencia de esta ley.

Andrés Manuel, lo primero que señala es que va a poner a consideración, ese es el primer punto de la amnistía, de las víctimas si procede o no la amnistía, tal como en su tiempo lo hizo Nelson Mandela con la Comisión de la Verdad.

Los cuatro ejes de esta amnistía están perfectamente visibles y son: la verdad, la justicia, la reparación y algo que los anteriores gobiernos, que con la otra apuesta, en el cuello de los ciudadanos no observaron que es la medida de la no repetición.

Porque si los gobiernos anteriores, no cuento uno, cuento tres o cuatro, en lugar de apretar las leyes, en lugar de ampliar los campos de corrupción hubiesen puesto las instituciones al servicio de los ciudadanos, hubiesen

tomado acciones colaterales para atender el problema social y económico que lleva al pueblo a estas necesidades, no estaríamos ahora tratando de legalizar lo ilegal.

De manera que sí quiero que quede muy claro porque se ha usado aquí como una especie de burla, y yo creo que a un hombre que fija la agenda nacional con la virilidad, con la experiencia y la solvencia que este personaje lo hace, no merece ese tratamiento.

Es la cuenta, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

LA Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros Senadores:

Quiero dar inicio reiterando la postura de mi grupo parlamentario, PT-Morena, en cuanto al respeto que tenemos hacia la labor de nuestras Fuerzas Armadas, quienes se encuentran en una labor permanente de entrenamiento, para que si es el caso defiendan a nuestros ciudadanos frente a una emergencia o un desastre.

En marzo del año pasado, el General Cienfuegos, en la ciudad de Torreón, declaró “que el Ejército debe salir de las calles, fue un error entrar en esa guerra”.

Sin embargo, extrañamente ha cambiado de opinión y hoy sostiene que el Ejército debe de seguir en las calles.

¿Qué le habrá hecho cambiar su postura?

Frente la justificación de supuestamente garantizar nuestra seguridad, el gobierno erróneamente deja en las calles haciendo labores de fuerza pública.

Nosotros queremos paz, no más armas en las calles, no queremos que se repriman las protestas sociales y, sobre todo, que se dé los abusos de poder.

Recuerden que en 2014 nos dijeron que bajaría la luz, el gas, el precio del combustible, y todo eso fue mentira, como lo será este proyecto de ley que nos llevará a una dictadura.

Nuevamente tenemos la razón y nos las dan también la ONU, la Amnistía Internacional, miles de voces de defensores de derechos humanos, académicos, el Rector de la UNAM, 25 presidencias de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos que exigen frenar este tema, pues lo califican como altamente preocupante para el resto de los derechos, para el respeto de los derechos humanos.

¿Dónde queda nuestro Estado de derecho?, ¿quién va a ser responsable de la represión, de las muertes, de la corrupción que esto pueda llegar a afectar en los ciudadanos?

La violencia no distingue, sólo castiga.

Pronto dejaremos el cargo de Senadores y estaremos en nuestros hogares viendo que lo que aquí se aprobó fue un grave error que puede afectar el día de mañana a cualquiera de nuestros familiares. Sin duda, la llamada guerra contra el narcotráfico ha roto muchos de nuestros esquemas institucionales; sin embargo, tener al Ejército en las calles no resuelve nada, al contrario, se ha comprobado que esto sólo genera

más violencia y violaciones a los derechos humanos, además de potencializar la impunidad y la corrupción por la unión que llega a construirse entre el gobierno y el narcotráfico.

La ley que se propone formalizar logrará este binomio y como consecuencia veremos graves retrocesos en materia de derechos humanos.

La Sedena ha señalado que durante 2016 llevó a cabo 54 operativos diarios con más de 52 mil elementos desplegados en nuestro país.

Si con esta fuerza no hemos podido reducir la violencia en una década, difícilmente lo haremos con una ley que la formaliza.

Este no es el camino para tener paz, necesitamos salarios justos, servicios de salud y garantizar que nuestros jóvenes tengan las oportunidades que tanto buscan para su realización, así como para cumplir con muchas demandas sociales que hoy estamos en deuda todos con los mexicanos.

Claro ejemplo son países como Reino Unido, Islandia, Noruega y Nueva Zelanda que sin tener cuerpos policíacos u oficiales que patrullan desarmados han podido alcanzar altos niveles de seguridad pública y tranquilidad entre su población, porque el gasto en seguridad lo orientan a servicios que garantizan las mejores condiciones de vida.

Qué cómo es para los gobernadores que vengan al Senado a decir, que esta es la solución para sus problemas de inseguridad, y desde luego lavarse las manos de su responsabilidad.

No me imagino, por ejemplo cuando haya un problema en ejido alejado y tengamos que estar llamando y esperando la actuación de la fuerza federal para poder resolver los problemas.

Sin decirlo, se quiere llevar a nuestro país a un estado de control permanente de hostigamiento y de represión. Cuántas mentiras hemos escuchado aquí, recuerdan que también dijeron que la reforma hacendaria traería beneficios, y resultó que hoy las siete empresas más poderosas del país no pagan impuestos, mientras que a los pequeños empresarios se les ponen trabas para poder trabajar, así es como están destruyendo a nuestro país, llenándolo de impunidad, corrupción y violencia.

Ahora sí la Ley de Herodes se quedó corta con este gobierno, en donde no se respeta nada, y tampoco se ve ni se escucha a nuestra sociedad, ejemplo de esto lo vemos aquí, tenemos Senadores sometidos por un jerarca que los maneja de acuerdo a sus intereses, no quiero pensar que dirían a sus hijos sobre su papel en la historia y, sobre todo, qué país les vamos a dejar después de haber sido servidores públicos.

En la propuesta a discusión no hay contrapesos, pues nulifica la participación del Congreso en el control de las fuerzas federales, en el combate de las llamadas amenazas a la seguridad interior.

Por otra parte, esta propuesta que se pretende aprobar, no define los criterios para que el ejército regrese a sus cuarteles, y legaliza su papel como protagonista en la lucha contra el crimen organizado.

Sin una policía capacitada que reemplace a los soldados el Estado y en consecuencia la sociedad en su conjunto podemos llegar a ser rehenes de las disposiciones castrenses.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos han señalado su preocupación en cuanto al poder que otorga esta minuta a las Fuerzas Armadas.

Es un riesgo real que la autoridad civil quede subordinada al Ejército, situación que solo mermaría su relación con la sociedad, pues dicho sea de paso desafortunadamente los últimos años nuestras Fuerzas Armadas han sido fuertemente cuestionadas por presuntas violaciones en materia de derechos humanos.

Esa situación definitivamente y, sobre todo, difícilmente cambiar con una ley autoritaria como la que se pretende aprobar, por ello les manifiesto mi voto en contra de una propuesta autoritaria, hecha a modo para consumar los fines e intereses discrecionales del Ejecutivo que además da pauta a la represión de

movimientos sociales, políticos y electorales por parte del Ejército afectando el derecho a la protesta social y libertad de expresión.

Autoriza la generación un aparato de inteligencia militar que obliga a todas las autoridades a brindar información sin restricción, inhibe la rendición de cuenta, reduce los incentivos para profesionalizar y capacitar a las policías que son los verdaderos encargados de la seguridad pública.

Hoy el derecho internacional considera que la militarización de la seguridad es propia de un Estado autoritario que busca mantener el control de sus ciudadanos a través de la fuerza.

Por ello, también la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas nos dirigió una carta donde expone 14 problemáticas que se presentarán, de aprobarse este ordenamiento, entre los que destaca la indebida regulación del uso de la fuerza, la nula protección y garantía de los derechos humanos, afectaciones a la protesta social, ausencia de transparencia, lesionando la autonomía y carece de explicitud que los principios básicos, entre otros.

Compañeras y compañeros Senadores, les exhorto a que escuchemos todas las voces que se están manifestando en contra de esta minuta, y transitemos hacia medidas que nos fortalezcan en el plano institucional. Trabajemos en materia de prevención del delito, en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, pero sobre todo reconozcamos que la seguridad es un problema estructural que para poder enfrentarlo de raíz debemos generar las condiciones para ser productiva a nuestra población, dando trabajo, con buenos salarios y facilitando el acceso y permanencia de nuestros jóvenes en las escuelas.

No seamos omisos a las recomendaciones de instituciones de gran experiencia han manifestado sobre el tema, sugiriendo replantear esta propuesta.

Exijamos una política civil de caridad a las autoridades de los tres niveles de gobierno y rechacemos una ley que pretende teñir de rojo a nuestro país y traernos más violencia de la que supuestamente pretenden erradicar.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

La Presidenta Graciela Ortiz González: Gracias Senadora.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega.

La Senadora Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidenta.

Señoras y señores Senadores vengo a razonar mi voto en contra del dictamen por el cual se expide la Ley de Seguridad Interior.

Quiero comenzar, al igual que muchos de mis compañeros reconociendo el importante papel que ha desempeñado las Fuerzas Armadas en nuestro país, derivado de la crítica situación que México ha enfrentado en materia de seguridad y la creciente escalada de violencia en las últimas décadas.

Dar certeza en materia de seguridad interior a la actuación de las Fuerzas Armadas en esta situación crítica es importante.

Pero es más urgente encontrar soluciones de fondo que resuelvan el problema y la crítica situación del actual diseño del sistema de seguridad pública.

Es fundamental que abonemos a la construcción de un diseño de estrategias orientadas a contrarrestar las debilidades que enfrentan hoy las instituciones policiales en los tres órdenes de gobierno.

No podemos renunciar y dejar de lado la urgente necesidad de un rediseño institucional de la función de la policía en nuestro país.

Es necesario contar con instituciones policiales preparadas, honestas y bien pagadas.

Esa es nuestra principal misión ante la crisis que enfrentamos, y debemos reconocer que el Congreso está en falta, que no hemos sido capaces de dar respuesta a la crisis de seguridad que enfrenta la sociedad mexicana.

Y como muestra de ello está el inexplicable carpetazo que la Cámara de Diputados dio a la reforma constitucional enviada por este Senado sobre el mando policial.

De la misma forma son responsables también los tres órdenes de gobierno que han olvidado que su misión primigenia es velar por la seguridad de los ciudadanos y contar con las capacidades necesarias para hacerlo.

Un país que se precia por ser un Estado democrático de derecho no puede y no debe basar su estrategia de seguridad en la acción emergente de su Ejército.

No podemos dejar que se genere la percepción de que con una reforma en materia de seguridad interior estaríamos tratando de suplantar lo que realmente urge, que es una reforma en materia de seguridad pública.

Reconozco que la actuación emergente y necesaria del Ejército ante la crisis que hoy se enfrenta debe tener asidero legal.

Pero también debemos reconocer que esta regulación deberá considerarse siempre como extraordinaria y emergente, debe ser la excepción y no la regla.

Pero además, el dictamen que hoy se pone a consideración de este Pleno contiene conceptos poco claros que presentan serias dudas sobre su constitucionalidad, y hay confusión entre los mismos conceptos que se manejan.

Temas como la definición del uso de la fuerza es un claro ejemplo de ello, cómo aludir al uso legítimo de la fuerza de las instituciones de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas si no se cuenta con una legislación especial en la materia.

Recordemos que una de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para para los Derechos Humanos emitida en octubre de 2015 en el marco de su visita a nuestro país, destaca lo relacionado con el uso de la fuerza de las instituciones policiales.

El Alto Comisionado señaló que es necesario fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.

Por cierto, en fecha 13 de noviembre de 2012, presenté ante el Pleno del Senado una iniciativa por la que se expide la ley que regula el uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal, mismo que después de casi cinco años, simplemente no ha sido dictaminado.

Otro claro ejemplo es la facultad concedida a las Fuerzas Armadas en materia de preservar el lugar de los hechos en los casos que realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito.

Esta facultad constitucionalmente está reserva únicamente a la policía y al Ministerio Público.

Asimismo, encontramos disposiciones que en este mismo sentido parece que contravienen disposiciones constitucionales.

Estos son tan solo algunos de los muchos ejemplos que resultan altamente preocupantes y de los cuales en el momento procesal oportuno presentaremos las reservas correspondientes.

Por otro lado es de señalarse, que lamentablemente, durante la construcción y discusión de esta ley no hubo el necesario consenso con la sociedad civil, aún y cuando este Senado se ha caracterizado por la implementación de formatos de Parlamento Abierto.

Resulta preocupante que aún y cuando diversos organismos internacionales se pronunciaron sobre la inconveniencia de emitir una ley de esta naturaleza, como la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diversas comisiones estatales de derechos humanos, porque además de las dudas sobre el respeto a los derechos humanos se insiste en la aprobación, sin agotar todos los recursos para encontrar el diálogo y el encuentro entre la sociedad mexicana.

Compañeras y compañeros Senadores:

No nos oponemos a que se establezca un marco jurídico en esta materia, no estamos de acuerdo en los términos que ha sido planteado.

El dictamen que hoy se ha puesto a consideración de este Pleno no fortalece a las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, ni tampoco la grave crisis de inseguridad por la que nuestro país atraviesa, pero sí genera dudas y preocupaciones serias en torno a lo que pareciera ser un retroceso en el camino de México para consolidarse como un Estado Democrático de Derecho.

Aprovecho finalmente mi intervención para señalar que he enviado a la Mesa Directiva reservas presentadas al artículo 4, fracción X; artículo 27 y artículo 33, y en esta ocasión también aprovecho para solicitar que en el momento procesal oportuno se ponga a consideración del Pleno y se inserten en el Diario de los Debates.

Es cuanto, Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.

Hemos concluido la lista de oradores.

Tiene la palabra para rectificación de hechos la Senadora Calderón Hinojosa.

Las rectificaciones son hasta por cinco minutos. Les ruego se ciñan al tiempo establecido en el reglamento

Adelante, Senadora.

La Senadora María Luisa Calderón Hinojosa: Le agradezco, Presidenta.

Voy a intentar los cinco minutos, pero sí quiero observar que aquí hemos tenido un debate maniqueo y no resuelve nuestra vida en comunidad.

Quienes no tienen historia, tampoco pueden construir un futuro, y queremos llegar al futuro resolviendo nuestros problemas comunes.

Primero diré que, y ya lo dijo alguien que me antecedió, no es cierto que en 2007 haya empezado el combate con el Ejército a la delincuencia organizada.

Y es cierto que el Ejército no es el enemigo de este país, lo es la delincuencia organizada, que fue combatida, por supuesto, en el 97, ya nos lo dijeron, un cuerpo de élite se desertó y se fue del lado de la delincuencia organizada.

Y, por cierto, cuando el Presidente Calderón fue a Michoacán con una solicitud de Lázaro Cárdenas, fue con una defensa o con un apoyo en la Ley de Defensa.

Lo que creo es que no podemos inventar que estamos en la ilegalidad y que no tenemos rumbo.

La Ley de Defensa Nacional existe, y la Ley de Defensa Nacional, en su artículo 5, fracciones III, y 5 dice: “Que el Ejército ha de salir para contener a la delincuencia organizada o cuando la delincuencia organizada impide que se haga el ejercicio del gobierno”.

Y no es que no tuviera rumbo, es que estaban en peligro las instituciones de Michoacán, que se llevaban los municipios que habían sido invadidos, cooptados, amenazados, sometidos por la delincuencia organizada. Y creo que esta es una de los casos que tenemos que ver para ver nuestro futuro.

No es el Ejército el que estando en las calles haya hecho que crezca la delincuencia organizada, perdón, que haya crecido la violencia, lo que ha hecho que crezca la violencia es la infiltración de la delincuencia organizada en los municipios, en las entidades federativas.

¿Por qué no nos ocupamos de eso?

¿Por qué, ahí viene otro proceso electoral, echémosle la culpa al Ejército, echémosle la culpa a Calderón, y la delincuencia organizada sigue penetrando los municipios, los estados en los procesos electorales?

¿Quién de nosotros se ha ocupado de un protocolo?

¿Quién ha cuidado que en los partidos políticos no se infiltre la delincuencia?

No, nos hemos dedicado en repartir posiciones y en, por cierto, la palabra democracia y la palabra dictadora, aquí se ha usado como si se ejerciera cotidianamente la democracia y como si no tuviéramos ahí la tentación de dictadores.

Pero creo que tenemos que enfrentar el problema de la violencia, el problema de los miles y miles de muertos que no son del Ejército, que son de la delincuencia organizada.

El montó de desaparecidos que no son del Ejército, son de la delincuencia organizada.

Sí hay algunos abusos del Ejército, que hay que regular y que hay que sancionar con la ley que ya existe también.

Pero no es el Ejército el culpable de lo que pasa en este país.

Y hay una Ley de Defensa Nacional que es la que complementa esta Ley de Seguridad Interior, que yo creo, y por eso mi duda de votar a favor o no de esta Ley de Seguridad Interior, que creo que tendría que ser un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional para que pueda estar complementada, porque aquí la Ley de Defensa Nacional dice todo lo que hemos dicho, que no existe y lo que hemos dicho que no está regulado, y lo que hemos dicho que no tiene razón de ser, aquí está, ojalá le den una leída a la Ley de Defensa Nacional.

Pero querría decir, si queremos resolver nuestro problema comunitario nacional de certidumbre y de paz, vayamos a cuidar las elecciones, revisemos que no entre el narco a acotar a nuestros alcaldes, porque cuando son candidatos bien que se alumbran y luego cuando les cobran el favor ya no saben ni por dónde.

Y la otra es, que ciertamente, hay que ir con una ley de la policía, y hacer que la policía, y recupere el sentido de la vida, porque no hemos sido a una cultura de la legalidad, porque no hemos sido una cultura de la paz, pero ninguno de nosotros se ocupó, en estos cuatro o cinco años de ir a revisar esa legislación y a cambiar el paradigma.

Lo quería decir, señora Presidenta, es que hay una Ley de Defensa Nacional en la que cabría un capítulo de defensa interior y podríamos tener la certidumbre de que se fortalece al Ejército.

No es el que el Ejército está ahí de forma ilegal. Lean el artículo 5 de la Ley de Defensa Nacional.

Lo que el Ejército también tiene derecho es a tener certidumbre de cuándo sale, cuándo entra, bajo qué criterios.

Yo creo que hemos sido abusivos en el maniqueísmo de esta discusión, y tampoco merece nuestra comunidad nacional estar en una posición maniquea que les haga pensar que aquí no trabajamos para el bien de nuestras comunidades.

Eso es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, se abre el registro para reservar artículo o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

Por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, todos los artículos y todos los transitorios.

Por la Senadora Dolores Padierna Luna, todos los artículos y todos los transitorios.
Por el Senador Zoé Robledo Aburto, todos los artículos y además solicita la adición de un 19 Bis, de un artículo 19 Bis, y un 19 Ter.

Por la Senadora Iris Vianey Mendoza, todos los artículos y todos los transitorios, excepto el Transitorio Quinto.

Por el Senador Isidro Pedraza Chávez, todos los artículos y todos los transitorios, excepto el Transitorio Quinto.

Por el Senador Luis Sánchez Jiménez, todos los artículos y todos los transitorios, excepto el Transitorio Quinto.

Por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 31 y 33.

Por el Senador Manuel Bartlett Díaz, los artículos 1, 5, 6, 15, 16, 21 y 26.

Por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, los artículos 2, 4, 7, 29 y 31 y la adición de un Sexto Transitorio.

Por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, los artículos 2, 3, 4, 9 y 28.

Por el Senador Manuel Merino Campos, los artículos 3, 11 y 22.

Por el Senador David Monreal Ávila, los artículos 4, 6, 8 y 32.

Por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, los artículos 4, 27 y 33.

Por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, los artículos 4, 29, 30 y 31.

Por la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, los artículos 5 y 11.

Por el Senados Luis Humberto Fernández Fuentes los artículos 5, 6, 11, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 28 y 30.

Por la Senadora Silvia Martínez Elizondo, los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 y 26.

Por la Senadora Andrea García García, los artículos 6, 18 y 33.

Por la Senadora Layda Sansores San Román, los artículos 8, 9, 10 y 31.

Por el Senador Raúl Morón Orozco, el artículo 15.

Por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, el artículo 20.

Por el Senador Mario Delgado Carrillo, los artículos 32 y 33.

Por comisiones el artículo 1.

Por el Senador Santana, el artículo número 26.

¿Alguien más desea reservar?

Sonido en el escaño del Senador Rabindranath Salazar.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Gracias, Presidenta, hice llegar mis reservas, no escuché que se mencionaran.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Sí, sí, sí.

Son los artículos 2, 4, 7, 29 y 31 y la adición de un Sexto Transitorio.

El Senador Luis Sánchez está retirando sus reservas.

Retira el Senador Luis Sánchez sus reservas.

Estos son entonces los artículos reservados.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico…

Senador Barbosa, ¿con qué objeto?

El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Con el objeto de precisar qué es lo que se va a votar o qué es lo que se puede votar.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Si me permite concluir, preciso lo que se va a votar.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general.

Habrá quienes no habiendo hecho reservas quieran votarlo en lo general, ¡sí señor!

Se puede votar todo en lo general porque el dictamen tiene una parte expositiva.

Estamos votando el proyecto de decreto en lo general.

Señoras y señores Senadores, no nos vamos a entender así, pongámosle un poco de orden a esto.

El decreto se está votando en lo general, el decreto no se compone solamente de los artículos, sino que tiene una parte de exposición de motivos, por un lado, y por otro lado hay Senadoras y Senadores que no hicieron reserva de artículos y que están en todo su derecho de votar en lo general.

Ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

PRESIDENCIA DEL SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Si estamos reservando todos los artículos, incluso hasta la denominación, si estamos reservando cada uno de los artículos en lo particular, por eso, lo que tendría que estar ahorita sufriendo reforma es en todo caso los considerandos, claro que sí, porque estamos reservando los artículos.

El procedimiento es que se vota todo lo que no está reservado, pero si hay reservados todos los artículos, entonces se tiene que proceder, ver cuáles artículos no están reservados, si están reservados todos tiene que solamente votarse los considerandos del decreto, si todos están siendo reservados.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Barbosa.

El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) No infrinjamos más la ley en este Senado, de verdad.

Señores parlamentarios, llevan cinco años y no han leído el Reglamento, solamente aquí se puede someter a votación el nombre y la exposición de motivos, no el decreto, porque está reservado y aun cuando haya Senadores que no hayan hecho reservas no pueden votar.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador, tiene usted razón, se está votando el nombre y la parte expositiva, y eso es lo que estamos votando, de acuerdo al proceso parlamentario que usted conoce muy bien.

Vamos a empezar a discutir reserva por reserva, veremos si se admite a discusión y si no se admite a discusión volveremos a votar.

Tiene usted razón y es lo que estamos votando.

Sonido en el escaño del Senador Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Simplemente para hacer dos precisiones sobre lo que acaba usted de mencionar.

También el nombre de la ley está reservada, también hay un artículo, hay una reserva de un artículo único, y lo puede revisar, no le estoy diciendo algo, porque es básico para mí, que la ley sea una ley de seguridad ciudadana, por eso reservé también el nombre de la ley, estamos solamente la exposición de motivos.

Pero, mire, y tiene razón, estamos votando la exposición de motivos.

Esto que está ocurriendo nos va a obligar a tener que presentar reserva por reserva, artículo por artículo.

Bueno, ojalá convenza a la gente que ya se quiere ir y tiene prisa para votar.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Pido a la Secretaría consulte si falta algún legislador por emitir su voto.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la Asamblea si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto.

Senadora Martha Palafox, en qué sentido, a favor.

Abstención.

Una abstención.

Senadora Hilaria, a favor.

Senador Fernández, en contra.

Daremos cuenta de la votación.

Les informo que quedan 75 votos a favor; 44 votos en contra y 3 abstenciones.

En consecuencia, Presidente, queda aprobado en lo general el proyecto de la Ley de Seguridad Interior.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de Ley de Seguridad Interior, que evidentemente no está reservado.

Iniciamos la discusión en lo particular.

Para la denominación de la ley presentó reserva la Senadora Angélica de la Peña.

Tiene la palabra, Senadora, preséntenos su reserva.

Sonido en el escaño de la Senadora de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, con todo respeto, y también que todos estamos llegando a una parte prácticamente final de este proceso de discusión, hagámoslo bien, y eso quiere decir que atendamos las reservas, aquí debe aclararse que lo que se acaba de votar es aprobar o no aprobar la exposición de motivos del decreto, porque la denominación, así como todos sus artículos, incluyendo los transitorios, están reservados, usted acaba de decir que hay una reserva también mía y de otros Senadores a la denominación de la ley, eso.

Y segundo, de una vez quisiera, yo había informado de mi intención de participar en cada una de las reservas que hice, es decir, todos los artículos, incluyendo los transitorios.

Quiero informarle, señor Presidente, que lo voy a hacer en un solo acto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy amable, Senadora, y le agradecemos su disposición.

Sonido en el escaño del Senador Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Compañero Presidente, y llamo a la Asamblea, al propio doctor Garita, esta ley indudablemente que por el número de votos que dimos la van a aprobar, pero sí hay que ajustarnos al procedimiento, no se puede declarar que sea aprobado en lo general porque no hubo artículos libres de reserva para poderse aprobar en lo general.

Por lo tanto, no cometan un acto de legalidad en la conducción de esta votación, si esta ley, como es su preocupación sacarla el día de hoy, permítanos también agotar el procedimiento. De manera particular se hizo la reserva de mi parte de todos los artículos y casi todos los transitorios, excepto el número cinco. De tal manera que sí tiene que usted informarle qué fue lo que se votó a este Pleno, y es lo que le hemos estado reclamando.

Si ustedes insisten en torcer el procedimiento legislativo, es muy grave lo que pretenden hacer en este sentido.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Pedraza, le repito, lo que se votó en lo general, dado que se reservó la denominación de la ley y todo el articulado, fue la parte expositiva que forma parte también del dictamen, y eso fue lo que se aprobó en lo general, y es la segunda vez que lo estamos repitiendo, ¿estamos de acuerdo?

Muy bien.

Señora Angélica de la Peña, Senadora, tiene usted el uso de la palabra para presentar sus reservas en un solo acto.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores.

Nos reservamos el artículo único del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, ya que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en esta materia, el mismo fundamento lo planteamos en la reserva de los artículos 1, 2 y 3, adicionalmente podemos agregar que esta minuta establece que la seguridad interior, la seguridad nacional y la seguridad pública son lo mismo, lo cual resulta inexacto, por lo que algunas definiciones del artículo 4 y 5 no establecen con claridad los alcances y de la actuación de las Fuerzas Armadas en esta ley.

Dos. Resulta preocupante que esta minuta carezca de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones de las Fuerzas Armadas se lleven a cabo con pleno respeto a los derechos humanos, artículo 5.

De aprobarse esta minuta las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, pueden realizar de manera permanente acciones de seguridad interior sin necesidad de declaratoria de protección.

Artículo 6 y 26, y sin establecer prevenciones generales para la afectación o restricción de derechos.

Artículo 7. Pero además ponen en riesgo las garantías de libre manifestación al establecer expresamente una disposición que las pueda considerar como un amenaza a la seguridad interior.

Artículo 8.

Respecto al artículo 9, trasgrede la cláusula establecida en el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual dispone que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y plantea una indeterminación de normas al establecer como supletoria de la ley las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 10.

Proponemos derogar los capítulos relativos a los supuestos del procedimiento para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior, así como el que dispone la intervención de las autoridades federales, artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

Los capítulos que proponemos derogar permiten que las Fuerzas Armadas actúe de manera autónoma en esta materia y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas, con lo cual se elimina la posibilidad de que la autoridad civil participe en la coordinación y dirección de los grupos interinstitucionales que para el efecto se integren y sea quien elabore los protocolos de actuación para

establecer responsabilidades: canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes.

No menos grave es la subordinación de la operatividad logística y la coordinación de las acciones derivadas de la declaratoria de protección a la seguridad interior que estarán a cargo de un militar designado por el Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de Marina y Defensa, violentando con ello no sólo la soberanía de las entidades federativas, sino el propio artículo 49 constitucional que dispone que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o cooperación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Pero lo más grave es que la seguridad, vinculada a la personas, debe estar a cargo de instituciones de carácter civil, artículos 23, 24 y 25.

Proponemos derogar los artículos 27 y 28, ya que le da una participación preponderante a las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con las funciones que son propias del Ministerio Público establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, planteamos la derogación del capítulo relativo a la inteligencia para la seguridad interior, artículos 29, 30 y 31, ya que a diferencia del Cisen y la Policía Federal, que cuenta con un respaldo jurídico para llevar a cabo sus legítimas acciones de inteligencia a través de la Ley de Seguridad Nacional de 2005, las Fuerzas Armadas no cuentan con una ley de inteligencia militar, incluirla en esta minuta representa un grave riesgo para la población.

La minuta tampoco establece controles parlamentarios, ni jurisdiccionales, artículo 32 y 33, y el único mecanismo de control contemplado en esta minuta es el envío de un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Asimismo, se establece que el incumplimiento a las obligaciones, establecidas en esta ley, será sancionado conforme a las leyes aplicables en la materia, por lo que es evidente que el dictamen adolece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las acciones militares.

De igual manera no prevé la subordinación de éstas a las autoridades civiles, de igual manera es omiso respecto a sanciones del ámbito penal por la comisión de delitos o por violaciones graves a los derechos humanos, sobre todo cometido por los integrantes de las Fuerzas Armadas, artículo 34.

Respecto al régimen transitorio.

Transitorio Primero. Consideramos que resulta fundamental que ante la inminente aprobación de esta minuta su vigencia debe ser al año siguiente en la entrada en vigor a la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.

Una vez que el Congreso de la Unión concluya el proceso legislativo para expedir la Ley Reglamentaria que le mandata el Artículo Cuarto Transitorio del decreto, por el que se modifica la denominación del Capítulo I, del Título Primero, y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, asimismo, proponemos derogar el régimen de transitoriedad.
Proponemos también derogar el régimen de transitoriedad del Transitorio Quinto, en ese sentido, y con esto voy a terminar, ¿a quién debemos agradecerle este Quinto Transitorio?

Dicen que con este transitorio se resuelve todo, ¿para qué entonces discutir un nuevo modelo de seguridad pública?, ¿para qué reformar los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 de la Constitución, si con un solo transitorio se resuelve todo?

La discusión del modelo que descansaría en dos reglas básicas: la primera, consistente en que las funciones de seguridad pública estarían originariamente a cargo de la Federación y de los estados; la segunda, en que las funciones de proximidad estarían a cargo de los municipios, quedó sepultada por un transitorio.

¿Para qué una ley de seguridad pública basada en un Mando Mixto?

¿Para qué una discusión a fondo del modelo de corporaciones policiacas que se necesitan?

¿Para qué discutir los derechos de las policías a recibir un salario digno y los derechos laborales que les corresponde?

¿Para qué insistir en reformar el 123 de la Constitución?

¿Para qué determinar la capacitación especializada que se necesita para cada corporación, a fin de atender verdaderamente las diferentes vertientes de la seguridad pública basada en un modelo de respeto de los derechos humanos?

Siempre estuvimos equivocados, un dictamen emitido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo resuelve todo.

"Absurda solución, lo absurdo no son las cosas, lo absurdo es que las cosas estén ahí y las sintamos como absurdas", decía Julio Cortázar.

Lo que sí resuelve este Transitorio Quinto es lo que tácitamente dice, lo que quisieron llamar siempre Seguridad Interior se llama, se ha llamado siempre Seguridad Pública.

Aprovecho para aclarar que quienes estamos en contra de esta ley no culpamos a las Fuerzas Armadas por la extensa violación a los derechos humanos en nuestro país.

No, señoras y señores, la responsabilidad de la violación a los derechos humanos es una responsabilidad del Estado mexicano, quienes decidieron poner a las Fuerzas Armadas a realizar un trabajo que ellos mismos han dicho que no les corresponde y para el que no están capacitados, ellos cargarán en su conciencia por este estado de cosas.

Si alguien muere a causa de un disparo de un arma de fuego, no es culpa de la bala, es culpa de quien jala el gatillo.

Por lo anteriormente expuesto, también reservamos el Transitorio Quinto.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Pediría a la Secretaría, en virtud de que fueron expuestos en tribuna por la proponente, someter a consideración del Pleno si se admiten a discusión las reservas propuestas por la Senadora Angélica de la Peña.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se aceptan a discusión las reservas presentadas por la oradora anterior.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna, para presentar todas sus reservas en una sola intervención.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Bueno, sí, ante afirmaciones que se han hecho aquí tenemos que subrayar que nosotros no estamos señalando como culpable al Ejército de la ola de violencia. Estamos afirmando que la fallida estrategia de seguridad militarizada que involucra a las Fuerzas Armadas no funciona.

Los responsables de esta crisis humanitaria, del baño de sangre en que convirtieron al país, sí tienen nombre y apellido, se llaman Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

No a las Fuerzas Armadas, sino los presidentes que iniciaron, que idearon esta guerra contra la población civil y contra el crimen organizado.

Decía la Senadora Calderón que esta estrategia es contra el crimen organizado, llevan once años con esa estrategia, la pregunta es, ¿ya lograron combatir al crimen organizado?

Antes de esta guerra loca estaba medio controlado el crimen organizado, después de su guerra loca tenemos un baño de sangre, 230 mil muertes; 40 mil desaparecidos, y un sufrimiento enrome de millones de mexicanas y mexicanos.

Cuál es su afán de legalizar este desastre humanitario, pero sirvan los argumentos que voy a dar artículo por artículo para demostrar que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional y que la votación anterior arroja más de un tercio de los aquí votantes, y que podemos iniciar con estos argumentos la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 1 del dictamen es inconstitucional.

En primer lugar porque faculta, la facultad conferida al Congreso de la Unión en el artículo 73 constitucional es para legislar sobre seguridad nacional, no sobre seguridad interior, y que nos digan que seguridad interior está subsumida en la seguridad nacional, dónde lo dice la Constitución, en qué ley se establece, qué artículo lo dice, porque ninguna parte normativa es simplemente un invento para justificar, pero además para subsanar la clara violación que se está haciendo, se hace una correlación con lo dispuesto en el artículo 89, fracción VI de la Constitución en donde, en efecto se confiere la potestad al Ejecutivo Federal al disponer de las Fuerzas Armadas, pero no para violar la Constitución.

Artículo 6. Es inconstitucional porque establece que las Fuerzas Armadas implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas, y acciones para identificar, y subrayo prevenir y atender oportunamente la agenda nacional de riesgos. La redacción de este artículo es, claramente inconstitucional pues se contrapone a lo dispuesto por el artículo 129 de la Carta Magna que establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los cuarteles.

Este texto es explícito en limitar las funciones de la autoridad militar en tiempos de paz.

La interpretación integral del texto constitucional la hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice claramente que las Fuerzas Armadas sí pueden colaborar de manera auxiliar en las labores de seguridad pública, pero su participación tiene que ser en auxilio de las autoridades civiles, no dirigir a las autoridades civiles, como lo están poniendo ustedes en esta Ley de Seguridad Interior.

También dice la Corte que las funciones exigen un estudio integral de toda la Constitución, no puede ser parcializada este análisis, las labores de auxilio de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública tiene que estar delimitadas y que no pueden considerarse amplias ni extensas, ya que todo ello conllevaría a violentar las garantías individuales.

El dotar a las Fuerzas Armadas de una facultad permanente para hacer labores de prevención y atención de riesgos es violar incluso la interpretación que hay sobre el artículo 21 constitucional que ha hecho la Suprema Corte.

Pues con esta redacción se le confiere a las Fuerzas Armadas ya no labores de auxilio sobre seguridad pública, sino una función primordial que expresamente está conferida la prevención únicamente a las fuerzas policiales, no al Ejército.

El artículo7 es inconstitucional pues violenta lo dispuestos en el artículo primero de la Carta Magna al omitir la obligación de la promoción de los derechos humanos que se mandata en el artículo 1 como si esa obligación fuera optativa o selectiva para las autoridades encargadas de dar cumplimiento a las disposiciones de esta norma, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que cumplir las cuatro obligaciones generales en materia de derechos humanos.

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y las Fuerzas Armadas no pueden mediante una ley secundaria abstraerse de ninguna de ellas, mucho menos en la de promover los derechos humanos, y ustedes están siendo omisos en el 1 constitucional.

Artículo 9. Es inconstitucional ya que señala que la información que se genere será considerada de seguridad nacional, lo que contraviene el contenido dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se garantiza que toda la información en poder del Gobierno debe de regirse bajo el principio de máxima publicidad.

Establecer que la información generada por la aplicación de la ley será considerada de seguridad nacional, implica restringir sin análisis alguno el acceso a dicha información, pues como se sabe la seguridad nacional es una de las expresiones al derecho que restringe el libre derecho a toda la información.

Artículo 10. Es inconstitucional y es muy grave. El Segundo párrafo dice, que la materia de seguridad interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal d Procedimiento Administrativo es la única que puede garantizar que los derechos de los particulares y asegura el eficaz cumplimiento de la justicia, prevé que el procedimiento de la justicia administrativa se desarrolle bajo los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad publicidad y buena fe.

Establece que la autoridad administrativa debe fundar y motivar todos sus actos, y aquí la ley de seguridad interior está saltándose todos los actos, y debe respetar además el derecho de audiencia y el derecho de defensa que consagra el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que proclama que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, y en condiciones de igualdad hacer oída públicamente por un tribunal imparcial para la determinación de sus derechos y de sus obligaciones.

Estas son las características de un elemento derecho a la justicia que garantiza la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y ustedes, en este artículo, están diciendo que queda anulada esta ley para efectos de los militares.

El excluir la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, es crear un estado de excepción, y eso es suplantar el artículo 29 de nuestra Constitución, único artículo que señala las características para decretar un estado de excepción.

Contravenir, además, excluir la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es, además, contravenir el artículo 16 constitucional, y el primero con correlación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

El artículo 11 es inconstitucional, pues violenta lo dispuesto en el artículo 21 de nuestra Carta Magna en relación a las obligaciones que se reconocen en materia de seguridad pública para las corporaciones policiales, funciones que no pueden ser suplantadas por las Fuerzas Armadas, pues estas sólo actúan bajo petición de auxilio y de manera complementaria, nunca en forma subsidiaria, como la están escribiendo en la Ley de Seguridad Interior.

Al fijar en este artículo que las Fuerzas Armadas tendrán labores de prevención, atención y contención de las amenazas a la seguridad interior, se suplanta de facto la labor de prevención y protección que constitucionalmente sólo tienen atribuidas las fuerzas policiales.

El artículo 17 es inconstitucional, pues viola el artículo 16 de la Constitución, y el principio de legalidad al establecer, que a partir de la expedición de la declaración de protección a la seguridad interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento se considerarán como acciones de seguridad interior, ya que con esta redacción, las obligaciones, regulaciones, procedimientos y controles que ordinariamente aplican bajo el principio de legalidad para todas las autoridades y para todos sus actos, quedarían subsumidas e invalidadas mediante esta expresión genérica de conversión a acciones de seguridad interior, convirtiéndolas también con esta redacción en acciones de seguridad nacional, por lo que las y los gobernados no tendrían, ni mecanismos de defensa, ni reglas para medir legalmente la actuación de las autoridades en el marco de esta norma.

Los artículo 20, 21 y 22 son inconstitucionales, violentan lo dispuesto en el artículo 129 y el 21 de nuestra Carta Magna, pues se les confieren poderes a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, y que forman parte de la esencia de la seguridad pública contenida en el artículo 21, no ya como instancias de auxilio, tal como lo permitió la Suprema Corte en su jurisprudencia, en el año 2000, sino como entidades responsables de la coordinación logística de la operación de las acciones derivadas de la declaración y supeditando incluso a las autoridades civiles, dándole al mando castrense la dirección de las acciones derivadas de la declaratoria.

Un comandante dirigirá las autoridades civiles, sólo pasa en las dictaduras. En el trazo de nuestra Constitución no es una dictadura, es una República federal, democrática, civilista, por lo tanto, no es admisible que este pensamiento dictatorial pueda ser aprobado por este país, que está muy castigado ya por tantas desgracias.

El pensar que se invocará esta legislación, es desconocer que existen diversos sistemas nacionales de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente a las situaciones que pudieran afectar la seguridad interior.

Para ello se han constituido el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Conferencia Nacional de Gobernadores, entre otras más, cuya función primordial es precisamente la coordinación, la articulación para hacer frente juntos ante los riesgos, las amenazas, los peligros comunes y bajo la lógica de coordinación, no de subcoordinación como lo proponen los artículos 20, 21 y 22, menos comandados por una autoridad militar.

Ustedes están militarizando el país, que lleva once años militarizado con efectos desastrosos para la economía, en derechos humanos y para la estabilidad de nuestra población.

El artículo 26 es inconstitucional al repetir prácticamente el contenido del mismo artículo 11 del dictamen, que es a su vez inconstitucional, pues violenta lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Magna en relación a las obligaciones que se reconocen.

En materia de seguridad pública, son exclusivas para las corporaciones policiales, funciones que no pueden suplantadas por las Fuerzas Armadas, pues estás sólo pueden actuar bajo petición de auxilio y de manera complementaria, nunca de forma subsidiaria, así lo determinó también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fijar en este artículo que las Fuerzas Armadas tendrán labores de prevención, atención y contención de los riesgos de la seguridad interior, suplanta de facto la labor de prevención y protección que constitucionalmente sólo tienen conferidas las fuerzas policiales.

Aceptar esto es renunciar que las policías hagan su tarea y abdiquen en sus facultades constitucionales, abdiquen en favor de las Fuerzas Armadas.

El artículo 30 es inconstitucional al conferirle legalmente facultades a las Fuerzas Armadas para la realización de labores de inteligencia, que eso sólo la tiene las tienen la Secretaría de Gobernación y el Ministerio Público mediante el uso de cualquier medio lícito.

Es esta frase inconstitucional en el artículo 30, pues violenta el artículo 14 constitucional en cuanto a las formalidades esenciales del procedimiento, que deberán guardarse ante cualquier afectación de derechos,

bienes y libertades y es contrario a lo dispuesto en el 16 constitucional en cuanto a la laxitud del principio de legalidad, al de la debida fundamentación y motivación, al de protección de los datos personales, mismos principios constitucionales que se ven inobservados con la redacción de este artículo.

Y el artículo 31, les pido atención, es gravísimo, es inconstitucional y extremadamente grave. Contraviene disposiciones diversas, entre ellas, los artículos 6, el 41 y el 102 de nuestra Carga Magna, ya que estos artículos contienen la base legal de actuación de tres organismos públicos autónomos, que tienen bajo su más estricto resguardo la información de millones de mexicanas y mexicanos.

Y en estos tres artículos constitucionales aludidos, se establece como un principio de actuación de estos órganos autónomos el de conducirse con estricta legalidad, principio que no podrían atender en el casos de que las autoridades castrenses les solicitarán cualquier tipo de información.

La facultad que se le confiere al mando castrense en este apartado, establece que será una obligación de los órganos autónomos el proporcionar la información que se posea, y que le sea requerida en el marco del cumplimiento de esta ley, sin importar si esa información es de carácter confidencial, si manejan datos personales o peor aún si en esa información se establecen responsabilidades de carácter, precisamente contra la actuación de las Fuerzas Armadas, es contraría al artículo 6, fracción VIII constitucional en cuanto a las obligaciones del Inai, es contraria al artículo 41 Apartado A constitucional, perdón Apartado B del texto constitucional en cuanto hace a los organismo públicos autónomos, de protección de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de los derechos humanos son, están en un grave riesgo, será anulada la autonomía por este artículo 31 de esta ley plenamente inconstitucional y vean lo que dice el artículo Tercero Transitorio, es inconstitucional la redacción de este transitorio, es ilegal y es inconstitucional, pues no puede establecerse mediante un decreto de una ley como la que se pretende aprobar que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este mismo decreto.

Todas las leyes que se opongan no son válidas, pues esa expresión tan genérica al no establecer en qué términos, términos contenidos específicos, ni con qué consideraciones deberán derogarse todas las otras normas, se abre un espectro de indefinición legal que puede traducirse en un serio problema jurídico, por ejemplo, hay facultades que esta legislación le confiere a las Fuerzas Armadas en el artículo 11 y en el artículo 26 para realizar labores que no se relacionen con la naturaleza castrense, y que incluso las contravienen, por lo que, siguiendo en lo dispuesto en este artículo, las normas vigentes del derecho castrense y las competencias de las Fuerzas Armadas, quedarían derogadas de facto, lo que implicaría que las propias Fuerzas Armadas que hoy buscan fortalecer su marco de actuación legal, quedarían inmersas en un vacío legislativo con serias implicaciones, la de discrecionalidad, de arbitrariedad donde el abuso y la violación de los derechos humanos pueden perpetuarse y no ser castigados, pero ley imposible.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Consulte la Secretaría si son de admitirse las reservas expuestas en tribuna por la Senadora Dolores Padierna.

La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Por instrucciones del Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica si se aceptan a discusión los artículos reservados por la Senadora Dolores Padierna.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantado su mano.

(La Asamblea asiente)

Le informo, Presidente que no se aceptan a discusión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar sus reservas en una sola intervención.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Es para el artículo 1, no para todas las reservas.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador, ¿en cuántas intervenciones va usted a presentar con sus reservas?

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) En el mismo número de reservas que hice.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Nada más le pediría, en virtud de eso, de que presentara cada una de las reservas ateniéndose al tiempo establecido.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Sí, cómo no.

Gracias, señor Presidente, para referirme al artículo único, se expide la Ley de Seguridad Interior, la reserva va en el sentido de que pueda decir se expide la Ley de Seguridad Ciudadana. Déjeme explicar por qué, desde la doctrina, existen diversas aproximaciones al concepto de seguridad que permiten asumir el término de seguridad interior como limitado o incluso obsoleto, es por ese motivo que al referirnos a conceptos como seguridad pública, seguridad nacional o seguridad interior, también debemos de analizar conceptos como seguridad humana o seguridad ciudadana, el concepto de seguridad pública hace referencia al mantenimiento de la paz y al orden público que se logra a través de los mecanismos de control penal y de las acciones de prevención y de represión de ciertos delitos y faltas administrativos que la vulneran y particularmente a través de los sistemas de procuración e impartición de justicia.

Este concepto de seguridad pública se utiliza ampliamente en los Estados Unidos y en Canadá para hacer referencia también a la seguridad de las personas y grupos que componen la sociedad, pero por el contrario, la misma expresión de seguridad pública, en nuestra región, en América Latina hace referencia a un concepto diferente que alude a la seguridad construida desde el Estado o en ocasiones a la misma seguridad del Estado.

Por su parte el concepto clásico de seguridad nacional tiene como objeto prevenir o rechazar amenazas militares y por tanto defender militarmente la soberanía, la independencia y la territorial del Estado frente a posibles agresores. De esa manera el Estado busca su propia seguridad incrementando su poder a través de su capacidad militar.

Aquí hay el texto de Ortega, de Seguridad Nacional y Seguridad multidimensional, es muy sugerido para entender este concepto.

Por su parte, el concepto de seguridad exterior y de seguridad interna, cuya diferenciación se dificulta debido a sus estrechos vínculos, los cuales dificultan la delimitación de sus fronteras, por ese motivo no se puede afirmar tajantemente que las amenazas internas están en el ámbito de la seguridad interna y que las externas en el de la Seguridad Nacional, porque las primeras pueden tener dimensiones de seguridad nacional sin provenir necesariamente del exterior y viceversa.

A pesar de ello, se ha asumido tradicionalmente que el enfoque al exterior entiende como seguridad nacional y de enfoque interno como seguridad interior.

Sin embargo es a partir de la década de los 80's que surge el enfoque crítico a estos conceptos tradicionales de la seguridad y estas críticas se centraban en que los conceptos se circunscribían a la seguridad del Estado, olvidando a los ciudadanos al tiempo que planteaban amenazas militares desde el exterior sin considerar otras fuentes de inseguridad tanto globales como internas, económicas, e incluso medio ambientales.

Y, por cierto en las listas de estas amenazas globales se acaba de añadir una más, que es la mala gobernanza, producto de la corrupción.

El propio programa de Naciones Unidas para el desarrollo acuño en 1994 el nuevo concepto de inseguridad humana, desplazando el viejo enfoque de una seguridad centrada en proteger a los Estados a otro que pone a las personas como sujeto central de la seguridad.

Y esto, responde a tres ideas, uno, que la seguridad debe centrarse en las personas; dos que la seguridad de las personas se ve amenazada no solamente por la violencia física, sino por otro tipo de amenazas, como la subsistencia o las condiciones de llevar una vida con dignidad y; tres, que la seguridad está asociada al desarrollo entendido como el proceso de ensanchamiento de las capacidades y libertades de las personas.

Por ese motivo, este concepto tiene dos dimensiones: una, de carácter cuantitativo, la satisfacción de las necesidades materiales básicas que aseguren la continuidad de la vida, otro de carácter cualitativo vinculado a la dignidad y lo que exige avanzar en la satisfacción de los derechos humanos.

Por eso, y con esto termino, en ese orden de ideas, otro concepto, el de seguridad ciudadana, lo que busca es justamente abonar los problemas de criminalidad y violencia, desde una perspectiva de derechos humanos y con un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana como objetivo central de las políticas a diferencia de la seguridad del Estado.

Es por eso que me parece que el título debería de ser pues Ley de Seguridad Ciudadana.

Señores Presidente, si me lo permite, compañeras, compañeros, pues viendo lo que está pasando, lo que acaba de pasar con las dos oradoras anteriores, pienso que si no se va a aceptar el cambio del título de la ley, pues los artículos van a ser accesorios y como lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal, me parece que ya no tendría mucho sentido seguir presentando el resto de las reservas.

Por eso pediría que las otras 44 reservas simplemente se añadieran al Diario de los Debates, porque ya no las voy a presentar en tribuna.

Es por eso que hoy simplemente quiero decirles que me parece que en este enorme desorden nacional y en esta enorme distracción de lo que está pasando el día de hoy aquí, es como está muriendo poco a poco también la forma de entender la libertad del Poder Legislativo.

Muchas gracias, Senador Presidente.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señor Senador, apreciamos su comprensión.

Solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, a la Asamblea si se admiten a discusión las reservas propuestas por el Senador Zoé Robledo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan a discusión las propuestas del Senador Zoé Robledo.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta a discusión, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para presentar en una sola exposición sus reservas.

Bueno, dejémoslo a final, por si regresa.

Tiene la palabra el Senador Isidro Pedraza, también para presentar en una sola intervención todas sus reservas.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Quiero que ponga atención, Presidente.

Quiero pedirle que consulte a mis compañeros, previo a que lo someta a votación, que si hay cinco que me respalden para que sea votación electrónica en el tablero.

Quiero dejar antecedente de esto, entonces, aquí hay cinco compañeros que me están respaldando.

Gracias, salieron 25.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me permite, señor Senador.

Hay cinco Senadores que apoyen la propuesta del Senador de hacer votación electrónica.

Muy bien, gracias.

Proceda, Senador, ya con mucha tranquilidad.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Con eso queda enterado que va a proceder a resolver uno por uno de mis reservas que hice, hice todas las reservas de toda la ley.

Yo quisiera que si tienen pensado hacer algo de una vez lo vayamos viendo y nos permitan que avancemos y que no sea una discusión estéril.

El artículo 1 del decreto con las modificaciones que se hicieron plantea sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto en la fracción XXIX-M del artículo, y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior, tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Resalto, lo que corresponde al objeto establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, así dice, las entidades federativas y los municipios en la materia.

La fracción XXI del artículo 73, en su segundo párrafo señala que las leyes generales contemplarán la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, como lo dice el texto del artículo 1 referido, que incluso va más allá porque pretende regular la coordinación entre los Poderes de la Unión, es decir, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo en sus distintos niveles, ambicioso propósito en una ley como es la que estamos discutiendo.

Según la interpretación de tesis aislada, P8/2007 de artículo 133 constitucional, emitida en abril de 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cito: “las leyes federales regulan atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal”.

Por ello, podemos decir que esta legislación en materia de seguridad interior es una ley federal que rebasa por mucho su capacidad jurídica, óigase bien, es una ley federal que rebasa por mucho su capacidad jurídica constitucional. De pretender no regular no a la Federación, sino a los Poderes de la Unión.

Dicha tesis también señala que las leyes generales, y cito: “son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y que no pueden ser emitidas, sigo citando textualmente, mutuo propio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a este a dictarlas. De tal manera que una vez promulgadas y publicadas deberán ser aplicadas por autoridades federales locales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México y municipales”.

Como entonces no es anticonstitucional querer legislar bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en materia de seguridad interior, a través de una simple limitada legislación federal.

O suponen que al poner que la seguridad interior se vincula con los artículos 73, fracción XXIX-M, y 89, fracción VI de la Constitución, cubre la inconstitucionalidad de legislar en una ley federal, lo que debería regularse no sólo en una ley general que establecería la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sino incluso regular la coordinación entre Poderes de la Unión que implicaría una reforma constitucional.

Demasiada ceguera constitucional darle una ley federal atribuciones para regular a los Poderes de la Unión, lo que sólo podría lograrse si el Congreso de la Unión por dos terceras partes de ambas Cámaras y el Constituyente Permanente decidiera legislar en materia de seguridad interior.

Por lo tanto, su inconstitucionalidad propongo que este artículo se suprima con fundamento para los artículos 2 y 4 del dictamen del decreto que discutimos, porque sus definiciones sobre seguridad interior son vagas, abiertas y ambiguas, por lo que ante cualquier problema de la vida de nuestro país habrá la tentación de asumirlas como afectaciones a la seguridad interior y generaría la ampliación de la comisión de las arbitrariedades que ya hemos conocido.

El artículo 2 no establece una distinción conceptual nítida entre el concepto de seguridad nacional y el concepto de seguridad interior, los contenidos de uno y otro concepto se traslapan y confunden, la supuesta definición de las acciones de seguridad interior, como aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas frente a cualquier situación que constituya riesgos y amenazas a la seguridad interior son vagas, más aún cuando se enliste el número no menor de verbos muy amplios, a saber identificar, prevenir, atender, reducir y contener.

Esta indefinición de las definiciones es clave para entender el peligro de aprobar esta ley, pues se pueden aplicar en más hipótesis de las que técnicamente serían aceptables.

Con definiciones así de amplias e imprecisas es imposible determinar y acotar de manera adecuada las acciones que las autoridades pueden llevar a cabo con distorsiones vagas, que es un riesgo y una amenaza, prácticamente cualquier situación es susceptible de aplicar el régimen especial que propone la Ley de Seguridad Interior.

En otras palabras, se autoriza para efectos prácticos cualquier acción frente a cualquier situación.

Otra razón para proponer la supresión del artículo cuarto se refiere que en la fracción XX regule inadecuadamente el uso de la fuerza al remitir a protocolos técnicamente deficientes que no pasaron por revisión externa, ni control legislativo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas lo que emitieron son manuales que no tienen ni siquiera rango legal de reglamentos.

Desde inicios de la Legislatura, en 2012, la Senadora Pilar Ortega y el entonces Senador, ahora Gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, se presentó iniciativas para expedir la legislación sobre el uso de la fuerza, y es fecha que esta comisión no dictamina, a escasos meses de que termine la Legislatura no se ha avanzado con ninguna propuesta por eso estamos solicitando derogar este artículo.

En lo que tiene que ver “que en la tierra de ciegos el tuerto es rey” y por eso ayer un Senador nos quiso sorprender con su aparente sapiencia en relación con el documento llamado “Informe del Comité Jurídico Interamericano 2012 CJI/DOC/401/12RB.4/, paréntesis, que se titula Guía para la Regulación de Uso de la Fuerza y Protección de las Personas en Situación de Violencia Interna que no alcanza el umbral de conflicto armado.

Estas imposturas intelectuales siempre traen una trampa tendenciosa porque pensando que no sabemos se atreven a citar de manera incompleta con el afán de engañar a quien escucha.

El Informe de Marras, en su conclusión cinco, señala: “en un Estado democrático la función del uso de la fuerza es atribuida de manera exclusiva a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, concepto que incluye a todos los agentes de la ley que ejercen funciones de policía, incluyendo a autoridades militares o fuerzas de

seguridad del Estado en los países en que esos ejercen las funciones de policía, no obstante la legitimidad con la que los estados pueden recurrir a las autoridades militares para ejercer estas funciones esta medida debe ser siempre de carácter excepcional aplicándose únicamente cuando las fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar la situación temporal, hasta en tanto las fuerzas policiales y de seguridad fortalecen sus capacidades y subsidiaria en el sentido de que las Fuerzas Armadas deben actuar en apoyo y bajo las órdenes de las autoridades civiles electas".

Por eso, por lo que establece dicho informe del Sistema Interamericano, señala que debe ser excepcional, subsidiaria y temporal.

Nos oponemos a que se regule en una ley lo que debería de ser excepcional y que necesita, y que de necesitarse se aplique y debería ajustarse a lo que establece el artículo 29 de la Constitución.

Por eso estamos proponiendo que se suprima el artículo 20, no hicieron las modificaciones siendo el núcleo de la rendición las autoridades civiles ante las autoridades militares y no soportaría ninguna confronta con el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución, reformado desde 2008; es decir, con posterioridad a los argumentos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el papel de auxiliaridad de las Fuerzas Armadas.

El artículo 20 señala que, sin perjuicio de las mismas que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes orgánicas, las Fuerzas Armadas sólo intervendrán mediante la emisión de una declaratoria de protección de seguridad interior cuando las capacidades de las fuerzas federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza.

O sea, el reconocimiento explícito de la autoridad civil de que no puede, y entonces el Presidente de la República designará, a propuesta de los Secretarios de la Defensa y de la Marina, al Comandante de las actuaciones a partir de un protocolo elaborado por dicho Comandante; es decir, sin controles de ninguna especie, quien conducirá a las autoridades militares, lo que sería natural en un Comandante Militar.

Y escuche bien, a las autoridades civiles, es decir, la violación flagrante de la Constitución que dice que la ciudad pública, ahora llamada por esta Ley de Seguridad Interior, es facultad exclusiva de autoridades civiles.

Y contrario a lo que señala la citada guía para la regulación del uso de la fuerza y protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcancen el umbral de conflicto armado, de que sí excepcionalmente las autoridades militares deberá apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado, deberán actuar en apoyo y bajo las órdenes de las autoridades electas.

Esta es una de las razones por que ese artículo 20 es inconstitucional y debería de ser retirado.

En relación con el artículo 5, ese artículo vulnera la Constitución, ya que según el artículo 89 debe ser el Presidente quien, en materia de Seguridad Interior, disponga de las Fuerzas Armadas, sin embargo, conforme al dictamen, le atribuye esta facultad al Secretario de Gobernación.

En el artículo 6 le da a las Fuerzas Armadas facultades de policía respecto de la Agenda Nacional de Riesgos al establecer que podrán realizar acciones preventivas a su arbitrio en el artículo 6, incluso sin necesidad de declaratoria, esto es así porque les habilita para realizar política, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente dicho riesgo.

El artículo 7 no genera controles excepcionales para verificar el respeto de los derechos humanos, pues se limita a decir, contra toda evidencia, que éstos se respetarán porque así lo dice la ley en el artículo 7.

Frente a esta medida excepcional se requerirán medidas igualmente excepcionales de protección a los derechos humanos que garanticen la accesibilidad de los mecanismos de queja y denuncia, o establecer un mecanismo de despliegue intensivo del personal del Sistema de Ombudsman, o bien estableciendo la obligación a que se generen informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos de las zonas respecto de las que se declara afectación a la seguridad interior, o incluso en información del Sistema Ombudsman se requiere antes decretar una prórroga, estos mecanismos no se incorporan en el dictamen.

Este artículo podría generar que se supedite la protección de los derechos humanos y sus garantías, en materia de seguridad interior, a un simple protocolo que podría ser emitido inclusive por un titular de área, según la normativa de cada institución, en lugar de que opere el marco de protección de los derechos en México, esto es la Constitución, los tratados internacionales, las recomendaciones y sentencias internacionales, los criterios del Poder Judicial de la Federación, así como las leyes especiales en materia de derechos humanos.

En suma, el dictamen viola el artículo 1 de la Constitución Federal que señala cómo debe de protegerse los derechos humanos en México.

El artículo 8 supone que con quitar en términos pacíficos y solo dejar que se realicen conforme a la Constitución y no sólo a las pacíficas queden excluidas de ser consideradas amenazas a la Seguridad Interior.

El problema señalado por los especialistas subsiste, pues, en contextos de afectación a la Seguridad Interior donde intervengan fuerzas castrenses, serán éstas las que determinen a su arbitrio cuando una protesta social o de raíz político-electoral se ajusta o no a la Constitución.

En el artículo 9 toda la información de seguridad nacional debe ser reservada y confidencial, este artículo imposibilita el ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental y fomenta la opacidad al determinar genéricamente que toda información sobre medidas de seguridad interior, todo lo que hagan las medidas de seguridad interior, todo lo que hagan las autoridades bajo el imperio de esta ley será considerado como seguridad nacional, lo que implica que será clasificada como de seguridad nacional y, por tanto, confidencia y reservada.

Podrían traerme un poquito de agua por ahí, una botellita de agua.

En el artículo 10 esta modificación tautológica es evidente que no puede ser más que en el ámbito de sus competencias.

Extrae la seguridad interior del régimen de legalidad, pues dispone que en una materia en la que no se aplicará el procedimiento administrativo, obstaculizando así también la aplicación de las normas sobre la responsabilidad patrimonial del Estado.

Más aún porque se mantiene la excepción en materia de seguridad interior, de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo que rompe el principio de legalidad e impide la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado privando a la ciudadanía de un importante recurso frente a afectaciones y arbitrariedades; es decir, la única legislación supletoria, en materia administrativa, no aplicaría.

Artículo 11. Esta disposición de que el presidente podrá ordenar por sí la intervención de la Federación es violatorio del artículo 119 que establece que la intervención del Gobierno Federal en una entidad federativa debe ser a solicitud de las legislaturas locales excepcionalmente del ejecutivo local señalando que sólo debe ocurrir en caso de sublevación o trastornos internos.

Genera además una facultad amplia que fortalece un procedimentalismo desbordado ajeno a los contrapesos republicanos, bastaría con esperar el receso de la Legislatura para acordarlo directamente con el gobernador y así evitar la discusión en el congreso local.

Las dos causales por las que una amenaza de seguridad interior podría motivar que se decrete una afectación y que se desplieguen las fuerzas federales suspensión de las capacidades de autoridades competentes y la insuficiente colaboración de entidades o municipios no aparecen caracterizadas con suficiente nivel de concreción pudiendo dar pie a determinaciones arbitrarias y unilaterales por ejecutivo, el procedimiento que llevará a la declaratoria es en su conjunto unilateral y favorece un divisionismo sin contrapeso del ejecutivo y rompe el pacto federal.

Artículo 14. Permite la indeterminación geográfica de medidas excepcionales de seguridad interior al disponer que no necesariamente tendrán que acotarse en un área geográfica específica de una entidad.

Con esto se diluye también la concentración del mando operativo lo que puede generar problemas operativos en territorio.

Artículo 15. No impone límites temporales precisos a las declaratorias de afectación a la teoría anterior pues señala que la vigencia de la respectiva declaratoria podrá ser de un año, pero lo que podrá prorrogarse indefinidamente por acuerdo presidencial.

Este numeral además no establece la obligación de generar reportes al términos de la vigencia de la declaratoria que brinde elementos sobre su éxito o fracaso indispensables para la decisión de la prórroga no incluye además controles progresivos para los plazos ampliados, la prórroga sería así un acto unilateral y sin ningún contrapeso.

Cálmense porque faltan todavía 14 vamos a llegar al 30.

Artículo 16. Permite que se profundice la militarización de la Seguridad Pública, incluso sin necesidad de que se emita una declaratoria de afectación de la ciudad interior, careciendo de una definición, el proyecto sobre lo que puede entenderse como grave peligro en integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno.

Agregar desde el ámbito de sus facultades es insustancial y cosmético, es una obligación legal per se.

No se atiendes las observaciones hechas a este artículo en el sentido de que no genera contrapesos ante una posible arbitrariedad presidencial en el ejercicio de esta prerrogativa.

Con este artículo y el 18 se asume y decreta per se que todo lo que hagan las autoridades bajo su definición vaga e imprecisa no podrá ser considerado seguridad pública.

Artículo 19. Adscribe la coordinación de las acciones de seguridad interior a la secretaria de Gobernación. En el artículo 19 aunque se ha demostrado que ello abre la puerta para politizar la seguridad y aunque este sexenio de Gobernación fracasó en la conducción de la seguridad.

Artículo 20. El artículo 20 ya lo había mencionado. Tranquilos jóvenes.

Artículo 21. Añaden que los grupos de coordinación interinstitucional que se forman contexto de declaratoria afectación a la seguridad interior seguirán conforme al artículo 19 de la propia ley y conforme las disposiciones reglamentarias de las Fuerzas Armadas.

En sentido contrario a lo recomendado esta adición fortalece la sujeción a la cadena de mando militar en contexto de seguridad interior no genera contrapesos civiles a este régimen.

El artículo 22. Me voy a brincar.

Artículo 23. Este artículo pulveriza el Pacto Federal, y la distribución de competencias que deberá prevalecer en México respecto de los ámbitos local y federal.

Prácticamente cuando los estados piden la aplicación de esta ley, la aplicación de esta ley al servicios del Poder Ejecutivo Federal en el que el Secretario de Gobernación tiene un papel preponderante todos sus recursos humanos y financieros que éste requiera para atender una vaga imprecisa definición de seguridad interior.

Omite disponer que las autoridades estatales y municipales de las regiones donde se apliquen declaratorias de seguridad interior adquieren la obligación de fortalecer a los policías civiles en tiempo y conforme a las metas concretas bien específicas.

La ley no establece mecanismos para verificar el cumplimiento de las responsabilidades que se enumeran en este numeral del proyecto. Y desde otra perspectiva es duda que una ley de seguridad interior se le pudiera imponer esa responsabilidad a municipios y entidades, lo que puede derivar de la inconstitucionalidad de la norma y que lo evidencia que no es la vía legal adecuada para regular este componente, 26 es una adición innecesaria tecnológica pues era ya de estudio obvio que dichas acciones tendrían que deslizarse conforme a la Constitución.

28. no obliga a la Fuerzas Armadas, ya perdí, ajusten su organización medios y adiestramiento para interponer sus labores de seguridad interior, aunque se ha demostrado ya que la formación castrense no es idónea para la realización de labores ajenas a las militares en tiempos de paz, la naturaleza de las Fuerzas Armadas en eliminar el enemigo.

Artículo 30. Fomentan la intervención militar en áreas de inteligencia civil abriendo la puerta que crezcan y aumentes las instancias castrenses diseñadas para el espionaje sin controles.

31. Amenaza a los organismos autónomos incluyendo al Sistema Ombudsman al disponer que estos deberán entregarla información con que cuentan en contextos de afectaciones a la seguridad interior dentro del artículo 31, este numeral presenta vicios de inconstitucionalidad y se asemeja a los que la comisión de los derechos humanos impugnó al presentar su acción de inconstitucionalidad con el código de justicia militar y el código militar de procedimientos penales asunto que aún no ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

32. Este artículo de ley violenta nuevamente el artículo 89 fracción VI dando atribuciones al secretario de Gobernación que son exclusivamente del presidente en cuanto a las disposición de las Fuerzas Armadas.

El 33. No establece controles robustos obligando únicamente al Secretario de Gobernación a que remita la comisión bicameral del Congreso de la Unión un informe sin precisar su contenido y sin habilitar a dicha comisión para que actúe como verdadero contrapeso.

Todas las propuestas de controles adicionales que se hicieron de la sociedad civil fueron dejadas de lado en este proyecto.

Quiero decirle presidente que le entrego este compendio de posiciones que resumen las observaciones y que estas fueron elaboradas por un colectivo de la sociedad civil y que de alguna manera las he hecho más para presentarlas en esta tribuna, así es que procedo entregarlas para que las anexe al Diado de los Debates.

Gracias, Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Pedraza.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para conocer si se aceptan a discusión las propuestas de modificación que fueron ampliamente explicadas en tribuna por el Senador Isidro Pedraza Chávez.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

Solicito a Servicios Parlamentarios resuelvan el tema del tablero electrónico, por favor.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto a la Asamblea, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?

Senador Fernández, a favor.

Senador Tapia, en contra.

Senadora Martha Palafox, a favor.

¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?

Senador Cordero, a favor.

Nuevamente pregunto, ¿si algún Senador o Senadora falta por emitir su voto?

Senadora Rosa Adriana, a favor.

De no haber ningún Senador o Senadora que falte por emitir su voto, damos cuenta de la votación, quedando de la siguiente manera:

27 votos a favor; 68 votos en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: No se admiten a discusión.

Senadora Secretaria, por favor, someta a consideración de la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión las reservas propuestas por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas señaladas por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

Quienes estén a favor de que se acepten, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

De lo contrario, quienes estén porque no se admitan, manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Le informo, Presidente, que no se aceptan a discusión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, para presentar sus reservas.

Pide sean presentadas en tres intervenciones.

Presentará en este momento la reservación del artículo 1.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Solicité hace un rato, Senador Presidente, presentarle las reservas, hace un momento, si me lo autoriza usted.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Con mucho gusto, Senador. Se lo agradecemos todos.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias.

He solicitado estas reservas, planteando que los artículos se desechen, y explicaré algunas razones, Senador Presidente.

Lo he solicitado porque, insisto, en que esta Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, porque si vemos, compañeras y compañeros, las modificaciones al artículo 1, insisto en que se pretende hacer creer, que como la seguridad interior, se ha dicho, es una rama, una vertiente de la seguridad nacional, entonces el Congreso de la Unión sí tendría facultad para legislar sobre seguridad interior en virtud de su facultad expresa de legislar sobre seguridad nacional.

Sin embargo, también lo he reiterado, y a pesar de esa interpretación a modo, la fracción VI del artículo 89 constitucional, claramente las menciona como dos materias distintas.

Si la seguridad interior fuese, así se expresa en mi reserva, una vertiente de la seguridad nacional, entonces, el legislador, no sólo no la habría mencionado por separado, sino que ni siquiera la habría mencionado, pues ello resultaría reiterativo.

También he planteado que las Fuerzas Armadas, lo he planteado en una señal de alerta, podrán realizar acciones de seguridad interior, según el dictamen que estamos votando, de forma permanente y sin necesidad de declaratoria de protección a la Ley de Seguridad Interior.

Me preocupa lo que los artículos 6 y 26 señalan, expresamente, que las Fuerzas Armadas no requerirían, compañeras y compañeros, la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior para atender los riesgos a la seguridad nacional.

Por su parte, el artículo 20 señala también que las Fuerzas Armadas sólo intervendrán mediante declaratoria.

¿Qué significa esto? Pues, que parecería, entonces, que las Fuerzas Armadas requieren declaratoria para actuar en el caso de amenazas a esta llamada Seguridad Interior.

Pero resulta, Senador Presidente, que el artículo 4, fracción II dice: “Que las amenazas a la seguridad interior son las mismas que las amenazas a la seguridad nacional.

Y en la Ley de Seguridad Nacional de Fuerzas Armadas no necesitan de declaratoria alguna para atender dichas amenazas, y ahí está el grave riesgo de la militarización.

Por eso insisto, de manera tramposa se está permitiendo la actuación abierta y permanente de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Interior sin que medie declaratoria, sin importar si es para atender riesgo o amenazas. Por eso es una trampa.

También he presentado mis reservas porque no estoy de acuerdo en que la autoridad civil quede subordinada a la autoridad militar, porque a pesar de que el artículo 18 de este decreto, señala que las acciones de seguridad interior no tendrán por objeto sustituir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las fracciones del artículo 20 claramente establecen lo contrario, pues, el Ejecutivo designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas como coordinador de los grupos interinstitucionales, que en términos de este artículo 21, el siguiente, serán integrados por cada una de las autoridades participantes, incluidas las civiles.

Y dicho comandante establecerá las responsabilidades a las autoridades militares y civiles participantes.

Esta es, Senador Presidente, una clara y grave subordinación de la autoridad civil a la militar.

Se establece también entonces la obligación de las autoridades de entidades federativas, de municipios y de demarcaciones territoriales, de dar cumplimiento a todo lo que le sea solicitado por la autoridad militar.

Luego entonces, las autoridades de las entidades federativas, de los municipios, de las demarcaciones territoriales quedan obligadas a entregar cualquier clase de información que la autoridad militar le solicite, la autoridad militar puede entonces, insisto y lo subrayo, solicitar cualquier información siempre que argumente o pretexte que se trata de atender los fines de la declaratoria.

Por eso he presentado la reserva, insisto, porque no estamos de acuerdo a que la autoridad civil se subordine a esta autoridad militar, porque insisto, se establece la obligación de las autoridades federativas, de los municipios, de las demarcaciones territoriales, de rendirle cuentas a la autoridad coordinadora, que según el artículo 20, sería de carácter militar.

Se señala, ciudadano, Senador Presidente que las Fuerzas Armadas realizarán entonces labores de seguridad interior con sus propios medios y adiestramiento, y ello pues resulta comprensible si consideramos que esta ley equipara seguridad interior con seguridad nacional, lo que resulta alarmante es, compañeras y compañeros, que con ese adiestramiento los militares puedan asumir el control en un determinado territorio por virtud de una declaratoria y que las autoridades civiles tengan que subordinarse a ellos y cumplir con lo que les soliciten, y

con todas esas atribuciones de esta autoridad militar, sobre la autoridad civil, a mí me parece que es insostenible que nieguen de que estamos hablando de militarizar a nuestro país.

También presenté las reservas porque se obliga a los órganos autónomos a entregar información a estas autoridades de seguridad nacional, órganos como la Comisión Nacional de los derechos humanos, el INE, el IFT e incluso algunos órganos autónomos de las entidades federativas, quedan obligados a entregar cualquier información que le sea requerida por una autoridad federal, civil o militar, que lleve a cabo acciones de seguridad interior, peor aún, nosotros alertamos que el artículo 26 señala que las acciones en materia der riesgos a la seguridad interior son permanentes y no requieren de una declaratoria, por lo que se concluye, Senador Presidente, compañeras y compañeros, que las autoridades de seguridad interior podrían solicitar la información en cualquier momento y los órganos autónomos estarían obligados a proporcionarla, insisto, sin necesidad de una declaratoria.

Abundo, es muy sospechoso que esta facultad se esté proporcionando en el contexto del actual proceso electoral.

A mí me parece que tenemos que meditar, porque yo veo, y espero que muchos lo vean así, la mayoría un claro riesgo de que las instituciones de seguridad nacional sean utilizadas para fines políticos de este gobierno, tal y como sucedió con los regímenes priistas del siglo XX, con la Dirección Federal de Seguridad y digo esto, porque invito a que no olvidemos el antecedente del espionaje telefónico llevado a cabo por el gobierno a políticos, a activistas, a periodistas y a otros personajes.

También presenté estas reservas compañeras y compañeros, porque percibo débiles controles democráticos a la actuación de las Fuerzas Armadas, es decir, la intervención de la Comisión Bicameral, no soy el primero que lo digo, es testimonial, en el contexto de esta legislación y si la intervención dela Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, de este, Congreso de la Unión, se plantea como la misma que establece la Ley de Seguridad Nacional, misma que quiero recordar, únicamente le otorga la facultad de solicitar y recibir informes, así como de emitir recomendaciones al Consejo Nacional de Seguridad.

Y sigo recordando que no serían vinculantes, nosotros advertimos un riesgo, el riesgo de que la Comisión no contaría entonces con facultades de contrapeso, con facultades de control democrático, pero realmente efectivos, que pudiesen permitir establecer límites a la actuación de la autoridad de seguridad nacional.

Es más, puedo sostener, por el contrario que sus atribuciones para acceder a la información se encuentran limitadas por el artículo 59 de dicho ordenamiento.

También solicité reservarme varios de los artículos, Senador Presidente, porque me parece que la Ley de Seguridad Interior garantizaría que el Ejército siga indefinidamente en las calles haciendo labores que no le corresponden.

Permítame ir a detalle, desde hace años yo quiero recordar que hemos estado planteando muchos, en distintos sectores, la necesidad de trazar una ruta para que las Fuerzas Armadas dejen de realizar actividades de seguridad pública, pero esta ley , compañeras y compañeros, lo quiero insistir, avanza en sentido contrario, permite la presencia indefinida delas Fuerzas Armadas en dichas labores.

Porque, insisto, lo subrayo, aunque la declaratoria de protección a la seguridad interior, tiene vigencia de un año, el Presidente de la República en este contexto, en esta propuesta de legislación, podría prorrogar todas las veces que se le ocurriese y yo insisto que es falso que esta ley vaya a obligar a los estados a depurar a fortalecer sus instituciones policiales.

Yo creo que este es un tema que debemos de seguirle flexionando, porque no debemos olvidar compañeras y compañeros, que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obligó a los ejecutivos de nuestras entidades desde el 2009 a la certificación de sus policías y no cumplieron tan fue así que el Congreso que representamos tuvo que reformar dos veces más el artículo transitorio de esa ley, para ampliarles el plazo, porque dos veces no cumplieron con la certificación.

Quiero comentar, Senador Presidente, que hemos reconocido en varios momentos que el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles tiene que ser gradual, muchos aquí lo hemos comentado, pero pareciera que

el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados quieren seguir utilizando a las Fuerzas Armadas para que hagan el trabajo que ellos no han hecho.

Y yo vuelvo a preguntarme y les pregunto a ustedes, ¿hasta cuándo tendremos entones cuerpos confiables, sobre todo si contrastamos este planteamiento con el análisis de los subejercicios de año tras año hay en los recursos presupuestales que se dedican precisamente a fortalecer la seguridad de las entidades?

Por eso planteo con mucha responsabilidad que hay que exigirle al Presidente, que hay que exigirle a los gobernadores a que asuman su responsabilidad y pongan un plazo para contar con instituciones policiales confiables para que las Fuerzas Armadas, insisto, dejen de realizar las labores que no le corresponden.

Y subrayo, para concluir, Senador Presidente.

Que no se pretenda engañar a la gente diciendo que esta ley es una exigencia de la sociedad, eso es falto, compañeras y compañeros, lo que la sociedad quiere lo hemos repetido varias veces a lo largo de los últimos días, es que el Estado cumpla con la obligación de garantizar seguridad.

Así como han sido buenos para prometer en campaña que van a otorgarle la seguridad a la ciudadanía, que entonces sean también buenos para cumplir.

La presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, con esto concluyo, no ha disminuido los niveles de incidencia; no ha disminuido los niveles de violencia en más de diez años. Por ello, el gobierno ya debiese tener claro, y nosotros también, que se debe cambiar de estrategia, y esta ley, lo tengo que volver a subrayar, esta ley, que está a punto de votarse, garantiza que sigamos con la misma estrategia que no ha resuelto la problemática, y es entonces cuando debemos reflexionar que debiese ser rechazada en su conjunto y convocar a este gran debate nacional para que podamos encontrar una estrategia que sí sirva para darle la seguridad que está planteando la mayor parte de nuestro pueblo.

Le agradecería que pudiese incorporarse al Diario de los Debates de manera puntual las reservas que presenté y que acredité debidamente ante esta Mesa Directiva.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Con mucho gusto, Senador Benjamín Robles, le agradezco su participación.

Solicito, Senadora Secretaria, consulte a la Asamblea si son de admitirse a discusión las reservas propuestas ampliamente por el Senador Benjamín Robles en la tribuna.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Benjamín Robles.

Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar reservas al artículo 1, 5, 6, 15, 16, 21 y 26, todo esto en una sola intervención.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Antes de presentar mis reservas les platico una novedad.

Se acuerdan que les comenté que esta mañana antes de que empezáramos a discutir esta ley infame, ya Osorio Chong y Videgaray les habían anunciado a los Estados Unidos una reunión de seguridad con la plana mayor que esta ley se iba a votar, obviamente los felicitaron, yo creo que los invitaron también a cenar, porque al final de cuentas la ley vino de allá.

Pero ya terminada la reunión este par de nacionalistas, Osorio Chong y Videgaray, hacen declaraciones saliendo y dicen que "no nos preocupemos, que nos pueden patear del Tratado de Libre Comercio, lo que nos haría mal, lo hemos dicho, pero que en seguridad nos mantenemos firmes".

O sea que los "patotus" norteamericanos, además de celebrar la nueva ley, les dijeron que no se preocupen que si el TLC se anula vamos a seguir obligados en materia de seguridad, son muy generosos, vamos a seguir matando aquí, vamos a seguir deteniendo todo lo que ellos ordenen, vamos a seguir dejándolos entrar para que tengan el control del país en materia de seguridad, son realmente una monada estos funcionarios norteamericanos y lograron los nacionalistas Videgaray y Osorio Chong lograron ese gran mérito, vamos a seguir siendo obligados a cuidar los intereses de Estados Unidos en México.

El artículo 1, lo hemos señalado ya todos, la norma del dictamen debe decir se siente por seguridad interior la preservación de los derechos humanos de los habitantes al interior del país en los casos de trastornos internos que los vulneren y de su defensa frente al fenómeno natural.

La seguridad interior, se ha dicho aquí y lo repetimos, porque esa es la gran trampa, la seguridad interior no es seguridad pública, dicen pues no tienen por fin la prevención, investigación y persecución de delitos, la seguridad interior tampoco es seguridad nacional porque no conlleva a proteger a la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país, preservar la soberanía, independencia nacionales y la defensa del territorio, mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, conservar el unidad del Estado, defender en legítima defensa al Estado respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional y preservar la democracia.

El artículo 1 del dictamen es ambiguo, nunca define qué es la seguridad interior y sus diferencias con la seguridad pública y la seguridad nacional.

Si como dice el artículo 1 del dictamen, la seguridad interior es parte de la seguridad nacional, por qué no se modificó la Ley de Seguridad Nacional, como por aquí alguien lo decía del partido del PAN para alcanzar los fines que persiguen el dictamen, esa trampa y ese enredijo.

Tres. La seguridad interior sólo puede fundarse, lo hemos dicho, en cuatro artículos constitucionales, 1, 29, 89, fracción VI, y el 119 de la Constitución, o sea, suspensión de garantías.

La aberración jurídica consiste en considerar a la seguridad interior parte de la seguridad nacional porque así lo dice punto sin ninguna explicación, es para que indebidamente y tramposamente sostener la competencia del Congreso de la Unión para legislar en esta materia, el artículo 73 no le concede al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de seguridad interior.

Artículo 5. La norma del dictamen debe decir artículo 5 la aplicación de esta ley corresponde a las autoridades que prevén los artículos 29 y 119, párrafo de la Constitución, las que atenderán los procedimientos que estos preceptos establecen.

Justificación de la reserva.

El artículo 5 del dictamen viola los artículos 29 y 119 de la Constitución porque no sigue los procedimientos y salvaguardas que esas normas establecen.

Dos. La Ley Secundaria, como la que se pretende aprobar, no puede establecer autoridades y procedimientos diferentes a los que establece la Constitución.

Tres. El fundamento de la Ley de Seguridad Interior sólo puede ser jurídicamente la Constitución y no una norma de su misma jerarquía, como es la Ley de Seguridad Nacional.

El fundamento constitucional para cualquier Ley de Seguridad Interior son los artículos, repetimos, 1, 29, 89, fracción VI, 119 y 129 de la Constitución General de la República.

Artículo 6, justificación de la reserva.

El artículo 6 del dictamen confunde seguridad nacional con seguridad interna, seguimos en esa manipulación.

El artículo 6 del dictamen está regulando cuestiones que deberían, en todo caso, incluirse en la Ley de Seguridad Nacional, pero no en una Ley de Seguridad Interior.

Tres, el artículo 6 del dictamen es inconstitucional porque remite al Plan Nacional de Desarrollo, que es una norma administrativa, que no constituye una ley y que, por tanto, no es idónea constitucionalmente para determinar competencias de las autoridades.

El artículo 6 del dictamen violenta el principio de legalidad y el de reserva de ley.

Sólo a través de la Ley en Materia de Seguridad Nacional se puede establecer atribuciones que no por medio de lineamientos como establece, fijará lineamientos a los estados como si fueran sus superiores.

Artículo 15. La norma del dictamen, no leo la norma completa, como está establecida, la norma del dictamen debe decir:

Artículo 15. La seguridad interior se regirá por lo dispuesto en los artículos 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.

Hemos dicho que es la única manera de que se dé esta truculencia.

Justificamos la reserva por lo siguiente.

El artículo 15 del dictamen es inconstitucional porque vulnera los procedimientos de los artículos 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.

El artículo 15 del dictamen desarrolla procedimientos ad hoc sin ningún sustento en la Constitución.

El artículo 15 del dictamen confiere atribuciones insólitas y absolutas al Presidente de la República.

Las determinaciones, acuerdos y las soluciones que prevé el dictamen no son susceptibles de control constitucional, ni jurisdiccional, ni legislativo.

Quinto. El Presidente del Consejo de Seguridad Nacional carece de contrapesos, se viola el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución.

Artículo 16. La norma del dictamen debe decir: “se elimina justificación de la reserva”.

El artículo 16 y el dictamen es inconstitucional porque vulnera los procedimientos de los artículos 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.

El artículo 16 y el dictamen desarrollan procedimientos ad hoc sin sustento en la Constitución.

El artículo 16 del dictamen confiere atribuciones metaconstitucionales al Presidente de la República.

Cuatro. Son facultades propias de un dictador.

Cinco. Las determinaciones que prevé el dictamen no son susceptibles de control constitucional, ni jurisdiccional, ni legislativo.

Sexto. El Presidente carece de contrapesos, se viola el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución.

Artículo 21. La norma del dictamen debe decir, no lo leo completo, justificación de la reserva.

El artículo 21 del dictamen es inconstitucional porque vulnera los procedimientos del artículo 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.

El artículo 21 del dictamen desarrolla procedimientos ad hoc sin sustento de la Constitución.

El artículo 21 del dictamen no precisa con respecto a los derechos humanos, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiacas y armadas.

Cuatro. Las remisiones a otras disposiciones que se realizan son vagas, no garantizan la certeza.

Las acciones que prevé el dictamen no son susceptibles de control constitucional, ni jurisdiccional, ni legislativo, se viola el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución.

Respecto del artículo 26 del dictamen.

Justificación de la reserva, artículo 26 se elimina.

El artículo 26 del dictamen es inconstitucional porque las acciones para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior, que son de carácter permanente, no son susceptibles de control constitucional, jurisdiccional o legislativo en violación, entre otros, a los artículos 14, 16, 17, 103 y 107 constitucionales.

No puede haber Estado de derecho si hay decisiones de autoridad que están exentas de control de constitucionalidad y de convencionalidad.

El artículo 26 instala en el país un Estado de suspensión de garantías permanente sin seguir los procedimientos del artículo 29 constitucional.

La norma pretende justificar el espionaje permanente en el país respecto a toda la población.

Es obvio que este dictamen y su contenido es constitucional integralmente, no es ningún marco para legalizar o para establecer condiciones para la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, sea lo que sea, y menos en la seguridad pública.

Esta legislación es una total aberración, es verdaderamente monstruosa, es propia de una dictadura.

Solamente en la mentalidad de ésta que entendemos como una, realmente una actitud autoritaria, dictatorial se puede dar estas facultades al Presidente de la República con una capacidad omnímoda de manejar al Ejército a su antojo, como lo hemos señalado punto por punto, y permitir que las Fuerzas Armadas se instalen en todo el país y establezcan un riesgo brutal para la democracia de este país, como lo hemos visto en toda América Latina, en algunas etapas del Estado mexicano, y debe de rechazarse definitivamente, no es racional que ustedes, que van a votar a favor, establezcan esta monstruosidad al Estado mexicano.

Muchas gracias, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Bartlett.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aceptarse a discusión los razonamientos del Senador Bartlett, en relación a sus reservas.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las reservas presentadas por el Senador Bartlett.

Quienes porque se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aceptan a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Consulte a la Asamblea si las reservas presentadas por el Senador Manuel Merino Campos, son de admitirse a discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas de reservas del Senador Merino.

Quienes estén porque se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se acepten a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aceptan a discusión Presidenta

La presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra para presentar sus reservas el Senador Rabindranath Salazar Solorio.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa.

Compañeras, compañeros Senadores:

Podemos sonar reiterativos, pero es necesario hacer un esfuerzo más por generar conciencia, tantos organismos nacionales e internacionales, tantas personas, tantas personas no podemos estar equivocados. Hagamos un recuento, más de 240 organizaciones y más de 200 académicos expertos que conforman el colectivo Seguridad sin Guerra.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 23 organismos estatales también en materia de derechos humanos, Amnistía Internacional, universidades muy prestigiosas de nuestro país como la UNAM, como la Universidad de Guadalajara, como la Universidad Iberoamericana, entre otras, un colectivo de 40 doctores en derecho, provenientes de El Colegio de México, del CIDE, de la Ibero, del ITAM, de la UNAM, de la Universidad Anáhuac, y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e incluso el Parlamento Europeo han expresado su total rechazo por la aprobación de esta ley de seguridad interior.

De esta larga lista de órganos e instituciones del sector público y privado, nacionales e internacionales, yo les preguntaría, que pudieran decirme, una sola organización civil, un solo colectivo, una ONG que esté a favor de esta ley.

Dígame una sola institución académica o alguna asociación, gremio o agrupación de juristas que hayan avalado los contenidos de este dictamen, díganme un solo organismo internacional que afirme que esta ley no transgrede los derechos humanos.

Ante un notorio y absoluto rechazo por los sectores ya mencionados es incongruente que quienes protestamos este digno cargo el 31 de agosto del 2012, hayamos olvidado guardar y hacer guardar la Constitución, y de no ser así, que el pueblo nos lo demande.

Demandas que han estado presentes durante todo el proceso legislativo de la que será considerada sin lugar a dudas una de las leyes con mayor rechazo en nuestra historia, pese a esto, y en congruencia con quienes nos exigen cumplir la ley hacemos la presentación de las siguientes reservas.

En primer lugar, proponemos en el artículo 2, hacer diferencia entre seguridad interior y seguridad nacional en los conceptos propuestos, ya que los fines de ambos tienen alcances y repercusiones distintos, situación que de mantenerse en su actual redacción generaría ambigüedades, falta de claridad y conceptos reiterados que invaden funciones y competencias, lo que generaría una terrible confusión en la posible aplicación de esta ley.

El dictamen propuesto no respeta en su artículo 2 definiciones ya establecidas en la norma general que regula la seguridad pública.

Lo anterior refleja una gran premura por emitir una ley evidentemente inconstitucional.

El cuerpo normativo propuesto no es armónico en sus artículos 4 y 29, con otras disposiciones tal como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que debe existir un mínimo razonable que vincule la labor que se pretende regular con aquellos mecanismos ya establecidos y diseñados que se encuentran incorporados en dicha ley, la cual contiene definiciones, mecanismos y ejes de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad pública.

Por lo tanto, proponemos incluir definiciones y sujetarse a los lineamientos y mecanismos establecidos por la Ley General del Sistema nacional de Seguridad Pública, para evitar duplicidad y contradicción de definiciones.

La redacción del artículo 7 no restringe de manera expresa que las Fuerzas Armadas realicen actividades de investigación de delitos, lo anterior generaría invasión de funciones en materia de investigación y la representación social, lo cual contraviene al artículo 21 de la Constitución.

Por ello proponemos incluir una restricción expresa para evitar que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación delictiva que competen de manera exclusiva al Ministerio Público.

La redacción del artículo 31 exhibe autoritarismo y discrecionalidad para que instituciones de seguridad interior puedan acceder a la información considerada confidencial resguardada por autoridades federales, locales, municipales y organismos autónomos.

Esta situación atenta en contra de derechos humanos, instrumentos internacionales y el derecho constitucional a la protección de información personal y el debido proceso, previstos también en los artículos 6 y 14 de la Constitución, respectivamente.

Por ello, proponemos adecuar la redacción con el objeto de que todas las solicitudes de información por parte de las instituciones de seguridad interior sean acompañadas por un mandato judicial que fundamente y motive dicha actuación.

Asimismo, proponemos adicionar un Artículo Transitorio Sexto para que el Congreso de la Unión en un término de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto expiran las reformas correspondientes a la ley

general que regulan la seguridad pública a fin de armonizar sus contenidos conforme a lo que establece la Ley de Seguridad Interior.

Compañeras y compañeros Senadores, reiteramos, esta es una ley hecha al vapor, como otras tantas que han sido en perjuicio de la Nación, son los preparativos para la justificación de la represión social, el hostigamiento y la persecución, es una ley sin beneficio a la ciudadanía un intento de legalizar y dar continuidad a la fallida estrategia de seguridad implementada hace más de una década.

Es importante señalar que el problema de la inseguridad tal como se plantea y como ha quedado demostrado, no debe ceñirse únicamente en atacar la violencia con más violencia, si no que el problema debe atenderse de fondo, con políticas que busquen atender el origen de la inseguridad, es decir problemas tan evidentes como el desempleo, la gran brecha de desigualdad y la falta de acceso a la educación y sobre todo el combate a la corrupción y a la impunidad.

Desde esta tribuna reconocemos las relevantes funciones de nuestras Fuerzas Armadas, instituciones que, a nivel nacional, gozan con los mayores índices de confianza por parte de los mexicanos. Un cuerpo castrense que debe estar en óptimas condiciones para cumplir con su prioritaria tarea, la defensa de nuestras libertades, el cuidado de la soberanía nacional y de nuestra independencia, y no con las funciones que a partir de esta Ley se le pretenden dar.

Por su atención, muchas gracias.

La presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de admitirse a discusión las reservas presentadas por el senador Rabindranath Salazar Solorio.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Rabindranath Salazar.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por que no se admita, favor de levantar la mano

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, tiene ahora el uso de la palabra para presentar sus reservas el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Adelante, Senador Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, Presidente. Con su venia.

Compañeras y compañeros:

Una de las observaciones que han hecho Organismos Internacionales de Derechos Humanos, Organismos Nacionales, la Sociedad Civil, y todos aquellos que coinciden con nosotros en que esta ley no va a resolver el problema añejo de la violencia en México, tampoco va a resolver el problema lacerante de la inseguridad que vive el país.

Sostienen que esta ley tiene muchas ambigüedades e imprecisiones.

Nosotros sostenemos, que al establecer parámetros para la actuación de fuerza de seguridad con la finalidad de no afectar derechos humanos o no utilizar medidas innecesarias o desproporcionadas, es necesario determinar normativamente, con toda precisión los medios, métodos, objetivos, límites, sujetos intervinientes, y condiciones de determinación de las operaciones. Todo esto está exento en las definiciones que esta ley tiene.

Al tener estas ambigüedades, lo hemos dicho con mucha claridad, se expone al gobernado a que sea víctima del abuso que se da en la interpretación de una ley que se presta para todo.

¿Por qué lo reprimiste?

¿Por qué aplicaste la fuerza letal en contra de los manifestantes? Por una sencilla razón, será la excusa, porque representaban un riesgo y una amenaza para la seguridad interior.

Este argumento, este argumento será suficiente para que en México se den situaciones que lamentar, y el que las ejecute será protegido por la ley, y concretamente por el artículo 2 y 4 de la misma.

La ambigüedad es peligrosísima, porque expone a los gobernados a la arbitrariedad, producto del desconocimiento o producto de una mala interpretación de la ley.

El artículo 3 y el artículo 9 no consideran un elemento que es esencial en cualquier ley, el tema de la transparencia, porque todo lo remiten a que la actuación de esta ley y su aplicación será de carácter de seguridad nacional, y si tiene ese carácter que se encuadra en este concepto, entonces será obligatorio que no se informe absolutamente a nadie.

¿Qué dice la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 108, párrafo segundo?

Como concreción legislativa de ese mandato constitucional: “En ningún caso se podrá clasificar documentos antes de que se genere la información”. Esto significa que queda prohibida la clasificación automática y a priori de la información.

A los que van a votar hoy esta ley a favor, están impulsando con toda premeditación, alevosía y ventaja, que la impunidad siga cabalgando sin control a lo largo y ancho de México.

El artículo 28 plantea parámetros de actuación de las Fuerzas Armadas para realizar actividades policiales. Entiéndanlo, compañeros Senadores, compañeras Senadoras. Nuestro Ejército no fue preparado para actividades policiales, y el hecho de que se reemplace criterio de seguridad pública por métodos militares, sin duda que va a incrementar en grado significativo la letalidad de las operaciones y la violación de derechos humanos. Lo seguimos sosteniendo.

Por su propia naturaleza, nuestras Fuerzas Armadas no están entrenadas para actividades policiales, que son básicamente preventivas, disuasivas y de contención de la acción delictiva.

El adiestramiento militar no está encaminado como el policial a reconstruir el tejido social, sino a solventar amenazas de la manera más precisa y definitiva posible.

Por eso, por estas razones les pedimos, compañeros Senadores, compañeras Senadoras que el artículo 2, 3, 4, 9 y 28 sean desechados del dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si las reservas hechas por el Senador Demédicis a los artículos 2, 3, 4, 9 y 28 son de aceptarse a discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las reservas presentadas por el Senador Fidel Demédicis.

Quienes estén porque se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila para referirse a los artículos 4, 6, 8 y 32.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia.

El rechazo social a la Ley de Seguridad Interior se sustenta en la desconfianza hacia el Gobierno Federal, quien durante sus cinco años de gestión se ha caracterizado por actuar a través de mentira, de engaño, flagelando con cada decisión los derechos humanos de la población.

Ante una inminente militarización del país, la ciudadanía no puede confiar en las promesas y los buenos deseos del Gobierno Federal.

La palabra empeñada no sirve de nada, porque de antemano saben que detrás de esos compromisos se encuentra la mentira y la traición.

La disyuntiva para la población es difícil, porque el Gobierno Federal únicamente le propone una solución: legalizar la presencia del Ejército en las calles, de ahí que la población tenga que optar entre vivir en medio de una guerra sin cuartel o aceptar la restricción de derechos en pro de una supuesta pacificación del país.

Lamentablemente estos son los dos escenarios que plantean la aprobación o no de este dictamen. Por ello, quienes nos oponemos a esta ley estamos convencidos que la salida no será mantener a los militares en la calle, y que el Gobierno Federal debería ser capaz de replantear su estrategia de seguridad, aunque el sentido de mi voto en lo general ha sido en contra, frente a una mayoría ajena a las demandas sociales es necesario corregir en lo más elemental el proyecto de dictamen para que la afectación a los derechos de los ciudadanos sea con el menor daño posible.

Y en este sentido vengo a presentar reserva a los artículos 4, 6, 8 y 32 del dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

En cuanto al artículo 4 del proyecto de dictamen, se propone en primer término precisar sobre la declaratoria de protección a la seguridad interior que la misma deberá tener lugar no sólo ante amenazas, sino también para contener y reducir los riesgos de seguridad interior.

Lo anterior, con la finalidad de aclarar en la definición que el mandato que habilita la intervención de la Federación para realizar acciones de seguridad interior es necesario para riesgos y amenazas a la misma, puesto que si no se contemplan los riesgos se dejaría al arbitrio y la discrecionalidad la intervención en los casos de tal naturaleza, como lo precisa la fracción III del artículo 4 del proyecto.

El riesgo contra la seguridad nacional es una situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza, por ende, las acciones dirigidas a contenerlos y reducirlos, debe realizarse con apego a un mandato expreso, como lo sería la declaratoria de protección.

En este sentido, el objeto en esta reserva se ciñe a modificar la fracción IV del artículo 4 del proyecto de Ley de Seguridad Interior con la finalidad de que la declaratoria de protección a la seguridad interior sea necesaria para habilitar la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas en la realización de acciones que contengan y reduzcan también los riesgos y no únicamente las amenazas.

En cuanto a las reservas al artículo 6, se propone modificarlo en razón de que su redacción actual permite que las autoridades federales incluidas las Fuerzas Armadas en el caso de riesgos actúen sin necesidad de que medie la declaratoria de protección, según a través de políticas, programas y acciones para identificarlos, prevenirlos y atenderlos.

Sin embargo, es oportuno considerar seriamente que no puede ni debe permitirse se actúe en la discrecionalidad y sin previo mandato, por tanto la modificación al artículo 6 consiste en aclarar que para la implementación de las políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender los riesgos a que se refiere la Agenda Nacional de Riesgos, deberá mediar previa declaratoria de protección a la seguridad interior que habilita el despliegue de tales acciones.

En cuanto a la modificación propuesta al artículo 8 de la presente minuta, se justifica en razón de una serie de contradicciones que contiene dicho precepto en el marco de los derechos humanos y el texto constitucional, dicha contradicción estriba en el hecho de que el artículo 9 constitucional no limita el derecho a la movilización y la protesta social a temas político-electorales, pues solo establece como únicos requisitos que éstas sean con fines lícitos, por lo tanto, en los términos en que ha sido aprobado la minuta, abre la puerta a que las movilizaciones y protestas de otra naturaleza sí puedan ser consideradas amenazas a la seguridad interior, situación que la luz de la doctrina y del texto constitucional representaría una violación a los derechos humanos.

Por otro lado, si bien, el texto del artículo 8 del presente dictamen pretende salvaguardar el derecho a la protesta social, cuando se trate de motivos político-electorales bajo el análisis, el cuerpo de la ley propuesta, dicha acción simula una simulación, ello en razón de que el mismo ordenamiento define y distingue lo que debería entenderse como amenaza a la seguridad interior y riesgo a la seguridad interior.

Luego entonces, la forma en que se encuentra redactado el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior permitiría que las fuerzas federales y de manera preocupante, las fuerzas castrenses pudieran intervenir para la desmovilización de protestas sociales, incluso aquellas que fueran en materia político-electoral, toda vez que si son consideradas como un riesgo para la seguridad interior sería materia de intervención.

Bajo estas consideraciones se propone al Pleno de este Senado de la República, modificar el artículo 8 del presente dictamen para armonizar su redacción con el texto del artículo 9 constitucional, así como para asegurar que las movilizaciones de protesta social, bajo ninguna circunstancia sean consideradas como amenaza de riesgo a la seguridad interior.

Y, finalmente, se propone modificar el artículo 32 del dictamen, a fin de que la facultad de control por parte del Congreso de la Unión se adecúe conforme a lo descrito en la Ley de Seguridad Nacional.

Pido a la Presidenta, pueda ser incorporado el texto íntegro de las reservas.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Le pido a Servicios Parlamentarios, incorporar el texto íntegro al Diario de los Debates.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse las reservas 4, 6, 8 y 32 para su discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador David Monreal.

Quienes estén porque se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias.

Le pido a la Secretaría también someter a la consideración de la Asamblea si se admiten a discusión las reservas planteadas por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, que son de los artículos 4, 27 y 33.

La Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora María del Pilar Ortega.

Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Al no encontrarse, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, si son de aprobarse las reservas a los artículos 4, 29, 30 y 31, para su discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, si se admite a discusión las reservas presentadas por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Consulte a la Asamblea si son de aprobarse las reservas hechas por la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés a los artículos 5 y 11 para su discusión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de reservas presentadas por la Senadora María del Rosario Guzmán.

Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantarla mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

No se encuentra en el recinto, favor de consultar la Secretaría a la Asamblea si son de admitirse a discusión las reservas hechas a los artículos 5, 6, 11, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 28 y 30.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Luis Humberto Fernández.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admiten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión las reservas, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Consulte ahora la Secretaria a la Asamblea si son de aceptarse a discusión las reservas hachas por la Senadora Sylvia Martínez Elizondo, a los artículos 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20 y 26.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Sylvia Martínez.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Someteremos ahora a la Asamblea si son de admitirse a discusión las reservas a los artículos 6, 18 y 33, hechas por la Senadora Andrea García García.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Andrea García.

Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra, para preservar reservas a los artículos 8, 9, 10 y 31, la Senadora Layda Sansores.

La Senadora Layda Sansores San Román: Presidenta, le pido que se abra el tablero electrónico para que se vote mis reservas. Aquí estoy, yo no he salido en todo el día, me fui aquí a buscar mis papeles para estar aquí presentable, para estar con ustedes, le pido que cinco personas, cinco compañeros, todo el día he estado aquí, entonces ya regresé para estar presente.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Es usted apoyada por cinco compañeros. Se abrirá el tablero electrónico, Senadora, adelante, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: Ya están cinco personas. Gracias.

Bueno, como decía el Senador Bartlett que más estaba yo escuchando ahí su intervención, hoy estuvieron en Washington ya presumiendo además la ley, aparte de que no importa que no haya Tratado de Libre Comercio y que aquí en materia de seguridad estamos firmes para servirles y seguir recorriendo la frontera, el muro de Trump hasta la frontera con los centroamericanos para que no los molesten, no los perturben a ellos, que aquí se queden los muertos, aquí se pongan las cruces.

Pues también fueron a presumir que ya estaba aprobada esta ley, ni habíamos empezado a votar, para que vean cómo los conocen de bien, y aplausos.

Yo no sé cómo se sentirán aquí las Fuerzas Armadas, pero yo que ellos le pediría a Peña Nieto que no promulgue esta ley, los están usando, los usan como coartada por su incapacidad, por haber renunciado, y esto es insólito, nunca un Presidente de la República había renunciado a una responsabilidad fundamental que es la de la seguridad pública.

Y él lo hizo porque aquí le revuelven y que seguridad interior, hay matices, todo son artilugios que se usan.

Y creo que, ¿cómo dice compañero? No le puede pedir que se siente, por favor, porque me interrumpe, no sé si me está hablando a mí, es que habla muy fuerte.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Continúe, Senadora, por favor. Les pido a los compañeros y compañeras que pongan atención.

Continúe, Senadora.

La Senadora Layda Sansores San Román: En el artículo 8 aquí vinieron a decir, no tiene que ver contra las protestas y las movilizaciones sociales, le quitaron lo pacífico, pero no le quitaron la discrecionalidad de que deben ser apegadas a la Constitución, quién va a decir si son apegadas a la Constitución.

Y decía aquí el señor Alejandro Ramos, el orgulloso según ellos autor de esta iniciativa del jurídico de la Sedena, que si en una manifestación avientan dos petardos y Peña les dice: "vaya" pues allá Peña, porque ellos le tienen que entrar, así de delicado.

Este es un artículo que debe eliminarse, punto, no hay discusión, no hay más, las movilizaciones y las protestas sociales no son motivo de seguridad interior. Por lo pronto, el artículo 8 no debe estar, y eso creo que ya no deberíamos de seguir insistiendo.

En el artículo 9 que aquí confunden siempre seguridad interior con seguridad nacional, y esta reserva de información que se reserve sistemáticamente, tendrían que acreditar cuál es el daño; no, aquí sencillamente no van a informar, la información que se genere, dice el artículo, con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de seguridad nacional, todo va a ser considerado de seguridad nacional, no habrá escrutinio público, y creemos que la información que se genere con motivo de esta aplicación se regirá por el principio de máxima publicidad, eso es lo que debe de decir la ley.

¿Por qué encubrirlos, que se escondan, que no rindan cuentas? Hoy se viene uno a este debate, te vas informando y ves hasta qué punto han llegado las Fuerzas Armadas sin que nadie nos demos cuenta, como una isla.

En el Ejército ellos no estaban supervisados por la, y es la única institución que no supervisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y hasta hace poco, hasta hace unos años, todo el dinero que se le quitaba a la delincuencia organizada, fíjense, iba al Banjercito, y cuando nos dieron cuenta todo el dinero si se le quitó a Salinas, todo ese dinero fue al Banjercito.

Entonces, los directores se les trata de una manera excepcional y cuándo han escuchado ustedes que se publique alguna observación de desviación de recursos de Sedena y de Semarnat por la Auditoría de la Federación, pues nunca.

Y resulta que como Peña se compró su avionzote, también el Secretario de la Defensa se compró el suyo, y no rinden cuentas, y mucho respeto, y yo creo que eso los hace más respetables, el día que den cuentas a la ciudadanía.

Yo le decía a una persona que trabaja con el Secretario de la Defensa, se vestiría de luces si un día viene aquí así con sus barras y sus estrellas viene aquí a rendirnos cuentas, como lo hacen el Senado de los Estados Unidos y con toda sencillez, creo que el respeto que provocaría dejaría un precedente y sería tratado con toda la amabilidad y la consecuencia de un acto que sembraría, dejaría un hito histórico.

Yo creo que no podemos seguir solapando, en este país todos tenemos que rendir cuentas y eso nos lo debemos de grabar.

Y aquí yo lamento mucho que el Inai, cuando vino, vinieron aquí los organismos que les dieron unos momentos para hablar, el Comisionado Francisco Javier Acuña traía un documento que hizo el colectivo del Inai muy bien hecho, donde ellos no estaban de acuerdo con este principio, pero apenas habló, y miren que no le habló muy fuerte ¿eh? Pero dijo don Alejandro Ramos que esto no podía ser porque se cambia la redacción y no se iba a devolver a la Cámara de Diputados, y, entonces, el señor Comisionado se empezó a encoger y encoger y se hizo chiquito, y entonces terminó diciendo, y les voy a leer un párrafo para que vean qué clase de Comisionados tenemos, y eso que es un organismo autónomo.

Entonces le contestó así ya muy débilmente: "pues mire sí el fraseo sonó para muchos, vamos a decir, repito, en la idea de que pudiera suscitar una impresión que todo en extenso cuanto motivara la información que se motivara con motivo de la aplicación de la ley todo podría tener una desembocadura en la reserva".

Pues se le entendía mejor a Cantinflas.

¿Díganme si entendieron algo?

¿Cómo puede nuestro Comisionado del Inai venir a hablar de esta manera en lugar de defender los puntos de vista, además de los siete integrantes del Inai?

Esto es vergonzoso, pero se ponen a temblar, entonces yo nada más me pregunto hasta dónde se va a llegar.

Y, miren, cuando se violente el principio de máxima publicidad da lugar a un régimen autoritario, entonces esto tiene que ser modificado.

Y en lo que es el artículo 10, que también aquí mi compañera Dolores Padierna fue muy precisa, esta materia en materia de seguridad interior queda excluida, lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, o sea, pues a ellos no se les puede sancionar.

¿Pero saben qué me preocupa? Que como no se consideran servidores públicos a ellos no se les puede responsabilizar de desapariciones forzadas, y si alguien preocupa que puede ser autor de desapariciones forzadas es precisamente el Ejército.

No, pues ahí no los tocan, entonces que desaparezcan a los que quieran y ni quien les pregunte porque no estarán obligados.

Yo creo que esto es también muy grave y que la ley supletoria en la materia de Seguridad Interior debe ser la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, eso es lo que estamos proponiendo.

Aquí se violan los artículos 14, 16, 17 de la Constitución, aquí se violan, ya ni les importa cuántos artículos, ni los han contado, pero no, aquí juran que no se viola, que todo es maravilloso, y no nada más sigo ya con el 31 para continuar con el rito de que a ver quiénes están de acuerdo, y nadie está de acuerdo y no se hace nada, ya todo está hecho desde allá arriba y hay que seguir la línea.

En el artículo 31, eso también parece muy delicado, y lo decía yo hace rato, los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requiera las autoridades, o sea, que pues se acabó la confidencialidad del Padrón Electoral, del secreto fiscal bancario, ministerial, ellos pueden preguntarles a todos y podrán también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las locales cuando aún se trate de víctimas que se sienten agredidos por el mismo Ejército.

Ellos tendrán que dar la información, esto me parece muy delicado.

Pero saben, ya aquí para terminar y ya empiecen a votar y regresen todos de sus camas, yo nada más pienso, Peña Nieto en estos momentos, y eso me preocupa muchísimo, es un hombre que está lastimado en su orgullo, que se siente despreciado por la mayoría del pueblo mexicano, que ha sido descubierto en sus fechorías, y que creo que esta ley, pues es el alarido de una fiera herida.

Y cuando la fiera está herida y hay tanto veneno y tanta amargura se es capaz de hacer cualquier cosa, de acabar con todo con tal de escapar con vida, y eso es Peña Nieto, es una fiera herida.

Cuidado con esta ley todavía va a dar motivos de qué hablar y de qué discutir.

Y aquí como un reclamo muy respetuoso a los señores Secretarios de la Defensa y de Marina, cuando López Obrador propone a discusión, esto está a debate y se tiene que abrir, y deja muy claro, y aquí lo explicó el compañero Blázquez de una manera muy precisa, cuando habla de la amnistía considerando a las víctimas un doctor decía: ¿de qué se asustan, se vale proponer estrategias de paz?

No está esto aprobado de ninguna manera, se tienen que tomar en cuenta muchas cosas, pero por qué no, son propuestas innovadoras de las que nadie habla.

Se persignaron y entonces ahí a cada uno le dan el micrófono y salen los partidos políticos, bueno, están haciendo su juego, pero que salga el Secretario de la Defensa y el de la Marina a criticar, por favor, en tiempos

electorales, inmiscuyéndose en los procesos electorales, ¿cuándo lo habíamos visto? Se manejaban con una absoluta discreción, y esto es un reproche.

Que sea, y le pedimos que sean cuidadosos, o qué también en eso tienen que recibir órdenes, ellos no están para hacer política, “zapatero a su zapato”.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por diez minutos, para conocer si se aceptan a discusión las propuestas de modificación que fueron ampliamente explicadas por la Senadora Layda Sansores, a los artículos 8, 9, 10 y 31.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora, Presidenta.

Se emitieron 25 votos a favor; 69 votos en contra y una abstención.

Por lo tanto no se admite a discusión las reservas presentadas por la Senadora Layda Sansores.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, tiene ahora el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco para referirse al artículo 15.

Consulte la Secretaria a la Asamblea si es de admitirse a discusión la reserva hecha por el Senador Morón, al artículo 15.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Raúl Morón, quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La asamblea asiente)

No se admite a discusión Presidenta.

La presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, consulte ahora a la Asamblea si es de aceptarse a discusión la reserva al artículo 20 planteada por el Senador Alejandro Encinas.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Alejandro Encinas.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita a discusión, favor levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, Presidenta.

La presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador José de Jesús Santana, para presentar su reserva al artículo 26.

El Senador José de Jesús Santana García: Con su venia, Presidenta Senadora.

Compañeros.

La retirada de las Fuerza Armadas en el combate al crimen en estos momentos conllevaría un enorme riesgo de provocar un vacío de poder que sería aprovechado sin duda alguna por los grupos delincuentes.

Hoy por hoy, la presencia de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Marina es imprescindible en donde hay una alta incidencia delictiva.

El regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles únicamente es posible si éste se realiza de manera gradual, georreferenciada y de manera paralela al fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública civiles, para qué, si en un retiro gradual de las tropas haya una cobertura inmediata de otros cuerpos de seguridad en el estado o región correspondiente.

Una vez que sea atendido la amenaza o riesgo, la salida de las Fuerzas Armadas de la zona geográfica en la que se encontraban tendrá que ser planteada, coordinada, ordenada y paulatina.

Por lo tanto, propongo se adicione un artículo transitorio a la ley que estamos analizado.

Para dar certeza, qué pasaría si en estos momentos el ejército está en algún estado a petición del gobernador o el Presidente de la República decidió que estuvieran en esos momentos, y la declaratoria de procedencia el Ejecutivo considera que no es procedente y que deben de actuar las civiles.

No le puede ordenar de un día para otro o en un mes la salida de los miembros del Ejército que se encuentren en estos momentos.

Por eso es que propongo que en el transitorio se especifique muy claramente que una vez atendida la amenaza que dio origen a la declaratoria, la salida de las Fuerzas Armadas sea gradual, paulatina y temporal, y realizada, siempre esto, en coordinación con las autoridades locales.

Es la única forma de dar certeza de que no saldrán, de un día para otro, generando un vacío, que seguramente podría ser llenado por la delincuencia organizada.

Por lo tanto, solicito se considere esta reserva.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la reserva del Senador Santana al artículo 26 y la adición al Transitorio Quinto.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador José de Jesús Santana.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo para presentar reservas a los artículos 32 y 33.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Buenos días.

Compañeros, compañeras:

Se plantea esta estrategia como una única opción, como si no hubiera otras posibilidades qué hacer para mejorar la seguridad de los mexicanos, y la verdad es que se ha fallado en muchos aspectos, en muchos sentidos.

No se ha hablado aquí, por eso quise subir, en esta reserva, de la ineficacia del gasto en seguridad.

Este país ha hecho un esfuerzo extraordinario por destinar, en los últimos diez años, cada vez más recursos a la seguridad pública.

En el 2006, el gasto en seguridad representaba el .8 del PIB, hoy tenemos el 1.3 del PIB.

Pasó un presupuesto anual de 139 mil millones a 277 mil millones, el doble de lo que se gasta.

La Secretaría de la Defensa, de 40 mil millones a 74 mil millones.

La Secretaría de la Marina, de 13 millones a 34 mil millones.

La Secretaría de Gobernación, de 22 mil millones, en el 2006 a 83 mil millones en el 2016.

Hay una gran cantidad de recursos que se están destinado a seguridad, y sin embargo, no tenemos mejor seguridad.

Y ¿Por qué es esto? Porque no estamos evaluando el gasto en seguridad pública, no hay una estrategia integral que se siga a nivel nacional, estatal, municipal y Federación que vaya fortaleciendo las capacidades de nuestras policías.

Sabemos que cuando hay recursos adicionales, a veces se compran patrullas o camionetas sin tener los suficientes policías.

Y lo que es peor, buena parte de estos recursos son gastados de manera discrecional y secreta, porque se aprovechan las cláusulas de excepción de la Ley para Licitar, de Licitaciones Públicas, se aprovecha la excepción de que es una cuestión de seguridad para que se haga una asignación directa y no haya transparencia sobre este gasto.

¿Cuánto dinero, de esto, se está yendo al caño de la corrupción?

Tenemos que evaluar el gasto en seguridad pública.

Yo he presentado ya aquí, en otras ocasiones, que modifiquemos las facultades que tiene Coneval.

A México les costó mucho trabajo, y muchos años, y muchos esfuerzos entender qué instrumentos funcionan, de manera efectiva, para disminuir la pobreza, y qué instrumentos no.

Tenemos ahora el Coneval, sabemos cada peso que se gasta contra la pobreza dónde va a resultados y dónde no.

Tenemos que hacer esto en seguridad, tenemos que darle esas capacidades al Coneval para que a la vuelta del tiempo podamos saber en qué nos conviene invertir más.

Les doy un último dato: 130 millones de pesos en capacitación para mejora de los policías, y no tenemos mejora.

La verdad es que no hemos formado policías. El sexenio de Calderón nos dejó 36 mil policías federales, mismo número que tenemos a la fecha, y esto resulta grave porque hay, de los 2 mil 440 municipios en el país, 800 no tienen policías; mil 440 municipios, la policía no llega ni a 100 elementos, y el 40 % de los policías ganan 5 mil pesos.

Tenemos seguridad en México de policías de 5 mil pesos. No podemos tener seguridad de primer mundo cuando le pagamos 5 mil pesos a los policías.

Por supuesto que esto tendría que mejorar antes de recurrir a la estrategia de la militarización.

Otra opción que tenemos y que no aprovechamos, y que aquí discutimos, y que los conservadores y prejuicios no dejaron avanzar.

La política de drogas. Estamos metido en esto por la política del prohibicionismo, por la guerra contra las drogas, que claramente estamos perdiendo.

No se atrevieron a avanzar en probar algo distinto. Les resulta más fácil la militarización del país, con todos los riesgos que ello lleva, que despenalizar el cannabis y otras drogas para quitarle el valor del mercado al narco y su poder corruptor.

El prestigio internacional de los narcotraficantes mexicanos, nos dice Sergio González, es el emblema del fracaso de la guerra gubernamental contra el crimen organizado.

Mientras el gobierno efectúa detenciones y decomisos, aumenta la violencia, la inseguridad y los negocios ilícitos.

Los cárteles mexicanos operan en 38 países: en Europa, África y Medio Oriente, y es motivo de alerta de seguridad nacional en España, Alemania e Italia.

Nadie ha hablado en esta larga jornada de las víctimas más lamentables de esta guerra, son los jóvenes.

La principal causa de muerte entre los jóvenes de 20 y 25 años, en nuestro país, es el homicidio.

El gran fracaso de esta política se refleja en un solo indicador: que esta generación de jóvenes tiene una esperanza de vida menor a un año de la que tenemos nosotros.

La esperanza de vida en los países sólo cae en las guerras o cuando hay grandes pestes o enfermedades.

La guerra contra las drogas en México les está quitando la esperanza de vida a nuestros jóvenes.

A mayor presencia debería haber mayores controles, de eso se trata esta reserva, un mayor despliegue militar que es lo que va a ocurrir, debería tener un mayor peso en los controles del Congreso, una mayor transparencia y de los derechos humanos.

Quiero recordar aquí, y con esto termino, les quito dos minutos más, en mayo de este años invité a Sergio González Rodríguez a que presentara este libro aquí, “Campo de Guerra” en el Senado mexicano, Sergio se nos fue este año, pero nos dejó grandes recomendaciones, en qué hacer en materia de seguridad pública, grandes reflexiones de hacia dónde estaba moviéndose nuestro país.

Quiero terminar esta jornada recordando a Sergio González y que reflexionemos sobre sus palabras, decía Sergio: “el Estado, el gobierno y las clases dirigentes se niegan a modificar su mentalidad mientras las crisis escala a mayores grados de violencia”.

La mentira acerca de que tal violencia es producto de lo efectivo de la ofensiva gubernamental cae por su propio peso.

Lo peor reside en que con el pretexto de una estrategia herrada, la sociedad policial militarizada se normalice hacia el futuro en la vida pública y privada, surge la máquina bélica como signo adicional de la involución hacia el futuro.

La corrupción del narcotráfico se ha implantado en México a través de los organismos encargados de la defensa de la ley u la procuración de justicia, de las áreas de inteligencia del Estado, de la milicia y las policías, de los gobiernos de los estados, de la Federación, de los partidos políticos, el sistema judicial, el capital y el sistema bancario y financiero.

Nunca tantos padecieron por tan pocos.

Minimizar los problemas ahora y hacia el futuro sólo implica la ruta de la mentira y la defección, facilita la perpetuidad de la máquina de la guerra y su contraparte, la máquina criminal, sus consecuencias seculares.

Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, consulte la Secretaría a la Asamblea si son de admitirse a discusión las reservas a los artículos 32 y33 planteados por el Senador Mario Delgado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Mario Delgado Carrillo.

Quienes estén porque se acepten, favor de levantarla mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión Presidente.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Toca ahora el turno a las comisiones dictaminadoras, una modificación al artículo 1.

Favor de leer la Secretaría la modificación que está siendo planteada por comisiones.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta presentada por las comisiones.

El artículo 1. Dice: la presente ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la

fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior, tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas, los municipios en la materia.

La propuesta es como debe decir, doy lectura.

Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en materia de seguridad interior, tiene por objeto regular la función del Estado para preservarla seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación las entidades federativas y los municipios en la materia.

En tanto el cambio consiste en sustituir los Poderes de la Unión por la Federación, en eso consiste la reserva.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por las comisiones.

Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión la reserva presentada, Senadora Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Ahora consulte a la Asamblea si es de aceptarse la modificación propuesta.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica si se acepta la reserva presentada.

Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta la reserva presentada y se aprueba Presidenta.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.

Aprobada.

Al haberse agotado la discusión de todos los artículos reservados, háganse los aviso que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, con fundamento en el artículo 98 del Reglamento.

Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de lo siguiente:

La denominación de la ley en los términos del dictamen.

El artículo 1 con la modificación que fue aceptada.

Y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 34, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33 y 34 y de los Transitorios Primero Segundo, Tercero Cuarto y Quinto en los términos del dictamen.

Ábrase el sistema electrónico.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

Revise, por favor, Servicios Parlamentarios el tablero que no está bien.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora Palafox.

Presidenta, se emitieron 71 votos a favor; 34 votos en contra y tres abstenciones.

La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Queda aprobado el proyecto de Ley denominada Ley de Seguridad Interior.

Queda aprobado el artículo 1 con la modificación que fue aceptada.

Y quedan aprobados los artículos y quedan aprobados los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, y los Transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, en los términos del dictamen.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. **Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Gaceta Parlamentaria

Año XXI | Palacio Legislativo de San Lázaro, viernes 15 de diciembre de 2017 | Número 4928-I

CONTENIDO

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional

Anexo I

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

023278

PODER LEGISLATIVO FEDERAL H. CÁMARA DE DIPUTADOS

2017 DIC 15 AM 6 38

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P3A.-6142

CD-LXIII-III-1P-298

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2017.

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
P R E S E N T E

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a Ustedes el expediente que contiene **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR**, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

A t e n t a m e n t e

SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ
Vicepresidenta

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Artículo Único.– Se expide la Ley de Seguridad Interior, para quedar como sigue:

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Interior. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia.

Artículo 2. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.

Artículo 3. En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al Uso legítimo de la fuerza.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acciones de Seguridad Interior: Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y Amenazas a la Seguridad Interior;

II. Amenazas a la Seguridad Interior: Las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional;

III. Riesgo a la Seguridad Interior: Situación que potencialmente puede convertirse en una Amenaza a la Seguridad Interior;

IV. Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: El mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen Acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior;

V. Fuerzas Armadas: El Ejército, Armada y Fuerza Área;

VI. Fuerzas Federales: Las instituciones policiales federales;

VII. Inteligencia para la Seguridad Interior: El conjunto de conocimientos obtenidos a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior;

VIII. Seguridad Interior: Lo previsto en el artículo 2 de la presente Ley;

IX. Seguridad Nacional: Lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional, y

X. Uso legítimo de la fuerza: La utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

Artículo 5. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia.

Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de

Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las Acciones de Seguridad Interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional.

Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de sus competencias.

La materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE PROTECCIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas:

I. Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas Amenazas a la Seguridad Interior que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables.

Artículo 12. En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.

Artículo 13. Las peticiones de las Legislaturas de las entidades federativas o de su respectivo Ejecutivo deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior, especificando entre otros, los aspectos siguientes:

I. Amenaza identificada y el impacto de la misma;

II. Área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas;

III. Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza identificada en la entidad federativa o área geográfica afectada;

IV. Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza identificada;

V. El compromiso de contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de reestablecer la colaboración a que se refiere el segundo

párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que establezca la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y

VI. La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y para la toma de decisiones correspondientes.

Artículo 14. El Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener lo siguiente:

I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán;

II. La amenaza a la Seguridad Interior que se atenderá;

III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las Acciones de Seguridad Interior;

IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la Amenaza a la Seguridad Interior;

V. Las Fuerzas Federales participantes;

VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley;

VII. Las Acciones de Seguridad Interior que se llevarán a cabo, y

VIII. La temporalidad de la Declaratoria.

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá determinar la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica.

Artículo 15. La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo.

Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones de Seguridad Interior. Las modificaciones y prórrogas deberán notificarse y publicarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la presente Ley.

Artículo 16. En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República de acuerdo a sus facultades podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Lo anterior, sin perjuicio de la comunicación que realice la Secretaría de Gobernación de forma posterior a los Titulares del Poder Ejecutivo respectivo de las Entidades Federativas y la emisión, en el menor tiempo posible, de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES

Artículo 17. A partir de la expedición de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento, se considerarán como Acciones de Seguridad Interior.

Artículo 18. En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las autoridades federales conforme a lo previsto en la presente Ley, tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.

Artículo 19. La Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 20. Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate, conforme al procedimiento siguiente:

I. El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en términos del artículo 21;

II. El Comandante designado en términos de la fracción anterior elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes;

III. El protocolo contemplará la integración de grupos interinstitucionales, a fin de que cada uno lleve a cabo la misión que se les asigne con base en las atribuciones y responsabilidades que les correspondan, coordinadas por el Comandante, y

IV. Las Fuerzas Armadas actuarán realizando las Acciones de Seguridad Interior previstas en la Declaratoria respectiva.

Artículo 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las Entidades Federativas respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, y de las disposiciones reglamentarias de las Fuerzas Armadas.

Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada. Cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación.

Artículo 23. Durante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en el marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, asumirán las siguientes responsabilidades:

I. Atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que sean convocadas;

II. Aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea solicitada o con que cuenten, que permita cumplir los fines de la Declaratoria;

III. Prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora para atender la Amenaza a la Seguridad Interior;

IV. Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior y superarla;

V. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la Ley de la materia;

VI. Presentar los informes periódicos ante la autoridad federal coordinadora sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe en el marco de la Declaratoria;

VII. Las que se establezcan conforme a la fracción IV del artículo 14 de esta Ley; y

VIII. En el caso de las entidades federativas, las que haya comprometido en los términos de la fracción V del artículo 13 de esta Ley.

Artículo 24. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, destinará Fuerzas Federales para que realicen Acciones de Seguridad Interior, en aquellas áreas o zonas del territorio nacional que así lo requieran.

Artículo 25. Tratándose de fenómenos naturales perturbadores, la intervención de las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, se sujetará a lo previsto en la Ley General de Protección Civil y, en su caso, a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.

Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.

Artículo 27. Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.

Artículo 28. Las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior con su organización, medios y adiestramiento, sin descuidar el fortalecimiento de sus capacidades.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 29. Las Acciones de Seguridad Interior se apoyarán en los órganos, unidades y procesos de inteligencia previstos en las leyes respectivas.

Artículo 30. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley.

En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, la colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto se establezcan.

CAPÍTULO QUINTO
DEL CONTROL DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 32. El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 33. El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la Comisión Bicamaral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de control previstas en dicha ley.

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 34. El incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y en la Declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; y en su caso con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados.

Asimismo, las Entidades Federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Cuarto. Si a la entrada en vigor de la presente Ley existen situaciones en las que se surten las hipótesis contenidas en el artículo 11, se aplicará el procedimiento ahí previsto, sin perjuicio de que en tanto se materializa el mismo, las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, continúen realizando las acciones que estén llevando a cabo para atenderlas. Las que no requieran Declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen.

Artículo Quinto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieren realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección en términos de la misma, a efecto de solicitar la declaratoria correspondiente, deberán, en el ámbito de sus atribuciones, presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual incluya los objetivos respecto al estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo de 90 días, contados a partir de que las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, acrediten la presentación del programa señalado en el párrafo anterior, deberá emitir el dictamen correspondiente, mismo que le será entregado al solicitante.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.-
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2017.

SEN. CÉSAR O. PEDROZA GAITÁN
Vicepresidente

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA
Secretaria

Se devuelve a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2017.

DR. ARTURO GARITA
Secretario General de Servicios Parlamentarios

LA SUSCRITA, SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 220.4 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ES COPIA DEL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y QUE SE REMITE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA
Secretaria

14-12-2017
Cámara de Diputados.
MINUTA con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Seguridad Interior.
(Documento Minuta publicado en Gaceta el 15-12-2017)
NOTA: En votación nominal se autorizó se le dispensaran todos los trámites y se sometió a discusión y votación de inmediato.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 262 votos en pro, 26 en contra y 0 abstenciones.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Gaceta Parlamentaria 15 de diciembre de 2017.
Discusión y votación 14 de diciembre de 2017.

DISCUSIÓN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 14 de diciembre de 2017

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, por el que remite minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, que devuelve para efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que se le dispensen los trámites y se someta a discusión y votación de inmediato.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que se le dispensen todos los trámites y se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, se autoriza y está a discusión la minuta con proyecto de decreto que fue devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.

Esta Presidencia informa a la asamblea que la Cámara de Senadores realizó modificaciones a los siguientes artículos del proyecto de decreto, los artículos: 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 26 y la adición de un artículo Quinto transitorio.

Como lo dispone el inciso E del artículo 72 constitucional, la discusión de este asunto versará únicamente sobre las reformas o adiciones que la colegisladora haya realizado, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados por ambas Cámaras.

El diputado René Cervera García (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me está pidiendo la palabra el diputado Cervera. Adelante, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado René Cervera García (desde la curul): Gracias, señor presidente. Levanté la mano precisamente para objetar el trámite que estaba usted por someter a votación.

Me parece...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame...

El diputado René Cervera García (desde la curul): Permítame un segundo. Me parece que la solicitud en este momento ya es que esta objeción que estamos haciendo, dada la importancia de lo que vamos a votar, que quede consignado en el Diario de los Debates.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por supuesto. Se consigna la expresión del diputado Cervera en el Diario de los Debates, en cuanto a la dispensa de trámite de la minuta del Senado de la República.

En consecuencia vamos a proceder al trámite de esta ley. Y tiene la palabra el diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Morena, quien ha presentado moción suspensiva a la discusión de esta minuta. Adelante, diputado, hasta por tres minutos.

Solicito muy atentamente a la asamblea atender al orador y guardar el debido orden para escucharlo con atención en sus planteamientos.

El diputado Rene Cervera García: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, buenos días. El Grupo de Morena está presentando una moción suspensiva, porque creemos que hay, como mencionaba hace un momento, violaciones importantes al procedimiento de turno, en particular nos preocupa el artículo 72, inciso f), que determina que en la interpretación, reforma o derogación de leyes o decretos se observarán los mismos trámites que aquellos establecidos para su formación. Eso no lo estamos haciendo ahora y me parece que es un tema importante.

Además, en términos del proceso legislativo el dictamen que se presenta no observa este procedimiento contenido en el artículo 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso, y el 1o., 62, numeral 2, 65, 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Hay también violaciones a los artículos 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en particular nos parecen relevantes aquellos que se refieren a cómo se construye y cómo se presenta una opinión técnica calificada en el dictamen.

Hay iniciativas que, desde nuestro punto de vista, como esta no están cumpliendo con los siguientes elementos, en particular aquél que refiere el artículo 85, fracción VI, cuyo contenido dice: el contenido de los asuntos o asuntos destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema.

Igualmente, creemos que no hay una valoración normativa del proyecto como tal, el proyecto carece de la valoración normativa de su articulado con relación a otras disposiciones que regulan las atribuciones del presidente de la República y la participación el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Armada de México, en seguridad interior y su relación con los estados y municipios en materia de seguridad.

Si bien el artículo 89, fracción VI de la Constitución determina que es facultad y obligación del presidente preservar la seguridad nacional, dicha obligación y facultad no es discrecional, estas se encuentran reguladas por la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De igual forma podemos decir que hay un gran impacto a una serie de leyes federales y nacionales que no están siendo debidamente identificados. En particular me parece que hay impactos importantes en el marco de competencia de los niveles de gobierno. La pretensión de regular el tema de la seguridad nacional en el dictamen que se presenta genera violación a disposiciones que determinan sus respectivas competencias. Estoy por concluir, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado. Concluya.

El diputado Rene Cervera García: Finalmente, hay una violación a las garantías de legalidad y del debido proceso. El artículo 10 del decreto que se propone violenta los derechos humanos al debido proceso y las garantías constitucionales de audiencia y defensa, al determinar que en materia de seguridad interior queda excluida la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la que en sus artículos 1 y 3 determinan los requisitos que deben atender todo acto administrativo de la administración pública federal centralizada.

Bueno, estas son algunas de las razones por las cuales nosotros estamos integrando este voto particular. Muchas gracias, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría si es de admitirse la moción suspensiva.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se consulta a la asamblea si se toma en consideración, de inmediato, para su discusión, la moción suspensiva presentada por el diputado Cervera. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúa la discusión y por lo tanto, dado que no se han registrado oradores para posicionar, ni por parte de la comisión ni por parte de los grupos parlamentarios, voy a cerrar en este momento la admisión de reservas y pasar a la discusión aprobado del dictamen.

Tiene la palabra, por lo tanto, en contra, el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán para expresar sus opiniones, insisto, en contra del dictamen.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Estimadas compañeras diputadas, compañeros diputados. Permiso, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Ojalá podamos ser un poco, en virtud del tema, flexibles con el tiempo. Finalmente, sabemos qué va a pasar. Sé que ustedes no estuvieron aquí toda la noche, qué pena, pero creo que es importante que podamos...

Los diputados, las diputadas, el gobierno se dicen siempre respetuosos de las instituciones. Se dicen respetuosos y presumen que ellos siempre, que ustedes siempre respetan las instituciones, y esta vez son ustedes los que han mandado al diablo a los organismos internacionales y a las instituciones de derechos humanos de este país.

Mandaron al diablo a la Organización de las Naciones Unidas, mandaron al diablo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los parlamentos de otros países que hicieron llamados respetuosos para suspender esta Ley de Seguridad Interior.

También hicieron caso omiso del llamado de la OEA, hicieron caso omiso de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, encabezados por su presidente, el licenciado Raúl González Pérez, y cada uno de los organismos de derechos humanos de este país.

Ustedes mandaron al diablo a las instituciones de derechos humanos de este país con esta, que se presume se aprobará en un momento, la Ley de Seguridad Interior. Pero también no solamente violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también están violando flagrantemente los convenios internacionales de los cuales México es Estado parte, sobre todo en materia de derechos humanos.

Son ustedes los que están violentando no solamente la Constitución, no solamente el artículo 1o., el artículo 129 de nuestra Constitución, que por cierto en esta Cámara circularon cientos y cientos de ejemplares con motivo del centenario. Ojalá la hayan leído, especialmente el artículo 129, que es contradictorio a lo que ustedes están haciendo al intentar aprobar esta Ley de Seguridad Interior.

Compañeras y compañeros, sabemos lo que va a pasar, pero también y lo más importante, como siempre, mandaron al diablo a la ciudadanía. Cientos, decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos vinieron a la Cámara de Diputados y Diputadas, fueron al Senado de la República y no fueron tomados en cuenta por ustedes los legisladores.

No fueron tomados en cuenta para tratar de echar para atrás esta ley claramente violatoria de los derechos humanos y no es un problema contra los militares o contra sus mandos. Es un problema de quien los comanda,

es un problema del presidente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que quiere llevar a la calle a más militares, que mueran y que maten a civiles.

No es una discusión sencilla, compañeros y compañeras, el tiempo que necesitamos es para reflexionar o hubiera sido para reflexionar. Creo, y aquí hay grandes juristas, grandes constitucionalistas y que saben que violaron flagrantemente, sobre todo, el artículo 1o. y el 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasará el tiempo, pasarán a la historia, perdón, por su desprecio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Valencia. Tiene la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, en contra. Dado que hay más oradores inscritos en contra que a favor, esta Mesa va a equilibrar el número de intervenciones en contra y a favor, de manera que podamos escuchar equitativamente las opiniones en uno y en otro sentido. Diputado Basurto, adelante. Hasta por tres minutos.

El diputado Alfredo Basurto Román: Sí, presidente. Nada más solicito, presidente, de acuerdo al 104 del Reglamento, que se me concedan cinco minutos.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con todo gusto, diputado, sin el 104, con mucho gusto esta Mesa ha sido flexible siempre. Si usted necesita un poco más de tiempo, con mucho gusto.

El diputado Alfredo Basurto Román: Con su permiso, señor presidente. Hoy en México, en la madrugada, los priitas senadores del Verde y PRI, y por lo que veo la línea de Bucareli sigue siendo la misma, van a pasar a la historia, a la historia como legisladores que aun más, concluyo con mi teoría que siempre he dicho, que parecen más empleados del Ejecutivo que del pueblo.

Peña Nieto va a pasar a la historia en este país, por cierto que le quedan pocos meses, como un presidente en contra de los derechos humanos de los mexicanos, pero lo más grave, lo más grave aún, que ni siquiera ha atendido el llamado que la ONU está haciendo al país y a sus instituciones Ejecutivo federal y Cámara de Senadores, y en ese sentido, en este momento a la Cámara de Diputados que le dé marcha atrás a esta ley de militarizar el país. Ha hecho oídos sordos. Incluso la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos hace unos días en un conocido restaurante, hotel en esta ciudad, hizo del conocimiento enfrente del presidente de la República que estaba mal la Ley de Seguridad Interior.

Vamos a pasar o van a pasar, porque nosotros en Morena sí respaldamos la opinión del pueblo. Ayer con una magia y simulando votos que nunca se votaron aprobaron una encuesta de seguridad mixta para el país, donde quieren eliminar la seguridad municipales.

Yo la pregunta que hago es ¿por qué no, si tanto dicen que son representantes del pueblo, por qué no se somete a una consulta popular ciudadana? Que el pueblo de México diga si acepta o no esa ley anticonstitucional, compañeros.

Que el pueblo decida. Eres representante del pueblo, que el pueblo decida y no tú. Aquí sí cuando van a campañas se dicen representantes del pueblo, hagan valer la voz popular. A final de cuentas sabemos que el poder reside en el pueblo y no en nosotros, compañeros. Nosotros somos mandatarios del pueblo, ejecutemos esa obligación que tiene el pueblo.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le recuerdo al público presente y particularmente a los diputados asistentes la obligación de guardar la debida compostura durante las intervenciones de los oradores. Adelante, diputado.

El diputado Alfredo Basurto Román: Gracias, presidente. Señores, reflexionen, sometamos a consulta de los expertos, los académicos, las organizaciones civiles, de derechos humanos si aceptan esta iniciativa.

También quiero recalcar y dejar en claro que Morena no está en contra de la institución como Ejército. En Morena queremos a los militares porque a final de cuentas también son pueblo, pero no queremos llevarlos a una encarnizada y enfrentarlos con el mismo pueblo.

La violencia genera más violencia, compañeros. No es la solución a los índices alarmantes de impunidad y corrupción que existe en el país. Son otras causas sociales las que han llevado al pueblo en esta inestabilidad, esta inseguridad que estamos viviendo.

El tiempo nos dará la razón nuevamente a Morena, donde vamos a ver que el sacar y el permanecer al Ejército en las calles no es la solución a terminar con el crimen organizado. Hay otros alternativos medios de convicción y salidas alternas para poder llevar al país a la paz.

No es esa la solución, compañeros, lo que estamos haciendo es engrandecer más la violencia que se está viviendo en el país.

Pero México, México en este sexenio va a pasar a la historia como un país con un presidente que nunca atendió a los derechos humanos de los mexicanos, como un país de los más corruptos del mundo, como un país donde ha habido más desaparecidos.

Por eso los invito a que reflexionemos y que demos marcha atrás a esta ley anticonstitucional, compañeros. No clavemos el último clavo de la antidemocracia en el país. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora, a favor, la diputada Mercedes Del Carmen Guillén Vicente.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Buenos días a todos. Esta mañana nos ocupa un asunto que yo quiero poner en su exacta dimensión. Esta Ley de Seguridad Interior ha tenido un proceso de muchos meses, es un proceso que inició desde enero y donde se escucharon todas las voces.

Y sí quisiera hacer énfasis que todos los partidos políticos de esta Cámara y del Senado, estuvieron invitados...

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Vidal Llerenas?

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Si me acepta una pregunta la oradora.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: No la acepto, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No la acepta, diputado.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: La Ley de Seguridad Interior fue votada por esta Cámara de Diputados, fue enviada a la cámara revisora. Se escucharon allá todas las voces. El proceso reglamentario de esta Cámara fue cumplido a cabalidad, y para contestar concretamente todo lo que se ha dicho falsamente sobre esta ley, quiero afirmar de frente a la nación, de frente a todos, hasta mi familia, que es una ley constitucional que cumple todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho y que además no va a militarizar al país.

Ya basta, basta de estar mintiendo. Estamos haciendo nuestro trabajo y esta Ley de Seguridad Interior la necesita México, la necesita Tamaulipas, la necesita mi pueblo, y por eso estoy aquí, para darle un marco, abre un marco a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía. Gracias, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, en contra. Al terminar la diputada Nahle, escucharemos al diputado Vidal Llerenas en contra, y cerraremos los turnos de oradores con la diputada Martha Sofía Tamayo Morales. Acto seguido, preguntaré al pleno si está suficientemente discutido. Diputada Nahle, tiene usted la palabra.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Buenos días. Con su permiso, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Hoy estamos en la discusión de un tema de lo más trascendente para todos los mexicanos. No es lo que una fracción mayoritaria o minoritaria quiere. No es que tenemos que calmar el desorden, la violencia que tenemos afuera, porque se declaró una guerra en el 2006, que a nadie nos preguntaron, y como ya se declaró la guerra, como ya tenemos afuera un desorden, entonces sacamos a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas ya están en la calle.

Están haciendo un trabajo que no les corresponde, que es de seguridad pública, porque nosotros, el gobierno, desarticuló las policías municipales y en esta guerra sin sentido las Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo que no les corresponde, y hoy en una forma irresponsable, nosotros como legisladores, pretendemos ir más allá para ser un Estado de excepción permanente a la hora de que las Fuerzas Armadas estén en la calle, va a haber un Estado de excepción permanente por ley.

Es inconstitucional, es inconstitucional y vamos a tener esto en el Tribunal, ustedes lo van a ver. Pero lo que más nos preocupa, lo que más nos preocupa es que una instancia como el Ejército, como la Marina, que tenemos que cuidar, porque es lo que nos conviene a todos los mexicanos, a la soberanía nacional, la vamos a meter a un desgaste permanente, la vamos a meter porque se va a enfrentar tarde que temprano con la ciudadanía. No hemos hecho un trabajo adecuado como gobierno para que los estados, los municipios tengan una seguridad pública.

Y ahora, de manera perezosa y de manera fácil, decimos aquí está una ley. Una ley que incluso va a vulnerar los derechos humanos. Ya lo tenemos, ya los tenemos, hay múltiples quejas de organizaciones internacionales, como la ONU, que nos ha dado la recomendación que vamos en el sentido contrario a todo el mundo con esta ley.

Hoy ustedes van a hacer valer su mayoría, porque así es, pero esta mayoría, ustedes fueron a pedirle al pueblo el voto, somos representantes del pueblo, no nada más del Ejército. Morena va a votar en contra. Pero no nada más eso, no nada más eso. No, compañeros. A ver, tranquilos, serénense, estamos en un tema muy importante. Tranquilícese, por favor, señorita.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada oradora y diputados, público, sean tan amables de dejar que la Mesa lleve la conducción. No hay diálogos permitidos, permitan que concluya la oradora.

La diputada Norma Rocío Nahle García: ¿Por qué esta cerrazón? Porque están obedeciendo a una imposición que incluso las Fuerzas Armadas van más allá de lo que les corresponde. Nosotros tenemos que ser responsables, somos un legislativo. Lo que aquí se pretende es un albazo, un albazo al pueblo de México.

Espero que cada uno, cuando vayan a su distrito, pues sus representados se los van a señalar y no salgan como en la reforma...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo diputada Nahle. El diputado Eukid Castañón está haciendo una moción. ¿Con qué objeto?

El diputado Eukid Castañón Herrera (desde la curul): Ver si la diputada Nahle me acepta con todo respeto una pregunta.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Claro que sí.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante. Acepta la pregunta.

El diputado Eukid Castañón Herrera (desde la curul): Diputada, he escuchado con todo respeto su intervención. Quisiera preguntarle si es entonces mejor darle amnistía al crimen organizado, que tener una ley con estas características, como lo declaró en su momento Andrés Manuel López Obrador, líder de su partido. ¿Es mejor una amnistía al crimen organizado? Pregúntele eso a la gente que ha sufrido y que ha perdido hijos.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

El diputado Eukid Castañón Herrera (desde la curul): Gracias, diputada, por su respuesta.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está formulada su pregunta.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Le voy a contestar, si me permite. Ya es hora de que en este país se empiece a hablar de paz y no de guerra, porque ustedes, el PAN, el PRI tenemos 10 años de guerra y nosotros...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a pedirle nuevamente al auditorio sea tan amable en conducirse con respecto.

La diputada Norma Rocío Nahle García: ... nosotros en Morena ya empezamos a hablar de paz. Esa es la diferencia. Por lo tanto, les pedimos...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le voy a pedir nuevamente al público guarde el debido respeto a las intervenciones, cualquiera que sea su sentido. Adelante, diputada.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Tranquilos, tranquilos, tómense un cafecito por ser tan temprano.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se permiten diálogos, diputada oradora. Diputados, público, sean tan amables de permitir que la oradora concluya su intervención.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Efectivamente, ya es hora de buscar la paz y al poner a las Fuerzas Armadas en un estado de excepción permanente esta guerra será sin cuartel, y ustedes, PRI principalmente, que tiene la mayoría en este Congreso, van a cargar con ello. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Este debe ser el momento más triste de la historia de este recinto, más allá, más incluso que aquella vez que alguien lloró porque iba a defender el peso como un perro y empezaron las desgracias de este país hasta ahora.

Creo que por suerte esta será la última ocasión, será la última gran maldición que dejará el PRI, ese partido decrépito que es incapaz de tener hoy un candidato, le pidió uno prestado al PRI porque los suyos le dan vergüenza.

Esta imagen del Congreso semivacía, a escondidas, vergonzante, es porque les da pena votar lo que están votando, porque no hay una sola persona en este país, conocedora del tema de la seguridad y los derechos humanos, que esté avalando una barbaridad de este tamaño. Significa llevar a futuro la discrecionalidad de poder utilizar las Fuerzas Armadas para cualquier propósito.

Eso es lo que quieren hacer porque el fracaso de la inseguridad en México es mayúsculo, porque el peor fracaso del gobierno del PRI son los miles y miles de muertos que siguen existiendo en México porque no hay una estrategia de seguridad efectiva y lo único que quedó es estar de rodillas ante las Fuerzas Armadas y llevarlos a ellos sí, al riesgo de estar todo el tiempo en las calles, cuando los que tienen que estar ahí son los policías.

Este país está llevado al abismo por un gobierno irresponsable, cuyo último acto quiere ser perpetuar esta irresponsabilidad. No hay un argumento a favor. Por primera vez todos los que fueron altos comisionados de las Naciones Unidas rechazan esta ley.

Hoy México es una vergüenza a los derechos humanos internacionales, al lado de Filipinas, al lado de Birmania. Ese es el lugar que hoy nos corresponde con esta ley que ustedes están a punto de aprobar.

La Comisión de Derechos Humanos, el INAI, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE, la UNAM, cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que esto va a llevar al país a la militarización, a la guerra, a la violencia.

Qué lástima que así estemos terminando. Qué bueno que este será el fin del PRI. El fin de un partido que no está dando respuestas a la población y que, insisto, ni siquiera es capaz de poner a uno de los suyos al frente de su campaña.

Su legado negativo seguirá con esta ley. Pero esto va a cambiar, va a cambiar porque el año que entra López Obrador será el presidente del país y ahí sí, se iniciará una cultura de la paz, ahí sí vamos a trabajar en las causas-delito, ahí sí tendremos el valor de construir policías, de darle la cara a la gente, de asegurar la pacificación del país.

Ahí estarán ustedes, poquitos, con la vergüenza de votar eso, a escondidas, a este día en donde lo único que quedará para la historia será un PRI que nació para desmilitarizar el país y que va a morir entregando al país hundido en la violencia. Gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Vidal Llerenas. Tiene la palabra el diputado César Alejandro Domínguez.

La Mesa va a hacer solamente un comentario en relación a la asamblea, es decir, a la constitución de este pleno en este momento. La asamblea estaba en receso y desde las 11 cincuenta y tantos de la noche se publicó en la Gaceta la convocatoria para esta sesión. Es decir, que se está realizando con pleno conocimiento de todos los grupos parlamentarios. Adelante, diputado César Alejandro Domínguez.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, señor presidente. Mentiras, mentiras y más mentiras, son lo que vienen a decir quienes tratan de denostar esta ley.

Lo que buscamos y lo hemos dicho de manera muy clara y muy precisa, es reglamentar una función que vienen realizando las Fuerzas Armadas desde el 2006.

Venimos a plantearle a la nación, con responsabilidad, que queremos un país seguro, pero que también queremos darle certeza a los ciudadanos y darle certeza al Ejército, porque no se vale venir aquí a decir que son acciones inconstitucionales cuando ha quedado clara la facultad que tiene esta Cámara de Diputados, este Congreso de la Unión, para poder legislar sobre este tema en particular.

Ha quedado claro aquí, que quienes se oponen a la nación y quienes buscan destruir las instituciones lo hacen en el discurso, y en documentos queda muy claro en el proyecto de moción...

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Diputado Valencia, ¿con qué objeto?

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Saber si el orador me permite hacerle una pregunta.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: No, no acepto. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No acepta el orador. Muchas gracias, diputado Valencia. Continúe, diputado.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Miedo es el que tienen aquellos que no están aquí, que no vinieron, que no acudieron y que evaden la responsabilidad que tienen con la nación. Los que estamos aquí desde ayer tenemos una responsabilidad clara, de frente a los mexicanos, por eso hoy vamos a votar a favor este dictamen, esta minuta, porque creemos firmemente que México lo necesita.

No vamos a permitir que vengan, reitero, aquí a contar más y más mentiras. Decía hace un momento, en el proyecto de nación, de todos aquellos que hoy no están aquí, tiene claramente el planteamiento de tener y de obligar y de exigir a estos legisladores que no vinieron, que exista una Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué hoy no están aquí? ¿Por qué hoy no vienen a respaldar la paz y la tranquilidad de este gran país?

Quienes vivimos en estados que tienen problemas de inseguridad, quienes vivimos en estados que tienen problema de crimen organizado, quienes vivimos en estados que hemos tenido ese flagelo de la inseguridad queremos tener certeza, queremos tener paz, queremos tener tranquilidad, queremos tener que nuestras familias vivan seguras, que nuestros hijos vayan en paz a las escuelas y que no existan estados de excepción planteados por el crimen organizado, como lo están haciendo quienes hoy vienen aquí a abstenerse o a tratar de generar discursos contrarios a esta Ley de Seguridad Interior.

Nosotros los de PRI miramos hacia adelante junto con el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza, porque queremos que México viva en paz, porque queremos la paz y la tranquilidad para todos nuestros paisanos. Muchas gracias. Buenas tardes.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado César Alejandro Domínguez. Tiene la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, en contra.

La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su venia, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada Ernestina Godoy Ramos: Es realmente, que sepa el pueblo de México lo que está pasando, que son solamente el PRI y sus satélites los que quieren esto. Estamos en un debate que muestra la insensibilidad y cerrazón del PRI y la complicidad y cobardía de algunos del PAN.

Esta ley es indefendible. Desde el punto de vista constitucional no resiste la más elemental revisión. Desde los tratados internacionales de los que México es parte es insostenible. Desde la perspectiva de los derechos humanos no se ajusta a nuestros compromisos internacionales.

Es indefendible someter a los poderes civiles electos por el voto público a mando de los militares. Pero más grave aún es someter a los ciudadanos al poder de la milicia.

Militarizar la seguridad pública y asumir esta tarea como guerra no es la solución a la crisis prolongada que enfrentamos como nación. Pero frente a lo expresado por cientos de organizaciones civiles y miles de ciudadanos ni ven ni oyen. No, no, no y no y reiteradamente no es la respuesta del Congreso de la Unión a todas las voces que han pedido suspender la aprobación de esta ley que sujeta los poderes civiles al control de las Fuerzas Armadas.

Es unilateral y centralista, otorga un poder ilimitado al presidente para intervenir cuando quiera, donde quiera y sujetar a las autoridades electas al mando militar.

Implica la repetición de lo mismo, perpetúa el Estado de excepción en que nos encontramos y transforma la excepción en regla. Esto no parte del necesario balance de lo hecho a lo largo de estos once años. No existe diagnóstico de esta guerra absurda iniciada por el PAN, Calderón y perpetuada por Peña Nieto.

Comparados con 2006 yo les pregunto, compañeros, ¿estamos mejor? ¿La criminalidad, los homicidios, las desapariciones forzadas, la violencia armada de las bandas han disminuido? ¿Se detuvo o limitó en forma determinante el tráfico de armas? ¿Somos más eficientes en el combate al lavado de dinero? ¿Meade como secretario de Hacienda logró blindar nuestro sistema financiero? ¿Nuestra policía es más eficiente en el combate al crimen? ¿La Procuraduría ha mejorado su desempeño? Y basta de culpar por este fracaso a las policías locales. Los delitos vinculados a la delincuencia organizada son responsabilidad de las autoridades federales y ahí su desempeño es pobre y limitado, pese a contar con los recursos.

Nada, nada les ha funcionado. El desempeño del gobierno federal es pésimo. ¿De verdad esta es la ruta para combatir el tráfico de drogas? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen? ¿En qué datos se justifica la continuación

de esta estrategia? ¿Cuál es la evidencia que soporta la idea de militarizar el país para lograr la seguridad y la paz? ¿Cuál es el pronóstico esperado? ¿Cuántos muertos más esperamos?

Se trata, simple y llanamente, de cederle poder a las Fuerzas Armadas. El PRI y el PAN tienen prisa por aprobar esta ley. No y no al dicho PRI y la mayoría de los senadores del PAN, lo mismo que está ocurriendo en esta Cámara.

No a las observaciones de organismos internacionales, no a los pronunciamientos de organismos públicos nacionales e internacionales protectores de derechos humanos. No a las voces de la sociedad civil, no al exhorto de los rectores de tres de las principales universidades. No a los cientos de académicos y expertos y derechos que puntualmente...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Ernestina Godoy Ramos: ...expusieron inconsistencias a esta iniciativa presentada por César Camacho Quiroz. No a las preocupaciones de la comunidad cultural. Compañeros, diputados y diputadas, lo que necesitamos es replantearnos esta estrategia. Queremos combatir la impunidad y buscar la justicia y la paz. Para eso sí tenemos que sentarnos, para eso los eligieron, para buscar la paz en este país, no para echarle gasolina al fuego. Lo van a pagar en 2018, el pueblo se los va a cobrar, de eso estamos seguros.

Pueblo de México, ya falta poco. Vamos a trabajar como Morena y Andrés Manuel a la cabeza para que este país tenga paz. Y si para eso nos tenemos que sentar...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Ernestina Godoy Ramos: ...con todos ustedes, lo vamos a hacer. Los llamamos a la cordura, los llamamos a la conciencia. No sigan ensangrentando a este país...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ...son unos irresponsables. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra diputado Jorge Álvarez Maynez. Acto seguido le daré la palabra al diputado Rodrigo Abdala Dartigues y cerraremos la discusión para preguntar a la asamblea con la diputada Martha Tamayo.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Quiero dedicarle esta intervención a todos los policías, todas las policías, honestos, patriotas que hay en este país, a todas las integrantes y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, de los soldados, de los marinos de este país, a todas las víctimas.

Aquí se ha intentado construir un discurso sobre la valentía que no se sostiene. El 18 de julio de 2010, mi prima María Fernanda Maynez, murió asesinada por un comando armado en Torreón, Coahuila, junto con 17 personas que fueron a la fiesta equivocada.

Lo primero que declaró el gobernador de Coahuila frente a ese hecho, un gobernador del PRI, fue que la Policía Federal los había abandonado desde enero de 2010. No hubo policías federales para cuidar a esas 17 personas, a mi prima y a otras 16 más. Ha habido 210 mil mexicanas y mexicanos que han muerto en esta guerra y que no es una culpa de los militares que están en las calles, no es una culpa de los policías que están dando la batalla con lo que tienen y con lo que pueden.

Hace un mes, enfrente de la escuela de mis sobrinos, cuando mi hermana pasaba por ellas en Zacatecas, mataron a un carnicero que no aceptó una extorsión. Ese caso lo conocen los diputados de Zacatecas, el caso de Coahuila lo conocen las diputadas, los diputados de Coahuila, y aquí no nos pueden decir que eso fue responsabilidad de los policías ni del Ejército. Fue responsabilidad de las autoridades cobardes, que muchos aquí, más allá de partidos han encubierto, han venido a defender esta ley y habla de amnistía un partido, pero ha venido a defender esta ley la secretaria de gobierno del narcotraficante más buscado de Tamaulipas, de Tomás Yarrintong.

Tomás Yarrintong tuvo que ser encontrado por la policía de Italia, perseguido por la DEA para terminar en prisión, es un narcotraficante y no solo lo amnistiaron, lo hicieron gobernador. Y luego, cuando lo detuvieron tenía 8 policías federales del gobierno mexicano, pagados por el gobierno mexicano para cuidarlo. Esa es la esquizofrenia con la que está discutiendo el PRI esta ley.

Yo quiero hacerle un llamado a las compañeras de Morena y hacer un compromiso.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul). Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame diputado. El diputado Vidal Llerenas, ¿con qué objeto?

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul). Si acepta una pregunta el orador.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con mucho gusto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul). Gracias. Ahorita la diputada Guillén –no quiso contestar una pregunta, le da pena todo este tema–hizo referencia al asunto de la consulta.

Yo quiero saber su opinión sobre este proceso en donde efectivamente una serie de organizaciones muy calificadas en el tema de derechos humanos, la ONU de manera involucrada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron, y cuál es su opinión sobre el pronunciamiento que tuvieron.

¿Cuál es su opinión sobre el pronunciamiento que tuvieron sobre los cambios que hizo el Senado de la República, y si usted considera que el Congreso de la Unión entró en un proceso real de diálogo con esas organizaciones? Gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado, para responder la pregunta.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Creo que efectivamente hemos durado muchos meses discutiendo esta ley, pero creo que el diálogo es cuando uno está dispuesto a rectificar o a cambiar de posición.

Sí creo que tratando de proteger a las Fuerzas Armadas, sé que hay muchas y muchos diputados del PRI honestos, valientes, que creen que están actuando con amor a México, porque así no nos define lo que las siglas del partido. La política es como la religión, importa lo que hacemos.

Sé que hay muchos diputados y diputadas que creen que están haciendo lo correcto, pero México va a ser condenado con esta ley, porque justamente la Organización de las Naciones Unidas nos está diciendo que es una ley que perpetra violaciones a los derechos humanos, y el día que lleven a los soldados que dieron la cara por México, a los marinos que dieron la cara por México a tribunales internacionales, esta ley va a ser un pretexto para condenarlos y para que haya sanciones contra el Estado mexicanos.

Pero aprovecho la pregunta del diputado Llerenas para cerrar con un llamado a Morena y un compromiso del Frente Ciudadano por México. La única manera que tenemos de demostrarle a la nación que el Frente Ciudadano por México y la coalición de Morena con el PES y con el PT, son opciones para transformar a México, es estando a la altura de la historia hoy.

Si somos opción de cambio al régimen, al prian, al calderonismo que inició esta guerra y que hoy está claramente apuntado en una opción política afín al PRI y al priismo que la continuó.

Sí queremos ser opción de cambio tenemos que estar a la altura hoy. Cada diputado del frente o cada diputado de esa coalición que traicione la única posibilidad que tenemos de parar la ley, que es rompiendo el quórum cuando se vote esta ley, no merece ser opción de cambio.

Si queremos que Ricardo Anaya y que Andrés Manuel López Obrador sean candidatos del cambio, se tiene que demostrar estando a la altura hoy.

Por eso es muy importante que más allá de lo electoral, hoy asumamos un compromiso con la historia, y ojalá, yo apoyé en el 98 a Ricardo Monreal para ser gobernador de mi estado...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Por una razón, porque cuando se votó el IVA que Humberto Roque Villanueva en esos lugares donde sigue estando el Bronx del PRI, festejó con la roqueseñal. Cuando se aprobó el IVA él no convalidó esa decisión del PRI, estando en el PRI.

No todos son iguales y no todos somos lo mismo. Por eso la votación que se va a dar en unos momentos, va a fijar nuestro lugar en la historia frente a esta Legislatura. Y que habiendo criticado el ausentismo de esta Cámara de Diputados permanentemente, hoy no acompañar esta votación...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: ...será un acto de patriotismo. Gracias, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Abdala Dartigues, en contra.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Gracias, presidente. Los cambios a la minuta son insuficientes, mantiene, obviamente, la idea de dejar al Ejército en las calles y que asuman las tareas de seguridad pública en contravención con el mandato constitucional.

Las modificaciones no generan ningún control adicional ni mecanismos extraordinarios de supervisión en materia de derechos humanos, que fue lo que propusieron los organismos internacionales, las organizaciones civiles y las instituciones académicas.

El cambio al artículo 1o. de la ley, en el que se expresa su vinculación con la Constitución, es un intento de encubrir la inconstitucionalidad de la minuta.

El cambio al artículo 9 de la minuta y que el propio INAI ha calificado de transgredir el principio de máxima publicidad, es un cambio superficial, no atiende al verdadero planteamiento en el sentido de que ese artículo fomenta la opacidad al establecer implícitamente que toda información de seguridad interior será, en los hechos, confidencial y de reservas.

La aprobación a esta ley será más que un error histórico del gobierno de Peña Nieto, del PRI y de todos sus aliados. Será una traición al pueblo mexicano.

¿Por qué tanta cerrazón? ¿Qué es lo que persiguen? Porque está claro que no es el bienestar de los ciudadanos ni la seguridad pública interior o nacional.

¿Por qué a unos meses de que se realice la elección? El día 13 de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina en México del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en México, hicieron un urgente y estremecedor llamado para no apoyar el proyecto, y a continuación leo textualmente:

Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para que atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá a consideración de las comisiones dictaminadoras del Senado, el día de ayer –el día de hoy, obviamente, así lo dice– y en su lugar abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas.

Aun cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de ley originalmente planteado, el mismo sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México.

La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos. Además, las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra que se han manifestado de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados en el marco del respeto a la dignidad humana.

Esto significa un contundente rechazo a la inminente aprobación de esta ley. Lo que se está a punto de aprobar, un es un peligrosísimo escenario de violaciones a derechos humanos en México en total opacidad y falta de información de las acciones militares realizadas en nombre de la seguridad interior y de las hipotéticas amenazas a la seguridad nacional, cubrirán completamente de impunidad todos los actos realizados por los cuerpos castrenses y de seguridad.

Dicho en términos sencillos, adiós a los avances en materia de derechos humanos alcanzados en la reforma del 2011. Con la aprobación de esta ley, de un plumazo terminarán con el sistema penal acusatorio y todas sus bondades.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Termino, termino diputado. También podemos olvidarnos del avance alcanzado con la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Sé que están pidiendo tiempo, hay mucho qué decir, hay mucho qué discutir. Hay mucho que no han ni siquiera tratado de decir, pero en realidad a todos aquellos que piden tiempo, es tiempo de decirles que si realmente quieren hacer de México un mejor país, si realmente quieren optar por opciones y por políticas que disminuyan el crimen en este país, la delincuencia y sus alarmantes maneras en las que está creciendo tendríamos que estar optando por presentarles opciones de prosperidad a los ciudadanos, cosa que ustedes no están haciendo. Así que, sí, es tiempo. Es tiempo de que la ciudadanía entienda quiénes son los que los traicionan, porque son ustedes principalmente. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Martha Sofía Tamayo. Al concluir su intervención preguntaremos si se encuentra suficientemente discutido.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros, aquí se han venido a sostener de nueva cuenta muchas mentiras y falacidades.

Esta ley tiene un sustento constitucional y jurídico impecable, está basada en principios de gradualidad, proporcionalidad, temporalidad, aporta certidumbre jurídica y gran transparencia al proceso de disposición de las fuerzas federales y Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo, situación que no existe hoy y sin esta ley estamos en el riesgo de lo que ello implica. No puede ser que la disposición de estas fuerzas sea literalmente discrecional.

La actividad de las fuerzas federales y de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad interior tiene que tener una regulación. El hecho de que la seguridad pública que efectivamente corresponde a las autoridades civiles evolucione a un grado mayor de gravedad, que ponga en tesitura el equilibro social, la paz de una ciudadanía, y el ejemplo más práctico lo tenemos con el crimen organizado, en donde las policías locales y estatales se ven superadas en su capacidad, en su armamento, en la organización...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Sí.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Rodrigo Abdala quiere hacerle una pregunta seguramente.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Desde luego que no.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No acepta la pregunta, diputado. Gracias.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Miren, ahora los que se deben tranquilizar son ustedes. La disposición de las fuerzas federales no puede seguir siendo discrecional, la seguridad pública evoluciona, decía, y se convierte en un peligro para la sociedad y parra las instituciones si no tenemos una regulación, y en esta ley el procedimiento propuesto es impecable, y no solo impecable, democrático porque quien solicita la intervención de esas fuerzas son los Congresos locales. Y cuando les conviene a algunas fuerzas cuidan lo que dicen organismos internacionales, ¿Por qué no le han preguntado a esos mismos organismos qué piensan de andar dándole perdón a los criminales de manera impune?

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada. La diputada Ernestina Godoy. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Ernestina Godoy Ramos (desde la curul): Ya es mi colega, quiero hacerle una pregunta.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quiere hacerle una pregunta, si la acepta.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Quiero concluir y quiero que por favor sigan tranquilos. No la acepto.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No la acepta, diputada.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A confesión de parte, relevo de prueba, amigos. Aquí se ha venido a confesar y también lo ha dicho abiertamente quien es el dueño de este partido, que van a dar perdón, le llama amnistía, cuando ni siquiera sabe los procesos y los presupuestos legales para concederla, pero esa confesión no revela más que el único sueño que por más de 18 años ha llevado a ese personaje.

Ya dijo que hay un solo mando único y que es él, así es que tengamos mucho cuidado con lo que hay detrás de esa pretensión. Es una ocurrencia que describe de cuerpo entero un afán totalitario. En el mejor de sus sueños ustedes creen que van a llegar a la Presidencia, pero ese, que es el mejor de sus sueños, tranquilos compañeros...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame. Diputada, el tiempo está concluyendo pero le recuerdo a la asamblea que la Mesa ha concedido hasta dos minutos de tiempo para los oradores en contra. Adelante, diputada.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, presidente. Ese que es el mejor de los sueños de su pseudo líder, que es dueño en realidad y que es el de ustedes, es la peor de las pesadillas para para el pueblo mexicano, porque nosotros sabemos que detrás de ese afán totalitario que ya muestran, el pueblo de México no se deja engañar, el pueblo de México por tercera vez les va a demostrar que los iluminados tropicales y mesiánicos, no tienen cabida en este México. Muchas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Martha Sofía Tamayo.

Consulte la Secretaría si agotada la lista de oradores, los artículos modificados se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si los artículos modificados se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado secretario.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Fue por culpa de Candelaria que me dijo misógino.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Cierre el sistema, diputado. De viva voz, diputada Alejandra Noemí Reynoso.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): En contra.

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 262 votos a favor, 0 abstenciones y 25 en contra de 288 diputados presentes, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular por 262 votos el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. **Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.**

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

DECRETO por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Artículo Único.- Se expide la Ley de Seguridad Interior

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia.

Artículo 2. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.

Artículo 3. En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acciones de Seguridad Interior: Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior;

II. Amenazas a la Seguridad Interior: Las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional;

III. Riesgo a la Seguridad Interior: Situación que potencialmente puede convertirse en una Amenaza a la Seguridad Interior;

IV. Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: El mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior;

V. Fuerzas Armadas: El Ejército, Armada y Fuerza Área;

VI. Fuerzas Federales: Las instituciones policiales federales;

VII. Inteligencia para la Seguridad Interior: El conjunto de conocimientos obtenidos a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad interior;

VIII. Seguridad Interior: Lo previsto en el artículo 2 de la presente Ley;

IX. Seguridad Nacional: Lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional, y

X. Uso legítimo de la fuerza: La utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

Artículo 5. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia.

Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las Acciones de Seguridad Interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional.

Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias.

La materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE PROTECCIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas:

I. Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran Declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables.

Artículo 12. En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.

Artículo 13. Las peticiones de las Legislaturas de las entidades federativas o de su respectivo Ejecutivo deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior, especificando entre otros, los aspectos siguientes:

I. Amenaza identificada y el impacto de la misma;

II. Área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas;

III. Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza identificada en la entidad federativa o área geográfica afectada;

IV. Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza identificada;

V. El compromiso de contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de restablecer la colaboración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que establezca la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y

VI. La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y para la toma de decisiones correspondientes.

Artículo 14. El Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener lo siguiente:

I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán;

II. La amenaza a la Seguridad Interior que se atenderá;

III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las Acciones de Seguridad Interior;

IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la Amenaza a la Seguridad Interior;

V. Las Fuerzas Federales participantes;

VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley;

VII. Las Acciones de Seguridad Interior que se llevarán a cabo, y

VIII. La temporalidad de la Declaratoria.

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá determinar la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica.

Artículo 15. La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo.

Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones de Seguridad Interior. Las modificaciones y prórrogas deberán notificarse y publicarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la presente Ley.

Artículo 16. En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República de acuerdo a sus facultades podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Lo anterior, sin perjuicio de la comunicación que realice la Secretaría de Gobernación de forma posterior a los titulares del Poder Ejecutivo respectivo de las entidades federativas y la emisión, en el menor tiempo posible, de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES

Artículo 17. A partir de la expedición de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento, se considerarán como Acciones de Seguridad Interior.

Artículo 18. En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las autoridades federales conforme a lo previsto en la presente Ley, tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.

Artículo 19. La Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 20. Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate, conforme al procedimiento siguiente:

I. El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en términos del artículo 21;

II. El Comandante designado en términos de la fracción anterior elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes;

III. El protocolo contemplará la integración de grupos interinstitucionales, a fin de que cada uno lleve a cabo la misión que se les asigne con base en las atribuciones y responsabilidades que les correspondan, coordinadas por el Comandante, y

IV. Las Fuerzas Armadas actuarán realizando las Acciones de Seguridad Interior previstas en la Declaratoria respectiva.

Artículo 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley, y de las disposiciones reglamentarias de las Fuerzas Armadas.

Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada. Cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación.

Artículo 23. Durante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en el marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, asumirán las siguientes responsabilidades:

I. Atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que sean convocadas;

II. Aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea solicitada o con que cuenten, que permita cumplir los fines de la Declaratoria;

III. Prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora para atender la Amenaza a la Seguridad Interior;

IV. Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior y superarla;

V. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la Ley de la materia;

VI. Presentar los informes periódicos ante la autoridad federal coordinadora sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe en el marco de la Declaratoria;

VII. Las que se establezcan conforme a la fracción IV del artículo 14 de esta Ley, y

VIII. En el caso de las entidades federativas, las que haya comprometido en los términos de la fracción V del artículo 13 de esta Ley.

Artículo 24. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, destinará Fuerzas Federales para que realicen Acciones de Seguridad Interior, en aquellas áreas o zonas del territorio nacional que así lo requieran.

Artículo 25. Tratándose de fenómenos naturales perturbadores, la intervención de las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, se sujetará a lo previsto en la Ley General de Protección Civil y, en su caso, a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.

Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.

Artículo 27. Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.

Artículo 28. Las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior con su organización, medios y adiestramiento, sin descuidar el fortalecimiento de sus capacidades.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 29. Las Acciones de Seguridad Interior se apoyarán en los órganos, unidades y procesos de inteligencia previstos en las leyes respectivas.

Artículo 30. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley.

En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, la colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto se establezcan.

CAPÍTULO QUINTO

DEL CONTROL DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 32. El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 33. El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la Comisión Bicamaral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de control previstas en dicha ley.

CAPÍTULO SEXTO

DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 34. El incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y en la Declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorios

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; y en su caso con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados.

Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Cuarto. Si a la entrada en vigor de la presente Ley existen situaciones en las que se surten las hipótesis contenidas en el artículo 11, se aplicará el procedimiento ahí previsto, sin perjuicio de que en tanto se materializa el mismo, las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, continúen realizando las acciones que estén llevando a cabo para atenderlas. Las que no requieran Declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen.

Artículo Quinto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieren realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección en términos de la misma, a efecto de solicitar la declaratoria correspondiente, deberán, en el ámbito de sus atribuciones, presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual incluya los objetivos respecto al estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo de 90 días, contados a partir de que las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, acrediten la presentación del programa señalado en el párrafo anterior, deberá emitir el dictamen correspondiente, mismo que le será entregado al solicitante.

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017.- Sen. **Ernesto Cordero Arroyo**, Presidente.- Dip. **Jorge Carlos Ramírez Marín**, Presidente.- Sen. **Rosa Adriana Díaz Lizama**, Secretaria.- Dip. **Marco Antonio Aguilar Yunes**, Secretario.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.- **Enrique Peña Nieto**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Miguel Ángel Osorio Chong**.- Rúbrica.